

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA ACUMULACIÓN DE INDEMNIZACIONES  
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEL ESTADO CON PRESTACIONES DEL  
SISTEMA DE RIESGOS LABORALES

CATALINA DELGADO LONDOÑO  
ANDREA SOSA CALLE

UNIVERSIDAD EAFIT  
FACULTAD DE DERECHO  
MEDELLÍN  
2014

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL DE LA ACUMULACIÓN DE INDEMNIZACIONES  
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DEL ESTADO CON PRESTACIONES DEL  
SISTEMA DE RIESGOS LABORALES

CATALINA DELGADO LONDOÑO  
ANDREA SOSA CALLE

Trabajo de grado presentado como  
requisito parcial para optar al título de abogado

Asesor:  
Abogado Juan Carlos Gaviria Gómez

UNIVERSIDAD EAFIT  
FACULTAD DE DERECHO  
MEDELLÍN  
2014

Nota de aceptación:

---

---

---

---

Presidente del Jurado

---

Jurado

---

Jurado

Medellín, Octubre de 2014

## AGRADECIMIENTOS

Las autoras expresan sus agradecimientos a Juan Carlos Gaviria Gómez, quien dedicó el tiempo necesario para que este trabajo saliera adelante. Con sus apreciaciones y lectura crítica contribuyó notablemente a que esta investigación terminara siendo clara en sus ideas, sólida en sus argumentos y armónica en sus apartados. Aspectos como la determinación de los objetivos del trabajo y los límites del mismo, la organización de los capítulos y la pertinencia del contenido fueron posibles gracias a su guía.

## CONTENIDO

	Pág.
INTRODUCCIÓN	12
1. EL PROBLEMA JURÍDICO QUE SUBYACE A LA PROBLEMÁTICA SOBRE LA ACUMULACIÓN DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL O DEL ESTADO Y DE LAS PRESTACIONES DEL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES	16
2. COMPARACIONES ENTRE LA DOCTRINA NACIONAL Y EXTRANJERA EN LA MANERA DE RESOLVER EL CONFLICTO SOBRE LA ACUMULACIÓN DE INDEMNIZACIONES.	24
2.1. DOCTRINA EXTRANJERA	27
2.1.1. Los autores que plantean una solución únicamente en el ámbito de la culpa patronal	30
2.1.2. Autores que plantean una posición respecto de los casos en que existe una culpa patronal y de los casos en que existe un tercero ajeno al vínculo laboral que es declarado responsable.	32
2.1.3. Autores que describen principalmente la posición sostenida por la jurisprudencia.	42
2.2. DOCTRINA NACIONAL	43

2.2.1. Los autores que determinan que la acumulación de indemnizaciones y prestaciones que otorgan las ARL es posible en todos los casos	44
2.2.2. Los autores que establecen que acumulación está prohibida en el ámbito de la culpa patronal, pero determinan como regla general que se encuentra permitida cuando existe un tercero ajeno al vínculo laboral llamado a responder, salvo norma expresa de subrogación.	46
2.2.3. Los autores que señalan que la acumulación de indemnizaciones no es posible en ninguno de los casos.	50
2.2.4. La posibilidad de subrogación a favor de las ARL en el caso colombiano.	52
2.3. CONCLUSIONES ACERCA DE LA POSTURA ASUMIDA POR LA DOCTRINA	60
3. REVISIÓN JURISPRUDENCIAL	61
3.1. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACIÓN LABORAL	63
3.2. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACIÓN CIVIL	85
3.3. CONSEJO DE ESTADO	98
4. ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE LA MANERA EN QUE SE HA SOLUCIONADO LA PROBLEMÁTICA DE LA ACUMULACIÓN DE INDEMNIZACIONES	113
4.1. ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DE LA ACUMULACIÓN DE INDEMNIZACIONES	113

4.1.1. El carácter indemnizatorio de las prestaciones que otorgan las ARL	114
4.1.2. Las causas o títulos que dan origen a cada uno de los pagos	121
4.1.3. La existencia de una norma especial de subrogación	126
4.1.4. La relación de los pagos que hace la ARL con los pagos hechos en virtud de un seguro de daños (en contraposición al seguro de personas) –o de un seguro de responsabilidad civil específicamente–.	130
4.1.5. La inasegurabilidad de la culpa	133
4.2. DISCUSIÓN SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE LA ARL SE SUBROGUE EN CONTRA DEL RESPONSABLE PARA RECUPERAR EL MONTO DE LAS PRESTACIONES PAGADAS A LA VÍCTIMA	134
4.3. ANÁLISIS DE LOS POSIBLES MOMENTOS EN QUE PUEDE SURGIR LA <i>PROBLEMÁTICA DE LA ACUMULACIÓN DE INDEMNIZACIONES</i>	137
4.4. OTRAS CRÍTICAS A LA POSICIÓN ASUMIDA POR LA JURISPRUDENCIA	140
5. CONCLUSIONES	145
BIBLIOGRAFÍA	153

## LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Criterios utilizados por la doctrina para dar solución a la problemática de la “ <i>acumulación de indemnizaciones</i> ”	26
Tabla 2. Posiciones de la doctrina en cuanto a la vigencia y los casos en que es aplicable el Artículo 12 del Decreto 1771 de 1994.	56
Tabla 3: Línea Jurisprudencial. Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Laboral	64
Tabla 4: Línea Jurisprudencial. Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Civil	87
Tabla 5: Línea Jurisprudencial. Consejo de Estado.	99



## LISTA DE GRÁFICAS

Gráfica 1: Importancia de las sentencias dentro de la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Laboral. 69

Gráfica 2: Discusión de la acumulación de indemnizaciones según quién pague las prestaciones. 86

Gráfica 3: Importancia de las sentencias dentro de la línea jurisprudencial del Consejo de Estado. 103

## LISTA DE ANEXOS

Anexo 1: Metodología.

Anexo 2: Tabla de sentencias que aparecen con los criterios de búsqueda.

Anexo 3: Tabla de utilidad de las sentencias que aparecen con los criterios de búsqueda y del nicho citacional.

Anexo 4: Fichas de Jurisprudencia.

## RESUMEN

Hay eventos en los cuales de la materialización de una contingencia de origen laboral surgen dos consecuencias: de un lado, se genera la obligación para la aseguradora de riesgos laborales (ARL) de pagar a la víctima unas determinadas prestaciones; del otro, se configura la responsabilidad civil o del Estado, que lleva al nacimiento de la obligación indemnizatoria a cargo del responsable. La problemática se genera porque los mismos daños podrían entenderse resarcidos por medio de las prestaciones que otorgan las ARL, o por medio de la indemnización plena de perjuicios a cargo del responsable, motivo por el cual es discutible que la víctima pueda acumular los pagos, debido a que en tal caso obtendría una reparación superior al daño realmente sufrido, lo que vulnera el principio de reparación integral. Del otro lado, no permitir la acumulación podría llevar a que el responsable, habiendo cometido el daño, resultara beneficiado porque en virtud de las prestaciones pagadas por la ARL vería disminuido el monto a indemnizar, lo que materializaría un enriquecimiento sin causa. La problemática se plantea tanto en el marco de la culpa patronal –artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo–, como en el caso en que el responsable es un tercero ajeno al vínculo laboral. La solución que se ha dado al problema por parte de la jurisprudencia dista de ser armónica del ordenamiento jurídico como sistema, ya que las altas Cortes tienden a permitir la acumulación, sin realizar un análisis exhaustivo de las injusticias que podrían presentarse a partir de la posición que asumen. Tanto la jurisprudencia como la doctrina nacional y extranjera han planteado algunos criterios que deben ser tenidos en cuenta para dar solución al conflicto, criterios que serán analizados a lo largo de este trabajo para plantear una salida al problema que sea armónica con el ordenamiento jurídico y con los principios que lo rigen.

## INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene por objeto realizar un análisis jurisprudencial del tratamiento que le han dado tanto la Corte Suprema de Justicia como el Consejo de Estado a la problemática que se presenta cuando en un mismo evento aparece la posibilidad de reclamar una indemnización de perjuicios derivada de la responsabilidad civil o del Estado, y, al tiempo, el derecho de exigir del sistema de riesgos laborales el pago de una determinada prestación.

En este punto es necesario aclarar que, no se habla de responsabilidad laboral cuando se plantea el caso de la responsabilidad del empleador que es declarado culpable y condenado a indemnizar con base en lo dispuesto por el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, porque esta responsabilidad es, a juicio de quienes expresan estas ideas, un típico caso de responsabilidad civil. Así entonces, cuando se habla de responsabilidad civil, debe entenderse que se hace referencia tanto a la responsabilidad patronal consagrada en el Código Sustantivo del Trabajo, como a la responsabilidad civil en que puede incurrir un tercero ajeno al vínculo laboral.

El problema del cual se ocupa este trabajo se genera porque las prestaciones del sistema de riesgos laborales pueden coincidir con los perjuicios que se entienden indemnizables por un sujeto que es declarado civil o administrativamente responsable. De allí surge la discusión sobre si es viable que la víctima acumule con dicha indemnización, las prestaciones que recibe del sistema de riesgos laborales, que en principio podrían entenderse reparando un mismo daño. De no ser posible la acumulación, el responsable podría exigir que le fuera descontado del monto a indemnizar las sumas que habría recibido la víctima a título de prestaciones del sistema de riesgos laborales.

La discusión que se plantea en este ámbito ha sido reconocida por la doctrina como la problemática de la *acumulación de indemnizaciones*. Más allá de los debates que se plantean a lo largo de este escrito sobre el carácter indemnizatorio de las prestaciones que otorgan las aseguradoras de riesgos laborales, debe entenderse por el término *la problemática sobre la acumulación de indemnizaciones*, la discusión sobre la posibilidad de que se acumulen las prestaciones otorgadas por las ARL con la indemnización de perjuicios que se deriva de la declaratoria de la responsabilidad civil (y dentro de ésta la patronal), o del Estado.

Este trabajo es relevante porque pretende dar luces para el entendimiento del problema planteado, teniendo en cuenta los principios que entran en pugna y los diferentes criterios que se han utilizado para dar solución a los casos en que se plantea el debate de la acumulación o el descuento. Entonces, tanto la comprensión de la posición de la jurisprudencia, la doctrina nacional y extranjera frente a la problemática, así como la búsqueda de un parámetro que pueda servir para dar una solución al problema que sea armónica con el ordenamiento jurídico visto en conjunto, son los aportes de este estudio.

En esta tesis se sintetizan los planteamientos que tanto la doctrina nacional como la extranjera le han dado a la problemática expuesta. Adicionalmente, se grafican y analizan tres líneas jurisprudenciales que explican el tratamiento que se le ha dado al tema tanto en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia (primera línea) como en la Sala Civil de esta misma Corte (segunda línea), y finalmente al interior del Consejo de Estado (tercera línea), a partir del año 1991<sup>1</sup>. Por último, a

---

<sup>1</sup> La decisión de limitar la búsqueda de la jurisprudencia hasta el año 1991 se debe a la relevancia de la Constitución Política en la determinación de la seguridad social como derecho fundamental, y en el establecimiento de un Estado Social de Derecho en el cual se deba garantizar la satisfacción de ciertas necesidades básicas a la población. La relevancia de la Constitución en el campo de la seguridad social es reconocida, entre otros, por el autor Frank José Ospina, quién en el artículo titulado *La Responsabilidad Derivada del Acaecimiento del Riesgo Profesional, la Acumulación de Indemnizaciones y la Subrogación en contra del Responsable*, publicado en la revista *Responsabilidad Civil y del Estado* No. 29 (p.230) expresa: *“Para el año de 1990, la Seguridad Social colombiana hace crisis a partir de situaciones como la poca evolución en la cobertura poblacional, la multiplicidad de regímenes existentes y las dificultades que para el Estado*

partir de las posiciones doctrinales y jurisprudenciales se genera una discusión en torno al tratamiento disímil que se ha dado a la cuestión, y se propone una respuesta que podría ser más acorde con el ordenamiento jurídico visto como sistema.

La problemática bajo la cual se enmarca este trabajo podría resumirse de la siguiente manera: ¿Existe la posibilidad de que el sujeto que es declarado civil o administrativamente responsable y obligado a indemnizar los perjuicios causados con su conducta, descuenta de tal indemnización las sumas de dinero que hayan sido pagadas a la víctima directa o a las indirectas por la entidad aseguradora de riesgos laborales en virtud de haberse presentado una contingencia cubierta por este sistema, o tiene la víctima derecho a acumular las prestaciones que hayan sido pagadas por la ARL y la indemnización plena de perjuicios derivada de la responsabilidad civil o del Estado? Y en concordancia con lo anterior ¿Puede la ARL subrogarse para que el sujeto civil o administrativamente responsable le restituya las sumas de dinero que haya tenido que pagar por haberse presentado una de las contingencias cubiertas por el sistema?

De acuerdo con lo señalado, este trabajo no pretende ser un tratado sobre responsabilidad civil o del Estado ni uno sobre el derecho laboral y de la seguridad social<sup>2</sup>, y, por el contrario, parte de dar por sentada la existencia de la responsabilidad<sup>3</sup> y la materialización de una de las contingencias de origen laboral

---

*colombiano implicaba el sostenimiento de las condiciones entonces imperantes. A partir de ese momento, se presentan dos hechos que marcarían un cambio definitivo en la materia y que resultan ser completamente relevantes para la comprensión de las realidades actuales de la cobertura social en Colombia: la Constitución Política de 1991 y la Ley 100 de 1993.”*

<sup>2</sup> En este trabajo no se entrará a analizar la culpa patronal, ni se discutirá sobre la naturaleza de esa culpa o las similitudes y diferencias que guarda la culpa en el ámbito laboral con la culpa de la que se habla en el marco de la responsabilidad civil, ni tratará las obligaciones del empleador y las conductas constitutivas de culpa. Tampoco ahondará en el tema relativo a la definición e interpretación de las prestaciones que reconoce el sistema de riesgos laborales, ni del trámite que se tiene que adelantar un sujeto para hacerse acreedor a alguna de las prestaciones del sistema de riesgos laborales, ni la calidad que tiene que tener para poder hacerse acreedor a tales prestaciones.

<sup>3</sup> Para determinar que hay un sujeto civil o administrativamente responsable tienen que estar presentes algunos elementos. Este trabajo no pretende delimitar tales elementos, ni los posibles títulos de imputación atribuibles, ya que se partirá de la existencia de una declaratoria de

que dan lugar a que la respectiva ARL pague a un trabajador determinada prestación<sup>4</sup>, junto con la existencia de todos los requisitos necesarios para que la aseguradora realice un determinado pago.

Para revisar la metodología utilizada en el marco de esta investigación se remite al lector al anexo 1.

Este trabajo está dividido en cinco capítulos. El primero de ellos es el punto de partida desde el cual se estudia el problema planteado, y se denomina “*el problema jurídico que subyace a la problemática sobre la acumulación de indemnizaciones derivadas de la responsabilidad civil o del Estado y de las prestaciones del sistema de riesgos laborales.*” El segundo acápite estudia las posturas de diversos doctrinantes nacionales y extranjeros que se han ocupado de la discusión y plantea el elemento de la subrogación como de especial relevancia para resolver la problemática. Por su parte, el tercer capítulo corresponde al estudio jurisprudencial del tema. En el cuarto apartado se plantea una crítica a la jurisprudencia vigente, de cara a la doctrina existente en la materia, y por último, el quinto capítulo corresponde a las conclusiones.

---

responsabilidad, sea porque se está en el marco del art. 216 del Código Sustantivo del Trabajo ya que existió culpa del empleador, o porque existió un actuar de un sujeto que causó daños a una víctima, y a ese sujeto es posible atribuirle cualquiera de los títulos de imputación existentes bien en el marco de la responsabilidad civil o en el de la responsabilidad del Estado.

<sup>4</sup> Para que surja el derecho para una persona de recibir alguna o algunas de las prestaciones que reconoce el sistema de riesgos laborales es necesario que se presente una contingencia de origen laboral, es decir, un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. Por lo tanto, se entiende que se ha presentado en el caso que se estudia una de esas contingencias, sin entrar a definir qué debe entenderse por accidente o enfermedad, y sin revisar si se han cumplido los presupuestos exigidos para determinar que se ha materializado tal situación. Adicionalmente, este trabajo no pretende hacer un recuento sobre las diferentes prestaciones que pueden ser otorgadas por el sistema de riesgos laborales, en cuanto la problemática debe ser resuelta de la misma forma cualquiera sea la prestación que otorga la respectiva ARL.

1. EL PROBLEMA JURÍDICO QUE SUBYACE A LA DISCUSIÓN SOBRE LA  
POSIBILIDAD DE ACUMULACIÓN DE INDEMNIZACIONES DERIVADAS DE LA  
DECLARATORIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL O DEL ESTADO, CON  
PRESTACIONES QUE OTORGAN LAS ASEGURADORAS DE RIESGOS  
LABORALES.

Cuando se interroga por la problemática de la acumulación de indemnizaciones derivadas de una declaratoria de responsabilidad civil o del Estado con las prestaciones que otorgan las ARL, no se pregunta simplemente por una cuestión práctica, sino que se indaga también por la manera en que deben entenderse y ponderarse algunos de los principios más importantes de nuestro ordenamiento jurídico, de la teoría general de las obligaciones, y en especial de la responsabilidad civil.

Pretender un entendimiento del problema que lleve a una solución armónica con el ordenamiento jurídico visto como sistema, supone identificar la discusión que se plantea en el ámbito de los principios, y a esto es lo que en este trabajo se ha decidido denominar bajo el rotulo de *“el problema jurídico que subyace”*.

Las prestaciones del sistema de riesgos laborales pueden coincidir con los perjuicios que se entienden indemnizables desde la teoría de la responsabilidad civil o del Estado. De allí surge el debate sobre si es viable que la víctima acumule dichas prestaciones con la indemnización de perjuicios por parte del civil o administrativamente responsable, que en principio podrían entenderse reparando un mismo daño. De no ser posible la acumulación el responsable podría exigir que le fuera descontado del monto a indemnizar, las sumas que habría recibido la víctima a título de prestaciones del sistema de riesgos laborales.

De la simple lectura del párrafo anterior se desprende que al hablar de *la acumulación de indemnizaciones*, entran en pugna el principio de reparación



integral y el principio de no enriquecimiento sin causa, así como la máxima según la cual nadie puede beneficiarse de su propia culpa. En estos términos han planteado la doctrina y jurisprudencia el debate en torno a la posibilidad de que la víctima acumule la indemnización con las prestaciones otorgadas por la ARL.

En primer lugar, el principio de reparación integral establece que el daño es la medida de la reparación, lo que implica que el daño no puede ser fuente de enriquecimiento<sup>5</sup>. En palabras del tratadista Juan Carlos Henao:

*La enunciación de la presente regla es simple: la reparación del daño debe dejar indemne a la persona, esto es, como si el daño no hubiere ocurrido, o, al menos, en la situación más próxima a la que existía antes del suceso. Dicho de otra manera, se puede afirmar que “se debe indemnizar el daño, sólo el daño y nada más que el daño”, o en palabras de la Corte Constitucional colombiana, que “el resarcimiento del perjuicio debe guardar correspondencia directa con la magnitud del daño causado, más no puede superar ese límite”<sup>6</sup>. La explicación que se da a esta regla se apoya en un principio general del derecho: si el daño se indemniza por encima del realmente causado, se produce un enriquecimiento sin justa causa a favor de la “víctima”; si el daño se indemniza por debajo del realmente causado, se genera un empobrecimiento sin justa causa para la víctima. Es así el daño la medida del resarcimiento.<sup>7</sup>*

de acuerdo con este principio podría pensarse que la víctima que recibe, por apenas citar un ejemplo, una pensión de invalidez por parte de la ARL, y una indemnización por concepto de lucro cesante por parte del responsable, podría

---

<sup>5</sup> SOLARTE RODRÍGUEZ, Arturo. El principio de reparación integral del daño en el derecho contemporáneo. En: ECHEVERRI URUBURO, Álvaro, Dir.; GUAL ACOSTA, José Manuel y ACOSTA RODRÍGUEZ, Joaquín Emilio, Coord. Responsabilidad Civil y Negocio Jurídico. Tendencias del Derecho Contemporáneo, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2011.

<sup>6</sup> COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-197 de 1993. Citado por HENAO, Juan Carlos. El Daño: Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 45.

<sup>7</sup> HENAO, Juan Carlos. El Daño: Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998, p. 45.

resultar enriquecido por la ocurrencia del hecho dañoso, lo que contrariaría el principio de reparación integral.

Una aclaración en este punto resulta relevante: la discusión de si se vulnera o no el principio de reparación integral cuando se permite que una víctima resulte enriquecida al recibir un resarcimiento del mismo daño por varias vías, dependerá de lo qué se entienda por reparación o por indemnización. Para algunos autores solo puede entenderse como reparación el pago que un responsable (o un tercero en su nombre) realiza para extinguir una obligación indemnizatoria que le ha surgido<sup>8</sup>. Bajo este entendido, si no se considera que la ARL pretende pagar la deuda del responsable (discusión que será resuelta de manera diferente si el responsable es el empleador o un tercero) no se concluirá que exista una real vulneración al principio de la reparación integral.

Para autores que sostienen la anterior posición, el principio del no enriquecimiento sin causa aboga por que se permita la acumulación, cuando no ha existido una reparación por parte del que paga. Y aún para quienes entienden que el principio de reparación integral se vulneraría si una víctima puede acumular la indemnización plena de perjuicios con las prestaciones de la ARL, el principio del no enriquecimiento sin causa puede llegar a señalar razones suficientes que permitan que en el caso bajo estudio se materialice una excepción al principio de reparación integral, como pasará a exponerse en los capítulos siguientes.

---

<sup>8</sup> En este sentido se han pronunciado, entre otros: TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo II. Legis, Bogotá, 2007, p. 630, al determinar que: *“la indemnización consiste en la extinción, mediante pago, de la obligación del causante del perjuicio”*. Este autor entiende, por lo tanto, que la entrega de un bien similar al destruido no implica resarcimiento de un daño en materia de responsabilidad civil, sino que depende de que se esté satisfaciendo, por parte del responsable o de un tercero que paga por él, la prestación que se originó en su cabeza fruto de haber cometido un hecho ilícito, y no basta con que a la víctima se le repare o reemplace un bien jurídico que resultó lesionado. Esta posición es también sostenida por SOLARTE RODRÍGUEZ, Arturo. op. cit.; FLÓREZ, Juan Gonzalo. La acumulación de indemnizaciones, una revisión conceptual y jurisprudencial del tema- Parte I. En: Responsabilidad Civil y del Estado. No 28. Noviembre 2010.

Por un lado, revisada la situación desde el punto de vista de la víctima, ella podrá acumular indemnizaciones con prestaciones otorgadas por la ARL siempre y cuando dichos pagos tengan causas jurídicas diferentes, entendiendo así que no se vulnera el principio del no enriquecimiento sin causa. Sobre este punto se volverá más adelante.

Desde la otra perspectiva considerada, no permitir la acumulación podría implicar un enriquecimiento sin causa del responsable, quien habiendo causado el daño, no tendría que indemnizarlo. Además, la jurisprudencia ha entendido que permitir dicho descuento vulneraría la máxima según la cual nadie puede beneficiarse de su propia culpa.

El tratadista Javier Tamayo Jaramillo, al exponer la cuestión plantea:

*(...) no se puede afirmar que, al permitirse la acumulación, el asegurado se estaría enriqueciendo injustamente, ya que ambas prestaciones tienen causas jurídicas distintas. Y bien por el contrario, no permitir la acumulación generaría, esta vez sí, un enriquecimiento injusto, bien sea del asegurador que pagó su propia deuda y carece de acción subrogatoria, bien sea del responsable que se quedaría impune.<sup>9</sup>*

Un punto de partida para estudiar la problemática de la acumulación ha sido lo que la doctrina ha denominado *compensatio lucri cum damno*, que en palabras de A. de Cupis es *“la disminución proporcional que el daño experimenta cuando con él concurre un lucro (ventaja), o con otras palabras, la reducción del montante del daño resarcible por la concurrencia de un lucro.”<sup>10</sup>*

---

<sup>9</sup> TAMAYO JARAMILLO, Javier. Op. cit., p.630.

<sup>10</sup> DE CUPIS, Adriano. El Daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil. Traducción de la 2da Edición Italiana y Estudio Preliminar por Ángel Martínez Sarrión, Bosch, Casa Editorial S.A., Barcelona, 1975, p.327.

De acuerdo con esta teoría, estrechamente vinculada con los dos principios estudiados anteriormente<sup>11</sup>, cuando un mismo hecho dañino produce a su vez unos perjuicios y unos beneficios o lucros, es necesario que las ventajas se “compensen” con los daños, porque de lo contrario existiría un enriquecimiento sin causa de la víctima, vulnerando de igual manera el principio de reparación integral.

No obstante, para que aplique esta teoría es necesario que el beneficio o lucro obtenido y el perjuicio padecido sean producto de la misma causa jurídica, lo cual implica determinar cuándo se puede reconocer una disimilitud de causas, tema que será tratado al analizar los diferentes criterios utilizados para establecer si existe la posibilidad de acumular la indemnización plena de perjuicios con las prestaciones que otorgan las aseguradoras de riesgos laborales (ARL). Sobre este tema, A. de Cupis señala:

*No es suficiente que el hecho dañoso haya provocado en otra persona un impulso liberal o filantrópico a favor del perjudicado, aunque se le haya exteriorizado en una intervención apta para proporcionarle cualquier alivio.<sup>12</sup> En este caso la ventaja se ha originado directamente por la acción caritativa del filántropo y no por la acción culpable, a la que se liga tan solo indirectamente y, según una secuencia causal que ciertamente ni es regular ni normal, pues no deja de constituir un acontecimiento singular que, alguien, perteneciente a la no extensa categoría de los filántropos, se mueva a paliar la desgracia de un extraño. De lo cual se infiere que el responsable no puede pretender que del daño resarcible se deduzca aquello que el perjudicado ha obtenido por la caridad del filántropo<sup>13</sup>*

Ante la complejidad de esta situación otros criterios han sido relevantes para plantear una posible solución a la problemática sobre la *acumulación de indemnizaciones*. Para el efecto se han utilizado básicamente los siguientes

---

<sup>11</sup> HENAO, Juan Carlos. Op. cit., p. 50 señala sobre este punto: “Como se observa, la *compensatio lucri cum damno* guarda estrecha relación con la regla de la indemnización plena del daño, puesto que esta se aplica sólo en la medida en que se tenga en cuenta aquella. Son las dos caras de la moneda que se deben observar, para estudiar completamente el fenómeno.”

<sup>12</sup> En este punto el autor hace referencia a: Leonhard F., Allg. Schuldrecht d. BGB, cit., pág. 206; Ennecerus-Lehmann, Lehrb., Vol II, Marburg, 1932, pág. 83, Id, Op. y Vol. Cit., pág. 81.

<sup>13</sup> DE CUPIS, Adriano. Op. cit., p.331.

criterios: i) el carácter indemnizatorio de las prestaciones que otorgan las ARL, ii) las causas o títulos que dan origen a cada uno de los pagos, iii) la existencia de una norma especial de subrogación, y iv) la relación de los pagos que realiza la ARL con los pagos hechos en virtud de un seguro de daños en sentido amplio (en contraposición al seguro de personas) –o específicamente de responsabilidad civil –.

Como se podrá ver a lo largo de este trabajo, la subrogación es un aspecto en el que diversos doctrinantes se han basado para determinar la posibilidad o no de que se dé la acumulación a que se ha venido haciendo referencia. Por este motivo la presente investigación se ocupa de determinar la posibilidad de la acumulación en el ámbito del sistema de riesgos laborales, y no en el de la seguridad social, puesto que es en este campo (y no en el de la seguridad social visto de manera general), en el que existe una norma que consagra la posibilidad de que la aseguradora de riesgos laborales se subrogue frente al tercero civilmente responsable por los pagos que haya tenido que realizar, lo que hace el caso particularmente relevante<sup>14</sup>.

La discusión se ha planteado en el contexto colombiano generalmente en dos ámbitos: i) El del patrón que es declarado civilmente responsable por haber incurrido en culpa, de acuerdo a lo previsto en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, esto es, cuando existió un accidente de trabajo o enfermedad laboral en el que medió culpa del empleador; y ii) El tercero que es declarado civil o administrativamente responsable porque se dieron los

---

<sup>14</sup> El artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 aprobado por el Decreto 3170 del mismo año, era el punto de partida para la discusión sobre la posibilidad de subrogación a favor del I.S.S. en el caso en que se hubiere producido un riesgo por culpa del empleador. Dicho artículo no fue derogado expresamente por la ley 100 de 1993, que pretendía regular de forma integral la Seguridad Social en Colombia, lo que genera la discusión, no sólo sobre la interpretación que debe dársele al artículo sino también sobre la vigencia de la precitada norma. Posteriormente, el Decreto 1771 de 1994 consagró en su artículo 12 otra posible acción de subrogación a favor de la entidad administradora de riesgos profesionales cuando la contingencia haya ocurrido como consecuencia de la negligencia de un tercero. Con respecto a dicha disposición se ha discutido tanto su validez y aplicabilidad (por regular una situación de estricta consagración legislativa), así como la interpretación que debe darse a la misma, como se verá en el apartado 2.2.4. de este escrito.

presupuestos para que se presentara tal declaratoria, es decir, porque existió un accidente de trabajo o enfermedad laboral que generó daños a un trabajador, que fue causado por la conducta de un tercero, y que adicionalmente existió un título de imputación válido para que ese tercero fuera llamado a indemnizar los perjuicios causados. Teniendo en cuenta estos parámetros, el criterio utilizado y la solución dada por la doctrina nacional y la jurisprudencia colombiana frente a la posibilidad de acumulación de indemnizaciones ha sido diferente. La doctrina extranjera no ha sido tan enfática en esta diferenciación, como se verá en el apartado 2.1. de este escrito.

Esta discusión puede generarse en varias situaciones o momentos, dependiendo de las decisiones que tome la víctima con respecto a la manera en que procede a cobrar las indemnizaciones o prestaciones a que haya lugar según el daño padecido, y las decisiones que toma la aseguradora de riesgos profesionales que ha asumido el pago de una determinada prestación, como pasará a exponerse:

Digamos en primer lugar que una víctima sufrió un daño de carácter laboral (accidente de trabajo o enfermedad laboral) y que quedó acreditado dentro del proceso que tal daño es imputable a un sujeto<sup>15</sup> o al Estado<sup>16</sup>, quien será llamado a responder. No obstante, supongamos que la ARL a la que se encontraba afiliada la víctima directa había otorgado, con anterioridad al proceso de responsabilidad civil o al medio de control de reparación directa, unas prestaciones económicas o en especie. Surge entonces la pregunta de si le es dable al responsable descontar de la indemnización de perjuicios el monto que fue asumido por la ARL al cumplir con las prestaciones que ordena el sistema de riesgos laborales.

---

<sup>15</sup> La imputación puede deberse a que el sujeto haya obrado con culpa causando el daño –y aquí entra la hipótesis de la culpa patronal a la que se refiere el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo–, porque haya creado un riesgo que se materializó en el resultado dañoso, o porque tal daño haya sido creado por una de esas personas por quienes el sujeto está llamado a responder. Se encuentran presentes entonces todos los elementos de la responsabilidad civil.

<sup>16</sup> Los títulos de imputación para que pueda predicarse la responsabilidad del estado son la falla en el servicio, el daño especial, y el riesgo excepcional, aún en el evento en que el Estado ostente la calidad de empleador.

Un segundo caso se presenta cuando es la ARL la que, una vez ha pagado a la víctima las prestaciones que ordena la ley, pretende repetir contra el responsable (llámese empleador o tercero civilmente responsable o Estado) para que le pague los gastos en que tuvo que incurrir, y posteriormente la víctima directa o las indirectas reclaman a ese responsable el pago de la indemnización plena de perjuicios.

En tercer lugar, surge la discusión de la problemática planteada, cuando el civil o administrativamente responsable indemniza plenamente a la víctima directa, y con posterioridad dicha víctima acude a la ARL a la cual se encuentra afiliada para que le sean entregadas las prestaciones asistenciales y económicas a que por ley tiene derecho.

Estas variaciones serán tenidas en cuenta en el cuarto capítulo de este trabajo, por cuanto la doctrina y la jurisprudencia han tratado en mayor medida la primera de las situaciones expuestas, mientras que no se ha ocupado en profundidad de los otros casos que, deberían analizarse para encontrar una solución a la problemática de la *acumulación de indemnizaciones* que sea acorde con el ordenamiento visto como sistema.

Así entonces, quedan sentadas las bases jurídicas en las que se enmarca la controversia que ocupa a este trabajo, así como los criterios que dan pie para hallar una posible solución, criterios que se encuentran tanto en el marco de los principios generales del derecho, de la teoría de las obligaciones y de la responsabilidad civil, y que pretenden buscar una respuesta armónica a la pregunta sobre si debe ser posible acumular la indemnización plena de perjuicios a que hay lugar cuando existe una declaratoria de responsabilidad civil –o patronal si se quiere diferenciar– o administrativa, con las prestaciones que otorga el sistema de riesgos laborales.

## 2. COMPARACIONES ENTRE LA DOCTRINA NACIONAL Y EXTRANJERA EN LA MANERA DE RESOLVER EL CONFLICTO SOBRE LA ACUMULACIÓN DE INDEMNIZACIONES.

Diversos doctrinantes se han encargado de analizar la problemática de la *acumulación de indemnizaciones* planteando posiciones jurídicas diversas. Los trabajos que se han ocupado de la materia, tienden a dividirse en dos grupos. De un lado, algunos autores se han dedicado a estudiar el tema de la acumulación en ámbitos más amplios que el de los riesgos laborales, como por ejemplo en el campo de la seguridad social<sup>17</sup> o incluso desde la teoría general de la responsabilidad civil<sup>18</sup>. Otros, han abordado el tema específico en lo relativo a los riesgos laborales, dedicándose en gran medida al estudio de dicho subsistema, de las prestaciones que consagra, del régimen de responsabilidad objetiva y posteriormente entrando a hacer el análisis de la posibilidad de acumulación<sup>19</sup>.

El tema ha sido discutido por la doctrina nacional y la extranjera. Las posturas de los doctrinantes colombianos y los de otros países han sido variadas. La doctrina nacional, de un lado, tiende a diferenciar en sus argumentaciones los casos en

---

<sup>17</sup> En este campo se ubican, entre otros, los siguientes trabajos: FLÓREZ, Juan Gonzalo. La acumulación de indemnizaciones, una revisión conceptual y jurisprudencial del tema- Parte I y II. En: Responsabilidad Civil y del Estado. No 28 y No. 29. Noviembre 2010 y Agosto 2011; GIL BOTERO, Enrique. Concurrencia de la Indemnización y las Prestaciones Sociales. En: Responsabilidad Civil y del Estado No. 16. Febrero 2004.

<sup>18</sup> Han estudiado la problemática de la acumulación de indemnizaciones dentro de sus obras de responsabilidad civil, entre otros: TAMAYO JARAMILLO, Javier. Op. cit.; ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo, De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil, Imprenta Universal, Santiago, 1981; REGLERO CAMPOS, Luis Fernando. Coord., Tratado de Responsabilidad Civil, Aranzadi, Navarra, 2002; BARROS BOURIE, Enrique. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006; etc.

<sup>19</sup> Algunos de estos trabajos son los siguientes: OSPINA BLANDON, Frank José. La responsabilidad derivada del acaecimiento del riesgo profesional, la acumulación de indemnizaciones y la subrogación en contra del responsable. En: Responsabilidad Civil y del Estado, Tomo 29. Agosto 2011; GARCIA FRANCO, Néstor Alejandro. Procedencia de acumulación de indemnizaciones y las prestaciones derivadas del sistema general de riesgos profesionales. En: Responsabilidad Civil y del Estado, Tomo 19. Noviembre 2005; LUQUE, Manuel, GÓMEZ, Carlos y RUIZ, Juan Antonio. Accidentes de Trabajo y Responsabilidad Civil, España, Disponible en Internet: < [www.indret.com/pdf/021\\_es.pdf](http://www.indret.com/pdf/021_es.pdf)>



que se discute la acumulación de indemnizaciones por haber ocurrido una culpa patronal de los casos en que existe la declaratoria de civil o administrativamente responsable de un sujeto ajeno a el vínculo laboral, mientras que la doctrina extranjera se ha enfocado menos en tal distinción. Los autores extranjeros, por otra parte, se han centrado en mayor medida en encontrar un parámetro aplicable, por igual, a los casos en que haya de por medio una culpa patronal y a los casos en que el responsable sea un tercero ajeno al vínculo laboral. Adicionalmente, los criterios utilizados por los doctrinantes extranjeros y los establecidos por los autores en Colombia para determinar la solución al problema planteado, han tenido enfoques diferentes.

A continuación se muestra la manera en que los diferentes autores se han ocupado de la problemática de la acumulación de indemnizaciones derivadas de la declaratoria de responsabilidad civil (o patronal si se quiere) o del Estado con las prestaciones que otorga el sistema de riesgos laborales.

De un lado, aparece la posición de cada autor en cuanto a la posibilidad o imposibilidad de acumular dichos pagos, y, del otro, aparecen los criterios utilizados por los diferentes autores, tanto nacionales como extranjeros, para dar solución a la problemática que se plantea.

**Tabla 1.** Criterios utilizados por la doctrina para dar solución a la problemática de la “acumulación de indemnizaciones”

		Carácter indemnizatorio de las prestaciones que otorgan las ARL	Causas o títulos que dan origen a cada uno de los pagos	Existencia de una norma especial de subrogación	Relación de los pagos que realiza la ARL con los pagos hechos en virtud de un seguro de daños en sentido amplio, o de responsabilidad civil específicamente
Acumulación	Doctrina Nacional	En todos los casos			
		Juan Carlos Henao Enrique Gil Botero.	Juan Carlos Henao. (Análisis de la jurisprudencia)  Luis Alfonso Cuellar. (Solo trata el tema de la culpa patronal –crítica a la sentencia de Rad. 18515 del 7 de marzo del 2003)	Enrique Gil Botero	
		En el caso de los terceros ajenos al vínculo laboral			
				Ricardo Hoyos Duque  Javier Tamayo Jaramillo  Juan Gonzalo Flórez  *Acumulación salvo norma expresa de subrogación	
	Doctrina Extranjera	En todos los casos			
			Luis Díez-Picazo		
No acumulación	Doctrina Nacional	En todos los casos			
		Juan Carlos Gaviria Gómez  Frank José Ospina  Juan Manuel Díaz-Granados			Juan Carlos Gaviria Gómez

		Ortiz			
		<b>En el caso de la culpa patronal</b>			
		Javier Tamayo Jaramillo			Javier Tamayo Jaramillo
	<b>Doctrina Extranjera</b>	Ricardo Hoyos Duque			Juan Gonzalo Flórez
		<b>En todos los casos</b>			
		Arturo Alessandri Rodríguez		Arturo Alessandri Rodríguez	
		Félix A. Trigo Represas y Marcelo J. López Mesa		Félix A. Trigo Represas y Marcelo J. López Mesa	
		Henry y León Mazeaud y André Tunc		Manuel Luque, Carlos Gómez y Juan Antonio Ruiz	
		Enrique Barros Bourie			
		Luis Fernando Reglero Campos			
		Ricardo de Ángel Yagüez			
		<b>En el caso de la culpa patronal</b>			
		Luis Santiago Cavanillas Múgica			Luis Santiago Cavanillas Múgica
		Daniel Toscani Giménez			

## 2.1. DOCTRINA EXTRANJERA

La mayoría de los doctrinantes extranjeros estudiados no permiten la acumulación de indemnizaciones. Ello basado fundamentalmente en dos criterios, a saber: i) el carácter indemnizatorio de las prestaciones que se otorgan al materializarse una contingencia de origen laboral; y ii) la subrogación a favor de quien paga las prestaciones para repetir en contra del responsable por el monto que haya sufragado. Por su parte, quienes han determinado la posibilidad de acumular las prestaciones que se otorgan en virtud de un accidente de trabajo o enfermedad

laboral con la indemnización plena de perjuicios a cargo del responsable, generalmente lo han hecho de una manera descriptiva, es decir, señalando que la jurisprudencia del país al que se refieren permite tal acumulación.

Aunque como regla general la discusión sobre la acumulación en el caso del sistema de riesgos laborales se ha planteado en dos ámbitos separados –el de la culpa patronal prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, y el de el tercero civil o administrativamente responsable–, esta distinción no ha sido tan notoria en la doctrina internacional, que tiende a estudiar la problemática de la misma manera sea que se trate de un caso en el que medie culpa patronal o que haya existido un tercero, ajeno al vínculo laboral, declarado como responsable.

La ventaja, en muchos de los ordenamientos, es que existen normas jurídicas relativamente claras que establecen la forma en que debe solucionarse la problemática que se presenta cuando en un mismo caso la víctima es acreedora de unas prestaciones derivadas de la materialización de una contingencia de origen laboral, y al mismo tiempo existe un sujeto responsable, de tal manera que se conoce la posición legislativa –o jurisprudencial en los sistemas de common law–, aunque se pueden plantear críticas a la misma.

En este sentido, Díez-Picazo, al analizar de cara al derecho comparado las soluciones que se han dado al problema ha señalado:

*(...) en Alemania el hecho de que determinados daños sean cubiertos por la seguridad social y las indemnizaciones percibidas de ella, excluye por completo las eventuales acciones de responsabilidad civil que el trabajador pueda ejercitar contra el empresario, así como las que pueda ejercitar contra sus compañeros de trabajo cuando éstos hubieren sido los causantes del daño. Si el accidente laboral fue debido a dolo o culpa grave del empresario o de los compañeros de trabajo, la entidad gestora de la seguridad social puede repercutir frente a ellos lo que hubiera abonado al trabajador accidentado. Si el accidente de trabajo hubiera sido imputable a un tercero, el trabajador tiene acción para reclamar contra él*

*responsabilidad civil, pero sólo por la cuantía del daño que no haya quedado cubierta por la entidad gestora de la seguridad social, que se subroga también en dicha acción por la suma abonada por ella. En Francia, el hecho de que los daños se encuentren cubiertos por la seguridad social excluye también las acciones de responsabilidad civil de los trabajadores contra el empresario o contra otros dependientes de éste, a no ser que el accidente de trabajo haya sido debido a dolo de aquél o se trate de un accidente in itinere. En tales supuestos y en aquellos en que el accidente de trabajo sea imputable a un tercero, el trabajador tiene una pretensión indemnizatoria contra el responsable, pero sólo por la cuantía del daño no cubierto de la entidad gestora de la seguridad social, la cual tiene derecho a reintegrarse. Se discute si es un derecho propio o si lo tiene por subrogación frente a lo pagado al trabajador accidentado.*

*En Italia, la situación es prácticamente idéntica a la francesa con la única diferencia relevante de que la excepción a la regla general de cobertura por la seguridad social y de exclusión de las acciones de responsabilidad civil contra el empresario o dependiente consiste aquí no en que el accidente haya sido debido dolo o culpa grave, sino a delito.*

*En Inglaterra, hasta fecha reciente, la cobertura a la seguridad social no excluía las acciones de responsabilidad civil del trabajador contra el empresario, sus dependientes o terceros a quienes fuera imputable el accidente laboral, pero, a la hora de calcular la indemnización por lost of earnings, se había de descontar parte de lo que hubiera abonado la seguridad social. Aunque el Comité Pearson propuso la deducción total, ésta se concretaba en la mitad de lo que se recibe durante los cinco años posteriores al accidente. En caso de muerte del trabajador, sin embargo, la compatibilidad era plena.*

*La situación descrita anteriormente, que es la que había sido introducida por la legislación de 1948, ha sido modificada por la Ley de la Seguridad Social de 1989. Según esta última, las reglas aplicables son las mismas que anteriormente en aquellos casos en que la indemnización concedida sea 2.500 libras o inferior a esta cantidad. En los casos que las indemnizaciones sean superiores a las 2.500, la parte que paga la indemnización tiene derecho a deducir de ella el entero del*

*valor de las pensiones y de los demás beneficios derivados de la seguridad social que hayan sido ya recibidos por el accidentado, en relación con el accidente, así como los que con probabilidad reciba en los cinco años posteriores a la fecha del mencionado accidente o entre la fecha de éste y la del pago de la indemnización, aunque sea inferior a cinco años (...)*<sup>20</sup>

#### 2.1.1. Los autores que plantean una solución únicamente en el ámbito de la culpa patronal.

Algunos autores han planteado soluciones a la problemática únicamente en el caso de la culpa patronal. En este ámbito, doctrinantes como Cavanillas Múgica y Toscani Giménez, han determinado que no es posible la acumulación de indemnizaciones, basados principalmente en el carácter indemnizatorio de las prestaciones que otorga el sistema de riesgos laborales. En adición a lo anterior, el primer autor también ha tenido en cuenta la similitud del seguro de riesgos laborales con un seguro de responsabilidad civil.

Por una parte, Toscani Giménez, a partir una sentencia de la STS española, ha señalado que las prestaciones que entregan las entidades de seguridad social tienen carácter indemnizatorio, motivo por el cual el principio de reparación integral y del no enriquecimiento sin causa -de acuerdo con los cuales un mismo daño no puede ser indemnizado varias veces- determinan la prohibición de la acumulación.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de Daños. Civitas, Madrid, 1991, p.172 s.

<sup>21</sup> TOSCANI GIMÉNEZ, Daniel. El derecho de los trabajadores a reclamar en vía civil como consecuencia de los daños sufridos en un accidente laboral o por enfermedad laboral. España, p.8 y s. Disponible en internet: <<http://riesgoslaborales.wke.es/articulos/responsabilidad-civil-del-empresario-y-terceros-derivada-del-accidente-de-trabajo>> El autor señala: “En La STS de 10 de diciembre de 1998 (Sala General) afirma que, ante la pluralidad de vías procesales para obtener la reparación de tal tipo de daños, debe recordarse que existe un único daño que hay que compensar o indemnizar, sin perjuicio de las distintas reclamaciones que puedan plantearse. Así, como el daño a reparar es único, las diferentes reclamaciones para resarcirse de él que pueda ejercitar el perjudicado, aunque compatibles, no son independientes, sino complementarias y computables todas para establecer la cuantía total de la indemnización. (...)”

Adicionalmente, Cavanillas Múgica, basándose en el carácter indemnizatorio de las prestaciones y en la similitud de los pagos con los que se hacen al existir un seguro de responsabilidad civil, ha señalado:

*La naturaleza de la seguridad social, como se ha visto, determina que la indemnización laboral y civil sean o no totalmente compatibles. (...) mientras no se acentúe la tendencia moderna a establecer una seguridad social asistencial con cargo principal a los presupuestos del Estado en sustitución de la actual seguridad social contributiva basada fundamentalmente en las cuotas de las cotizaciones, inclinan la balanza a favor de la tesis del seguro de responsabilidad civil, con el corolario de no resultar plenamente compatibles las indemnizaciones civiles y las laborales:1.0) La seguridad social –en cuanto a la cobertura de los riesgos que aquí se estudian– procede históricamente de un seguro obligatorio de responsabilidad civil del empresario; 2.0) La cotización de las primas correspondientes a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales recae exclusivamente sobre el empresario (art. 67.3 LGSS)<sup>22</sup>*

---

*Debe existir también, en principio, un límite en la reparación del daño, conforme a las previsiones del Código Civil, aplicables a todo el ordenamiento. En consecuencia, las cantidades ya recibidas han de computarse para fijar el quantum total. El quantum indemnizatorio debe ser único.*

*La STS de 9 de febrero de 2005 determina que las prestaciones de Seguridad Social no agotan la indemnización total que pudiera proceder en concepto de responsabilidad civil por culpa o negligencia del empresario en la producción de un accidente de trabajo, pero se integran en ese total indemnizatorio y son, por lo tanto, deducibles del importe que hubiera tenido que abonarse si no hubieran existido tales prestaciones, ya que éstas no alteran ese importe total y no pueden adicionarse al mismo porque se produciría un exceso carente de causa, como resulta evidente si se tiene en cuenta que el asegurado social percibiría indemnización superior a quien no estuviese cubierto por tal aseguramiento y hubiese sufrido daño equivalente por culpa también equiparable.”*

<sup>22</sup> CAVANILLAS MÚGICA, Santiago José. Responsabilidad Civil y Protección del Consumidor, Palma de Mallorca, 1985. Citado por DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. Civitas, Madrid, 1993, p.940.

2.1.2. Autores que plantean una posición respecto de los casos en que existe una culpa patronal y de los casos en que existe un tercero ajeno al vínculo laboral que es declarado responsable.

Otros autores, como Manuel Luque, Carlos Gómez y Juan Antonio Ruiz; Luis Díez-Picazo, Antonio de Cupis, Ricardo de Ángel Yagüez, Arturo Alessandri Rodríguez, Luis Fernando Reglero Campos, Enrique Barrios Bourie, Félix A Trigo Represas y Marcelo J. López Mesa; y Henry Mazeaud, León Mazeaud y André Tunc, han abordado la discusión sin diferenciar el caso de la culpa patronal del evento en que existe responsabilidad de un tercero. Algunos de ellos han intentado establecer una posición propia frente a la discusión, mientras que autores como Díez-Picazo y de Ángel Yagüez se han mantenido, en alguna medida, en el ámbito descriptivo de la jurisprudencia española.

En primer lugar, algunos autores han determinado que, toda vez que las prestaciones que se otorgan por la materialización de una contingencia laboral tienen carácter indemnizatorio, la acumulación de éstas con la indemnización plena de perjuicios a cargo del responsable resulta improcedente. Tal ha sido el caso de los autores Trigo Represas y López Mesa, que han interpretado el artículo 39 de la ley 24.557 –norma que regula la problemática de la acumulación de indemnizaciones en el caso argentino, (cuyos incisos 1, 2 y 3 fueron derogados por el artículo 17 de la ley 26.773, con posterioridad a la edición del Tratado de la Responsabilidad Civil)– estableciendo que ésta determina la solución a la problemática sea que se trate de un caso en el que el empleador sea el responsable, o que el daño haya sido causado por un tercero ajeno al vínculo laboral.

Los autores señalan que “*se trata de una eximición de responsabilidad*”<sup>23</sup> cuando el responsable es el empleador (incisos 1 y 2 de la norma), salvo en los casos en

---

<sup>23</sup> TRIGO REPRESAS, Félix A. Y LÓPEZ MESA, Marcelo J. Tratado de la Responsabilidad Civil. Tomo II, La Ley, Buenos Aires, 2004, p.904.



que él haya obrado dolosamente, aunque exponen que la doctrina no es pacífica en el tema, y muestran que se discute tanto la constitucionalidad de tales incisos, como la interpretación que debe darse al término dolo<sup>24</sup>.

Posteriormente, citan el inciso tercero de la norma, y señalan que el mismo establece que *“el reclamo de la acción civil por dolo es conjunta con el reclamo de la ART por las prestaciones del sistema”*<sup>25</sup>. Esto quiere decir, a juicio de los autores, que *“Cuando el dañador es el empleador, quien ha obrado con dolo, la norma no prevé que el mismo pueda descontar de la indemnización a abonar los beneficios que el trabajador damnificado recibe por la LRT.”*<sup>26</sup>

Trigo Represas y López Mesa señalan que tal acumulación es una *“sanción que la ley impone al ilícito civil, otorgando así una mayor protección al trabajador damnificado por el mismo y ello, además, porque cuando la ley ha querido descontar lo que se abona por las prestaciones –dinerarias y asistenciales– de la LRT lo ha hecho expresamente.”*<sup>27</sup>

Es importante resaltar que los incisos a los que se hizo referencia anteriormente fueron derogados por el artículo 17 de la ley 26.773, sin que se estableciera en dicha norma la manera en que debía regularse la situación cuando media culpa patronal.

Por otra parte, los incisos 4 y 5, que aún se encuentran vigentes, regulan la solución a la problemática cuando el responsable es un tercero ajeno al vínculo laboral, estableciendo expresamente que de la indemnización debe descontarse el valor de las prestaciones que *“haya percibido o deba percibir de la ART o del empleador autoasegurado”*<sup>28</sup> y determinando que existe la obligación por parte de la ART o el empleador autoasegurado de otorgar a las víctimas la totalidad de las

---

<sup>24</sup> Ibid.

<sup>25</sup> Ibid., p. 927

<sup>26</sup> Ibid., p. 927

<sup>27</sup> Ibid., p. 928.

<sup>28</sup> Ibid., p. 928.

prestaciones y a “repetir del responsable del daño causado el valor de las que hubieran abonado, otorgado, o contratado”<sup>29</sup>. Sobre el tema los autores exponen que “La norma indudablemente quiere evitar un enriquecimiento sin causa de parte de la víctima del daño, una suerte de duplicidad de indemnizaciones”, de donde se deduce el criterio utilizado por los mismos para acoger la solución dada por la normatividad que se encontraba vigente para la época en que se redactó el libro.

Con una posición similar a la que acoge el autor anterior, centrados también en la regulación legal y jurisprudencial del tema en Argentina para el momento que se escribió el libro, André Tunc y los hermanos Mazeaud, tampoco avalan la posibilidad de acumulación de las prestaciones derivadas del sistema de seguridad social y la indemnización plena de perjuicios. Así, refiriéndose específicamente a la pensión de invalidez los autores determinan:

*(...) La pensión de invalidez no es la verdadera contrapartida de las retenciones efectuadas sobre el sueldo. En efecto, no depende del importe de las sumas que hayan sido aportadas así por el funcionario. Este último no entrega primas anuales al Estado, que haría el papel de asegurador; aquel sufre un descuento en su sueldo, y esas retenciones están muy lejos de compensar las pensiones abonadas. Por eso, aun cuando en esto quepa dudar, hay que ver en la pensión de invalidez abonada los funcionarios una indudable indemnización: la misma repara el daño. En consecuencia, la acumulación es imposible.*<sup>30</sup>

También Arturo Alessandri Rodríguez ha sostenido que el carácter indemnizatorio de las prestaciones de la seguridad social, aunada al entendimiento de que el seguro de riesgos profesionales es un seguro de responsabilidad civil, establecen

---

<sup>29</sup> Ibid. Los autores refieren en este punto a: CONFLITTI, Mario C., Riesgos del Trabajo, Ley 24.557 Comentada y Anotada. Ed. Universidad, p.268.

<sup>30</sup> MAZEAUD, Henry; MAZEAUD León; TUNC, André. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual. Tomo I, Ediciones jurídicas Europa – América. Buenos Aires, Argentina, 1962, p.356.

la imposibilidad de la acumulación de los pagos. El autor resume la problemática en los siguientes términos:

*En nuestro concepto, todo él se reduce a determinar el carácter de las prestaciones que la víctima recibe de terceros con ocasión del delito o cuasidelito, es decir, si importan o no una reparación o indemnización del daño realmente irrogado. En caso afirmativo, el cúmulo es inadmisibile por la sencilla razón de que un daño no puede ser reparado dos veces. Pero si no tienen tal carácter, si su existencia es independiente de ese daño, con el cual no guardan relación, el cúmulo es procedente.<sup>31</sup>*

Posteriormente el autor plasma su postura, de la siguiente manera:

*Tratándose de accidentes del trabajo, la situación es muy diversa. Como las prestaciones que el obrero o empleado accidentado o su familia pueden exigir del patrón o de la compañía en que éste aseguró el riesgo profesional de sus obreros o empleados tienen por objeto la reparación del daño inferido por el accidente— se trata de un seguro de responsabilidad y, por lo mismo, de un seguro de daños (N.º 492), el cúmulo entre las prestaciones que daba el patrón y las que deba la compañía aseguradora es inadmisibile, siempre que lo que pague esta última comprenda la totalidad de las indemnizaciones, rentas o pensiones que en derecho correspondan<sup>32</sup>; la existencia de este seguro libera al patrón de toda responsabilidad (art. 295 C. del T.). Se ha fallado, por eso, que a la indemnización que es de cargo del patrón sirven de abono las cantidades que la compañía aseguradora haya pagado o deba pagar al accidentado<sup>33</sup>*

*Tampoco se puede acumular la indemnización que la víctima tenga derecho de exigir del tercero causante del accidente en conformidad al derecho común con la que es de cargo del patrón según el C. del T.: aquella libera a éste hasta la concurrencia de su valor (art. 260 C. del T.). La víctima del accidente, o los que*

---

<sup>31</sup> ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo, Op. cit., p.583. El autor refiere en este punto las ideas de De Page y Demogue.

<sup>32</sup> El autor señala que “en caso contrario, la responsabilidad del patrón subsistiría, pero sólo por la diferencia”

<sup>33</sup> El autor hace referencia en este punto a: *Gaceta*, año 1927, tomo II, sent. 153, pág. 670.

*tengan derecho a la indemnización, podrán pues, dirigirse contra uno u otro; pero si el tercero causante del accidente los indemniza en su totalidad, nunca podrán reclamar del patrón.*<sup>34</sup>

Frente a la posibilidad que tiene el patrón de repetir contra el tercero responsable por las prestaciones que haya tenido que asumir, Alessandri Rodríguez sostiene:

*El patrón que ha indemnizado a su obrero o empleado por un accidente del trabajo imputable a dolo o culpa de un tercero, tampoco tiene acción en contra de éste<sup>35</sup>, a menos que el accidentado le ceda la suya. La obligación del patrón tiene por causa la ley, que se la pone como consecuencia del contrato de trabajo que lo liga para con el obrero o empleado. El art. 260 C. del T. corrobora lo dicho: según él, sólo la víctima del accidente o los que tengan derecho a la indemnización pueden reclamar del causante del accidente la indemnización del daño sufrido con arreglo al derecho común y entre esas personas no figura el patrón. Este es deudor y no acreedor de su indemnización.*<sup>36</sup>

El carácter indemnizatorio de las prestaciones de la seguridad social también pareciera ser el criterio bajo el cual el doctrinante Enrique Barrios ha establecido su posición con respecto a la acumulación de indemnizaciones. El autor, narrando la posición que se sostiene por la legislación chilena, expresa:

*(...) La Ley de accidentes del trabajo establece una cobertura por las lesiones que se produzcan al trabajador a causa o con ocasión de la relación de trabajo, con efecto de lesiones, enfermedades o muerte (artículo 5º). El seguro no se financia con aportes del trabajador, sino del empleador, además de otras fuentes secundarias (incluidos los ingresos que se obtengan del responsable civil del accidente cubierto por el seguro). El trabajador recibe prestaciones médicas y por*

---

<sup>34</sup> Ibid., p.588.

<sup>35</sup> Para sostener esta teoría el autor se basa en los argumentos de Pirson y de Villé, y narra la situación francesa, en donde el empleador tiene una acción propia en contra del tercero por el perjuicio que implica haber pagado las prestaciones por la materialización del accidente.

<sup>36</sup> Ibid. p.593

*incapacidad temporal o invalidez y, en caso de muerte, la ley prevé prestaciones a favor de la familia (Título V).*

*Si los daños son superiores a los cubiertos por el seguro, la ley concede a la víctima del accidente una acción personal en contra de quien resulte civilmente responsable, cuyo objeto es obtener indemnización por la diferencia de valor entre lo percibido del asegurador y el daño efectivamente sufrido (Ley de accidentes del trabajo, artículo 69).<sup>37</sup>*

Y en cuanto a la naturaleza de las prestaciones el autor sostiene que “*Las prestaciones a que da lugar el seguro por accidentes del trabajo tienen naturaleza indemnizatoria. Por esto, cuando el seguro concurre con una acción de responsabilidad civil (§ 51 c) ambas prestaciones no se acumulan, reconociendo la ley al asegurador una acción para recuperar lo pagado de quien resulte civilmente responsable (artículo 69 letra b; infra N° 696).*”<sup>38</sup>

No obstante, unos capítulos más adelante el autor hace referencia al cúmulo de indemnizaciones, estableciendo lo siguiente:

*b) El problema del cúmulo de prestaciones sociales e indemnizatorias no se ha planteado en el derecho chileno con la misma intensidad que en el derecho europeo. En ello han influido diversas razones; ante todo, el establecimiento de regímenes previsionales de ahorro personal (Administradoras de Fondos Pensionales) y de seguro privado de salud (Instituciones de Salud Provisional), que disminuyen el ámbito público de la previsión social y que en el caso de las Isapres permiten regular contractualmente el cúmulo de prestaciones; (...) finalmente, las prestaciones de los sistemas sociales de previsión también son por lo general muy básicas, de modo que tiene poco sentido práctico que el organismo que las financia incurra en los costos administrativos de ejercer acciones en contra de quien sea civilmente responsable del accidente. Esta parece ser la mejor explicación para que las leyes que conceden beneficios sociales no contengan*

---

<sup>37</sup> BARROS BOURIE, Enrique. Op. cit., p.696

<sup>38</sup> Ibid., p.697

*normas expresas respecto de la acumulación de las prestaciones otorgadas por los respectivos sistemas con las indemnizaciones provenientes de la responsabilidad civil.*

*c) a falta de norma legal especial, los eventuales conflictos de interés entre las víctimas, los civilmente responsables y los organismos que pagan subsidios debieran ser resueltos de acuerdo a los criterios enunciados. Por regla general, el responsable civil no puede traspasar a la víctima, su empleador o la comunidad (según quien haya financiado el pago) el costo de reparar el daño provocado, de modo que el beneficio otorgado por el instituto de seguridad social no debe deducirse de la indemnización devengada a título de responsabilidad civil)<sup>39</sup>.*

*Resuelta esa cuestión, queda abierta la segunda pregunta, relativa a si el instituto de seguridad social tiene derecho a recuperar lo pagado o si, por el contrario, la indemnización y el beneficio se acumulan en favor de la víctima. Todo indica, como se ha adelantado, que lo decisivo es determinar si el pago del tercero tiene carácter indemnizatorio, caso en el cual no es correcto que proceda la acumulación, mientras lo contrario debiera ser el caso si se trata de una renta que proviene de un ahorro previsional de la propia víctima. En una situación intermedia se encuentran las pensiones asistenciales que no han sido financiadas por la víctima; la legislación y jurisprudencia comparadas tienden a cambiar el criterio tradicional de que las prestaciones sociales son acumulables a la indemnización por responsabilidad civil,<sup>40</sup> otorgándose una acción de reembolso a favor del asegurador, de modo de evitar una doble indemnización a costa del sistema de seguridad social.<sup>4142</sup>*

---

<sup>39</sup> El autor narra en este punto que: “En un caso la Corte Suprema estimó que lo pagado en razón de indemnizaciones legales debe deducirse de la indemnización que debe el Estado por atentados contra las personas con posterioridad a septiembre de 1973, según dispone la ley N° 19.123 (CS, 3.9.2003, rol N° 4.938-2001, con comentario de E. Court en Rev. D. UAI 1, 2004, 86); es discutible que esa sentencia pueda estimarse como regla general en la materia, porque se trata de indemnizaciones que el Fisco paga por ambos conceptos, y que tienen por antecedente los mismos hechos, de modo que la deducción tiene por antecedente una compensación (que evita pagar dos veces el mismo daño).”

<sup>40</sup> El autor cita en este punto a Alessandri y a la jurisprudencia chilena (CS, 12.1.1918, RDJ, t, XV, sec 1ª, 514).

<sup>41</sup> Esta es, según Barros Bourie, la posición que han sostenido Burrows, Viney/Jourdain, Larenz. Adicionalmente, señala que de acuerdo con Vicente en Reglero, “en España se ha fallado que se

De la misma manera, en el Tratado de Responsabilidad Civil<sup>43</sup> del cual Luis Fernando Reglero Campos es coordinador, se acoge el criterio del *carácter indemnizatorio*, para establecer la imposibilidad de la acumulación de los pagos. En esta obra se plantea la problemática que se presenta en España respecto de la jurisdicción competente para conocer de los casos en que el trabajador demanda al empresario que ha obrado con culpa, se discute el tema de las sanciones administrativas que se generan cuando el patrón no cumple con sus obligaciones de seguridad, y se plantea una crítica a la jurisprudencia de la Jurisdicción Civil, que establece la compatibilidad de las indemnizaciones, para posteriormente plantear una posición, en los siguientes términos:

*Que se puede ejercitar una acción contra el tercero ajeno a la relación laboral es evidente, y del texto del art. 127.3 LGSS sólo cabe deducir que igual posibilidad ha de haber si el responsable es el propio patrono en el caso de que la prestación social haya tenido su origen en un supuesto que implique responsabilidad civil del mismo: “la prestación será hecha efectiva (...) sin perjuicio de aquellas responsabilidades. En estos casos, el trabajador o sus derechohabientes podrán exigir indemnizaciones procedentes de los presuntos responsables”<sup>44</sup>. Pero decir esto no implica necesariamente compatibilidad material de los distintos montos indemnizatorios. No se argumenta a favor de la independencia y plena compatibilidad con base en razones derivadas del hecho de que los propios trabajadores financien en parte el sistema de prestaciones sociales, pues una cosa es que los trabajadores coticen y tengan por su inclusión en el sistema público un derecho a que se les atienda, y otra que ello tenga que significar necesariamente que sea acumulable lo que por ello perciban y lo que pretendan recibir por el mismo concepto del responsable material. Ni se diga tampoco que entonces el tercero ajeno a la relación laboral que atropelló al trabajador camino al trabajo, si*

---

*tiene derecho a conservar el beneficio en consideración a que la víctima pagó por esa eventualidad”*

<sup>42</sup> Ibid., p. 911 ss.

<sup>43</sup> REGLERO CAMPOS, Luis Fernando. Coord., Op. cit.

<sup>44</sup> El autor señala en este punto que: “A la inversa, el art. 115.5 dice que no impedirá la calificación de un accidente como de trabajo “b) la concurrencia de culpabilidad civil o criminal del empresario, de un compañero de trabajo del accidentado o de un tercero...””

*se niega la total compatibilidad, va a tener la suerte de verse obligado a pagar menos y hasta mucho menos de lo que le correspondería si el accidente hubiera sido no laboral. Como tendremos ocasión de ver, una correcta comprensión del sistema de reintegros a las entidades pagadoras resolvería el problema: el responsable habría de pagar a las mismas lo que ellas adelantaron, y directamente al damnificado lo que restara para la total indemnidad.*

*Por tanto, lo que hay (o debería haber) en esta materia es una plena concurrencia o compatibilidad de normas (las laborales y las comunes de la responsabilidad civil) que determina una limitada concurrencia o compatibilidad de indemnizaciones, de modo que sólo se acumulan las que respondan a distintos conceptos dañosos <sup>45</sup> . Se trata de distintas fuentes originadoras de indemnizaciones, de eso no hay duda, pero tampoco la debe haber en cuanto a la finalidad común que ambas tienden a cumplir.<sup>46</sup>*

Adicionalmente, sobre la posibilidad de que la entidad de seguridad social recobre el monto de las prestaciones al responsable, se sostiene:

*Ninguna duda se plantea con la posibilidad de que las entidades pagadoras recuperen del responsable del accidente el importe de las prestaciones sanitarias. Más difícil es encontrar una respuesta uniforme en relación con la recuperación de las restantes prestaciones, habida cuenta de que tanto el art. 123.3., párr.. 2º LGSS como los preceptos correlativos de las normativas predecesoras a la vigente se refieren de manera expresa al coste de las prestaciones sanitarias.*

*A mi me parece que el hecho de que el precepto sólo vaya referido a las prestaciones sanitarias no puede significar que el regreso se encuentra vedado en relación con las demás. (...) Por ello más bien parece que el derecho de regreso por el importe de las prestaciones extrasanitarias puede encontrar una más cómoda ubicación en el derecho de subrogación del asegurador. Si, una vez*

---

<sup>45</sup> Se sostiene que algunas sentencias acogen esta posición, “como es el caso de la de 1 febrero 1999 (RJ 1999, 745): “son compatibles ambas vías jurisdiccionales cuando los daños rebasen la cobertura de las responsabilidades laborales”.”

<sup>46</sup> Ibid., p.1403 y s.



*pagada la indemnización, éste puede en los seguros de daños “ejercitar los derechos y las acciones que por razón del siniestro correspondan al asegurado frente a las personas responsables del mismo, hasta el límite de la indemnización” (art. 43 de la Ley del Contrato de Seguro), lo que no se puede es entender que el mecanismo protector de la Seguridad Social actúa plenamente como si de un seguro de personas se tratara, para con ello excluir la subrogación por conceptos que no sean los que atienden a gastos sanitarios. No es lo mismo el sistema público de cobertura por los accidentes laborales que el sistema de los típicos seguros de sumas o de personas: más bien lo que en aquel hay es un peculiar aseguramiento público contra los daños patrimoniales. No creo que abogar entonces por una interpretación extensiva del art. 43 LCS (o cuando menos por una aplicación analógica, pues no debe olvidarse qué precepto se halla situado entre los que la Ley dedica precisamente a los seguros de daños) sea precisamente un despropósito.*<sup>47</sup>

Por otra parte, haciendo uso del criterio de la subrogación –o en la posibilidad de cobrar mediante una acción directa al responsable del daño–, dentro del artículo *Accidentes de Trabajo y Responsabilidad Civil*, Manuel Luque, Carlos Gómez y Juan Antonio Ruiz sostuvieron la imposibilidad, en todos los casos, de que se acumulen las indemnizaciones correspondientes con las prestaciones derivadas de la existencia de un accidente de trabajo o enfermedad laboral, con la indemnización de perjuicios a cargo del responsable.<sup>48</sup>

Adicionalmente, de Cupis, haciendo referencia a la teoría de la *compensatio lucri cum damno* ha determinado que en principio, no podría decirse que es aplicable

---

<sup>47</sup> REGLERO CAMPOS, Luis Fernando. Coord., Op. cit., p. 1420 y s.

<sup>48</sup> LUQUE, Manuel, GOMEZ, Carlos y RUIZ, Juan Antonio. Op. cit., p.14 señalan: “La solución al problema de la acumulación o deducción de las cuantías cobradas con cargo a los sistemas generales de compensación de daños derivados de accidentes o enfermedades profesionales de las cantidades fijadas como indemnización está en permitir, mediante una acción directa o por subrogación, que quien haya pagado la reparación del daño, el asegurador (en este caso la Seguridad Social), pueda reclamar al responsable (el empresario o un tercero) las cantidades pagadas a la víctima.

De esta forma, el trabajador sólo cobra una vez la cuantía debida por la reparación de los daños sufridos y la Seguridad Social puede reclamar del empresario las cantidades pagadas al trabajador. Se cumplen así los objetivos de cobertura del riesgo y de reparación del daño -pues el trabajador cobra- y de prevención de daños futuros -pues no se ahorra al empresario el pago de las indemnizaciones por daños causados en su actividad-.”

dicha teoría –y entonces podría deducirse que procede la acumulación– cuando se ha pagado por parte de un tercero una pensión, por cuanto no existe nexo causal entre el hecho dañoso y el perjuicio.

Aunque señala que la situación es más complicada cuando se trata de pensiones privilegiadas, porque en sentido estricto sin el hecho dañoso no se hubiera causado el derecho a la pensión –lo que puede hacerse extensivo a los casos en que existe un accidente o enfermedad laboral– no podría darse entrada a la teoría *“por cuanto el incremento patrimonial, correspondiente a la adquisición de tal derecho, no está separado de un sacrificio económico (entrega mensual a cargo del funcionario público) y, por tanto, no constituye un lucro en el sentido propio de la palabra.”*<sup>49</sup>

2.1.3. Autores que describen principalmente la posición sostenida por la jurisprudencia.

El tratadista Ricardo de Ángel Yagüez ha mostrado la posición de la jurisprudencia española, concluyendo que existe una compatibilidad en el caso de la culpa patronal, y con mayor razón cuando el causante del daño es un tercero, y que por lo tanto es procedente la acumulación<sup>50</sup>. No obstante, el autor ha limitado esta teoría con su postura frente al tema, al señalar en varias oportunidades que se debe indemnizar *“hasta la total cobertura del daño real”*<sup>51</sup> y que *“hay que tener presente que lo que en modo alguno cabe es que la víctima sea indemnizada en más del daño realmente sufrido”*<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> DE CUPIS, Adriano. Op. cit., p. 338. Esta discusión que plantea el autor no será posible en Colombia, ya que las prestaciones de origen profesional no se otorgan como contraprestación de las cotizaciones que realiza el trabajador, sino que quien realiza los aportes es el empleador.

<sup>50</sup> DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. Civitas, Madrid, 1993.

<sup>51</sup> Ibid., p. 924

<sup>52</sup> Ibid., p. 929.

En ese mismo sentido, el tratadista Díez-Picazo ha explicado cómo, desde el punto de vista de la jurisprudencia española, se ha permitido la acumulación de las prestaciones del sistema de seguridad social con la indemnización plena de perjuicios:

*(...) la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha construido la doctrina de la llamada “perfecta compatibilidad” entre las indemnizaciones civiles y laborales. Esta doctrina afirma que, con independencia del capital o pensión que pueda corresponderle con cargo a la seguridad social, el trabajador o sus derechohabientes pueden reclamar con apoyo en las normas reguladoras de la responsabilidad civil extracontractual la indemnización que corresponda frente al empresario o al tercero al que el hecho lesivo pueda ser imputado.*<sup>53</sup>

Así entonces, de la lectura de los autores extranjeros se deducen varias cuestiones: i) el tratamiento de la problemática sin hacer diferenciación alguna sea que se esté frente a un caso de culpa patronal o de responsabilidad de un tercero ajeno al vínculo laboral, como regla general; ii) los criterios utilizados por quienes plantean su propia posición se han enfocado principalmente en la discusión del carácter indemnizatorio de las prestaciones que se otorgan al materializarse una contingencia de origen laboral y en la subrogación; y iii) la respuesta, en la mayoría de los casos, ha tendido a determinar la imposibilidad de acumular la indemnización plena de perjuicios con las prestaciones que otorga el sistema de riesgos laborales.

## 2.2. DOCTRINA NACIONAL

Los autores nacionales se han ocupado del problema de la acumulación o cúmulo de indemnizaciones (como han definido la discusión), a partir de la distinción entre el caso de la culpa patronal y del tercero ajeno al vínculo laboral, como se ha mencionado en repetidas ocasiones. Para resolver la problemática han utilizado

---

<sup>53</sup> DÍEZ-PICAZO, Op. cit., p. 177.

los diversos criterios a los que se hizo referencia en el acápite anterior y en la tabla 1.

Los autores pueden diferenciarse en tres amplios grupos: i) los que determinan que la acumulación está permitida en todos los casos, ii) los que establecen que la acumulación está prohibida en el ámbito de la culpa patronal, pero determinan como regla general que se encuentra permitida cuando existe un tercero ajeno al vínculo laboral llamado a responder, salvo norma expresa de subrogación, y iii) los que señalan que la acumulación de indemnizaciones no debe ser posible en ninguno de los casos.

Siendo tan importante el papel que se le ha dado a la subrogación para determinar la posibilidad de la acumulación o la del descuento, en el acápite 2.2.4. se hará un recuento sobre la norma de subrogación existente en Colombia en materia de riesgos laborales y sobre la conclusión de los diferentes autores acerca de su vigencia y aplicabilidad.

2.2.1. Los autores que determinan que la acumulación de indemnizaciones y prestaciones que otorgan las ARL es posible en todos los casos

Para empezar, Juan Carlos Henao, basado en la posición jurisprudencial vigente en el Consejo de Estado para la época en que redactó su libro *El Daño*, establece la posibilidad de acumulación, determinando que como la causa jurídica que da lugar a la indemnización, y la que da lugar a que la ARL pague una determinada prestación son diferentes, no existe un enriquecimiento sin causa cuando se permite que la víctima acumule ambos pagos. El tratadista expresa:

*El problema consistirá entonces, como bien se observa en la sentencia citada, en que la causa o título que justifica la mejoría de la víctima no se excluya con la indemnización del proceso de responsabilidad. Dentro de esta óptica se plantea de una manera diferente la regla de la indemnización plena del daño: no se trata de*

*discutir si la víctima a partir del daño puede o no enriquecerse por obtener algo por encima del monto del mismo, circunstancia que se acepta, sino si la víctima tiene derecho a quedar en mejor situación porque existen causas que lo justifican. A este propósito se puede sentar la siguiente regla: si existe un título o causa que justifica el cúmulo de compensaciones, por ejemplo –un seguro, una pensión, una donación, etc.–, y si además, dicha causa o título no se excluye con la propiamente indemnizatoria debida por el directamente responsable, procede aceptar la acumulación.<sup>54</sup>*

Así mismo, el doctrinante y Consejero de Estado Enrique Gil Botero determina que como las prestaciones tienen naturaleza jurídica diferente, es posible la acumulación. El autor señala:

*Las prestaciones laborales y la indemnización derivada del hecho dañoso son categorías diferentes y no se debe confundir la naturaleza de cada una de las dos instituciones. (...)*

*Jamás ese pago efectuado por la seguridad social puede tener naturaleza indemnizatoria como se afirma en la sentencia, porque se reitera, eso es confundir categorías jurídicas diferentes.(...) Resulta mas coherente en el sistema jurídico mantener la doctrina de la absoluta independencia entre la indemnización proveniente del hecho dañoso y las reglas de la seguridad social, doctrina conocida como la de la perfecta compatibilidad entre indemnizaciones civiles y laborales conforme lo ha destacado el Tribunal Supremo en España.<sup>55</sup>*

Luis Alfonso Cuéllar defiende también la tesis de la acumulación de indemnizaciones, pero restringe su estudio al análisis del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, sin establecer si es posible o no la acumulación cuando el responsable es un tercero ajeno al vínculo laboral. El autor citado señala:

---

<sup>54</sup> HENAO, Juan Carlos. Op. cit., p. 53.

<sup>55</sup> GIL BOTERO, Enrique. Op. cit., p.56.

*La indemnización del artículo 216 tiene una reglamentación propia, y he considerado que se trata de una sanción punitiva. La pensión de invalidez se causa por la afiliación y el pago de unos aportes no se causa por la culpa que haya podido cometer el empleador. (...)*

*Entender que el artículo 216 establece solo el derecho a la indemnización de perjuicios es borrar de un plumazo la calificación de indemnización total y ordinaria, lo que no es de recibo so pretexto de interpretar la norma porque con estas palabras total y ordinaria, se esta creando una sanción especial, que tiene la naturaleza de punitiva, por haber cometido culpa suficientemente comprobada.<sup>56</sup>*

2.2.2. Los autores que establecen que acumulación está prohibida en el ámbito de la culpa patronal, pero determinan como regla general que se encuentra permitida cuando existe un tercero ajeno al vínculo laboral llamado a responder, salvo norma expresa de subrogación.

Los autores que abordan el problema desde esta óptica sostienen que la solución debe ser diferente en el caso de la culpa patronal y en el del tercero responsable. Así, Javier Tamayo Jaramillo, Juan Gonzalo Flórez y Ricardo Hoyos Duque, en el caso de la culpa patronal, establecen que la similitud del sistema de riesgos laborales con un seguro de daños (en contraposición a un seguro de personas) – algunos hablan en concreto de un seguro de responsabilidad civil–, determina que la acumulación no sea posible, mientras que en el campo de la responsabilidad de terceros, las causas jurídicas distintas que tienen la indemnización de perjuicios y las prestaciones del sistema de seguridad social, hacen procedente la acumulación, salvo que exista norma expresa de subrogación.

En este sentido, Tamayo Jaramillo, en caso de culpa patronal, determina que el pago por parte de la ARL tiene por finalidad extinguir la obligación propia de tal

---

<sup>56</sup> CUELLAR VALENCIA, Luis Alfonso. La culpa del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. En: Responsabilidad Civil y del Estado. No 17. Agosto 2004, p. 3 y s.

entidad y la del empleador responsable, que tiene que entenderse como beneficiario de la póliza pues sería ilógico que la obligación frente a él subsistiera cuando la aseguradora de riesgos laborales paga. Para fundamentar esta posición señala:

*Empero, en casos excepcionales, el pago hecho a la víctima por el seguro, por la seguridad social o por un tercero sí tiene por finalidad extinguir la obligación del responsable y, por tanto, este se libera de cualquier acción indemnizatoria posterior, bien sea de la víctima, bien de quién le pagó a esta el seguro. Es lo que ocurre en los seguros de responsabilidad civil o de responsabilidad por accidentes de trabajo. (...)*

*Lo mismo ocurre en la indemnización de base pagada por la seguridad social al trabajador en virtud de un accidente de trabajo. Pese a que a veces se diga lo contrario, lo cierto es que esta indemnización de alguna manera busca liberar de responsabilidad al patrono. Para ello paga la totalidad de las cotizaciones. Al trabajador sólo le queda reclamar la indemnización plena con culpa probada prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, pues esta no está cubierta por la seguridad social. En este caso, el patrono también podrá cubrirse de este riesgo contratando por aparte un seguro de responsabilidad civil patronal.<sup>57</sup>*

Frente a los terceros, el tratadista hace un análisis de las razones por las cuales las prestaciones del sistema de riesgos laborales no tienen carácter indemnizatorio, a partir del entendimiento que tiene del concepto de reparación, el cual fue esbozado en el primer capítulo de este trabajo<sup>58</sup>. A partir de dicha comprensión, y de la determinación de la existencia de causas jurídicas distintas que dan origen a uno y otro pago, el autor determina que la acumulación es en principio posible, salvo que el legislador establezca una norma de subrogación<sup>59</sup>.

---

<sup>57</sup> TAMAYO JARAMILLO, Javier. Op. Cit., p. 617.

<sup>58</sup> En su momento se explicó que para este autor, “la indemnización consiste en la extinción, mediante pago, de la obligación del causante del perjuicio”, por lo que la entrega de un bien similar al afectado o el pago de una prestación que materialmente coincide con un perjuicio indemnizable no implica que haya existido una indemnización.

<sup>59</sup> Ibid., p.620 y 624. El autor sostiene: “(...) aunque materialmente hablando ambas prestaciones pueden converger en lo mismo, lo cierto es que cada una de ellas tiene causa jurídica distinta. Y

En términos similares a los descritos anteriormente, Juan Gonzalo Flórez establece, frente al empleador que incurre en culpa y es condenado a la indemnización plena de perjuicios, que no es posible la acumulación, toda vez que es necesario revisar la situación teniendo en cuenta que el seguro de riesgos laborales es un típico seguro de daños. El autor menciona:

*En relación con la estructura del sistema de riesgos profesionales, se hace importante advertir que a juicio de quien expresa estas ideas, su naturaleza es similar a la de un seguro de daños, con matices propios de la seguridad social; varias de sus notas características podrán darle fuerza a lo aquí expresado.<sup>60</sup>*

De lo anterior, en consonancia con lo expresado por el mismo autor al identificar la solución que debe darse cuando existe un pago realizado por un tercero obligado frente al responsable, se deduce la imposibilidad de acumulación. Frente al tema expone:

*Puede ocurrir que en virtud de alguna relación jurídica, contractual generalmente, un tercero contraiga para con el responsable la obligación de indemnizar a la víctima. Pago que tendría efectos plenamente indemnizatorios.*

*Estarían aquí comprendidos los seguros de responsabilidad civil tomados por el responsable para proteger su patrimonio de los daños que podría ocasionar a terceros. En principio, la aseguradora paga su propia obligación, dada la presencia*

---

*así se diga lo contrario, lo cierto es que el pago hecho por el asegurador no “indemniza” o repara, jurídicamente hablando, el ilícito causado por el tercero responsable. Lo único que repara el ilícito causante del daño es el pago hecho por el responsable o por un tercero en su nombre”. Y más adelante expresa: “En conclusión, podemos afirmar que el asegurador o la institución de la seguridad social que paguen al asegurado o a sus herederos una prestación, sólo se podrán subrogar contra el tercero responsable en la medida en que el legislador, mediante una norma especial, le otorgue dicha subrogación. No es pues, como se cree, que el carácter indemnizatorio de la prestación es lo que otorga o prohíbe esa subrogación, o lo que, consecuentemente, otorga o prohíbe la acumulación de prestaciones a favor del asegurado o sus herederos. Es al contrario: la existencia de la subrogación especial es lo que da a los seguros o a la seguridad social el carácter de “indemnizatorios”. Sin esa subrogación el carácter de indemnizatorio desaparecería”*

<sup>60</sup> FLÓREZ, Juan Gonzalo. La acumulación de indemnizaciones, una revisión conceptual y jurisprudencial del tema- Parte 2. Op. cit., p.132.



*de un vínculo oneroso para con el responsable. Pero su obligación consiste, precisamente, en extinguir la deuda a cargo de ese responsable para con la víctima. De esta manera la aseguradora pagando a la víctima extingue la obligación del responsable y su propia obligación (la de la aseguradora) contra el responsable.*<sup>61</sup>

En cuanto a la posición frente a terceros condenados a indemnizar, el mismo autor expone que en principio es posible la acumulación, pero que esta opción desaparece ante la existencia de una norma que permita la subrogación de las ARL para cobrar del responsable las prestaciones que haya tenido que pagar a la víctima.<sup>62</sup>

De otro lado, Ricardo Hoyos Duque, en el artículo *El cúmulo de indemnizaciones*, para determinar la imposibilidad de que la víctima acumule los pagos en casos de culpa patronal, se basa en el carácter indemnizatorio de las prestaciones que otorgan las ARL y en el entendimiento del tema como un supuesto en el que existe un seguro de responsabilidad civil. El autor sostiene:

*Si a través de la seguridad social el patrono traslada los riesgos a otra entidad (ISS, Cajanal, o administradora de riesgos profesionales) las prestaciones derivadas del accidente de trabajo tienen una naturaleza indemnizatoria y por lo tanto, en el evento de que existe culpa suficientemente comprobada del patrono constituyen un pago parcial de la indemnización plena a cargo de éste, independientemente de que le asista o no el derecho de subrogación frente al patrono, cosa que por lo demás no resultaría lógica, en tanto el asegurador se estaría volviendo contra el asegurado en un seguro de responsabilidad civil.*<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> FLÓREZ, Juan Gonzalo. La acumulación de indemnizaciones, una revisión conceptual y jurisprudencial del tema- Parte I. Op. cit., p.75 y s.

<sup>62</sup> FLÓREZ, Juan Gonzalo. La acumulación de indemnizaciones, una revisión conceptual y jurisprudencial del tema- Parte 2. Op. cit., p.135 y s.

<sup>63</sup> HOYOS DUQUE, Ricardo. El cúmulo de indemnizaciones. En: Responsabilidad Civil y del Estado No. 13. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., Medellín, Noviembre del 2002, p.49.

En el caso en el que el responsable sea un tercero, el autor señala que tiene que existir una norma expresa que tenga carácter de Ley en el sentido formal, para que pueda existir la subrogación y no se presente la acumulación, que de lo contrario aplicaría como regla general<sup>64</sup>.

2.2.3. Los autores que señalan que la acumulación de indemnizaciones no es posible en ninguno de los casos.

Frank José Ospina Blandón ha sostenido que la acumulación es en cualquier caso prohibida, basándose en el carácter indemnizatorio que le otorga a las prestaciones que se reconocen en el ámbito del sistema de riesgos laborales. Sobre este tema, señala:

*Si partimos de la base de que las prestaciones de la administradora de riesgos profesionales sí reparan los daños causados a la víctima, es decir, al trabajador o a sus familiares y beneficiarios, entendidas como víctimas indirectas, no habría lugar a que éstas pretendiesen cobrar al causante del daño, bien sea el tercero o el empleador, la totalidad de los perjuicios sufridos, pues los mismos fueron cubiertos, al menos parcialmente, por el sistema de la seguridad social en riesgos profesionales. La pretensión indemnizatoria en estos casos debería limitarse a las brechas propias de algunas de las prestaciones de la seguridad social y a todos aquellos perjuicios ajenos a la naturaleza y órbita de cobertura del sistema general de riesgos profesionales. (...)*

*Si se asume la posición propuesta, en el sentido de que los pagos realizados por la administradora de riesgos profesionales indemnizan a la víctima, se podría concluir que en el momento en que ésta pretende frente al responsable la indemnización, el daño ya no existe, por haber sido reparado cuando menos parcialmente, a partir de las prestaciones asistenciales y económicas reconocidas por el sistema general de riesgos profesionales. Esta propuesta implicaría que*

---

<sup>64</sup> Ibid.

*tanto el empleador responsable como el tercero podrían descontar dichos valores de la indemnización, con la diferencia de que el tercero mantendría vigente su obligación frente a la entidad que realizó los pagos.*<sup>65</sup>

En el mismo sentido, el asesor de este trabajo, Juan Carlos Gaviria Gómez sobre el tema de la acumulación de indemnizaciones sostiene:

*Puede concluirse que no hay lugar a la acumulación (y por ende hay lugar al descuento en tres hipótesis):*

*-En primer lugar, cuando el tercero no obligado paga la obligación a cargo del deudor*

*-En segundo lugar, cuando el tercero obligado al cumplir con su propia obligación, y por el alcance o finalidad de esta, simultáneamente extingue la obligación a cargo del responsable, tal como ocurre en el seguro de responsabilidad.*

*-En tercer lugar, cuando el tercero obligado al cumplir con su propia obligación, y no obstante no tener como finalidad la de extinguir simultáneamente la deuda del responsable para con la víctima (v.g. seguro de daños), se subroga en los derechos del perjudicado. La doctrina, atinadamente ha explicado que es la regulación legal de la figura la que va a determinar la existencia o no de la acumulación. Si legal o contractualmente se consagró el derecho de subrogación a favor de dicho tercero existe claridad de la no acumulación; por el contrario, la ausencia de dicha norma subrogatoria, y el reconocimiento de causas jurídicas diferentes determina la posibilidad de la acumulación.*<sup>66</sup>

Esta postura pareciera ser acogida, también, por Juan Manuel Díaz-Granados Ortiz, quien en su libro *El Seguro de Responsabilidad* plantea:

*En nuestra opinión, el criterio que determina la procedencia de la acumulación no es la pluralidad de fuentes, sino, como señala Arturo Alessandri, “si importan o no*

---

<sup>65</sup> OSPINA BLANDÓN, Frank José. Op. cit., p. 273 y 280.

<sup>66</sup> GAVIRIA GÓMEZ, Juan Carlos. Problema Relativo a la acumulación de indemnizaciones con las prestaciones a cargo de la seguridad social: La indemnización de perjuicios por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por culpa patronal. Disponible en Internet: [http://www.aplegis.com/documentosoffice/medellin\\_civilseguros/INDEMNIZACION\\_PERJUICIOS.pdf](http://www.aplegis.com/documentosoffice/medellin_civilseguros/INDEMNIZACION_PERJUICIOS.pdf)> p.20.

*una reparación o indemnización del daño irrogado. En caso afirmativo, el cúmulo es inadmisibile por la sencilla razón de que un daño no puede ser reparado dos veces. Pero si no tienen tal carácter, si su existencia es independiente de ese daño, con el cual no guardan relación, el cúmulo es procedente*<sup>67</sup>.

*Sin embargo, subsiste una inquietud cuando la naturaleza de la prestación es indemnizatoria y existen simultáneamente varios mecanismos posibles de protección: ¿Cuál de todos esos mecanismos es el que debe soportar económicamente el resarcimiento del daño? La respuesta dependerá de si la ley consagra para quien haya pagado un derecho de repetir o subrogarse por lo pagado frente al responsable o alguna otra de las figuras. (...)*

*Si la posibilidad de repetición no existe, pagará la prestación aquél que escoja la víctima o el afectado.*<sup>68</sup>

No obstante, frente al tema específico de la seguridad social el autor no determina si dichas prestaciones tienen carácter indemnizatorio sino que se limita a hacer un recuento sobre la postura sostenida por las altas Cortes.

#### 2.2.4. La posibilidad de subrogación a favor de las ARL en el caso colombiano.

El artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 del mismo año, era el punto de partida para la discusión sobre la posibilidad de subrogación a favor del I.S.S., en el caso en que se hubiere producido un riesgo por culpa del empleador. Resulta importante señalar que algunas de las providencias analizadas en el presente trabajo fueron proferidas aun en vigencia de dicho acuerdo.

---

<sup>67</sup> Alessandri Rodríguez, Arturo, Op.cit., p.583, Citado por: DÍAZ-GRANADOS ORTIZ, Juan Manuel. Op. cit., p.115

<sup>68</sup> DÍAZ-GRANADOS ORTIZ, Juan Manuel. Op. cit., p.115 y s.

Posteriormente entró en vigencia la Ley 100 de 1993, norma que fue expedida con la finalidad de regular de forma global la seguridad social en Colombia; el artículo 83 del acuerdo 155 de 1963, y el Decreto 3170 que la aprobaba, no fueron derogados expresamente por la citada ley. Por ese motivo, además de la interpretación que debe darse a la norma, se discute actualmente su vigencia.

El artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 establece:

**Artículo 83:** *El otorgamiento de las prestaciones establecidas por el presente reglamento por parte del Instituto, exonera al patrono de toda otra indemnización según el Código Sustantivo del Trabajo, o según el derecho común por causa del mismo accidente o enfermedad profesional. Pero si el riesgo se hubiere producido por acto intencional o por negligencia o culpa del patrono o sus representantes, o de un tercero, y diere lugar a indemnización común, el Instituto procederá a demandar el pago de esa indemnización, la que quedará a su favor hasta el monto calculado de las prestaciones que el Instituto acordare por el accidente o enfermedad, debiendo entregar a los beneficiarios el saldo si lo hubiere.*

*Lo dispuesto en el inciso anterior no es óbice para que la víctima o sus causahabientes instauren las acciones pertinentes de derecho común para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el Instituto de acuerdo con las normas de este reglamento.*

El magistrado ponente José Fernando Ramírez Gómez, en sentencia del 22 de octubre de 1998, con radicado 4866<sup>69</sup>, dio luces frente a la interpretación del artículo ya mencionado, estableciendo:

*Del texto de la citada norma se colige el siguiente entendimiento: a) El inciso primero legitima directamente al Instituto para pretender del tercero responsable*

---

<sup>69</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de octubre de 1998. M.P. José Fernando Ramírez Gómez, Rad. 4866.

*del daño causado al trabajador beneficiario, el pago de la “indemnización común” plena, es decir, por toda clase de perjuicios derivados del hecho culposos imputado al demandado, quedando a su favor “el monto calculado de las prestaciones que el Instituto acordare por el accidente” y “debiendo entregar a los beneficiarios el saldo si lo hubiere”. b) De conformidad con el inciso 2º. esa legitimación que la primera parte de la norma confiere al Instituto, “no es óbice para que la víctima o sus causahabientes instauren las acciones pertinentes en derecho común para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios”, caso en el cual del monto resarcitorio debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el Instituto. En otras palabras, esta segunda parte de la norma, en clara concordancia con la primera reconoce la legitimación de la víctima o sus causahabientes, para pretender la indemnización total, así se haya recibido del Instituto el pago de prestaciones en dinero con carácter indemnizatorio, pero con la obligación de “entregar” a éste (al Instituto), “el valor de las prestaciones en dinero pagadas”, que es lo que en los términos de la norma significa “descontarse el valor...”, o sea que dicha entidad queda con el derecho de reclamar de la víctima del accidente el reembolso del valor de las prestaciones que la entidad pagó por esa misma causa.<sup>70</sup>*

De lo anterior podría entenderse pues que se concede una doble legitimación extraordinaria al Instituto de Seguros Sociales: en primer lugar, se faculta para reclamar del responsable la indemnización plena de perjuicios a que tienen derecho las víctimas, descontando el valor de las prestaciones otorgadas y pagando el saldo a las víctimas. Adicionalmente, se le legitima para reclamar a las víctimas –en caso de que el empleador culpable las haya indemnizado plenamente–, el valor de las prestaciones reconocidas por la entidad en virtud de su relación laboral con el empleador. Esta interpretación ha sido también sostenida al interior de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

En adición a la norma anterior, que regularía el caso en el ámbito del Instituto de Seguros Sociales únicamente, el Decreto 1771 de 1994, reglamentario del Decreto

---

<sup>70</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de octubre de 1998. M.P. José Fernando Ramírez Gómez, Rad. 4866.

1295 de 1994, consagra una norma que faculta a las aseguradoras de riesgos laborales para subrogarse en la posición de la víctima a quien ha pagado prestaciones fruto de un accidente o enfermedad laboral, cuando hay un tercero responsable de la contingencia. El artículo 12 del mencionado Decreto establece:

***Artículo 12.** Subrogación. La entidad administradora de riesgos profesionales podrá repetir, con sujeción a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contingencia profesional, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del tercero.*

*Lo dispuesto en el inciso anterior no excluye que la víctima, o sus causahabientes, instauren las acciones pertinentes para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicio, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales.*

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al igual que la Sala Civil de la misma Corporación, han interpretado el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994 como si su contenido fuera idéntico al del artículo 38 del acuerdo 155 de 1963, y se ha señalado que como la estructura es la misma, las consideraciones que hubieran realizado las Salas respecto de la interpretación del artículo 38 eran aplicables al artículo 12 del decreto 1771 de 1994<sup>71</sup>.

En la interpretación del artículo 12 anteriormente citado, se generan principalmente dos discusiones. En primer lugar, se cuestiona si esta norma se encuentra vigente y es aplicable. Adicionalmente, se debate si dicha subrogación, en caso de ser posible, aplicará frente al empleador responsable por culpa patronal o únicamente frente a un tercero responsable ajeno al vínculo laboral.

---

<sup>71</sup> Se considera que no es posible llegar a esta conclusión, toda vez que el artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 realmente contemplaba una acción a favor de la entidad de seguridad social y en contra del empleador, lo que no puede deducirse del texto del artículo 12 del Decreto 1771 de 1994 pues éste se refiere únicamente al tercero responsable.

En el capítulo siguiente se expondrá la posición que la jurisprudencia ha tomado al respecto. Por ahora es importante resaltar que gran parte de la doctrina colombiana ha sostenido que la norma es aplicable pero únicamente frente a los terceros ajenos al vínculo laboral. Las posiciones que han asumido los distintos autores pueden resumirse en la tabla 2:

**Tabla 2.** Posiciones de la doctrina en cuanto a la vigencia y los casos en que es aplicable el Artículo 12 del Decreto 1771 de 1994.

	Vigencia	Casos en que aplica la norma
<b>Frank José Ospina Blandón</b>	Si	Únicamente frente a terceros
<b>Ricardo Hoyos Duque</b>	No (solo una ley podría regular la situación)	N/A
<b>Juan Gonzalo Flórez</b>	Si	Únicamente frente a terceros
<b>Javier Tamayo Jaramillo</b>	Si, aunque su validez es dudosa	Únicamente frente a terceros. Frente al patrono en casos de culpa grave o dolo.
<b>Néstor Alejandro García Franco</b>	Si, aunque su validez es dudosa	Claro para los terceros. Discute si es aplicable también en el caso del empleador.
<b>Enrique Gil Botero</b>	No	N/A

Ospina Blandón ha sido enfático en determinar que la norma es aplicable, toda vez que no ha sido suspendida ni anulada<sup>72</sup>. Adicionalmente el autor señala que aunque algunos autores sostienen que el decreto 3170 de 1963, que consagra la posibilidad de que las ARL se subroguen contra el empleador culpable, se encuentra vigente, “*no tiene ningún sentido predicar que la ARP puede ejercer*

<sup>72</sup> OSPINA BLANDÓN, Frank José. Op. cit., p.285. El autor señala: “*Existe una clara y precisa disposición, dentro del marco jurídico propio del sistema general de riesgos profesionales, que consagra la posibilidad de que la administradora de riesgos profesionales se subroga en contra del tercero responsable del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional. En ese sentido, el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, que reglamenta parcialmente el Decreto Ley 1295 de 1994 establece lo siguiente (...)*

*Norma que no ha sido ni suspendida ni anulada, y por lo tanto goza de presunción de legalidad. Y en cualquier caso podrá aplicarse también el art. 1040 del Cco para aplicar la subrogación.”*



*acciones de recobro frente al empleador. Tal situación sería como afirmar que en un seguro de responsabilidad civil, el asegurador se encuentra facultado para recobrar en contra de sus asegurados las indemnizaciones que deba pagar a terceros como consecuencia de la realización de los riesgos asegurados.”<sup>73</sup>*

En el mismo sentido se pronuncia Juan Gonzalo Flórez, al manifestar:

*La realidad actual nos pone frente a la existencia de una norma que consagra la subrogación, cuya constitucionalidad no ha sido desvirtuada y de esta forma obliga; por lo cual ante un accidente de trabajo o enfermedad profesional imputable a un tercero, procedería el derecho a recobrarse lo pagado o lo destinado a tal fin, por parte de la ARP.*

*En lo que concierne al accidente de trabajo imputable al trabajador (sic), existe un imperativo mayor, consistente en establecerse con certeza la naturaleza que frente al empleador ostenta la ARP. Difiere ampliamente la solución que se adopte en el evento de comprender una situación de aseguramiento de carácter patrimonial a favor del empleador.”<sup>74</sup>*

Por su parte, Javier Tamayo Jaramillo aduce que, si bien existe una norma que consagra la subrogación, su validez es discutible ya que “*si la ley 100 y el Decreto 1295, que tienen fuerza de ley, no establecen la subrogación en favor de las entidades de la seguridad social, en el fondo están concediendo al afiliado o a sus beneficiarios el derecho de acumular las dos prestaciones. Y ese derecho no puede ser cercenado por un decreto reglamentario de rango inferior*”<sup>75</sup>. No obstante, el tratadista reconoce que la norma existe y es aplicable actualmente.

Adicionalmente, para determinar en qué casos es aplicable la precitada norma, el autor expone:

---

<sup>73</sup> Ibid., pg. 283

<sup>74</sup> FLÓREZ, Juan Gonzalo. La acumulación de indemnizaciones, una revisión conceptual y jurisprudencial del tema- Parte 2. Op. cit., p.151.

<sup>75</sup> TAMAYO JARAMILLO, Javier. Op. cit., p. 656.

*Es importante tener en cuenta que el artículo 12 del Decreto 1771 no se refiere para nada al patrono, cuando la legislación normalmente distingue entre tercero y patrono. Por tanto, esa falta de mención indica que la voluntad del legislador era impedir la subrogación en contra del patrono, salvo en los casos de dolo o culpa grave de su parte, pues los principios generales del derecho impiden la condonación del dolo.<sup>76</sup>*

Esta misma posición es acogida por Néstor Alejandro García Franco, quien al interpretar el artículo 12 del decreto 1771 de 1994, establece que hay una dificultad a la hora de determinar la procedencia y funcionamiento de la figura de la subrogación en el sistema de riesgos profesionales “*pues la normatividad existente al respecto tiene en entredicho, inclusive, su validez.*”<sup>77</sup> ya que la figura de la subrogación, de acuerdo con el artículo 1667 del Código Civil deriva su fuente de la Ley o la convención entre las partes. Al respecto, el autor señala:

*(...) Emerge una nueva vicisitud no menos traumática y se concreta en establecer la validez del Decreto 1771 de 1994, pues por ser reglamentario y expedido por el Gobierno, podría haberse excedido en sus mandatos al regular aspectos propios del legislador, como es la creación de acciones subrogatorias, además de regular aspectos no contemplados en las normas que reglamenta, pues ni el Libro III de la Ley 100 de 1993 ni el Decreto – Ley 1295 de 1994 contemplaron la acción subrogatoria para el componente de riesgos profesionales.*

*Ahora bien, si aceptáramos que el artículo 12 del Decreto reglamentario 1771 de 1994 es válido, nos vemos en la necesidad de salvar un nuevo obstáculo: ¿Procede aquí la acción subrogatoria a favor de las A.R.P. y en contra del empleador culpable?*

*Frente al artículo 83 del Decreto 3170 de 1964 es clara la expresa mención en cuanto a la procedencia de la acción de subrogación en contra del empleador*

---

<sup>76</sup> Ibid., p. 664.

<sup>77</sup> GARCIA FRANCO, Néstor Alejandro. Op. cit., p. 95.

*culpable, pero no tiene tal claridad el artículo 12 del Decreto 177, pues simplemente menciona al tercero responsable (...).*

*Ahora bien, de la redacción del citado Decreto resulta preciso determinar si al empleador se le puede tener como tercero para efectos de la subrogación. Si así se aceptare, en caso de ocurrir el accidente o producirse la enfermedad con la mediación de culpa de parte de éste o de sus agentes, no estaría llamada a ser aceptada la acumulación, por ser de recibo la acción subrogatoria, pues el empleador se vería avocado a pagar el total de los perjuicios al trabajador y posteriormente a restituir a la A.R.P. las sumas que esta debió pagar como prestaciones de la seguridad social. Lo que si se acepta es que el empleado no solo obtenga de la A.R.P. las correspondientes prestaciones, sino que además reciba del patrono aquellos rubros indemnizatorios que ésta no cubre, tales como los inmateriales que llegaren a configurarse.<sup>78</sup>*

Sosteniendo una posición opuesta, Ricardo Hoyos Duque en el artículo *El cúmulo de indemnizaciones* expone:

*Cosa distinta sucede cuando el hecho causante del daño es imputable a un tercero distinto del patrono o empleador. En este caso, el único mecanismo que impediría a la víctima acumular la indemnización de perjuicios con las prestaciones obtenidas de la seguridad social sería la subrogación que la LEY –NO UN DECRETO REGLAMENTARIO NI UN ACUERDO EXPEDIDO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE UNA ENTIDAD PÚBLICA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, COMO HA SUCEDIDO HASTA AHORA- otorgara a ésta para que sustituyera a la víctima y pudiera obtener del responsable el reembolso de lo pagado.<sup>79</sup>*

La misma posición ha sido sostenida por Enrique Gil Botero, quien al respecto expresa:

---

<sup>78</sup> Ibid., p. 97 y s.

<sup>79</sup> HOYOS DUQUE, Ricardo. Op. cit., p. 50.

*(...) Y en lo que respecta al derecho a la subrogación de la seguridad social cuando el hecho dañoso es atribuido a un tercero diferente al empleador, ésta no se da, toda vez que no existe ley que así lo disponga y se tiene en consecuencia derecho a la acumulación de las prestaciones laborales con la indemnización de perjuicios.<sup>80</sup>*

En conclusión, aunque los diversos expositores citados han dado un gran peso al criterio de la subrogación para determinar si las víctimas pueden acumular la indemnización procedente de un tercero responsable y las prestaciones que otorga la ARL y a pesar de que discuten si el artículo 12 del decreto 1771 de 1994 está viciado de nulidad, la mayoría asumen que, toda vez que la norma no ha sido retirada del ordenamiento, vincula, motivo por el cual la situación actual debería ser la de la imposibilidad de la acumulación, y la de la posibilidad del descuento.

### 2.3. CONCLUSIONES ACERCA DE LA POSTURA ASUMIDA POR LA DOCTRINA

Como puede verse, distintos criterios han sido elegidos por la doctrina para dar respuesta a la problemática que se plantea. Algunos autores abogan por la acumulación, mientras que otros defienden la pertinencia del descuento.

Las diferentes apreciaciones de los doctrinantes radican, en gran medida, en la definición que le den al concepto *indemnización*, y del entendimiento que éstos tengan frente a la situación del empleador con respecto a la ARL. Estos temas serán tenidos en cuenta, necesariamente, al intentar proponer una manera de resolver el conflicto que se plantea. La visión en conjunto de las posturas que diversos doctrinantes han tenido sobre la materia, es un criterio auxiliar para encontrar los criterios bajo los cuales se pretenda dar solución al problema planteado en el marco de este trabajo.

---

<sup>80</sup> GIL BOTERO, Enrique. Op. cit., p. 50

### 3. REVISIÓN JURISPRUDENCIAL

El problema relativo a la *acumulación de indemnizaciones* ha sido discutido al interior de la Sala Civil y de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y por el Consejo de Estado, aunque no en la misma medida ni de igual manera.

Por un lado, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado de establecer la solución a la problemática en el caso en que se determina la existencia de una culpa patronal que dio origen a un accidente o enfermedad laboral, y a su vez el sistema de riesgos laborales ha pagado al trabajador unas prestaciones. De otra parte, la Sala Civil de la misma Corporación se ha encargado de casos en que existe un tercero, ajeno al vínculo laboral, que debe ser condenado a indemnizar a la víctima, pero al mismo tiempo se presentó una contingencia que generó que se pagara a la víctima una determinada prestación.

Por último, el caso del Consejo de Estado es bastante particular, debido a que esta Corporación ha tenido que encargarse de dos situaciones: la primera, relativa al Estado en su calidad de empleador que es responsable cuando al trabajador se le causa un daño antijurídico. La segunda, que aparece cuando el Estado como tercero ajeno al vínculo laboral causa un daño a un administrado, pero que al mismo tiempo el daño constituyó una contingencia laboral, por la cual a la víctima se le otorgaron determinadas prestaciones.

Dentro del presente capítulo se recogen las sentencias relevantes que han sido proferidas dentro de cada una de las Salas. A partir de ellas se grafican las líneas jurisprudenciales que dan cuenta de un análisis dinámico de la jurisprudencia. Adicionalmente, las sentencias reunidas se dividen en sentencia fundadora de línea, sentencias modificadoras, consolidadoras y reiteradoras de jurisprudencia.

Se toma como sentencia fundadora de línea la sentencia que da origen a la posición jurisprudencial vigente. A diferencia de lo planteado por el autor Diego Eduardo López Medina<sup>81</sup>, no se determina la sentencia fundadora como la primer sentencia expedida por una determinada Corporación que trate el problema específico, debido a que las Cortes se han ocupado de la problemática de la acumulación de indemnizaciones desde hace muchos años, sin que reconstruir la historia completa sea relevante para los fines de este trabajo.

No obstante, los demás tipos de sentencias, es decir, las modificadoras, consolidadoras y ratificadoras si se describen como lo establece el libro *El Derecho de los Jueces*. Así, “las sentencias hito consolidadoras de línea son aquellas en las que la Corte trata de definir con autoridad una subregla de derecho constitucional”<sup>82</sup>. Esto, aplicado a la Jurisdicción Ordinaria y Contencioso Administrativa, y al objeto del presente estudio, implica que las sentencias consolidadoras serán aquellas en que la Sala establezca un nuevo criterio o parámetro interpretativo relevante al momento de establecer la solución a la problemática de la *acumulación de indemnizaciones*.

Por su parte, las sentencias ratificadoras de línea son aquellas a las que el autor hace referencia dentro de las sentencias no importantes. Son providencias “*meramente confirmadoras de principio (sentencias de reiteración)*”<sup>83</sup>. Por último, las sentencias modificadoras de línea son aquellas que cambian la jurisprudencia que se encontraba vigente al momento de proferir una determinada providencia.

Teniendo en cuenta los diferentes tipos de sentencias existentes, y la importancia de cada una de las providencias, se realiza la narrativa que describe la posición jurisprudencial actual, de cara al análisis dinámico que se hace de la misma.

---

<sup>81</sup> LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. Op. cit.

<sup>82</sup> Ibid., p. 164

<sup>83</sup> Ibid., p.166.

### 3.1. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACIÓN LABORAL

La manera de resolver la problemática de la *acumulación de indemnizaciones* ha sido relativamente pacífica al interior de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en donde existe una línea jurisprudencial sólida en torno al tema.

La Sala ha entendido que no le es dable al empleador declarado culpable, descontar de la indemnización plena de perjuicios de que trata el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo las sumas que la aseguradora de riesgos laborales ha pagado a un trabajador o a sus beneficiarios como consecuencia de la obligación objetiva radicada en su cabeza, por el simple hecho de haberse presentado una contingencia de origen laboral, sea un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. La mayoría de las providencias analizadas concluyen que no se permite descontar las prestaciones pagadas por el sistema de seguridad social del monto de la indemnización plena de perjuicios a cargo del empleador, sin decir, de manera expresa que se permite la acumulación<sup>84</sup>.

La diferencia es relevante debido a la interpretación que ha realizado la Sala Laboral tanto del artículo 83 del acuerdo 155 de 1963, como del artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, a la que se hizo referencia dentro del acápite 2.2.4. y sobre la cual se volverá más adelante. Se deduce que la Sala determina que no hay lugar al descuento por parte del empleador culpable, pero tampoco a la acumulación por parte de la víctima, ya que existe una legitimación extraordinaria del Instituto de Seguros Sociales (y en general de las ARL), para cobrar al responsable o a la víctima que ha recibido una indemnización, el monto de las prestaciones que haya otorgado.

---

<sup>84</sup> Se ha hecho referencia expresa a la acumulación en las siguientes sentencias: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 22 de octubre del 2007. M.P. José Fernando Ramírez Gómez. Rad. 27736; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 18 de mayo de 1992. M.P. Hugo Suescún Pujols. Rad. 4941; y Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 10 de marzo de 1993. M.P. Manuel Enrique Daza Álvarez, Rad. 5480.

Es importante tener en cuenta que la Corte no ha hecho ninguna diferenciación en los casos en que se otorga una pensión de invalidez, una pensión de sobrevivientes, o una indemnización por pérdida permanente parcial de la capacidad laboral, y por lo tanto, este criterio no se tendrá en cuenta al analizar la posición sostenida por esta Corporación. Adicionalmente, ninguna sentencia se refirió al caso en que ciertas prestaciones asistenciales fueran otorgadas por la ARL, y que posteriormente se pretendiera un pago del daño emergente por el mismo concepto, motivo por el cual este tema no podrá ser estudiado de cara a la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

La línea existente en la Corporación frente a la acumulación de indemnizaciones puede graficarse de la siguiente manera:

**Tabla 3:** Línea Jurisprudencial. Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Laboral

Línea Jurisprudencial. Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Laboral		
No descuento		Descuento
	<p style="text-align: right;">*</p> <p>21 de marzo de 1991 Rad. 4097 Causas idénticas</p>	
	<p style="text-align: right;">*</p> <p>18 de mayo de 1992 Rad. 4941 Causas idénticas</p>	
	<p style="text-align: right;">*</p> <p>10 de marzo de 1993 Rad. 5480 Causas idénticas y carácter indemnizatorio</p>	



	<p style="text-align: right;">*</p> <p>13 de julio de 1993 Rad. 5918 Reitera Jurisprudencia</p>	
	<p style="text-align: center;">*</p> <p>12 de noviembre de 1993 Rad. 5868 Inasegurabilidad de culpa</p>	
	<p style="text-align: center;">*</p> <p>31 de mayo de 1994 Rad. 6569 Inasegurabilidad de culpa</p>	
	<p style="text-align: center;">*</p> <p>17 de octubre de 1995 Rad. 7716 Inasegurabilidad de culpa</p>	
	<p style="text-align: center;">*</p> <p>7 (8) de mayo de 1997 Rad. 9389 Inasegurabilidad de culpa</p>	
	<p style="text-align: center;">*</p> <p>8 de octubre de 1997 Rad. 9817 Dos tipos de responsabilidad</p>	
	<p style="text-align: center;">*</p> <p>12 de junio de 1998 Rad. 10643 Reitera Jurisprudencia</p>	
	<p style="text-align: center;">*</p> <p>9 de noviembre del 2000 Rad. 14847 Inasegurabilidad de culpa</p>	

	<p>*</p> <p>6 de junio del 2002 Rad. 17251 Reitera Jurisprudencia</p>	
	<p>*</p> <p>25 de julio del 2002 Rad. 18520 Reitera Jurisprudencia</p>	
	<p>*</p> <p>7 de marzo del 2003 Rad. 18515 Reitera Jurisprudencia</p>	
	<p>*</p> <p>8 de agosto del 2003 Rad. 20186 Dos tipos de responsabilidad</p>	
	<p>*</p> <p>10 de marzo del 2005 Rad. 23656 Reitera Jurisprudencia</p>	<p>→</p> <p>*</p> <p>Salvamento de voto M. Eduardo López Causas idénticas</p>
	<p>*</p> <p>16 de marzo del 2005 Rad. 20240 Inasegurabilidad de culpa</p>	
	<p>*</p> <p>24 de junio del 2005 Rad. 23643 Reitera Jurisprudencia</p>	<p>*</p> <p>Salvamento de voto M. Eduardo López Causas idénticas</p>
	<p>*</p> <p>4 de julio del 2006 Rad. 27501 Dos tipos de responsabilidad</p>	

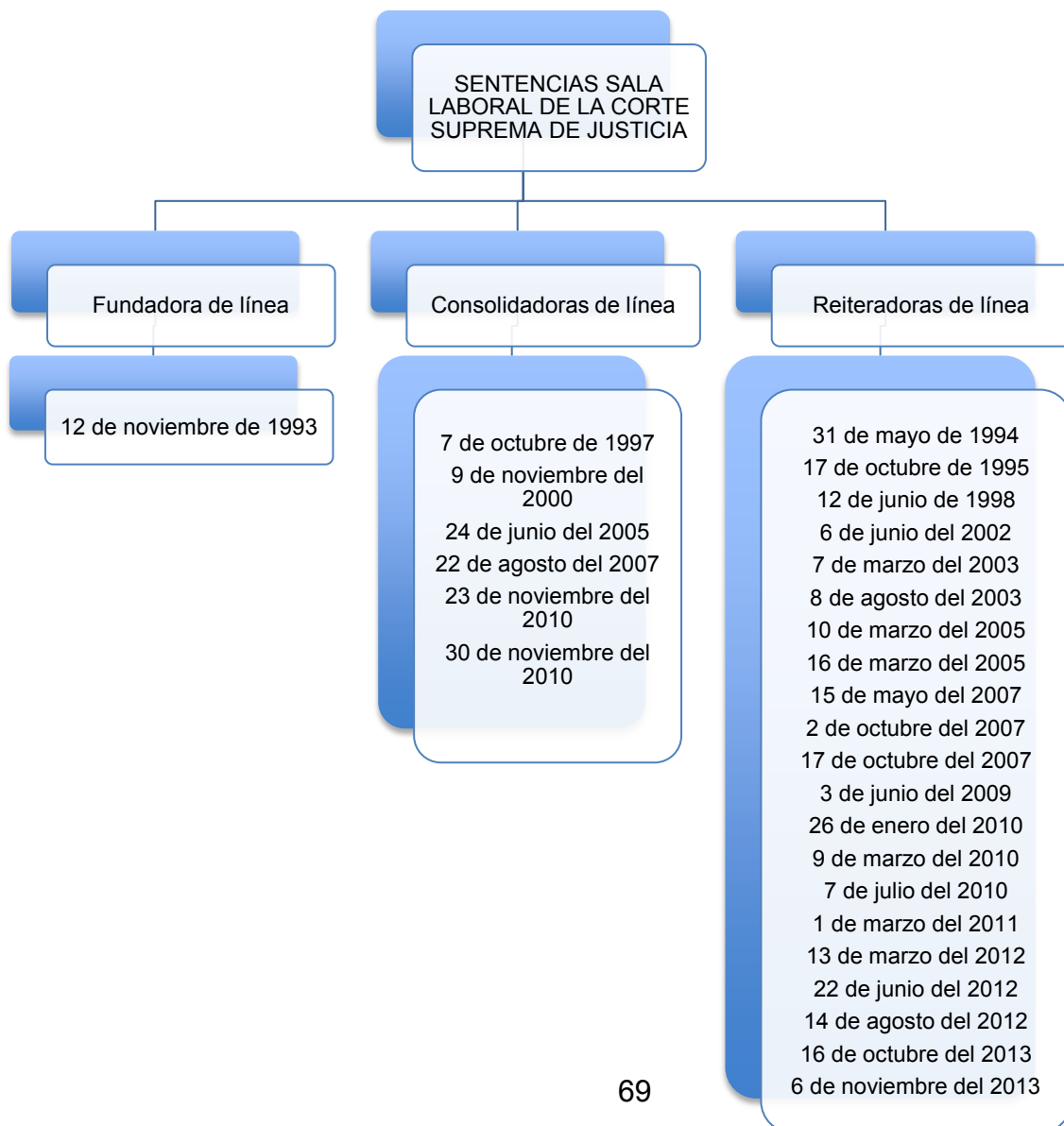
	<p>* → *</p> <p>15 de mayo del 2007 Rad. 28686 Inasegurabilidad de culpa</p>	<p>Salvamento de voto M. Eduardo López Causas idénticas</p>	
	<p>* → *</p> <p>2 de octubre del 2007 Rad. 29644 Reitera Jurisprudencia</p>	<p>Salvamento de voto M. Eduardo López Causas idénticas</p>	
	<p>* 17 de octubre del 2007 Rad. 29609 Inasegurabilidad de culpa</p>		
	<p>* 22 de octubre del 2007 Rad. 27736 Causas diferentes</p>		
	<p>* → *</p> <p>3 de junio del 2009 Rad. 35121 Distinta finalidad e Inasegurabilidad de culpa</p>	<p>Salvamento de voto M. Eduardo López Causas idénticas</p>	
	<p>* → <input type="checkbox"/>*<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input checked="" type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>→ *</p> <p>26 de enero del 2010 Rad. 35271 Reitera Jurisprudencia</p>	<p>Aclaración de voto M. Gustavo Gnecco Carácter indemnizatorio</p>	<p>Salvamento de voto M. Eduardo López Causas idénticas</p>
	<p>* 9 de marzo del 2010 Rad. 37064 Reitera Jurisprudencia</p>		
	<p>* 7 de julio del 2010 Rad. 31646 Reitera Jurisprudencia</p>		

	<p>* → <input type="checkbox"/>*<input type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input checked="" type="checkbox"/><input type="checkbox"/><input checked="" type="checkbox"/></p> <p>23 de noviembre del 2010      Aclaración de voto</p> <p>Rad. 37754      M. Gustavo Gnecco</p> <p>Fuentes diferentes      Carácter indemnizatorio</p>	
	<p>* → *</p> <p>30 de noviembre del 2010      Aclaración de voto</p> <p>Rad. 35158      M. Gustavo Gnecco</p> <p>Fuentes diferentes y      Carácter indemnizatorio</p> <p>carácter indemnizatorio</p>	
	<p>* → *</p> <p>1 de marzo del 2011      Aclaración de voto</p> <p>Rad. 36815      M. Gustavo Gnecco</p> <p>Fuentes, causas      Carácter indemnizatorio</p> <p>diferentes e</p> <p>inasegurabilidad de culpa</p>	
	<p>*</p> <p>13 de marzo del 2012</p> <p>Rad. 39798</p> <p>Obligaciones diferentes</p>	
	<p>*</p> <p>20 de junio del 2012</p> <p>Rad. 42374</p> <p>Fuentes diferentes</p>	
	<p>*</p> <p>14 de agosto del 2012</p> <p>Rad. 39446</p> <p>Dos tipos de</p> <p>responsabilidad</p>	
	<p>*</p> <p>16 de octubre del 2013</p> <p>Rad. 42433</p> <p>Obligaciones diferentes</p>	

	<p>*</p> <p>6 de noviembre del 2013</p> <p>Rad. 38377</p> <p>Dos tipos de responsabilidad y carácter indemnizatorio</p>	
--	---	--

Las sentencias pueden diferenciarse, de acuerdo con la importancia que tienen dentro de la línea jurisprudencial, así:

**Gráfica 1:** Importancia de las sentencias dentro de la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Laboral.



La línea jurisprudencial expuesta anteriormente (Tabla 3), muestra que la sentencia de radicado 5868, proferida el 12 de noviembre del 1993 por la Sala Plena Laboral de la Corte Suprema de Justicia determinó el punto de partida desde el cual se ha establecido la posibilidad de acumular la indemnización plena por culpa patronal con las prestaciones otorgadas por haberse materializado una contingencia laboral, por lo que se determina que es ésta es la sentencia fundadora de línea.

En esa ocasión la Sala decidió que no era posible que el empleador culpable descontara de la indemnización las prestaciones que hubiera pagado el Instituto de Seguros Sociales toda vez que la culpa es inasegurable. En dicha providencia se sostuvo:

*En ejercicio de esta función unificadora de la jurisprudencia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia luego de sopesar los diferentes argumentos en pro y en contra de ambas tesis jurídicas, concluyó que no sólo por expresarlo así claramente el mentado artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 sino, y ésta fue la razón principal que tuvo la Sala, porque nadie puede asegurar su propia culpa ni muchísimo menos obtener algún beneficio de ella, el genuino sentido de lo dispuesto en los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que la recurrente acusa de indebidamente aplicado por el fallo, y del artículo 83 del susodicho Acuerdo, que se dice inaplicado, es el de que el Instituto de Seguros Sociales no ha asumido, ni racionalmente podrá asumirlo, el riesgo de daño al trabajador que le sobrevenga por causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional en cuya ocurrencia se compruebe suficientemente la culpa del empleador; y que por ello quien está habilitado para obtener la devolución de lo que pague por concepto de las prestaciones que cubren los perjuicios derivados de la responsabilidad objetiva del patrono en la producción del accidente o la enfermedad profesional, es el Instituto de Seguros Sociales.*

*O sea, es únicamente el Instituto de Seguros Sociales el que está facultado, cuando otorga las prestaciones al afiliado o sus beneficiarios, para demandar el pago de la indemnización que según el Código Sustantivo del Trabajo o según el*

*derecho común, queda obligado a pagar el empleador cuando el accidente o la enfermedad profesional se producen por acto intencional o culposo suyo; pero nunca podría ser el mismo empleador responsable del daño que sufren el trabajador o sus beneficiarios, por culpa patronal suficientemente comprobada, quien a la postre resulte beneficiado al permitírsele descontar de la suma a la que se prueba asciende el perjuicio una prestación otorgada por el Instituto de Seguros Sociales, el cual está dicho no le ha asegurado sus actos dolosos o culposos sino que lo ha subrogado en el cubrimiento de los riesgos inherentes al trabajo de los que el patrono o empleador responde por su actividad objetiva como tal y sin que medie culpa alguna de su parte.<sup>85</sup>*

Con anterioridad a la sentencia de unificación del 12 de noviembre de 1993, se habían proferido varios fallos que argumentaban la imposibilidad de acumular la indemnización plena de perjuicios con las prestaciones otorgadas por el Instituto de Seguros Sociales, al haberse materializado una contingencia de origen laboral. Las sentencias del 21 de marzo de 1991<sup>86</sup>, 18 de mayo de 1992<sup>87</sup>, 10 de marzo de 1993<sup>88</sup> y 13 de julio del mismo año<sup>89</sup> establecieron dicha imposibilidad, planteando básicamente, que de lo contrario existiría un enriquecimiento sin causa.

Por solo citar un ejemplo, la sentencia del 10 de marzo de 1993 determinó que la acumulación no era posible, con base en el siguiente argumento:

*(...) los aludidos artículos 216 del C. S. del T. y 83, inciso 2 del Acuerdo 155 de 1963 del I.S.S., establecen la obligación patronal de pagar al trabajador que haya sufrido un accidente de trabajo por culpa suficientemente comprobada del empleador, la indemnización total y ordinaria de perjuicios, pero por supuesto*

---

<sup>85</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sala Plena. Sentencia del 12 de noviembre de 1993. M.P. Rafael Méndez Arango Rad. 5868.

<sup>86</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 21 de marzo de 1991. M.P. Hugo Suescún Pujols. Rad. 4097

<sup>87</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 18 de mayo de 1992. M.P. Hugo Suescún Pujols. Rad. 4941

<sup>88</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 10 de marzo de 1993. M.P. Manuel Enrique Daza Álvarez. Rad. 5480.

<sup>89</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 13 de julio de 1993, M.P. Hugo Suescún Pujols. Rad. 5918

*autorizan a descontar del monto de dicha indemnización el valor de las prestaciones en dinero sufragadas por el patrono o, si es el caso, por el I.S.S. cuando este haya asumido el riesgo, ello con el fin de evitar que la víctima del accidente reciba un valor superior al que le corresponde y obtenga, consiguientemente, un enriquecimiento sin causa.*<sup>90</sup>

A partir de dicha sentencia de unificación –proferida el 12 de noviembre de 1993– se ha mantenido la posibilidad de acumulación, pero se han ido variando los criterios que han sido tenidos en cuenta para llegar a esa conclusión, como pasará a verse.

Inicialmente, algunas providencias se limitaron a reiterar lo dicho por la Corte en sentencia del 12 de noviembre de 1993. Tal fue el caso de las sentencias proferidas el 31 de mayo de 1994<sup>91</sup> y el 17 de octubre de 1995<sup>92</sup>.

Así, la sentencia de radicado 7716, proferida el 17 de octubre de 1995 estableció que *“es pertinente advertir que no encuentra la Sala en los argumentos expuestos por la censura razón alguna que justifique la variación de la jurisprudencia adoptada en la sentencia de Sala Plena de Casación Laboral del 12 de noviembre de 1.993.”*<sup>93</sup>

Posteriormente se profirió la sentencia con radicado 9389, el 7 de mayo de 1997 (o el 8 de mayo según ha sido citada por la Corte y la doctrina en reiteradas ocasiones). En esta sentencia, además de determinar la inasegurabilidad de la culpa, la Sala analizó la normatividad que rige la materia. Algunas de las sentencias posteriores, al determinar la relevancia de esta providencia resumieron las argumentaciones principales de la misma, de la siguiente manera:

---

<sup>90</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 10 de marzo de 1993. M.P. Manuel Enrique Daza Álvarez. Rad. 5480.

<sup>91</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 31 de mayo de 1.994. Rad. 6569.

<sup>92</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 17 de octubre de 1995. M.P. Hugo Suescún Pujols. Rad. 7716

<sup>93</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 17 de octubre de 1995. M.P. Hugo Suescún Pujols. Rad. 7716



*Pero la Corte despejó el equívoco en la sentencia del 8 de mayo de 1997. Es importante recordar, en resumen, las razones que tuvo en cuenta para fundar su tesis: 1) El poder normativo de los reglamentos del Seguro está limitado por su objeto social: es entidad aseguradora de los riesgos originados en la prestación de servicios subordinados; la ley no le dio al Seguro la atribución de determinar las consecuencias de la culpa del patrono en la ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, pues esas consecuencias corren a cargo exclusivo del empleador culpable. 2) La competencia que le reconoce la ley al Seguro para subrogar al patrono en la asunción de riesgos laborales está dentro del ámbito de las prestaciones, de los servicios sociales o de las medidas de seguridad social que deben amparar a sus beneficiarios, como lo prescribe el artículo 7° del decreto ley 433 de 1971; pero el Seguro no está legalmente facultado para regular las indemnizaciones originadas en enfermedades profesionales o accidentes de trabajo que ocurran por la culpa suficientemente comprobada del patrono. El Seguro tampoco está legalmente facultado para aminorar la carga patrimonial del patrono en esa materia, por lo cual, asume toda la responsabilidad ordinaria por mandato del artículo 216 del CST; y, por lo mismo, el Seguro subroga al patrono únicamente en el riesgo que da lugar a la denominada responsabilidad objetiva. 3) Si, por su equívoca redacción, el artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 consagrara el derecho del empleador culpable del accidente para descontar del monto de la indemnización ordinaria lo pagado por el Seguro por prestaciones en dinero, la norma sería inaplicable, al igual que el artículo 1° del decreto 3170 de 1964 que lo aprobó. 4) El Seguro reconoce prestaciones para cuyo cálculo toma en cuenta variables como el salario, los años de servicios, el número de cotizaciones, la edad del trabajador, la vida probable, etc. En cambio, no toma en cuenta los perjuicios realmente producidos, lo cual marca una diferencia entre la indemnización a que se refiere el artículo 216 del CST, que busca reparar la totalidad del daño ocasionado por el patrono culpable, con la actividad aseguradora del Instituto. 5) No es cierto que el trabajador se beneficie doblemente (con la indemnización plena y con las prestaciones económicas del Seguro), puesto que el seguro ha sido tomado por el mismo accidentado, de modo que el patrono no puede restar de la indemnización total y ordinaria de perjuicios lo*

*pagado por el Seguro Social en virtud del cubrimiento de un riesgo que no ha sido asegurado por él.*<sup>94</sup>

Esta postura se mantuvo en la sentencia del 8 de octubre de 1997<sup>95</sup>, y en la del 12 de junio de 1998<sup>96</sup>. La primera de las sentencias, al establecer si era posible que a un trabajador que no había sido afiliado al sistema de riesgos laborales, y que había sido indemnizado plenamente por haber mediado culpa patronal en el accidente que se presentó, se le pagara por parte del empleador una indemnización por pérdida permanente parcial, concluyó:

*(...) por omisión de la demandada, la causante no estaba afiliada al Instituto de Seguros Sociales en el momento de su deceso, motivo por el cual esa entidad “no asume el pago de la pensión de sobrevivientes”; y que “todas las obligaciones prestacionales se trasladan al empleador cuando el trabajador no está afiliado al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES”.*

*La prestación de que se trata es completamente autónoma e independiente de la indemnización resarcitoria que, por mandato judicial, recibieron los demandantes. Tal indemnización se originó en la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo, mientras que ésta pensión obedece a la subrogación objetiva del riesgo por muerte, que habría reconocido el ISS a los demandantes si la causante hubiese estado asegurada, sin consideración al resarcimiento derivado de la culpa del empleador.*<sup>97</sup>

La sentencia que le siguió (9 de noviembre del 2000, con radicado 14847) determinó que las consideraciones realizadas por la Corte en sentencias

---

<sup>94</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 9 de noviembre de 2000. M.P. Germán Valdés Sánchez. Rad. 14847, resumiendo los argumentos expresados por la Sala en: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 7 de mayo de 1997 M.P. Rafael Méndez Arango Rad. 9389.

<sup>95</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 8 de octubre de 1997. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Rad. 9817.

<sup>96</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 12 de junio de 1998. M.P. Francisco Escobar Henríquez. Rad. 10643.

<sup>97</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 8 de octubre de 1997. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Rad. 9817.

anteriores eran aplicables aún con la entrada en vigencia de la ley 100 de 1993. Para el efecto señaló:

*El artículo 139-11 de la ley 100 de 1993 confirió al Presidente de la República precisas facultades extraordinarias pro tempore para “Dictar las normas necesarias para organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso, la cotización continuará a cargo de los empleadores”; luego nada indica que en esta atribución de facultades legales, el Presidente de la República pudiera regular las consecuencias de la culpa patronal del artículo 216 del CST.*

*El decreto ley 1295 de 1994, según su encabezamiento, determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. (...) pero esa norma nada dice sobre la responsabilidad por culpa patronal en el accidente de trabajo o en la enfermedad profesional. (...)*

*Como ninguna de las normas acusadas, puestas en relación con el artículo 216 del CST, permite concluir que haya variado el sistema legal que informó la jurisprudencia de la Corte, la conclusión es que sigue vigente la interpretación que allí se consignó.<sup>98</sup>*

La sentencia proferida el 6 de junio del 2002<sup>99</sup> reiteró la postura planteada en la sentencia anterior.

Posteriormente, el 25 de julio del 2002 se determinó la manera en que debía ser entendido el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo (postura que fue

---

<sup>98</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 9 de noviembre de 2000. M.P. Germán Valdés Sánchez. Rad. 14847

<sup>99</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 6 de junio del 2002. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 17251

reiterada, entre otras, en sentencia del 7 de marzo del 2003<sup>100</sup>). En dicha sentencia la Corte estableció:

*No incurre el Tribunal en el yerro jurídico que le imputa la censura al no haber descontado del monto de la condena impuesta a la demandada el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el seguro social con ocasión del accidente de trabajo de que aquí se trata, pues lo cierto es que dio el juzgador al artículo 216 del C.S.T. una interpretación que coincide con la acogida por la Corte.*

*Entiende la Corporación que cuando la disposición en cita autoriza al patrono a descontar del monto de la indemnización “el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo”, se refiere única y exclusivamente a las sumas que él haya pagado con anterioridad al trabajador con ocasión del accidente, pero no las prestaciones que haya reconocido el Instituto de Seguros Sociales por ese motivo, el cual no tiene por qué asumir el riesgo del daño que al trabajador le sobrevenga por causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional en cuya causación exista culpa suficientemente comprobada del patrono.<sup>101</sup>*

En el 2003 la Sala invocó un criterio adicional para permitir la acumulación, que vino a sumarse con el de inasegurabilidad de la culpa. Así, en la sentencia del 8 de agosto de ese año reconoció la existencia de “*dos modalidades indemnizatorias que tienen identidad jurídica propia*”. Esta postura recoge el criterio de la diferencia de causas al que se ha hecho referencia en los capítulos anteriores. En esa oportunidad la Sala Laboral expresó:

*Como primera medida, es dable recordar que con relación a la responsabilidad del empleador frente a los riesgos profesionales, esta Sala en reiteradas ocasiones ha expresado que en su estructura se presentan dos modalidades indemnizatorias que tienen identidad jurídica propias: la una orientada al reconocimiento de una*

---

<sup>100</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 7 de marzo del 2003. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 18515.

<sup>101</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 25 de julio del 2002. M.P. José Roberto Herrera Vergara. Rad. 18520

*indemnización, que encuentra su fundamento en la responsabilidad objetiva que la ley estableció a cargo del empleador, sin tener en cuenta la culpa, que está proyectada a reparar el daño físico sufrido por el trabajador como consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional; acudiendo para el resarcimiento del perjuicio a la tarifa legal correspondiente, según la remuneración de la víctima y la secuela sufrida.*

*La otra, esta referida a la indemnización plena de perjuicios, consagrada en el artículo 216 del C.S.T., que obliga al resarcimiento de todos los perjuicios ocasionados con la enfermedad o el accidente en favor del trabajador o de sus causahabientes según el caso; (...)<sup>102</sup>*

La postura sostenida por la Sala Laboral hasta el momento fue reiterada en sentencias del 10 de marzo del 2005<sup>103</sup>, y del 16 de marzo del mismo año<sup>104</sup>.

En la sentencia proferida el 10 de marzo del 2005 se presentó un salvamento de voto del Magistrado Eduardo López Villegas, quien sostuvo la postura de la imposibilidad de acumulación de las prestaciones del sistema de riesgos laborales con la indemnización plena de perjuicios a cargo del empleador cuando ha mediado culpa patronal. El mismo salvamento es reiterado en las sentencias del

---

<sup>102</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 8 de agosto del 2003. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 20186.

<sup>103</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 10 de marzo de 2005. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López. Rad. 23656. Esta sentencia cita extensamente la sentencia del 9 de noviembre del 2000.

<sup>104</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 16 de marzo de 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 20240. Esta sentencia cita extensamente la sentencia del 25 de junio del 2002.

24 de junio del 2005<sup>105</sup>, 15 de mayo del 2007<sup>106</sup>, 2 de octubre del 2007<sup>107</sup>, 3 de junio del 2009<sup>108</sup>, y 26 de enero del 2010<sup>109</sup>.

Dicho Magistrado se pronunció en los siguientes términos:

*Tal como lo advierte la censura, a partir de la instauración del sistema integral de seguridad social en riesgos profesionales, la pensión de sobrevivientes por tales riesgos y el lucro cesante por culpa patronal no presentan diferencia en lo que respecta a su naturaleza y cometido gobernado por las leyes 100 de 1993 y 776 de 2003, de modo que resulta inadmisibile la acumulación de indemnizaciones a favor del trabajador con invalidez total a causa de accidente de trabajo por culpa patronal. (...)*

*Esta posición doctrinaria parte de una equivocada apreciación sobre la finalidad del descuento prevista en el artículo 193 del C.S.T. en concordancia con el Decreto 1771 de 1994: como la muerte o la invalidez es una contingencia amparada por el sistema de seguridad social, aún ella sea resultante del accidente de trabajo con culpa patronal, los descuentos que disponen deben ser hechos en beneficio del Sistema de Seguridad Social, no del patrono. La subrogación a favor del empleador en la obligación de cubrir prestaciones tiene como correlato la subrogación a favor de las entidades administradores de riesgos profesionales de obtener la indemnización equivalente a lo que a ella le correspondiere pagar; y si se autoriza que el patrono haga descuentos cuando paga a la víctima, es para*

---

<sup>105</sup> Salvamento de voto de Eduardo López Villegas en: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 24 de junio de 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 23643.

<sup>106</sup> Salvamento de voto de Eduardo López Villegas en: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 15 de mayo de 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 28686

<sup>107</sup> Salvamento de voto de Eduardo López Villegas en: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 2 de octubre de 2007. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 29644.

<sup>108</sup> Salvamento de voto de Eduardo López Villegas en: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 3 de junio del 2009 M.P. Luis Javier Osorio López Rad. 35121

<sup>109</sup> Salvamento de voto de Eduardo López Villegas en: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 26 de enero de 2010. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López . Rad. 35271

*asegurar el derecho a la subrogación de la entidad administradora, y evitar que el empleador sea compelido a pagar dos veces por la misma causa.*<sup>110</sup>

Siguiendo con el recuento jurisprudencial, el 24 de junio del 2005 se profirió la sentencia de radicado 23643, en la que la Sala Laboral planteó la diferencia existente entre un seguro de responsabilidad civil y de un seguro de riesgos laborales, para determinar que en el caso de los riesgos laborales no era posible pretender que el empleador descontara de la indemnización plena de perjuicios las sumas que hubiera pagado el Instituto de Seguros Sociales, a diferencia de lo que sucedía en el seguro de responsabilidad civil. En este caso la Corte determinó que:

*Para la Sala los reparos del recurrente basados en el reconocimiento de la pensión por parte del ISS, en el pago que realizó la Previsora S.A., por el seguro de responsabilidad civil extracontractual que había tomado la empleadora y en el paz y salvo que por ello suscribió el demandante, no son suficientes para que se concluya que no hay lugar a la condena por lucro cesante futuro.*

*Lo anterior porque la concesión de la pensión de invalidez, como quedó puntualizado al decidir la casación, no exonera al empleador que por su culpa dio lugar al accidente de trabajo del pago de la indemnización plena y total de perjuicios que consagra el artículo 216 del código sustantivo del trabajo; y el pago que hizo la aseguradora y la firma del paz y salvo, no implicó renuncia ni transacción por parte del actor para reclamar aquella, porque de acuerdo a los términos en que se otorgó, es lógico entender que el mismo está restringido al alcance de la respectiva póliza*

*En cuanto a la restitución que se ordena en el fallo de primera instancia a favor de la Previsora S.A., lo que también critica el apelante y que por estar íntimamente relacionada con la condena que por responsabilidad plena de perjuicios se le impone a la demandada recurrente, puede y debe examinarla la Corte como*

---

<sup>110</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 10 de marzo del 2005. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López. Rad. 23656

*Tribunal de instancia (art. 357 C. de P.C.), y para la Sala es errada, porque es indudable que esa aseguradora, hizo ese pago fue en nombre del empleador demandado, que es el tomador de la póliza, y si el demandante recibió esa indemnización como consecuencia del accidente de trabajo, es a él a quien se le debe reconocer la suma pagada por ese concepto: \$5.611.000, como se dispondrá. Esto, porque lo que dispone el artículo 216 del código sustantivo del trabajo respecto a descontar de la indemnización total y ordinaria por perjuicios el valor de las prestaciones en dinero a que aquél estaba obligado a pagar cuando el riesgo por el accidente de trabajo o enfermedad profesional se encontraba a su cargo, no debe restringirse a aquellas sino a cualquier pago que realice por el suceso que compromete su responsabilidad personal y plena, bien que se haga directamente o por un tercero a su nombre.<sup>111</sup>*

Las siguientes sentencias que trataron el tema, del 4 de julio del 2006<sup>112</sup>, del 15 de mayo del 2007<sup>113</sup>, del 2 de octubre<sup>114</sup> y del 17 de octubre del mismo año<sup>115</sup> reiteraron la jurisprudencia existente, impidiendo que el empleador descontara de la indemnización plena de perjuicios las prestaciones que hubieran sido asumidas por la ARL a la cual se encontraba vinculado el trabajador que sufrió el accidente o enfermedad de origen laboral. La primera de las sentencias se basó fundamentalmente en la diferencia de causas jurídicas que daban origen a los pagos, las sentencias del 15 de mayo del 2007 y del 17 de octubre de ese año determinaron que la culpa es inasegurable y que por lo tanto el daño derivado de la culpa patronal es un riesgo no cubierto por la ARL. Por su parte, la sentencia del 2 de octubre del 2007 se limitó a citar la sentencia del 25 de julio del 2002.

---

<sup>111</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 24 de junio de 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 23643.

<sup>112</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 4 de julio del 2006. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 27501.

<sup>113</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 15 de mayo de 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 28686

<sup>114</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 2 de octubre de 2007. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 29644.

<sup>115</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 17 de octubre de 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 29609.



El 22 de octubre del 2007 se profirió un nuevo fallo en el que la Sala Laboral tuvo que pronunciarse sobre la problemática de la acumulación de indemnizaciones con las prestaciones otorgadas por el sistema de riesgos laborales. En esta ocasión la línea jurisprudencial se mantuvo en la posición del no descuento, pero esta vez haciendo énfasis en el criterio de las diferentes finalidades que tenía cada uno de los pagos. En este evento, el trabajador no había sido afiliado al sistema de riesgos laborales, motivo por el cual el empleador había tenido que sufragar la pensión de sobrevivientes a que tuvieron derecho los familiares del trabajador fallecido. Luego, al analizar si además de la pensión, el empleador tenía que pagar una indemnización plena de perjuicios, la Corte sostuvo:

*Con respecto a lo que atañe al derecho a la reparación como consecuencia de un accidente de trabajo, nuestra legislación tiene prevista dos maneras de reparación identificables jurídicamente así: una, la denominada reparación tarifada de riesgos, relativa al reconocimiento de unos beneficios o prestaciones económicas previstos en la Ley 100 de 1993, Ley 776 de 2002 y demás normas reglamentarias según el caso a cargo de las Administradoras del Riesgo Profesional, entre ellas la pensión de sobrevivientes; y otra, la reparación plena de perjuicios que tiene que ver con la indemnización total y ordinaria de éstos por culpa patronal en la ocurrencia del siniestro, y que corresponde asumir directamente al empleador en los términos del artículo 216 del C.S. del T..*

*A contrario de lo que sostiene el Tribunal, estas dos formas de reparación tienen distinta finalidad, habida consideración que, la pensión de sobrevivientes de origen profesional, atiende el riesgo de la muerte que se orienta a proteger a los causahabientes señalados en la ley y es de naturaleza prestacional perteneciente al Sistema de Seguridad Social Integral; mientras que la indemnización plena de que trata el artículo 216 del C. S. del T., busca la indemnización completa de los daños sufridos al producirse un accidente de trabajo por culpa del empleador, el cual hace parte de un riesgo propio del régimen del Derecho Laboral.<sup>116</sup>*

---

<sup>116</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 22 de octubre de 2007. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 27736.

Los criterios de las causas diferentes y la inasegurabilidad de la culpa fueron reiterados en las sentencias del 3 de junio del 2009<sup>117</sup>, 26 de enero del 2010<sup>118</sup>, 9 de marzo del 2010<sup>119</sup>, 7 de julio del 2010<sup>120</sup> y 30 de noviembre del 2010<sup>121</sup>.

Adicionalmente, en la ya citada sentencia del 26 de enero del 2010<sup>122</sup>, el Magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza presentó una aclaración de voto, que reiteraría en las sentencias del 23 de noviembre del 2010<sup>123</sup>, 30 de noviembre del

---

<sup>117</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 3 de junio del 2009 M.P. Luis Javier Osorio López Rad. 35121

<sup>118</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 26 de enero de 2010. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López . Rad. 35271

<sup>119</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 9 de marzo de 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 37064.

<sup>120</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 7 de julio de 2010. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 31646

<sup>121</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 30 de noviembre de 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 35158. En esta sentencia la Corte señaló: *“los trabajadores que reciban una reparación integral de perjuicios, derivados de un accidente de trabajo por culpa patronal, y simultáneamente una pensión de invalidez, no acceden a una doble reparación por un mismo perjuicio, en la medida en que las fuentes legales son distintas, y su teleología no es coincidente.*

*No obstante las juiciosas reflexiones de la censura, la Sala no variará su postura, dado que, si bien el hecho generador de la pensión de invalidez, y de la indemnización plena de perjuicios, es uno sólo –el accidente de trabajo-, la prestación a cargo del sistema de seguridad encuentra vengero en el riesgo creado a partir del simple desarrollo de una actividad por parte del trabajador, y la reparación plena de perjuicios, establecida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, cuya vigencia no se discute, encuentra su génesis en la culpa del patrono. No menos cierto es que el propósito de las pensiones en general, y la de invalidez en particular, es garantizar la subsistencia del asegurado ante la ocurrencia de un evento que no le permita un ingreso; en cambio, lo que la norma del Código Sustantivo del Trabajo procura, es resarcir a la víctima por la conducta imprudente, negligente, ó premeditada, del empleador, que le ha reportado perjuicios al servidor.*

*Cumple también acotar, que la pensión por invalidez que concede la ARP, no responde precisamente a un contenido resarcitorio, sino que se trata, simplemente, de que, ante la satisfacción de las exigencias legales, para la entidad de seguridad social surge la obligación de pagar dicha prestación, cuando el trabajador ha sido cubierto en el riesgo por el pago de los aportes, al paso que la reparación plena de perjuicios, tiene como fuente, esencialmente, el incumplimiento de quien tiene a su cargo “obligaciones de protección y seguridad para con los trabajadores”.*

*En consecuencia, no hay pago sin causa, ni enriquecimiento injustificado del trabajador accidentado, ni una supuesta incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la indemnización plena de perjuicios, establecida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.”*

<sup>122</sup> Aclaración de Voto de Gustavo José Gnecco Mendoza, en: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 26 de enero de 2010. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López . Rad. 35271

<sup>123</sup> Aclaración de Voto de Gustavo José Gnecco Mendoza, en: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 23 de noviembre de 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 37754.

2010<sup>124</sup> y 1 de marzo del 2011<sup>125</sup>. Esta aclaración se basó en los siguientes argumentos:

*(...) el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994 arriba reseñado, que ciertamente reitera la regla establecida en los reglamentos del Seguro Social, hoy derogados, perentoriamente dispone que “la entidad administradora de riesgos profesionales podrá repetir, con sujeción a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contingencia profesional, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del tercero”.*

*Lo anterior significa, en mi entender, que ese precepto excluye la posibilidad de que las prestaciones que reconoce el sistema de riesgos profesionales en caso de un accidente de trabajo en el que ha mediado culpa del empleador queden definitivamente a cargo del sistema, que, en consecuencia, no tendrá, en últimas, ninguna obligación. De ahí que esté facultado para repetir contra el responsable por el monto de las prestaciones que haya reconocido o que deba reconocer. (...)*

*De la norma transcrita se desprende también que cuando se ha logrado establecer que un empleador fue responsable de un accidente de trabajo y se le condene a la reparación integral de los perjuicios ocasionados al trabajador, si previamente una administradora de riesgos profesionales ha reconocido prestaciones, el monto de ellas debe ser pagado por ese empleador a la administradora, mas no al trabajador, quien ya ha recibido las prestaciones correspondientes y, por lo tanto, ha sido resarcido en parte del daño laboral ocasionado, aunque no de todos los perjuicios sufridos.*

*El descuento al que allí se alude no afecta en realidad la indemnización íntegra de los daños sufridos por el empleado, quien los debe ver resarcidos, de una parte con las prestaciones ya recibidas del sistema de seguridad social y, de otra, con lo*

---

<sup>124</sup> Aclaración de Voto de Gustavo José Gnecco Mendoza, en: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 30 de noviembre de 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 35158.

<sup>125</sup> Aclaración de Voto de Gustavo José Gnecco Mendoza, en: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 1 de marzo de 2011. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 36815.

*que le corresponda, por su lado, al empleador. Y tampoco beneficia al empleador, quien, de todos modos, deberá atender la reparación total de los perjuicios, sólo que estará obligado a devolver lo pagado a quien ya ha asumido parte de esa restauración, vale decir, la administradora de riesgos profesionales.*

*Es apenas natural concluir que la posibilidad de descuento anteriormente explicada sólo será viable si la administradora correspondiente se ha hecho parte en el proceso o si ha instaurado uno con ese objetivo, pues de no ser así obviamente no podrán tomarse determinaciones en relación con ella y, por lo tanto, la deducción no será procedente, como sucedió en este caso, por ser aquella quien tiene derecho a la devolución de las sumas que hubiere previamente pagado.<sup>126</sup>*

Posteriormente, varias sentencias continuaron reiterando algunos de los criterios invocados por la Sala Laboral, y que han sido establecidos a lo largo de esta línea. En ese sentido, las sentencias del 1 de marzo del 2011<sup>127</sup>, del 13 de marzo del 2012<sup>128</sup>, del 20 de junio del 2012<sup>129</sup>, del 14 de agosto del 2012<sup>130</sup>, del 16 de octubre del 2013<sup>131</sup>, y del 6 de noviembre del mismo año<sup>132</sup>, ratifican la posición

---

<sup>126</sup> Aclaración de Voto de Gustavo José Gnecco Mendoza, en: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 26 de enero de 2010. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López. Rad. 35271

<sup>127</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 1 de marzo de 2011. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 36815. Esta providencia tiene en cuenta los criterios de las diferentes causas y finalidades, y la inasegurabilidad de la culpa y el dolo.

<sup>128</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 13 de marzo de 2012. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 39798. Esta sentencia cita la sentencia del 3 de junio del 2009, Rad. 35121, y la sentencia del 1 de marzo del 2011, Rad. 36815.

<sup>129</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 20 de junio de 2012. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 42374. Esta sentencia cita las sentencias del 23 de noviembre del 2010, 26 de enero del 2010, 10 de marzo del 2005, 9 de noviembre del 2000.

<sup>130</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 14 de agosto de 2012. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 39446. Dicha providencia tiene en cuenta las diferentes causas que dan origen a uno y otro pago, para determinar la posibilidad de la acumulación.

<sup>131</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 16 de octubre de 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 42433. Esta sentencia señala que se trata de obligaciones diferentes, y por la diferente causa que da origen a los pagos es posible la acumulación.

<sup>132</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 6 de noviembre de 2013. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Rad. 38377. Esta providencia trata el tema de las diferentes causas que dan origen a los pagos.

jurisprudencial vigente al interior de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia.

Así, puede verse, tal y como se plasma en la línea construida, que la posición que acoge la Sala Laboral ha sido constante oscilado los criterios tenidos en cuenta para dar solución al problema, aunque las decisiones siempre abogan por la imposibilidad del descuento.

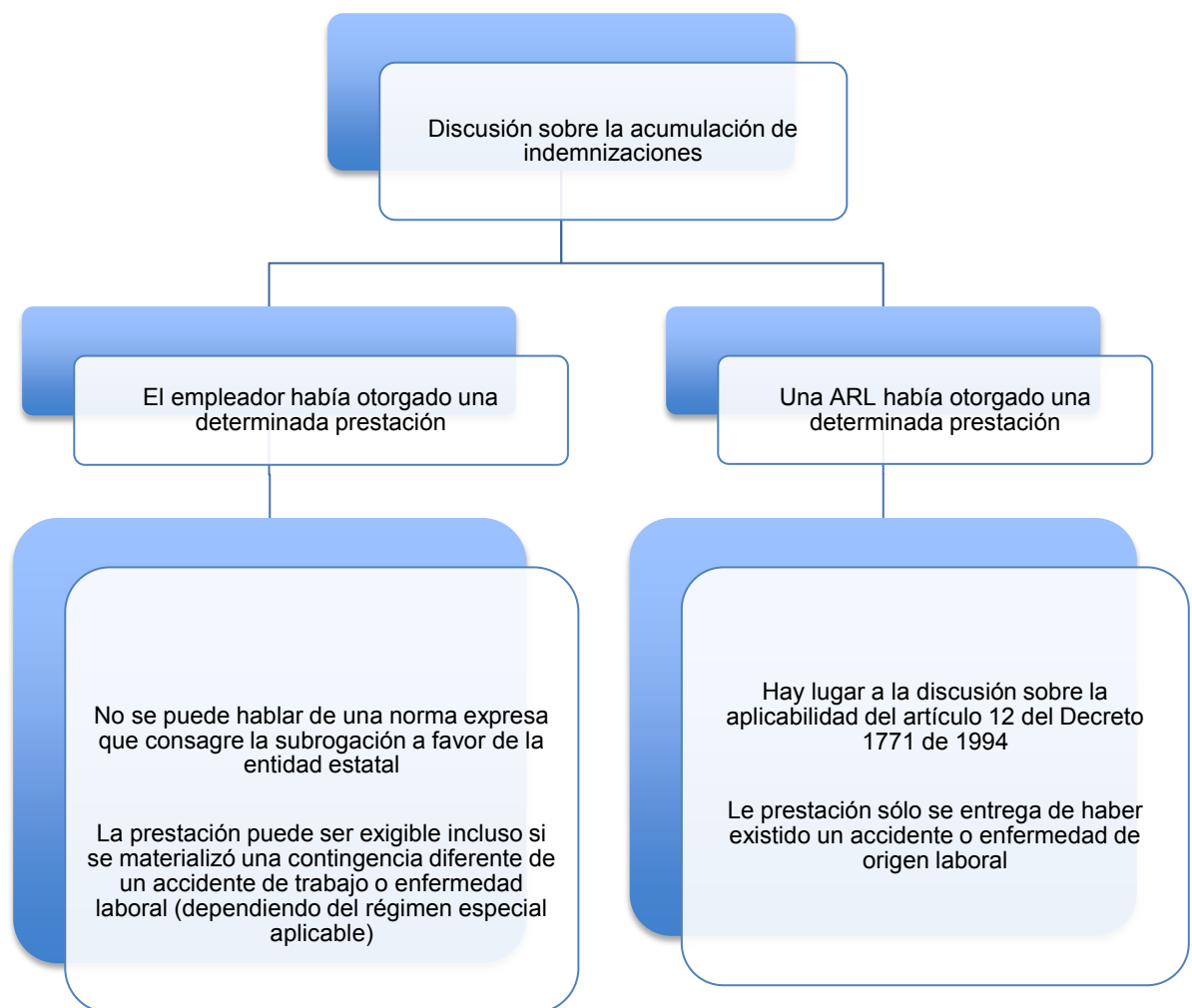
### 3.2. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA – SALA DE CASACIÓN CIVIL

En sentido estricto, al interior de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia no existe una línea jurisprudencial que trate de manera específica el tema de la acumulación de la indemnización plena de perjuicios de un sujeto declarado civilmente responsable con las prestaciones que otorga el sistema de riesgos laborales. Por este motivo, la línea jurisprudencial que se expone trata el tema de la acumulación de las indemnizaciones por responsabilidad civil con las prestaciones otorgadas por el sistema de seguridad social en general.

Adicionalmente, hay casos en que el empleador directamente ha pagado algunas de las prestaciones a que tiene derecho el trabajador (régimenes especiales como el de las fuerzas militares, por ejemplo), y hay otros casos en que quien paga es la entidad de seguridad social. Ambos casos han sido tratados por la Sala de la misma manera, aunque no debió haber sido así, porque los casos en que no es la prestadora de riesgos laborales la que paga, no existe la posibilidad de subrogación consagrada en el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, y no hay ni siquiera lugar a plantear las discusiones sobre la vigencia y aplicabilidad de la precitada norma. Adicionalmente, la diferencia es importante porque las prestaciones que se otorgan por parte del empleador al trabajador (por ejemplo en el caso de las fuerzas militares), pueden presentarse aún cuando no se haya

materializado una contingencia de origen laboral. La distinción a que se ha venido haciendo referencia se puede ver con claridad en la siguiente gráfica, y es aplicable tanto en la línea de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, como en el Consejo de Estado:

**Gráfica 2:** Discusión de la acumulación de indemnizaciones según quien otorgue las prestaciones.



A partir de 1991 únicamente fueron encontradas 6 sentencias que trataran la problemática, y cuyas decisiones se pueden graficar de la siguiente manera:

**Tabla 4:** Línea Jurisprudencial. Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Civil

Línea Jurisprudencial. Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Civil		
Acumulación	<p style="text-align: center;">*</p> <p>3 de septiembre de 1991 Rad. 2451 Empleador pagó prestaciones Carácter indemnizatorio</p> <p style="text-align: center;">*</p> <p>24 de junio de 1996 Rad.4662 Pensión de sobrevivientes de origen común Fuentes diferentes</p> <p style="text-align: center;">*</p> <p>22 de octubre de 1998 Rad. 4866 ARL paga pensión de invalidez Subrogación</p> <p style="text-align: center;">*</p> <p>4 de septiembre del 2000 Rad. 5260 Pensión de sobrevivientes de origen común Carácter indemnizatorio, Subrogación</p> <p style="text-align: center;">*</p> <p>9 de julio del 2010 Rad. 1999-2191 ARL paga pensión de sobrevivientes Reitera 22 de octubre de 1998</p>	No acumulación

	<p style="text-align: center;">*</p> <p style="text-align: center;">9 de julio del 2012 Rad. 2002-101 Las FFMM pagaron pensión de sobrevivientes Determinar el criterio según el caso concreto.</p>	
--	---	--

Dentro de la gráfica anterior es posible observar, en primer lugar, que se reconocen tanto sentencias en las que se han pagado prestaciones de origen común como prestaciones del sistema de riesgos laborales. Adicionalmente, la solución del caso concreto no varía, sea que quien haya pagado una prestación sea directamente el empleador, como en el caso de las Fuerzas Militares, o una entidad aseguradora de riesgos laborales, aunque como puede observarse (Gráfica 2) la diferencia es relevante.

Además, es importante resaltar que dentro de estas sentencias, por su poca cantidad, se hace muy complejo distinguir entre providencias que reiteran la posición jurisprudencial vigente, y otras consolidadoras de línea. Todas las sentencias, a excepción de la de radicado 1999-2191, proferida el 19 de diciembre del 2008 (Sentencia sustitutiva del 9 de julio del 2010)<sup>133</sup>, plantean una posición novedosa en cuanto a los criterios utilizados para determinar la posibilidad de acumular los diferentes pagos.

El punto de partida de la Sala, es la sentencia de radicado 2451, proferida el 3 de septiembre de 1991<sup>134</sup> (o el 9 de septiembre según es citada en la mayoría de las sentencias y en la revista Jurisprudencia y Doctrina de noviembre de 1991). En esta sentencia se discutía si ordenar la indemnización plena de perjuicios a cargo del civilmente responsable cuando la víctima había continuado trabajando para su

<sup>133</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de septiembre del 2008. Sentencia sustitutiva del 9 de julio del 2010. M.P. William Namén Vargas Rad. 11001-3103-035-1999-02191-01.

<sup>134</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 3 de septiembre de 1991. M.P. Pedro Lafont Pianetta Gaceta No. 2451



empleador y había recibido de éste todas las prestaciones asistenciales y económicas, implicaba incurrir en un enriquecimiento sin causa.

En esta ocasión la Sala determinó que había lugar al descuento, porque las prestaciones que se habían pagado por parte del empleador tenían carácter indemnizatorio. En la sentencia se señaló:

*Por lo tanto, como quiera que estos beneficios laborales, si bien tienen una fuente mediata distinta (la relación laboral) y una clasificación diferente como de prestaciones no económicas (v. gr. de asistencia de personas, auxilios médicos, farmacéuticos, hospitalaria, quirúrgica, etc.) y económicas (v. gr. auxilios monetarios salariales indemnizaciones individuales, etc.), que tienen su causa y finalidad en la protección social del trabajo a cargo del empleador para con el trabajador; no es menos cierto, que se trata de prestaciones funcionalmente indemnizatorias, de reparación inmediata que se le impone (por la utilidad que deriva de la labor) y cumple ese tercero, con, entre otras, las siguientes consecuencias: de una parte, que la víctima no puede acumular el cumplimiento de estas prestaciones laborales auténticamente indemnizatorias y el derecho a pedir al tercero victimario indemnización por el mismo concepto (v. gr. gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios, etc.), sino los no satisfechos (v. gr. partes salariales no recibidas, aumentos, etc.) y de la otra, que la entidad empleadora canceladora goza del derecho de repetición contra el victimario por el valor de las prestaciones laborales cumplidas. Todo lo cual se entiende sin perjuicio de que en forma inequívoca se trata de un cumplimiento a título de donación y no indemnizatorio, caso en el cual el derecho a la indemnización queda intacto contra el tercero<sup>135</sup>.*

Posteriormente, en sentencia del 24 de junio de 1996 (Rad. 4662), se discutió si había lugar al pago del lucro cesante a los familiares de un sujeto fallecido en un accidente de tránsito a quienes les había sido reconocida una pensión de sobrevivientes de origen común. En ese momento la Sala Civil de la Corte

---

<sup>135</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 3 de septiembre de 1991. M.P. Pedro Lafont Pianetta Gaceta No. 2451

Suprema de Justicia varió la posición sostenida en la sentencia anterior, para determinar que, como los pagos provenían de fuentes diferentes, no había lugar al descuento. En esa ocasión la Sala sostuvo:

*Tal cual aparece demostrado en el expediente, a la fecha del fallecimiento de Edelberto Niño Granados (27 de junio de 1986), éste era trabajador al servicio de la Electrificadora de Santander S.A., y, en consecuencia, al momento de su muerte, con las condiciones y el lleno de los requisitos legales para el efecto, su cónyuge Alix Marina Quiñonez y su hija Lixeth Karina Niño Quiñones, adquirieron el derecho a devengar la suma correspondiente a la pensión de sobrevivientes, que tiene su origen en la relación de índole laboral que ligaba al de cujus con la empresa mencionada y en su carácter de afiliado al Instituto de los Seguros Sociales, prestación ésta que es por completo independiente por la responsabilidad civil extracontractual cuya declaración solicitaron al iniciar este proceso contra los recurrentes en casación, como quiera que esta indemnización tiene origen en el accidente causado por el vehículo XK-5842, afiliado a la Empresa Copetrán Ltda., en desarrollo de una actividad peligrosa. De suerte que, siendo independiente la causa de estas prestaciones a favor de la viuda y la hija de Edelberto Niño Granados, mal podría aceptarse que la parte demandada pudiese descontar del monto de la indemnización por ella debida, el valor de las sumas pagadas a las demandantes en virtud de la relación laboral que su esposo y padre tenía con una empresa diferente y, como trabajador afiliado al ISS, pues, en tal caso, el responsable civilmente de una actividad peligrosa, a la postre resultaría obteniendo un beneficio de lo que las leyes de carácter laboral han previsto en beneficio del trabajador y su familia, sin que hubiere ninguna causa de orden jurídico ni norma expresa en contrario, y siendo ello así, a expensas de lo que paga el Seguro Social, se disminuiría el valor de la indemnización a cargo de la parte demandada, por el daño ocasionado a los damnificados por su actividad, es decir, que, vendría a lucrarse por el hecho de que la víctima del accidente estuviere afiliada al Instituto del Seguro Social. No hay pues, pese a lo afirmado en*

*el tercero de los cargos de la primera demanda de casación una doble indemnización.*<sup>136</sup>

La siguiente sentencia que discutió la problemática, proferida el 22 de octubre de 1998, analizó el problema de la acumulación en un caso en el que el demandante había recibido una pensión de invalidez por parte del Instituto de Seguros Sociales por haberse materializado una contingencia de origen laboral. En esta providencia, la Sala, con vocación de unificar la jurisprudencia existente en la materia, determinó que el criterio de la subrogación era el que debía ser tenido en cuenta para resolver la problemática. De acuerdo con lo anterior la Corporación sostuvo:

*Así las cosas, la improcedencia de la acumulación no puede fundarse en el argumento simple del resarcimiento de la víctima por el seguro y el carácter indemnizatorio del mismo, sino en la consagración legal de una acción de subrogación a favor del asegurador que pagó, pues de no existir dicha acción la acumulación no tendría reproche, porque el tercero no puede quedar impune y constituirse en el verdadero beneficiario del seguro, tal como lo predica la Corte en la sentencia de 24 de junio de 1996.*

*Por lo tanto, si el seguro social dispusiese de una acción subrogatoria especial contra el responsable del daño del trabajador, la acumulación de indemnizaciones no sería posible puesto que el responsable se vería abocado a indemnizar dos veces el mismo daño. En consecuencia, cada vez que la seguridad social indemnice a la víctima por los daños sufridos, será preciso averiguar si la legislación especial establece o no el derecho de subrogación, porque lo dispuesto por el Código de Comercio en materia de seguros, no es aplicable, por lo menos en el régimen actual, a los sistemas de seguridad social.*<sup>137</sup>

---

<sup>136</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de junio de 1996. M.P. Pedro Lafont Pianetta. Rad. 4662

<sup>137</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de octubre de 1998. M.P. José Fernando Ramírez Gómez Rad. 4866.

Adicionalmente, en dicha sentencia la Corte analizó el artículo 83 del decreto 3170 de 1964 (reglamento del I.S.S), y el artículo 12 del decreto 1771 de 1994, para establecer la imposibilidad de la subrogación, en los siguientes términos:

*La legislación que reglamenta las indemnizaciones por accidentes de trabajo que debe pagar el Instituto de Seguros Sociales (decreto 3170 de 1964), contiene el artículo 83, cuyo tenor es el siguiente: (...)*

*Del texto de la citada norma se colige el siguiente entendimiento:*

*a) El inciso primero legitima directamente al Instituto para pretender del tercero responsable del daño causado al trabajador beneficiario, el pago de la “indemnización común” plena, es decir, por toda clase de perjuicios derivados del hecho culposos imputados al demandado, quedando a su favor “el monto calculado de las prestaciones que el Instituto acordare por el accidente” y “debiendo entregar a los beneficiarios el saldo si lo hubiere”.*

*b) De conformidad con el inciso 2º. esa legitimación que la primera parte de la norma confiere al Instituto, “no es óbice para que la víctima o sus causahabientes instauren las acciones pertinentes en derecho común para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios”, caso en el cual del monto resarcitorio debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el Instituto. En otras palabras, esta segunda parte de la norma, en clara concordancia con la primera reconoce la legitimación de la víctima o sus causahabientes, para pretender la indemnización total, así se haya recibido del Instituto el pago de prestaciones en dinero con carácter indemnizatorio, pero con la obligación de “entregar” a éste (al Instituto), “el valor de las prestaciones en dinero pagadas”, que es lo que en los términos de la norma significa “descontarse el valor...”, o sea que dicha entidad queda con el derecho de reclamar de la víctima del accidente el reembolso del valor de las prestaciones que la entidad pagó por esa misma causa. (...)*

*De otro lado, resulta importante advertir que actualmente rige el decreto 1771 del 3 de agosto de 1994, que expresamente consagra en el artículo 12 la susodicha*

*subrogación que no aparecía prevista con claridad en el decreto 3170 de 1964. (...) Norma esta que por contener un texto idéntico al precedente, exige interpretación similar a la anteriormente propuesta, más si se tiene en cuenta que ni ésta, ni el artículo 83 del acuerdo 155 de 1963, regulan un sistema asegurativo de la responsabilidad en que pueda incurrir ese tercero a quien le es imputable el daño, razón por la cual carece de fundamento su pretensión destinada a obtener que las prestaciones económicas pagadas por el Seguro Social le sean descontadas del valor de la indemnización ordinaria por perjuicios que deba asumir de acuerdo con la ley. (...)*

*7. Examinado en torno a la anterior perspectiva hermenéutica el juicio del Tribunal, lógicamente se concluye que este anduvo errado cuando dispuso el descuento de las sumas pagadas a título de pensión de invalidez por el Instituto de Seguros Sociales, porque como ya se analizó, la condena a los demandados debió ser por la totalidad del perjuicio, quedando el ente público con el crédito frente al demandante por el valor de las sumas pagadas en dinero como prestación indemnizatoria.<sup>138</sup>*

La sentencia proferida el 4 de septiembre del 2000, de radicado 5260, reiteró la posición sostenida en la sentencia del 22 de octubre de 1998, pero la interpretó de tal forma que estableció que lo relevante para determinar la existencia o no de norma subrogatoria es el carácter indemnizatorio de una determinada prestación. Esta sentencia sostuvo:

*(...) es indispensable definir si la pensión de sobrevivientes tiene carácter indemnizatorio, por ser ése el supuesto en el que se asienta la subrogación. En tal orden de ideas, para la Corte es claro que la indicada prestación social de carácter económico, no tiene aquella connotación, (...).*

*Como inferencia lógica de la ausencia de la función indemnizatoria del daño, resultante de la pérdida de la vida en la pensión de sobrevivientes, no hay posibilidad jurídica de que el pago que por ese concepto hace la seguridad social,*

---

<sup>138</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de octubre de 1998. M.P. José Fernando Ramírez Gómez Rad. 4866.

*dé lugar a la subrogación por la cual se averigua, lo que permite entender que el fallador desacertó cuando estimó que la pensión era de naturaleza indemnizatoria, y por ello aseveró, equivocadamente, la imposibilidad de la acumulación con la indemnización a cargo del directo causante del hecho dañoso, cuando hizo la estimación del lucro cesante.*<sup>139</sup>

El 9 de julio del 2010<sup>140</sup>, en sede de sentencia sustitutiva, se profirió la única sentencia meramente reiteradora de jurisprudencia dentro de la línea graficada. Dicha providencia se remitió a la sentencia proferida el 22 de octubre de 1998, para determinar que en un caso en el que se había otorgado al demandante una pensión de sobreviviente de origen laboral, existía el derecho para la víctima de acumular dicha prestación con la indemnización por concepto de lucro cesante.

Por último, la providencia más reciente que se ocupó de la problemática de la acumulación de la indemnización plena de perjuicios derivada de la responsabilidad civil y de las prestaciones otorgadas por el sistema general de seguridad social, es la sentencia del 9 de julio del 2012, con radicado 2002-101<sup>141</sup> en la cual se discutió el tema de la acumulación en un caso en que las demandantes reciben pensión de sobrevivientes que otorgan las Fuerzas Militares.

En esta sentencia la Corte tuvo en cuenta diferentes criterios –la compensatio lucri cum damno y la causalidad adecuada, el carácter indemnizatorio de las prestaciones, la diversidad de títulos jurídicos de que emana cada uno de los pagos, y la facultad de subrogación– para determinar que la solución al problema no permite acudir a un único criterio, sino de determinar el que debe ser utilizado en cada caso concreto. Dicha sentencia se pronunció en los siguientes términos:

---

<sup>139</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, 4 de septiembre de 2000. M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles. Rad. 5260.

<sup>140</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de septiembre del 2008. Sentencia sustitutiva del 9 de julio del 2010. M.P. William Namén Vargas Rad. 11001-3103-035-1999-02191-01.

<sup>141</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de julio del 2012. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Rad. 11001-3103-006-2002-00101-01 (Sentencia Sustitutiva)

*A fin de establecer una pauta para la procedencia o no de la acumulación, algunos autores han sostenido que la imputación o computación de beneficios -según ha sido denominada la figura- sólo puede hacerse extensiva a las situaciones que se deriven directamente del hecho dañoso, o sea que se acude al criterio de la “causación adecuada”. De conformidad con esta teoría, ha de prescindirse de todos aquellos beneficios que, en un cálculo de probabilidades, sean tan ajenos al suceso dañoso, que no haya más remedio que considerarlos puramente fortuitos. (...)*

*Pueden ser, entonces, muchas las situaciones en las que la misma causa adecuada da origen a indemnizaciones o retribuciones de cualquier especie que son compatibles o acumulables. De ahí que esta teoría no sea lo bastante clara para resolver el problema que se examina.*

*Otro criterio que en ocasiones ha adoptado la jurisprudencia de esta Corte, tiene su origen en el carácter resarcitorio de la indemnización, que permitiría la acumulación sólo con prestaciones que no compartan esa misma condición. (...)*

*En ese orden, es evidente que cuando se trata de prestaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales, tales como los gastos médicos, farmacéuticos y hospitalarios, que tienen carácter indemnizatorio, un pago doble de los mismos resulta inadmisibles dado que lo contrario repudiaría al estricto sentido de la equidad. (...)*

*A pesar de la contundencia del anterior criterio, el mismo no puede ser admitido sin miramientos en todos los casos, pues suele presentarse la situación de que a pesar de estar frente a prestaciones de carácter indemnizatorio, las mismas sean, sin embargo, acumulables.*

*Así, tanto la legislación como la jurisprudencia nacionales han considerado que las prestaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales tienen un sustrato indemnizatorio; lo cual se halla en consonancia con el origen histórico de esos beneficios. No obstante, se ha aceptado su concurrencia con la indemnización*

*originada en la responsabilidad civil, atendiendo a un enfoque distinto del que se viene comentando. (...)*

*La diversidad de títulos a partir de los cuales emana la prestación es, entonces, otro de los criterios que permitiría dilucidar el dilema de la concurrencia de las indemnizaciones. Sin embargo, aunque tal tesis resulte eficaz frente a algunos casos, no es una razón que pueda esgrimirse de modo generalizado, pues ya se explicó que en los seguros de daños es imposible la acumulación de indemnizaciones aunque ellas provengan de distintas fuentes representadas en varios contratos.*

*Finalmente, ante la insuficiencia de cada uno de esos enfoques para erigirse a sí mismo en parámetro absoluto para la determinación de la concurrencia de indemnizaciones, ha tomado fuerza la explicación de que, simplemente, es la facultad de subrogación la pauta que debe seguirse para resolver la dificultad; de tal suerte que si la ley concede ese derecho al tercero que paga la indemnización, la víctima no podrá acumular las prestaciones, en tanto que si el primero carece de esa atribución, entonces nada impedirá que la segunda obtenga doble retribución. (...)*

*No hay que buscar, por tanto, más allá de las circunstancias específicas que cada caso plantee, un concepto genérico que englobe eventos que no comparten los mismos fundamentos fácticos ni jurídicos, pues semejante empresa antes que resolver las dificultades las multiplica, tal como ha quedado demostrado con el develamiento de las anomalías o inconsistencias que se encuentran presentes en cada uno de los enfoques teóricos que se han explicado.<sup>142</sup>*

Y en el caso que se analizaba en esa oportunidad, la Sala resolvió:

*El caso que se analiza, concretamente, comparte rasgos comunes con la controversia que se resolvió en la sentencia de 24 de junio de 1996, en donde la Corte concluyó que una pensión de sobreviviente es independiente de la*

---

<sup>142</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de julio del 2012. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Rad. 11001-3103-006-2002-00101-01 (Sentencia Sustitutiva)



*indemnización derivada de la responsabilidad civil y, por tanto, acumulable con ésta, porque ambas prestaciones derivan de títulos o relaciones jurídicas distintos. (Exp. 4662) (...)*

*Los beneficios pensionales tienen su origen en los aportes realizados para cada uno de esos riesgos, o en el tiempo de servicios, según sea el caso; y por lo tanto son ajenos a cualquier circunstancia que resulte extraña al respectivo sistema; de suerte que al no haber ningún factor de conexión entre ellos y la actividad de un tercero, no podría estatuir la ley, como en efecto no lo hace, la facultad de repetir en contra de éste, toda vez que esas obligaciones se radican de modo exclusivo en la entidad aseguradora y a nadie más pueden transmitírsele<sup>143</sup>.*

Del análisis realizado se pueden sacar las siguientes conclusiones: i) no existe una línea que se pueda denominar como sólida entorno al tema de la *acumulación de indemnizaciones*; ii) la Sala no distingue aquellos eventos en que la ARL a la que se encuentra afiliada una víctima directa paga una determinada prestación, de otros en que tal prestación se paga directamente por el empleador, o por el sistema general de pensiones, lo que no ha permitido realizar un análisis profundo desde el punto de vista de la subrogación; iii) en la sentencia del 22 de octubre de 1998 (oportunidad en la que la Sala analizó la manera en que debe interpretarse el artículo 12 del decreto 1771 de 1994) se concluyó que la existencia de tal artículo no obsta para que el responsable deba pagar la indemnización completa, sin descontar las sumas que la víctima haya percibido por parte de la ARL; y iv) la posición actual de la Sala frente a la problemática es el planteamiento de una gran cantidad de criterios, que no pueden ser aplicados conjuntamente, sino que deben ser analizados de cara al caso concreto.

---

<sup>143</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de julio del 2012. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Rad. 11001-3103-006-2002-00101-01 (Sentencia Sustitutiva)

### 3.3. CONSEJO DE ESTADO

El Consejo de Estado es quizás la Corporación que más ha variado la jurisprudencia al tratar la problemática de la acumulación de indemnizaciones derivadas de la responsabilidad del Estado y de las prestaciones que otorga el sistema de riesgos laborales.

En la mayoría de los casos revisados, la entidad pública en su calidad de empleador es el demandado, y los demandantes pretenden que se profiera una decisión que declare a alguna entidad estatal como administrativamente responsable, y que sea condenada a indemnizar los perjuicios emanados de la existencia de una falla en el servicio o de haberse causado un daño antijurídico derivado de un riesgo que supera las cargas que el ciudadano debe asumir.

Es importante señalar que dentro de las sentencias revisadas se plantea en gran medida la discusión sobre la jurisdicción competente cuando un trabajador oficial demanda para que se condene al empleador –entidad pública– a indemnizarle plenamente los perjuicios causados al materializarse una contingencia de origen laboral, (si se debe demandar ante la jurisdicción laboral o si es posible acudir a la reparación directa), y se debate, en el marco de la acción de reparación directa, el diferente tratamiento que debe darse a los casos según el demandante sea el trabajador o sus familiares. Además, el Consejo de Estado se ha ocupado de discutir extensamente sobre la posibilidad de establecer la responsabilidad por falla en el servicio o por un riesgo excepcional. El estudio de estas discusiones excede los objetivos de este trabajo, pues dichas diferencias no son relevantes en el momento de determinar la manera en que se ha resuelto la problemática de la denominada *acumulación de indemnizaciones*.

Adicionalmente, y esta diferencia si es relevante para los fines de este trabajo, hay casos en que el empleador directamente ha pagado algunas de las prestaciones a

que tiene derecho el trabajador (régímenes especiales como el de las fuerzas militares, por ejemplo), y hay otros casos en que quien paga es la entidad de seguridad social –Cajanal, o ARP–. Sobre la importancia de esta diferencia se remite al lector al apartado 3.2. de este escrito, y especialmente a la Gráfica 2.

La línea jurisprudencial de esta Corporación en cuanto al problema planteado, teniendo en cuenta tanto las sentencias que tratan de prestaciones pagadas directamente por el empleador como de prestaciones pagadas por la ARL, se puede graficar de la siguiente manera:

**Tabla 5:** Línea Jurisprudencial. Consejo de Estado.

	Línea Jurisprudencial. Consejo de Estado	
Acumulación	<p>* 12 de sept. de 1991 Rad. 6572 Empleador paga prestación Causas diferentes</p> <p>* 9 de febrero de 1995 Rad. 9550 Cajanal paga subsidio por incapacidad temporal Causas y universos económicos diferentes</p>	No acumulación
	<p>* 3 de octubre del 2002 Rad. 14207 ARP paga prestación TERCERO RESP. Depende de norma de subrogación</p>	<p>* 3 de octubre del 2002 Rad. 14207 ARP paga prestación CULPA PATRONAL Carácter indemnizatorio y similitudes con seguro de resp. civil</p>

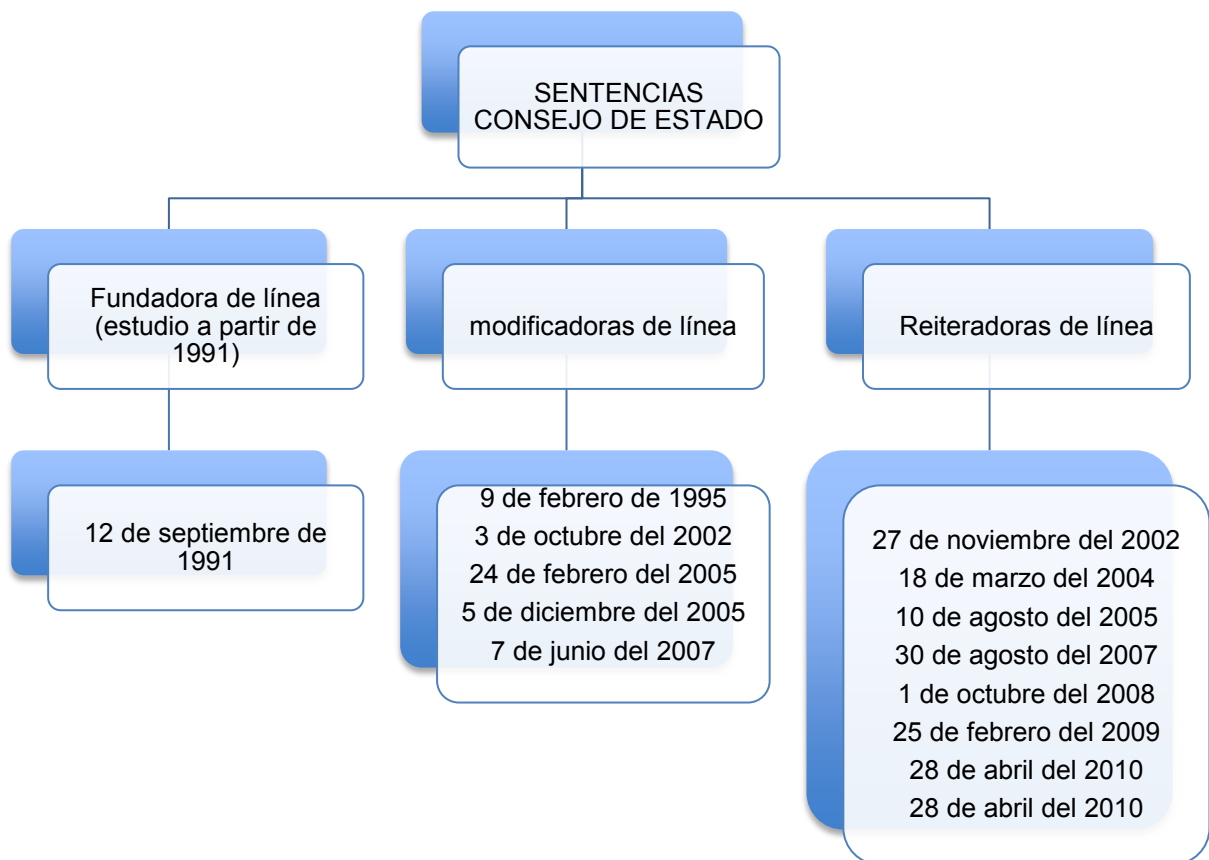
	<p style="text-align: right;">*</p> <p>27 de nov. del 2002 Rad. 13090 Empleador paga compensación por muerte Reitera jurisprudencia</p> <p style="text-align: right;">*</p> <p>18 de marzo del 2004 Rad. 14338 Empleador dice haber pagado prestación (FFMM) Reitera Jurisprudencia</p> <p style="text-align: center;">*</p> <p>14 de julio del 2004 Rad. 14308 Sin información sobre quién hace el pago Carácter indemnizatorio</p> <p style="text-align: center;">*</p> <p>24 de febrero del 2005 Rad. 15125 Sin información sobre quién hace el pago Fuentes diferentes</p> <p style="text-align: center;">*</p> <p>10 de agosto del 2005 Rad. 16205 empleador (FFMM) paga pensión de invalidez Causas diferentes</p>	
--	--	--

	<p>5 de diciembre del 2005 Rad. 14731 ARP paga prestación Reitera posición de sentencia del 3 de octubre del 2002</p> <p>*</p>	
	<p>*</p> <p>7 de junio del 2007 Rad. 15722 Sin información sobre quién hace el pago Relaciones jurídicas, responsabilidades y orígenes distintos</p> <p>*</p> <p>30 de agosto del 2007 Rad. 15724 empleador (FFMM) paga pensión Fuentes diferentes, carácter indemnizatorio y no subrogación</p> <p>*</p>	
	<p>Salvamento de voto C. Enrique Gil Botero Fuentes diferentes, compensatio lucri, carácter indemnizatorio subrogación</p> <p>*</p> <p>1 de octubre del 2008 Rad. 16322 empleador (FFMM) paga prestación Causas diferentes</p>	<p>24 de abril del 2008 Rad. 15981 ARP paga prestación CULPA PATRONAL En materia laboral (Obiter Dictum)</p> <p>*</p>

	<p>*</p> <p>25 de febrero del 2009</p> <p>Rad. 15793</p> <p>Empleador (FFMM) paga prestación</p> <p>Causas diferentes</p>	
	<p>*</p> <p>28 de abril del 2010</p> <p>Rad. 1994-9971</p> <p>Empleador paga prestación</p> <p>Causas diferentes, carácter indemnizatorio, subrogación</p>	
	<p>*</p> <p>28 de abril del 2010</p> <p>Rad. 1996-3096</p> <p>Empleador paga prestación</p> <p>Causas diferentes, carácter indemnizatorio, subrogación</p>	

Adicionalmente, en la línea graficada se pueden encontrar diferentes tipos de sentencias, así:

**Gráfica 3:** Importancia de las sentencias dentro de la línea jurisprudencial del Consejo de Estado



La primera sentencia que, a partir de 1991, trata el tema de la *acumulación de indemnizaciones*, es la proferida el 12 de septiembre de ese año, de radicado 6572. En esta providencia una empleada del Municipio de Medellín y sus familiares demandaron a la Nación-Ejército Nacional, pretendiendo obtener la reparación total de los perjuicios sufridos por unos disparos que le habían propinado a la trabajadora. El Municipio había cubierto las prestaciones asistenciales a que tenía derecho la víctima directa, y ésta había seguido

laborando para él, por lo que la parte demandada discutía que no podía condenarse a pagar ninguna suma a título de perjuicios materiales. En esa oportunidad la Corporación sostuvo que era procedente la acumulación, argumentando lo siguiente:

*C) La Sala revocará la sentencia, en cuanto denegó el pago del daño emergente, (...) pues encuentra que el pago que por tal monto hizo el Municipio de Medellín (C. 1, fol. 124), tiene una causa o título que no importa una reparación o indemnización del daño realmente irrogado. Siendo la Dra. ROSA NELLY LONDOÑO MARTINEZ, funcionará a su servicio, como Inspectora Municipal de Policía, la atención hospitalaria, ortopédica, de fisioterapia y psiquiatría que le prestó, obedeció a una de las compensaciones que el Municipio debe otorgar a sus empleados en retribución de sus servicios, y que como lo enseña el Profesor Arturo Alessandri Rodríguez..... las más de las veces contribuye a formar las del sueldo o de la remuneración del empleado o funcionario. Todo esto demuestra que no son propiamente una reparación del daño sufrido por la víctima" (De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil. Imprenta Universal. 1987, Tomo 11, pag 586.)<sup>144</sup>*

Posteriormente se profirió la sentencia del 9 de febrero del 1995<sup>145</sup>, mediante la cual se acogió el criterio de las fuentes diversas para asumir que era procedente la acumulación de indemnizaciones con las prestaciones que se otorgaran por la materialización de una contingencia de origen laboral. En esta ocasión se sostuvo que por la existencia de diferentes fuentes que daban origen a cada uno de los pagos, uno por parte del responsable (Nación) y otro por parte de la Caja Nacional de Provisión Social –quien pagó una incapacidad equivalente a 14 meses de sueldo–, era procedente la acumulación. La sentencia señaló como fundamento, además de las causas distintas, los universos económicos disímiles de que provenía cada uno de los pagos.

---

<sup>144</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 12 de septiembre de 1991. C.P. Julio Cesar Uribe Acosta. Rad. 6572

<sup>145</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero de 1995. C.P. Julio César Uribe Acosta. Rad. 9550



Con posterioridad, en la sentencia de radicado 14207, proferida el 3 de octubre del 2002, el Consejo de Estado modificó la jurisprudencia vigente. Dicha sentencia, luego de hacer un recuento de la problemática cuando existía culpa patronal y cuando había un tercero civilmente responsable, planteó su posición frente a cada uno de los eventos, estableciendo:

*Si a través de la seguridad social el patrono traslada los riesgos a otra entidad (ISS, Cajanal o administradora de riesgos profesionales) las prestaciones derivadas del accidente de trabajo tienen una naturaleza indemnizatoria y por lo tanto, en el evento de que exista culpa suficientemente comprobada del patrono constituyen un pago parcial de la indemnización plena a cargo de éste, independientemente de que le asista o no el derecho de subrogación frente al patrono, cosa que por lo demás no resultaría lógica, en tanto el asegurador se estaría volviendo contra el asegurado en un seguro de responsabilidad civil. (...)*

*Cosa distinta sucede cuando el hecho causante del daño es imputable a un tercero distinto del patrono o empleador. En este caso, el único mecanismo que impediría a la víctima acumular la indemnización de perjuicios con las prestaciones obtenidas de la seguridad social sería la subrogación que la ley-no un decreto reglamentario ni un acuerdo expedido por la junta directiva de una entidad publica de la seguridad social, como ha sucedido hasta ahora-otorgara a ésta para que sustituyera a la víctima y pudiera obtener del responsable el reembolso de lo pagado.<sup>146</sup>*

Y en el caso concreto la Sala determinó la improcedencia de la acumulación, con base en los siguientes argumentos:

*Como en el caso concreto el hecho dañoso es imputable a la Nación (Fiscalía General) y esa entidad había trasladado los riesgos que pudieran sufrir sus funcionarios como consecuencia de un accidente de trabajo a CAJANAL, la*

---

<sup>146</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre del 2002. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad.19001-23-31-000-1995-3007-01 (14207)

*pensión de invalidez que ésta le reconoció al señor Juan Manuel Caro González, en su condición de empleado de la Fiscalía, constituye pago parcial de la indemnización plena a cargo de la última y por lo tanto, tienen naturaleza indemnizatoria.*<sup>147</sup>

En esa ocasión la Consejera María Elena Giraldo aclaró su voto para señalar que lo único que hacía el Consejo de Estado era aplicar los principios comunes del pago por terceros y la subrogación, consagrados en el ordenamiento jurídico.

La posición planteada en la sentencia del 3 de octubre del 2002 fue recogida por las sentencias del 27 de noviembre del 2002<sup>148</sup> y del 18 de marzo del 2004<sup>149</sup> (ambos casos consagraban el supuesto en el que el empleador decía haber pagado una determinada prestación). En el fallo proferido el 27 de noviembre del 2002, el Consejo de Estado decidió descontar, del daño moral reconocido a los padres de un soldado fallecido, las sumas que éstos habían recibido de la Nación, a título de compensación por muerte del hijo. En esa oportunidad la Corporación concluyó lo siguiente:

*(...) la indemnización plena comprende desde la óptica de la víctima (Agente del Estado lesionado o beneficiarios, según su caso), que todo daño antijurídico causado causalmente con ocasión de la conducta Estatal, deba satisfacerse totalmente. Ello implica que si la víctima directa o la indirecta ha recibido suma que es imputable al hecho de lesión o de muerte, según el caso, la misma debe tenerse como pago o total o parcial, según el caso, del derecho indemnizatorio.*<sup>150</sup>

---

<sup>147</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre del 2002. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad.19001-23-31-000-1995-3007-01 (14207)

<sup>148</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de noviembre de 2002. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 52001-23-31-000-1994-3090-01 (13090)

<sup>149</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 18 de marzo de 2004. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 76001-23-31-000-1994-00069-01 (14338)

<sup>150</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de noviembre de 2002. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 52001-23-31-000-1994-3090-01 (13090)

La sentencia proferida el 18 de marzo del 2004, por su parte, estableció que la reducción sería procedente, pero del monto de los perjuicios materiales:

*En el caso, las lesiones ocurrieron sin que jugara ningún papel el riesgo asumido y, en consecuencia, aún si dicho Agente hubiese recibido indemnización a forfait ésta no habría excluido la indemnización plena, pues el pago recibido sería deducible de los perjuicios materiales. En este caso el punto concreto no es pertinente a la causa que se juzga debido a que el Tribunal denegó la solicitud de condena por perjuicios materiales y sólo condenó por los morales; además la Nación es apelante único, situación que no permite que el Ad Quem entre a estudiar la decisión que le fue favorable al demandado.*<sup>151</sup>

Nuevamente en el 2004 se presentó un cambio de la posición jurisprudencial vigente. En este caso el Consejo de Estado determinó que, como las normas que otorgaban prestaciones a los soldados conscriptos no tenían carácter indemnizatorio, era procedente la acumulación. Así, la Corporación señaló:

*(...) la Sala considera que los beneficios establecidos por el legislador a favor de los conscriptos no tienen carácter indemnizatorio, pues con ellos no se pretende reparar el daño causado. Prueba de lo anterior es el hecho de que los beneficios mencionados se otorgan sin importar si el daño causado es imputable al Estado o no. (...) Así las cosas, es claro que los pagos efectuados por la Nación en cumplimiento de las normas mencionadas no tiene carácter indemnizatorio, en estricto sentido, por lo cual, en el evento de existir una persona responsable del daño causado, y aun si esta es la propia administración, subsistirá la obligación de resarcirlo. (...)*

*Por ello, este pago se puede acumular a la indemnización de los perjuicios imputables al Estado. (...) En otras palabras, el hecho de que por causa de otra obligación legal, establecida por el legislador, se entregue a la víctima una compensación por los perjuicios sufridos, dicho pago no significa la reparación del*

---

<sup>151</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 18 de marzo de 2004. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 76001-23-31-000-1994-00069-01 (14338)

*daño, pues, se reitera, solo tiene carácter indemnizatorio (sic) la prestación que exige la obligación de resarcir que solo está en cabeza del responsable. (...) <sup>152</sup>*

Esta solución fue acogida también en sentencia de radicado 15125, proferida por la Corporación el 24 de febrero del 2005<sup>153</sup>, pero esta vez, la acumulación se motivó en las diferentes causas que daban origen a uno y otro pago, y no en la ausencia de carácter indemnizatorio de las prestaciones otorgadas al materializarse una contingencia de origen laboral, citando, entre otras, la sentencia del 7 de febrero de 1995. El mismo criterio y la misma solución se presentaron en la sentencia del 10 de agosto del 2005<sup>154</sup>.

Por su parte, el 5 de diciembre del 2005 se profirió una nueva sentencia por medio de la cual la Corporación abordó el problema de la *acumulación de indemnizaciones*. En esta oportunidad la ARL había sufragado los gastos de un accidente, y con posterioridad la víctima directa y sus familiares pretendieron la indemnización plena por parte del Estado. El Consejo de Estado determinó que no podían acumularse los pagos. Para sustentar esta posición la Corporación se basó en lo dicho en la sentencia proferida por la Sala el 3 de octubre del 2002.<sup>155</sup>

Esta postura no fue mantenida por la Corporación, ya que en sentencia del 7 de junio del 2007, con radicado 15722 se sostuvo nuevamente la posición que permitía la acumulación de los pagos, con los siguientes argumentos:

*En relación con el daño emergente y el lucro cesante reclamado por los demandantes y que fue negado por el Tribunal por considerar que estos conceptos fueron reconocidos dentro de la esfera de la responsabilidad derivada del contrato*

---

<sup>152</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 14 de julio de 2004. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Rad. 14.308.

<sup>153</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 24 de febrero del 2005. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. 15125.

<sup>154</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.. Sentencia del 10 de agosto del 2005. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 85001-23-31-000-1997-00448-01 (16205)

<sup>155</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 5 de diciembre de 2005. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Rad. 14731.

*laboral y de la convención, reitera la Sala que, cuando se reconocen a favor de los familiares del trabajador fallecido los derechos laborales de carácter patrimonial, dichas sumas de dinero emanan de una relación jurídica de la cual se deriva una responsabilidad distinta a la que aquí se reclama y cuyo origen es la vinculación laboral, razón por la cual no existe justificación alguna para ordenar el descuento del valor de las prestaciones reconocidas a la madre o a otros causahabientes del monto de la indemnización que se llegare a reconocer por el ejercicio de la acción de reparación directa por las razones anteriormente expuestas, de manera que la compensación no sería procedente.<sup>156</sup>*

En la sentencia del 30 de agosto del 2007 se reiteró la posición anterior, aclarando que en el caso que se discutía –en el cual las Fuerzas Militares habían pagado una indemnización por pérdida de la capacidad laboral a la víctima directa– además de la noción de causas diferentes que daban origen a cada uno de los pagos y el carácter indemnizatorio, era importante tener en cuenta la imposibilidad de la subrogación. En este caso la Corporación señaló:

*Al respecto, reitera la Sala su posición según la cual, para determinar si es procedente la acumulación de beneficios, es pertinente revisar las causas jurídicas de los mismos y, si existe o no la posibilidad de subrogación de quien pagó, en la acción que tenía la víctima frente al autor del daño y, respecto de las causas de los beneficios. Se debe tener presente además, que la única prestación que tiene carácter indemnizatorio es aquella que extingue la obligación del responsable: (...)*

*En el caso en estudio, el soldado Wilton Pérez Flórez recibió de la Nación- Ministerio de Defensa, un pago por concepto de indemnización por disminución de su capacidad laboral, de conformidad con los Decretos 2728 de 1968 y 1211 de 1990. De lo cual se tiene que la causa jurídica por la cual se llevó a cabo dicho pago son los mencionados Decretos y, aquella que justifica el reconocimiento de una indemnización a cargo de la Nación en el presente proceso, es el daño antijurídico que se le imputa a título de falla del servicio, por ser además la única prestación que tiene la virtud de extinguir la obligación reparatoria a su cargo.*

---

<sup>156</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 7 de junio de 2007. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 15722.

*Por lo tanto, el referido pago no es incompatible con la indemnización de perjuicios que se liquidará en la presente providencia, en consecuencia, no hay lugar a descuento ni tampoco a subrogación.*<sup>157</sup>

Adicionalmente, el 24 de abril del 2008 se profirió un fallo en el cual, si bien el Consejo de Estado no discutió a profundidad el tema de la acumulación de indemnizaciones, en un párrafo de la sentencia la Sala señaló que en materia laboral la norma era clara en permitir que el empleador culpable descontara del monto a indemnizar las sumas pagadas en virtud de una acción de reparación directa. La importancia de dicha providencia radica en los argumentos con los cuales el Consejero Enrique Gil Botero salvó su voto, a saber:

*Disiento respetuosamente de la consideración realizada por la Sala, en atención a que los argumentos del proveído citado, que debe precisarse: son obiter dictum respecto de la decisión final, incurren en una contradicción insalvable, en tanto se afirma que la indemnización laboral es descontable de las sumas que hubieren sido reconocidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo por la configuración de un daño antijurídico imputable a una entidad pública, en la que concurre también la calidad de empleador, esto es, es deducir del monto de las prestaciones sociales el valor reconocido cuando el daño se produce por culpa del patrono y el daño antijurídico imputable a la entidad estatal, sin tener en cuenta que la fuente de la obligación es diferente. En mi criterio, tan equívoco razonamiento resulta de aplicar parcialmente los requisitos para la configuración de las fuentes del daño y desconocer, de manera absoluta, la figura de la acumulación de indemnizaciones o compensatio lucri cum damno.*

*(...) “Nosotros preferimos la tesis que admite la acumulación en todos los casos, porque ella se funda en un elemento esencial e invariable como es el de la conexión causal entre el acto ilícito y el beneficio. Es evidente que éste no tiene como causa necesaria ese acto, sino que se funda en elementos diversos:*

---

<sup>157</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 30 de agosto de 2007. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. 15724.

*retenciones de los sueldos, años de servicio, etc.. el acto ilícito no es más que la “ocasión” fortuita en que se cumple la condición (invalidez, muerte) a que se halla subordinado el beneficio, el cual habría podido nacer en cualquier otra circunstancia: no puede decirse, por tanto, que acto ilícito sea la “causa de la jubilación o pensión”.*<sup>158</sup>

Las sentencias siguientes, proferidas el 1 de octubre del 2008<sup>159</sup>, el 25 de febrero del 2009<sup>160</sup> y las dos sentencias proferidas el 28 de abril del 2010<sup>161</sup>, que tratan la problemática que ocupa a este trabajo, optan por establecer la opción de la acumulación, basándose principalmente en el criterio de las causas jurídicas diferentes. En los cuatro casos es el empleador el que paga la prestación social, de acuerdo con un régimen especial que aplica a los trabajadores que aparecen como víctimas directas.

Por su relevancia se cita la conclusión a la que llega la sentencia de radicado 13001-23-31-000-1994-09971-01, proferida el 28 de abril del 2010, en la cual el Consejo de Estado determinó que no era procedente el descuento, ni tampoco la subrogación, al no estar prevista legalmente. La providencia expresa que: *“el aludido reconocimiento no es incompatible con la indemnización de perjuicios que se liquidará en la presente providencia; en consecuencia, no hay lugar a descuento alguno por este concepto ni tampoco a subrogación, por cuanto esta última no está prevista legalmente -art. 1096 C. de Comercio-.”*<sup>162</sup>

---

<sup>158</sup> Salvamento de voto de Enrique Gil Botero en: Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 24 de abril de 2008. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. 15981.

<sup>159</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 1 de octubre del 2008. C.P. Myriam Guerrero de Escobar. Rad. 76001-23-31-000-1995-01579-01(16322)

<sup>160</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 25 de febrero del 2009. C.P. Myriam Guerrero de Escobar. Rad. 18001-23-31-000-1995-05743-01(15793)

<sup>161</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril del 2010. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 13001-23-31-000-1994-09971-01, y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril del 2010. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 25000-23-26-000-1996-03096-01

<sup>162</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril del 2010. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 13001-23-31-000-1994-09971-01

De las sentencias expuestas se puede concluir, en primer lugar, que el Consejo de Estado, en la mayoría de las providencias recientes, opta por establecer la procedencia de la acumulación, teniendo como punto de partida las causas jurídicas que dan origen a la misma. No profundiza la Corporación en diferencias relevantes, tales como el tratamiento diverso que debe darse al caso cuando existe una prestación pagada por parte de la ARL o una pagada por el empleador en virtud de la materialización de un riesgo laboral, o cuando se paga una prestación que sería otorgada aún en el caso de haberse presentado una lesión o muerte por causas ajenas al servicio prestado.



#### 4. ANÁLISIS CRÍTICO SOBRE LA MANERA EN QUE SE HA SOLUCIONADO LA *PROBLEMÁTICA DE LA ACUMULACIÓN DE INDEMNIZACIONES*

En este capítulo se pretende plantear una crítica a las soluciones acogidas por la jurisprudencia con respecto a la *problemática de la acumulación de indemnizaciones*, a partir de las consideraciones que ha realizado la doctrina que se ha ocupado de la materia, y desde una comprensión de los principios del derecho que entran en pugna cuando se suscita la discusión.

Así, se tendrán en cuenta varios aspectos sobre los cuales se considera relevante hacer referencia, tales como los criterios que han sido utilizados para dar solución al problema planteado, el debate sobre la vigencia y aplicabilidad de una norma de subrogación a favor de la ARL que paga una determinada prestación, y los momentos en los cuales se puede generar el problema objeto de análisis. Adicionalmente, se plantearán algunas críticas relacionadas con la posición asumida por la jurisprudencia nacional (tanto la acogida en la Sala Laboral, como la asumida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, y al interior del Consejo de Estado), mostrando las inconsistencias y contradicciones a las que lleva la aplicación de las tesis en las que en diversas oportunidades la misma se ha apoyado.

##### 4.1. ANÁLISIS DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS PARA RESOLVER LA PROBLEMÁTICA DE LA ACUMULACIÓN DE INDEMNIZACIONES

En los capítulos anteriores se expusieron los criterios acogidos para resolver el problema jurídico abordado, que se pueden agrupar de la siguiente manera: i) el carácter indemnizatorio de las prestaciones que otorgan las ARL, ii) las causas o títulos que dan origen a cada uno de los pagos, iii) la existencia de una norma especial de subrogación, y iv) la relación de los pagos que hace la ARL con los

pagos hechos en virtud de un seguro de daños (en contraposición al seguro de personas), o de responsabilidad civil específicamente. Adicionalmente, la jurisprudencia menciona otros motivos para decidir sobre la procedencia o improcedencia de la acumulación de indemnizaciones. Entre ellos sobresalen i) la inasegurabilidad de la culpa; y ii) las fuentes disímiles de las prestaciones que otorga la ARL y de la indemnización plena de perjuicios.

Incluso la sentencia más reciente de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia establece, al analizar un caso en que se materializó una contingencia de origen común, que no es posible aplicar un único criterio, sino que dependiendo del caso deberá determinarse el parámetro que debe servir para resolver el problema que se plantee<sup>163</sup>.

No obstante, a juicio de quienes expresan estas ideas, es necesario encontrar un criterio que resulte útil para resolver la problemática sobre la posibilidad de acumular las prestaciones otorgadas por la ARL con la indemnización plena de perjuicios a cargo del responsable, en todos los casos, y que además sea armónica con los principios que orientan el ordenamiento jurídico.

#### 4.1.1. El carácter indemnizatorio de las prestaciones que otorgan las ARL.

Sobre el primer criterio mencionado vale la pena decir que se ha discutido extensamente acerca del carácter que tienen las prestaciones que otorgan las ARL al materializarse una contingencia de origen laboral. De un lado, la jurisprudencia ha hecho referencia al carácter indemnizatorio de tales prestaciones, cuando ha querido fundamentar la posición de la imposibilidad de acumular los pagos<sup>164</sup>. En otras ocasiones, las Corporaciones han establecido que

---

<sup>163</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de julio del 2012. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Rad. 11001-3103-006-2002-00101-01 (Sentencia Sustitutiva).

<sup>164</sup> En este sentido se pronunciaron las altas Cortes, entre otras, en las siguientes sentencias: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 3 de septiembre de 1991, M.P.

debido a que dichas prestaciones no poseen tal naturaleza, no se presenta un enriquecimiento sin causa al acumular las prestaciones con la indemnización plena de perjuicios<sup>165</sup>.

Así, en algunos casos la jurisprudencia ha concluido que las prestaciones que otorgan las ARL tienen carácter indemnizatorio, mientras que en otras ocasiones, las Corporaciones han señalado que dichas prestaciones no poseen tal naturaleza. No obstante, en la mayoría de los casos la jurisprudencia no ha motivado la decisión que se toma frente a este criterio. Como excepción a lo anteriormente dicho, en algunas sentencias, como en la providencia de radicado 14207 proferida el 3 de octubre del 2002 por el Consejo de Estado<sup>166</sup>, se ha determinado el carácter indemnizatorio de las prestaciones de acuerdo con un criterio histórico, es decir, teniendo en cuenta el origen del sistema, argumento que es acogido en este trabajo, como pasará a verse.

La doctrina no ha sido ajena a esta discusión. Algunos autores han señalado que es posible la acumulación, salvo que exista una norma expresa que consagre la subrogación, ya que las prestaciones que otorgan las ARL no tienen carácter indemnizatorio<sup>167</sup>, y otros han señalado que es improcedente la acumulación toda vez que dichas prestaciones buscan, sin lugar a dudas, reparar a la víctima<sup>168</sup>.

---

Pedro Lafont Pianetta Rad. 2451; Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral, Sentencia del 10 de marzo de 1993, M.P. Manuel Enrique Daza Álvarez Rad. 5480.

<sup>165</sup> Ver por ejemplo: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil Sentencia del 30 de noviembre de 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 35158; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 14 de julio de 2004. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez, Rad. 14.308; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 30 de agosto de 2007. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. 15724.

<sup>166</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre del 2002. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad. 14207

<sup>167</sup> Tal ha sido la posición asumida, entre otros, por: TAMAYO JARAMILLO, Javier. Op. cit., FLÓREZ, Juan Gonzalo. La acumulación de indemnizaciones, una revisión conceptual y jurisprudencial del tema- Parte 1 y 2, Op. cit.

<sup>168</sup> OSPINA, Frank José, Op. cit., y DÍAZ-GRANADOS ORTIZ, Juan Manuel, Op. cit., han sostenido esta posición.

Autores como Javier Tamayo Jaramillo y Juan Gonzalo Flórez han sido enfáticos en reconocer que los pagos que realiza la ARL no pueden tener carácter indemnizatorio porque la indemnización tiene que provenir del responsable o de un tercero en nombre del responsable<sup>169</sup>.

Esta posición, se considera difícil de defender si se tiene en cuenta que en los casos en que dos personas causan un mismo daño, cada una de ellas es condenada a reparar íntegramente el daño causado. No obstante, el pago hecho por uno de los responsables libera total o parcialmente al otro, porque el mismo tiene carácter indemnizatorio en cuanto pretende dejar a la víctima en la posición que tenía antes de la ocurrencia del daño. Aún así, quien paga no lo hace en nombre del otro responsable, sino en su propio nombre y fundamentado en la obligación indemnizatoria radicada en su cabeza y no en la del otro responsable. En ese sentido, pueden existir casos en que una persona, sin intención de pagar por el responsable indemnice a la víctima, contrario a lo afirmado por los autores citados.

Se estima que las prestaciones que otorgan las aseguradoras de riesgos profesionales sí tienen carácter indemnizatorio. Lo anterior se evidencia si se tiene en cuenta el origen de dichas entidades y la finalidad con la que fueron creadas, y si se entiende, como se explicará más adelante, que el seguro de riesgos profesionales debe ser comprendido como un seguro de responsabilidad civil legalmente impuesto, cuestiones que se encuentran íntimamente vinculadas.

Sobre el origen del sistema de riesgos laborales es importante destacar que éste se fundamenta en el entendimiento de que el empleador está creando un riesgo para sus trabajadores, del cual obtiene un provecho. Por este motivo, los trabajadores que están expuestos a las contingencias laborales deben ser afiliados a una entidad que asuma los daños que puedan causarse a los mismos

---

<sup>169</sup> TAMAYO JARAMILLO, Op. cit., p. 624; FLÓREZ, Juan Gonzalo. La acumulación de indemnizaciones, una revisión conceptual y jurisprudencial del tema- Parte 2. Op. cit., p.132.

cuando se encuentran prestando sus servicios personales a un empleador. La obligación de afiliar a los trabajadores a una ARL se encuentra a cargo exclusivamente del empleador y tiene el propósito de asegurarlos frente a los riesgos a los que se ven expuestos en el desarrollo de su labor, y, a su vez, de liberar al empleador del pago de las prestaciones asistenciales y económicas a que los trabajadores puedan llegar a tener derecho cuando se materializa una contingencia de origen laboral. La Corte Constitucional en sentencia C – 453 de 2002 se refirió al sistema de la siguiente manera:

*(...) el Sistema de riesgos profesionales se estructura a partir de la existencia de un riesgo creado por el empleador. El Legislador acoge en esta materia la teoría del riesgo creado en la que no se toma en cuenta la culpa del empleador sino que se establece una responsabilidad objetiva por cuya virtud resulta obligado a reparar los perjuicios que sufre el trabajador al desarrollar su labor en actividades de las que el empresario obtiene un beneficio*.<sup>170</sup>

La discusión sobre la manera en que debían asumirse los riesgos creados en virtud de una relación laboral se generó en Francia e Italia, en dónde, en un primer momento, se determinó que en caso de presentarse un accidente de trabajo debía demostrarse la culpa del empleador para que éste fuera obligado a indemnizar los perjuicios causados, en el marco de la responsabilidad civil extracontractual. Sin embargo, esta tesis fue superada con la propuesta que surgió en Alemania en el año 1884 sobre la responsabilidad objetiva y puramente civil a cargo del empleador.

Ahora bien, en Colombia, se partió también de una responsabilidad en cabeza del empleador frente a los accidentes de trabajo o enfermedades laborales, que respondía a un esquema de responsabilidad civil por el hecho propio, en el que existía una presunción de responsabilidad, según lo regulado por la Ley 57 de 1915. A partir de 1944, con el Decreto Legislativo No. 2350 de ese año, se consagró la teoría del riesgo profesional, como un tipo de responsabilidad objetiva.

---

<sup>170</sup> Corte Constitucional, Sentencia C – 4533 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

La Corte Suprema de Justicia en sentencia del 22 de febrero del 2006 hizo un recuento histórico de la responsabilidad por riesgo a cargo del empleador, en los siguientes términos:

*Se consagró la ‘teoría del riesgo profesional’, acogida inicialmente en el Decreto Legislativo 2350 de 1944 y posteriormente en la Ley 6a. de 1945, estatutos en los que, sin referencia a la culpa, se dispuso que entre las prestaciones a cargo de los patronos se contaban las indemnizaciones por accidentes de trabajo en proporción al daño sufrido y de conformidad con la tabla de valuaciones correspondiente, mientras asumía el riesgo la seguridad social (...) Pero la Ley 6a. de 1945 también estableció en su artículo 12 la responsabilidad ordinaria por perjuicios en los casos de enfermedad profesional y de accidentes de trabajo ‘por culpa comprobada del patrono’, norma que fue recogida por los redactores del Código Sustantivo del Trabajo y se plasmó en el artículo 216.*

*Luego, se dictaron varias disposiciones relativas al tema, entre ellas, el Acuerdo 155 de 1963 del I.S.S.--aprobado por el Decreto 3170 de 1964--, el Decreto 3135 de 1968, el Decreto 1848 de 1969, hasta llegar a la expedición de la vigente Ley 100 de 1993, que creó el sistema general de riesgos profesionales --asumiendo las contingencias generadas por accidentes de trabajo y enfermedad profesional--, reglamentada por los Decretos 1295, 1771, 1772, todos de 1994, el primero de los cuales, por ser declarado parcialmente inexecutable por la Corte Constitucional por sentencia C-452 de 12 junio de 2002, dio lugar a que el Congreso expidiera la Ley 776 de 2002 (...).*

*A su vez, la jurisprudencia y la doctrina, como fueron evolucionando las disposiciones normativas, adoptaron la tendencia a reconocer una verdadera responsabilidad objetiva en la ocurrencia de los llamados infortunios laborales. (...)*

*La aplicación de la teoría del riesgo profesional o responsabilidad objetiva en cierto sentido hizo a un lado la noción de culpa del empleador, que por ello dejó de ser indispensable para comprometer o no la responsabilidad del mismo, de donde surgió, como lógica consecuencia de esa teoría, la obligación de reparar el daño ocasionado por el riesgo profesional, aunque mediara el hecho del trabajador*

*(salvo el doloso o gravemente culposo), el hecho de un tercero o la fuerza mayor; y el legislador tarifó el resarcimiento del daño. Por eso ahora, si el accidente ocurre por causa o con ocasión del trabajo, aunque ese acontecimiento corresponda a un imprevisto o suceso repentino al que es imposible resistir, el empleador, aún así, queda comprometido en su responsabilidad.*<sup>171</sup>

Así pues, la responsabilidad objetiva que estaba en cabeza del empleador respecto a la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad laboral, ha sido desplazada al sistema general de riesgos laborales. De esto se deduce que las prestaciones que otorgan las aseguradoras de riesgos laborales tienen un carácter indemnizatorio, pues dichas prestaciones buscan reparar a la víctima, estableciendo un resarcimiento tarifado para el evento en que se materialice una contingencia de origen laboral, en la cual basta la prueba de la contingencia, sin que sea necesario realizar un análisis a la conducta del empleador, buscando facilitar el tema probatorio para la víctima.

Que se trate de una indemnización tarifada no descarta que las prestaciones otorgadas por las ARL posean carácter indemnizatorio. Así ha sido reconocido por la doctrina al establecer:

*Característica general del régimen de seguridad social es, como señalan Manuel Alonso Olea y José Luis Tortuero Plaza (5) la búsqueda de un límite a la extensión de una responsabilidad que se concibe como objetiva. Como señalan los autores citados, si el fundamento de este tipo de responsabilidad y de cobertura es un riesgo objetivo (el riesgo profesional) no debe extrañar que la responsabilidad sea limitada, lo que se consigue mediante la fijación cuantitativa previa de las resultas de los accidentes. Toda la teoría de las incapacidades, continúan diciendo Alonso Olea y Tortuero Plaza, es una teoría de las indemnizaciones y, por ello mismo, un método de fijación y tasa de las responsabilidades.*<sup>172</sup>

---

<sup>171</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Sentencia del 22 de febrero de 2006, M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 25390.

<sup>172</sup> DÍEZ-PICAZO, Luis. Op. cit. p. 170.

Además del origen del sistema, como razón para sostener que las prestaciones que otorgan las ARL tienen carácter indemnizatorio, es importante tener en cuenta que la finalidad misma de los pagos que realizan tales entidades es, en cuanto a las prestaciones asistenciales, la de evitar que las víctimas tengan que incurrir en gastos como consecuencia de un perjuicio que les ha sido causado, impidiendo que surja un daño emergente. Por otro lado, las prestaciones económicas buscan, generalmente, reemplazar los ingresos que se dejarán de percibir por la materialización de la contingencia, llevando a que se disminuya o elimine el lucro cesante.

Se considera que la naturaleza de las prestaciones del sistema de riesgos laborales es la misma si el riesgo laboral acaece por una culpa patronal, o si existe un tercero responsable de la materialización de la contingencia, y no depende tampoco de que se trate de prestaciones económicas o asistenciales, pues en todos los casos dichas prestaciones tienen carácter indemnizatorio.

Por este motivo, acumular las prestaciones del sistema de riesgos laborales con la indemnización plena de perjuicios a cargo del responsable implica siempre, una vulneración al principio de reparación integral, porque la víctima es indemnizada en un monto superior al daño realmente sufrido.

No obstante, podría plantearse que la vulneración al principio de reparación integral se encuentra justificada, permitiendo la acumulación de los pagos. Este argumento se basa en que, al autorizar a la víctima para que reciba las prestaciones por parte de la ARL, y para que a su vez cobre del responsable la indemnización plena de perjuicios, podría evitarse que el tercero civil o administrativamente responsable se viera enriquecido sin causa, al haber ocasionado un daño y no tener que repararlo.



Lo que se quiere decir es, que si la ARL no puede recobrar del tercero responsable el monto de las prestaciones que haya tenido que pagar con ocasión de la materialización de la contingencia de origen laboral, sería viable permitir la acumulación, vulnerando el principio de reparación integral, con el fin de evitar que en cabeza del tercero responsable se presentara un enriquecimiento sin causa. Sin embargo, esta posición no puede sostenerse si el empleador es el responsable porque éste cotiza a una ARL precisamente para que sea esta entidad la que asuma las contingencias derivadas de un accidente de trabajo o enfermedad laboral.

Se trata pues de una ponderación de principios, es decir, de mirar en concreto el valor que debe dársele al principio de reparación integral y al de no enriquecimiento sin causa, eligiendo cuál debe prevalecer sobre el otro, para garantizar, en alguna medida, la justicia como fin del Estado.

Reconociendo entonces que las prestaciones que se otorgan por parte de las ARL tienen carácter indemnizatorio, debe entenderse el pago realizado por ellas como un pago total o parcial de la obligación a cargo del civil o administrativamente responsable.

El carácter indemnizatorio es una de las razones que llevarán a concluir que la problemática debe resolverse bajo el entendido de que la ARL paga unas prestaciones con fundamento en un seguro de responsabilidad civil tomado por el empleador, como pasará a exponerse.

#### 4.1.2. Las causas o títulos que dan origen a cada uno de los pagos.

En adición al criterio anterior, la doctrina y la jurisprudencia han recurrido con frecuencia al criterio de las diferentes causas que dan origen a cada uno de los pagos para determinar la posibilidad de acumulación. La Corte Suprema de

Justicia y el Consejo de Estado han invocado otros criterios que aunque parecen diferentes pueden acomodarse dentro de éste, a saber: la diversidad de fuentes, títulos jurídicos u orígenes de cada una de las obligaciones.

No obstante, hace algún tiempo, la jurisprudencia hacía referencia a la igualdad de causas jurídicas que daban origen a los pagos para establecer la imposibilidad de acumular los mismos. Así, en sentencias del 21 de marzo de 1991<sup>173</sup>, 18 de mayo de 1992<sup>174</sup>, 10 de marzo de 1993<sup>175</sup> y 13 de julio de 1993<sup>176</sup>, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia estableció la posibilidad de descuento por parte del trabajador responsable, entendiendo que las prestaciones que otorgaba el Instituto de Seguros Sociales cubrían precisamente los riesgos de las relaciones laborales.

Posteriormente la jurisprudencia cambió de posición. Comenzó por señalar que el pago que hacen las ARL tiene su causa en la ley, debido a que es una norma jurídica la que impone, en caso de presentarse una contingencia de origen laboral, la obligación de otorgar unas determinadas prestaciones, mientras que el pago que hace el responsable tiene su causa en el hecho dañoso, pues es en virtud de tal hecho que una persona es condenada a indemnizar<sup>177</sup>.

Adicionalmente, las altas Cortes han dicho que los pagos otorgados por la ARL dependen de múltiples factores como el salario devengado, el tiempo de servicios, entre otros, y que por consiguiente tienen origen en el vínculo laboral y no en el

---

<sup>173</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 21 de marzo de 1991. M.P. Hugo Suescún Pujols. Rad. 4097

<sup>174</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 18 de mayo de 1992. M.P. Hugo Suescún Pujols. Rad. 4941

<sup>175</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 10 de marzo de 1993. M.P. Manuel Enrique Daza Alvarez. Rad. 5480.

<sup>176</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 13 de julio de 1993, M.P. Hugo Suescún Pujols. Rad. 5918

<sup>177</sup> Tal fue la posición sostenida, entre otras, en las siguientes sentencias: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 8 de octubre de 1997, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio Rad. 9817; Consejo de Estado, Sentencia del 28 de abril de 2010, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rad. 1996-3096; Consejo de Estado, Sentencia del 7 de febrero de 1995, C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora, Rad. S-47

hecho dañoso como tal<sup>178</sup>, o que tienen finalidad diferente, en cuanto la pensión atiende a proteger a las víctimas y es de naturaleza prestacional, *“mientras que la indemnización plena de que trata el artículo 216 del C.S. del T., busca la indemnización completa de los daños sufridos al producirse un accidente de trabajo por culpa del empleador”*.<sup>179</sup>

Por su parte, la mayoría de la doctrina que ha reconocido la diferencia de causas como un criterio para afrontar el problema que se plantea, lo ha hecho al analizar la jurisprudencia nacional desde un punto de vista descriptivo, es decir, señalando que las altas Cortes reconocen este criterio como parámetro para solucionar la problemática de la *acumulación de indemnizaciones*<sup>180</sup>; o bajo el entendimiento de la *compensatio lucri cum damno*, señalando que para poder aplicar esta teoría es necesario que el daño esté vinculado a la misma causa que da origen a distintos pagos, aunque los mismos provengan de diferentes fuentes o títulos de imputación, es decir, se trata de determinar *“si el lucro se ha producido o no por el mismo hecho que ha causado el daño”*<sup>181</sup>.

Se considera por esto que la diversidad de títulos de imputación, fuentes, orígenes no son determinantes para establecer la posibilidad o no de la acumulación, sino que lo que interesa es que el daño y el lucro puedan ser vinculados causalmente.

---

<sup>178</sup> Esto ha sido sostenido por las altas Cortes, entre otras, en las siguientes providencias: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 24 de junio de 1996 M.P. Pedro Lafont Pianetta, Rad. 4662; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 8 de agosto del 2003, M.P. Luis Javier Osorio López, Rad. 20186; Consejo de Estado Sentencia del 7 de febrero de 1995, C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora Rad. S-47; Consejo de Estado, Sentencia del 5 de diciembre del 2005, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez Rad. 14731.

<sup>179</sup> Esta posición ha sido asumida en: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 22 de octubre del 2007, M.P. Luis Javier Osorio López, Rad. 27736; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral Sentencia del 3 de junio del 2009, M.P. Luis Javier Osorio López, Rad. 35121; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 23 de noviembre del 2010 M.P. Camilo Tarquino Gallego Rad. 37754; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 30 de noviembre del 2010 M.P. Camilo Tarquino Gallego, Rad. 35158, Posición que ha sido reiterada en las sentencias más recientes que han utilizado el mismo criterio.

<sup>180</sup> Ver por ejemplo, DÍEZ-PICAZO, Juan Manuel, Op. cit., en el caso de la jurisprudencia Española, y HENAO, Juan Carlos, Op. cit., y CUELLAR, Luis Alfonso, Op. cit., en el caso de la jurisprudencia colombiana.

<sup>181</sup> DE CUPIS, Adriano. Op. cit., P.330.

Para ello se trae un ejemplo: Un sujeto se encuentra conduciendo su vehículo con exceso de velocidad, y atropella a otro sujeto. El conductor es declarado responsable y condenado a indemnizar los perjuicios causados. No obstante, él había contratado con anterioridad un seguro de responsabilidad civil, para que fuera la aseguradora quien pagara los perjuicios que un tercero sufriera. Así entonces, el origen de la obligación en cabeza del conductor se deriva del hecho dañoso o del cuasidelito que es posible imputarle. Por su parte, el origen de la obligación de la aseguradora (que se entiende obligada tanto con el responsable como con el beneficiario, es decir, la víctima) se debe a la existencia de un contrato de seguro. Sin embargo, no por tener fuentes u orígenes diferentes, o por derivarse de un título jurídico distinto es posible que la víctima acumule los pagos, porque el pago que hace la aseguradora busca resarcir a la víctima y a la vez dejar indemne al responsable; permitir la acumulación llevaría a una vulneración al principio de reparación integral, y al mismo tiempo, a que no tuviera sentido contratar un seguro de responsabilidad civil.

En cuanto a la diversidad de causas como criterio para determinar la solución a la problemática de la *acumulación de indemnizaciones* Adriano De Cupis ha manifestado:

*C.I.c.d. no se produce cuando al hecho perjudicial (lesivo de la integridad física o incluso de la vida) está ligado a la adquisición de una pensión. El derecho a la pensión, efectivamente, se destina en favor de un funcionario público –o por su muerte, a su familiares –siempre que su óbito se produzca; y, por tanto, aunque concretamente la lesión a la integridad física o la muerte tengan lugar por una causa determinada (culpable), se puede afirmar que análogo derecho se habría tenido, según la ley, si tal causa no hubiese aparecido, por lo que puede afirmarse que tal causa suministra simplemente la oportunidad para que nazca el derecho. (...)*

*Más delicado es el problema si se trata de una pensión privilegiada, originada cuando el infortunio ha tenido lugar en acto de servicio. Así, el ocasionado a un*

*funcionario público en acto de servicio. Fuera del acto de servicio, la pensión privilegiada no habría tenido lugar, por lo que el ligamen causal presenta una intensidad mayor que la que se aprecia en la pensión ordinaria.*<sup>182</sup>

En el ordenamiento colombiano y en el ámbito de los riesgos laborales no es posible concluir, como lo hace De Cupis, que la pensión es una contraprestación a las cotizaciones y por lo tanto que no se trata de un lucro obtenido por el mismo hecho, ya que en Colombia las cotizaciones al sistema de riesgos laborales se encuentran únicamente a cargo del empleador, y en tal sentido no implican un sacrificio económico al trabajador.

A pesar de la frecuencia con que se recurre a este criterio por la jurisprudencia para solucionar la problemática planteada, se estima que éste no es el criterio que permita establecer la posibilidad o no de acumular la indemnización con las prestaciones que otorgan las ARL, porque debe entenderse que la causa que origina cada uno de los pagos –más allá del título legal que fundamente las obligaciones– es la materialización de una contingencia de origen profesional que generó un daño a las víctimas directas o indirectas.

Adicionalmente, se sostiene que el pago que realiza una ARL no tiene su origen en la ley, sino en el contrato de seguro que se celebra entre el empleador y la entidad aseguradora de riesgos laborales, porque sin él, la ley no le exigiría a la ARL pagar una determinada prestación. Lo anterior quiere decir que aunque sea la ley la que impone al empleador la obligación de afiliar a sus trabajadores a una ARL, es el contrato entre éste y la aseguradora, el vínculo que origina el pago de las distintas prestaciones.

Por todo lo dicho, se considera que no es suficiente y por tanto pertinente distinguir entre el origen o los títulos jurídicos que dan lugar a que se genere la obligación en cabeza de las ARL y de los responsables para determinar si existe

---

<sup>182</sup> Ibid., p. 337 y s.

posibilidad de que las indemnizaciones se acumulen. Igualmente, se sostiene que no es posible demostrar que sin la contingencia de origen laboral hubiera surgido la obligación a cargo de la aseguradora de riesgos laborales, ya que esta entidad responde únicamente si existió un accidente de trabajo o una enfermedad laboral. En el caso de las ARL, entonces, no basta con el hecho de haber cotizado por cierto período de tiempo para acceder al beneficio.

Por último, si lo que se busca es establecer que, como existen diferentes causas que dan origen a los pagos, la acumulación de los mismos no implica un enriquecimiento sin causa, la posición que se sostiene es que el carácter indemnizatorio tanto de las prestaciones que otorgan las ARL como de la indemnización plena de perjuicios a cargo del responsable es el que determina que se materialice el enriquecimiento sin causa, más allá del título jurídico que hace surgir cada una de las obligaciones.

#### 4.1.3. La existencia de una norma especial de subrogación.

En tercer lugar, se ha invocado el criterio de la subrogación para determinar la posibilidad o no de acumular dichas indemnizaciones. Éste ha sido el parámetro más utilizado por la doctrina nacional para regular la situación que se presenta cuando un tercero ajeno al vínculo laboral es responsable de que se haya causado la contingencia de origen laboral. Autores como Javier Tamayo Jaramillo, Ricardo Hoyos Duque y Juan Gonzalo Flórez han establecido que es la existencia de una norma de subrogación la que determina en este caso la imposibilidad de la acumulación<sup>183</sup>.

---

<sup>183</sup> TAMAYO JARAMILLO, Javier. Op. cit., HOYOS DUQUE, Ricardo, Op. cit., FLÓREZ, Juan Gonzalo. La acumulación de indemnizaciones, una revisión conceptual y jurisprudencial del tema- Parte 2, Op. cit.

Esta posición también ha sido recogida por la jurisprudencia, principalmente en la sentencia proferida por el Consejo de Estado el 3 de octubre del 2002<sup>184</sup> y en la providencia emitida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia el 22 de octubre de 1998<sup>185</sup>. En la primera de ellas, la Sala determinó la solución que debería darse a la problemática según el responsable fuera el empleador o un tercero ajeno al vínculo laboral. En el caso del tercero responsable, la Corporación manifestó que era procedente la acumulación, salvo norma expresa de subrogación. La misma postura se sostuvo en la segunda sentencia mencionada, aunque en esa ocasión únicamente se hizo referencia a los terceros ajenos al vínculo laboral. En otros casos<sup>186</sup> el Consejo de Estado ha determinado que procede la acumulación, toda vez que no hay norma expresa que permita la subrogación (al tratarse de prestaciones que han sido pagadas directamente por una entidad pública en su calidad empleador y no por una ARL).

La Sala de Casación Laboral no ha hecho referencia, al momento de señalar los motivos por los cuales procede o no la acumulación de indemnizaciones, al criterio de la subrogación, aunque ha interpretado dentro de sus fallos el artículo 12 del decreto 1771 de 1994. Dentro de tal interpretación, ha establecido la Sala que la aseguradora de riesgos laborales puede demandar al empleador para que éste le pague la indemnización plena de perjuicios, y con posterioridad podrá descontar el monto de las prestaciones otorgadas a la víctima y entregar a ésta el remanente. Una segunda hipótesis, es que la víctima demande directamente al responsable, obtenga una indemnización plena, y devuelva a la aseguradora el monto de las prestaciones que ésta haya asumido. Reitera la Sala que no está permitido que el empleador descuente suma alguna de la indemnización plena de perjuicios<sup>187</sup>.

---

<sup>184</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre del 2002. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad. 14207.

<sup>185</sup> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de octubre de 1998. M.P. José Fernando Ramírez Gómez Rad. 4866.

<sup>186</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 30 de agosto del 2007. C.P. Ramiro Saavedra Becerra, Rad. 15724; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencias del 28 de abril del 2010. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rads. 1994-9971, 1996-3096.

<sup>187</sup> Ver, entre otras: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 7 de mayo de 1997, M.P. Rafael Méndez Arango. Rad. 9389.

La Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ha establecido que se permite la acumulación, ya que no existe una norma expresa que consagre la subrogación; criterio acogido en la sentencia de radicado 4866 proferida el 22 de octubre de 1998<sup>188</sup>, reiterado en la sentencia del 19 de diciembre del 2008, de radicado 1991-2191<sup>189</sup>, y en la sentencia del 9 de julio del 2012, de radicado 2002-101<sup>190</sup>.

En la sentencia del 22 de octubre de 1998, ya citada, la Sala expresó que es la ley y no la naturaleza del seguro la que establece la posibilidad de acumulación mediante el establecimiento de una norma expresa de subrogación, y señala que para que pueda predicarse la subrogación tiene que existir una norma especial que la consagre, porque lo dispuesto en materia de seguros no es aplicable por analogía a los sistemas de seguridad social.

Igualmente, la Sala adujo que la interpretación del artículo 12 del decreto 1771 de 1994 implica que son tanto la ARL como la víctima quienes pueden demandar al responsable y no éste, quien puede descontar de la indemnización plena de perjuicios el monto de las prestaciones pagadas por la aseguradora. La Sala explicó que, si es la aseguradora de riesgos laborales la que demanda al responsable, debe reclamar toda la indemnización, descontar el monto de las prestaciones que haya asumido, y entregar a la víctima el remanente. De ser la víctima la que demanda, tiene derecho a recibir la totalidad de la indemnización, y queda obligada a devolver a la ARL el monto de las prestaciones que haya recibido<sup>191</sup>.

---

<sup>188</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de octubre de 1998. M.P. José Fernando Ramírez Gómez Rad. 4866.

<sup>189</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil Sentencia del 19 de diciembre del 2008. M.P. William Namén Vargas, Rad. 11001-3103-035-1999-02191-01.

<sup>190</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de julio del 2012. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Rad. 11001-3103-006-2002-00101-01 (Sentencia Sustitutiva).

<sup>191</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de octubre de 1998. M.P. José Fernando Ramírez Gómez Rad. 4866.



Se comparte la posición según la cual, la existencia de una norma de subrogación es determinante al momento de establecer si es procedente la acumulación de la indemnización plena de perjuicios a cargo del responsable con las prestaciones que otorga la ARL, más allá de la discusión sobre la vigencia de la norma, que será analizada posteriormente. Como se mencionó en el acápite 4.1.1. de este escrito, la inexistencia de una norma especial de subrogación podría llevar a que la ARL no pudiera cobrar del tercero responsable el monto de las prestaciones por ella asumidas, lo que acarrearía un enriquecimiento sin causa del responsable. Por eso, como se mencionó en su momento, una ponderación del principio de reparación integral y del principio de no enriquecimiento sin causa podría llevar a que se permitiera que la víctima acumulara los pagos, con la finalidad de que el responsable no quedara impune.

No obstante, se advierte, que de conformidad con el principio de no enriquecimiento sin causa y con el principio de la reparación integral –tema estudiado en el primer capítulo de este trabajo–, debe existir dicha norma de subrogación, para que se armonicen los principios mencionados. De lo contrario, dos situaciones podrían presentarse: i) podría señalarse que, de acuerdo con el carácter indemnizatorio de las prestaciones que otorgan las ARL no sería posible la acumulación de indemnizaciones, caso en el cual el responsable resultaría enriquecido sin causa; o ii) sería viable ponderar los principios de reparación integral y de no enriquecimiento sin causa, de la manera en que se ha explicado dentro de este capítulo, lo que llevaría necesariamente a la vulneración del principio de reparación integral.

Sin embargo, se considera que la determinación del carácter indemnizatorio, a diferencia de lo señalado por algunos doctrinantes, no depende de la existencia de una norma subrogatoria. Las prestaciones que otorgan las ARL tienen un carácter indemnizatorio, lo que se deriva del origen del sistema de riesgos laborales, del objetivo que se busca al consagrar el derecho a percibir ciertas prestaciones, y del

entendimiento de que el empleador traslada a la aseguradora de riesgos laborales un riesgo que originariamente se encontraba en su cabeza.

4.1.4. La relación de los pagos que hace la ARL con los pagos hechos en virtud de un seguro de daños (en contraposición al seguro de personas), o de un seguro de responsabilidad civil específicamente.

Otro criterio que ha sido ampliamente utilizado por la doctrina<sup>192</sup>, y en alguna oportunidad por la jurisprudencia<sup>193</sup>, es el que surge de mirar la relación de los pagos que hace la ARL con los pagos hechos en virtud de un seguro de daños entendido en un sentido amplio, es decir, en contraposición al seguro de personas, o directamente haciendo referencia a un seguro de responsabilidad civil<sup>194</sup>.

Teniendo en cuenta el origen de las ARL, que fue explicado anteriormente, así como la manera en que éstas operan, es decir, que quien afilia y realiza las cotizaciones es el empleador, se hace necesario concluir que las ARL aseguran un riesgo que pertenece al empleador, siendo él quien ostenta la calidad de tomador y asegurado, y el trabajador la de beneficiario.

---

<sup>192</sup> Así lo han entendido, entre otros: GAVIRIA GÓMEZ, Juan Carlos, Op. cit., TAMAYO JARAMILLO, Javier, Op. cit., FLÓREZ, Juan Gonzalo. La acumulación de indemnizaciones, una revisión conceptual y jurisprudencial del tema- Parte 2, Op. cit. Algunos de ellos han aplicado este criterio únicamente para solucionar el problema en el caso en el cual existe una culpa patronal, porque en el caso de un tercero responsable consideran que lo determinante es la existencia de una norma especial que consagre la subrogación.

<sup>193</sup> Por extraño que parezca, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia nunca ha planteado tal posibilidad. Únicamente el Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, en sentencia del 3 de octubre del 2003, C.P. Ricardo Hoyos Duque, Rad. 14207 (reiterado en otros fallos) ha mostrado la similitud de la figura con un seguro de responsabilidad civil.

<sup>194</sup> En este trabajo se concluirá que la solución que debe darse a la problemática planteada parte de entender que el seguro de riesgos laborales es un seguro de responsabilidad civil legalmente impuesto, y en ese sentido, este estudio acoge la postura de quienes han entendido que con base en este criterio no es posible la acumulación de indemnizaciones cuando el responsable del daño es el empleador.

Se trata, en palabras de Ricardo de Ángel Yagüez, de una “*garantía colectiva del seguro obligatorio*”. Este autor, al hacer referencia a esta clase de seguros ha manifestado:

*(...) Se trata en este caso de un seguro de responsabilidad civil, por virtud del cual el asegurador asume el riesgo que para el patrimonio del asegurado supondría la obligación de indemnizar por los daños que cause. Pero, a diferencia de lo que es característico en cualquier contrato, la celebración del seguro no es aquí producto de la libre voluntad del asegurado, sino que le viene impuesta por la propia ley. Se convierte, de hecho, en una especie de requisito administrativo para el desempeño de la actividad cubierta por la póliza; el ejemplo más conocido, la conducción de un automóvil*<sup>195</sup>.

De acuerdo con lo expuesto, se sostiene que, aplicando las normas generales del seguro de responsabilidad civil al caso planteado, no es posible que la víctima acumule las prestaciones del sistema de riesgos laborales con la indemnización plena de perjuicios a cargo del empleador.

Como la responsabilidad en cabeza del empleador por los daños que se le puedan generar al trabajador en ejercicio o con ocasión de sus funciones es una responsabilidad objetiva, la ARL estará llamada a pagar las prestaciones que correspondan, aún cuando haya existido un hecho generador imputable a un tercero, y por esto se explica que la aseguradora pague aún cuando pueda existir un tercero responsable del daño.

---

<sup>195</sup> DE ÁNGEL YAGÜEZ, Ricardo. Op. cit., p. 59. El autor adicionalmente hace referencia al ámbito de los accidentes de trabajo, en los siguientes términos: “*Es digna de ser mencionada, en esta materia, la evolución experimentada en accidentes de trabajo.*

*Originariamente, el seguro que al efecto concertaban los patronos, no era más que una modalidad de seguro de responsabilidad civil, de carácter privado, por el que se ponían a cubierto de las reclamaciones que contra ellos pudieran entablar los trabajadores accidentados. Pero a medida que fue intensificándose la responsabilidad de las empresas –por virtud de la introducción legal de nuevos criterios de responsabilidad (por riesgo) –, se acentuó el intervencionismo estatal en este sector, a impulsos de las reivindicaciones obreras. Esto condujo a la implantación del seguro obligatorio de accidentes de trabajo, que es más una garantía del operario que del patrono. Esta materia pertenece ya al terreno de la Seguridad Social, fuera del ámbito del derecho privado. A cierta distancia en el tiempo, y desde luego sin los acusados rasgos del seguro de accidentes de trabajo, ha seguido en parte sus pasos el de accidentes ocasionados por la circulación de vehículos de motor.”*

Si se entiende que en cualquier caso es imposible la acumulación, porque el daño ha sido indemnizado, el efecto de la norma de subrogación, es que la aseguradora pueda demandar al responsable para obtener de él el reembolso de lo que haya tenido que pagar en virtud de un contrato de seguro válidamente celebrado. No obstante, como ya se dijo, como esta solución puede llevar a un efecto indeseable, que es la impunidad del responsable, podría establecerse la necesidad de vulnerar el principio de reparación integral, permitiendo que la víctima acumule los pagos.

Aún así, es posible establecer que la norma de subrogación consagrada en el artículo 12 del decreto 1771 de 1994 es aplicable y que en ese sentido no es posible la acumulación. Sobre este tema se volverá en el siguiente apartado de este capítulo.

No sobra aclarar que las prestaciones que otorgan las ARL no se compadecen cabalmente con el perjuicio sufrido. Es decir, se trata de una indemnización tarifada, y en ese sentido es posible que otorguen una prestación que no deje reparada completamente a la víctima. En ese caso, la víctima podrá acudir al responsable para que indemnice la parte faltante. Esto hace que se trate de un seguro de responsabilidad civil con ciertas particularidades, pero no por ello se desvirtúa la idea del seguro de riesgos laborales como un seguro de responsabilidad civil legalmente impuesto.

Adicionalmente, otra diferencia que aunque relevante no desvirtúa la naturaleza del seguro como uno de responsabilidad civil, es que las ARL generalmente pagan las prestaciones una vez verificada la materialización de la contingencia, toda vez que no les es viable argumentar la existencia de un evento que rompió el nexo causal, porque, por decirlo de alguna manera, existe una presunción de responsabilidad en cabeza del empleador que no admite prueba en contrario, y la ARL es la llamada a responder por ese empleador.

#### 4.1.5. La inasegurabilidad de la culpa

Por último, dentro de los criterios utilizados para establecer la posibilidad de acumular las prestaciones que otorga la ARL con la indemnización plena de perjuicios a cargo del empleador, la jurisprudencia<sup>196</sup> se ha referido a la inasegurabilidad de la culpa como el motivo determinante para que la víctima pueda acumular los pagos. Este criterio se queda sin fundamento con sólo decir que la culpa en términos generales es asegurable, y que la culpa inasegurable es la culpa grave o el dolo, de acuerdo con el artículo 1055 del Código de Comercio.

Es más, en este caso lo que se asegura es una responsabilidad objetiva, motivo por el cual basta la materialización de la contingencia para que el empleador tenga que responder, y el mismo subroga ese riesgo en la ARL, sin que sea siquiera necesaria la verificación de la culpa. Lo anterior lleva a que, determinar que la culpa del empleador no se encuentra asegurada sea, desde el punto de vista de quienes expresan estas ideas, un sinsentido.

En resumen, varios criterios han sido utilizados por la doctrina y la jurisprudencia para dar solución a la problemática planteada. Se considera que los parámetros que deben ser tenidos en cuenta para solucionar el problema de la acumulación de la indemnización plena de perjuicios con las prestaciones que otorgan las ARL son el carácter indemnizatorio, y la subrogación, de un lado, y la comprensión de la estructura y funcionamiento del seguro de riesgos profesionales como un seguro de responsabilidad civil legalmente impuesto, del otro.

---

<sup>196</sup> Sobre este tema ver entre otras: Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sala Plena. Sentencia del 12 de noviembre de 1993. M.P. Rafael Méndez Arango Rad. 5868; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 7 de mayo de 1997, M.P. Rafael Méndez Arango Rad. 9389; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 9 de noviembre de 2000. M.P. Germán Valdés Sánchez. Rad. 14847; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 3 de junio del 2009 M.P. Luis Javier Osorio López Rad. 35121; Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 1 de marzo de 2011. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 36815.

#### 4.2. DISCUSIÓN SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE LA ARL SE SUBROGUE EN CONTRA DEL RESPONSABLE PARA RECUPERAR EL MONTO DE LAS PRESTACIONES PAGADAS A LA VÍCTIMA.

Se ha discutido acerca de la vigencia y aplicabilidad del artículo 12 del decreto 1771 de 1994, norma que consagra la posibilidad de que la ARL que tiene que pagar una determinada prestación se subroga en contra del responsable para que éste le devuelva el monto que haya tenido que pagar a título de prestación. Sobre el tema, y la posición que ha asumido la doctrina, se remite al lector al apartado 2.2.4. de este trabajo.

En ese acápite se dijo: i) que se controvierte acerca de la vigencia y aplicabilidad de la norma, toda vez que ésta fue expedida en el marco de un decreto reglamentario de una norma de carácter superior que no consagraba la posibilidad de la subrogación, y por lo tanto se discute si la misma se encuentra viciada de nulidad en cuanto el ejecutivo excedió las facultades reglamentarias; ii) que se debate acerca de la posibilidad de aplicar la norma de subrogación cuando el responsable es el empleador.

En su momento se explicó que algunos autores sostienen que la norma no debe ser aplicada<sup>197</sup>, mientras que otros expresan que se trata de una norma de la que se presume la validez, toda vez que no ha sido suspendida ni anulada, aún cuando algunos de ellos han señalado que la validez de la norma es dudosa<sup>198</sup>.

Adicionalmente se señaló que la mayor parte de los doctrinantes nacionales que se refieren a la posibilidad de subrogación establecen que únicamente es posible

---

<sup>197</sup> HOYOS DUQUE, Ricardo. Op. cit., p. 50; GIL BOTERO, Enrique. Op. cit., p. 59.

<sup>198</sup> Ver, por ejemplo: OSPINA BLANDÓN, Frank José. Op. cit., p.285; FLÓREZ, Juan Gonzalo. La acumulación de indemnizaciones, una revisión conceptual y jurisprudencial del tema- Parte 2. Op. cit., p.151; TAMAYO JARAMILLO, Javier. Op. cit., p. 656; GARCIA FRANCO, Néstor Alejandro. Op. cit., p.97.

predicar tal subrogación en el caso del tercero responsable y nunca en el caso del empleador, en razón de su condición de asegurado<sup>199</sup>. Autores como Javier Tamayo Jaramillo<sup>200</sup> y Néstor Alejandro García<sup>201</sup> discuten si es posible que la ARL se subroge para cobrar del empleador el monto de las prestaciones que haya tenido que asumir. Para el primero, este supuesto ocurre si existe culpa grave o dolo de por medio; para el segundo, existe la discusión porque las normas no son claras en ese sentido.

Ahora bien, con respecto a la jurisprudencia cabe decir que la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia<sup>202</sup> ha interpretado el artículo 12 del decreto 1771 de 1994, como si éste pudiera ser aplicado al caso del empleador que ha incurrido en una culpa patronal. La Sala ha dicho –argumentando que la interpretación que en su momento realizó del artículo 83 del acuerdo 155 de 1963 es la misma que debe darse al artículo 12 del decreto 1771 de 1994–, que la ARL que otorga una prestación es la que puede demandar al empleador para que éste le pague los daños causados a la víctima. En ese caso la aseguradora podría recuperar el monto de las prestaciones otorgadas y entregaría el saldo a la víctima. La otra posibilidad sería que la víctima reclamara ambos pagos para devolver a la ARL el monto de las prestaciones recibidas. Esta interpretación también se ha sostenido por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, en la sentencia del 22 de octubre de 1998<sup>203</sup>.

La posibilidad planteada no es de recibo, porque, en primer lugar, el artículo 12 del decreto 1771 de 1994 no hace referencia al empleador sino al tercero ajeno al vínculo laboral que es responsable. En ese sentido no podría la ARL subrogarse contra el empleador. Adicionalmente, no parece lógico que la ARL demande al

---

<sup>199</sup> OSPINA BLANDÓN, Frank José. Op. cit., p.285, FLÓREZ, Juan Gonzalo. La acumulación de indemnizaciones, una revisión conceptual y jurisprudencial del tema- Parte 2. Op. cit., p.151.

<sup>200</sup> TAMAYO JARAMILLO, Javier. Op. cit., p. 664.

<sup>201</sup> GARCIA FRANCO, Néstor Alejandro. Op. cit., p. 98.

<sup>202</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 7 de mayo de 1997, M.P. Rafael Méndez Arango Rad. 9389; Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 9 de noviembre de 2000. M.P. Germán Valdés Sánchez. Rad. 14847

<sup>203</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de octubre de 1998. M.P. José Fernando Ramírez Gómez Rad. 4866.

empleador para que éste le pague la totalidad de los perjuicios causados a una víctima, porque la aseguradora no conoce los perjuicios reales que pueden haberse causado por haberse materializado la contingencia de origen laboral, sino que se limita a otorgar determinadas prestaciones en dinero o especie. Así, no le asiste razón a la Corte Suprema de Justicia al determinar que la interpretación que debe hacerse del artículo 12 del Decreto 1771 de 1994 es la misma que en su momento se hizo del artículo 83 del acuerdo 155 de 1963, máxime que la estructura normativa de las dos disposiciones es disímil.

Por su parte, el Consejo de Estado, en la sentencia proferida el 3 de octubre del 2002<sup>204</sup>, con ponencia del Dr. Ricardo Hoyos, consideró que el artículo 12 del decreto 1771 de 1994 era inaplicable en Colombia, porque la subrogación tendría que ser regulada por una Ley y no por un decreto reglamentario. La misma postura fue sostenida por el Consejero Enrique Gil Botero en el salvamento de voto de la sentencia del 24 de abril del 2008<sup>205</sup>. En otros casos<sup>206</sup> el Consejo de Estado ha determinado que procede la acumulación, porque no hay norma expresa que permita la subrogación al tratarse de prestaciones que han sido pagadas directamente por una entidad pública en su calidad de empleador y no por una ARL. Aunque esta discusión excede los objetivos de este trabajo, si el empleador que ha pagado directamente una determinada prestación es el demandado, debe entenderse que éste ha reparado ya total o parcialmente el daño, y en este caso, debe proceder el descuento.

Se estima que el artículo 12 del decreto 1771 de 1994 goza de una presunción de validez que no ha sido desvirtuada, motivo por el cual la norma es plenamente aplicable, pero únicamente respecto del tercero ajeno al vínculo laboral que es

---

<sup>204</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre del 2002. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad. 14207.

<sup>205</sup> Consejo de Estado. Sentencia del 24 de abril de 2008. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. 15981.

<sup>206</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 30 de agosto del 2007 C.P. Ramiro Saavedra Becerra Rad. 15724; Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencias del 28 de abril del 2010, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, Rads. 1994-9971, 1996-3096.



declarado responsable, pues de aplicarse frente al empleador se contrariaría la lógica misma del seguro de responsabilidad civil legalmente impuesto, en el cual el empleador es tomador y asegurado, la ARL la aseguradora, y la víctima el beneficiario.

La conclusión es evidente: actualmente, en el ordenamiento jurídico colombiano cuando se ha materializado una contingencia de origen laboral por la cual una ARL ha pagado una determinada prestación, y a su vez existe un sujeto civil o administrativamente responsable (el empleador o un tercero ajeno al vínculo laboral), la víctima no puede acumular ambas indemnizaciones. Considérese esta apreciación como un deber ser, porque ya se sabe que otra es la posición que ha asumido la jurisprudencia colombiana.

#### 4.3. ANÁLISIS DE LOS POSIBLES MOMENTOS EN QUE PUEDE SURGIR LA PROBLEMÁTICA DE LA ACUMULACIÓN DE INDEMNIZACIONES

En el primer capítulo de este escrito se señaló que la discusión sobre la acumulación de indemnizaciones puede generarse en varias situaciones o momentos, dependiendo de las decisiones que tome la víctima con respecto a la manera en que procede a cobrar las indemnizaciones o prestaciones a que haya lugar según el daño padecido, y las decisiones que toma la aseguradora de riesgos profesionales a quien se reclama el pago de una determinada prestación. Así, se establecieron como posibles momentos los siguientes:

En primer lugar se señaló que una víctima sufrió un daño de carácter laboral (accidente de trabajo o enfermedad laboral) quedando acreditado dentro del proceso que tal daño es imputable a un sujeto o al Estado, quien será llamado a responder, pero que la ARL a la que se encontraba afiliada la víctima directa había otorgado con anterioridad al proceso una o varias prestaciones.

Con respecto a esta situación se han pronunciado la mayor parte de los doctrinantes, y ha sido también la situación sobre la cual han tenido que decidir la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado.

Se planteó como segundo caso, el que se presenta cuando es la ARL la que, una vez ha pagado a la víctima las prestaciones que ordena la ley, pretende repetir contra el responsable (llámese empleador o tercero responsable) para que le pague las erogaciones en que tuvo que incurrir, y posteriormente la víctima directa o las indirectas reclaman a ese responsable el pago de la indemnización plena de perjuicios.

Por último se dijo que podía suceder que el civil o administrativamente responsable indemnizara plenamente a la víctima directa, y con posterioridad ésta acudiera a la ARL para que le fueran entregadas las prestaciones asistenciales y económicas a que por ley tiene derecho.

Un entendimiento armónico de la *problemática* de la *acumulación de indemnizaciones* implica revisar los diversos eventos que pueden presentarse, y encontrar una solución que pueda ser aplicada en todas las oportunidades.

En primer lugar, es necesario señalar que para poder sostener la acumulación, tiene que partirse de la imposibilidad de aplicar la norma de subrogación existente en el ordenamiento jurídico colombiano. De lo contrario, el responsable podría verse obligado a efectuar un pago doble: a la víctima porque no le es dable descontar lo que a ella ha sido pagado por parte de la ARL, y a la aseguradora de riesgos profesionales en virtud de la norma que consagra la subrogación. Al discutir esta situación la jurisprudencia no ha sido clara. Así, pese a que en los argumentos con base en los cuales se han señalado los cargos de casación en el caso de la Corte Suprema de Justicia, o a los que han sido empleados para fundamentar el recurso de apelación en el caso del Consejo de Estado, se ha

planteado la injusticia que acarrearía este doble pago, la jurisprudencia se ha limitado a señalar que las ARL no siempre se subrogan, o a realizar interpretaciones confusas sobre las norma que consagra la posibilidad de la subrogación. Así, resulta complejo entender que la ARL pueda demandar al responsable para que éste le pague la indemnización plena de los perjuicios sufridos por la víctima, como ya se ha señalado. De igual manera, no queda claro cómo operaría el recobro de la ARL a la víctima que ha recibido la indemnización plena de perjuicios a cargo del responsable, y al tiempo las prestaciones otorgadas por la aseguradora.

Sobre la prohibición absoluta del doble pago a cargo del responsable, Javier Tamayo Jaramillo ha manifestado:

*(...) el responsable no puede ser obligado a pagar dos veces la misma indemnización: una al asegurado y otra al asegurador que ya reparó el daño del primero. La ley tiene que fijar lineamientos claros que permitan al responsable pagar una sola vez la indemnización. Por tanto, debe definir quién es el titular de la acción indemnizatoria. Es entonces cuando adquiere notoria importancia la subrogación especial que a veces consagra en forma expresa el legislador. La existencia o inexistencia de dicha subrogación nos permite responder las preguntas que aquí se plantean.*<sup>207</sup>

Entender el seguro de riesgos laborales como un seguro de responsabilidad civil legalmente impuesto facilita la resolución de esta problemática. De un lado, esclarece la imposibilidad de acumulación cuando se da el primero de los escenarios planteados. Por otra parte, deja claro que las prestaciones que otorga la ARL tienen carácter indemnizatorio, por lo que permitir la acumulación siempre vulnerará el principio de reparación integral. Adicionalmente, la existencia de una norma especial de subrogación (artículo 12 del decreto 1771 de 1994) abre la posibilidad de que la ARL que ha pagado una determinada prestación pueda repetir en contra del responsable. Frente a la tercera de las situaciones, la

---

<sup>207</sup> TAMAYO JARAMILLO, Javier. Op. cit., p.618.

solución tendría que ser que el responsable no podrá ser obligado a pagar dos veces el mismo daño, y en ese sentido la ARL podría demandar a la víctima alegando un enriquecimiento sin causa por parte de ella.

Sobre la injusticia que acarrearía un pago doble se pronunció el casacionista en los argumentos del cargo esgrimidos en el proceso de radicado 35121, que culminó con la sentencia proferida el 3 de junio del 2009, así:

*Si la A. R. P. ejerce la acción que le otorga el artículo 12 contra el culpable del accidente de trabajo, pueden suceder dos cosas, ambas injustas: que le prospere o que los jueces consideren que ya el culpable pagó la totalidad del perjuicio que causó y lo absuelvan. Si ocurre lo primero, resulta que la parte de más que recibió el trabajador salió, a la postre, del patrimonio del culpable que resultó doblemente castigado (pago pleno a la víctima y reembolso a la A. R. P.). Si ocurre lo segundo, esa parte de más que recibió el trabajador viene a salir, en definitiva, del patrimonio de la A. R. P., que queda injustamente privada de la acción de reembolso que le da la ley.*

*En ambos casos resulta enriqueciéndose sin causa el trabajador: en el primero, a costa del patrimonio del culpable del accidente, y en el segundo, a costa del patrimonio de la A. R. P.<sup>208</sup>*

Se comparten plenamente los argumentos esgrimidos por el recurrente, que resultan coincidentes con la posición jurídica que se defiende en este estudio.

#### 4.4. OTRAS CRÍTICAS A LA POSICIÓN ASUMIDA POR LA JURISPRUDENCIA

Sobre este punto vale la pena señalar que, de las sentencias revisadas surgieron unas diferencias relevantes desde la perspectiva de la problemática que se

---

<sup>208</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 3 de junio del 2009 M.P. Luis Javier Osorio López Rad. 35121.

afronta, pero que no son tenidas en cuenta a la hora de determinar la posibilidad de que se presente la acumulación de indemnizaciones.

De un lado, la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia plantea una misma forma de resolver el problema sin tener en cuenta si la contingencia materializada es de origen común o profesional. Así, por ejemplo, la sentencia del 22 de octubre de 1998<sup>209</sup>, al pretender dar solución al problema de acumulación de indemnizaciones citó las sentencias proferidas por la Sala el 24 de junio de 1996<sup>210</sup> y el 3 de septiembre de 1991<sup>211</sup>, pretendiendo unificar la Jurisprudencia vigente. No obstante, la sentencia del 24 de junio de 1996 discutía la acumulación en un caso en el cual la contingencia que se había presentado era de origen común.

Se ha dicho ya, que no puede extenderse la teoría que se proponga para dar solución al tema de la acumulación de las prestaciones que otorga el sistema de riesgos laborales con la indemnización plena de perjuicios, al campo general de la seguridad social. En primer lugar, porque las cotizaciones en tal ámbito no son realizadas únicamente por el empleador, ni pretenden desplazar hacia una entidad un riesgo que pertenecería al empleador por el provecho que obtiene de la actividad desplegada por el trabajador; adicionalmente, porque el caso tiene que ser analizado con base en las particularidades del mismo, entre ellas, la inexistencia de una norma que consagre la subrogación, la naturaleza del aseguramiento y la posición de los sujetos frente a la relación asegurativa.

Adicionalmente, se dijo que la sentencia proferida el 22 de octubre de 1998 cita la sentencia de radicado 2451, del 3 de septiembre de 1991. No obstante, en el primero de los casos es el Instituto de Seguros Sociales el que paga la pensión de sobrevivientes, mientras en el segundo de los eventos el empleador es quien

---

<sup>209</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 22 de octubre de 1998. M.P. José Fernando Ramírez Gómez Rad. 4866.

<sup>210</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 24 de junio de 1996 M.P. Pedro Lafont Pianetta, Rad. 4662.

<sup>211</sup> : Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 3 de septiembre de 1991 M.P. Pedro Lafont Pianetta, Rad. 2451.

directamente sufraga los gastos en que debe incurrir la víctima con ocasión de la materialización de una contingencia de origen laboral. La falta de distinción entre contingencias de origen común y laboral, y entre pagos realizados por el empleador directamente, o por una ARL, es constante a lo largo de toda la línea jurisprudencial de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia<sup>212</sup>.

Esta diferencia tampoco ha sido tomada en cuenta de manera constante por parte del Consejo de Estado para dar solución a la problemática, pues solo ha sido abordada en algunas sentencias en que se hacen comentarios aislados y esporádicos sobre el tema. Así, no se han planteado diferencias cuando quien paga una determinada prestación es el empleador, la Caja Nacional de Previsión Social, o una ARL.

La importancia de la diferencia sobre las prestaciones pagadas por la ARL y las que otorga el empleador directamente radica en que, dado el caso en que el empleador sea quien haya sufragado directamente una determinada prestación, no es posible argumentar que es aplicable el artículo 12 del decreto 1771 de 1994 para establecer la posibilidad de acumulación.

Así mismo, otras consideraciones realizadas por la jurisprudencia han llevado a decisiones que distan de ser armónicas con el ordenamiento jurídico visto en conjunto. Por ejemplo, en la sentencia proferida el 9 de julio del 2012 por la Sala de Casación Civil se sostuvo que:

*En efecto, para hacerse acreedor de una pensión de vejez; de jubilación; de invalidez de origen común o profesional; de sobreviviente por muerte común o por razón del trabajo; de sustitución; o a la indemnización sustitutiva de esas prestaciones si aquéllas no fueren procedentes, solo es necesario cumplir con los requisitos contemplados en las normas pertinentes del sistema general de*

---

<sup>212</sup> Por ejemplo, en la sentencia del 9 de julio del 2012, Rad. 2002-101, quien paga la prestación es el empleador- Fuerzas Militares, en la sentencia proferida el 19 de diciembre del 2008 la ARL es quien paga una pensión de sobrevivientes, y en la sentencia del 4 de septiembre del 2000, de radicado 5260 se había otorgado una pensión de sobrevivientes de origen común.

*pensiones o de riesgos profesionales, o en los regímenes especiales o exceptuados, según sea el caso; sin que para el reconocimiento de esa especie de derechos tenga incidencia el hecho de que ellos tengan su causa adecuada en los actos de un tercero, o que el beneficiario de esas prestaciones haya sufrido o no un daño comprobado, o que haya recibido el pago de una indemnización de perjuicios o de un seguro de vida.*

*Los beneficios pensionales tienen su origen en los aportes realizados para cada uno de esos riesgos, o en el tiempo de servicios, según sea el caso; y por lo tanto son ajenos a cualquier circunstancia que resulte extraña al respectivo sistema; de suerte que al no haber ningún factor de conexión entre ellos y la actividad de un tercero, no podría estatuir la ley, como en efecto no lo hace, la facultad de repetir en contra de éste, toda vez que esas obligaciones se radican de modo exclusivo en la entidad aseguradora y a nadie más pueden transmitírsele.<sup>213</sup>*

Se considera que no le asiste razón a la Corte en tal apreciación, toda vez que al asimilar las prestaciones de origen común con las de origen laboral incurre en el error de determinar que las mismas no tienen ningún factor de conexión con la actividad de un tercero. En efecto, sin la materialización de un accidente o enfermedad laboral (que puede o no deberse al actuar de un tercero) no se obtiene el derecho a recibir una prestación de origen laboral. La conexidad causal entre el hecho generador imputable, la contingencia de origen profesional y el daño, es evidente.

Otra situación en la que se arriba a consecuencias absurdas, es en los casos en que el empleador no había afiliado al trabajador que sufre el accidente de trabajo o enfermedad laboral a la ARL, casos en los cuales la Sala de Casación Laboral ha establecido que *“si habiendo tenido afiliado al causante a dicho sistema, el empleador no habría podido descontar de las prestaciones pagadas por la ARP*

---

<sup>213</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de julio del 2012. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Rad. 11001-3103-006-2002-00101-01.

*del monto de la indemnización a su cargo del empleador, con mayor razón cuando no lo afilió*<sup>214</sup>.

Esta situación lleva evidentemente a un pago doble por parte del empleador, y demuestra que una solución sistemática con el ordenamiento jurídico exige que, al menos en el caso del empleador, sea rotunda la prohibición de acumular las prestaciones que otorga la ARL con la indemnización plena de perjuicios. Esta indemnización comprenderá entonces, únicamente los conceptos que no se entiendan reparados con las prestaciones que se han otorgado, o la diferencia entre el monto de las prestaciones otorgadas y el perjuicio realmente sufrido.

Por último, se reitera la crítica realizada dentro de este capítulo a la interpretación que se hace del artículo 12 del decreto 1771 de 1994, en el sentido de entender que no es el empleador o el tercero el que puede descontar de la indemnización el monto de las prestaciones pagadas sino que puede darse uno de dos eventos: que la ARL demande al responsable por el total de la indemnización, retenga el monto de las prestaciones otorgadas a la víctima y entregue el resto a la víctima, o que sea la víctima la que demande al responsable, obtenga la indemnización plena de perjuicios y entregue a la ARL el monto que ella haya tenido que pagar.

---

<sup>214</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 16 de octubre de 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 42433.



## 5. CONCLUSIONES

Al inicio de este trabajo se formularon las preguntas que orientarían el mismo, en los siguientes términos: ¿Existe la posibilidad de que el sujeto que es declarado civil o administrativamente responsable y obligado a indemnizar los perjuicios causados con su conducta, descuenta de tal indemnización las sumas de dinero que hayan sido pagadas a la víctima directa o a las indirectas por la entidad aseguradora de riesgos laborales en virtud de haberse presentado una contingencia cubierta por este sistema, o tiene la víctima derecho a acumular las prestaciones que hayan sido pagadas por la ARL y la indemnización plena de perjuicios derivada de la responsabilidad civil o del Estado? Y en concordancia con lo anterior ¿Puede la ARL subrogarse para que el sujeto civil o administrativamente responsable le restituya las sumas de dinero que haya tenido que pagar por haberse presentado una de las contingencias cubiertas por el sistema?

Así, se dijo también que la respuesta a esta problemática debía darse a partir de la identificación de un criterio que permitiera resolver el problema en todos los escenarios o momentos, de una manera armónica con el ordenamiento jurídico y con los principios que lo orientan.

Una vez analizada la doctrina y la jurisprudencia que se ha ocupado del tema de la *acumulación de indemnizaciones* se propone como solución a la problemática la siguiente: En el caso del empleador condenado a indemnizar los perjuicios causados culposamente a un trabajador, no hay lugar a la acumulación y no hay lugar a la subrogación. En el caso del tercero ajeno al vínculo laboral que es declarado responsable y condenado a indemnizar a la víctima, no hay lugar a la acumulación y hay lugar a la subrogación. En ambos casos la víctima queda reparada íntegramente, sin que resulte enriquecida por la ocurrencia del hecho dañoso.

Ahora bien, ¿de la utilización de que criterios surge tal conclusión? Y ¿cómo resulta la misma armónica con el ordenamiento jurídico y con los principios que lo orientan?

En primer lugar se afirma que la conclusión resulta principalmente de entender el seguro de riesgos profesionales como un seguro de responsabilidad civil legalmente impuesto. Es este criterio, en relación con el carácter indemnizatorio de las prestaciones que otorga la ARL y con el de la subrogación, es determinante de la solución que se plantea.

De un lado, del origen del seguro de riesgos laborales se desprende que el mismo tiene un carácter indemnizatorio<sup>215</sup>. Con él se pretende proteger a la víctima dado el caso en que se materialice una contingencia de origen laboral, situación que en principio tendría que ser asumida por el empleador, porque existe una responsabilidad objetiva a su cargo debido a que es él quien se beneficia del riesgo al que somete a sus trabajadores. Esta situación no es desvirtuada por el hecho de que la indemnización sea tarifada. Adicionalmente, de entender que quien afilia y realiza las cotizaciones es el empleador, se deriva que es él el tomador y asegurado del seguro que contrata con la ARL.

Esta situación es suficiente para entender que, el empleador puede descontar de la indemnización plena de perjuicios los valores que hayan sido reconocidos por la ARL en virtud del pago de una determinada prestación, porque el empleador es quien ha trasladado su riesgo a la ARL para que ésta cubra determinadas contingencias, y porque teniendo en cuenta el carácter indemnizatorio de las prestaciones otorgadas por la ARL, permitir la acumulación implicaría prohiar una vulneración al principio de reparación integral que no estaría justificada. Adicionalmente, si se entiende que el empleador es el tomador y asegurado del

---

<sup>215</sup> Sobre esta apreciación se remite al lector al acápite 4.1.1 de este escrito, en el que se establece el origen del sistema de riesgos laborales, que anteriormente era concebido como una responsabilidad civil en cabeza del empleador y que era de tipo subjetivo, pero que posteriormente se convirtió en una responsabilidad objetiva basada en el riesgo- provecho. Por último, tal riesgo fue desplazado a las ARL por exigencia de la ley.

seguro de riesgos laborales, no será posible que la ARL repita contra él para recuperar lo pagado al trabajador por haberse materializado la contingencia. La teoría de los seguros no permite que el asegurador se vuelva contra el asegurado, y de autorizarse, el empleador terminaría pagando dos veces un mismo daño, porque ha realizado las respectivas cotizaciones a la aseguradora de riesgos laborales y, a su vez, tendría que pagarle a tal entidad el monto de las prestaciones que ésta hubiera otorgado a la víctima.

En este caso es importante recalcar que no hay una vulneración al principio de reparación integral, porque la víctima no queda enriquecida. De otro lado, del empleador responsable tampoco se puede predicar enriquecimiento porque precisamente es él quien ha venido pagando las cotizaciones para que a las víctimas directas o indirectas se les paguen las prestaciones a las que haya lugar, dado el caso en que se materialice una contingencia de origen laboral.

Ahora bien, aunque la situación es más compleja cuando el responsable es un tercero ajeno al vínculo laboral, los mismos criterios enunciados anteriormente pueden establecer una solución armónica con el ordenamiento jurídico visto en conjunto. En primer lugar, vale la pena aclarar que, desde el punto de vista de quienes expresan estas ideas, el carácter indemnizatorio sigue siendo un criterio que debe ser tenido en cuenta para resolver la *problemática de la acumulación de indemnizaciones*. En efecto, si se permite la acumulación, la víctima se está enriqueciendo, lo que vulnera el principio de reparación integral.

No obstante, ante la posibilidad de que, si no existe una norma especial que consagre la subrogación, el responsable pueda resultar enriquecido al no tener que indemnizar los daños que causó, se debe realizar una ponderación de los principios en pugna (enriquecimiento sin causa del responsable, de un lado, y reparación integral de la víctima, del otro) para establecer que es legítimo vulnerar el principio de reparación integral, indemnizando a la víctima más allá del daño realmente sufrido, con el fin de lograr que el responsable no quede impune.

Es por ello que la consagración de una norma que permita la subrogación de la ARL en la posición de la víctima, para reclamar al responsable el monto de las prestaciones que haya tenido que reconocer por haberse materializado una contingencia de origen laboral, es de gran importancia para lograr una solución de la problemática que armonice los principios que, de lo contrario, entran en pugna.

Se considera que el artículo 12 del decreto 1771 de 1994 consagra la posibilidad de subrogación a favor de la ARL para reclamar del tercero responsable el monto que haya tenido que sufragar a título de prestaciones. Así, la finalidad de la norma es que la ARL recupere el valor de las prestaciones que haya otorgado a la víctima, cuando existe un tercero ajeno al vínculo laboral al que puede atribuírsele alguno de los títulos de imputación existentes dentro del ordenamiento jurídico colombiano. Ninguna otra interpretación debe darse a esta norma; los intentos de la jurisprudencia por pretender que ella diga otra cosa han generado más caos que los problemas que han resuelto<sup>216</sup>. Adicionalmente, toda vez que esta norma no ha sido suspendida ni anulada, y que goza de una presunción de validez, debe ser aplicada.

Así entonces, se estima que al existir dicha norma, es claro que el tercero responsable puede descontar de la indemnización plena de perjuicios el monto de las prestaciones que han sido otorgadas por la ARL, y que la aseguradora puede recuperar del responsable lo que haya tenido que pagar. En este caso, se armonizan nuevamente los principios en pugna, porque la víctima queda reparada

---

<sup>216</sup> Se remite al lector a los capítulos 3 y 4 de este trabajo, en los cuales se mostró la interpretación que ha planteado la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y que ha sido acogida en algunas providencias proferidas por la Sala Civil de dicha Corporación, que se puede resumir de la siguiente manera: El responsable no puede descontar de la indemnización plena de perjuicios el monto correspondiente a las prestaciones que hayan sido otorgadas por la ARL. Es la ARL quien puede demandar al responsable pretendiendo una indemnización plena, de la cual descontaría las prestaciones que ha reconocido y entregaría el resto a la víctima. La otra opción que se plantea es que la víctima puede demandar directamente al responsable, y de la indemnización plena que obtenga tendría que entregar a la ARL el monto correspondiente a las prestaciones que la aseguradora le haya otorgado. Esta interpretación genera grandes confusiones en torno a la posibilidad de subrogación por parte de las ARL y puede llevar, fácilmente, a que se obligue al responsable a hacer un doble pago.

íntegramente, sin enriquecerse, y porque la conducta del responsable no queda impune.

La respuesta que se plantea, además de permitir la armonización de los principios que entran en pugna al analizar la *problemática de la acumulación de indemnizaciones* en el ámbito de los riesgos laborales, permite que la solución sea la misma en cualquiera de los eventos o momentos planteados al inicio de este escrito.

Así, sea el caso en que la víctima recibió en un primer momento una determinada prestación por parte de la ARL y posteriormente demandó al responsable para que le indemnizara plenamente, sea el caso en que la ARL que ha pagado una prestación demande al responsable pretendiendo recuperar el monto de las prestaciones que hubiera tenido que sufragar, o se presente el evento en el cual el responsable indemnice plenamente a la víctima directa y posteriormente sea demandado por la ARL en virtud de la acción de subrogación, la solución será idéntica:

En el primer evento existirá la posibilidad de descontar de la indemnización el monto pagado por la ARL a título de prestaciones. En el segundo, la ARL podrá repetir contra el tercero responsable, no así en el caso del empleador. Adicionalmente, en el tercer evento se habría materializado un enriquecimiento sin causa a favor de la víctima, motivo por el cual la ARL podría demandar directamente a ésta para que le devuelva el monto de las prestaciones por ella asumidas, sin que pueda obligarse al responsable a realizar un pago doble.

Para llegar a estas conclusiones se revisaron las posturas que han sido asumidas por la doctrina y por la jurisprudencia. En cuanto al análisis doctrinario realizado, se destacaron en el capítulo correspondiente, las múltiples posiciones que tanto autores nacionales como extranjeros han adoptado sobre la materia objeto de

investigación. Las posturas esgrimidas por Juan Carlos Gaviria Gómez<sup>217</sup>, Javier Tamayo Jaramillo<sup>218</sup> y Juan Gonzalo Flórez<sup>219</sup> son en alguna medida las acogidas en este trabajo, aunque las diferencias con las posiciones sostenidas por los dos últimos radican en la consideración en la que se fundamenta este trabajo, al señalar que las prestaciones otorgadas por las ARL tienen carácter indemnizatorio.

Adicionalmente, en el ámbito internacional, la solución a la que llegan los diferentes tratadistas es similar a la que se acoge en este trabajo y reposa sobre la imposibilidad de acumulación; ello basado en el criterio de subrogación y el carácter indemnizatorio de las prestaciones, reconociendo además que algunas legislaciones resuelven el problema de manera expresa.

Por otro lado, tras el análisis de las líneas jurisprudenciales tanto de las Salas de Casación Civil y Laboral de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, se puede afirmar que actualmente la jurisprudencia no es una fuente de derecho que brinde una respuesta clara y concisa frente a la materia abordada, ya que cada una de las Salas ha tenido posiciones propias, que difieren de lo sostenido por las otras, y que no se han mantenido constantes en el tiempo ni siquiera dentro de una misma Corporación, representando una situación de inseguridad jurídica, y de desigualdad.

Al respecto, es posible afirmar que sólo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha sido constante en la manera de resolver esta situación, entendiendo que no le es dable al empleador declarado culpable descontar del pago a su cargo de la indemnización plena y ordinaria de perjuicios el valor correspondiente a las prestaciones que han sido reconocidas por la ARL. No sucede lo mismo con las decisiones que desde el año 1991 han tomado la Sala

---

<sup>217</sup> GAVIRIA GÓMEZ, Juan Carlos. Op. cit.

<sup>218</sup> TAMAYO JARAMILLO, Javier. Op. cit.

<sup>219</sup> FLÓREZ, Juan Gonzalo. La acumulación de indemnizaciones, una revisión conceptual y jurisprudencial del tema- Parte 2. Op. cit.

Civil de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. De estas Corporaciones, por el contrario, no puede afirmarse una postura que se mantenga en el tiempo, pues sus decisiones se han ido modificando.

La postura actual de las Corporaciones tiende a permitir que la víctima acumule las prestaciones otorgadas por la ARL con la indemnización plena de perjuicios a cargo del empleador o de un tercero responsable. Aún la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, que ha determinado que la solución a la problemática depende del caso concreto<sup>220</sup>, señaló para la situación que se revisó en tal ocasión, que la acumulación era procedente. Por su parte, el Consejo de Estado (sea que la entidad pública haya sido demandado en calidad de empleadora o de tercera responsable) ha establecido que la víctima tiene derecho a acumular la indemnización plena de perjuicios con las prestaciones que hayan sido otorgadas por el empleador de la víctima (sea el mismo demandado o un tercero), por la Caja Nacional de Previsión Social, o por una ARL, sin distinguir entre cada uno de los casos.

Aunque esta diferencia excede los objetivos de este trabajo, debe señalarse que en los casos en los que es el empleador mismo quien paga prestaciones diferentes a la indemnización plena de perjuicios, no puede hablarse de subrogación con base en el artículo 12 del decreto 1771 de 1994, por lo que la solución que pudiera darse en ese caso tendría que darse teniendo en cuenta aspectos diferentes a los empleados en este trabajo.

La posición asumida por la jurisprudencia nacional contradice en gran medida los principios que orientan la *problemática de la acumulación de indemnizaciones*. De un lado, permite que la víctima sea indemnizada más allá del daño realmente sufrido, lo que resulta violatorio del principio de reparación integral. Adicionalmente deja en entredicho la posibilidad de subrogación existente en cabeza de las ARL y

---

<sup>220</sup> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de julio del 2012. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Rad. 11001-3103-006-2002-00101-01.

no establece con claridad los sujetos frente a los que podría aplicarse tal norma, lo que puede llevar a generar un doble pago a cargo del responsable. En tercer lugar, permitir la acumulación de los pagos es contrario al origen y la finalidad con la que fueron creadas las ARL cuando el responsable es el empleador.

Finalmente se pone a consideración del lector que la respuesta al problema requiere, en gran medida, de un cambio legislativo que establezca con claridad y de una manera armónica la solución que debe darse a la problemática planteada, para que este cambio oriente a la jurisprudencia sobre la manera en que debe ser resuelta la problemática que se plantea cuando al materializarse una contingencia de origen laboral, la ARL es llamada a otorgar unas determinadas prestaciones, y al mismo tiempo existe un sujeto civil o administrativamente responsable que debe indemnizar plenamente a la víctima. Mientras exista incertidumbre legislativa, existirá inseguridad jurídica, o lo que es peor, seguridad de que las sentencias proferidas por las altas Cortes cuando se encuentra inmersa la problemática que ocupa a este trabajo, no serán acordes con el ordenamiento colombiano.



## BIBLIOGRAFÍA

ALESSANDRI RODRÍGUEZ, Arturo. De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil, Imprenta Universal, Santiago, 1981.

BARROS BOURIE, Enrique. Tratado de Responsabilidad Extracontractual. Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 2006.

CAVANILLAS MÚGICA, Santiago José. Citado por DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. Civitas, Madrid, 1993, p.940.

DE ANGEL YAGÜEZ, Ricardo. Tratado de Responsabilidad Civil. Civitas, Madrid, 1993.

DE CUPIS, Adriano. El Daño. Teoría General de la Responsabilidad Civil. Traducción de la 2da Edición Italiana y Estudio Preliminar por Ángel Martínez Sarrión, Bosch, Casa Editorial S.A., Barcelona, 1975.

DÍEZ-PICAZO, Luis. Derecho de Daños. Civitas, Madrid, 1991.

HENAO, Juan Carlos. El Daño: Análisis comparativo de la responsabilidad extracontractual del Estado en derecho colombiano y francés. Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1998.

LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. El Derecho de los Jueces, Legis-Uniandes, Bogotá, 2002.

MAZEAUD, Henry; MAZEAUD León; TUNC, André. Tratado teórico y práctico de la responsabilidad civil delictual y contractual. Tomo I, Ediciones jurídicas Europa – América. Buenos Aires, Argentina, 1962.

REGLERO CAMPOS, Luis Fernando. Coord., Tratado de Responsabilidad Civil, Aranzadi, Navarra, 2002

TAMAYO JARAMILLO, Javier. Tratado de Responsabilidad Civil. Tomo II. Legis, Bogotá, 2007,

TAMAYO LOMBANA, Alberto, Manual de las Obligaciones, Derecho y Ley Ltda, Bogotá, 1979.

## **DECRETOS**

COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 2663. (05, agosto, 1950). Sobre Código Sustantivo del Trabajo. Bogotá. D.C.: El Presidente, 1950.

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 3170 de 1963.

COLOMBIA. PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA. Decreto 410. (27, marzo, 1971). Por el cual se expide el Código de Comercio. Bogotá. D.C.: El Presidente, 1971.

COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 1771. (3, agosto, 1994). Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 1295 de 1994. Bogotá. D.C.: El Presidente, 1994.

## **SENTENCIAS**

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 12 de septiembre de 1991. C.P. Julio Cesar Uribe Acosta. Rad. 6572.

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero de 1995. C.P. Julio César Uribe Acosta. Rad. 9550.

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre del 2002. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad.19001-23-31-000-1995-3007-01 (14207).

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27 de noviembre de 2002. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 52001-23-31-000-1994-3090-01 (13090).

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 18 de marzo de 2004. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 76001-23-31-000-1994-00069-01 (14338).

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 14 de julio de 2004. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Rad. 14308.

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 24 de febrero del 2005. Rad. 15125. C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 10 de agosto del 2005. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 85001-23-31-000-1997-00448-01 (16205).

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 5 de diciembre de 2005. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Rad. 14731.

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 7 de junio de 2007. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 15722.

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 30 de agosto de 2007. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. 15724.

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 24 de abril de 2008. M.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. 15981.

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 1 de octubre del 2008. C.P. Myriam Guerrero de Escobar. Rad. 76001-23-31-000-1995-01579-01(16322).

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 25 de febrero del 2009. C.P. Myriam Guerrero de Escobar. Rad. 18001-23-31-000-1995-05743-01(15793).

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril del 2010. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 13001-23-31-000-1994-09971-01.

COLOMBIA. CONSEJO DE ESTADO. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril del 2010. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 25000-23-26-000-1996-03096-01.

COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C – 4533 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 3 de septiembre de 1991. M.P. Pedro Lafont Pianetta Gaceta No. 2451.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 24 de junio de 1996. M.P. Pedro Lafont Pianetta. Rad. 4662.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 22 de octubre de 1998. M.P. José Fernando Ramírez Gómez Rad. 4866.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil, Sentencia del 4 de septiembre de 2000. M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles. Rad. 5260.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 19 de septiembre del 2008. Sentencia sustitutiva del 9 de julio del 2010. M.P. William Namén Vargas Rad. 11001-3103-035-1999-02191-01.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Civil. Sentencia del 9 de julio del 2012. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Rad. 11001-3103-006-2002-00101-01 (Sentencia Sustitutiva)

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 21 de marzo de 1991. M.P. Hugo Suescún Pujols. Rad. 4097.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral, Sentencia del 18 de mayo de 1992. M.P. Hugo Suescún Pujols. Rad. 4941.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 10 de marzo de 1993. M.P. Manuel Enrique Daza Álvarez, Rad. 5480.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 13 de julio de 1993. M.P. Hugo Suescún Pujols. Rad. 5918.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sala Plena. Sentencia del 12 de noviembre de 1993. M.P. Rafael Méndez Arango Rad. 5868.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 31 de mayo de 1994 Rad. 6569.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 17 de octubre de 1995. M.P. Hugo Suescún Pujols. Rad. 7716.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 8 de octubre de 1997. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Rad. 9817.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 12 de junio de 1998. M.P. Francisco Escobar Henríquez. Rad. 10643.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 9 de noviembre de 2000. M.P. Germán Valdés Sánchez. Rad. 14847.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 6 de junio del 2002. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 17251.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 25 de julio del 2002. M.P. José Roberto Herrera Vergara. Rad. 18520.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 7 de marzo del 2003. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 18515.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 8 de agosto del 2003. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 20186.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 10 de marzo del 2005. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López. Rad. 23656.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 16 de marzo de 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 20240.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 24 de junio de 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 23643.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 4 de julio del 2006. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 27501.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 15 de mayo de 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 28686.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 2 de octubre de 2007. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 29644.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 17 de octubre de 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 29609.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 22 de octubre de 2007. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 27736.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 3 de junio del 2009 M.P. Luis Javier Osorio López Rad. 35121.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 26 de enero de 2010. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López. Rad. 35271.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 9 de marzo de 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 37064.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 7 de julio de 2010. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 31646.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 30 de noviembre de 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 35158.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 1 de marzo de 2011. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 36815.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 13 de marzo de 2012. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 39798.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 20 de junio de 2012. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 42374.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 14 de agosto de 2012. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 39446.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 16 de octubre de 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 42433.

COLOMBIA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 6 de noviembre de 2013. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Rad. 38377.

## **PUBLICACIONES**

CUELLAR VALENCIA, Luis Alfonso. La culpa del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo. En: Responsabilidad Civil y del Estado. No 17. Agosto 2004.

FLÓREZ, Juan Gonzalo. La acumulación de indemnizaciones, una revisión conceptual y jurisprudencial del tema- Parte I. En: Responsabilidad Civil y del Estado. No 28. Noviembre 2010.



FLÓREZ, Juan Gonzalo. La acumulación de indemnizaciones, una revisión conceptual y jurisprudencial del tema- Parte 2. En: Responsabilidad Civil y del Estado. No 29. Agosto 2011.

GARCÍA FRANCO, Néstor Alejandro. Procedencia de acumulación de indemnizaciones y las prestaciones derivadas del sistema general de riesgos profesionales. En: Responsabilidad Civil y del Estado, Tomo 19. Noviembre 2005.

GAVIRIA GÓMEZ, Juan Carlos. Problema Relativo a la acumulación de indemnizaciones con las prestaciones a cargo de la seguridad social: La indemnización de perjuicios por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por culpa patronal. Disponible en Internet: <[http://www.aplegis.com/documentosoffice/medellin\\_civilseguros/INDEMNIZACION\\_PERJUICIOS.pdf](http://www.aplegis.com/documentosoffice/medellin_civilseguros/INDEMNIZACION_PERJUICIOS.pdf)>.

GIL BOTERO, Enrique. Concurrencia de la Indemnización y las Prestaciones Sociales. En: Responsabilidad Civil y del Estado No. 16. Febrero 2004.

HOYOS DUQUE, Ricardo. El cúmulo de indemnizaciones. En: Responsabilidad Civil y del Estado No. 13. Librería Jurídica Sánchez R. Ltda., Medellín, Noviembre del 2002.

LUQUE, Manuel, GÓMEZ, Carlos y RUIZ, Juan Antonio. Accidentes de Trabajo y Responsabilidad Civil, España, Disponible en Internet: <[www.indret.com/pdf/021\\_es.pdf](http://www.indret.com/pdf/021_es.pdf)>.

OSPINA BLANDÓN, Frank José. La responsabilidad derivada del acaecimiento del riesgo profesional, la acumulación de indemnizaciones y la subrogación en contra del responsable. En: Responsabilidad Civil y del Estado No. 29, Díké, Bogotá, agosto 2011.

SOLARTE RODRÍGUEZ, Arturo. El principio de reparación integral del daño en el derecho contemporáneo. En: ECHEVERRI URUBURO, Álvaro, Dir.; GUAL ACOSTA, José Manuel y ACOSTA RODRÍGUEZ, Joaquín Emilio, Coord.

Responsabilidad Civil y Negocio Jurídico. Tendencias del Derecho Contemporáneo, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, 2011.

TOSCANI GIMÉNEZ, Daniel. El derecho de los trabajadores a reclamar en vía civil como consecuencia de los daños sufridos en un accidente laboral o por enfermedad laboral. España, Disponible en internet: <<http://riesgoslaborales.wke.es/articulos/responsabilidad-civil-del-empresario-y-terceros-derivada-del-accidente-de-trabajo>>.

### **NORMAS TECNICAS.**

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Documentación: Presentación de Tesis, Trabajos de Grado y Otros Trabajos de Investigación. NTC-ISO 1486. Bogotá D.C.: El Instituto, 2008.

## Anexo 1. Metodología

Aunque el ordenamiento jurídico colombiano es un sistema de derecho continental en donde el papel preponderante lo tiene la Ley entendida desde el punto de vista formal, para nadie es un secreto que la jurisprudencia como criterio auxiliar ha cobrado gran relevancia, hasta el punto de convertirse en el centro de las discusiones jurídicas tanto en sede judicial como en general en el ámbito doctrinario.

No es posible hoy en día conocer o discutir sobre cualquier institución jurídica o problema jurídico sin hacer referencia a la jurisprudencia. Es por este motivo que para el desarrollo de este trabajo se optó por realizar un análisis jurisprudencial sobre la posibilidad de que las víctimas acumulen indemnizaciones derivadas de la declaratoria de responsabilidad civil o del Estado y prestaciones que otorga el sistema de riesgos laborales.

Para realizar los objetivos propuestos en esta investigación se tuvo en cuenta una metodología dual. De un lado, se revisó la doctrina existente en la materia teniendo como base los artículos de la revista *Responsabilidad Civil y del Estado* que edita el Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado (IARCE) que tratan la problemática propuesta. A partir de estas publicaciones, se estudiaron la mayoría de los autores comúnmente citados, para encontrar nuevos autores que trataran el problema que ocupa al trabajo.

En el caso de la jurisprudencia, que fue el eje central de la investigación, se realizó un estudio dinámico, debido a que el análisis de la misma no debe hacerse a partir de la revisión de sentencias aisladas sino que requiere cierta sistematicidad. Por

ello, se parte de la guía que otorga el libro *El Derecho de los Jueces*, escrito por el profesor Diego Eduardo López Medina.<sup>1</sup>

Por eso, se determinó que la forma de estudiar la jurisprudencia debe partir de la realización de líneas jurisprudenciales, cumpliendo con los requisitos que para ello se demandan, a saber: *“(i) acotar el patrón fáctico concreto (...) (ii) identificar las sentencias más relevantes (que más adelante denominaremos “sentencias hito”) dentro de la línea jurisprudencial, (iii) finalmente es necesario construir teorías estructurales (i.e. narraciones jurídicas sólidas y comprensibles) que permitan establecer la relación entre esos varios pronunciamientos jurisprudenciales.”*<sup>2</sup>

Así entonces, el patrón fáctico se determinó en este trabajo por medio del problema jurídico planteado<sup>3</sup>. Siendo este el punto de partida, resultó necesario

---

<sup>1</sup> Aunque este trabajo se apoyó en gran medida en cuanto a su metodología en la técnica planteada por: LÓPEZ MEDINA, Diego Eduardo. *El Derecho de los Jueces*, Legis-Uniandes, Bogotá, 2002, se aparta en algunas de sus apreciaciones. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que la técnica a la que se hace referencia en dicha obra se basa en la creación de líneas jurisprudenciales de la Corte Constitucional. El trabajo que se presenta no plantea líneas relacionadas con un derecho fundamental o que puedan establecer un balance constitucional. No obstante, se considera que la metodología empleada por el autor puede ser utilizada también en el marco del análisis y estudio de sentencias proferidas por las otras Corporaciones, debido a que el derecho de origen judicial tiene los mismos elementos sea que se trate de providencias proferidas por la Corte Constitucional, por la Corte Suprema de Justicia o por el Consejo de Estado.

Por otro lado, el autor parte de una sentencia o punto arquimédico de apoyo, es decir, de encontrar una sentencia reciente hito que trate el problema, para a partir de las sentencias citadas por ésta construir una línea jurisprudencial utilizando la “ingeniería reversa”, que no implica nada diferente a revisar el nicho citacional de la sentencia arquimédica para encontrar otras sentencias que traten la misma problemática planteada, y continuar con el ejercicio descrito a partir de las providencias anteriores, hasta conformar la línea jurisprudencial. En este trabajo la búsqueda inicial no se limita a detectar una sentencia reciente, y a revisar las sentencias a que ésta hace referencia, debido a que esta forma de búsqueda podría no resultar tan exhaustiva como se pretendía, dejando muchas sentencias relevantes por fuera del análisis. Por este motivo, se acudió a los criterios de búsqueda para encontrar las sentencias relevantes en materia de *acumulación de indemnizaciones*. A partir de las sentencias encontradas sí se analizó el nicho citacional, para contar con la seguridad de que todas las sentencias relevantes hubieran sido revisadas, y de lo contrario, para agregar las faltantes a la investigación.

<sup>2</sup> Ibid., p.140.

<sup>3</sup> Se limitó la búsqueda al sistema de riesgos laborales y no al sistema de seguridad social en general, como ha tendido a hacerse en otros estudios sobre la acumulación de indemnizaciones, porque se considera que la estructura del sistema de riesgos laborales y en particular el artículo 12 del Decreto 1771, que consagra una subrogación por parte de la aseguradora de riesgos laborales que paga prestaciones cuando media la responsabilidad civil de un tercero, hacen que la discusión

encontrar las sentencias que se han ocupado del tema, tanto en la Sala Civil como en la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y al interior del Consejo de Estado. Para ello se utilizaron dos buscadores jurisprudenciales: LexBase y el Buscador de Jurisprudencia de la Rama Judicial.

Los criterios de búsqueda utilizados fueron los siguientes: “Acumulación de indemnizaciones”, “Riesgos Profesionales y Responsabilidad Civil”, “Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil”, “ARP y Responsabilidad Civil”, “ARL y Responsabilidad Civil”, “Subrogación y Riesgos Profesionales”, “Subrogación y Riesgos Laborales”, “Subrogación y ARP”, “Subrogación y ARL”, “Doble Indemnización”, “Culpa del Empleador y Riesgos Profesionales”, “Culpa del Empleador y Riesgos Laborales”, “Culpa del Empleador y ARP”, “Culpa del Empleador y ARL”.

Esta búsqueda inicial arrojó como resultado 852 sentencias que podrían resultar relevantes para el estudio, que son filtradas según Magistrado Ponente, Fecha y Radicado, para eliminar las sentencias repetidas. Todas estas sentencias fueron revisadas para establecer si trataban el tema objeto de este trabajo, y de las sentencias relevantes<sup>4</sup> se elaboraron fichas jurisprudenciales en las cuales se dio cuenta de los hechos, las decisiones en las otras instancias, las consideraciones relevantes para el tema realizadas por la respectiva Corte, la decisión y las normas y jurisprudencia citadas. La relevancia de estas fichas radica en que al analizar jurisprudencia es necesario tener en cuenta las decisiones como un todo, sin tratar de analizar las normas como si se tratara de derecho legislado. Sobre este punto Diego Eduardo López Medina ha manifestado:

---

sobre la *acumulación de indemnizaciones* tenga un aspecto adicional relevante que debe ser tenido en cuenta para determinar la procedencia de la acumulación, aspecto este que no está presente en los demás subsistemas de la seguridad social.

<sup>4</sup> 6 sentencias proferidas por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia resultan relevantes; 35 sentencias de la Sala de Casación Laboral de la misma Corporación discuten también la problemática planteada. Por su parte, 16 sentencias del Consejo de Estado son tenidas en cuenta en este trabajo para establecer la posición de dicha Corporación frente al tema de la “acumulación de indemnizaciones”. Estas fichas aparecen como anexo número 4.

*“El primer cambio fundamental consiste en evitar la reducción de la creación del derecho jurisprudencial al modelo tradicional de la regla legislada. Y el primer paso en este cambio fundamental consiste, precisamente en restablecer la plenitud del texto jurisprudencial, a menudo mutilada en sus hechos y decisión por parte del tradicionalismo de fuentes. La sentencia Judicial, por tanto, vuelve a constituirse en la relación compleja entre tres grandes partes: Hechos, Consideraciones o Argumentos de la Corte, Decisión.*

*Solo esta recomposición de la integridad textual de la sentencia permite entender las técnicas que la Corte Constitucional ha venido utilizando en la lectura e interpretación de sus precedentes”<sup>5</sup>*

Con base en la información contenida en las fichas de jurisprudencia, se construyeron en tres líneas jurisprudenciales, cada una da cuenta de la forma en que se ha tratado el problema expuesto en la Corporación en la cual fueron proferidas las respectivas sentencias. Las líneas fueron graficadas en el tercer capítulo del trabajo, de la manera en que se recomienda en Libro El Derecho de los Jueces<sup>6</sup>, con la finalidad de identificar “los patrones de cambio decisonal a lo largo de la jurisprudencia” e identificar la solidez las líneas. Una línea jurisprudencial será sólida si la respectiva Sala ha tomado la misma decisión desde hace algún tiempo en todas las ocasiones en que ha tenido que resolver sobre la *acumulación de indemnizaciones*.

Por último, a partir de la doctrina que se ha ocupado de la materia, se intentó plantear posibilidades para un nuevo entendimiento de la problemática, que pueda llevar a una solución más acorde con el ordenamiento jurídico visto como sistema y con los principios que lo orientan.

---

<sup>5</sup> Ibid., p.198 Se reitera que, desde el punto de vista de quienes realizan este trabajo, las consideraciones realizadas por el autor son extensivas a la jurisprudencia de las demás Corporaciones diferentes de la Corte Constitucional.

<sup>6</sup> Ibid., p. 142 y ss.

Anexo 2. Tabla de sentencias que aparecen con los criterios de búsqueda

Buscador	Criterio de Búsqueda	No. de resultados	Sentencias que aparecen con el criterio de búsqueda
Lex Base Corte Suprema de Justicia	Acumulación de indemnizaciones	10	<p>1. CSJ-L Salvamento de voto Mag. Eduardo López Villegas (Rad. 23656)</p> <p>2. CSJ-L Sentencia del 18 de septiembre de 1995 M.P. Francisco Escobar Henríquez Rad. 7531</p> <p>3. CSJ-C Sentencia del 22 de octubre de 1998. M.P. José Fernando Ramírez Gómez Rad. 4866</p> <p>4. CSJ-L Sentencia del 7 de mayo de 1997 M.P. Rafael Méndez Arango Rad. 9389</p> <p>5. CSJ-L Sentencia del 12 de junio de 1998 M.P. Francisco Escobar Henríquez Rad. 10643</p> <p>6. CSJ-L Sentencia del 26 de enero del 2010. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López Rad. 35271</p> <p>7. CSJ-L Sentencia del 30 de junio del 2005. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 24740</p> <p>8. CSJ-L Sentencia del diecisiete de octubre de 1995. M.P. Hugo Suescún Pujols Rad. 7716</p> <p>9. CSJ-L Sentencia del 3 de junio del 2009 M.P. Luis Javier Osorio López Rad. 35121</p> <p>10. CSJ-C y A. Sentencia del 12 de mayo del 2000. M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles. Rad. 5260</p>
	Riesgos profesionales y responsabilidad civil	32	<p>1. CSJ-L Sentencia del 6 de marzo del 2012 M.P. Elsy Del Pilar Cuello Calderón. Rad. 31948</p> <p>2. CSJ-L Sentencia del 27 de mayo del 2009. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 34575</p> <p>3. CSJ-L Sentencia del 27 de mayo del 2009. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 34575</p>

			<p>4. CSJ-L Sentencia del 4 de agosto del 2009 M.P. Elsy Del Pilar Cuello Calderón. Rad. 34806</p> <p>5. CSJ-C Sentencia del 22 de octubre de 1998. M.P. José Fernando Ramírez Gómez. Rad. 4866</p> <p>6. CSJ-L Sentencia del 12 de marzo del 2007. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 29717</p> <p>7. CSJ-L Sentencia del 4 de agosto del 2009 M.P. Elsy Del Pilar Cuello Calderón. Rad. 35744</p> <p>8. CSJ-C Sentencia del 4 de mayo del 2009 M.P. William Namén Vargas REF.: 05001-3103-002-2002-00099-01</p> <p>9. CSJ-C Sentencia del 15 de diciembre del 2011. M.P. William Namén Vargas Ref.: 11001-3103-009-2005-00147-01</p> <p>10. CSJ-L Sentencia del 24 de junio del 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez Rad. 23643</p> <p>11. CSJ-L Sentencia del 2 de mayo del 2003. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 19854</p> <p>12. CSJ- L Sentencia del 8 de mayo del 2013 M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve rad. 45799</p> <p>13. CSJ-L Sentencia del 9 de marzo del 2010. M.P. Luis Javier Osorio López Rad. 37440</p> <p>14. CSJ-L Sentencia del 16 de marzo del 2010 M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza Rad. 36922</p> <p>15. CSJ-L Sentencia del 15 de junio del 2004. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 21905</p> <p>16. CSJ-L Sentencia del 10 de julio del 2013. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Rad. 42561</p>
--	--	--	---



			<p>17. CSJ- L Sentencia del 18 de agosto de 1999 M.P. Rafael Méndez Arango Rad. 12058</p> <p>18. CSJ-C Sentencia del 19 de diciembre del 2008. M.P. William Namén Vargas. REF.: 11001-3103-035-1999-02191-01</p> <p>19. CSJ-C Sentencia del 22 de noviembre del 2011. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Ref: Exp. 05001-3103-005-1999-17985-01</p> <p>20. CSJ-L Sentencia del 16 de octubre del 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 42433</p> <p>21. CSJ-C Sentencia del 24 de noviembre del 2008. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Ref: Exp. N° 0500131030101998-00529-01</p> <p>22. CSJ-L Sentencia del 10 de marzo del 2005. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López. Rad. 23656</p> <p>23. CSJ-L Sentencia del 10 de septiembre de 1997- M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Rad. 9806</p> <p>24. CSJ-C. Sentencia del 9 de julio del 2010. M.P William Namén Vargas. Ref.: Expediente 11001-3103-035-1999-02191-01</p> <p>25. CSJ-L Sentencia del 17 de abril del 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 39259</p> <p>26. CSJ-L Sentencia del 19 de noviembre del 2002. M.P. Germán Valdez Sánchez. Rad. 18076</p> <p>27. CSJ-L Sentencia del 26 de marzo del 2014. M.P. Gustavo Hernando López Algarra. Rad. 39779</p> <p>28. CSJ-L Sentencia del 22 de octubre del 2007. M.P. Luis Javier Osorio López y Gustavo</p>
--	--	--	---

			<p>José Gnecco Mendoza. Rad. 27736</p> <p>29. Gaceta Judicial. La responsabilidad del Transportador Aéreo por hechos acaecidos antes de la vigencia del nuevo código de comercio. (sent. 1974)</p> <p>30. Gaceta Judicial. La responsabilidad del Transportador Aéreo por hechos acaecidos antes de la vigencia del nuevo código de comercio. (sent. 1974)</p> <p>31. CSJ-C Sentencia del 17 de noviembre del 2011. M.P. William Namén Vargas. Referencia: 11001-3103-018-1999-00533-01</p> <p>32. CSJ-C Sentencia del 24 de agosto del 2009. M.P. William Namén Vargas. Referencia: Expediente 11001-3103-038-2001-01054-01</p>
	<b>Riesgos laborales y responsabilidad civil</b>	5	<p>1. CSJ-L Sentencia del 24 de junio del 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 23643</p> <p>2. CSJ-L Sentencia del 10 de marzo del 2005. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López. Rad. 23656</p> <p>3. CSJ-L Sentencia del 1 de octubre de 1997 M.P. Germán G. Valdés Sánchez. Rad. 9893</p> <p>4. CSJ-L Sentencia del 26 de marzo del 2014. M.P. Gustavo Hernando López Algarra. Rad. 39779</p> <p>5. CSJ-L Sentencia del 22 de octubre del 2007. M.P. Luis Javier Osorio López Y Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 27736</p>
	<b>ARP y responsabilidad civil</b>	17	<p>1. CSJ-L Sentencia del 4 de agosto del 2009 M.P. Elsy Del Pilar Cuello Calderón. Rad. 35744</p> <p>2. CSJ-L Sentencia del 23 de septiembre del 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 32631</p> <p>3. CSJ- L Sentencia del 8 de mayo del 2013 M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve rad. 45799</p>

			<p>4. CSJ-L Sentencia del 9 de marzo del 2010. M.P. Luis Javier Osorio López Rad. 37440</p> <p>5. CSJ-L Sentencia del 15 de junio del 2004. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 21905</p> <p>6. CSJ-C Sentencia del 12 de agosto del 2011. M.P. Edgardo Villamil Portilla. Ref.: Exp. No. 63001-31-03-001-2007-00206-01</p> <p>7. CSJ-L Sentencia del 11 de marzo del 2008. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 30821</p> <p>8. CSJ-L Sentencia del 16 de octubre del 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 42433</p> <p>9. CSJ-L Sentencia del 10 de marzo del 2005. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López. Rad. 23656</p> <p>10. CSJ-L Sentencia del 6 de marzo del 2012 M.P. Elsy Del Pilar Cuello Calderón. Rad. 31948</p> <p>11. CSJ-L Sentencia del 26 de marzo del 2014. M.P. Gustavo Hernando López Algarra. Rad. 39779</p> <p>12. CSJ-L Sentencia del 16 de marzo del 2010 M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza Rad. 36922</p> <p>13. CSJ-L Recurso de anulación. 15 de julio del 2008. M.P. Elsy Del Pilar Cuello Calderón. Rad. 35927</p> <p>14. CSJ-L Sentencia del 22 de octubre del 2007. M.P. Luis Javier Osorio López y Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 27736</p> <p>15. CSJ-L Sentencia del 27 de mayo del 2009. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 34575</p>
--	--	--	---

			16. CSJ-L Sentencia del 27 de mayo del 2009. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 34575
			17. CSJ-L Sentencia del 12 de marzo del 2007. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 29717
	<b>ARL y responsabilidad civil</b>	0	N/A
	<b>Subrogación y riesgos profesionales</b>	93	<p>1.CSJ-L Salvamento Parcial de Voto. M. Eduardo López Villegas. Rad. 23656. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López</p> <p>2.CSJ-C Sentencia del 22 de octubre de 1998. M.P. José Fernando Ramírez Gómez. Rad. Expediente No. 4866</p> <p>3.CSJ-L Sentencia del 23 de mayo del 2006. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 28664.</p> <p>4.CSJ-L Sentencia del 8 de mayo del 2002. M.P. Francisco Escobar Henríquez. Rad. 18098</p> <p>5.CSJ-L Sentencia del 13 de marzo del 2012. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 39798.</p> <p>6.CSJ-L Sentencia del 26 de enero del 2010. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López. Rad. 35271</p> <p>7.CSJ-L Sentencia del 4 de junio del 2008. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 33920.</p> <p>8.CSJ-L Sentencia del 8 de mayo del 2007. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 29631</p> <p>9.CSJ-L. Sentencia del 7 de septiembre del 2010. M.P. Eduardo López Villegas. Gómez. Rad. 37252</p> <p>10.CSJ-L. Sentencia del 10 de diciembre del 2007. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 28399.</p> <p>11.CSJ-L. Sentencia del 22 de marzo del 2006. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 27403</p>

			<p>12.CSJ-L Sentencia del 3 de junio del 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 35121.</p> <p>13.CSJ-L Sentencia del 3 de mayo del 2011. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 41329</p> <p>14.CSJ-L Sentencia del 23 de noviembre del 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 37754.</p> <p>15.CSJ-L Sentencia del 3 de marzo de 1999. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Rad. 11428.</p> <p>16.CSJ-L Sentencia del 6 de octubre de 1998. M.P. Rafael Méndez Arango. Rad. 10978</p> <p>17.CSJ-L Sentencia del 9 de agosto de 1996. M.P. Francisco Escobar Henríquez. Rad. 8190</p> <p>18.CSJ-L Sentencia del 28 de junio del 2005. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 24670.</p> <p>19.CSJ-L Sentencia del 28 de mayo del 2008. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 30462</p> <p>20.CSJ-L Sentencia del 7 de febrero del 2012. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Rad. 47476</p> <p>21.CSJ-L Sentencia del 22 de junio de 2010. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 36098</p> <p>22.CSJ-L Sentencia del 22 de abril del 2008. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 32286</p> <p>23.CSJ-L Sentencia del 11 de noviembre del 2008. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 32517</p> <p>24.CSJ-L Sentencia del 2 de octubre del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 28790</p>
--	--	--	---

			<p>25.CSJ-L Sentencia del 4 de mayo del 2005. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 24174</p> <p>26.CSJ-L Sentencia del 30 de septiembre del 2002. M.P. Luis Gonzalo Toro Correa. Rad. 18427</p> <p>27.CSJ-L Sentencia del 5 de noviembre de 1997. M.P. Ramón Zúñiga Valverde. Rad. 9708</p> <p>28.CSJ-L Sentencia del 7 de febrero de 1996. M.P. José Roberto Herrera Vergara. Rad. 7710</p> <p>29.CSJ-L Sentencia del 12 de agosto de 2013. M.P. Germán G. Valdés Sánchez. Rad. 20887</p> <p>30.CSJ-L Sentencia del 14 de septiembre de 1999. M.P. Luis Gonzalo Toro Correa. Rad. 11739</p> <p>31.CSJ-L. Sentencia del 14 de septiembre de 1999. M.P. Luis Gonzalo Toro Correa. Rad. 11739</p> <p>32.CSJ-L Sentencia del 17 de febrero del 2009. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 31080</p> <p>33.CSJ-L. Sentencia del 12 de julio del 2004. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 21937</p> <p>34.CSJ-L Sentencia del 7 de marzo del 2003. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 18515</p> <p>35.CSJ-L Sentencia del 19 de junio del 2009. M.P. Francisco Escobar Henríquez. Rad. 18302</p> <p>36.CSJ-L Sentencia del 8 de agosto del 2003. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 20186</p> <p>37.CSJ-L Sentencia del 1 de marzo del 2010. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 35353</p> <p>38.CSJ-L Sentencia del 25 de julio del 2002. M.P. José Roberto Herrera Vergara. Rad. 18520</p>
--	--	--	---

			<p>39.CSJ-L Sentencia del 18 de marzo del 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 35595</p> <p>40.CSJ-L Sentencia del 9 de noviembre del 2000. M.P. Germán G. Valdés Sánchez. Rad. 14847</p> <p>41.CSJ-L Sentencia del 26 de febrero de 1997. M.P. Ramón Zúñiga Valverde. Rad. 8995</p> <p>42.CSJ-L Sentencia del 9 de marzo del 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 36039</p> <p>43.CSJ-L Sentencia del 21 de junio del 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 36227</p> <p>44.CSJ-L Sentencia del 2 de febrero del 2010. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 35012</p> <p>45.CSJ-L Sentencia del 13 de febrero del 2007. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 28865.</p> <p>46.CSJ-L Sentencia del 20 de noviembre del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 30233</p> <p>47.CSJ-L Sentencia del 6 de septiembre de 2004. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 23141</p> <p>48.CSJ-L Sentencia del 14 de agosto del 2002. M.P Isaura Vargas Díaz. Rad. 17997</p> <p>49.CSJ-L Sentencia del 29 de junio del 2001. M.P. Rafael Méndez Arango. Rad. 15582</p> <p>50.CSJ-L Sentencia del 9 de diciembre de 1999. M.P. José Roberto Herrera Vergara. Rad. 12618</p> <p>51.CSJ-L Sentencia del 18 de agosto de 1998. M.P. Rafael Méndez Arango y Jorge Iván Palacio Palacio. Rad. 10630</p> <p>52.CSJ-L Sentencia del 18 de noviembre de 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 37683</p> <p>53.CSJ-L Sentencia del 22 de abril del 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 29933</p>
--	--	--	---

			<p>54.CSJ-L Sentencia del 17 de junio del 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 31939</p> <p>55.CSJ-L Sentencia del 16 de marzo del 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 20240.</p> <p>56.CSJ-L Sentencia del 11 de diciembre del 2002. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 18931</p> <p>57.CSJ-L Sentencia del 6 de septiembre de 1999. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 12054</p> <p>58.CSJ-L Sentencia del 15 de diciembre de 1999. M.P. Rafael Méndez Arango. Rad. 12699</p> <p>59.CSJ-L Sentencia del 15 de mayo del 2013. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 45115.</p> <p>60.CSJ-L Sentencia del 6 de septiembre de 1999. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 12054</p> <p>61.CSJ-L Sentencia del 1 de diciembre del 2009. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 33558.</p> <p>62.CSJ-L Sentencia del 30 de agosto del 2005. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 24980.</p> <p>63.CSJ-L Sentencia del 14 de julio del 2000. M.P. Rafael Méndez Arango. Rad. 13720.</p> <p>64.CSJ-L Sentencia del 8 de octubre de 1997. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Rad. 9817.</p> <p>65.CSJ-L Sentencia del 31 de julio del 2013. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 41220</p> <p>66.CSJ-L Sentencia del 6 de marzo del 2012. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 41368.</p> <p>67.CSJ-L Sentencia del 18 de agosto del 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 36205.</p>
--	--	--	--



			<p>68.CSJ-L Sentencia del 18 de septiembre del 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 36205.</p> <p>69.CSJ-L Sentencia del 2 de octubre del 2007. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 29644.</p> <p>70.CSJ-L Sentencia del 4 de julio del 2002. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 17044.</p> <p>71.CSJ-L Sentencia del 5 de noviembre de 1998. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Rad. 11081</p> <p>72.CSJ-L Sentencia del 10 de julio del 2013. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Rad. 42561</p> <p>73.CSJ-L Sentencia del 6 de febrero de 2013. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 41182</p> <p>74.CSJ-L Sentencia del 22 de marzo del 2001. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 15113</p> <p>75.CSJ-L Sentencia del 16 de mayo del 2012. M.P. Luis Gonzalo Toro Correa. Rad. 15152.</p> <p>76.CSJ-L Sentencia del 31 de enero del 2006. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 25330.</p> <p>77.CSJ-L Sentencia del 14 de marzo del 2003. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 19458</p> <p>78.CSJ-L Sentencia del 24 de enero del 2012. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 36074.</p> <p>79.CSJ-L Sentencia del 9 de marzo del 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 38418.</p> <p>80.CSJ-L Sentencia del 7 de julio del 2010. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 31646.</p>
--	--	--	---

			81.CSJ-L Sentencia del 24 de junio del 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 23643.
			82.CSJ-L Sentencia del 16 de octubre del 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 42433
			83.CSJ-L Sentencia del 23 de febrero del 2010. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 33265
			84.CSJ-L Sentencia del 10 de marzo del 2005. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López. Rad. 23656
			85.CSJ-L Sentencia del 20 de abril del 2010. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez Rad. 33539
			86.CSJ-L Sentencia del 22 de febrero del 2011. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 34820.
			87.CSJ-L Sentencia del 30 de noviembre del 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 35158.
			88.CSJ-L Sentencia del 21 de mayo del 2008. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 33087
			89.CSJ-L Sentencia del 21 de mayo del 2008. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 33087
			90.CSJ-L Sentencia del 21 de mayo del 2008. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 33087
			91.CSJ-L Sentencia del 21 de febrero del 2005. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 23117.
			92.CSJ-L Sentencia del 29 de marzo del 2000. M.P. José Roberto Herrera Vergara. Rad. 13521
			93.CSJ-L Sentencia del 22 de octubre del 2007. M.P. Luis Javier Osorio López y Gustavo

			José Gnecco Mendoza. Rad. 27736.
	<b>Subrogación y riesgos laborales</b>	131	<p>1. CSJ-L Sentencia del 18 de agosto del 2004. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 22253.</p> <p>2. CSJ-L Sentencia del 18 de noviembre del 2004. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 22979.</p> <p>3. CSJ-L Sentencia del 18 de marzo del 2004. M.P. Luis Javier Osorio López . Rad. 21624.</p> <p>4. CSJ-L Sentencia del 26 de abril del 2007. M.P. Luis López . Rad. 30280.</p> <p>5. CSJ-L Sentencia del 21 de marzo del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 29091.</p> <p>6. CSJ-L Sentencia del 15 de abril del 2004. M.P. Fernando Vásquez Botero . Rad. 21855.</p> <p>7. CSJ-L Sentencia del 25 de abril del 2003. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 20171.</p> <p>8. CSJ-L Sentencia del 5 de agosto del 2004. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad.</p> <p>9. CSJ-L Sentencia del 18 de marzo del 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 35708.</p> <p>10. CSJ-L Sentencia del 25 de febrero del 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 34394.</p> <p>11. CSJ-L Sentencia del 31 de enero del 2003. M.P. Luis Gonzalo Toro Correa. Rad. 19335.</p> <p>12. CSJ-L Sentencia del 15 de abril del 2004. M.P. Fernando Vásquez Botero . Rad. 20805.</p> <p>13. CSJ-L Sentencia del 8 de octubre del 2002. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 19041.</p> <p>14. CSJ-L Sentencia del 29 de enero del 2003. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 18985.</p> <p>15. CSJ-L Sentencia del 29 de enero del 2003. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 19722.</p> <p>16. CSJ-L Sentencia del 3 de diciembre del 2003. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad.</p>

		<p>21271.</p> <p>17. CSJ-L Sentencia del 13 de febrero del 2002. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 17571.</p> <p>18. CSJ-L Sentencia del 04 de marzo del 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 35250.</p> <p>19. CSJ-L Sentencia del 20 de febrero del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 28551.</p> <p>20. CSJ-L Sentencia del 6 de junio del 2006. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 26715.</p> <p>21. CSJ-L Sentencia del 26 de marzo del 2004. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 20941.</p> <p>22. CSJ-L Sentencia del 14 de septiembre del 2004. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 22614.</p> <p>23. CSJ-L Sentencia del 15 de abril del 1999. M.P. Rafael Méndez Arango. Rad 11551.</p> <p>24. CSJ-L Sentencia del 15 de diciembre de 1995. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 7960.</p> <p>25. CSJ-L Sentencia del 10 de marzo del 2009. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 33303.</p> <p>26. CSJ-L Sentencia del 15 de abril del 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 30776.</p> <p>27. CSJ-L Sentencia del 15 de abril del 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 30776.</p> <p>28. CSJ-L Sentencia del 1 de abril del 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 30993.</p> <p>29. CSJ-L Sentencia del 1 de abril del 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 30993.</p> <p>30. CSJ-L Sentencia del 30 de enero del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 28874.</p> <p>31. CSJ-L Sentencia del 31 de mayo del 2006. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 23773.</p>
--	--	--

			<p>32. CSJ-L Sentencia del 27 de noviembre del 2002. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 19192.</p> <p>33. CSJ-L Sentencia del 4 de diciembre del 2002. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 19303.</p> <p>34. CSJ-L Sentencia del 15 de abril del 1999. M.P. Rafael Méndez Arango. Rad 11551.</p> <p>35. CSJ-L Sentencia del 20 de marzo de 2013. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Rad 46489.</p> <p>36. CSJ-L Sentencia del 26 de febrero de 1997. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 9329.</p> <p>37. CSJ-L Sentencia del 16 de julio de 1996. M.P. José Roberto Herrera Vergara . Rad. 8351.</p> <p>38. CSJ-L Sentencia del 8 de febrero de 2011. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón . Rad. 36318.</p> <p>39. CSJ-L Sentencia del 31 de agosto del 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 42815.</p> <p>40. CSJ-L Sentencia del 3 de agosto del 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 44046.</p> <p>41. CSJ-L Sentencia del 28 de abril del 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 35059.</p> <p>42. CSJ-L Sentencia del 15 de abril del 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 31838.</p> <p>43. CSJ-L Sentencia del 15 de abril del 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 31838.</p> <p>44. CSJ-L Sentencia del 30 de enero del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 28198.</p> <p>45. CSJ-L Sentencia del 14 de agosto del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 28411.</p> <p>46. CSJ-L Sentencia del 29 de marzo del 2005. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 23507.</p> <p>47. CSJ-L Sentencia del 21 de febrero del 2002. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 17038.</p>
--	--	--	---

			<p>48. CSJ-L Sentencia del 19 de febrero de 1997. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 9276.</p> <p>49. CSJ-L Sentencia del 10 de mayo de 2011. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 36755.</p> <p>50. CSJ-L Sentencia del 23 de noviembre del 2010. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 37754.</p> <p>51. CSJ-L Sentencia del 18 de julio del 2007. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 29115.</p> <p>52. CSJ-L Sentencia del 4 de mayo del 2005. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 24371.</p> <p>53. CSJ-L Sentencia del 30 de julio del 1999. M.P. Rafael Méndez Arango. Rad 11970.</p> <p>54. CSJ-L Sentencia del 17 de mayo del 2011. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad 39290.</p> <p>55. CSJ-L Sentencia del 7 de octubre del 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 33935.</p> <p>56. CSJ-L Sentencia del 23 de febrero del 2007. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 28454.</p> <p>57. CSJ-L Sentencia del 11 de diciembre del 2007. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 29459.</p> <p>58. CSJ-L Sentencia del 7 de mayo del 1997. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 9085.</p> <p>59. CSJ-L Sentencia del 8 de junio del 2011. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 46538.</p> <p>60. CSJ-L Sentencia del 11 de diciembre del 2007. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 29918.</p>
--	--	--	---

			<p>61. CSJ-L Sentencia del 5 de julio del 2006. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 25895.</p> <p>62. CSJ-L Sentencia del 10 de mayo de 2011. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 36755.</p> <p>63. CSJ-L Sentencia del 24 de mayo del 2011. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 40927.</p> <p>64. CSJ-L Sentencia del 17 de mayo del 2011. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 41394.</p> <p>65. CSJ-L Sentencia del 17 de junio del 2010. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 40764.</p> <p>66. CSJ-L Sentencia del 8 de septiembre del 2009. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 35247.</p> <p>67. CSJ-L Sentencia del 1 de agosto del 2006. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 26706.</p> <p>68. CSJ-L Sentencia del 5 de septiembre de 2001. M.P. José Roberto Herrera Vergara . Rad. 16612.</p> <p>69. CSJ-L Sentencia del 25 de mayo del 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 41972.</p> <p>70. CSJ-L Sentencia del 28 de septiembre del 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 42600.</p> <p>71. CSJ-L Sentencia del 22 de agosto del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 29543.</p> <p>72. CSJ-L Sentencia del 11 de septiembre del 2007. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 31353.</p> <p>73. CSJ-L Sentencia del 9 de marzo del 2006. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 26125.</p> <p>74. CSJ-L Sentencia del 30 de julio del 2003. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 20035.</p>
--	--	--	---

			<p>75. CSJ-L Sentencia del 24 de septiembre del 2003. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 20450.</p> <p>76. CSJ-L Sentencia del 22 de octubre del 2003. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 20810.</p> <p>77. CSJ-L Sentencia del 30 de noviembre del 1999. M.P. Rafael Méndez Arango. Rad 12461.</p> <p>78. CSJ-L Sentencia del 6 de mayo del 2010. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 37635.</p> <p>79. CSJ-L Sentencia del 15 de mayo del 2008. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 31293.</p> <p>80. CSJ-L Sentencia del 23 de febrero del 2007. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez . Rad. 25994.</p> <p>81. CSJ-L Sentencia del 17 de abril del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 28260.</p> <p>82. CSJ-L Sentencia del 7 de marzo del 2003. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 18515.</p> <p>83. CSJ-L Sentencia del 29 de octubre del 2003. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 21909.</p> <p>84. CSJ-L Sentencia del 18 de septiembre del 2002. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 18749.</p> <p>85. CSJ-L Sentencia del 23 de agosto del 2001. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 16377.</p> <p>86. CSJ-L Sentencia del 8 de agosto del 2003. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 20186.</p> <p>87. CSJ-L Sentencia del 7 de mayo del 2008. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 33311.</p> <p>88. CSJ-L Sentencia del 7 de mayo del 2008. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 33311.</p>
--	--	--	---



			<p>89. CSJ-L Sentencia del 7 de mayo del 2008. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 33311.</p> <p>90. CSJ-L Sentencia del 7 de noviembre del 2006. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 28895.</p> <p>91. CSJ-L Sentencia del 26 de enero del 2010. M.P. Eduardo López Villegas Y Luis Javier Osorio López. Rad. 35271.</p> <p>92. CSJ-L Sentencia del 22 de julio del 2004. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 22052.</p> <p>93. CSJ-L Sentencia del 8 de agosto del 2001. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 16094.</p> <p>94. CSJ-L Sentencia del 9 de noviembre de 2000. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 16094.</p> <p>95. CSJ-L Sentencia del 14 de julio del 2009. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 37011.</p> <p>96. CSJ-L Sentencia del 21 de febrero del 2002. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 17128.</p> <p>97. CSJ-L Sentencia del 8 de agosto de 1997. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 9540.</p> <p>98. Gaceta Judicial - no sentencia.</p> <p>99. CSJ-L Sentencia del 20 de abril del 2007. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 29470.</p> <p>100. CSJ-L Sentencia del 16 de marzo del 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez . Rad. 20240.</p> <p>101. CSJ-L Sentencia del 21 de octubre de 2003. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 21625.</p> <p>102. CSJ-L Sentencia del 25 de julio de 2002. M.P. José Roberto Herrera Vergara . Rad.</p>
--	--	--	---

			<p>18520.</p> <p>103. CSJ-L Sentencia del 18 de marzo del 2004. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 22056.</p> <p>104. CSJ-L Sentencia del 7 de octubre de 2003. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 21297.</p> <p>105. CSJ-L Sentencia del 16 de octubre del 2002. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 18654.</p> <p>106. CSJ-L Sentencia del 28 de mayo del 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 30850.</p> <p>107. CSJ-L Sentencia del 2 de octubre del 2007. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez . Rad. 29644.</p> <p>108. CSJ-L Sentencia del 5 de febrero del 2003. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 19198.</p> <p>109. CSJ-L Sentencia del 4 de julio del 2002. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 18004.</p> <p>110. CSJ-L Sentencia del 31 de enero del 2006. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 25330.</p> <p>111. CSJ-L Sentencia del 15 de mayo del 2013. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Rad. 43294.</p> <p>112. CSJ-L Sentencia del 24 de enero del 2012. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 36074.</p> <p>113. CSJ-L Sentencia del 7 de julio del 2010. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez . Rad. 31646.</p> <p>114. CSJ-L Sentencia del 14 de septiembre de 2010. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 35227.</p>
--	--	--	--

			<p>115. CSJ-L Sentencia del 3 de junio del 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 35121.</p> <p>116. CSJ-L Sentencia del 4 de septiembre del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 29220.</p> <p>117. CSJ-L Sentencia del 24 de junio del 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez . Rad. 23643.</p> <p>118. CSJ-L Sentencia del 4 de noviembre del 2004. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 22983.</p> <p>119. CSJ-L Sentencia del 17 de octubre del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 30330.</p> <p>120. CSJ-L Sentencia del 10 de marzo del 2005. M.P. Eduardo López Villegas Y Luis Javier Osorio López. Rad. 23656.</p> <p>121. CSJ-L Sentencia del 13 de mayo de 2003. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 20454.</p> <p>122. CSJ-L Sentencia del 22 de julio de 2003. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 20979.</p> <p>123. CSJ-L Sentencia del 22 de julio de 2003. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 21272.</p> <p>124. CSJ-L Sentencia del 30 de noviembre del 2010. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 35158.</p> <p>125. CSJ-L Sentencia del 11 de marzo de 2003. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 20170.</p> <p>126. CSJ-L Sentencia del 18 de marzo de 2003. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 20173.</p> <p>127. CSJ-L Sentencia del 6 de mayo de 2003. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 20344.</p> <p>128. CSJ-L Sentencia del 30 de septiembre de 2003. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 20344</p> <p>129. CSJ-L Sentencia del 13 de febrero del 2007. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 25081</p>
--	--	--	--

			<p>130. CSJ-L Sentencia del 23 de junio del 2006. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 27489.</p> <p>130. CSJ-L Sentencia del 22 de octubre del 2007. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 27736.</p>
	<b>Subrogación y ARP</b>	22	<p>1. CSJ-L Sentencia del 13 de marzo del 2012. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 39798</p> <p>2. CSJ-L Salvamento de voto Mag Eduardo López Villegas (Rad. 23656)</p> <p>3. CSJ-L Sentencia del 23 de noviembre del 2010. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 37754.</p> <p>4. CSJ-L Sentencia del 3 de junio del 2009 M.P. Luis Javier Osorio López Rad. 35121</p> <p>5. CSJ-L Sentencia del 7 de marzo del 2003. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 18515</p> <p>6. CSJ-L Sentencia del 8 de agosto del 2003. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 20186</p> <p>7. CSJ-L Sentencia del 25 de julio del 2002. M.P. José Roberto Herrera Vergara. Rad. 18520</p> <p>8. CSJ-L Sentencia del 11 de septiembre del 2013. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón Rad. 42804.</p> <p>9. CSJ-L Sentencia del 21 de julio del 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 36227.</p> <p>10. CSJ-L Sentencia del 2 de octubre del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 28790</p> <p>11. CSJ-L Sentencia del 6 de septiembre del 2004. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 23141</p> <p>12. CSJ-L Sentencia del 26 de enero del 2010. M.P. Eduardo López Villegas Y Luis Javier Osorio López. Rad. 35271</p>

			<p>13. CSJ-L. Sentencia del 22 de abril del 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 29933</p> <p>14. CSJ-L Sentencia del 5 de diciembre del 2006. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 26379</p> <p>15. CSJ-L Sentencia del 31 de julio del 2013. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas Rad. 41220</p> <p>16. CSJ-L Sentencia del 16 de octubre del 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 42433</p> <p>17. CSJ-L Sentencia del 23 de febrero del 2010. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 33265</p> <p>18. CSJ-L Sentencia del 10 de marzo del 2005. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López. Rad. 23656</p> <p>19. CSJ-L Sentencia del 22 de febrero del 2011. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez Rad. 34820</p> <p>20. CSJ-L Sentencia del 30 de noviembre del 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 35158</p> <p>21. CSJ-L Sentencia del 7 de julio del 2010. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 31646</p> <p>22. CSJ-L Sentencia del 22 de octubre del 2007. M.P. Luis Javier Osorio López y Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 27736</p>
	<b>Subrogación y ARL</b>	0	N/A
	<b>Doble indemnización</b>	55	<p>1.CSJ-C Sentencia del 31 de mayo del 2010. M.P. William Namén Vargas. Rad.15001-3103-002-2004-00008-01</p> <p>2.CSJ-C Sentencia del 29 de abril del 2005. M.P. Edgardo Villamil Portilla. Rad. 0037</p>

			<p>3.CSJ-C Sentencia del 29 de abril del 2005. M.P. Edgardo Villamil Portilla. Rad. 0037</p> <p>4.CSJ-L Sentencia del 23 de junio de 2006. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 28832</p> <p>5.CSJ-L Sentencia del 11 de septiembre del 2007. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 29548</p> <p>6.CSJ-L Sentencia del 18 de mayo de 1992. M.P. Hugo Suescun Pujols. Rad. 4941</p> <p>7.CSJ-CyA Sentencia del 22 de octubre de 1998. M.P. José Fernando Ramírez Gómez. Rad. 4866.</p> <p>8.CSJ-L Sentencia del 15 de mayo de 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 28686</p> <p>9.CSJ-L Sentencia del 24 de julio del 2007. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 29254</p> <p>10.CSJ-L Sentencia del 14 de marzo del 2002. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 17252</p> <p>11.CSJ-L Sentencia del 1 de marzo del 2000. M.P. José Roberto Herrera Vergara. Rad. 13015.</p> <p>12.CSJ-C Sentencia del 31 de julio del 2002. M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno. Rad. 7498.</p> <p>13.CSJ-L Sentencia del 13 de septiembre del 2011. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 39859</p> <p>14.CSJ-L Sentencia del 18 de septiembre del 2007. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 29401</p> <p>15.CSJ-L Sentencia del 18 de septiembre del 2007. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 29401</p> <p>16.CSJ-L Sentencia del 23 de septiembre de 1998. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 10989</p>
--	--	--	--

			<p>17.CSJ-L Sentencia del 12 de junio de 1996. M.P. Francisco Escobar Henríquez. Rad. 8074.</p> <p>18.CSJ-L Sentencia del 24 de julio de 1996. M.P. Germán G. Valdés Sánchez. Rad. 8700.</p> <p>19.CSJ-L Sentencia del 12 de junio de 1998. M.P. Francisco Escobar Henríquez. Rad. 10643.</p> <p>20.CSJ-L Sentencia del 5 de octubre de 1995. M.P. José Roberto Herrera Vergara. Rad. 7659</p> <p>21.CSJ-C Sentencia del 5 de abril del 2011. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Rad. 66001-3103-003-2006-00190-01</p> <p>22.CSJ-L Sentencia del 23 de noviembre del 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 37754</p> <p>23.CSJ-L Sentencia del 12 de diciembre del 2007. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 32003</p> <p>24.CSJ-L Sentencia del 18 de junio del 2003. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 20420.</p> <p>25.CSJ-L Sentencia del 4 de marzo de 1997. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Rad. 9256.</p> <p>26.CSJ-L Sentencia del 17 de octubre de 1995. M.P. Hugo Suescun Pujols. Rad. 7716</p> <p>27.CSJ-C Sentencia del 6 de agosto del 2002. M.P. Nicolás Bechara Simancas. Rad. 6148</p> <p>28.CSJ-C Sentencia del 6 de agosto del 2002. M.P. Nicolás Bechara Simancas. Rad. 6148</p> <p>29.CSJ-L Sentencia del 9 de marzo del 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 35765.</p> <p>30.CSJ-CyA Sentencia del 24 de junio de 1996. M.P. José Fernando Ramírez Gómez. Rad. 4424.</p>
--	--	--	--

			<p>31.CSJ-P Sentencia del 21 de abril del 2008. M.P. Javier Zapata Ortiz. Rad. 29240.</p> <p>32.CSJ-C Sentencia del 23 de septiembre del 2002. M.P. José Fernando Ramírez Gómez. Rad. 6581.</p> <p>33.CSJ-P Sentencia del 15 de mayo del 2008. M.P. Yesid Ramírez Bastidas. Rad. 28980.</p> <p>34.Sentencia de exequibilidad de algunos artículos de la ley 179 de 1959. Gaceta 2409</p> <p>35.Gaceta judicial No. 2207-2208-2209.</p> <p>36.Gaceta judicial No. 2207-2208-2209.</p> <p>37.CSJ-L Sentencia del 12 de mayo del 2008. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 32570.</p> <p>38.CSJ-L Sentencia del 12 de mayo del 2008. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 32570.</p> <p>39.CSJ-L Sentencia del 24 de junio del 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 23643.</p> <p>40.CSJ-C Sentencia del 2 de agosto de 1995. M.P. Pedro Lafont Pianetta. Rad. 4159</p> <p>41.Gaceta Judicial. Acción petitoria de pago de perjuicios.</p> <p>42.Gaceta Judicial. Acción petitoria de pago de perjuicios.</p> <p>43.Gaceta Judicial. Acción petitoria de pago de perjuicios.</p> <p>44.CSJ-P Sentencia del 27 de octubre de 2005. M.P. Sigilfredo Espinosa Pérez. Rad. 22542</p> <p>45.CSJ-L Sentencia del 23 de septiembre del 2003. M.P. Luis Gonzalo Toro Correa. Rad. 20637.</p>
--	--	--	--



			<p>46.CSJ-L Sentencia del 21 de noviembre del 2006 M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 28997.</p> <p>47- CSJ-C Sentencia del 22 de noviembre del 2011. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Rad. Exp. 05001-3103-005-1999-17985-01</p> <p>48.CSJ-C Sentencia del 30 de marzo del 2005. M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar. Rad. 9879.</p> <p>49.CSJ-C Sentencia del 30 de marzo del 2005. M.P. Jaime Arrubla Paucar. Rad. 9879.</p> <p>50.CSJ-CyA Sentencia del 19 de febrero de 1999. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Rad. 5099.</p> <p>51.CSJ-CyA Sentencia del 19 de febrero de 1999. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Rad. 5099.</p> <p>52.CSJ-C Sentencia del 26 de agosto del 2011. M.P. Arturo Solarte Rodríguez. Rad.05001-3103-016-2002-00007-01</p> <p>53.CSJ-C Sentencia del 20 de junio del 2011. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Rad. 05001-3103-005-2000-00177-01</p> <p>54.CSJ-P Sentencia del 17 de abril del 2013. M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández. Acta 113</p> <p>55.CSJ-P Sentencia del 6 de junio del 2012. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. Acta 218.</p>
	<b>Culpa del empleador y riesgos profesionales</b>	124	<p>1. CSJ-L Sentencia del 15 de junio de 2004. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 21905.</p> <p>2. CSJ-L Sentencia del 22 de junio de 2006. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 26809.</p> <p>3. Aclaración de voto del Magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 29644.</p> <p>4. CSJ-L Sentencia del 20 de noviembre de 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 35158.</p>

			<p>5. CSJ-L Sentencia del 22 de febrero de 2006. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 25390.</p> <p>6. CSJ-L Sentencia del 1 de junio de 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 35909.</p> <p>7. CSJ-L Sentencia del 4 de noviembre de 2009. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 39517.</p> <p>8. CSJ-L Sentencia del 23 de marzo de 2011. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 35971.</p> <p>9. CSJ-L Sentencia del 2 de marzo de 2006. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 25992.</p> <p>10. CSJ-L Sentencia del 16 de marzo de 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 20240.</p> <p>11. CSJ-L Sentencia del 22 de abril de 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 31076.</p> <p>12. CSJ-L Sentencia del 10 de mayo de 2006. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 26126.</p> <p>13. CSJ-L Sentencia del 7 de julio del 2009. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 34980.</p> <p>14. CSJ-L Sentencia del 1 de diciembre de 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 37095.</p> <p>15. CSJ-L Sentencia del 8 de abril de 2008. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 31984.</p> <p>16. CSJ-L Sentencia del 19 de junio de 2002. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 17432.</p> <p>17. CSJ-L Sentencia del 9 de noviembre de 2000. M.P. German Valdés Sánchez. Rad. 14847.</p> <p>18. CSJ-L Sentencia del 24 de mayo del 2011. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 40539.</p>
--	--	--	--

			<p>19. CSJ-L Sentencia del 26 de febrero de 2007. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 28715.</p> <p>20. CSJ-L Sentencia del 24 de junio de 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 23643.</p> <p>21. CSJ-L Sentencia del 30 de septiembre de 2004. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 21951.</p> <p>22. CSJ-L Sentencia del 13 de octubre de 2004. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 23734.</p> <p>23. CSJ-L Sentencia del 4 de octubre de 2001. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 16117.</p> <p>24. CSJ-L Sentencia del 10 de noviembre de 1995. M.P. José Roberto Herrera Vergara. Rad. 7885.</p> <p>25. CSJ-L Sentencia del 8 de agosto de 2003. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 20186.</p> <p>26. CSJ-L Sentencia del 10 de marzo de 2005. M.P. Eduardo López Villegas - Luis Javier Osorio López. Rad. 23656.</p> <p>27. CSJ-L Sentencia del 13 de marzo de 2012. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 39798.</p> <p>28. CSJ-L Sentencia del 26 de enero de 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 35782.</p> <p>29. CSJ-L Sentencia del 19 de septiembre de 2007. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 29153.</p> <p>30. CSJ-L Sentencia del 4 de abril de 2006. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 25986.</p> <p>31. CSJ-L Sentencia del 19 de febrero de 2002. M.P. German Valdés Sánchez. Rad. 17429.</p> <p>32. CSJ-L Sentencia del 21 de mayo de 1999. M.P. Armando Albarracín Carreño. Rad. 11190.</p> <p>33. CSJ-L Sentencia del 6 de febrero de 1996. M.P. José Roberto Herrera Vergara. Rad.</p>
--	--	--	--

			<p>8049.</p> <p>34. CSJ-L Sentencia del 15 de mayo de 2013. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 37616.</p> <p>35. CSJ-L Sentencia del 26 de enero de 2010. M.P. Eduardo López Villegas - Luis Javier Osorio López. Rad. 35271.</p> <p>36. CSJ-L Sentencia del 23 de noviembre de 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 37754.</p> <p>37. CSJ-L Sentencia del 4 de agosto del 2009. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 34806.</p> <p>38. CSJ-L Sentencia del 8 de mayo de 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 45799.</p> <p>39. CSJ-L Sentencia del 6 de noviembre de 2013. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Rad. 38377.</p> <p>40. CSJ-L Sentencia del 24 de abril de 2012. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Rad. 38778.</p> <p>41. CSJ-L Sentencia del 27 de julio de 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 36005.</p> <p>42. CSJ-L Sentencia del 23 de noviembre de 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 39425.</p> <p>43. CSJ-L Sentencia del 31 de marzo del 2009. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 34744.</p> <p>44. CSJ-L Sentencia del 20 de mayo del 2008. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 28168.</p>
--	--	--	--

			<p>45.CSJ-L Sentencia del 22 de abril del 2008. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 28849.</p> <p>46.CSJ-L Sentencia del 22 de abril del 2008. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 28849.</p> <p>47.CSJ-L Sentencia del 20 de febrero del 2007. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 27715.</p> <p>48. CSJ-L Sentencia del 15 de mayo de 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 28686.</p> <p>49.CSJ-L Sentencia del 20 de febrero del 2002. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 16785.</p> <p>50 CSJ-L Sentencia del 22 de octubre de 2013. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 40587.</p> <p>51. CSJ-L Sentencia del 1 de marzo del 2011. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 36815.</p> <p>52. CSJ-L Sentencia del 2 de junio del 2009. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 34887.</p> <p>53. CSJ-L Sentencia del 3 de junio de 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 35121.</p> <p>54. CSJ-L Sentencia del 4 de abril del 2008. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 31854.</p> <p>55.CSJ-L Sentencia del 13 de abril del 2005. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 24350.</p> <p>56.CSJ-L Sentencia del 26 de marzo del 2014. M.P. Gustavo Hernando López Algarra. Rad. 39779.</p> <p>57.CSJ-L Sentencia del 15 de noviembre del 2001. M.P. Fernando Vásquez Botero. José Roberto Herrera Vergara. Rad. 15755.</p>
--	--	--	---

			<p>58. CSJ-L Sentencia del 6 de marzo del 2012. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 31948.</p> <p>59. CSJ-L Sentencia del 16 de marzo de 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 23017.</p> <p>60. CSJ-L Sentencia del 31 de enero de 2006. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 25330.</p> <p>61. CSJ-L Sentencia del 12 de octubre de 2005. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 24633.</p> <p>62. CSJ-L Sentencia del 11 de febrero de 2004. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 20655.</p> <p>63. CSJ-L Sentencia del 10 de marzo del 2004. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 21498.</p> <p>64. CSJ-L Sentencia del 24 de octubre de 2002. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 18581.</p> <p>65. CSJ-L Sentencia del 26 de febrero de 1997. M.P. Ramón Zúñiga Valverde. Rad. 8995.</p> <p>66. CSJ-L Sentencia del 16 de octubre de 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 42433.</p> <p>67. CSJ-L Sentencia del 7 de julio de 2010. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 31646.</p> <p>68. CSJ-L Sentencia del 27 de abril de 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 37991.</p> <p>69. CSJ-L Sentencia del 31 de marzo de 2009. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 30022.</p> <p>70. CSJ-L Sentencia del 8 de julio de 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 36174.</p> <p>71. CSJ-L Sentencia del 17 de octubre de 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 29609.</p>
--	--	--	---

			<p>72.CSJ-L Sentencia del 28 de julio del 1999. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 11999.</p> <p>73.CSJ-L Sentencia del 11 de marzo de 1998. M.P. German Valdés Sánchez. Rad. 10467.</p> <p>74.CSJ-L Sentencia del 23 de septiembre del 1998. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 10989.</p> <p>75.CSJ-L Sentencia del 14 de noviembre del 1996. M.P. Ramón Zúñiga Valverde. Rad. 8544.</p> <p>76. CSJ-L Sentencia del 10 de febrero de 2009. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 31142.</p> <p>77. CSJ-L Sentencia del 22 de abril de 2008. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 27736.</p> <p>78. CSJ-L Sentencia del 22 de abril de 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 29933.</p> <p>79. CSJ-L Sentencia del 23 de marzo de 2007. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 27974.</p> <p>80. CSJ-L Sentencia del 20 de junio de 2007. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 30578.</p> <p>81. CSJ-L Sentencia del 2 de mayo de 2003. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 19854.</p> <p>82. CSJ-L Sentencia del 12 de junio de 1998. M.P. Francisco Escobar Henríquez. Rad. 10643.</p> <p>83. CSJ-L Sentencia del 7 de mayo de 1997. M.P. Rafael Méndez Arango. Rad. 9389.</p> <p>84. CSJ-L Sentencia del 15 de febrero del 2011. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 34817.</p> <p>85. CSJ-L Sentencia del 15 de febrero del 2011. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad.</p>
--	--	--	---

			<p>34817.</p> <p>86. CSJ-L Sentencia del 21 de septiembre de 2010. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 37015.</p> <p>87. CSJ-L Sentencia del 1 de septiembre de 2009. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 32629.</p> <p>88. CSJ-L Sentencia del 15 de julio de 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 35617.</p> <p>89. CSJ-L Sentencia del 21 de junio del 2001. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 15613.</p> <p>90. CSJ-L Sentencia del 8 de octubre del 1997. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Rad. 9817.</p> <p>91. CSJ-L Sentencia del 25 de septiembre de 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 44502.</p> <p>92. CSJ-L Sentencia del 9 de marzo de 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 37064.</p> <p>93. CSJ-L Sentencia del 22 de octubre de 2007. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 27736.</p> <p>94. CSJ-L Sentencia del 23 de octubre de 2007. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 26611.</p> <p>95. CSJ-L Sentencia del 2 de octubre de 2007. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 29644.</p> <p>96. CSJ-L Sentencia del 26 de marzo de 2004. M.P. Luis Gonzalo Toro Correa. Rad. 21048.</p> <p>97. CSJ-L Sentencia del 2 de agosto de 2004. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 22582.</p> <p>98. CSJ-L Sentencia del 4 de julio del 2002. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 17044.</p> <p>99. CSJ-L Sentencia del 5 de noviembre del 1998. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Rad. 11081.</p>
--	--	--	--



			<p>100. CSJ-L Sentencia del 10 de julio de 2013. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Rad. 42561.</p> <p>101. CSJ-L Sentencia del 9 de febrero del 2010. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 36490.</p> <p>102. CSJ-L Sentencia del 4 de julio de 2006. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 27501.</p> <p>103. CSJ-L Sentencia del 8 de febrero de 1999. M.P. German Valdés Sánchez. Rad. 11274.</p> <p>104. CSJ-L Sentencia del 18 de agosto de 1999. M.P. Rafael Méndez Arango. Rad. 12058.</p> <p>105. CSJ-L Sentencia del 2 de mayo de 2012. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 39714.</p> <p>106. CSJ-L Sentencia del 27 de julio de 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 38940.</p> <p>107. CSJ-L Sentencia del 31 de marzo de 2009. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 32066.</p> <p>108. CSJ-L Sentencia del 6 de diciembre del 2001. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 16515.</p> <p>109. CSJ-L Sentencia del 6 de agosto del 2013. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 42747.</p> <p>110. CSJ-L Sentencia del 24 de enero de 2012. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 36074.</p> <p>111. CSJ-L Sentencia del 24 de mayo del 2011. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 38887.</p> <p>112. CSJ-L Sentencia del 2 de marzo de 2006. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 25941.</p>
--	--	--	--

			<p>113. CSJ-L Sentencia del 6 de marzo de 2012. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 35097.</p> <p>114. CSJ-L Sentencia del 10 de septiembre del 1997. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Rad. 9806.</p> <p>115. CSJ-L Sentencia del 26 de octubre de 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 35392.</p> <p>116. CSJ-L Sentencia del 19 de noviembre de 2002. M.P. German Valdés Sánchez. Rad. 18076.</p> <p>117. CSJ-L Sentencia del 6 de julio del 2011. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 39867.</p> <p>118. CSJ-L Sentencia del 17 de octubre del 2008. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 30605.</p> <p>119. CSJ-L Sentencia del 2 de octubre de 2013. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Rad. 37297.</p> <p>120. CSJ-L Sentencia del 1 de marzo de 2004. M.P. Luis Gonzalo Toro Correa. Rad. 21067.</p> <p>121. CSJ-L Sentencia del 26 de abril de 2007. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 29582.</p> <p>122. CSJ-L Sentencia del 26 de abril de 2007. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 29582.</p> <p>123. CSJ-L Sentencia del 5 de noviembre de 2008. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 28158.</p> <p>124. CSJ-C Sentencia del 24 de agosto del 2009. M.P. William Namén Vargas. Referencia: Expediente 11001-3103-038-2001-01054-01.</p>
	<b>Culpa</b>	<b>del</b> 24	1. CSJ-L Sentencia del 8 de agosto de 2003. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 20186.

	<b>empleador riesgos laborales</b>	<b>y</b>	<p>2. CSJ-L Sentencia del 9 de noviembre de 2000. M.P. German Valdés Sánchez. Rad. 14847.</p> <p>3. CSJ-L Sentencia del 4 de octubre de 2001. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 16117.</p> <p>4. CSJ-L Sentencia del 12 de junio de 1998. M.P. Francisco Escobar Henríquez. Rad. 10643.</p> <p>5. CSJ-L Sentencia del 7 de mayo de 1997. M.P. Rafael Méndez Arango. Rad. 9389.</p> <p>6. CSJ-L Sentencia del 23 de noviembre de 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 37754.</p> <p>7. CSJ-L Sentencia del 31 de enero de 2006. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 25330.</p> <p>8 CSJ-L Sentencia del 15 de mayo de 2013. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 37616.</p> <p>9. CSJ-L Sentencia del 24 de enero de 2012. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 36074.</p> <p>10. CSJ-L Sentencia del 17 de octubre de 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad.</p> <p>11. CSJ-L Sentencia del 24 de junio de 2004. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 23643.</p> <p>12. CSJ-L Sentencia del 10 de febrero de 2009. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 31142.</p> <p>13. CSJ-L Sentencia del 10 de marzo de 2005. M.P. Eduardo López Villegas - Luis Javier Osorio López. Rad. 23656.</p> <p>14. CSJ-L Sentencia del 16 de marzo de 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 20240.</p> <p>15. CSJ-L Sentencia del 1 de octubre de 1997. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 9893.</p>
--	--	----------	---

			<p>16. CSJ-L Sentencia del 26 de enero de 2010. M.P. Eduardo López Villegas - Luis Javier Osorio López. Rad. 35271.</p> <p>17. CSJ-L Sentencia del 25 de septiembre de 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 44502.</p> <p>18. CSJ-L Sentencia del 02 de octubre de 2007. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 29644.</p> <p>19. CSJ-L Sentencia del 02 de octubre de 2013. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Rad. 37297.</p> <p>20. CSJ-L Sentencia del 30 de noviembre de 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 35158.</p> <p>21. CSJ-L Sentencia del 26 de marzo de 2014. M.P. Gustavo Hernando López Algarra. Rad. 37297.</p> <p>22. CSJ-L Sentencia del 7 de julio de 2010. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 31646.</p> <p>23. CSJ-L Sentencia del 22 de octubre de 2007. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 27736.</p> <p>24. CSJ-L Sentencia del 3 de junio de 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 35121.</p>
	<b>Culpa del empleador y ARP</b>	71	<p>1.CSJ-L Sentencia del 1 de junio del 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 35909</p> <p>2.CSJ-L Sentencia del 31 de marzo de 2009. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 32066</p> <p>3.CSJ-L Sentencia del 16 de febrero del 2006. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 25962.</p>

			<p>4.CSJ-L Sentencia del 10 de marzo del 2005. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López. Rad. 23656.</p> <p>5.CSJ-L Sentencia del 9 de julio del 2003. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 19569.</p> <p>6.CSJ-L Sentencia del 4 de abril del 2006. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 25986.</p> <p>7.CSJ-L Sentencia del 13 de marzo del 2012. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 39798.</p> <p>8.CSJ-L Sentencia del 15 de mayo del 2013. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 37616.</p> <p>9.CSJ-L Sentencia del 1 de marzo del 2004. M.P. Luis Gonzalo Toro Correa. Rad. 21067</p> <p>10.CSJ-L Sentencia del 21 de junio del 2001. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 15613.</p> <p>11.CSJ-L Sentencia del 8 de mayo del 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 45799</p> <p>12.CSJ-L Sentencia del 13 de abril del 2005. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 24350.</p> <p>13.CSJ-L Sentencia del 16 de marzo del 2010. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 37030.</p> <p>14.CSJ-L Sentencia del 18 de mayo del 2009. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 32198.</p> <p>15.CSJ-L Sentencia del 30 de noviembre del 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 35158.</p> <p>16.CSJ-L Sentencia del 23 de noviembre del 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 37754.</p>
--	--	--	---

			<p>17.CSJ-L Sentencia del 11 de febrero del 2004. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 20655.</p> <p>18.CSJ-L Sentencia del 23 de septiembre del 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 32631.</p> <p>19.CSJ-L Sentencia del 23 de septiembre del 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 32631.</p> <p>20.CSJ-L Sentencia del 15 de junio del 2004. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 21905.</p> <p>21.CSJ-L Sentencia del 8 de julio del 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 36174.</p> <p>22.CSJ-L Sentencia del 2 de junio del 2009. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 34887.</p> <p>23.CSJ-L Sentencia del 23 de agosto del 2009. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 35112.</p> <p>24.CSJ-L Sentencia del 23 de septiembre del 2009. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 35112.</p> <p>25.CSJ-L Sentencia del 22 de abril del 2008. M.P. Luis Javier Osorio López Rad. 27736.</p> <p>26.CSJ-L Sentencia del 22 de abril del 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 29933.</p> <p>27.CSJ-L Sentencia del 16 de octubre del 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 42433.</p> <p>28.CSJ-L Sentencia del 1 de septiembre del 2009. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 32629.</p> <p>29.CSJ-L Sentencia del 15 de julio del 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 35617.</p> <p>30.CSJ-L Sentencia del 9 de marzo del 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 37064.</p> <p>31.CSJ-L Sentencia del 17 de agosto del 2011. M.P. Luis Gabriel Mirando Buelvas. Rad. 35938.</p>
--	--	--	---

			<p>32.CSJ-L Sentencia del 16 de marzo del 2010. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 35261.</p> <p>33.CSJ-L Sentencia del 26 de marzo del 2014. M.P. Gustavo Hernando López Algarra. Rad. 39779.</p> <p>34.CSJ-L Sentencia del 20 de junio del 2007. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 30578.</p> <p>35.CSJ-L Sentencia del 21 de mayo de 1999. M.P. Armando Albarracín Carreño. Rad. 11190</p> <p>36.CSJ-L Sentencia del 4 de julio del 2006. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 27501.</p> <p>37.CSJ-L Sentencia del 2 de mayo del 2012. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 39714.</p> <p>38.CSJ-L Sentencia del 22 de octubre del 2007. M.P. Luis Javier Osorio López y Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 27736.</p> <p>39.CSJ-L Sentencia del 23 de noviembre del 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 39425.</p> <p>40.CSJ-L Sentencia del 31 de marzo del 2009. M.P. Elsy del pilar Cuello Calderón. Rad. 34744.</p> <p>41.CSJ-L Sentencia del 21 de marzo de 2007. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 28252.</p> <p>42.CSJ-L Sentencia del 28 de febrero del 2006. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 25923</p> <p>43.CSJ-L Sentencia del 1 de octubre del 2003. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 21314.</p> <p>44.CSJ-L Sentencia del 3 de junio de 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 35121.</p>
--	--	--	--

			<p>45.CSJ-L Sentencia del 8 de agosto del 2003. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 20186.</p> <p>46.CSJ-L Sentencia del 6 de marzo del 2012. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 31948.</p> <p>47.CSJ-L Sentencia del 25 de septiembre del 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 44502.</p> <p>48: CSJ-L Sentencia del 6 de julio del 2011. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 39867.</p> <p>49.CSJ-L Sentencia del 24 de mayo del 2011. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 40539.</p> <p>50.CSJ-L Sentencia del 27 de abril del 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 37991.</p> <p>51.CSJ-L Sentencia del 30 de septiembre del 2004. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 21951.</p> <p>52.CSJ-L Sentencia del 10 de febrero del 2009. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 31142.</p> <p>53.CSJ-L Sentencia del 26 de enero del 2010. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López. Rad. 35271.</p> <p>54.CSJ-L Sentencia del 28 de abril del 2009. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 33643.</p> <p>55.CSJ-L Sentencia del 23 de octubre del 2007. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 26611</p> <p>56.CSJ-L Sentencia del 2 de agosto del 2004. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 22582.</p> <p>57.CSJ-L Sentencia del 6 de agosto del 2013. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 43996.</p> <p>58.CSJ-L Sentencia del 22 de abril del 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 31076.</p>
--	--	--	---



			<p>59.CSJ-L Sentencia del 4 de abril del 2008. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 31854.</p> <p>60.CSJ-L Sentencia del 6 de diciembre del 2001. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 16515.</p> <p>61.CSJ-L Sentencia del 6 de agosto del 2013. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 42747</p> <p>62.CSJ-L Sentencia del 1 de marzo del 2011. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 36815.</p> <p>63.CSJ-L Sentencia del 21 de julio del 2010. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 36168</p> <p>64.CSJ-L Sentencia del 1 de diciembre del 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 37095</p> <p>65.CSJ-L Sentencia del 15 de febrero del 2011. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 34817.</p> <p>66.CSJ-L Sentencia del 15 de febrero del 2011. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad.34817.</p> <p>67.CSJ-L Sentencia del 17 de octubre del 2008. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 30605.</p> <p>68.CSJ-L Sentencia del 26 de abril del 2007. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 29582.</p> <p>69.CSJ-L Sentencia del 26 de abril del 2007. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 29582.</p> <p>70.CSJ-L Sentencia del 15 de noviembre del 2001. M.P. Fernando Vásquez Botero y José Roberto Herrera Vergara. Rad. 15755.</p> <p>71.CSJ-L Sentencia del 7 de julio del 2010. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad.</p>
--	--	--	--

			31646.
	<b>Culpa del empleador y ARL</b>	0	N/A

<b>Buscador</b>	<b>Criterio de Búsqueda</b>	<b>No. de resultados</b>	<b>Sentencias que aparecen con el criterio de búsqueda</b>
<b>Lex Base Consejo de Estado</b>	<b>Acumulación de indemnizaciones</b>	1	1 CE. Sala de lo CA. Sección tercera. Sentencia del 24 de abril de 2008. C.P. Gregorio Londoño Soto. Rad. 85001-23-31-000-1996-00283-01 (15981)
	<b>Riesgos profesionales y responsabilidad civil</b>	39	<p>1.CE. Sala de lo CA. Sección primera. Sentencia del 5 de julio de 2007. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Rad. 13001-23-31-000-2004-00099-01(AP)</p> <p>2.CE. Sala de lo CA. Sección tercera. Sentencia del 3 de octubre del 2002. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad.19001-23-31-000-1995-3007-01 (14207)</p> <p>3.CE. Sala de lo CA. Sala especial transitoria de decisión 3B. Sentencia del 4 de octubre del 2005. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Rad.11001-03-15-000-2003-00206-01 (S)</p> <p>4.CE. Sala de lo CA. Sección primera. Sentencia del 15 de septiembre del 2011. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Rad. 2004-00395-01</p> <p>5.CE. Sala de lo CA. Sección Primera. Sentencia del 15 de septiembre de 2011. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Rad.25000-23-24-000-2004-00395-01</p> <p>6.CE. Sala de lo CA. Sección primera. Sentencia del 24 de enero del 2013. C.P. María Elizabeth García González. Rad. 11001-03-24-000-2008-00345-00</p> <p>7.CE Sala de lo CA. Sección segunda. Subsección A. Sentencia del 29 de marzo del 2007. C.P. Jaime Moreno García. Rad. 08001-23-31-000-2002-02304-01 (9661 -05)</p> <p>8.CE. Sala de lo CA. Sección segunda. Subsección B. Sentencia del 15 de marzo del 2012. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Rad. 25000-23-25-000-2008-00339-01(1395-11)</p>

			<p>9.CE. Sala de lo CA. Sección tercera. Sentencia del 18 de febrero del 2010. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 52001-23-31-000-1998-00054-01 (18110)</p> <p>10.CE. Sala de lo CA Sección tercera. Sentencia del 5 de diciembre del 2005. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Rad. 66001-23-31-000-1996-03360-01 (14731)</p> <p>11.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 19 de octubre del 2007. C.P. Enrique Gil Botero. Rad.54001-23-31-000-1997-12700-01(30871)</p> <p>12.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 19 de octubre del 2007. C.P. Enrique Gil Botero. Rad.66001-23-31-000-1999-03078-01(15382)</p> <p>13.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 19 de octubre del 2007. C.P. Enrique Gil Botero.66001-23-31-000-1999-03078-01 (15382)</p> <p>14.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 19 de octubre del 2007. C.P. Enrique Gil Botero. Rad.54001-23-31-000-1997-12700-01(30871)</p> <p>15.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 19 de octubre del 2007. C.P. Enrique Gil Botero. Rad.54001-23-31-000-1997-12700-01(30871)</p> <p>16.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 19 de septiembre de 2007. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 76001-23-31-000-1994-00916-01 (16010)</p> <p>17.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 10 de agosto del 2005. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 85001-23-31-000-1997-00448-01 (16205)</p> <p>18.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 26 de mayo del 2010. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Rad. 66001-23-31-000-1996-03345-01 (19000)</p> <p>19.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 24 de abril del 2013. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 07001-23-31-000-2000-00118-01(26621)</p>
--	--	--	--

			<p>20.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 20 de mayo del 2009. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 50001-23-31-000-1992-03768-01 (16701)</p> <p>21.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 20 de mayo del 2009. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 50001-23-31-000-1992-03768-01 (16701)</p> <p>22.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 30 de julio del 2008. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 52001-23-31-000-1996-08167-01 (16483)</p> <p>23.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 18 de marzo de 2004. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 76001-23-31-000-1994-00069-01 (14338)</p> <p>24.CE. Sala de lo CA. Sección Primera. Sentencia del 2 de diciembre del 2010. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Rad. 25000-23-24-000-2006-00262-01</p> <p>25.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 19 de septiembre del 2007. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 66001-23-31-000-1999-03078-01 (15382)</p> <p>26.CE. Sala de lo CA. Sentencia del 31 de enero del 2006. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 11001-03-15-000-2005-00 (PI)</p> <p>27.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre del 2007. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 73001-23-31-000-1998-01327-01 (17918)</p> <p>28.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril del 2005. C.P. Germán Rodríguez Villamizar. Rad. 66001-23-31-000-1996-03266-01 (14178)DM</p> <p>29.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 9 de mayo del 2012. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 85001-23-31-000-2000-00198-01(20968)</p> <p>30.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 29 de agosto del 2007.C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 850012331000030901 (15324)</p>
--	--	--	---

			<p>31.CE. Sala de lo CA. Sección Primera. Sentencia del 18 de julio de 2012. C.P. María Elizabeth García González. Rad. 25000-23-24-000-2003-00493-00</p> <p>32.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 29 de agosto del 2007. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 85001-23-31-000-1996-00309-01 (15324)</p> <p>33.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 30 de noviembre del 2006. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Rad. 11001-03-26-000-2000-00020-01 (18059)</p> <p>34.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 30 de noviembre del 2006. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Rad. 11001-03-26-000-2000-00020-01 (18059)</p> <p>35.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 30 de enero del 2013. C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz. Rad. 23001-23-31-000-1999-00967-01 (25087)</p> <p>36.CE. Sala de lo CA. Sección Primera. Sentencia del 22 de marzo de 2012. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno (E ). Rad. 25000-23-24-000-2004-00325-02</p> <p>37.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera Subsección C. Sentencia del 24 de octubre del 2013. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 68001-23-15-000-1995-11195-01(25869)</p> <p>38.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 28 de marzo del 2012. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 05001-23-25-000-1993-01854-01(22163)</p> <p>39.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 18 de marzo del 2010. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 25000-23-26-000-1994-00071-01 (14390)</p>
	<b>Riesgos laborales y responsabilidad civil</b>	5	<p>1. CE. Sala de lo CA. Sala Plena. Sentencia del 4 de octubre de 2005. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Rad. 11001-03-15-000-2003-00206-01 (S).</p> <p>2. CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 16 de julio de 2008. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 66001-23-31-000-1995-03079-01 (16344).</p>

			<p>3. CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 16 de julio de 2008. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 66001-23-31-000-1995-03079-01 (16344).</p> <p>4. CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre de 2002. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad.19001-23-31-000-1995-3007-01 (14207).</p> <p>5. CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 7 de julio de 2011. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 76001-23-24-000-1997-03455-01(19953)</p>
	<b>ARP y responsabilidad civil</b>	10	<p>1.CE. Sala de lo CA. Sección Primera. Sentencia del 15 de septiembre de 2011. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Rad. 2004-00395-01.</p> <p>2.CE. Sala de lo CA. Sección Primera. Sentencia del 15 de septiembre de 2011. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Rad. 25000-23-24-000-2004-00395-01.</p> <p>3.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 24 de abril de 2008. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. 85001-23-31-000-1996-00283-01 (15981).</p> <p>4.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 23 de abril de 2013. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 07001-23-31-000-2000-00118-01(26621).</p> <p>5.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 24 de marzo de 2011. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 66001-23-31-000-1998-00409-01 (19067).</p> <p>6.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 5 de diciembre de 2005. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Rad. 66001-23-31-000-1996-03360-01 (14731).</p> <p>7. CE. Sala de lo CA. Sección Primera. Sentencia del 2 de diciembre de 2010. C.P. Rafael Ostau de Lafont Pianeta. Rad. 25000-23-24-000-2006-00262-01.</p> <p>8. CE. Sala de lo CA. Sección Primera. Sentencia del 22 de marzo de 2012. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Rad. 25000-23-24-000-2004-00325-02.</p>

			<p>9. CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 30 de enero de 2013. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 76001-23-31-000-1998-01798-01(24986).</p> <p>10. CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 21 de febrero de 2007. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 25000-23-25-000-2005-00355-01(AP).</p>
	<b>ARL y responsabilidad civil</b>	0	
	<b>Subrogación y riesgos profesionales</b>	8	<p>1.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre de 2002. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad. 19001-23-31-000-1995-3007-01 (14207).</p> <p>2.CE. Sala de lo CA. Sala Especial Transitoria de Decisión 3B. Sentencia del 4 de octubre de 2005. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Rad. 11001-03-15-000-2003-00206-01 (S).</p> <p>3. CE Sala de lo CA. Sección Primera. Sentencia del 23 de octubre del 2008. C.P. Martha Sofía Sanz Tobón. Rad. 44001-23-31-000-2008-00027-01(PI).</p> <p>4. CE Sala de CySC. Sentencia del 3 de diciembre del 2003. C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce. Rad. 1501.</p> <p>5.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 27 de noviembre de 2002. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 52001-23-31-000-1994-3090-01 (13090)</p> <p>6.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 5 de diciembre de 2005. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Rad. 66001-23-31-000-1996-03360-01 (14731).</p> <p>7.CE. Sala Plena. Sentencia del 22 de febrero de 2011. C.P. Mauricio Torres Cuervo. Rad. 11001-03-15-000-2010-00452-00(CA).</p> <p>8.CE. Sala Plena. Sentencia del 22 de febrero de 2011. C.P. Mauricio Torres Cuervo. Rad. 11001-03-15-000-2010-00452-00(CA).</p>

	<b>Subrogación y riesgos laborales</b>	3	<p>1. CE Sala de CySC. Sentencia del 25 de agosto de 1998. C.P. Luis Camilo Osorio Isaza. Rad. 1122.</p> <p>2.CE. Sala de lo CA. Sala Especial Transitoria de Decisión 3B. Sentencia del 4 de octubre de 2005. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Rad. 11001-03-15-000-2003-00206-01 (S).</p> <p>3.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre de 2002. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad. 19001-23-31-000-1995-3007-01 (14207).</p>
	<b>Subrogación y ARP</b>	4	<p>1.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 24 de abril de 2008. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. 85001-23-31-000-1996-00283-01 (15981).</p> <p>2.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 5 de diciembre de 2005. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Rad. 66001-23-31-000-1996-03360-01 (14731).</p> <p>3.CE. Sala Plena. Sentencia del 22 de febrero de 2011. C.P. Mauricio Torres Cuervo. Rad. 11001-03-15-000-2010-00452-00(CA).</p> <p>4.CE. Sala Plena. Sentencia del 22 de febrero de 2011. C.P. Mauricio Torres Cuervo. Rad. 11001-03-15-000-2010-00452-00(CA).</p>
	<b>Subrogación y ARL</b>	0	
	<b>Doble indemnización</b>	50	<p>1.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 23 de agosto de 1993. C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Rad. 8011</p> <p>2.CE. Sala de lo CA. Sección Segunda Subsección B. Sentencia del 30 de marzo del 2011. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Rad. 13001-23-31-000-2003-02110-01(2295-08)</p> <p>3.CE. Sala Plena. Sentencia del 7 de febrero de 1995. C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. Rad. S-247</p>



			<p>4.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera Subsección A. Sentencia del 16 de agosto del 2012. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Rad. 25000-23-26-000-1999-00395-01(24687)</p> <p>5.CE. Sala de lo CA. Sala especial transitoria de decisión 3B. Sentencia del 4 de octubre del 2005. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Rad. 11001-03-15-000-2003-00206-01 (S)</p> <p>6.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 12 de diciembre de 1986. C.P. Jorge Valencia Arango. Rad. N° 4910</p> <p>7.CE. Sala de lo CA. Sección Cuarta. Sentencia del 5 de agosto de 1996. C.P. Consuelo Sarria Olcos. Rad. No. 7782</p> <p>8.CE.Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 5 de diciembre de 2006. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Rad. 25000-23-26-000-1995-01359-01 (15046)</p> <p>9.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 12 de abril de 1984. C.P. Eduardo Roncón Rincón. Rad. 2586.</p> <p>10.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 15 de mayo de 1997. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad. 10150</p> <p>11.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 25 de octubre de 2001. C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. Rad. 25000-23-26-000-1993-8964-01 (13538)</p> <p>12.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 8 de noviembre de 1984. C.P. Eduardo Suescún Monroy. Rad. 3050.</p> <p>13.CE. Sala Plena. Sentencia del 27 de marzo de 1990. C.P. Guillermo Chahín Lizcano. Rad. S- 21</p> <p>14.CE Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 12 de julio de 1993. C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Rad. N. 7622.</p>
--	--	--	---

			<p>15.CE Sala de lo CA. Sección Primera. Sentencia del 12 de marzo del 2009. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Rad. 05001-23-31-000-2005- 03482 -01(AP)</p> <p>16.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 31 de agosto de 1999. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad. 10865.</p> <p>17.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 22 de febrero de 1990. C.P. Antonio José de Irisarri Restrepo. Rad. 5837.</p> <p>18.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero de 1995. C.P. Julio César Uribe Acosta. Rad. 9550.</p> <p>19.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 21 de febrero de 2002. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Rad. 25000-23-26-000-1992-8135-01 (12702)</p> <p>20.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Rad. 11499.</p> <p>21.CE.Sala de lo CA Sección cuarta. Sentencia del 18 de marzo de 1993. C.P. Jaime Abella Zárate. Rad. 4490.</p> <p>22.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 15 de febrero del 2012. C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz. Rad. 25000-23-26-000-1997-04813-01 (20880)</p> <p>23.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 10 de junio del 2009. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 44001-23-31-000-1997-01097-01 (15817)</p> <p>24.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 10 de junio del 2009. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 44001-23-31-000-1997-01097-01 (15817)</p> <p>25.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 10 de junio del 2009. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 44001-23-31-000-1997-01097-01 (15817)</p>
--	--	--	---

			<p>26.CE. Sala de lo CA. Sala Plena. Auto del 8 de septiembre del 2000. C.P. Delio Gómez Leyva. Rad. AG-002.</p> <p>27.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 28 de febrero del 2013. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Rad.05001-23-26-000-1995-01551-01(22539)</p> <p>28.CE.Sala de lo CA. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 28 de julio del 2011. C.P. Hernán Andrade Rincón. Rad. 19001-23-31-000-1997-04230(20114)</p> <p>29.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 6 de mayo de 1993. C.P. Julio César Uribe Acosta. Rad. 7428.</p> <p>30.CE.Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 9 de julio de 1993. C.P. Julio Cesar Uribe Acosta. Rad. 7795.</p> <p>31.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 26 de octubre de 1993. C.P. Juan de Dios Montes Hernández. Rad. 7793.</p> <p>32.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 9 de octubre del 2013. C.P. Hernán Andrade Rincón. Rad. 410001-23-31-000-1997-09626-01(29357)</p> <p>33.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 14 de mayo del 2012. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 19001-23-31-000-1999-01703-01(23775).</p> <p>34.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 26 de abril del 2002. C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. Rad. 05001-23-26-000-1992-0861-01 (13675)</p> <p>35.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 24 de septiembre de 1987.C.P. Jorge Valencia Arango. Rad. 4039.</p> <p>36.CE.Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 24 de septiembre de 1987. C.P. Jorge Valencia Arango. Rad. 4039.</p>
--	--	--	--

			<p>37.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 8 de agosto del 2012. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 76001- 2325-000-1998-5486-01- (22573)</p> <p>38.CE. Sala de lo CA. Sección Quinta. Sentencia del 4 de septiembre de 2003. C.P. María Nohemí Hernández Pinzón. Rad. 25000-23-26-000-2000-0112-01(AP)</p> <p>39.CE. Sala de lo CA. Sala Plena. Sentencia del 7 de diciembre de 1994. C.P. Miguel Viana Patiño. Rad. AC - 2148.</p> <p>40.CE Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 17 de marzo del 2010. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 05001-23-26-000-1996-01018-01 (18101)</p> <p>41.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 3 de mayo del 2007. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. 05001-23-25-000-1992-07122-01 (16180)</p> <p>42.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 27 de noviembre del 2002.C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 52001-23-31-000-1994-3090-01 (13090)</p> <p>43.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 9 de julio de 1982. Rad. 2615.</p> <p>44.CE. Sala de lo CA. Sección Cuarta. Sentencia del 25 de septiembre de 1989. C.P. Guillermo Chahin Lizcano. Rad. 0477.</p> <p>45.CE. Sala de lo CA. Sección Cuarta. Sentencia del 25 de septiembre de 1989. C.P. Guillermo Chacín Lizcano. Rad. 0477.</p> <p>46.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 14 de septiembre del 2011. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 05001-23-31-000-2007-00139-01 (38222)</p> <p>47.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 14 de septiembre del 2011. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 05001-23-25-000-1994-00020-01 (19031)</p> <p>48.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 1 de octubre del 2008. C.P. Enrique Gil</p>
--	--	--	---

			<p>Botero. Rad. 25000-23-26-000-1999-01145-01 (27268)</p> <p>49.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 5 de abril del 2013. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Rad. 25000-23-26-000-2001-00242-01 (27281)</p> <p>50.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera Subsección C. Sentencia del 25 de mayo del 2011. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 52001-23-31-000-1997-08789-01(15838, 18075, 25212 acumulados)</p>
	<b>Culpa del empleador y riesgos profesionales</b>	4	<p>1.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 10 de junio de 2004. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad. 25000-23-26-000-2003-0919-02 (25854)DM.</p> <p>2.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre de 2002. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad. 19001-23-31-000-1995-3007-01 (14207).</p> <p>3.CE. Sala Plena. Sentencia del 4 de octubre de 2005. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Rad. 11001-03-15-000-2003-00206-01 (S).</p> <p>4.CE. Sala de lo CA. Sección Cuarta Sentencia del 16 de agosto de 2007. C.P. María Inés Ortiz Barbosa. Rad. 11001-03-27-000-2005-00024-00 (15398).</p>
	<b>Culpa del empleador y riesgos laborales</b>	4	<p>1.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 10 de junio de 2004. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad. 25000-23-26-000-2003-0919-02 (25854)DM.</p> <p>2.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre de 2002. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad. 19001-23-31-000-1995-3007-01 (14207).</p> <p>3.CE. Sala de lo CA. Sala Especial Transitoria de Decisión 3B. Sentencia del 4 de octubre de 2005. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Rad. 11001-03-15-000-2003-00206-01 (S).</p> <p>4.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre de 2002. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad. 19001-23-31-000-1995-3007-01 (14207).</p>
	<b>Culpa del</b>	3	1.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 10 de junio de 2004. C.P. Ricardo Hoyos

	<b>empleador y ARP</b>		Duque. Rad. 25000-23-26-000-2003-0919-02 (25854)DM.  2.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 2009. C.P. Myriam Guerrero de Escobar. Rad. 66001-23-31-000-1997-03728-01(16689).  3.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 2009. C.P. Myriam Guerrero de Escobar. Rad. 66001-23-31-000-1997-03728-01(16689).
	<b>Culpa del empleador y ARL</b>	0	

<b>Buscador</b>	<b>Criterio de Búsqueda</b>	<b>No. de resultados</b>	<b>Sentencias que aparecen con el criterio de búsqueda</b>
<b>Jurisprudencia Rama Judicial</b>	<b>Acumulación de indemnizaciones</b>	10	<p>1.CSJ-L Sentencia del 21 de agosto del 2013. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 43604.</p> <p>2.CSJ-C y A. Sentencia del 9 de julio del 2012. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Rad. 11001-3103-006-2002-00101-01</p> <p>3.CSJ-L Sentencia del 17 de octubre del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 29609.</p> <p>4.CSJ-C y A. Sentencia del 18 de octubre del 2005. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. Rad. 14491 [SC-259-2005]</p> <p>5.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Auto del 28 de abril del 2010. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 13001-23-31-000-1994-09971-01</p> <p>6.CE.Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril del 2010. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 25000-23-26-000-1996-03096-01</p> <p>7.CE. Sala de lo CA. Sentencia del 5 de diciembre del 2005. C.P. Alir Eduardo Hernández Enríquez. Rad. 66001-23-31-000-1996-03360-01</p>

			<p>8.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 27 de noviembre del 2002. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 52001-23-31-000-1994-3090-01</p> <p>9.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre del 2002. C.P. María Elena Giraldo Gómez. 19001-23-31-000-1995-3007-01</p> <p>10.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Auto del 1 de febrero del 2002. C.P. Delio Gómez Leyva. Rad. 25000-23-24-000-1999-0528-01 AG-002</p>
	Riesgos profesionales y responsabilidad civil	2	<p>1.CSJ-C y A. Sentencia del 9 de julio del 2012. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Rad. 11001-3103-006-2002-00101-01</p> <p>2.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 3 de octubre del 2002. C.P. María Elena Giraldo Gómez Rad. 19001-23-31-000-1995-3007-01 14207</p>
	Riesgos laborales y responsabilidad civil	1	1.CSJ-C y A. Sentencia del 17 de noviembre del 2011. M.P. William Namén Vargas. Rad. 11001-3103-018-1999-00533-01
	<b>ARP y responsabilidad civil</b>	0	
	<b>ARL y responsabilidad civil</b>	64	<p>1.CSJ-C Sentencia del 5 de mayo del 2014. M.P. Margarita Cabello Blanco. Rad. 23555-3189-001-2010-00033-01.</p> <p>2. CSJ-C y A Sentencia del 28 de febrero del 2013. M.P. Arturo Solarte Rodríguez. Rad. 11001-3103-004-2002-01011-01.</p> <p>3. CSJ-C y A Sentencia del 19 de diciembre del 2012. M.P. Arturo Solarte Rodríguez. Rad. 76001-3103-008-2006-00210-01.</p> <p>4. CSJ-C y A Sentencia del 19 de diciembre del 2012. M.P. Jesús Vall de Ruten Ruiz. Rad. 47245 -31-03-001-2002-00052-01.</p>

			<p>5. CSJ-C y A Sentencia del 7 de diciembre del 2012. M.P. Arturo Solarte Rodríguez. Rad. 11001-3103-026-2006-00470-01.</p> <p>6. CSJ-C y A Sentencia del 23 de noviembre del 2012. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. Rad. 6800131030082009-00312-01.</p> <p>7. CSJ-C y A Sentencia del 16 de noviembre del 2012. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. Rad. 6800131030052006-00045-01.</p> <p>8. CSJ-C y A Sentencia del 9 de noviembre del 2012. M.P. Arturo Solarte Rodríguez. Rad. 19001-3103-005-2009-00699-01.</p> <p>9.CSJ-L Sentencia del 30 de octubre del 2012. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 39631.</p> <p>10. CSJ-C y A Sentencia del 15 de agosto del 2012. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Rad. Exp. 05001-3103-009-2004-00263-01.</p> <p>11. CSJ-C y A Sentencia del 13 de agosto del 2012. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Rad. Exp. 11001-31-03-026-2006-00228-01.</p> <p>12. CSJ-C y A Sentencia del 5 de julio del 2012. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Rad. Exp. 5001-3103-009-2004-00263-01.</p> <p>13. CSJ-C y A Sentencia del 20 de junio del 2012. M.P. Jesús Vall de Ruten Ruiz. Rad. 25875-3103-001-2006-00133-01.</p> <p>14.CSJ-C y A Sentencia del 4 de mayo del 2012. M.P. Margarita Cabello Blanco. Rad. 73268 31 03 001 2009 00075 01.</p> <p>15. CSJ-C y A Sentencia del 2 de mayo del 2012. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Rad. 73449-3103-001-2006-00049-01.</p>
--	--	--	--



			<p>16. CSJ-C y A Sentencia del 12 de abril del 2012. M.P. Margarita Cabello Blanco. Rad. 11001 02 03 000 2012 00440 00.</p> <p>17. CSJ-C y A Sentencia del 10 de abril del 2012. M.P. Arturo Solarte Rodríguez. Rad. 11001-3103-032-2008-00424-01.</p> <p>18. CSJ-C y A Sentencia del 23 de marzo del 2012. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Rad. Exp. 11001-0203-000-2011-00521-00.</p> <p>19. CSJ-C y A Sentencia del 21 de marzo del 2012. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. Rad. 1100102030002011-02430-00.</p> <p>20. CSJ-C y A Sentencia del 12 de marzo del 2012. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Rad. 66001-3103-001-2007-00055-01.</p> <p>21. CSJ-C y A Sentencia del 29 de febrero del 2012. M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar. Rad. 11001-31-03-015-1999-01424-00.</p> <p>22. CSJ-C y A Sentencia del 18 de enero del 2012. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. Rad. 1100102030002011-02696-00.</p> <p>23. CSJ-C y A. Sentencia del 17 de noviembre del 2011. M.P. William Namén Vargas. Rad. 11001-3103-018-1999-00533-01.</p> <p>24. CSJ-C y A Sentencia del 31 de marzo del 2011. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. Rad. T-2011-00047-01.</p> <p>25. CSJ-C y A Sentencia del 19 de octubre del 2009. M.P. William Namén Vargas. Ref.: Expediente 5001-3103-009-2001-00263-01.</p> <p>26. CSJ-C y A Sentencia del 14 de noviembre del 2008. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. Rad. 70001 3103 004 1999 00403 01.</p>
--	--	--	---

			<p>27. CSJ-C y A Sentencia del 26 de octubre del 2000. M.P. José Fernando Ramírez Gómez. Rad. 5462.</p> <p>28. CSJ-C y A Sentencia del 18 de octubre del 2000. M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles. Rad. 5347.</p> <p>29.CE. Sala de lo CA. Sección primera. Sentencia del 18 de febrero del 2010. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Rad. 11001-03-24-000-2005-00159-01.</p> <p>30. CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 18 de junio del 2008. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Rad. 70001-23-31-000-2003-00618-01.</p> <p>31.CE. Sala de lo CA. Sentencia del 18 de abril del 2002. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad. 44001-23-31-000-1996-0550-01.</p> <p>32.CE. Sala de lo CA. Sentencia del 18 de abril del 2002. C.P. Julio Enrique Correa Restrepo. Rad. 11001-03-27-000-1998-00044-00.</p> <p>33.CE. Sala de lo CA. Sentencia del 7 de noviembre del 1961. C.P. Alejandro Domínguez Molina. Rad. 346-CE-SCA-1961-11-07.</p> <p>34.CE. Sala de lo CA. Sentencia del 7 de noviembre del 1961. C.P. Alejandro Domínguez Molina. Rad. CE-SCA-1961-11-07.</p> <p>35.CC. Sentencia C-409/09. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.</p> <p>36.CC. Sentencia C-227/09. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.</p> <p>37.CC. Sentencia T-391/07. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.</p> <p>38.CC. Sentencia C-423/06. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.</p>
--	--	--	---

			39.CC. Sentencia C-423/06. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 40.CC. Sentencia C-370/06. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 41.CC. Sentencia C-370/06. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 42.CC. Sentencia C-355/06. M.P. Jaime Araujo Rentería. 43.CC. Sentencia C-355/06. M.P. Jaime Araujo Rentería. 44.CC. Sentencia C-187/06. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 45.CC. Sentencia C-187/06. M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 46.CC. Sentencia C-1175/05. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 47.CC. Sentencia C-1175/05. M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 48.CC. Sentencia C-1153/05. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 49.CC. Sentencia C-1153/05. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 50.CC. Sentencia C-662/04. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes. 51.CC. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra. 52.CC. Sentencia C-798/03. M.P. Jaime Córdoba Triviño. 53.CC. Sentencia C-311/03. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 54.CC. Sentencia C-292/03. M.P. Eduardo Montealegre Lynett. 55.CC. Sentencia C-1024/02. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.
--	--	--	---

			<p>56.CC. Sentencia C-918/02. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.</p> <p>57.CC. Sentencia C-802/02. M.P. Jaime Córdoba Triviño.</p> <p>58.CC. Sentencia C-695/02. M.P. Jaime Córdoba Triviño.</p> <p>59.CC. Sentencia C-578/02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.</p> <p>60.CC. Sentencia C-251/02. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.</p> <p>61.CC. Sentencia C-226/02. M.P. Álvaro Tafur Galvis.</p> <p>62.CC. Sentencia C-010/00. M.P. Alejandro Martínez Caballero.</p> <p>63.CC. Sentencia C-456/97. M.P. Jorge Arango Mejía.</p> <p>64.CC. Sentencia C-037/96. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.</p>
	<b>Subrogación y riesgos profesionales</b>	0	
	<b>Subrogación y riesgos laborales</b>	0	
	<b>Subrogación y ARP</b>	0	
	<b>Subrogación y ARL</b>	6	<p>1.CSJ-L Sentencia del 17 de agosto del 2011. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 36889.</p> <p>2.CSJ-L Sentencia del 8 de junio del 2011. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 35157</p> <p>3.CSJ-L Sentencia del 28 de septiembre del 2010. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad-37643.</p>

			<p>4.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 27 de mayo del 2010. C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Rad. 52001-23-31-000-2003-00719-01 16621</p> <p>5.CC. Sentencia C 379/96. M.P. Carlos Gaviria Díaz.</p> <p>6.CC. Sentencia C358/96. M.P. Carlos Gaviria Díaz.</p>
	<b>Doble indemnizacion</b>	29	<p>1.CSJ-P Sentencia del 19 de marzo del 2014. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. Rad. 39045</p> <p>2.CSJ-P Auto del 28 de agosto del 2013. M.P. Javier Zapata Ortiz. Rad. 37282.</p> <p>3.CSJ-P Sentencia del 13 de marzo del 2013. M.P José Leonidas Bustos Martínez. Rad. 37858.</p> <p>4.CSJ-P Sentencia del 12 de diciembre del 2012. M.P. José Leonidas Bustos Martínez. Rad. 38222.</p> <p>5.CSJ-P Sentencia del 21 de noviembre del 2012. M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández. Rad. 39858.</p> <p>6.CSJ-L Sentencia del 6 de diciembre del 2011. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 40137.</p> <p>7.CSJ-P Auto del 18 de octubre del 2011. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero. Rad. 35652.</p> <p>8.CSJ-L Sentencia del 9 de julio del 2010. M.P. Eduardo Adolfo López Villegas. Rad. 41658.</p> <p>9.CSJ-L Sentencia del 24 de julio del 2003. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 19945.</p> <p>10.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril del 2010. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Rad. 25000-23-26-000-1997-03663-01 17214</p> <p>11.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 16 de abril del 2009. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Rad.50001-23-31-000-2003-00372-02 0492-06</p> <p>12.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 27 de marzo del 2008. C.P. Gustavo</p>

			<p>Eduardo Gómez Aranguren. Rad. 25000-23-25-000-2003-08975-01 8239-05</p> <p>13.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero del 2008. C.P. Jesús María Lemos Bustamante. Rad. 76001-23-31-000-2000-02046-02 IJ-02046</p> <p>14.CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Aclaración de Voto. M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado. Rad. 25000-23-25-000-2002-05455-01 4176-04</p> <p>15.CE. Sala de lo CA. Sentencia del 29 de junio del 2006. C.P. Tarsicio Cáceres Toro. Rad. 25000-23-25-000-1999-02891-01 3068-01</p> <p>16.CE. Sala de lo CA. Sentencia del 29 de junio del 2006. C.P. Tarsicio Cáceres Toro. Rad. 25000-23-25-000-1999-02891-01 3068-01</p> <p>17.CE. Sala de lo CA. Sentencia del 24 de febrero del 2005. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. 85001-23-31-000-1997-00508-02 21120</p> <p>18.CE. Sala de lo CA. Sentencia del 24 de junio del 2004. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad. 19001-23-31-000-1993-3005-01 13108</p> <p>19.CE. Sala de lo CA. Sentencia del 28 de agosto de 1996. C.P. Carlos Arturo Orjuela Gongora. Rad. 127-CE-SP-EXP1996-NIJ638</p> <p>20.CE. Sala de lo CA. Sentencia del 28 de agosto de 1996. C.P. Carlos Arturo Orjuela Gongora. Rad. 127-CE-SP-EXP1996-NIJ638</p> <p>21.CE. Sala de lo CA. Sentencia del 18 de diciembre de 1995. C.P. Joaquín Barreto Ruiz. Rad. CE-SEC2-EXP1995-N7832</p> <p>22.CE. Sala de lo CA. Sentencia del 18 de octubre de 1994. C.P. Dolly Pedraza de Arenas. Rad. 80-CE-SEC2-EXP1994-N8146</p> <p>23.CE. Sala de lo CA. Sentencia del 8 de abril de 1994. C.P. Diego Younes Moreno. Rad. 641-</p>
--	--	--	--

			<p>CE-SEC2-EXP1994-N5569</p> <p>24.CE. Sala de lo CA. Sentencia del 1 de enero de 1994. C.P. Miguel Viana Patiño Rad. 118-CE-SP-EXP1994-NAC2148</p> <p>25.CE. Sala de lo CA. Sentencia del 23 de agosto de 1993. C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Rad. 335-CE-SEC3-EXP1993-N8011</p> <p>26.CE. Sala de lo CA. Sentencia del 23 de agosto de 1993. C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Rad. 8011.</p> <p>27.CE. Sala de lo CA. Auto del 16 de marzo de 1989. C.P. Jaime Betancour Cuartas. Rad. 286-CE-SC-EXP1989-N272</p> <p>28.CC. Sentencia T-588-06. M.P. Jaime Araujo Rentería.</p> <p>29.CC. Sentencia T-588-06. M.P. Jaime Araujo Rentería.</p>
	<b>Culpa del empleador y riesgos profesionales</b>	13	<p>1.CSJ-L Sentencia del 26 de marzo del 2014. M.P. Gustavo Hernando López Algarra. Rad. 39779.</p> <p>2.CSJ-L Sentencia del 16 de octubre del 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 42433.</p> <p>3.CSJ-L Sentencia del 25 de septiembre del 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 44502.</p> <p>4.CSJ-L Sentencia del 14 de agosto del 2013. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 38733.</p> <p>5.CSJ-L Sentencia del 14 de agosto del 2012. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 39446</p> <p>6.CSJ-L Sentencia del 20 de junio del 2012. M.P. Camilo Humberto Tarquino Gallego. Rad. 42374.</p>

			<p>7.CSJ-L Sentencia del 1 de marzo del 2011. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 36815.</p> <p>8.CSJ-L Sentencia del 30 de noviembre del 2010. M.P. Camilo Humberto Tarquino Gallego. Rad. 35158.</p> <p>9.CSJ-L Sentencia del 23 de noviembre del 2010. M.P. Camilo Humberto Tarquino Gallego. Rad. 37754.</p> <p>10.CSJ-L Sentencia del 1 de junio del 2010. M.P. Camilo Humberto Tarquino Gallego. Rad. 35909.</p> <p>11.CSJ-L Sentencia del 9 de marzo del 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 37064.</p> <p>12.CSJ-L Sentencia del 2 de octubre del 2007. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 29644.</p> <p>13.CC. Sentencia T 556-03. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.</p>
	<b>Culpa del empleador y riesgos laborales</b>	5	<p>1.CSJ-L Sentencia del 26 de marzo del 2014. M.P. Gustavo Hernando López Algarra. Rad. 39779.</p> <p>2.CSJ-L Sentencia del 16 de octubre del 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 42433.</p> <p>3.CSJ-L Sentencia del 25 de septiembre del 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 44502.</p> <p>4.CSJ-L Sentencia del 14 de agosto del 2013. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 38733.</p> <p>5.CSJ-L Sentencia del 6 de julio del 2011. M.P. Jorge Mauricio Burgos. Rad. 39867.</p>
	<b>Culpa del empleador</b>	4	<p>1.CSJ-L Sentencia del 16 de octubre del 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 42433.</p>



	<b>ARP</b>		<p>2.CSJ-L Sentencia del 01 de junio del 2012. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 5909.</p> <p>3.CSJ-L Sentencia del 9 de marzo del 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 37064.</p> <p>4.CSJ-L Sentencia del 21 de junio del 2001. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 15613.</p>
	<b>Culpa del empleador y ARL</b>	3	<p>1.CSJ-L Sentencia del 16 de octubre del 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 42433.</p> <p>2.CSJ-L Sentencia del 30 de octubre del 2012. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 39631.</p> <p>3.CSJ-L Sentencia del 20 de junio del 2012. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 42374.</p>

Anexo 3. Tabla de utilidad de las sentencias que aparecen con los criterios de búsqueda y del nicho citacional.

Identificación Sentencia CSJ-L	Utilidad	Justificación
CSJ-L Sentencia del 31 de julio del 2002. M.P. Silvio Fernando Trejos Bueno. Rad. 7498	No	Proceso en contra de una aseguradora para que se pague la totalidad de un seguro de vida, porque no se hizo la doble indemnización por muerte accidental. Tema de la prescripción del contrato de seguro. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 6 de noviembre de 2013. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Rad. 38377.	Si	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 24 de abril de 2012. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Rad. 38778.	No	Indemnización por no tener afiliados a un trabajador al régimen de seguridad social (muerte en manos de la guerrilla en cumplimiento de sus funciones). No hace referencia a la acumulación de indemnizaciones (valoración probatoria y desestima pretensiones).
CSJ-L Sentencia del 20 de marzo de 2013. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Rad 46489.	No	Demanda buscando que el empleador pague la pensión de vejez, sin que se comparta con la otorgada por el ISS. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 2 de octubre de 2013. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Rad. 37297.	No	Demanda buscando la declaratoria de la ocurrencia de un accidente laboral por culpa patronal. Pretende la indemnización de perjuicios y el pago de pensión de sobrevivientes. La discusión recae sobre la forma de tasar el lucro cesante futuro: indemnización después de cumplidos 25 años.
CSJ-L Sentencia del 15 de mayo del 2013. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Rad. 43294.	No	Demanda buscando que el empleador pague la pensión de vejez, sin que se comparta con la otorgada por el ISS. No trata el

		tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 10 de julio de 2013. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Rad. 42561.	No	Responsabilidad por culpa patronal. Accidente de trabajo. Discusión probatoria sin que se discuta la posibilidad de acumular indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 7 de febrero del 2012. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Rad. 47476	No	Solicitud de pensión vitalicia de vejez por haber trabajado en el Banco Agrario (EICO) 20 años sin solución de continuidad. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 5 de noviembre de 1997. M.P. Ramón Zúñiga Valverde. Rad. 9708	No	Demanda en contra del ISS buscando que se reanude el pago de una pensión por invalidez permanente parcial de origen profesional y el pago de las mesadas que se dejaron de percibir, ya que con posterioridad se le había otorgado pensión de vejez y se discutía si era posible acumularlas. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones por riesgos profesionales y responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 26 de febrero de 1997. M.P. Ramón Zúñiga Valverde. Rad. 8995	No	Demanda para obtención de indemnización plena de perjuicios por accidente laboral (culpa patronal). No hace referencia al tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 14 de noviembre del 1996. M.P. Ramon Zúñiga Valverde. Rad. 8544.	No	Demanda para obtención de indemnización plena de perjuicios por accidente laboral (culpa patronal- bus contratado por el empleador para el transporte de sus empleados). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 29 de junio del 2001. M.P. Rafael Méndez Arango. Rad. 15582	No	Demanda en contra del ISS buscando que se reanude el pago de una pensión por invalidez permanente parcial de origen profesional y el pago de las mesadas que se dejaron de percibir, ya que con posterioridad se le había otorgado pensión de vejez y se discutía si era posible acumularlas. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones

		por riesgos profesionales y responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 15 de diciembre de 1999. M.P. Rafael Méndez Arango. Rad. 12699	No	Demanda en contra del ISS buscando que se reanude el pago de una pensión por invalidez permanente parcial de origen profesional y el pago de las mesadas que se dejaron de percibir, ya que con posterioridad se le había otorgado pensión de vejez y se discutía si era posible acumularlas. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones por riesgos profesionales y responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 14 de julio del 2000. M.P. Rafael Méndez Arango. Rad. 13720.	No	Demanda a EEPPM para que se pague una pensión de vejez. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones por riesgos laborales y responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 30 de noviembre del 1999. M.P. Rafael Méndez Arango. Rad 12461.	No	Demanda para que se restituyan las mesadas de la pensión sustitutiva convencional y se acumule con la pensión de sobrevivientes que ha venido reconociendo el ISS. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 18 de agosto de 1998. M.P. Rafael Méndez Arango y Jorge Iván Palacio Palacio. Rad. 10630	No	Decisión sobre homologación de laudo arbitral para resolver un pliego de peticiones de un sindicato. Trata de la acumulación de beneficios convencionales pactados con los que otorga la ley 100 de 1993 en cuanto a pensiones y riesgos profesionales. No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 7 de mayo de 1997 M.P. Rafael Méndez Arango Rad. 9389	Si	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 6 de octubre de 1998. M.P. Rafael Méndez Arango. Rad. 10978	No	Demanda al ISS para que se condene a pagar una pensión de sobrevivientes por motivo de un accidente de origen laboral. No

		trata el tema de acumulación de indemnizaciones sino que discute si existe la pensión de sobreviviente en el régimen de riesgos profesionales.
CSJ-L Sentencia del 30 de julio del 1999. M.P. Rafael Méndez Arango. Rad 11970	No	Demanda para que se pague la pensión por jubilación vitalicia por no estar afiliado al ISS. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 18 de agosto de 1999. M.P. Rafael Méndez Arango. Rad. 12058.	No. Define culpa patronal y responsabilidad patronal	Demanda para que les indemnicen a los familiares los perjuicios causados en accidente de trabajo por culpa patronal. Imposibilidad para aplicar a la culpa patronal los principios de la responsabilidad civil extracontractual. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 15 de abril del 1999. M.P. Rafael Méndez Arango. Rad 11551.	No	Demanda para que se siguiera pagando la pensión extralegal que le fue reconocida, aun cuando se le había reconocido pensión de vejez. Prestaciones acumulables- el sistema paga los mínimos legales y en ellos es que se subroga el empleador (salvo en las reconocidas a partir de 1990, en las cuales el empleador solo paga el mayor valor). No tiene relación con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 9 de marzo del 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 38418.	No	Demanda solicitando otorgar la "pensión sanción" por incumplimiento en afiliación al sistema de seguridad social. Discute la técnica para presentar un recurso de casación. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 6 de septiembre de 2004. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 23141	No	Se demanda para que se condene a la Sociedad accionada a proporcionarle al demandante el tratamiento adecuado y total

		que le asegure el restablecimiento integral de su capacidad laboral y en su defecto, el reconocimiento de la pensión por invalidez tasada por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social; al igual que la diferencia que resulte de la reliquidación del auxilio de cesantía, los intereses a ésta, los gastos médicos, las primas, las horas extras diurnas y nocturnas y el recargo por trabajo nocturno; la indemnización por accidente de trabajo; la sanción moratoria por el no pago oportuno de las acreencias laborales; las costas procesales y la aplicación de facultades ultra y extra petita. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 31 de agosto del 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 42815.	No	Demanda para que se paguen completas las mesadas de la pensión y se acumule con la pensión de sobrevivientes que ha venido reconociendo el ISS. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 3 de agosto del 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 44046.	No	Demanda para que se paguen completas las mesadas de la pensión convencional y se acumule con la pensión de sobrevivientes que ha venido reconociendo el ISS (compatibilidad pensional solo se configuraba en tratándose de las pensiones cuya causa y origen era la ley). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 28 de septiembre del 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 42600.	No	Demanda para que se paguen completas las mesadas de la pensión convencional y se acumule con la pensión de sobrevivientes que ha venido reconociendo el

		ISS (compatibilidad pensional solo se configuraba en tratándose de las pensiones cuya causa y origen era la ley). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 28 de abril del 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 35059.	No	Demanda para que se paguen completas las mesadas de la pensión convencional y se acumule con la pensión de sobrevivientes que ha venido reconociendo el ISS (compatibilidad pensional solo se configuraba en tratándose de las pensiones cuya causa y origen era la ley). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 26 de abril del 2007. M.P. Luis López . Rad. 30280.	No	Demanda para que se reconozca la pensión restringida de jubilación prevista en el artículo 8° de la Ley 171 de 1961. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 25 de mayo del 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 41972.	No	Demanda para que se paguen completas las mesadas de la pensión convencional y se acumule con la pensión que ha venido reconociendo el ISS (compatibilidad pensional solo se configuraba en tratándose de las pensiones cuya causa y origen era la ley). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 25 de febrero del 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 34394.	No	Demanda para que se paguen completas las mesadas de la pensión convencional y se acumule con la pensión que ha venido reconociendo el ISS (compatibilidad pensional solo se configuraba en tratándose de las pensiones cuya causa y origen era la ley). No trata el tema de acumulación de

		indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 25 de abril del 2003. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 20171.	No	Demanda pretendiendo que el empleador pague la pensión de jubilación y que se acumule con la pensión de vejez a cargo del ISS. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones por riesgos profesionales y responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 21 de mayo del 2008. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 33087	No	Demanda para que se declare injusto un despido y se obligue a pagar ciertas prestaciones. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 21 de febrero del 2005. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 23117.	No	Demanda para que se pague, entre otros, la pensión de jubilación por parte del empleador entidad pública, aunque el mismo hubiera cotizado al ISS y hubiera variado su naturaleza a un ente privado. Se impone la obligación a la entidad de pagar la pensión. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 18 de marzo del 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 35708.	No	Demanda para que se paguen completas las mesadas de la pensión convencional y se acumule con la pensión que ha venido reconociendo el ISS (compatibilidad pensional solo se configuraba en tratándose de las pensiones cuya causa y origen era la ley). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 18 de marzo del 2004. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 21624.	No	Demanda para que se paguen completas las mesadas de la pensión y se acumule con la pensión que ha venido reconociendo el ISS (pensión de jubilación legal fue sustituida por la de vejez bajo los parámetros



		de los Decretos 3041 de 1966 y el 758 de 1990 en sus artículos 12 y 16.). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 18 de noviembre de 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 37683	No	Demanda solicitando otorgar la "pensión sanción" por incumplimiento en afiliación al sistema de seguridad social. Se discuten graves defectos técnicos de la demanda de casación. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 18 de marzo del 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 35595	No	Demanda por pensión especial de vejez por haber trabajado a altas temperaturas. Trata el tema de no haber cotizado al sistema de seguridad social por cierto tiempo. No hace referencia a la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 14 de marzo del 2003. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 19458	No	Demanda al ISS para que fuera condenada a continuarle pagando la pensión por invalidez de origen profesional que se le había suspendido, mesadas adicionales, intereses moratorios, indexación y costas. No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 04 de marzo del 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 35250.	No	Demanda para que se paguen completas las mesadas de la pensión convencional y se acumule con la pensión que ha venido reconociendo el ISS (compatibilidad pensional solo se configuraba en tratándose de las pensiones cuya causa y origen era la ley). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de responsabilidad civil.

CSJ-L Sentencia del 31 de enero del 2003. M.P. Luis Gonzalo Toro Correa. Rad. 19335	No	Demanda para que se paguen completas las mesadas de la pensión y se acumule con la pensión que ha venido reconociendo el ISS (pensión de jubilación legal fue sustituida por la de vejez.). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 26 de marzo de 2004. M.P. Luis Gonzalo Toro Correa. Rad. 21048.	No	<p>La demanda se instauró para que se declare que la sociedad accionada es responsable de los daños y perjuicios plenos producidos por su culpa, a raíz de la enfermedad profesional de silicosis, y que, en consecuencia, se le debe pagar la indemnización plena en el orden material, moral y fisiológico, más las costas del proceso.</p> <p>Defensa: <i>“la pretensión de un enriquecimiento indebido, ya que el ISS reconoció al accionante una indemnización por incapacidad permanente parcial, equivalente a \$5.600.148.oo.”</i> La Corte no se pronuncia sobre este tema.</p>
CSJ-L Sentencia del 23 de septiembre del 2003. M.P. Luis Gonzalo Toro Correa. Rad. 20637.	No	Demanda para que se condenara al pago de cesantía definitiva, intereses a la cesantía doblados, indemnización moratoria por no consignación de la cesantía a un Fondo, primas de servicio, prima de navidad, compensación de vacaciones, compensación de licencia de maternidad, gastos de maternidad, indemnización moratoria, bono pensional, indexación. (Declaración de existencia de contrato laboral a término indefinido y no prestación de servicios- primacía de la realidad sobre las formas). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 16 de mayo del	No	Demanda para que para que se

2012. M.P. Luis Gonzalo Toro Correa. Rad. 15152.		declare que la pensión de invalidez por riesgos profesionales, que le fue suspendida por esta entidad, es plenamente compatible con la pensión de vejez que actualmente de ella recibe. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 24 de enero del 2012. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 36074.	No	Demanda a una sociedad para que fuera condenada a reconocerles y pagarles a los demandantes la indemnización total y ordinaria de perjuicios establecida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, el seguro de vida, liquidado con base en el salario que devengaba realmente; la pensión de sobrevivientes; etc. Se hace referencia a los pagos que debe hacer el empleador por no haber afiliado al sistema de riesgos laborales. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones provenientes del sistema de riesgos laborales y responsabilidad civil, ya que aunque se demanda al empleador también por culpa patronal se determina que la culpa no quedó acreditada.
CSJ-L Sentencia del 9 de marzo del 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 37064.	Si	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 8 de julio del 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 36174.	No. Definición del sistema de riesgos laborales	Demanda para que se reconozca y pague la pensión por invalidez de origen profesional por no haber sido afiliado al sistema de seguridad social. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 4 de julio del 2006. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 27501.	Si	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 27 de julio de 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 38940.	No	Demanda para que se declarara existencia de un contrato laboral hasta la fecha del fallecimiento por un accidente laboral por culpa

		patronal. Deficiencias técnicas del escrito de casación. Se desestima por esto el ataque, sin hacer referencia a la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 27 de abril del 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 37991.	No	Demanda al empleador para que se pague la indemnización de perjuicios por enfermedad laboral por culpa del empleador. Fallas técnicas del recurso que imposibilitan el estudio de fondo. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 26 de abril del 2007. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 29582.	No	Demanda para que se reconozca pensión de sobrevivientes (ARP de origen común o subsidiariamente al fondo de pensiones si fue de origen común). Trata el tema de la determinación del origen de un accidente. No discute el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 22 de abril de 2008. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 27736.	Ver sentencia del 22 de octubre del 2007	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 22 de octubre de 2007. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 27736.	Si	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 20 de junio del 2007. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 30578.	No	Demanda para que se declare la existencia culpa patronal en la adquisición de una enfermedad profesional y de despido injusto en persona discapacitada y sin autorización del Ministerio de Protección Social, se le condene al pago de las indemnizaciones correspondientes. Fallas técnicas del cargo impiden su estudio de fondo. La Corte no realiza consideraciones relativas a la posibilidad de acumular indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 2 de marzo de 2006. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 25941.	No	Demanda por indemnización de perjuicios por muerte en accidente laboral con culpa patronal. No trata el tema de la

		acumulación de perjuicios derivada del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 2 de agosto de 2004. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 22582.	No	Demanda para que se declare la culpa patronal en accidente de trabajo. falencias técnicas por las que se desestima el cargo. No trata acumulación de indemnizaciones derivada del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 15 de julio de 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 35617.	No	Demanda en búsqueda de la indemnización de perjuicios por accidente de origen laboral con culpa patronal (además pide que se pague la diferencia entre el monto de lo reconocido por pensión de sobrevivientes por la ARP y el salario realmente devengado por el tiempo de causación de comisiones y todas las prestaciones sociales no pagadas de manera completas) Pago por parte del empleador de la diferencia entre lo cotizado y el salario real. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 12 de octubre de 2005. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 24633.	No	Demanda para que indemnicen perjuicios derivados de accidente de trabajo. Trata temas probatorios y aspectos técnicos del recurso. No hace referencia a la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 1 de diciembre del 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 37095	No	Indemnización por muerte en accidente de trabajo con culpa patronal; no estaba el empleado afiliado a ninguna ARP. Discusión del trabajador vs. el contratista independiente. Se hace una valoración probatoria y de los aspectos técnicos que debe tener la demanda de casación. No hace referencia a la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos y la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 8 de agosto del 2003. M.P. Luis Javier Osorio López.	Si	VER FICHA

Rad. 20186		
CSJ-L Sentencia del 9 de marzo del 2006. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 26125.	No	Demanda para que se paguen completas las mesadas de la pensión convencional y se acumule con la pensión que ha venido reconociendo el ISS (compatibilidad pensional solo se configuraba en tratándose de las pensiones cuya causa y origen era la ley y en este caso es legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 9 de marzo del 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 37440	No	Demanda para que previa la declaración de existencia del contrato de trabajo a término indefinido, terminado unilateralmente sin justa causa por la empleadora, y que la enfermedad profesional que le calificó la Junta Regional de Calificación de Santander se debió a culpa exclusiva de la empresa, se le condene al pago de las indemnizaciones por despido y plena de perjuicios, así como al pago de aportes a la ARP y la indexación de los anteriores conceptos. Discusión probatoria y de los requisitos de la demanda de casación. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 7 de noviembre del 2006. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 28895.	No	Demanda para que se paguen completas las mesadas de la pensión convencional y se acumule con la pensión que ha venido reconociendo el ISS (compatibilidad pensional solo se configuraba en tratándose de las pensiones cuya causa y origen era la ley y en este caso es legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de responsabilidad civil.

CSJ-L Sentencia del 7 de mayo del 2008. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 33311	No	Demanda para que se paguen completas las mesadas de la pensión convencional y se acumule con la pensión que ha venido reconociendo el ISS (compatibilidad pensional solo se configuraba en tratándose de las pensiones cuya causa y origen era la ley y en este caso es legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 30 de junio del 2005. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 24740	No	Demanda para que se indemnicen los perjuicios derivados de la muerte de un familiar en accidente de trabajo con culpa patronal. Se absuelve por no quedar acreditada la culpa del empleador. No habla de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 3 de junio del 2009 M.P. Luis Javier Osorio López Rad. 35121	Si	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 23 de junio del 2006. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 27489.	No	Demanda para que se continúe con el pago de la pensión vitalicia que fue reconocida (trabajador del sector público). Es viable la compatibilidad cuando la pensión es de origen legal. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 20 de abril del 2007. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 29470	No	Demanda para que se liquide correctamente la pensión de jubilación por parte del ISS (trabajador oficial de régimen de transición). Discusión sobre si se trata de una pensión legal o convencional y el tema de la liquidación de las pensiones. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 2 de mayo de 2003. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 19854.	No	Demanda de indemnización de perjuicios por accidente de trabajo por culpa patronal (secuela permanente parcial).

		Discuten el tema de prescripción extintiva. No discute el tema de la acumulación de indemnizaciones derivada del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 15 de junio del 2004. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 21905	No	Demanda a la sociedad Seguros de Vida Colpatria con el propósito de que se le declare civilmente responsable de los perjuicios causados a un sujeto como consecuencia de un accidente, y que por tanto se le condene a indemnizar los perjuicios causados. ARP que no pagó los gastos de una cirugía. (si existió culpa patronal, esos perjuicios tenía que asumirlos el empleador, que no fue demandado). Revisa aspectos técnicos de la demanda de casación. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 12 de mayo del 2008. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 32570.	No	Demanda para que se pague indemnización por despido injusto, a cuatro horas extras diurnas, a la dotación de uniforme y calzado, a la indemnización moratoria, y a las costas del proceso. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 11 de septiembre del 2007. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 31353.	No	Demanda para que se pague la pensión de jubilación convencional. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 28 de mayo del 2009. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 30850.	No	Demanda para que se declare la unidad de empresa y sean obligados a pagar la pensión sanción, cotización sanción o bono pensional y pensión de invalidez para uno de los demandantes, entre otros. Deficiencias técnicas de los



		cargos. (obligación de afiliar en lugares en donde no se ha ampliado la cobertura del ISS) No se discute el tema de acumulación de indemnizaciones provenientes del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 12 de marzo del 2007. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 29717	No	Demanda para que se indemnicen a los herederos los perjuicios derivados de la muerte en accidente de trabajo con culpa del empleador, también para que se paguen las prestaciones no pagadas oportunamente o de manera completa. Debate probatorio y defectos técnicos de la demanda de casación. No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos laborales y responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 30 de septiembre del 2002. M.P. Luis Gonzalo Toro Correa. Rad. 18427	No	Demanda para que se pague la pensión de jubilación (subrogación en el ISS). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 14 de septiembre de 1999. M.P. Luis Gonzalo Toro Correa. Rad. 11739	No	Demanda para que se pague pensión de jubilación y para que además se declare que el ISS no tiene que pagarle aún mesadas pensionales. Discusión sobre empleados públicos y trabajadores oficiales, y debate probatorio. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivada del sistema de riesgos laborales y de responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 1 de marzo de 2004. M.P. Luis Gonzalo Toro Correa. Rad. 21067.	No	Demanda para que se declare la existencia de un contrato laboral terminado sin justa causa y se ordene a indemnizar los perjuicios derivados de enfermedad laboral por culpa patronal, y reintegrar o pagar la pensión de invalidez. Se discuten los aspectos técnicos para que

		prospera la demanda de casación y se hace una valoración probatoria. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 6 de julio del 2011. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 39867	No	Demanda para que se indemnicen los perjuicios derivados de un accidente laboral con culpa patronal. Se discute y profundiza sobre el tema de la prescripción extintiva, sobre la procedencia de una vía para alegar en casación una decisión, y sobre la prueba de la culpa. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones provenientes del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 14 de agosto del 2013. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 38733.	No	Demanda para que para que le pagara la indemnización plena de perjuicios proveniente de accidente de trabajo, así como la indemnización por despido y la sanción moratoria. La empresa no tenía afiliado al demandante a la seguridad social. Debate probatorio sobre la prueba de la culpa del empleador. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 6 de marzo de 2012. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 35097.	No	Demanda para que se indemnicen a los familiares los perjuicios causados por muerte en accidente de trabajo con culpa patronal. Debate probatorio. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones provenientes del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 31 de julio del 2013. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 41220	No	Demanda porque la accionante fue despedida sin justa causa; no se practicaron exámenes médicos de ley que determinaran el estado de invalidez a raíz de un accidente de trabajo; no la afiliaron a una administradora de riesgos profesionales, ni le pagaron las prestaciones sociales conforme a

		la convención colectiva de trabajo, ni se le siguió el proceso administrativo disciplinario previo a su despido. Se hace una valoración probatoria. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones proveniente del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 23 de marzo de 2011. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 35971.	No	Demanda para que se declare que existió un accidente de trabajo por culpa del empleador en donde murió un trabajador familiar de los demandantes y que se condene a pagarles la indemnización plena de perjuicios ordinarios establecidos por el Código Sustantivo del Trabajo, entre otras prestaciones. Trata el tema de la pensión sanción por no haber afiliado al trabajador al sistema de seguridad social. No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 22 de octubre de 2013. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 40587.	No	Se demanda para que se declare que existió accidente de trabajo por culpa imputable a la sociedad empleadora y solidariamente a la propietaria del establecimiento de comercio beneficiario; y que las demandadas dieron por terminado unilateralmente el contrato de trabajo y retuvieron la indemnización correspondiente, y como consecuencia de esas declaraciones se las condene al pago de dicha indemnización, la sanción moratoria, los perjuicios materiales, morales y fisiológicos previstos en el artículo 216 del C.S.T., la dotación de calzado y vestido de labor dejada de suministrar durante la existencia del vínculo laboral y las costas. Examina aspectos técnicos del recurso de casación, y aspectos probatorios. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones proveniente del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 17 de agosto del	No	Demanda para que se

2011. M.P. Luis Gabriel Mirando Buelvas. Rad. 35938.		indemnicen los perjuicios causados por muerte en accidente laboral por culpa del empleador (demanda al empleador y al beneficiario de la obra solidariamente). Trata el tema de la culpa y la solidaridad de origen legal, temas de técnica en el recurso de casación. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 15 de mayo de 2013. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 37616.	No. Define accidente de trabajo.	Se demanda al empleador, a la ARP y a la AFP solidariamente a pagar pensión de sobrevivientes y gastos funerarios de su hijo fallecido en accidente laboral. Trae jurisprudencia anterior para determinar cuando existe un accidente de trabajo, hace además una valoración probatoria. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 10 de mayo de 2011. M.P. Luis Gabriel Miranda Buelvas. Rad. 36755.	No	Demanda para que se paguen completas las mesadas de la pensión convencional y se acumule con la pensión que ha venido reconociendo el ISS (compatibilidad pensional solo se configuraba en tratándose de las pensiones cuya causa y origen era la ley). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 25 de julio del 2002. M.P. José Roberto Herrera Vergara. Rad. 18520	Si	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 9 de diciembre de 1999. M.P. José Roberto Herrera Vergara. Rad. 12618	No	Demanda al ISS para que sea condenado al reconocimiento y pago de la pensión por incapacidad originada en riesgos profesionales que le fuera suspendida, "declarándose que ella es PLENAMENTE COMPATIBLE en el disfrute y percepción con la PENSION DE VEJEZ que recibe. No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones de la responsabilidad civil con

		prestaciones del sistema de riesgos laborales.
CSJ-L Sentencia del 7 de febrero de 1996. M.P. José Roberto Herrera Vergara. Rad. 7710	No	Demanda para que se paguen unas prestaciones que no se pagaron, entre otros. Discute el tema de la afiliación a la seguridad social y cuando es extemporánea y la subrogación de pensiones por el sistema de seguridad social, y los aspectos técnicos del recurso de casación. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 6 de febrero de 1996. M.P. José Roberto Herrera Vergara. Rad. 8049.	No	Demanda para que se reconozca y pague la pensión de sobrevivientes por la muerte en accidente de trabajo de su esposo y padre (no afiliado al ISS) Interesante postura frente al accidente de trabajo si hay una fuerza mayor, pero no trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 5 de octubre de 1995. M.P. José Roberto Herrera Vergara. Rad. 7659	No	Demanda para que se condene a pagar prestaciones sociales y pensión sanción, entre otros. Discute aspectos meramente probatorios. No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 29 de marzo del 2000. M.P. José Roberto Herrera Vergara. Rad. 13521	No	Demanda para que se condene a pagar pensión de jubilación. Discusión sobre jurisdicción competente. No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 16 de julio de 1996. M.P. Jose Roberto Herrera Vergara . Rad. 8351.	No	Demanda para que se reconozca pensión de jubilación. No se reconoce por estar afiliado al ISS. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 10 de noviembre de 1995. M.P. José Roberto Herrera Vergara. Rad. 7885.	No. Culpa patronal de personas jurídicas	Demanda para que se indemnicen los perjuicios causados en accidente de trabajo con culpa patronal. trata la culpa patronal de las personas jurídicas. No discute el tema de

		acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 1 de marzo del 2000. M.P. José Roberto Herrera Vergara. Rad. 13015.	No	Demanda para que se paguen los sueldos, primas legales y extralegales, vacaciones y todos los demás conceptos con la correspondiente indexación; se disponga el reconocimiento y pago de la indemnización por lucro cesante que corresponde al plazo presuntivo del contrato de trabajo; la indemnización de perjuicios; la pensión sanción y las costas. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 5 de septiembre de 2001. M.P. Jose Roberto Herrera Vergara . Rad. 16612.	No	Demanda para que les pague la totalidad de la pensión que voluntaria y anticipadamente les otorgó la demandada por haber prestado servicios por más de 20 años y tener más de 50 años de edad, sin que haya lugar a descuento alguno por estar percibiendo actualmente pensión de vejez del Instituto de Seguros Sociales. Entidad que se subroga en el ISS, no hay lugar al doble pago de la pensión. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 15 de mayo del 2013. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 45115.	No	Demanda para que se re liquide pensión de vejez. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivada del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 8 de octubre de 1997. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Rad. 9817.	Si	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 5 de noviembre de 1998. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Rad. 11081	No	Demanda para que se indemnicen los perjuicios por accidente de trabajo con culpa patronal. Discusión del alcance de un contrato de transacción celebrado entre las partes. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.

		El juez de primera instancia determinó que únicamente procedía el pago de lucro cesante por parte del empleador si el ISS dejaba de pagar la pensión de invalidez, este tema no se discutió en casación.
CSJ-L Sentencia del 4 de marzo de 1997. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Rad. 9256.	No	Demanda para que se condene a pagar algunas prestaciones sociales. Debate probatorio. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 3 de marzo de 1999. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Rad. 11428.	No	Demanda para que se condene al ISS al pago de una pensión de vejez. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 6 de agosto del 2013. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 42747.	No	Accidente de trabajo que concurre con accidente de tránsito. Trabajador no afiliado al ISS- se demanda para que se reconozca la pensión de sobrevivientes. Valoración probatoria. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 6 de agosto del 2013. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 43996.	No	Demanda para que se indemnicen los perjuicios causados por muerte en accidente de trabajo con culpa patronal (empleador y beneficiario de la obra) Afiliado a una ARP pero el empleador se encontraba en mora. Discute el tema del beneficiario de la obra obligado solidariamente. No discute el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 24 de mayo del 2011. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 38887.	No	Se demanda para que se reconozca la existencia de un contrato de trabajo y el no pago de acreencias laborales (prestaciones, salarios, etc.) a la terminación del contrato, cotizaciones dejadas de pagar al sistema de seguridad social. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 13 de septiembre del 2011. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 39859	No	Demanda para que se pague la pensión convencional pactada acumulada con la pensión de

		<p>vejez reconocida. Discusión sobre la técnica para presentar una demanda de casación. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.</p>
CSJ-L Sentencia del 13 de marzo de 2012. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 39798.	Si	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 10 de septiembre de 1997- M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Rad. 9806	No. Habla de la finalidad de cada una de las indemnizaciones	<p>Demanda para que se indemnicen los perjuicios causados en accidente laboral por culpa del empleador (muerte del trabajador). El trabajador no se encontraba afiliado al ISS para el momento de la muerte. Lo único relevante que dice para el tema de la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil es esto: (no trata el tema de acumulación de indemnizaciones)</p> <p><i>En cuanto a la responsabilidad del empleador frente a los riesgos profesionales, en reiteradas ocasiones ha expresado esta Sala de la Corte que la misma se encuentra estructurada sobre dos diferentes categorías jurídicas: la primera, la indemnización laboral común, halla su fundamento en <b>la responsabilidad objetiva que la ley estableció a cargo del empleador, sin tener en cuenta la culpa, para procurar la integridad física de los trabajadores a su servicio y garantizar así la reparación del daño que sufran en su cuerpo o en su salud por razón de accidente de trabajo o enfermedad profesional</b>; para el cálculo del resarcimiento se remite a la tarifa legal correspondiente según la remuneración del asalariado y la secuela que sufra a consecuencia del accidente o de la enfermedad.</i></p> <p><b><u>La segunda, es la indemnización plena de perjuicios, que consagra el artículo 216 del C.S.T., y que obliga al resarcimiento de todos</u></b></p>



		<p><b><u>los perjuicios ocasionados con el accidente al trabajador o a sus causahabientes; exige de quien la reclama la plena demostración de la culpa del empleador en la causación del infortunio. También en este último caso la responsabilidad es contractual pues se origina en el incumplimiento por parte del empleador de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo y de las disposiciones legales de prestar protección y seguridad a sus operarios que implican el deber especial de dotarlos de los elementos de seguridad requeridos y de asumir todas las medidas de protección necesarias para que no se presenten tales contingencias;</u></b> no tienen aquí cabida las indemnizaciones y prestaciones establecidas legalmente, excepto cuando se trata de descontar, el valor de las prestaciones en dinero que se hayan cubierto, como lo prevé el mismo artículo 216 del C.S.T. (resalto y subrayo)</p>
CSJ-L Sentencia del 8 de agosto del 2001. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 16094	No	<p>Demanda para que el empleador responda por no haber mantenido afiliado a un trabajador al ISS aunque esto fue lo que se acordó en una conciliación. Subrogación del empleador en el ISS y compatibilidad de mesadas pensionales cuando son de origen legal. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.</p>
CSJ-L Sentencia del 7 de octubre del 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 33935.	No	<p>Demanda al ISS para que se pague pensión vitalicia de vejez y que no se le envíen esas sumas de dinero a su empleador (defensa basada en compatibilidad de la pensión ya que el empleador reconoció previamente pensión de jubilación). Se hacen valoraciones probatorias y de la técnica con que se presentó el</p>

		recurso. Además se hace referencia a la compatibilidad de las pensiones. No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones derivada del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 7 de marzo del 2003. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 18515.	Si	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 6 de junio del 2006. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 26715.	No	Demanda para que se declare que entre pensión de jubilación y de vejez del ISS no existe compartibilidad, y se ordene a pagar ambas pensiones de manera completa. (No hay compartibilidad entre pensión convencional y legal, pero si cuando ésta tiene el carácter de legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 5 de julio del 2006. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 25895.	No	Demanda para que se declare que entre pensión de jubilación y de vejez del ISS no existe compartibilidad, y se ordene a pagar ambas pensiones de manera completa. (No hay compartibilidad entre pensión convencional y legal, pero si cuando ésta tiene el carácter de legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 5 de diciembre del 2006. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 26379	No	Demanda para que se ordene al empleador el pago de la diferencia entre la pensión de vejez pagada por el ISS y la que debió haber pagado si el empleador hubiera aportado las sumas correspondientes (con comisiones). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 4 de septiembre del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 29220.	No	Demanda para que se pague una pensión de jubilación proporcional al tiempo trabajado cuando el

		trabajador estuvo afiliado al ISS. Discute temas como la edad como requisito de exigibilidad o causación de la pensión. No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 4 de abril de 2006. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 25986.	No	Demanda a la ARL para que se condene a pagar una pensión de sobrevivientes. Se hace una valoración probatoria y se habla del caso fortuito para discutir si puede ser una eximente de responsabilidad para la ARL. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 31 de mayo del 2006. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 23773.	No	Demanda para que se declare que entre pensión de jubilación y de vejez del ISS no existe compartibilidad, y se ordene a pagar ambas pensiones de manera completa. (No hay compartibilidad entre pensión convencional y legal, pero si cuando ésta tiene el carácter de legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 30 de septiembre de 2004. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 21951.	No	Demanda para que se obligue a indemnizar perjuicios derivados de la muerte de un familiar en accidente de trabajo por culpa del empleador, así como de prestaciones adeudadas. La administradora de riesgos profesionales no había pagado la pensión de sobrevivientes. Se hace una valoración probatoria. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 30 de enero del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 28874.	No	Demanda para que se declare que entre pensión de jubilación y de vejez del ISS no existe compartibilidad, y se ordene a pagar ambas pensiones de manera completa. (No hay compartibilidad entre pensión convencional y legal, pero si cuando ésta tiene el carácter de legal). No trata el tema de

		acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 29 de marzo del 2005. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 23507.	No	Demanda para que se declare que entre pensión de jubilación y de vejez del ISS no existe compartibilidad, y se ordene a pagar ambas pensiones de manera completa. (No hay compartibilidad entre pensión convencional y legal, pero si cuando ésta tiene el carácter de legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 28 de abril del 2009. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 33643.	No. Define culpa del empleador.	Demanda para que se indemnicen los perjuicios causados a los familiares por muerte del trabajador en accidente laboral con culpa patronal. Se discute el tema de la prescripción y la culpa del empleador. No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos profesionales y la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 23 de septiembre del 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 32631	No	Demanda para que se indemnicen los perjuicios causados a los familiares por muerte del trabajador en accidente laboral con culpa patronal. Suratep reconoció la pensión de sobrevivientes. Se hace una valoración probatoria para decir que no existió culpa patronal. No se trata el tema de la acumulación de indemnizaciones derivada del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 22 de febrero de 2006. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 25390.	No. Historia de la creación del sistema de riesgos laborales	Demanda para que se ordenara a pagar pensión de sobreviviente de origen profesional o en su defecto de origen común. Discusión sobre la definición de accidente de trabajo. No trata el tema de acumulación de

		<p>indemnizaciones.</p> <p>Historia de la creación del sistema de riesgos laborales. (sentencia de febrero 2 de 2002, Radicación 17.429).</p>
CSJ-L Sentencia del 22 de agosto del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 29543.	No	<p>Demanda para que se declare que entre pensión de jubilación y de vejez del ISS no existe compartibilidad, y se ordene a pagar ambas pensiones de manera completa. (No hay compartibilidad entre pensión convencional y legal, pero si cuando ésta tiene el carácter de legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.</p>
CSJ-L Sentencia del 22 de abril de 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 31076.	No. Cita sentencia que trae definición de culpa patronal.	<p>Demanda para que se indemnicen los perjuicios causados por accidente de trabajo con culpa patronal. Trabajador pensionado por la ARP del ISS. Se discuten aspectos probatorios para determinar si existió culpa del empleador.</p> <p>Definición de culpa patronal: <i>"sentencia de 30 de junio de 2005 (Radicación 22.656) la Corte explicó profusamente su criterio sobre la noción de culpa patronal en los siguientes términos:</i></p> <p><i>"(...) es del caso precisar que para que se cause la indemnización ordinaria y plena de perjuicios prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo exige la ley, amén, obviamente, de la ocurrencia del riesgo, esto es, el accidente de trabajo o la enfermedad profesional, la 'culpa suficientemente comprobada' del empleador; a diferencia de lo que ocurre con las prestaciones económicas y asistenciales tarifadas previstas, hoy, en los artículos 249 y siguientes de la Ley 100 de 1993, Ley 776 de 2002 y demás normas que las reglamentan, especialmente las</i></p>

		<p>contenidas en el Decreto 1295 de 1994, que se causan por el mero acaecimiento de cualquiera de las contingencias anotadas, sin que para su concurso se requiera de una determinada conducta del empleador.</p> <p>"Dicha diferencia estriba, entonces, esencialmente, en que la segunda de las responsabilidades señaladas, es decir, la del Sistema General de Riesgos Profesionales, es de carácter eminentemente objetivo, de modo que, para su definición, basta al beneficiario de las prestaciones que de ella se desprenden acreditar el vínculo laboral y la realización del riesgo con ocasión o como consecuencia del trabajo; en tanto que, <b><u>la responsabilidad que conlleva la indemnización ordinaria y total de perjuicios tiene una naturaleza subjetiva, de modo que, su establecimiento amerita, además de la demostración del daño a la integridad o a la salud del trabajador con ocasión o como consecuencia del trabajo, la prueba del incumplimiento del empleador a los deberes de protección y seguridad que, según lo señalado por el artículo 56 del Código Sustantivo del Trabajo, de modo general le corresponden.</u></b></p> <p>"Este sistema dual de responsabilidad asegura, por una parte, que el Sistema General de Riesgos Profesionales cubra los riesgos que por su propia naturaleza genera el trabajo; y, de otro lado, que los daños ocasionados al trabajador por conducta culposa y dolosa de su empleador le sean resarcidos total y plenamente, atendiéndose el régimen general de las obligaciones.</p> <p>"Dichas responsabilidades comportan un nexo de causalidad entre el trabajo y el accidente de trabajo o la enfermedad profesional que afectan la salud o integridad del trabajador. Nexos que, en términos del accidente de trabajo, se produce 'por causa o con ocasión del trabajo', como lo prevé el artículo 9° del Decreto 1295 de 1994; y, en materia de enfermedad profesional, 'como consecuencia obligada y directa de</p>
--	--	--

		<p>la clase de trabajo que desempeña el trabajador', como lo dice el artículo 11 <i>ibidem</i>. (...)</p> <p><u>"Esa 'culpa suficiente comprobada' del empleador o, dicho en otros términos, prueba suficiente de la culpa del empleador, corresponde asumirla al trabajador demandante, en acatamiento de la regla general de la carga de la prueba de que trata el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil. <b>Es decir, a éste compete 'probar el supuesto de hecho' de la 'culpa', causa de la responsabilidad ordinaria y plena de perjuicios laboral, la cual, por ser de naturaleza contractual conmutativa es llamada por la ley 'culpa leve' que se predica de quien, como buen padre de familia, debe emplear 'diligencia o cuidado ordinario o mediano' en la administración de sus negocios.</b></u></p> <p><u>"De suerte que, la prueba del mero incumplimiento en la 'diligencia o cuidado ordinario o mediano' que debe desplegar el empleador en la administración de sus negocios, para estos casos, en la observancia de los deberes de protección y seguridad que debe a sus trabajadores, es prueba suficiente de su culpa en el infortunio laboral y, por ende, de la responsabilidad de que aquí se habla, en consecuencia, de la obligación de indemnizar total y ordinariamente los perjuicios irrogados al trabajador. (Resalto y subrayo)</u></p>
CSJ-L Sentencia del 22 de abril del 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 29933	No	<p>Demanda para que se pague la indemnización de perjuicios derivada de una enfermedad laboral por culpa del empleador. Se realiza una valoración probatoria para determinar la existencia o no de una culpa patronal. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivada del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.</p>
CSJ-L Sentencia del 21 de marzo del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 29091.	No	<p>Demanda para que se declare que entre pensión de jubilación y de vejez del ISS no</p>

		existe compatibilidad, y se ordene a pagar ambas pensiones de manera completa. (No hay compatibilidad entre pensión convencional y legal, pero si cuando ésta tiene el carácter de legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 20 de febrero del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 28551.	No	Demanda para que se declare que entre pensión de jubilación y de vejez del ISS no existe compatibilidad, y se ordene a pagar ambas pensiones de manera completa. (No hay compatibilidad entre pensión convencional y legal, pero si cuando ésta tiene el carácter de legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 20 de noviembre del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 30233	No	Demanda al ISS para que se continúe pagando la pensión de invalidez de origen profesional a pesar de haber seguido recibiendo una pensión de vejez. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones provenientes del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 2 de octubre del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 28790	No	Se demanda al empleador y a la ARP para que sean condenadas a pagar una pensión de sobreviviente- accidente de trabajo por culpa patronal. Tema de tránsito legislativo respecto de la mora en el pago a la ARP. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 19 de junio de 2002. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 17432.	No. Se acumulan los pagos sin discutir el tema	Demanda para que se paguen los perjuicios derivados de un accidente de trabajo con culpa patronal y la pensión de sobreviviente (no afiliado a seguridad social). Trata el tema de la solidaridad del beneficiario



		de la obra. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones, aunque en la sentencia de primera y segunda instancia se obliga a pagar tanto indemnización como pensión de sobrevivientes, pero este tema no es objeto de casación.
CSJ-L Sentencia del 17 de octubre del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 30330.	No	Demanda para que se pague una pensión de jubilación proporcional al tiempo trabajado. Discute temas como la edad como requisito de exigibilidad o causación de la pensión. No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 17 de octubre de 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 29609.	Si	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 17 de abril del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 28260.	No	Demanda para que se declare que entre pensión de jubilación y de vejez del ISS no existe compartibilidad, y se ordene a pagar ambas pensiones de manera completa. (No hay compartibilidad entre pensión convencional y legal, pero si cuando ésta tiene el carácter de legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 17 de junio del 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 31939	No	Demanda para que se condenara al empleador a reintegrarlo al cargo que ocupaba al momento del despido, y a pagarle los salarios y demás conceptos laborales dejados de percibir o, en su defecto, a pagarle la pensión de jubilación prevista en la Ley 6ª de 1945, las prestaciones derivadas del despido, la indemnización legal que corresponda a la incapacidad "de origen profesional". Trata deficiencias técnicas del recurso de casación, y hace valoraciones probatorias. No trata el tema de acumulación de

		indemnizaciones del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 15 de abril del 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 31838.	No	Demanda para que se declare que entre pensión de jubilación y de vejez del ISS no existe compartibilidad, y se ordene a pagar ambas pensiones de manera completa. (No hay compartibilidad entre pensión convencional y legal, pero si cuando ésta tiene el carácter de legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 15 de abril del 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 30776.	No	Demanda para que se declare que entre pensión de jubilación y de vejez del ISS no existe compartibilidad, y se ordene a pagar ambas pensiones de manera completa. (No hay compartibilidad entre pensión convencional y legal, pero si cuando ésta tiene el carácter de legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 15 de mayo de 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 28686	Si	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 14 de julio del 2009. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 37011.	No	Demanda para que se declare que entre pensión de jubilación y de vejez del ISS no existe compartibilidad, y se ordene a pagar ambas pensiones de manera completa. (No hay compartibilidad entre pensión convencional y legal, pero si cuando ésta tiene el carácter de legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 14 de agosto del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 28411.	No	Demanda para que se declare que entre pensión de jubilación y de vejez del ISS no

		existe compartibilidad, y se ordene a pagar ambas pensiones de manera completa. (No hay compartibilidad entre pensión convencional y legal, pero si cuando ésta tiene el carácter de legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 14 de agosto del 2002. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 17997	No.	Demanda para que se declare que la pensión de vejez es compatible con la de invalidez de origen profesional y se condene al pago de ambas. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivada del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 11 de diciembre del 2002. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 18931	No.	Demanda para que se declare que la pensión de vejez es compatible con la de invalidez de origen profesional y se condene al pago de ambas. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivada del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 10 de marzo del 2009. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 33303.	No	Demanda para que se declare que entre pensión de jubilación y de vejez del ISS no existe compartibilidad, y se ordene a pagar ambas pensiones de manera completa. (No hay compartibilidad entre pensión convencional y legal, pero si cuando ésta tiene el carácter de legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 1 de agosto del 2006. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 26706.	No	Demanda al empleador y al ISS para que se declare que entre pensión de jubilación y de vejez del ISS no existe compartibilidad, y se ordene a pagar ambas pensiones de manera completa. (No hay compartibilidad entre pensión

		convencional y legal, pero si cuando ésta tiene el carácter de legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 1 de abril del 2008. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 30993.	No	Demanda al empleador y al ISS para que se declare que entre pensión de jubilación y de vejez del ISS no existe compartibilidad, y se ordene a pagar ambas pensiones de manera completa. (No hay compartibilidad entre pensión convencional y legal, pero si cuando ésta tiene el carácter de legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 30 de enero del 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 28198.	No	Demanda al ISS para que se pague la mesada pensional por vejez directamente al demandante, y no al empleador. Trata el tema de compartibilidad de pensiones. No habla de la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 18 de mayo de 1992. M.P. Hugo Suescún Pujols. Rad. 4941	Si	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 17 de octubre de 1995. M.P. Hugo Suescún Pujols. Rad. 7716	Si	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 28 de mayo del 2008. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 30462	No	Demanda para que se obligue a pagar la pensión sanción por retiro voluntario y falta de afiliación al ISS. Se discute el tema de la pensión sanción. No habla del tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 23 de febrero del 2007. M.P. Gustavo Jose Gnecco Mendoza . Rad. 28454.	No	Demanda para que se declare que entre pensión de jubilación y de vejez del ISS no existe compartibilidad, y se

		ordene a pagar ambas pensiones de manera completa. (No hay compartibilidad entre pensión convencional y legal, pero si cuando ésta tiene el carácter de legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L. Sentencia del 22 de marzo del 2006. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 27403	No	Demanda para que se ordene al ISS a pagar una pensión de invalidez o a pagar la indemnización sustitutiva (de origen laboral). Valoraciones probatorias y de aspectos técnicos. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 22 de junio de 2010. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 36098	No	Demanda para que se pague pensión de jubilación (al ISS y al empleador solidariamente). Discute el tema de los intereses moratorios. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones provenientes del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 22 de abril del 2008. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 32286	No	Demanda al ISS para que se acumule la pensión de invalidez de origen profesional con la de vejez. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivado del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 11 de diciembre del 2007. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 29459.	No	Demanda para que se declare que entre pensión de jubilación y de vejez del ISS no existe compartibilidad, y se ordene a pagar ambas pensiones de manera completa. (No hay compartibilidad entre pensión convencional y legal, pero si cuando ésta tiene el carácter de legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la

		responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 1 de marzo del 2010. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 35353	No	Demanda para que se declare que entre pensión de jubilación y de vejez del ISS no existe compartibilidad, y se ordene a pagar ambas pensiones de manera completa. (No hay compartibilidad entre pensión convencional y legal, pero si cuando ésta tiene el carácter de legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 6 de mayo del 2010. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 37635.	No	Demanda para que se declare que entre pensión de jubilación y de vejez del ISS no existe compartibilidad, y se ordene a pagar ambas pensiones de manera completa. (No hay compartibilidad entre pensión convencional y legal, pero si cuando ésta tiene el carácter de legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 28 de febrero del 2006. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 25923	No	Demanda para que se indemnicen los perjuicios causados por accidente laboral con culpa patronal. Revisa aspectos técnicos del recurso de casación que hacen que no puedan ser evaluados los cargos. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivada del sistema de riesgos profesionales y responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 21 de marzo de 2007. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 28252.	No	Demanda para que se indemnicen los perjuicios causados con ocasión del accidente de trabajo por culpa del empleador. Discusiones en cuanto a la formulación de los cargos y debates probatorios. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivada del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.

CSJ-L Sentencia del 20 de mayo del 2008. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 28168.	No	Demanda para que se indemnicen los perjuicios causados con ocasión del accidente de trabajo por culpa del empleador en el que murió el hijo de los demandantes. Debate probatorio y de la técnica para acudir a casación. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 20 de febrero del 2007. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 27715.	No. Daños indemnizables	<p>Demanda para que se indemnicen los perjuicios causados con ocasión del accidente de trabajo por culpa del empleador (no fue afiliado al régimen de seguridad social). Se discuten temas de afiliación y algunos temas probatorios.</p> <p>Sobre los perjuicios indemnizables señala:  <i>Sobre ese último aspecto es claro que el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo si bien consagra a favor del trabajador el derecho a reclamar la indemnización plena de perjuicios no establece la manera como se valoran. <b>En este terreno se entra en el campo del derecho civil y concretamente en la medida del perjuicio en orden a fijar el valor de la indemnización. El tema es complejo: baste recordar que los perjuicios pueden ser materiales y morales; y que el perjuicio puede ser inmediato y futuro.</b></i></p>
CSJ-L Sentencia del 18 de marzo del 2004. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 22056.	No	Demanda para que se declare que entre pensión de jubilación y de vejez del ISS no existe compartibilidad, y se ordene a pagar ambas pensiones de manera completa. (No hay compartibilidad entre pensión convencional y legal, pero si cuando ésta tiene el carácter de legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 15 de mayo del 2008.	No	Demanda para que se declare que entre pensión de jubilación y

M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 31293.		de vejez del ISS no existe compartibilidad, y se ordene a pagar ambas pensiones de manera completa. (No hay compartibilidad entre pensión convencional y legal, pero si cuando ésta tiene el carácter de legal). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 13 de febrero del 2007. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 25081.	No	Demanda para que se declare que existe una unidad de empresa entre los demandados y sean obligados a pagar una pensión sanción. Se hace una valoración probatoria y temas relativos a la pensión de vejez. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 10 de marzo del 2004. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 21498.	No	Demanda para que se indemnicen los perjuicios causados en accidente laboral por culpa del empleador (tanto el empleador como el beneficiario de la obra). Se trata el tema de la culpa de los dependientes del empleador, y la culpa del trabajador. No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones derivada del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 8 de junio del 2011. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 35157	No	Demanda para que se ordene al empleador a pagar una pensión de jubilación. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 17 de agosto del 2011. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 36889.	No	Demanda para restablecimiento del contrato de trabajo en iguales condiciones a las que tenía en la fecha de despido, sin solución de continuidad, y el pago de los salarios y prestaciones. Trata el tema de la obligación a afiliar a los trabajadores, pensión



		sanción. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 13 de abril del 2005. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 24350	No	Demanda para que se ordene a indemnizar los perjuicios causados por accidente de trabajo con culpa patronal no reportado por el empleador, y para que se paguen algunas prestaciones sociales e indemnización por despido injusto. Trata algunos aspectos probatorios y técnicos del recurso de casación. No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 24 de mayo del 2011. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 40539.	No	Demanda para que se indemnicen los perjuicios derivados de la muerte de un trabajador en accidente laboral con culpa del trabajador. La ARP pagó pensión de sobrevivientes. Se discuten aspectos técnicos de la demanda de casación. No trabaja el tema de acumulación de indemnizaciones proveniente del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 23 de septiembre del 2009. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 35112	No	Demanda para que se indemnicen los perjuicios derivados de la ocurrencia de un accidente de trabajo con culpa patronal en el cual quedó lesionado un trabajador. Discusión probatoria. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones proveniente del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 22 de abril del 2008. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 28849	No	Demanda para que se condene a pagar pensión vitalicia de invalidez. Se discuten temas probatorios y el valor de la prueba pericial. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 18 de mayo del 2009. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 32198.	No	Demanda para que se condene al empleador y beneficiario de la obra solidariamente a pagar los

		perjuicios causados fruto de un accidente laboral con culpa patronal que le causó la muerte al hijo de la demandante. ARP reconoció pensión de sobrevivientes y el empleador fue condenado a indemnizar. Discusiones de la técnica que debe tener un recurso de casación, y del alcance de la no reforma en peor. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 12 de noviembre de 1993. M.P Rafael Méndez Arango. Rad. 5868 Nicho Citacional	Si	VER FICHA
CSL-J Sentencia del 30 de junio del 2005. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 22656 Nicho Citacional	No. Define culpa patronal	Demanda para que se indemnicen los perjuicios derivados del accidente laboral con culpa patronal.
CSJ-L Sentencia del 6 de junio del 2002. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 17251 Nicho Citacional	Si	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 4 de febrero del 2003. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López. Rad. 19357 Nicho Citacional	No	Demanda de los familiares de dos sujetos fallecidos en accidente de trabajo para obtener pensión de sobrevivientes y subsidiariamente seguro por muerte en accidente de trabajo (demanda al empleador). Adicionalmente, demandaron que se condenara a pagar la indemnización plena de perjuicios por culpa patronal, reliquidación de prestaciones, etc. Los trabajadores no habían sido afiliados al ISS. Discusión sobre la demostración de la culpa patronal, la reducción por concurrencia de culpas en materia laboral. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 29 de agosto del 2005. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 23202 Nicho Citacional	No. Define accidente de trabajo	Demanda a la ARP para que se pague pensión de sobrevivientes de origen profesional. Discusión sobre la definición de accidente

		de trabajo. (historia de la noción de accidente de trabajo). Habla sobre el nexo de causalidad en los accidentes de trabajo. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 23 de enero de 1996. M.P. Rafael Méndez Arango. Rad. 7995 Nicho Citacional	No	Demanda para que se indemnicen los perjuicios causados por muerte en accidente de trabajo con culpa patronal. Se discute la carga de la prueba de la culpa del empleador, y en cuanto a los accidentes de trabajo en el marco de actividades peligrosas. No trata el tema de concurrencia de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 22 de noviembre del 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte. Rad. 24848 Nicho citacional	No	Se demanda para que el empleador sea obligado a re liquidarle la cesantía, prima de servicios, pensión de jubilación, etc. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones
CSJ-L Sentencia del 13 de mayo de 1997. M.P. Francisco Escobar Henríquez. Rad. 9500 Nicho citacional	No	Demanda a EEPPM como deudor solidario de las obligaciones laborales contraídas por una empresa, por el no pago de algunas prestaciones sociales. Discute la cuestión de la solidaridad. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones. (contratistas independientes y contratantes)
CSJ-L Sentencia del 16 de noviembre de 1993. M.P. Rafael Méndez Arango. Rad. 5865 Nicho Citacional	No	Demanda para que se paguen salarios y pensión sanción por despido injusto. Se hace una valoración probatoria y normativa pero no se trata el tema de la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 21 de marzo de 1991. M.P. Hugo Suescún Pujols. Rad. 4097. Nicho Citacional	Si	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 21 de mayo de 1999. M.P. Armando Albarracín Carreño. Rad. 11190	No	Proceso de responsabilidad por accidente de trabajo, indemnización por empleador no tenerlo afiliado a seguridad social. Se desestiman las pretensiones por no encontrarse

		probado el vínculo laboral. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 2 de marzo de 2006. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 25992.	No	Trabajador de ECOPETROL sufre accidente de trabajo, se condena al empleador y debe indemnizarlo, pero no hay acumulación de indemnizaciones por el régimen que le era aplicable a los trabajadores de Ecopetrol
CSJ-L Sentencia del 30 de noviembre de 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 35158.	Si	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 9 de marzo del 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 35765.	No	Proceso laboral por despido injusto - se solicita reintegro e indemnización de acuerdo con lo establecido en la convención colectiva de trabajo. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 4 de noviembre del 2004. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 22983.	No	Solicitud de pensión de vejez a EPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 1 de diciembre del 2009. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 33558.	No	Solicitud de pensión de vejez - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 1 de junio de 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 35909.	Si	VER FICHA.
CSJ-L Sentencia del 11 de septiembre del 2007. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 29548.	No	Proceso laboral en el que se solicita indemnización convencional por despido sin justa causa, con los intereses comerciales y la corrección monetaria que se cause entre la fecha del despido y aquella en que se pague la indemnización. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil

CSJ-L Sentencia del 16 de febrero del 2006. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 25962.	No	Proceso laboral por declaración de existencia de vínculo laboral, indemnización por despido injusto y liquidación de prestaciones sociales. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 17 de mayo del 2011. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 41394.	No	Proceso laboral en el que se solicita el reconocimiento de pensión de vejez por tiempo laborado en Avianca S.A. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 18 de agosto del 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 36205.	No	Proceso por solicitud de reconocimiento de pensión de sobrevivientes por accidente de trabajo de copiloto. No se relaciona con el sistema de riesgos profesionales ya que el causante no se encontraba afiliado a este y por esto debe ser el empleador quien asuma el pago de la pensión.
CSJ-L Sentencia del 22 de julio del 2004. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 22052.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 22 de junio de 2006. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 26809.	Si	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 24 de julio del 2007. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 29254	No	Proceso laboral por despido injustificado, se solicita reintegro, pago de lo dejado de percibir e indemnización de perjuicios. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 24 de mayo del 2011. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 40927.	No	Proceso laboral por compatibilidad de pensión de vejez convencional y pensión otorgada por entidad publica. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y

		de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 26 de enero de 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 35782.	Si	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 26 de febrero de 2007. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 28715.	No	Proceso de responsabilidad por accidente de trabajo en el que muere trabajador, el Tribunal desestima las pretensiones toda vez que encuentra que no hay lugar a la culpa patronal. La Corte en el recurso de casación no desarrolla el tema, únicamente se pronuncia sobre los errores en la sustentación del recurso que la llevan a no casar la sentencia. No se relaciona con la acumulación con el sistema de riesgos profesionales.
CSJ-L Sentencia del 26 de octubre de 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 35392.	No	Accidente de trabajo, demandante recibió indemnización por pérdida permanente parcial por parte del sistema de riesgos ISS. Se discute el tema de culpa del empleador pero no se trata sobre la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 27 de mayo del 2009. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 34575	No	Proceso en el que se pretende que se declare existencia de vínculo laboral y al empleador civilmente responsable por accidente de trabajo en el que el trabajador falleció. La Corte solo discute los medios probatorios analizados para determinar que hubo culpa del empleador y condenarlo a indemnizar los perjuicios causados a la familia, no se toca el tema de acumulación de indemnizaciones con el sistema de riesgos.
CSJ-L Sentencia del 27 de julio de 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 36005.	No	Proceso en que se solicita indemnización por accidente de trabajo en el que el trabajador fallece y se acumula con el adelantado ante la ARP para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Se condena a la ARP al pago de la pensión y se determina que no se probó la culpa del empleador por lo que

		este se absuelve. En recurso de casación por la formulación del cargo este no es de recibo. No se casa la sentencia y no se trata el tema de acumulación de indemnizaciones propiamente.
CSJ-L Sentencia del 4 de noviembre de 2009. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 39517.	No	Auto que declara desierto recurso de casación en proceso en el que muere trabajador en accidente de trabajo en el que no se encontró culpa patronal.
CSJ-L Sentencia del 20 de junio del 2012. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 42374.	Si	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 18 de agosto del 2004. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 22253.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 18 de noviembre del 2004. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 22979.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 21 de junio del 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 36227	No	Proceso por accidente de trabajo en el que trabajador tiene una pérdida de capacidad laboral del 51%. El objeto de discusión es el reconocimiento de la pensión de invalidez a cargo de la ARP, no se menciona la acumulación de indemnizaciones ni lo relativo a la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 23 de noviembre de 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 37754.	Si	VER FICHA.
CSJ-L Sentencia del 5 de agosto del 2004. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 22474	No	Proceso en el que se pretende reintegro y pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir - convención colectiva de trabajo. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 9 de marzo del 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 36039	No	Solicitud de pensión de vejez - Ingeniero de vuelo SAM. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 16 de octubre de 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina	Si	VER FICHA.

Monsalve. Rad. 42433.		
CSJ-L Sentencia del 17 de abril del 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 39259	No	Muerte de conductor de taxi en accidente de trabajo, se pretende que se declare el vínculo laboral, la liquidación del contrato e indemnización de perjuicios. No se encontraba afiliado a seguridad social. Discusión se centra en la existencia del contrato de trabajo, realidad sobre la forma. Se condena tanto al propietario del vehículo como a la empresa de transportes a la que este estaba afiliado a reconocer pensión de sobrevivientes y todas las prestaciones sociales a las que tenía derecho. No se menciona el tema de acumulación de indemnizaciones ni de culpa del empleador (no se obliga a indemnizar).
CSJ-L Sentencia del 2 de mayo de 2012. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 39714.	No	Mismo caso de la sentencia del 26 de octubre de 2010, Camilo Tarquino Gallego. Accidente de trabajo en estación de energía de EEPMM, trabajador vinculado a contratista muere por explosión y la familia pretende la indemnización de perjuicios. No se trata el tema de acumulación de indemnizaciones, únicamente se discute el tema de la culpa del empleador.
CSJ-L Sentencia del 25 de septiembre de 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 44502.	No	Trabajador fallece en accidente de trabajo, su familia pretende que se declare responsable y se condene al empleador a la indemnización de perjuicios. Se discute la culpa patronal, pero no trata sobre acumulación de indemnizaciones con el sistema de riesgos laborales.
CSJ-L Sentencia del 3 de mayo del 2011. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 41329	No	Solicitud de sustitución pensional, compañera permanente solicita a ESP pensión de sobrevivientes con ocasión de la pensión de vejez que recibía el causante y que estaba a cargo de la entidad. No tiene relación con la acumulación de



		indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 30 de octubre del 2012. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 39631.	No	Trabajador sufre entre 70 - 90% de pérdida de capacidad laboral en accidente de trabajo. Se pretende la indemnización plena de perjuicios, la sentencia desarrolla el tema de la culpa patronal pero no hace mención al sistema de riesgos laborales.
CSJ-L Sentencia del 8 de mayo de 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 45799	No	Accidente que ocasiona al trabajador pérdida de capacidad laboral del 67%. Se pretende indemnización del art. 216 del CST. Se determina que no hay nexo causal entre el accidente ocurrido y la invalidez por lo que se absuelve al empleador. No tiene relación con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos profesionales.
CSJ-L Sentencia del 23 de mayo del 2006. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 28664.	No	No reconocimiento de pensión de vejez por periodos en mora del empleador ante el ISS. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 14 de marzo del 2002. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 17252	No	Accidente de trabajo en el que fallece el trabajador, no se encontraba afiliado a seguridad social. Se ordena al empleador reconocer la pensión de sobrevivientes a la cónyuge. No se hace mención al tema de indemnización en el campo de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 18 de septiembre del 2002. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 18749.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 21 de noviembre del 2006 M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 28997.	No	Proceso laboral por despido masivo sin autorización del Ministerio. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 21 de febrero del 2002. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No

17038.		tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 23 de junio de 2006. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 28832	No	Proceso laboral adelantado contra el ISS para el reconocimiento de vínculo laboral de enfermera que presto sus servicios para dicha entidad. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 23 de agosto del 2001. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 16377.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 24 de octubre de 2002. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 18581.	No	Accidente de trabajo que ocasiona la muerte del trabajador, se pretende la indemnización del art. 216 del CST. El objeto de discusión es la culpa del empleador, no se encuentra probada por lo que se absuelve a la demandada. No se hace mención a la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 11 de febrero de 2004. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 20655.	No	Muerte de trabajador, se discute si el accidente es de origen común o laboral para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. No tiene relación con la acumulación de indemnizaciones, únicamente interviene el sistema de riesgos profesionales y seguridad social.
CSJ-L Sentencia del 17 de mayo del 2011. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad 39290.	No	Pensión de vejez otorgada por entidad y compatibilidad con pensión de vejez otorgada por el ISS. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 6 de marzo del 2012. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 41368.	No	Pensión de vejez, reliquidación, tope máximo de 25 salarios mínimos ISS. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de

		riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 4 de diciembre del 2002. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 19303.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 14 de septiembre del 2004. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 22614.	No	Solicitud de pensión de jubilación Bancafe. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 21 de febrero del 2002. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 17038.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 27 de noviembre del 2002. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 19192.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 28 de junio del 2005. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 24670.	No	Solicitud de pensión de vejez al banco BBVA. Régimen anterior. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 29 de enero del 2003. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 19722.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 31 de enero de 2006. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 25330.	No	Accidente de trabajo que origina pérdida de capacidad laboral del 39% al trabajador. Pretende indemnización del art. 216 CST y la discusión gira en torno a la culpa del empleador de acuerdo con los parámetros de seguridad. No se hace mención a la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 4 de mayo del	No	Accidente de trabajo en el que el

2005. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 24174.		trabajador pierde una pierna, pretende indemnización plena de perjuicios. Se encuentra probada la culpa del empleador y se condena a la demandada. La corte confirma el fallo del tribunal y se limita a hacer análisis casuístico por lo que no hay interpretación alguna por parte de ésta.
CSJ-L Sentencia del 4 de julio del 2002. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 18004.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 4 de octubre de 2001. M.P. Carlos Isaac Nader. Rad. 16117.	No	Trabajador fallece en accidente de trabajo, no se encontraba afiliado a seguridad social. Se determina que existió un contrato de trabajo y se ordena que la demandada pague las prestaciones correspondientes al mismo pero no se encuentra probada la culpa patronal.
CSJ-L Sentencia del 8 de septiembre del 2009. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 35247.	No	Pensión de vejez - compatibilidad entre la reconocida por el empleador y la reconocida por el ISS. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 1 de octubre del 2003. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 21314.	No	Proceso laboral por enfermedad profesional, despido injusto. Discusión por ausencia del trabajador, incapacidad y origen de ésta. No se encuentra probada la culpa del empleador, no tiene relación con acumulación de indemnizaciones respecto al sistema de riesgos profesionales y responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 11 de marzo del 2008. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 30821	No	Proceso en el que se solicita la indemnización plena de perjuicios por muerte de trabajador en accidente de trabajo. La Corte analiza la culpa del empleador encontrando responsable a éste pero no se hace mención sobre la acumulación de indemnizaciones

		con el sistema de riesgos profesionales.
CSJ-L Sentencia del 13 de octubre de 2004. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 23734.	No	Proceso en el que se pretende se declare responsable al empleador por los perjuicios causados al trabajador por accidente que origina enfermedad profesional. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones, se analiza la prescripción para solicitar indemnización del art. 216 CST.
CSJ-L Sentencia del 16 de marzo del 2010. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 35261.	No	Accidente de trabajo, pérdida de capacidad laboral mayor al 50%. Demandante pretende indemnización del art. 216 CST, la Corte encuentra que hay culpa del empleador por lo que la sentencia condena a la demandada. Solo se analiza fácticamente si hubo culpa del empleador y se determina cómo estimar los perjuicios pero no se hace mención sobre acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 18 de junio del 2003. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 20420.	No	Proceso contra Ministerio de Transporte por despido injusto. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 29 de octubre del 2003. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 21909.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 4 de junio del 2008. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 33920.	No	Pensión restringida por retiro voluntario consagrada en la Ley 171 de 1961. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 7 de julio del 2009. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 34980.	No	Accidente de trabajo que ocasiona la muerte al trabajador. Demandante pretende indemnización plena de perjuicios, la Corte hace un análisis sobre el alcance del art. 216 CST y condena a la

		demandada.
CSJ-L Sentencia del 9 de julio del 2010. M.P. Eduardo Adolfo López Villegas. Rad. 41658.	No	Proceso laboral por despido injusto, prestaciones y conceptos adecuados. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 10 de marzo de 2005. M.P. Eduardo López Villegas - Luis Javier Osorio López. Rad. 23656.	Si	VER FICHA.
CSJ-L Sentencia del 26 de enero de 2010. M.P. Eduardo López Villegas - Luis Javier Osorio López. Rad. 35271.	Si	VER FICHA.
CSJ-L Sentencia del 8 de abril de 2008. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 31984.	No	Accidente de trabajo que le ocasiona la muerte al trabajador, sus padres pretenden la indemnización de perjuicios por parte del empleador. No se encuentra probada la culpa del empleador por lo que éste se absuelve. No hace referencia a la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 1 de septiembre de 2009. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 32629.	No	Accidentes de trabajo que ocasionaron incapacidad laboral del 44%. Se pretende que se declare responsable al empleador por los perjuicios causados. Se hace análisis fáctico sobre dicha negligencia y la Corte confirma el fallo del Tribunal que condena a la demandada. Se profundiza en la tasación de perjuicios pero no se menciona el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 21 de septiembre de 2010. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 37015.	No	Trabajador fallece por no ser atendido por la EPS ya que su empleador se encontraba en mora. Demandantes pretenden que el empleador indemnice los perjuicios causados. Por tratarse de enfermedad de origen común el sistema de riesgos profesionales no se ve involucrado. Tribunal absuelve tanto al empleador como a la EPS y se desestima el recurso de casación.

CSJ-L Sentencia del 23 de octubre de 2007. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 26611.	No	Accidente de trabajo que ocasiona la muerte al trabajador, este no se encontraba afiliado a la seguridad social. Los demandantes pretenden tanto la indemnización de perjuicios, liquidación del contrato y la pensión de sobrevivientes. La Corte confirma el fallo del tribunal que condena a las demandadas solidariamente pero en las consideraciones no se tiene en cuenta el tema de la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 31 de marzo de 2009. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 30022.	No	Accidente de trabajo que origina pérdida de capacidad laboral al trabajador, este pretende la indemnización plena de perjuicios pero la Corte confirma el fallo del tribunal desestimando las pretensiones pues no se encuentra probada la culpa del empleador. No desarrolla el tema a profundidad, se hace análisis fáctico.
CSJ-L Sentencia del 13 de febrero del 2007. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 28865.	No	Accidente de trabajo que ocasiona la muerte al trabajador. Se condena al ISS y no al empleador a pagar la pensión de sobrevivientes pero no se trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 2 de febrero del 2010. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 35012	No	Proceso por reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes, origen común. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L. Sentencia del 7 de septiembre del 2010. M.P. Eduardo López Villegas. Gómez. Rad. 37252	No	Solicitud de pago de periodos no cotizados por mora del empleador para obtener derecho a la pensión de vejez. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 8 de mayo del 2007. M.P. Eduardo López Villegas. Rad. 29631	No	Proceso reclamación de pensión de sobrevivientes por muerte de trabajador, origen común. El empleador se encontraba en

		mora en cuanto a los aportes en pensión y por ello es condenado al reconocimiento y pago de dicha pensión. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 10 de marzo del 2005. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López. Rad. 23656	Si	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 1 de marzo del 2011. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 36815.	Si	Accidente de trabajo que le ocasiona la muerte al trabajador, no se encontraba afiliado al sistema de riesgos profesionales y la pensión de sobrevivientes fue asumida por el empleador. El recurrente estima que de la condena por indemnización plena de perjuicios se debe descontar lo que la demandada le paga a la actora y a su menor hijo, por pensión de sobrevivientes, en tanto ésta tiene carácter indemnizatorio y constituye un pago parcial de la primera. Esta Sala, en sentencia del 3 de junio de 2009 Rad. 35121, por mayoría de sus integrantes y con fundamento en varias decisiones relacionadas con el tema aquí planteado, precisó que el derecho a la reparación como consecuencia de un accidente de trabajo tiene previstas 2 maneras de reparación con distinta finalidad: la denominada “reparación tarifada de riesgos”, de naturaleza prestacional, y objetiva, perteneciente al Sistema de Seguridad Social Integral, a cargo por regla general, de las Administradoras de Riesgos Profesionales y “la reparación plena de perjuicios”, de claro carácter subjetivo, que corresponde asumirla directamente al empleador una vez demostrada suficientemente la culpa patronal, conforme con el artículo 216 del C. S. del T.



		<p>También se puntualizó que los causahabientes del fallecido que, como en el caso examinado, reciben una reparación integral por los perjuicios derivados de un accidente de trabajo por culpa patronal y simultáneamente un beneficio prestacional derivado de las normas sobre Seguridad Social, más concretamente del riesgo profesional, “no están accediendo a un doble beneficio por un mismo perjuicio, en la medida que como se explicó su origen es disímil y obedecen a causas diferentes, sin olvidar que para estos casos la culpa y el dolo no son asegurables”.</p> <p>Aclaración de voto Gustavo Jose Gnecco.</p> <p>VER FICHA.</p>
CSJ-L Sentencia del 11 de septiembre del 2013. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón Rad. 42804.	No	Proceso laboral por despido injustificado - despido masivo contra BAVARIA S.A. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 12 de diciembre del 2007. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 32003	No	Reconocimiento y pago de pensión de vejez e intereses moratorios art. 141 de la Ley 100 de 1993. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 14 de septiembre de 2010. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 35227.	No	Compatibilidad entre pensión voluntaria reconocida por el empleador y pensión de vejez reconocida por el ISS. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 15 de febrero del 2011. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 34817.	No	Accidente de trabajo que le ocasiona la muerte al trabajador. Los accionantes solicitaron que se declarara responsable a la

		demandada, de los perjuicios causados a los demandantes. Opera la prescripción salvo en el caso de los menores de edad, De conformidad con los artículos 216 del C. S. T. y 177 del C. de P. C., aplicable en lo laboral por remisión, se concluye que la parte demandante no probó como le correspondía en forma suficiente, la culpa del empleador para efectos de determinar la procedencia de la indemnización plena por los perjuicios pretendidos.
CSJ-L Sentencia del 2 de junio del 2009. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 34887.	No	Accidente de trabajo que ocasiona la muerte al trabajador, no se encontraba afiliado al sistema de riesgos profesionales. No se encuentra probada la culpa del empleador y no se menciona el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 31 de marzo del 2009. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 34744.	No	Accidente de trabajo que ocasiona al trabajador pérdida de capacidad laboral al 50%, el empleador es condenado a indemnizar los perjuicios causados a este por haber sido negligente. Análisis fáctico y no jurídico de la culpa del empleador, no se menciona la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 4 de abril del 2008. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 31854.	No	Accidente de trabajo que ocasiona la muerte al trabajador, no se encuentra probada la culpa del empleador por lo que no hay lugar a la indemnización de perjuicios. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones con el sistema de riesgos profesionales.
CSJ-L Sentencia del 6 de febrero de 2013. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 41182	No	Proceso laboral por despido injustificado, solicita además indemnización por pérdida de capacidad laboral. Se desestiman las pretensiones y no tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 6 de marzo del	No	Auto que declara extemporáneo

2012. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 31948.		recurso de reposición. Se resuelve sobre la renuncia del mandato de los apoderados sustitutos de la parte demandante (f. 78 C. Corte) y la petición de desglose del contrato de transacción suscrito formulada por el representante judicial de SERVIMINAS LTDA. (f. 96 C. Corte). No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 8 de febrero de 2011. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 36318.	No	La demandante solicitó declarar que la pensión convencional que se reconoció al demandante, no es compartible con la de vejez reconocida por el ISS y en consecuencia se condene a la empresa a pagarle ambas pensiones y a reintegrarle las sumas descontadas desde la fecha en que le suspendió el pago, los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 o en subsidio la indexación, el reembolso de dinero que la empresa recibió del ISS por concepto de retroactivo pensional en la cantidad que aparece en la resolución respectiva, con los intereses de mora o, en su defecto, la indexación. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 9 de febrero del 2010. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 36490.	No	Proceso en el que se solicita reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes, origen común. No tiene relación con acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 6 de diciembre del 2011. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 40137.	No	El demandante solicitó que se declare que existió un contrato de trabajo con la demandada, y se condene a pagar algunas prestaciones sociales y sanciones por mora en el pago de las mismas. No tiene nada

		que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 4 de agosto del 2009. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 34806.	No	Proceso en el que se pretende se indemnice al trabajador por perjuicios causados por enfermedad de origen laboral. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones, no prosperan las pretensiones.
CSJ-L Sentencia del 4 de agosto del 2009 M.P. Elsy Del Pilar Cuello Calderón. Rad. 34806	No	Accidente de trabajo que le ocasiona la muerte al trabajador, se solicita la indemnización plena de perjuicios. ARL reconoció pensión de sobrevivientes. Se encuentra probada la culpa del trabajador, no se refiere al tema de acumulación de indemnizaciones, y el análisis es fáctico.
CSJ-L Sentencia del 21 de agosto del 2013. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 43604.	No	El actor pidió que se condene al pago de la indemnización por retiro injusto, y otras prestaciones sociales. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 7 de mayo del 1997. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 9085.	No	Proceso laboral por reconocimiento y pago de pensión de vejez a varios trabajadores por el ISS. No tiene nada que ver con el sistema de riesgos profesionales y acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 22 de octubre del 2003. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 20810.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 15 de abril del 2004. M.P. Fernando Vásquez Botero . Rad. 21855.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 20 de febrero del 2002. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 16785.	No	Accidente de trabajo que le ocasiona la muerte al trabajador. Análisis fáctico de la Corte, se

		encuentra conducta negligente del mismo por lo que no hay lugar a la indemnización de perjuicios. No hace referencia a la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 21 de junio del 2001. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 15613	No	Proceso adelantado por despido injustificado y accidente de trabajo que ocasiona al trabajador pérdida de capacidad laboral. No se encuentra probada culpa del empleador, no se menciona el tema de acumulación de indemnizaciones, y el análisis de cada cargo es fáctico.
CSJ-L Sentencia del 22 de marzo del 2001. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 15113	No	Proceso laboral en el que se solicita que se declare la compatibilidad de la pensión por incapacidad permanente definitiva que le había reconocido y la pensión de vejez a que también tiene derecho le sea otorgada por éste. No tiene que ver con acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 22 de octubre del 2003. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 20810.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 23 de septiembre de 1998. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 10989	No	Accidente de trabajo que ocasiona la muerte al trabajador. Corte desestima los cargos y su análisis recae sobre los cargos presentados, no se casa la sentencia y se condena al empleador al pago de la indemnización. No se trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 24 de septiembre del 2003. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 20450.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 28 de julio del 1999. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 11999.	No	Accidente de trabajo que ocasiona pérdida permanente parcial y despido indirecto por

		renuncia provocada a raíz del accidente. Cargo del recurso de casación no prospera, no se hace mención a la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 29 de enero del 2003. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 18985.	No	Solicitud reconocimiento y pago de pensión de sobrevivientes - origen común de trabajador oficial EEPPM que fallece. No tiene que ver con acumulación de indemnizaciones de sistema de riesgos laborales y responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 3 de diciembre del 2003. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 21271.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 30 de julio del 2003. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 2003.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 4 de julio del 2002. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 17044.	No	Proceso en el que se pretende que se declare responsable al empleador por accidente de trabajo que ocasiona al trabajador pérdida de capacidad laboral. Corte analiza si hubo o no culpa del empleador, no se hace mención al tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 5 de febrero del 2003. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 19198.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 6 de septiembre de 1999. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 12054	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 6 de diciembre del 2001. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 16515.	No	Proceso contra el Departamento de Antioquia por accidente de trabajo en el que fallece el trabajador. No se encuentra

		probada la culpa del empleador, Corte hace análisis fáctico y no tiene relación con acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 24 de julio del 2003. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 19945	No	Proceso laboral por despido injustificado de trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 15 de noviembre del 2001. M.P. Fernando Vásquez Botero. José Roberto Herrera Vergara. Rad. 15755.	No	Accidente de trabajo en el que fallece trabajador oficial - Departamento de Antioquia. Se realiza una apreciación de los medios de prueba, y un análisis respecto a la indemnización por culpa del empleador. No se refiere a la acumulación de indemnizaciones con el sistema de riesgos laborales.
CSJ-L Sentencia del 9 de julio del 2003. M.P. Fernando Vásquez Botero. Rad. 19569.	No	Médico cirujano muere en accidente de tránsito. Se discute si fue accidente de trabajo y si hubo culpa del empleador. Por la deficiencia de los cargos no casa la sentencia. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 12 de junio de 1998. M.P. Francisco Escobar Henríquez. Rad. 10643.	Si	VER FICHA.
CSJ-L Sentencia del 18 de septiembre de 1995 M.P. Francisco Escobar Henríquez Rad. 7531	No	Proceso laboral por despido injustificado de trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 8 de mayo del 2002. M.P. Francisco Escobar Henríquez. Rad. 18098	No	Compatibilidad entre pensión de invalidez y pensión de vejez. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 10 de febrero de 2009. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 31142.	No	Accidente en el que fallece trabajador, se solicita indemnización plena de perjuicios. El análisis que hace la Corte versa sobre la formulación de los cargos presentados y no

		tiene relación con la acumulación de indemnizaciones con el sistema de riesgos laborales ya que se determina que el accidente es de origen común.
CSJ-L Sentencia del 19 de septiembre de 2007. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 29153.	No	Accidente de trabajo en el que el trabajador pierde capacidad laboral, no se encuentra probada la culpa del empleador. No se trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 21 de julio del 2010. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 36168	No	Accidente de trabajo en el que el trabajador pierde capacidad laboral, no se encuentra probada la culpa del empleador. No se trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 23 de febrero del 2007. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 25994.	No	Compatibilidad entre pensión de invalidez y pensión de vejez. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 23 de marzo de 2007. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 27974.	No	Accidente de trabajo que le ocasiona la muerte al trabajador. Análisis fáctico de la Corte sobre el material probatorio y se encuentra que hubo culpa del empleador. No tiene relación con la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 24 de junio del 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez Rad. 23643	Si	VER FICHA.
CSJ-L Sentencia del 28 de septiembre del 2010. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad- 37643.	No	Compatibilidad entre pensión voluntaria reconocida por empleador y pensión de vejez - sobrevivientes reconocida por el ISS. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 14 de agosto del 2012. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 39446	Si	VER FICHA.
CSJ-L Sentencia del 12 de junio de 1996. M.P. Francisco Escobar Henríquez. Rad. 8074.	No	Proceso laboral por despido injustificado de trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil



CSJ-L Sentencia del 19 de junio del 2009. M.P. Francisco Escobar Henríquez. Rad. 18302	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 9 de agosto de 1996. M.P. Francisco Escobar Henríquez. Rad. 8190	No	Proceso con múltiples reclamaciones por despido masivo. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 11 de noviembre del 2008. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 32517	No	Pensionado por invalidez que cumple requisitos para pensión de vejez - ISS suspende el pago de la primera. No tiene nada que ver con acumulación de indemnizaciones.
CJS- L Sentencia del 24 de octubre del 2007, Francisco Javier Ricaurte Gómez Rad 29893.	No	Reconocimiento, liquidación y pago de la pensión post-mortem de su legítimo esposo, en grado de sustitución a su favor, debidamente indexada, de conformidad con el I.P.C., los intereses y la indemnización moratoria por el no desembolso de la misma. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L. Sentencia del 10 de diciembre del 2007. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 28399.	No	Proceso que se adelanta para en su calidad de cónyuge sobreviviente, fuera condenada a reconocerle y pagarle la pensión restringida de jubilación que le correspondía en vida a su cónyuge. No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 10 de mayo de 2006. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 26126.	No	Accidente de trabajo en el que el trabajador pierde la vida cuando un compañero le dispara. No se encuentra probada la culpa del empleador y el análisis del tema se centra precisamente en la carga de la prueba de la misma y del grado de culpa. No se hace mención al tema de acumulación con prestación del sistema de riesgos laborales.
CSJ-L Sentencia del 16 de marzo del 2005. M.P. Francisco Javier	Si	VER FICHA.

Ricaurte Gómez . Rad. 20240.		
CSJ-L Sentencia del 16 de marzo del 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 23017.	No	Trabajador que murió en ejercicio de sus funciones, fue asesinado y su cónyuge reclama la indemnización de perjuicios. No se encuentra probada la culpa patronal por lo que no procede la indemnización y la Corte hace un análisis apreciando las pruebas del proceso pero no se hace análisis jurídico del tema.
CSJ-L Sentencia del 17 de febrero del 2009. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 31080	No	Proceso laboral en el que se solicita el pago de pensión de sobrevivientes. No tiene nada que ver con acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 2 de octubre del 2007. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 29644.	Si	VER FICHA.
CSJ-L Sentencia del 20 de abril del 2010. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez Rad. 33539	No	Proceso adelantado contra el ISS por negar reconocimiento de pensión de vejez. No tiene nada que ver con acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 22 de febrero del 2011. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 34820.	No	Compatibilidad entre pensión de invalidez de origen profesional y pensión de vejez reconocida por el ISS. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 23 de febrero del 2010. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 33265	No	Proceso en el que se discute si cónyuge de trabajador que murió en accidente de trabajo y que disfruta de la sustitución de la pensión de vejez puede recibir por parte de la ARL pensión de sobrevivientes de origen profesional. Se afirma que no tiene razón de ser que se permita una afiliación al sistema de riesgos profesionales si el asegurado no puede acceder a los correspondientes beneficios. No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 31 de marzo de 2009. M.P. Francisco Javier Ricaurte	No	Trabajador que sufrió perjuicios por accidente de trabajo reclama

Gómez. Rad. 32066.		la indemnización de perjuicios. No se encuentra probada la culpa patronal por lo que no procede la indemnización, análisis fáctico de la Corte.
CSJ-L Sentencia del 5 de noviembre de 2008. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 28158.	No	Demandante solicita indemnización de perjuicios por presunto accidente de trabajo pero se desestiman sus pretensiones pues no logra demostrarse el vínculo laboral. No hace referencia al tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 7 de julio del 2010. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 31646.	Si	VER FICHA.
CSJ-L Sentencia del 15 de diciembre de 1995. M.P. German Valdés Sánchez. Rad. 7960.	No	Proceso de pensión voluntaria de jubilación no es compartida con la pensión de vejez del Seguro Social y para que se condene a la empresa al pago cabal de la pensión voluntaria, sus reajustes y la mesada adicional de diciembre.
CSJ-L Sentencia del 12 de agosto de 2003. M.P. Germán G. Valdés Sánchez. Rad. 20887	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 24 de julio de 1996. M.P. Germán G. Valdés Sánchez. Rad. 8700.	No	Trabajador sufre accidente de trabajo y pérdida de capacidad laboral, es despedido y recibe pensión de invalidez según el ISS por enfermedad de origen común pues determina que la pérdida de capacidad no se deriva del accidente. La Corte no hace un análisis jurídico respecto de la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 11 de marzo de 1998. M.P. German Valdés Sánchez. Rad. 10467.	No	Se discute el reconocimiento de pensión de invalidez a trabajador que sufrió accidente de trabajo pero no se encontraba afiliado a seguridad social. No se toca el tema de indemnización por culpa del empleador.
CSJ-L Sentencia del 19 de febrero de 2002. M.P. German Valdés Sánchez. Rad. 17429.	No	Trabajador fallece y su familia reclama pensión de sobrevivientes a la ARL por

		tratarse de un accidente de trabajo. No se ha mención a indemnización de perjuicios por parte del empleador.
CSJ-L Sentencia del 19 de noviembre del 2002. M.P. Germán Valdez Sánchez. Rad. 18076	No	Accidente de trabajo que le ocasiona la muerte al trabajador y su cónyuge e hija reclaman indemnización del art. 216 del CST. Se condena al empleador por encontrarse probada la culpa pero el análisis que hace la Corte es formal en cuanto a los cargos formulados y fáctico, no hace mención al sistema de riesgos laborales.
CSJ-L Sentencia del 21 de octubre de 2003. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 21625.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 7 de octubre de 2003. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 21297.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 6 de mayo de 2003. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 20344.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 8 de febrero de 1999. M.P. German Valdés Sánchez. Rad. 11274.	No	Accidente de trabajo que le ocasiona la muerte al trabajador y sus familiares reclaman indemnización del art. 216 del CST. Se condena al empleador por encontrarse probada la culpa pero el análisis que hace la Corte es fáctico - probatorio, no hace mención al sistema de riesgos laborales.
CSJ-L Sentencia del 9 de noviembre del 2000. M.P. Germán G. Valdés Sánchez. Rad. 14847	Si	VER FICHA.
CSJ-L Sentencia del 11 de marzo de 2003. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 20170.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y

		de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 13 de mayo de 2003. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 20454.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM (sustitución) - trabajador oficial y compatibilidad con pensión de sobrevivientes. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 18 de marzo de 2003. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 20173.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 22 de julio de 2003. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 20979.	No	Múltiple solicitud de pensión de jubilación a EEPPM y compatibilidad por la pensión de vejez reconocida por el ISS. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 22 de julio de 2003. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 21272.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 8 de agosto de 1997. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 9540.	No	Múltiple solicitud de pensión de jubilación a Fabricato y la pensión de vejez reconocida por el ISS. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 8 de octubre del 2002. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 19041.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial y compartibilidad con la pensión de vejez reconocida por el ISS. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 13 de febrero del 2002. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 17571.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil

CSJ-L Sentencia del 19 de febrero de 1997. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 9276.	No	Múltiple solicitud de pensión de jubilación a Fabricato y compartibilidad por la pensión de vejez reconocida por el ISS. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 26 de febrero de 1997. M.P. German Valdés Sánchez . Rad. 9329.	No	Múltiple solicitud de pensión de jubilación a Fabricato y compartibilidad por la pensión de vejez reconocida por el ISS. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 1 de octubre de 1997 M.P. Germán G. Valdés Sánchez. Rad. 9893	No	Accidente de trabajo que le ocasiona la muerte al trabajador y su cónyuge e hijos reclaman indemnización del art. 216 del CST. Se condena al empleador por encontrarse probada la culpa pero el análisis que hace la Corte es formal en cuanto a los cargos formulados, y fáctico, no hace mención al sistema de riesgos laborales.
CSJ-L Sentencia del 26 de marzo del 2014. M.P. Gustavo Hernando López Algarra. Rad. 39779.	No	Trabajador sufre enfermedad profesional - pérdida de capacidad laboral del 50% y solicita que su empleador sea declarado civilmente responsable por los perjuicios causados. Análisis fáctico y de formulación de cargos por parte de la Corte pero no se menciona el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 17 de junio del 2010. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 40764.	No	Solicitud de pensión de vejez al Banco Cafetero S.A. y compatibilidad con la pensión de vejez reconocida por el ISS. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 8 de junio del 2011. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 46538.	No	Solicitud de pensión de vejez a la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero y compartibilidad con la pensión de vejez reconocida por el ISS. No tiene nada que ver con la

		acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 11 de diciembre del 2007. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 29918.	No	Solicitud de pensión de vejez a EEPPM - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L. Sentencia del 12 de julio del 2004. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 21937	No	Proceso laboral en el que se demanda al ISS para que reconozca y pague pensión de invalidez. No se hace referencia a la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 18 de julio del 2007. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 29115.	No	Solicitud de pensión de vejez a Empresa de Energía de Bogotá ESP - trabajador oficial. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 26 de marzo del 2004. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 20941.	No	Solicitud de pensión de vejez a la Industria de Licores del Valle del Cauca y compartibilidad con la pensión de vejez reconocida por el ISS. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
Aclaración de voto del Magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 29644.	Si. Ver sentencia del 2 de octubre del 2007	VER FICHA
CSJ-L Sentencia del 30 de agosto del 2005. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 24980.	No	Solicitud de pensión de vejez al Banco Popular S.A. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 4 de mayo del 2005. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 24371.	No	Solicitud de pensión de vejez a la Empresa de Energía de Bogotá ESP y compatibilidad con la pensión de vejez reconocida por el ISS. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil

CSJ-L Sentencia del 16 de marzo del 2010 M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza Rad. 36922	No. Noción de accidente de trabajo	Trabajador fallece por asalto en su residencia y sus familiares reclaman al empleador indemnización de perjuicios, pensión de sobrevivientes y liquidación del contrato de trabajo. Análisis importante sobre la noción de accidente de trabajo. Se absuelve a la demandada. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-L Sentencia del 17 de octubre del 2008. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 30605.	No	Accidente de trabajo que le ocasiona la muerte al trabajador y su cónyuge e hijos reclaman indemnización del art. 216 del CST. Relación entre cooperativa asociada de trabajo - empresa y trabajador, análisis que hace la Corte es formal en cuanto a los cargos formulados, fáctico y sobre la figura de las cooperativas, no hace mención al sistema de riesgos laborales.
CSJ-L Sentencia del 18 de septiembre del 2007. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 29401	No	Proceso laboral por despido sin justa causa. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-L Sentencia del 23 de febrero del 2007. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza . Rad. 28454.	No	Accidente de trabajo que le ocasiona al trabajador pérdida de capacidad laboral del 21%. No se encuentra probada la culpa del empleador, análisis probatorio por parte de la Corte. No se hace referencia a la acumulación de indemnizaciones con el sistema de riesgos laborales.
CSJ-L Sentencia del 16 de marzo del 2010. M.P. Gustavo José Gnecco Mendoza. Rad. 37030.	No	Accidente de trabajo que le ocasiona al trabajador y solicita indemnización de perjuicios. No se encuentra probada la culpa del empleador, análisis probatorio por parte de la Corte. No se hace referencia a la acumulación de indemnizaciones con el sistema de riesgos laborales.



<b>Identificación Sentencia CSJ-P</b>	<b>Utilidad</b>	<b>Justificación</b>
CSJ-P Sentencia del 27 de octubre de 2005. M.P. Sigilfredo Espinosa Pérez. Rad. 22542	No	Condena por homicidio simple. Trata el tema del seguro de vida (no profundiza en él). No hace referencia a la acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-P Sentencia del 19 de marzo del 2014. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. Rad. 39045	No	Condena a un ex paramilitar en el marco del sistema de justicia y paz. Indemnización a las víctimas (incidente de reparación integral). No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y la responsabilidad civil.
CSJ-P Sentencia del 6 de junio del 2012. M.P. Luis Guillermo Salazar Otero. Acta 218.	No	Condena por homicidio. Paramilitar en el marco de justicia y paz. (resuelve incidente de reparación integral) No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivada del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-P Sentencia del 12 de diciembre del 2012. M.P. José Leonidas Bustos Martínez. Rad. 38222.	No	Condena por delitos de concierto para delinquir agravado en concurso con tráfico, fabricación y porte de armas y municiones de uso privativo de las fuerzas armadas, utilización ilegal de uniformes e insignias de la fuerza pública, reclutamiento ilícito de menores en concurso homogéneo y sucesivo (309 en total), y el secuestro simple y posterior homicidio agravado del señor Rigoberto de Jesús Castro Mora –alcalde de Unguía Chocó-. Trata el tema de la reparación en el marco de justicia y paz pero no la acumulación de indemnizaciones procedente del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-P Sentencia del 13 de marzo del 2013. M.P. José Leonidas Bustos Martínez. Rad. 37858.	No	Delitos de contrato sin el cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y heterogéneo con los de peculado por apropiación a favor de terceros. Trata una discusión sobre la responsabilidad civil de una petrolera. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedentes del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-P Auto del 28 de agosto del 2013. M.P. Javier Zapata Ortiz. Rad. 37282	No	Se inadmite demanda de casación por carencia de requisitos técnicos. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones procedente del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-P Sentencia del 21 de abril del 2008. M.P. Javier	No	Resuelve apelación en contra de decisión de no dar trámite a un incidente de reparación

Zapata Ortiz. Rad. 29240.		integral. Soldado fallecido, se otorgó la pensión de sobrevivientes a los familiares y se discute si la indemnización de perjuicios implicaría una doble indemnización. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-P Sentencia del 17 de abril del 2013. M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández. Acta 113	No	Concepto sobre solicitud de extradición de colombiano - No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil. Sala penal.
CSJ-P Sentencia del 21 de noviembre del 2012. M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández. Rad. 39858.	No	Proceso penal por los delitos de estafa agravada y fraude procesal. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-L Sentencia del 10 de marzo de 1993. M.P. Manuel Enrique Daza Álvarez. Rad. 5480. Nicho citacional.	Si	VER FICHA.
CSJ-L Sentencia del 13 de julio de 1993. M.P. Hugo Suescun Pujols. Rad. 5918. Nicho citacional.	Si	VER FICHA.
Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 31 de mayo de 1.994 Rad. 6569.	Si	VER FICHA.

Identificación Sentencia CSJ-C	Utilidad	Justificación
CSJ-C y A Auto del 5 de julio del 2012. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Rad. Exp. 5001-3103-009-2004-00263-01	No	Auto concede amparo de pobreza. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones. (ARL -término de búsqueda ARL y responsabilidad civil- ni siquiera aparece dentro del auto)
CSJ-C y A Auto del 15 de agosto del 2012. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Rad. Exp. 05001-3103-009-2004-00263-01.	No	Auto niega el amparo de pobreza, por extemporáneo. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones. (ARL -término de búsqueda ARL y responsabilidad civil- ni siquiera aparece dentro del auto)
CSJ-C y A Auto del 2 de mayo del 2012. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Rad. 73449-3103-001-2006-00049-01.	No	Se decide sobre la terminación de un proceso por conciliación. No trata el tema de acumulación

		de indemnizaciones. (ARL - término de búsqueda ARL y responsabilidad civil- ni siquiera aparece dentro del auto)
CSJ-C y A Auto del 12 de marzo del 2012. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Rad. 66001-3103-001-2007-00055-01.	No	Auto que admite el recurso de casación y corre traslado para oponerse. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones. (ARL -término de búsqueda ARL y responsabilidad civil- ni siquiera aparece dentro del auto)
CSJ-C Sentencia del 20 de junio del 2011. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Rad. 05001-3103-005-2000-00177-01	No	Responsabilidad por omitir el pago preferencial de las acreencias laborales de unos sujetos. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil por un mismo hecho (en este caso la responsabilidad civil se deriva del no pago de acreencias laborales).
CSJ-C Sentencia del 22 de noviembre del 2011. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Rad. Exp. 05001-3103-005-1999-17985-01	No	Responsabilidad civil derivada de un accidente de tránsito; vehículo era explotado por la sociedad a la que se demanda. No se trató de un accidente laboral y por lo tanto no estuvo involucrado el sistema de riesgos laborales, ni se trata el tema de la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-C Sentencia del 24 de noviembre del 2008. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Ref: Exp. N° 0500131030101998-00529-01	No	Responsabilidad civil derivada de un accidente de tránsito. Se demanda a la empresa transportadora, quien llama en garantía a varias aseguradoras. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones porque en la demanda se afirma que no se ha recibido ninguna indemnización como consecuencia del accidente.
CSJ-C Sentencia del 5 de abril del 2011. M.P. Ruth Marina Díaz Rueda. Rad. 66001-3103-003-2006-00190-01	No	Responsabilidad derivada de un accidente de tránsito. Se demanda a la transportadora quien llama en garantía a una aseguradora (muerte de pasajeros). La aseguradora

		propuso como excepción la imposibilidad de acumular indemnizaciones pero el tribunal no se pronunció al respecto por sustracción de materia. Trata el tema de responsabilidad contractual y extracontractual en relación con el contrato de seguro, no de acumulación de indemnizaciones de riesgos laborales y responsabilidad civil.
CSJ-C. Sentencia del 9 de julio del 2010. M.P William Namén Vargas. Ref.: Expediente 11001-3103-035-1999-02191-01  CSJ-C Sentencia del 19 de diciembre del 2008. M.P. William Namén Vargas. REF.: 11001-3103-035-1999-02191-01	Si	VER FICHA
CSJ-C Sentencia del 15 de diciembre del 2011. M.P. William Namén Vargas Ref.: 11001-3103-009-2005-00147-01	No	El instituto de seguros sociales demanda a un banco por no haberle pagado unos dineros correspondientes a los aportes para salud, pensiones y riesgos profesionales que habían sido consignados por la Universidad de los Llanos. No vuelve a mencionar el término riesgos profesionales ni se refiere a la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-C Sentencia del 2 de agosto de 1995. M.P. Pedro Lafont Pianetta. Rad. 4159	No	Sociedad demanda a un banco (daños y perjuicios causados en virtud de haber adelantado un proceso ejecutivo singular). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivada del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-C y A Sentencia del 14 de noviembre del 2008. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. Rad. 70001 3103 004 1999 00403 01.	No	Demanda para que se indemnicen los perjuicios por un incumplimiento contractual. Trata temas como la valoración de un dictamen pericial que no se basa en libros contables y el valor de la confesión ficta. No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones derivada del sistema de riesgos laborales y la responsabilidad civil.

CSJ-C y A. Sentencia del 18 de octubre del 2005. M.P. Pedro Octavio Munar Cadena. Rad. 14491 [SC-259-2005]	No	Responsabilidad civil derivada de la obligación de seguridad en centro hospitalario. Trata la acumulación de indemnizaciones y pretensiones para víctimas directas e indirectas pero no tiene nada que ver con la acumulación derivada del sistema de riesgos laborales.
CSJ-C Sentencia del 6 de agosto del 2002. M.P. Nicolás Bechara Simancas. Rad. 6148	No	Responsabilidad derivada de accidente de tránsito. Reconoce lucro cesante solo hasta los 18 años. No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-C y A Auto del 12 de abril del 2012. M.P. Margarita Cabello Blanco. Rad. 11001 02 03 000 2012 00440 00.	No	Resuelve conflicto de competencia. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-C y A Auto del 4 de mayo del 2012. M.P. Margarita Cabello Blanco. Rad. 73268 31 03 001 2009 00075 01.	No	Auto inadmite demanda de casación por falta de técnica. No se relaciona con la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-C Auto del 5 de mayo del 2014. M.P. Margarita Cabello Blanco. Rad. 23555-3189-001-2010-00033-01.	No	Auto inadmite demanda de casación por no pago de expensas para copias. No se relaciona con la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-C y A Sentencia del 26 de octubre del 2000. M.P. José Fernando Ramírez Gómez. Rad. 5462.	No	Demanda por responsabilidad civil extracontractual en accidente de tránsito. No se relaciona con la acumulación de indemnizaciones.
CSJ-CyA Sentencia del 24 de junio de 1996. M.P. José Fernando Ramírez Gómez. Rad. 4424.	No	Responsabilidad civil derivada de un accidente de tránsito. Lucro cesante derivado de la no utilización del vehículo. Deber de mitigar el daño. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-C Sentencia del 23 de septiembre del 2002. M.P. José Fernando Ramírez Gómez. Rad. 6581.	No	Demanda por hurto-incumplimiento del contrato de vigilancia electrónica (alarmas). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones ni tiene nada que ver con el sistema de riesgos laborales.

CSJ-C Sentencia del 22 de octubre de 1998. M.P. José Fernando Ramírez Gómez Rad. 4866	Si	VER FICHA
CSJ-C y A Sentencia del 18 de octubre del 2000. M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles. Rad. 5347.	No	Demanda de responsabilidad civil por accidente de tránsito. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivada del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CSJ-C y A. Sentencia del 12 de mayo del 2000. M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles. Rad. 5260 (Fecha real: 4 de septiembre de 2000)	Si. Pensión de origen común	VER FICHA
CSJ-C y A Auto del 20 de junio del 2012. M.P. Jesús Vall de Ruten Ruiz. Rad. 25875-3103-001-2006-00133-01.	No	Se inadmite un recurso de casación por no haber expedido copias para el cumplimiento de la sentencia de primera instancia. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-C y A Auto del 19 de diciembre del 2012. M.P. Jesús Vall de Ruten Ruiz. Rad. 47245 -31-03-001-2002-00052-01.	No	Se inadmite un recurso de casación por no haber expedido copias para el cumplimiento de la sentencia de primera instancia. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CSJ-C y A Auto del 29 de febrero del 2012. M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar. Rad. 11001-31-03-015-1999-01424-00.	No	Recurso para que no se tenga en cuenta un tiempo como término para sustentar el recurso, porque el abogado recurrente no pudo tener en su poder el expediente. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CSJ-C Sentencia del 30 de marzo del 2005. M.P. Jaime Alberto Arrubla Paucar. Rad. 9879.	No	Responsabilidad por daño en bienes muebles e inmuebles de propiedad de los demandantes. Trata temas como: la discusión entre responsabilidad por ruina o por actividades peligrosas, culpa de la víctima, responsabilidad de los administradores. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos profesionales y de la

		responsabilidad civil.
CSJ-CyA Sentencia del 24 de junio de 1996. M.P. Pedro Lafont Pianetta. Rad. 4662 Nicho citacional	Si. Pensión de origen común	VER FICHA
CSJ-CyA Sentencia del 3 de septiembre de 1991. M.P. Pedro Lafont Pianetta Gaceta No. 2451 (Es la misma sentencia que aparece en jurisprudencia y doctrina como del 9 de septiembre) Nicho citacional	Si	VER FICHA
CSJ-C y A. Sentencia del 9 de julio del 2012. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Rad. 11001-3103-006-2002-00101-01.	Si. Pensión de origen común	VER FICHA.
CSJ-C y A Sentencia del 13 de agosto del 2012. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Rad. Exp. 11001-31-03-026-2006-00228-01.	No	Responsabilidad civil por incumplimiento del contrato de cuenta de ahorros celebrado con el Banco Caja Social BCSC. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil (únicamente existe responsabilidad civil, pero no aparece referencia el sistema de riesgos laborales)
CSJ-C y A Sentencia del 23 de marzo del 2012. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Rad. Exp. 11001-0203-000-2011-00521-00	No	Recurso de reposición, responsabilidad civil por deterioro de inmueble a causa de una construcción en el predio aledaño. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil (únicamente existe responsabilidad civil, pero no aparece referencia el sistema de riesgos laborales)
CSJ-C Sentencia del 26 de agosto del 2011. M.P. Arturo Solarte Rodríguez. Rad.05001-3103-016-2002-00007-01	No	Responsabilidad civil por incumplimiento de contrato innominado (restitución de inmueble por parte de dos fundaciones e indemnización de perjuicios). No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de

		riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-C y A Sentencia del 28 de febrero del 2013. M.P. Arturo Solarte Rodríguez. Rad. 11001-3103-004-2002-01011-01.	No	Responsabilidad civil extracontractual por accidente con poste de luz (no trabajo) en el que se demanda a EEPPM Bogotá. No tiene nada que ver con acumulación de indemnizaciones.
CSJ-C y A Sentencia del 19 de diciembre del 2012. M.P. Arturo Solarte Rodríguez. Rad. 76001-3103-008-2006-00210-01.	No	Sentencia sobre filiación extramatrimonial, no tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-C y A Sentencia del 7 de diciembre del 2012. M.P. Arturo Solarte Rodríguez. Rad. 11001-3103-026-2006-00470-01.	No	Responsabilidad civil medica, no tiene nada que ver con acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-C y A Sentencia del 9 de noviembre del 2012. M.P. Arturo Solarte Rodríguez. Rad. 19001-3103-005-2009-00699-01	No	Auto que inadmite recurso de casación en proceso sobre responsabilidad civil por muerte en accidente de transito
CSJ-CyA Sentencia del 19 de febrero de 1999. M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss. Rad. 5099.	No	Responsabilidad civil contractual - contrato comercial. No tiene relación con acumulación de indemnizaciones de riesgos laborales y responsabilidad civil.
CSJ-C Sentencia del 12 de agosto del 2011. M.P. Edgardo Villamil Portilla. Ref.: Exp. No. 63001-31-03-001-2007-00206-01	No	Se inadmite recurso de casación. Coomeva E.P.S. incurrió en responsabilidad civil contractual, por el equivocado diagnóstico y el tratamiento tardío. No tiene nada que ver con el sistema de riesgos profesionales e indemnización por responsabilidad civil.
CSJ-C Sentencia del 29 de abril del 2005. M.P. Edgardo Villamil Portilla. Rad. 0037	No	Reclamación a aseguradora de indemnización por muerte accidental y la compañía se niega por estado de embriaguez del asegurado. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-C y A Sentencia del 23 de noviembre del 2012.	No	Responsabilidad civil contractual de la demandada en las lesiones



M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. Rad. 6800131030082009-00312-01.		sufridas por el promotor, en colisión ocurrida el 13 de diciembre de 2001, con la consecuente indemnización. No tiene nada que ver con el sistema de riesgos profesionales
CSJ-C y A Sentencia del 16 de noviembre del 2012. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. Rad. 6800131030052006-00045-01.	No	Responsabilidad civil derivada de accidente de transito, terreno de la responsabilidad civil extracontractual derivada de una actividad peligrosa No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil
CSJ-C y A Sentencia del 21 de marzo del 2012. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. Rad. 1100102030002011-02430-00.	No	Auto que resuelve recurso de queja. Reclamo para que Central de Inversiones S.A. fuera condenada al pago de perjuicios morales y materiales por el cobro de un seguro de vida y de incendio inexistente. No tiene nada que ver con el sistema de riesgos laborales
CSJ-C y A Sentencia del 18 de enero del 2012. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. Rad. 1100102030002011-02696-00.	No	Tutela contra providencia judicial, fallo en responsabilidad civil extracontractual por accidente de transito por violar debido proceso. No tiene nada que ver con el sistema de riesgos profesionales y acumulación de indemnizaciones.
CSJ-C y A Sentencia del 31 de marzo del 2011. M.P. Fernando Giraldo Gutiérrez. Rad. T-2011-00047-01.	No	Tutela contra providencia judicial, fallo sobre el reconocimiento y pago de una suma dineraria por el derecho a prima del buen nombre de una tienda, demanda ordinaria de responsabilidad civil extracontractual. No tiene nada que ver con el sistema de riesgos profesionales y acumulación de indemnizaciones.

Identificación Sentencia CE	Utilidad	Justificación
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera.	No.	Demanda de nulidad

<p>Aclaración de Voto. M.P. Alejandro Ordoñez Maldonado. Rad. 25000-23-25-000-2002-05455-01 4176-04</p>		<p>y restablecimiento del derecho. Declaración de insubsistencia de un funcionario. Con respecto al tema de la acumulación se discute en la aclaración de voto que se hayan descontado los salarios y prestaciones que habría recibido la parte actora en el tiempo en que el funcionario no trabajó para el DAS (posterior a la insubsistencia y anterior al reintegro). No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones de responsabilidad del Estado con prestaciones del sistema de riesgos laborales.</p>
<p>CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 9 de julio de 1982. Rad. 2615.</p>	<p>No</p>	<p>Demanda al fondo nacional del ahorro por incumplimiento contractual, para que se condene a indemnizar los perjuicios causados (decisiones sobre solicitudes de créditos y cesantías parciales). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones de la responsabilidad civil con las prestaciones del sistema de riesgos laborales.</p>
<p>CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 16 de abril del 2009. C.P. Víctor Hernando Alvarado Ardila. Rad.50001-23-31-000-2003-00372-02 0492-06</p>	<p>No</p>	<p>Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el ejército nacional, por no haberle reconocido al demandante una indemnización por disminución de la capacidad laboral y condenar a indemnizarlo de conformidad con el artículo 183 del Decreto 1211 de 1990. Se condena a pagar indemnización doble y bonificación indemnización. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones de la responsabilidad civil y prestaciones del sistema de riesgos laborales.</p>
<p>CE. Sala de lo CA. Sentencia del 29 de junio del 2006. C.P. Tarsicio Cáceres Toro. Rad. 25000-23-25-000-1999-02891-01 3068-01</p>	<p>No</p>	<p>Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Declaración de insubsistencia de un funcionario. Como restablecimiento del derecho, solicitó su reintegro al cargo que desempeñaba en el momento de la desvinculación, o a otro de igual o superior categoría, con el pago de los salarios, prestaciones y demás</p>

		emolumentos dejados de percibir, desde cuando fue desvinculada del servicio hasta el día de su reintegro, sin solución de continuidad y con aplicación de los Arts. 176 a 178 del C.C.A. No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones de la responsabilidad del Estado con prestaciones del sistema de riesgos laborales.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 28 de febrero del 2013. C.P. Stella Conto Díaz del Castillo. Rad.05001-23-26-000-1995-01551-01(22539)	No	Demanda a la Fiscalía y Superintendencia de Notariado y Registro, pretendiendo que se declarara la responsabilidad estatal de las entidades públicas demandadas por “las acciones y omisiones de sus agentes, que condujeron finalmente al despojo patrimonial” de los demandantes, de un apartamento, dos garajes y un depósito (falsedad en escritura pública que no fue establecida por las notarías a las que acudieron los demandantes y que estaba registrada). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones de la responsabilidad civil con prestaciones del sistema de riesgos laborales.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 18 de junio del 2008. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Rad. 70001-23-31-000-2003-00618-01.	No	Acción popular por la supuesta de vulneración de derechos colectivos con la ejecución de un contrato de operación con inversión (pagar bienes despojados) Se alega que unos funcionarios están disfrutando una pensión sin desvinculación de labores, lo que afecta el patrimonio público. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 14 de abril del 2010. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Rad. 25000-23-26-000-1997-03663-01 17214	No	Demanda de responsabilidad civil contractual (obras adicionales ejecutadas por un contratista) No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivada del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.

CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 5 de diciembre de 2006. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Rad. 25000-23-26-000-1995-01359-01 (15046)	No	Demanda en contra de la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, para que se declarara a la entidad patrimonialmente responsable de los perjuicios materiales y morales que sufrió como consecuencia del hurto cometido en su contra por varios agentes de esa institución armada y se condene a indemnizar los perjuicios causados. Se habla de doble indemnización por haberse constituido en parte civil de un proceso penal y haber demandado por la vía contencioso administrativa. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 26 de mayo del 2010. C.P. Ruth Stella Correa Palacio. Rad. 66001-23-31-000-1996-03345-01 (19000)	No	Demanda en contra del Ejército con el objeto de que se declarara patrimonialmente responsable a esa entidad, de los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de las lesiones padecidas por un soldado (Sufrió un golpe en la rodilla por falta de elementos de protección mientras patrullaba- pérdida de capacidad laboral del 60%). Se absolvió al demandado por considerar que el daño no le era imputable al estado.
CE. Sala de lo CA. Sentencia del 18 de abril del 2002. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad. 44001-23-31-000-1996-0550-01.	No	Responsabilidad del Estado por accidente de tránsito (vehículo de la policía arrolló a un menor). Trata únicamente del tema de responsabilidad civil, pero no trata la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sentencia del 24 de junio del 2004. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad. 19001-23-31-000-1993-3005-01 13108	No	Demanda a la Fiscalía para que se declare responsable de la muerte de un individuo con arma de dotación oficial y se condene a indemnizar los perjuicios causados. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Auto del 10 de junio de 2004.	No	Demanda a la alcaldía de Bogotá (empleador) para que sea

C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad. 25000-23-26-000-2003-0919-02 (25854)DM.		condenado a indemnizar los perjuicios causados al demandante con ocasión del accidente de trabajo sufrido por él, y las consecuencias de la omisión del trámite que debía seguir el empleador ante la ocurrencia de un accidente (no notificó el accidente). Se admite la demanda porque no está claro que hubiera operado la caducidad.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 31 de agosto de 1999. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad. 10865.	No	Demanda por muerte en accidente de tránsito entre una moto y un carro perteneciente a un batallón del ejército. Trata el régimen de responsabilidad en accidentes de tránsito. Trata el tema de la doble indemnización cuando un sujeto es parte civil en un proceso penal y además demanda ante la jurisdicción Contencioso Administrativa. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 15 de mayo de 1997. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad. 10150	No	Demanda para que se indemnicen los perjuicios causados por muerte violenta de un sujeto producida por agentes de la policía. Tratan la doble indemnización cuando un sujeto es parte civil en un proceso penal y además demanda ante la jurisdicción Contencioso Administrativa. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CE. Sala de lo CA. Sección tercera. Sentencia del 3 de octubre del 2002. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad.19001-23-31-000-1995-3007-01 (14207)	Si	VER FICHA
CE. Sala de lo CA. Sentencia del 24 de febrero del 2005. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. 85001-23-31-000-1997-00508-02 21120	No	Demanda por incumplimiento contractual. No tiene ninguna relación con el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y del régimen de responsabilidad civil.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 3 de mayo del 2007. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. 05001-	No	Demanda al departamento de Antioquia, una clínica y la organización de naciones unidas

23-25-000-1992-07122-01 (16180)		para que se indemnicen los perjuicios causados con ocasión de un accidente de tránsito (ambulancia de la ONU, custodia del municipio y conducida por un trabajador del hospital) Se discute el tema de la responsabilidad por accidentes de tránsito, la concurrencia de actividades peligrosas y la caducidad de la acción. Además se refiere a la prohibición de acumular la indemnización derivada de la condena penal con la indemnización a que podría condenar la jurisdicción contencioso administrativa. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivada del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CE. Sala de lo CA. Sección tercera. Sentencia del 24 de abril de 2008. C.P. Ramiro Saavedra Becerra Rad. 85001-23-31-000-1996-00283-01 (15981)	Si	VER FICHA
CE. Sala de lo CA. Sección Primera. Sentencia del 2 de diciembre del 2010. C.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Rad. 25000-23-24-000-2006-00262-01	No	Demanda para que se declare la nulidad de algunos actos administrativos (habilitó a una empresa transportadora a prestar servicio público). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 15 de febrero del 2012. C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz. Rad. 25000-23-26-000-1997-04813-01 (20880)	No	Demanda en contra de la policía para que se condene a indemnizar los perjuicios causados a los familiares de una menor violada y asesinada en una estación de policía. Se discute sobre la imposibilidad de obtener una doble indemnización (en el proceso penal y el contencioso administrativo). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 30 de enero del 2013. C.P. Olga Mélida Valle de la Hoz. Rad. 23001-23-31-000-1999-00967-01 (25087)	No	Demanda para que se condene al estado a indemnizar los perjuicios causados a los familiares de tres ingenieros agrónomos que fueron secuestrados y asesinados

		mientras cumplieran con un contrato estatal que habían celebrado con el DANE. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y la responsabilidad civil.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero de 2009. C.P. Myriam Guerrero de Escobar. Rad. 66001-23-31-000-1997-03728-01(16689).	No	Demanda a INVIAS y al ministerio de transporte para que sean condenados a indemnizar los perjuicios causados a los familiares de un sujeto fallecido mientras trabajaba en una obra vial (trabajaba para una firma constructora). Se discute la existencia de una culpa exclusiva de la víctima. No se habla de si se paga una pensión por parte de la ARL ni de la posibilidad o no de acumular indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sala Plena. Sentencia del 7 de diciembre de 1994. C.P. Miguel Viana Patiño. Rad. AC - 2148.	No	Solicitud de pérdida de investidura de un congresista (indebida destinación de dineros públicos-nombramientos por un período muy corto para que disfrutaran del plan de retiro compensado). Indemnizar a varias personas en el mismo período por el mismo cargo. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y la responsabilidad civil.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 14 de mayo del 2012. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 19001-23-31-000-1999-01703-01(23775).	No	Demanda a la policía para que se condene a indemnizar los perjuicios sufridos por las lesiones causadas a un sujeto, disparo con arma de dotación oficial. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CE. Sala Plena. Sentencia del 22 de febrero de 2011. C.P. Mauricio Torres Cuervo. Rad. 11001-03-15-000-2010-00452-00(CA).	No	Control de legalidad del Decreto 1163 de 13 de abril de 2010 "Por el cual se reglamenta el Decreto Legislativo 073 de 2010 y se dictan otras disposiciones". (emergencia de la salud- destino de los aportes a la seguridad social) No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.

CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril del 2010. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 25000-23-26-000-1996-03096-01	Si	VER FICHA
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril del 2010. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 13001-23-31-000-1994-09971-01	Si	VER FICHA
CE Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 17 de marzo del 2010. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 05001-23-26-000-1996-01018-01 (18101)	No	Demanda al ISS para que se condene a indemnizar los perjuicios causados a los demandantes con ocasión de las lesiones sufridas por una de ellas (prematura que sufrió quemaduras en una incubadora del ISS). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 10 de junio del 2009. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 44001-23-31-000-1997-01097-01 (15817)	No	Demanda para que se condene a FONVISOCIAL a indemnizar los perjuicios causados al propietario de un predio como consecuencia de la ocupación ilegal del mismo y la destrucción de cercas, entre otros. Se habla de la doble indemnización respecto de la indemnización que reciba del ente público y la valorización del inmueble. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 24 de marzo de 2011. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 66001-23-31-000-1998-00409-01 (19067).	No	Demanda para que se indemnicen los perjuicios causados por la muerte de un sujeto laborando como empleado del municipio en una obra de acueducto y alcantarillado (retroexcavadora utilizada hizo contacto con una red de electricidad, causándole la muerte). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivada del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 16 de julio de 2008. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 66001-23-31-000-1995-03079-01 (16344).	No	Demanda para que se indemnicen los perjuicios causados a los familiares de unos sujetos fallecidos en accidente de trabajo (trabajaban como empleados de



		una empresa- la banca de la vía cedió mientras ejecutaban una obra pública). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 18 de marzo del 2010. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 25000-23-26-000-1994-00071-01 (14390)	No	Demanda de nulidad y subsidiariamente para que se declare que existió un incumplimiento contractual por parte del estado y se condene a indemnizar perjuicios. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil. (toda la teoría del contrato, actos previos, determinación de tipos contractuales, etc.)
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 29 de agosto del 2007. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 850012331000030901 (15324)	No	Demanda en el marco de la acción contractual para que se declare la nulidad de la resolución que dio por terminado un contrato y que se declare la resolución del mismo por incumplimiento de la administración. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 9 de mayo del 2012. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 85001-23-31-000-2000-00198-01(20968)	No	Demanda en el marco de una acción contractual para que se declare nula la circular por la cual se dio por terminado el contrato y declarar que existió un incumplimiento del ente público, condenándolo a indemnizar los perjuicios causados. Trata el tema de responsabilidad contractual: cláusulas exorbitantes entre otras. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CE Sala de lo CA. Sección Primera. Sentencia del 23 de octubre del 2008. C.P. Martha Sofía Sanz Tobon. Rad. 44001-23-31-000-2008-00027-01(PI).	No	Demanda de pérdida de investidura de un concejal por violación al régimen de incompatibilidades (contratista de una prestadora de seguridad social). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 27 de noviembre de 2002. C.P. Maria Elena Giraldo Gómez. Rad. 52001-23-31-000-1994-3090-01	Si	VER FICHA

(13090)		
CE. Sala de lo CA. Sentencia del 31 de enero del 2006. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 11001-03-15-000-2005-00 (PI)	No	Solicitud de pérdida de investidura por violación al conflicto de intereses y tráfico de influencias. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 18 de marzo de 2004. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 76001-23-31-000-1994-00069-01 (14338)	Si	VER FICHA
CE. Sala de lo CA. Sección primera. Sentencia del 18 de febrero del 2010. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Rad. 11001-03-24-000-2005-00159-01.	No	Acción de nulidad en contra de una resolución por medio de la cual se modificó el reglamento de la Aeronáutica. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CE. Sala de lo CA. Sección Quinta. Sentencia del 4 de septiembre de 2003. C.P. María Nohemí Hernández Pinzón. Rad. 25000-23-26-000-2000-0112-01(AP)	No	Demanda en búsqueda de la protección del medio ambiente sano, protección de un humedal y algunos cauces. Se discute la posibilidad de acumular acción de cumplimiento y acción popular. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CE. Sala de lo CA. Sección Cuarta Sentencia del 16 de agosto de 2007. C.P. Maria Ines Ortiz Barbosa. Rad. 11001-03-27-000-2005-00024-00 (15398).	No	Demanda para que se declare la nulidad y suspensión provisional del Concepto 089507 de 22 de diciembre de 2004 expedido por la Oficina Jurídica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (retención a la pensión voluntaria que pagan los trabajadores a los empleadores que no cumplen los requisitos para acceder a los beneficios de la ley 100). Habla de aspectos como la pensión sanción, y otros relacionados con la pensión de vejez y la indemnización sustitutiva. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Primera. Sentencia del 18 de julio de 2012. C.P. María Elizabeth García González. Rad. 25000-23-24-000-2003-00493-00	No	Demandas de nulidad a algunos decretos de la alcaldía de Bogotá (regulan el transporte en la ciudad). Cita como una de las obligaciones de las empresas transportadoras afiliar a los trabajadores a riesgos laborales. No trata el tema de

		acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección primera. Sentencia del 24 de enero del 2013. C.P. María Elizabeth García González. Rad. 11001-03-24-000-2008-00345-00	No	Demanda de nulidad del régimen de vigilancia y seguridad privada y las normas que lo modifican. Establecen como requisitos para renovar la licencia tener los recibos del pago de riesgos laborales y de un seguro de responsabilidad civil que cubra riesgos de utilización de armas de fuego. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 10 de agosto del 2005. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 85001-23-31-000-1997-00448-01 (16205)	Si	VER FICHA
CE Sala de lo CA. Sección Primera. Sentencia del 12 de marzo del 2009. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Rad. 05001-23-31-000-2005- 03482 - 01(AP)	No	Acción popular contra el municipio del Carmen por no tener el financiamiento para que actúe el cuerpo de bomberos, y porque los bomberos no tienen dotación adecuada, etc. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección primera. Sentencia del 15 de septiembre del 2011. C.P. María Claudia Rojas Lasso. Rad. 2004-00395-01	No	Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declare nula la decisión que negó la renovación de la licencia de funcionamiento de una entidad de seguridad, y que como consecuencia de lo anterior se le indemnice el daño emergente y lucro cesante causado. Señala que se ha aportado al sistema de riesgos profesionales. No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Primera. Sentencia del 22 de marzo de 2012. C.P. Marco Antonio Velilla Moreno. Rad. 25000-23-24-000-2004-00325-02.	No	Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se declare nula la decisión que negó la renovación de la licencia de funcionamiento de una entidad de seguridad, y que como consecuencia de lo anterior se le indemnice el daño emergente y lucro cesante causado. Señala que se ha aportado al sistema de riesgos profesionales. No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones.

CE Sala de CySC. Sentencia del 25 de agosto de 1998. C.P. Luis Camilo Osorio Isaza. Rad. 1122.	No.	Sala de Consulta y Servicio Civil. Se pregunta si es compatible el pago de pensión a cargo del ISS con la pensión de jubilación en el régimen de transición (electrificadora de Santander). No trata el tema de la acumulación de indemnizaciones de la responsabilidad del Estado con las prestaciones del sistema de riesgos laborales.
CE. Sala de lo CA. Sentencia del 18 de abril del 2002. C.P. Julio Enrique Correa Restrepo. Rad. 11001-03-27-000-1998-00044-00.	No	Demanda de nulidad en contra del decreto 3050 de 1997 (estatuto tributario). No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 9 de julio de 1993. C.P. Julio Cesar Uribe Acosta. Rad. 7795.	No	Demanda en acción de reparación médica por perjuicio causado con culpa médica (falla del servicio médico). Trata el tema del perjuicio fisiológico y porque el pago de éstos y los morales no constituyen doble indemnización. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 6 de mayo de 1993. C.P. Julio César Uribe Acosta. Rad. 7428.	No	Demanda al ministerio de defensa por las lesiones sufridas por un sujeto en accidente de tránsito (Conductor del vehículo que llevaba al teniente y que tuvo que entregarle las llaves al mismo por su instrucción). No menciona que la entidad de riesgos laborales haya otorgado una pensión ni trata el tema de la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero de 1995. C.P. Julio César Uribe Acosta. Rad. 9550.	Si	VER FICHA
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 26 de octubre de 1993. C.P. Juan de Dios Montes Hernández. Rad. 7793.	No	Demanda al INURBE para que se establezca que es responsable de la muerte de un sujeto causada por el celador de tal entidad y se condene a indemnizar los perjuicios causados a los familiares. Se tratan temas como la legitimación en la causa por activa, y se señala que no pueden indemnizarse los mismos perjuicios por la vía penal y la vía civil. No trata el tema de la

		acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y la responsabilidad civil.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 24 de septiembre de 1987. C.P. Jorge Valencia Arango. Rad. 4039.	No	Demanda contra Telenariño para que se declare la nulidad de algunos actos administrativos (caducidad de un contrato) y se condene a indemnizar los perjuicios causados. Habla de los perjuicios morales y de la indexación y los intereses como una doble indemnización que está proscrita. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 12 de diciembre de 1986. C.P. Jorge Valencia Arango. Rad. N° 4910	No	Demanda de reparación directa al departamento del valle del cauca para que se condene a indemnizar los perjuicios causados a un sujeto en un accidente de tránsito (empleado del departamento conducía y fue declarado penalmente responsable). Discusión de la doble indemnización en materia penal y civil, pero no de acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sentencia del 31 de julio de 1997. C.P. Ernesto Rafael Ariza. Rad. 4321 Nicho Citacional	No	Nulidad de una resolución ambiental (no tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones)
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera Sentencia del 31 de marzo del 2006. C.P. Ruth Stella Correa. Rad. 68001-23-31-000-2000-09610-01(15772) Nicho Citacional	No	Demanda para que se indemnicen los perjuicios causados por falla médica que generó la incapacidad total a un menor de edad. Análisis de la causalidad, no se discute la acumulación de indemnizaciones
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 23 de noviembre de 1993. C.P. Diego Younes Moreno Rad. A-014 Nicho Citacional	No	Proceso adelantado por varias compañías aseguradoras, no tiene relación con el tema.
CE. Sentencia del 22 de marzo de 1992. Rad. 4311. Nicho Citacional	No	No tiene nada que ver con el tema, proceso por pérdida de mercaderías importadas a Estados Unidos en el marco de contrato de transporte.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 4 de octubre de 1990. C.P. Carlos Gustavo Arrieta Padilla. Rad. 4307-29	No	No tiene nada que ver con el tema, proceso por pérdida de tres cargamentos en el marco de contrato de transporte marítimo.

CE. Sala de lo CA. Sentencia del 30 de marzo del 2006. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. 15441	No	Proceso por muerte de agente de la Policía por granada. No se trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sentencia del 7 de noviembre del 1961. C.P. Alejandro Domínguez Molina. Rad. 346-CE-SCA-1961-11-07.	No	Proceso de Responsabilidad Fiscal. No tiene nada que ver con el tema de acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA Sección tercera. Sentencia del 5 de diciembre del 2005. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Rad. 66001-23-31-000-1996-03360-01 (14731)	Si	VER FICHA
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 30 de noviembre del 2006. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Rad. 11001-03-26-000-2000-00020-01 (18059)	No	Acción pública de nulidad instaurada por el ciudadano Francisco Ignacio Herrera Gutiérrez, contra los términos de referencia que rigen el concurso de méritos número DG-001-200 para la escogencia del programa de seguros del Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas ("IPSE"). No tiene nada que ver con acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y responsabilidad civil.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 21 de febrero de 2002. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Rad. 25000-23-26-000-1992-8135-01 (12702)	No	Peatón atropellado por motociclista. Solo se refiere a responsabilidad pero no tiene nada que ver con acumulación de indemnizaciones con el sistema de riesgos laborales.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999. C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Rad. 11499.	No	Proceso de responsabilidad extracontractual adelantado contra el Municipio de Popayán por muerte de una persona en un evento publico de motos. No tiene relación con el sistema de riesgos laborales ni con acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 22 de febrero de 1990. C.P. Antonio José de Irisarri Restrepo. Rad. 5837.	No	Propietario de varios inmuebles demandando al Distrito Especial de Bogotá por el perjuicio causado por la construcción de un puente. Conflicto de jurisdicción. No tiene nada que ver con el tema de acumulación de indemnizaciones de responsabilidad y sistema de riesgos laborales.
CE. Sala de lo CA. Sección Segunda Subsección B. Sentencia del 30 de	No	Proceso de nulidad de los actos administrativos expedidos por el

marzo del 2011. C.P. Bertha Lucía Ramírez de Páez. Rad. 13001-23-31-000-2003-02110-01(2295-08)		Director de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares. No tiene nada que ver con acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y responsabilidad.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 23 de agosto de 1993. C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Rad. 8011	No	Muerte de peatón ocasionada por conductor oficial en vehículo oficial. Jurisprudencia de la presunción de responsabilidad por el ejercicio de una actividad peligrosa, como lo es la conducción de vehículos oficiales y que únicamente le permite a la persona responsable exonerarse de responsabilidad probando la fuerza mayor, el hecho del tercero, exclusivo y determinante, o la culpa exclusiva de la víctima. Se habla de doble indemnización respecto a lo que debe pagar la entidad responsable y la indemnización que paga la compañía de seguros de dicha entidad. No se relaciona con el sistema de riesgos laborales.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera Subsección A. Sentencia del 16 de agosto del 2012. C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Rad. 25000-23-26-000-1999-00395-01(24687)	No	Proceso de responsabilidad del Distrito de Bogotá por una falla en la prestación del servicio por cuanto la Jefe de División de Recursos Humanos de la Secretaría de Gobierno por omisión de inscripción en el escalafón de la carrera administrativa. No tiene nada que ver con acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala Plena. Sentencia del 7 de febrero de 1995. C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. Rad. S-247	No	Muerte de agente de la Policía Nacional, su familia solicita indemnización plena de perjuicios. De la revisión de la Resolución No. 7653 visible a folios 196-197, se desprende que a la señora Mélida Inés Domínguez de Medina en su condición de cónyuge supérstite y de la representante de sus hijos Edison Javier, Nancy Milena y Nidia Johana Medina Domínguez, se le reconoció la suma de un millón seiscientos setenta y un mil cuarenta y dos pesos con 12 centavos (\$1.671.042,12)M/te., por concepto de indemnización por la

		muerte de su cónyuge y padre, señor Pedro Jesús Medina Suárez y por auxilio de cesantía. Esa suma según el fallo materia de impugnación, no debe descontarse del monto de los perjuicios morales y materiales que les ocasionó el deceso de su cónyuge y padre, pues en virtud de los dispuesto en él, deben cancelársele a dichas personas. No se trata de accidente de trabajo o enfermedad laboral.
CE. Sala de lo CA. Sentencia del 28 de julio de 1996. C.P. Carlos Arturo Orjuela Góngora. Rad. 127-CE-SP-EXP1996-NIJ638	No	Proceso por despido de trabajadora embarazada - protección a la maternidad. No tiene nada que ver con el tema de acumulación de indemnizaciones.
CE Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 12 de julio de 1993. C.P. Carlos Betancur Jaramillo. Rad. N. 7622.	No	Proceso contra el Ministerio de Defensa - Ejército por heridas ocasionadas por unos soldados a un civil. No trata la acumulación de las indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 27 de mayo del 2010. C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez. Rad. 52001-23-31-000-2003-00719-01 16621	No	Nulidad del Decreto 0535 de 10 de diciembre de 2002 expedido por el Alcalde Municipal de Pasto "Por medio del cual se establece el monto a recuperar del total de un proyecto de interés público y social, por medio del Sistema de Valorización". No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Cuarta. Sentencia del 5 de agosto de 1996. C.P. Consuelo Sarria Olcos. Rad. No. 7782	No	Proceso tributario, sumas devueltas. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Subsección B. Sentencia del 5 de abril del 2013. C.P. Danilo Rojas Betancourth. Rad. 25000-23-26-000-2001-00242-01 (27281)	No	Muerte de civil por disparos de algunos policías sin razón alguna, que se encontraban en un reten. Familia solicita indemnización de perjuicios pero no tiene relación con el sistema de riesgos laborales y acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sala Plena. Auto del 8 de septiembre del 2000. C.P. Delio Gómez Leyva. Rad. AG-002.	No	En ejercicio de la acción de grupo consagrada en el artículo 88 de la Carta y desarrollada en la Ley 472 de 1998, la señora María Eugenia Jaramillo Escalante y otras personas integrantes del grupo, debidamente representadas por el



		abogado Rodrigo Ocampo Ossa, quien además actuó a nombre propio, demandaron, ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al Banco de la República para que, en su calidad de deudoras de créditos en UPAC, les indemnice los daños causados, derivados de haber fijado una fórmula para liquidar la UPAC diferente a la señalada legalmente, pues la Junta Directiva del Banco de la República fijó ilegalmente dicha fórmula. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Auto del 1 de febrero del 2002. C.P. Delio Gómez Leyva. Rad. 25000-23-24-000-1999-0528-01 AG-002	No	Auto del proceso anterior.
CE. Sala de lo CA. Sentencia del 8 de abril de 1994. C.P. Diego Younes Moreno. Rad. 641-CE-SEC2-EXP1994-N5569	No	Proceso que versa sobre la legalidad del decreto No. 439 del 3 de marzo de 1987 dictado por el Gobierno Nacional, mediante el cual se declaró insubsistente el nombramiento de la señora Doris Cecilia Reyes de Tavera como Juez 75 de Instrucción Penal Militar, grado 17, del Departamento de Policía del Tolima. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sentencia del 18 de octubre de 1994. C.P. Dolly Pedraza de Arenas. Rad. 80-CE-SEC2-EXP1994-N8146	No	Acción de nulidad y restablecimiento del derecho para declarar la nulidad del Decreto 0864 de abril 3 de 1987, expedido por la Gobernación de Antioquia (sic), por el cual se declaró insubsistente su nombramiento en el cargo de Sicorientadora en el Distrito Educativo No. 14 del Municipio de Andes. Como consecuencia de lo anterior, solicitó ser reintegrada al mismo cargo; el pago de los salarios y prestaciones dejados de percibir. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 12 de abril de 1984. C.P. Eduardo Roncón Rincón. Rad. 2586.	No	Accidente producido cuando una radiopatrulla conducida por un agente de la Policía, ebrio, en

		contravía. El demandante sufrió pérdida de capacidad laboral y múltiples perjuicios. Responsabilidad del Estado por falla del servicio. No se relación con la acumulación de indemnizaciones con el sistema de riesgos laborales.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 8 de noviembre de 1984. C.P. Eduardo Suescún Monroy. Rad. 3050.	No	Proceso contra el Departamento de Nariño por la muerte de un sujeto, ocasionada por el chofer al servicio del Departamento de Nariño, de nombre Carlos Palacios Caicedo. No hay lugar a la responsabilidad por culpa de la víctima. No tiene relación con acumulación de indemnización del sistema de riesgos laborales.
CE. Sala de lo CA. Sección tercera. Sentencia del 18 de febrero del 2010. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 52001-23-31-000-1998-00054-01 (18110)	No	Acción de reparación directa para que se declare responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, de los perjuicios a ellos irrogados, con motivo de la muerte de Luis Felipe Chaves Bolaños, agente de la institución, ocurrida el 8 de octubre de 1997. Se concluye que la muerte no le es imputable a la policía, no se configuró una falla del servicio. No tiene relación con el sistema de riesgos laborales.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 19 de octubre del 2007. C.P. Enrique Gil Botero. Rad.54001-23-31-000-1997-12700-01(30871)	No	Proceso contra el Instituto de Seguros Sociales y a la Empresa Social del Estado "Hospital Erasmo Meoz", patrimonialmente responsables de los perjuicios materiales y morales a ellos infligidos con motivo de las lesiones cerebrales sufridas por Tatiana Andrea Galvis Villamizar, las cuales fueron causadas el 6 de junio de 1995, al momento de atender su nacimiento. No tiene relación con el sistema de riesgos laborales.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 19 de septiembre de 2007. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 76001-23-31-000-1994-00916-01 (16010)	No	Proceso contra el Departamento de Risaralda y a la Empresa Social del Estado "Hospital Universitario San Jorge de Pereira", patrimonialmente responsables de los perjuicios materiales y morales a ellos causados con ocasión de la

		muerte del señor Jhon Henry Velásquez Marín. Proceso de responsabilidad que no se relaciona con el sistema de riesgos laborales.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 19 de octubre del 2007. C.P. Enrique Gil Botero.66001-23-31-000-1999-03078-01 (15382)	No	Proceso contra el Hospital San Vicente de Paul por muerte de paciente. No hay responsabilidad por hecho exclusivo de la victima, no tiene relación con el sistema de riesgos laborales.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 24 de abril del 2013. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 07001-23-31-000-2000-00118-01(26621)	No	Proceso en que el que se busca que se declare responsable a la Nación-Ministerio de Defensa, Policía Nacional e Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-, por las lesiones físicas y psicológicas durante un intento de fuga de presos-, cuando el demandante cumplía sus funciones como Profesional Universitario en la oficina de asesoría jurídica de la Cárcel del Circuito Judicial de Arauca. Se determina que la contingencia es de origen común por lo que no hay participación de ARL
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 20 de mayo del 2009. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 50001-23-31-000-1992-03768-01 (16701)	No	Proceso contra la Nación-Ministerio de Salud, Caja Nacional de Previsión, y el Hospital Regional de Villavicencio, con el fin de que se declararan patrimonialmente responsables de los perjuicios materiales y morales a él infligidos con motivo de la invalidez ocurrida el 18 de septiembre de 1990, al serle amputada su pierna izquierda como consecuencia de una gangrena. No se encuentra responsable a la administración y no hay relación con el sistema de riesgos laborales.
CE, Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 30 de julio del 2008. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 52001-23-31-000-1996-08167-01 (16483)	No	Proceso contra la Nación-Ministerio de Salud, el Instituto Departamental de Salud de Nariño y la Fundación Hospital San Pedro de la Ciudad de Pasto, por los perjuicios ocasionados con motivo de la muerte. Hay lugar a la responsabilidad pero no tiene relación con el sistema de riesgos

		laborales.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 4 de diciembre del 2007. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 73001-23-31-000-1998-01327-01 (17918)	No	Proceso por falla en el servicio medico hospitalario. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera Subsección C. Sentencia del 24 de octubre del 2013. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 68001-23-15-000-1995-11195-01(25869)	No	Proceso por falla en el servicio medico hospitalario. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Subsección C. Sentencia del 28 de marzo del 2012. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 05001-23-25-000-1993-01854-01(22163)	No	Proceso por falla en el servicio medico hospitalario. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 21 de febrero de 2007. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 25000-23-25-000-2005-00355-01(AP).	No	Acción popular para declarar vulnerados y amenazados los derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la seguridad y salubridad públicas y al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública así como al acceso a los servicios públicos y a que su prestación sea eficiente y oportuna. No tiene nada que ver con el sistema de riesgos laborales.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 14 de septiembre del 2011. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 05001-23-31-000-2007-00139-01 (38222)	No. análisis sobre tipo de perjuicios	Accidente de trabajo que sufre un agente del Ejército Nacional. No se relaciona con acumulación de indemnizaciones con sistema de riesgos laborales.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 14 de septiembre del 2011. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 05001-23-31-000-2007-00139-01 (38222)	No. análisis sobre tipo de perjuicios	Accidente de soldado que se encontraba prestando servicio militar con mina antipersona. No se relaciona con acumulación de indemnizaciones con sistema de riesgos laborales.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 1 de octubre del 2008. C.P. Enrique Gil Botero. Rad. 25000-23-26-000-1999-01145-01 (27268)	No	Proceso por falla en el servicio medico hospitalario. Se encuentra que hay lugar a la responsabilidad pero no tiene relación con el sistema de riesgos laborales y la acumulación de indemnizaciones.
CE Sala de CySC. Sentencia del 3 de diciembre del 2003. C.P. Flavio Augusto Rodríguez Arce. Rad. 1501.	No	Remuneración de diputados secuestrados. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección primera.	No	Acción popular contra la Sociedad

Sentencia del 5 de julio de 2007. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Rad. 13001-23-31-000-2004-00099-01(AP)		Portuaria Regional De Cartagena S.A, la referida sociedad hizo figurar a los trabajadores como aparentes operadores portuarios a su servicio, exigiéndoles pagar de sus humildes salarios lo correspondiente a los seguros de medicina prepagada, servicios médicos, seguros de pensión, riesgos profesionales, responsabilidad civil extracontractual para poder laborar en los barcos operados por la S.P.R.C. Se discute la admisión de la demanda pero no tiene relación con la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sala especial transitoria de decisión 3B. Sentencia del 4 de octubre del 2005. C.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Rad.11001-03-15-000-2003-00206-01 (S)	No	Resuelve el recurso extraordinario de suplica contra la sentencia del 3 de octubre de 2002 que es que realmente sirve porque en este fallo en las consideraciones se determina que el recurso no prospera. Análisis del tema en la sentencia mencionada.
CE. Sala de lo CA. Sección segunda. Subsección B. Sentencia del 15 de marzo del 2012. C.P. Gerardo Arenas Monsalve. Rad. 25000-23-25-000-2008-00339-01(1395-11)	No	Proceso en que el se pretende el reconocimiento de vinculo laboral y pago de las prestaciones correspondientes. No tiene nada que ver con acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril del 2005. C.P. Germán Rodríguez Villamizar. Rad. 66001-23-31-000-1996-03266-01 (14178)DM	No	Accidente de trabajo que le ocasiona la muerte al trabajador, se encuentra que hay responsabilidad del Municipio de Pereira pero no se habla de acumulación de indemnizaciones con el sistema de riesgos laborales.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 24 de abril de 2008. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. 85001-23-31-000-1996-00283-01 (15981).	Si	VER FICHA
CE. Sala Plena. Sentencia del 27 de marzo de 1990. C.P. Guillermo Chahín Lizcano. Rad. S- 21	No (anterior a 1991)	Proceso por falla en el servicio medico hospitalario. No se trata de un accidente o enfermedad laboral.
CE. Sala de lo CA. Sección Cuarta. Sentencia del 25 de septiembre de 1989. C.P. Guillermo Chahin Lizcano. Rad. 0477.	No	Proceso en el que se pretende la nulidad de los actos administrativos contenidos en los oficios de 14 y 20 de septiembre de 1982 ambos dirigidos por la Comisión Nacional de Valores a Coloca Ltda. y en el

		"marconigrama" de 21 de septiembre de 1982 enviado por la citada Comisión al Presidente del Banco de Caldas. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 27 de marzo del 2008. C.P. Gustavo Eduardo Gómez Aranguren. Rad. 25000-23-25-000-2003-08975-01 8239-05	No	Proceso en el que se discute la devolución del valor pagado por la caja de retiro de las fuerzas militares a un agente que fue reintegrado por concepto de asignación de retiro. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 28 de julio del 2011. C.P. Hernán Andrade Rincón. Rad. 19001-23-31-000-1997-04230(20114)	No	Accidente de tránsito en el que muere una persona por piedra que cae a la vía. Hay lugar a la responsabilidad pero no tiene relación con acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 9 de octubre del 2013. C.P. Hernán Andrade Rincón. Rad. 410001-23-31-000-1997-09626-01(29357)	No	Proceso adelantado por muerte de agente de la Policía Nacional por disparo involuntario realizado por el Alcalde del municipio a quien le prestaba sus servicios. Se exime de responsabilidad a la entidad por conducta imprudente de la víctima. No tiene relación con la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA Sección cuarta. Sentencia del 18 de marzo de 1993. C.P. Jaime Abella Zárate. Rad. 4490.	No	Proceso en relación con contrato de transporte marítimo, nulidad. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Auto del 16 de marzo de 1989. C.P. Jaime Betancour Cuartas. Rad. 286-CE-SC-EXP1989-N272	No	Doble asignación del tesoro público. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Auto del 16 de marzo de 1989. C.P. Jaime Betancour Cuartas. Rad. 286-CE-SC-EXP1989-N272	No	Proceso en el que se pretende la nulidad de las resoluciones Nos. 21121 de 28 de mayo de 2002 y 20360 de 5 de marzo de 2002, proferidas por la Fiscalía General de la Nación, por medio de las cuales se declaró la vacancia del cargo que ocupaba. Trabajador solicita además reintegro. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 7 de julio de 2011. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.	No	Proceso de responsabilidad por falla en la prestación del servicio médico. Se condena al pago de

Rad. 76001-23-24-000-1997-03455-01(19953)		perjuicios morales pero no tiene relación con acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 30 de enero de 2013. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 76001-23-31-000-1998-01798-01(24986).	No	Proceso por falla en el servicio medico. Se determina que no hay responsabilidad de la administración y no tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Subsección A. Sentencia del 8 de agosto del 2012. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 76001- 2325-000-1998-5486-01- (22573)	No	Proceso por falla del servicio en el que muere una persona. Se determina que hay responsabilidad del Estado pero no se trata la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera Subsección C. Sentencia del 25 de mayo del 2011. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 52001-23-31-000-1997-08789-01(15838, 18075, 25212 acumulados)	No	Proceso por muerte de soldado en Combate, se encuentra que hay responsabilidad del Estado pero no tiene que ver con acumulación de indemnizaciones y el sistema de riesgos laborales.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera Subsección C. Sentencia del 25 de mayo del 2011. C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Rad. 52001-23-31-000-1997-08789-01(15838, 18075, 25212 acumulados)	No	Accidente en el que muere una persona al ser atropellada por un vehículo oficial. No tiene relación con el sistema de riesgos laborales y la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 26 de abril del 2002. C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros. Rad. 05001-23-26-000-1992-0861-01 (13675)	No	Proceso de responsabilidad por falla en la prestación del servicio medico. Se condena al pago de perjuicios morales pero no tiene relación con acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 29 de enero del 2008. C.P. Jesús María Lemos Bustamante. Rad. 76001-23-31-000-2000-02046-02 IJ-02046	No	Proceso adelantado para declarar la nulidad del acto administrativo contenido en el oficio sin número de 13 de marzo de 2000, por el cual el Contralor General de la República ordenó el retiro de la demandante. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sentencia del 18 de diciembre de 1995. C.P. Joaquín Barreto Ruiz. Rad. CE-SEC2-EXP1995-N7832	No	Proceso en el que se solicita que de declare no valida renuncia presentada por empleada publica. No tiene que ver con la acumulación de indemnizaciones.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 12 de septiembre de 1991. C.P. Julio Cesar Uribe Acosta. Rad. 6572. Nicho citacional.	Si	VER FICHA.

CE. Sala de lo CA. Sección Tercera Sentencia del 24 de febrero de 2005. M.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. 15125. Nicho citacional.	Si	VER FICHA.
CE. Sentencia del 7 de junio de 2007. M.P. Mauricio Fajardo Gomez. Rad. 15722. Nicho citacional.	Si	VER FICHA.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 30 de agosto de 2007. M.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. 15724. Nicho citacional.	Si	VER FICHA.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 1 de octubre del 2008. C.P. Myriam Guerrero de Escobar. Rad. 76001-23-31-000-1995-01579- 01(16322). Nicho citacional.	Si	VER FICHA.
CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 25 de febrero del 2009. C.P. Myriam Guerrero de Escobar. 18001-23-31-000-1995- 05743-01(15793). Nicho citacional.	Si	VER FICHA.



Identificación Sentencia CC	Utilidad	Justificación
CC. Sentencia C 379/96. M.P. Carlos Gaviria Díaz.	No	Revisión del Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República de Cuba sobre promoción y protección recíproca de inversiones. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CC. Sentencia C358/96. M.P. Carlos Gaviria Díaz	No	Revisión del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el cual se promueven y protegen las inversiones. No trata el tema de acumulación de indemnizaciones.
CC. Sentencia T-588-06. M.P. Jaime Araujo Rentería.	No	Responsabilidad civil por abuso del derecho. Información falsa en medios de comunicación. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones de riesgos laborales y responsabilidad civil.
CC. Sentencia T 556-03. M.P. Clara Inés Vargas Hernández	No	Tutela en contra de la EPS por no pago de la licencia de maternidad. No se trata de riesgos laborales ni acumulación de indemnizaciones. Allanamiento de las EPS a la mora del empleador y pago de la licencia.
CC. Sentencia C-370/06. M.P. Manuel José Cepeda Espinos	No	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 3, 5, 9, 10, 11.5, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 34, 37 numerales 5 y 7, 46, 47, 48, 54, 55, 58, 62, 69, 70 y 71 de la Ley 975 de 2005 “Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios”, y contra la ley en su integridad. No trata el tema de riesgos laborales ni acumulación de indemnizaciones.
CC. Sentencia C-355/06. M.P. Jaime Araujo Rentería	No	Demandas de inconstitucionalidad contra los Arts. 122, 123 (parcial), 124, modificados por el Art. 14 de la Ley 890 de 2004, y 32, numeral 7, de la ley 599 de 2000 Código Penal. No trata el tema de

		riesgos laborales ni de acumulación de indemnizaciones.
CC. Sentencia C 187/06. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.	No	Revisión previa del proyecto de ley estatutaria No. 284/05 Senado y No. 229/04 Cámara “Por medio de la cual se reglamenta el artículo 30 de la Constitución Política” (Habeas Corpus). No trata el tema de acumulación de indemnizaciones ni riesgos laborales.
CC. Sentencia C-1175/05. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.	No	Demanda de inconstitucionalidad en contra de los artículos 2, 3, parcial, 11, parcial, 24 y 44 del Decreto ley 760 de 2005 “Por el cual se establece el procedimiento que debe surtirse ante y por la Comisión Nacional de Servicio Civil para el cumplimiento de sus funciones. No habla de acumulación de indemnizaciones ni de riesgos laborales.
CC. Sentencia C-1153/05. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.	No	Control constitucional al Proyecto de Ley Estatutaria N° 216/05 Senado, N° 235-Cámara, “por medio de la cual se reglamenta la elección de Presidente de la República, de conformidad con el artículo 152 literal f) de la Constitución Política de Colombia, y de acuerdo con lo establecido en el Acto Legislativo 02 de 2004, y se dictan otras disposiciones”. No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones.
CC. Sentencia C-662/04. M.P. Rodrigo Uprimny Yepes.	No	Demanda de inconstitucionalidad parcial contra el numeral 3° del artículo 91 del Código de Procedimiento Civil, modificado por el artículo 11 de la Ley 794 de 2003. (ineficacia de interrupción de prescripción y operancia de la caducidad). No tiene nada que ver con riesgos laborales o acumulación de indemnizaciones.
CC. Sentencia C-043/04. M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.	No	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 171 (parcial) del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998. (Condena en costas en materia contencioso administrativa). Habla de responsabilidad del estado, pero no de acumulación de indemnizaciones o riesgos laborales.

CC. Sentencia C-798/03. M.P. Jaime Córdoba Triviño.	No	Demanda de inconstitucionalidad contra apartes de los artículos 3º, 8º, 12, 18, 28, 29, 58, 65 y 66 y contra los artículos 52 y 56 de la Ley 794 de 2003. Diversas normas que no guardan relación con la posibilidad de acumular indemnizaciones de riesgos laborales y responsabilidad civil.
CC. Sentencia C-311/03. M.P. Eduardo Montealegre Lynett	No	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 3 y 4 (parciales) de la Ley 700 de 2001 “Por medio de la cual se dictan medidas tendientes a mejorar las condiciones de vida de los pensionados y se dictan otras disposiciones” Pago solidario de los fondos de pensiones privados y los funcionarios públicos que rehúsen, retarden, o denieguen el pago de pensiones. No trata la indemnización de acumulaciones por responsabilidad civil y riesgos laborales.
CC. Sentencia C-292/03. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.	No	Revisión de constitucionalidad del proyecto de ley numero 022 de 2001 Senado, 149 de 2001 Cámara, “por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”. No tiene relación alguna con el sistema de riesgos laborales ni con la acumulación de indemnizaciones.
CC. Sentencia C-1024/02. M.P. Alfredo Beltrán Sierra.	No	Control de Constitucionalidad Decreto Legislativo No. 2002 de 2002 “Por el cual se adoptan medidas para el control del orden público y se definen las zonas de rehabilitación y consolidación” No se relaciona con el sistema de riesgos laborales ni con la acumulación de indemnizaciones procedentes de ese sistema y de la responsabilidad civil.
CC. Sentencia C-918/02. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.	No	Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 715 de 2001, artículo 2, parcial, parag. 1º, art. 5, 5.2, 5.5, 5.13, 6, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.7, 6.2.15, 7, 7.1/7.5, 7.8, 7.12, 7.13, 7.15, 8, 8.2, 8.3, 9 parag. 1,4, art. 13, 14, 15, 16.1.1,17, 18, 22, 27, 38, parag. 2, art. 41 parcial. (Sistema General de Participaciones). No tiene ninguna relación con la acumulación de indemnizaciones derivadas de la

		responsabilidad civil y de los riesgos laborales.
CC. Sentencia C-802/02. M.P. Jaime Córdoba Triviño.	No	Revisión constitucional del Decreto Legislativo 1837 de 11 de agosto de 2002 "Por el cual se declara el Estado de Conmoción Interior". No tiene ninguna relación con la acumulación de indemnizaciones.
CC. Sentencia C-695/02. M.P. Jaime Córdoba Triviño.	No	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 13 de la Ley 733 de 2002 (no procedencia de amnistía o indulto en ciertos delitos). No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales y de la responsabilidad civil.
CC. Sentencia C-578/02. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.	No	Revisión de la Ley 742 del 5 de junio de 2002 "Por medio de la cual se aprueba el ESTATUTO DE ROMA DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL, hecho en Roma el día diecisiete (17) de julio de mil novecientos noventa y ocho (1998)". Hace referencia a la indemnización de víctimas por parte del estado, pero no a la acumulación de indemnizaciones de riesgos laborales y responsabilidad civil.
CC. Sentencia C-251/02. M.P. Eduardo Montealegre Lynett.	No	Demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 684 de 2001, y sus artículos 3, 6, 13, 20 literal a), 25, 38, 42, 50, 54, 55 (parcial), 57 parágrafo, 58 (parcial), 59, 60, 62 y 72. (funcionamiento de la defensa nacional). No tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y las derivadas de la responsabilidad civil.
CC. Sentencia C-226/02. M.P. Álvaro Tafur Galvis.	No	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 474 de la Ley 599 de 2000, "Por la cual se expide el Código Penal." (Derogatoria). No se relaciona con la acumulación de indemnizaciones (riesgos laborales y responsabilidad civil).
CC. Sentencia C-010/00. M.P. Alejandro Martínez Caballero.	No	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 2° (parcial), 3° (parcial), 5°, 6° (parcial) 7° literales c) y f), 8° inciso tercero, 10, 11 (parcial), 13 inciso primero, 14, 15 (parcial), 19 y 20 literal f) de la Ley 74 de 1966,

		“por la cual se reglamenta la transmisión de programas por los servicios de radiodifusión”. Sobre la libertad de expresión y la posibilidad de censura, etc. No hace referencia al sistema de riesgos laborales ni a la acumulación de indemnizaciones.
CC. Sentencia C-456/97. M.P. Jorge Arango Mejía.	No	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 127 del decreto 100 de 1980 “Por medio del cual se expide el Código Penal” (Exclusión de la pena). Norma no se encuentra vigente. Además, en nada se relaciona con la acumulación de indemnizaciones provenientes del sistema de riesgos laborales y responsabilidad civil.
CC. Sentencia C-037/96. M.P. Vladimiro Naranjo Mesa.	No	Revisión constitucional del proyecto de ley número 58/94 Senado y 264/95 Cámara, “Estatutaria de la Administración de Justicia”. Hace referencia a la indemnización por despido de funcionarios públicos pero no tiene nada que ver con la acumulación de indemnizaciones del sistema de riesgos laborales y de la responsabilidad civil.
CC. Sentencia C-409/09. M.P. Juan Carlos Henao Pérez.	No	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 108 (parcial) de la Ley 906 de 2004. (Código de procedimiento penal- citación del asegurador a la audiencia de conciliación en materia penal) No tiene nada que ver con acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos laborales y de responsabilidad civil.
CC. Sentencia C-227/09. M.P. Luis Ernesto Vargas Silva	No	Demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 11 (parcial) de la Ley 794 de 2003 “Por la cual se modifica el Código de Procedimiento Civil, se regula el proceso ejecutivo y se dictan otras disposiciones” (ininterrupción de prescripción y operancia de caducidad) No tiene nada que ver con acumulación de indemnizaciones derivadas del sistema de riesgos laborales y de responsabilidad civil.
CC. Sentencia T-391/07. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.	No	Tutela contra Sentencia del Consejo de Estado. RCN, por procedencia de una acción popular en la que se

		hablaba de la vulneración de varios derechos colectivos por el contenido del programa El Mañanero, de la Mega. Alegan la existencia del derecho a la libertad de expresión. No hace referencia a la acumulación de indemnizaciones derivadas de riesgos laborales y de responsabilidad civil.
CC. Sentencia C-423/06. M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.	No	Demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 100 y 104 (parcial) de la ley 906 de 2004 “Por el cual se expide el Código de Procedimiento Penal” (medidas cautelares e incidente de reparación integral). Habla de la indemnización por responsabilidad civil derivada de la comisión de un delito, pero no hace referencia a la acumulación de indemnizaciones en materia de riesgos laborales y la derivada de la responsabilidad civil.

## Anexo 4: Fichas de Jurisprudencia

## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  <b>CSJ-L Sentencia del 21 de marzo de 1991. M.P. Hugo Suescún Pujols. Rad. 4097.</b>
<b>Corporación:</b> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral <b>Número de sentencia o radicación:</b> 4097 <b>Fecha:</b> 21 de marzo de 1991 <b>Magistrado Ponente:</b> Hugo Suescún Pujols
<b>Hechos relevantes:</b>  Luis Ángel Ocampo Santamaría demandó a la Tintorería Industrial Crystal S.A. para que fuera condenada a pagarle indemnización plena de perjuicios por invalidez debido a un accidente de trabajo, al introducir tela en la máquina decatizadora “Montti” y quedarle aprisionada la mano derecha.  Culpa del patrono habría consistido en no haber entregado la debida protección e inobservar las normas de seguridad por no existir reglamento.
<b>Primera Instancia:</b>  El juzgado laboral del circuito de Envigado dictó sentencia el 13 de febrero de 1990, condenando a la demandada a pagar al actor indemnización por accidente de trabajo. (indemnización futura que se debía pagar desde la fecha de terminación del contrato).
<b>Segunda Instancia:</b>  Confirmó el fallo.
<b>Problema Jurídico:</b>  ¿Es posible que el trabajador declarado responsable por un accidente laboral en el que hubiera mediado culpa patronal descunte de la indemnización plena de perjuicios la pensión de invalidez que paga el ISS como consecuencia de tal accidente?
<b>Consideraciones de la Corte:</b>  <i>Es evidente que el recurrente y el Tribunal Superior parten de supuestos distintos. Mientras para el segundo la incapacidad laboral le sobrevino al demandante como consecuencia de un accidente de trabajo imputable a culpa del empleador, el recurrente supone que esto no ocurrió así. Por eso precisamente afirma el impugnador, colocándose dentro de la primera hipótesis del artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 del Consejo Directivo del Instituto Colombiano de Seguros Sociales (art. 1º del Decreto 3160 de 1964), que el reconocimiento por parte del Instituto de Seguros Sociales en favor del trabajador de las prestaciones previstas en el mismo Acuerdo, y concretamente de la pensión de invalidez a que alude su artículo 23, “exonera al patrono de toda indemnización y ello significa que no puede imponérsele ninguna carga en casos como el presente...” (fl. 19)</i>



*Sin embargo la hipótesis de hecho que encontró demostrada el Tribunal Superior fue la regulada por la segunda parte del primer inciso y por el segundo inciso del ya citado artículo 82 que prevén la consecuencia del accidente imputable a culpa del patrono. Cuando esto ocurre, y por la simple y potísima razón de que nadie puede asegurar su propia culpa, prevé la norma en primer término la posibilidad de que el Seguro Social demanda al patrono el pago de la indemnización que se cause como consecuencia del accidente, hasta el monto de las prestaciones que el Instituto reconozca al trabajador accidentado o sus beneficiarios y les entregue el saldo, si lo hubiere, sin que ello impida naturalmente que la víctima y sus causahabientes puedan instaurar contra el empleador culpable del accidente las acciones pertinentes para obtener la indemnización total de los perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el Instituto de acuerdo con su reglamento.*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

*artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963*

**Decisión:**

No Casa

**Jurisprudencia citada:**

N/A

## Ficha de Jurisprudencia

### **Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil**

#### **Identificación:**

CSJ-L Sentencia del 18 de mayo de 1992. M.P. Hugo Suescún Pujols. Rad. 4941

**Corporación:** Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral

**Número de sentencia o radicación:** 4941

**Fecha:** 18 de mayo de 1992

**Magistrado Ponente:** Hugo Suescún Pujols

#### **Hechos relevantes:**

Actuando en su condición de viuda de Ivan Darío Henao Serna y en representación de su hijo Luis Fernando Henao Ospina, Stella Patricia Ospina Rave demandó a la sociedad Pa-Mack Ltda., a Pascual López Ramírez y a Orfilia Ríos de López pidiendo que fueran condenados solidariamente a pagarles, entre otros, la indemnización plena de perjuicios por culpa patronal, y la "sustitución de la pensión de sobrevivientes a que habría tenido la esposa e hijo del trabajador si éste hubiese sido afiliado al ISS".

El señor Luis Fernando Ospina trabajó para la sociedad demandada entre marzo de 1979 hasta agosto de 1988 cuando murió en un accidente de trabajo en donde existió culpa patronal.

La culpa habría consistido en no haberle suministrado la herramienta con las condiciones o especificaciones técnicas necesarias para realizar sin riesgo su trabajo.

#### **Primera Instancia:**

El Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Medellín y por sentencia del 6 de mayo de 1.991 condenó únicamente al demandado Pascual López Ramírez a pagarle a los demandantes \$15'500.949.62 "reducidos en un 50%" por concepto de "lucro cesante y lucro consolidado"; \$1'000.000.00 por perjuicios morales; una pensión de sobreviviente por valor de \$25.637.00 a partir del 31 de agosto de 1.988 "en la proporción señalada por la Ley para la cónyuge (50%) y su hijo (50%) y bajo el cumplimiento de los requisitos exigidos para su pago"; entre otras condenas por los demás conceptos demandados (cesantías, vacaciones, entre otras).

#### **Segunda Instancia:**

El Tribunal confirmó la de su inferior pero modificándola en el sentido de condenar a toda los demandados, y que no debía haber reducción de indemnizaciones por concurrencia de culpas, como se declaró en primera instancia.

#### **Problema Jurídico:**

¿Es posible que se condene a un empleador que no ha venido cumpliendo con sus obligaciones frente a la seguridad social y además es culpable de un accidente de trabajo

en el que fallece el trabajador, a indemnizar los perjuicios causados a título de lucro cesante, y además el pago de la pensión de sobrevivientes que no subrogó en el sistema de riesgos laborales?

**Consideraciones de la Corte:**

*Como acertadamente lo explica la recurrente, al establecer el artículo 216 del CST a cargo del empleador la obligación de indemnizar totalmente al trabajador o sus beneficiarios que sufren un daño como resultado de un accidente de trabajo o una enfermedad profesional a consecuencia de la culpa patronal comprobada, contraponen esta indemnización plena y ordinaria de perjuicios a la legalmente tarifada que debe pagarse en aquellos casos en que el trabajador sufre un accidente o una enfermedad sin que medie culpa del empleador.*

**Para reparar los daños que son consecuencia de los accidentes laborales y enfermedades, padecidos por el trabajador, la legislación social parte de la responsabilidad objetiva del empleador y fija unas prestaciones que cubren estos riesgos propios de las relaciones laborales. Por tanto no resulta posible acumular "a la indemnización total y ordinaria de perjuicios" el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas que trae el Código Sustantivo del Trabajo.**

**Resulta entonces indudable que el Tribunal de Medellín violó la ley cuando confirmó la sentencia de su inferior y mantuvo las condenas que simultáneamente éste profirió por concepto de pensión de sobreviviente, "lucro cesante y lucro consolidado" y perjuicios morales, con el agravante de que extendió las condenas para cobijar a todos los demandados.**

*Ninguna duda hay para la Corte acerca de que el entendimiento que explica el cargo corresponde al genuino sentido del artículo 216 del CST, según jurisprudencialmente lo tiene establecido de tiempo atrás. Por este aspecto le asistiría razón a la parte recurrente; pero ocurre que el Tribunal en su equivocada sentencia no hizo absolutamente ninguna interpretación de dicha norma.*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Art. 216 CST.

**Decisión:**

No Casa, porque el cargo planteado por el recurrente no era el aplicable, y porque la Corte no puede casar una sentencia por una razón diferente a la invocada por el recurrente.

**Jurisprudencia citada:**

N/A

## Ficha de Jurisprudencia

### Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil

#### Identificación:

CSJ-L Sentencia del 10 de marzo de 1993. M.P. Manuel Enrique Daza Álvarez. Rad. 5480.

**Corporación:** Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral

**Número de sentencia o radicación:** 5480

**Fecha:** 10 de marzo de 1993

**Magistrado Ponente:** Manuel Enrique Daza Álvarez.

#### Hechos relevantes:

Héctor Darío Ángel Muriel demandó a la empresa Ingeniería y Mantenimiento IMAN Ltda. Para que se condene a esta última a pagar la indemnización plena de perjuicios materiales y morales ocasionados por accidente de trabajo (le amputaron ambos brazos).

El ISS le reconoció al demandante pensión de invalidez.

#### Primera Instancia:

Condenan al demandado a pagar los perjuicios correspondientes.

#### Segunda Instancia:

Confirmó en todas sus partes la sentencia de primera instancia.

#### Problema Jurídico:

¿Es procedente el pago de la pensión de invalidez al demandante aun si este ya fue previamente indemnizado por parte del empleador por motivo del accidente de trabajo?

#### Consideraciones de la Corte:

*Conforme lo hace ver el censor, el Tribunal sin explicar sus razones, confirmó el fallo de primera instancia, que sólo descontó del monto de la indemnización plena de perjuicios reconocida al demandante, el valor de la pensión de invalidez pagada por el I.S.S. al mismo actor pero congelada a la fecha de la sentencia de primer grado.*

*Observa, entonces, el casacionista que así como la indemnización plena y ordinaria de un siniestro laboral declarado culposos abarca la vida probable del trabajador perjudicado, si a este se le ha concedido también una pensión vitalicia, como lo es la de invalidez pagada por el I.S.S., a la luz de lo preceptuado por los artículos 216 del C. S. del T. y 83 del Acuerdo 155 de 1963 del Consejo Directivo del I.S.S., resulta indiscutible que del monto de la indemnización plena, que se reconoce computando la vida probable del afectado, ha de descontarse el valor de aquella pensión de invalidez, pagadera también por toda la*

*vida probable del inválido.*

*A este respecto, le asiste razón, al recurrente en sentir de la Sala, dado que los aludidos artículos 216 del C. S. del T. y 83, inciso 2 del Acuerdo 155 de 1963 del I.S.S., establecen la obligación patronal de pagar al trabajador que haya sufrido un accidente de trabajo por culpa suficientemente comprobada del empleador, la indemnización total y ordinaria de perjuicios, pero por supuesto autorizan a descontar del monto de dicha indemnización el valor de las prestaciones en dinero sufragadas por el patrono o, si es el caso, por el I.S.S. cuando este haya asumido el riesgo, ello con el fin de evitar que la víctima del accidente reciba un valor superior al que le corresponde y obtenga, consiguientemente, un enriquecimiento sin causa.*

*Desde luego, tratándose de las prestaciones del I.S.S., es conocido que ellas bien pueden consistir en pensiones prácticamente vitalicias como acontece en el asunto de los autos, de forma que su valor monetario mal puede tasarse imponiendo un límite temporal artificial o arbitrario, como la fecha de una sentencia, pues el juzgador no puede desconocer que la mesada seguirá pagándose aun después de la emisión del acto procesal. Por lo tanto, de aceptarse lo decidido por el Tribunal, el trabajador demandante terminaría percibiendo un doble resarcimiento siendo que la ley permite sólo uno, dado que recibiría la pensión de invalidez vitalicia y paralelamente un pago indemnizatorio total que comprende las cifras que se calcula habría devengado de haber permanecido sano durante su vida probable.*

*Frente a las observaciones de la parte opositora, es de advertir que estos criterios no contradicen la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte que sobre el punto reiteradamente ha expresado lo siguiente: "La hipótesis de hecho que encontró demostrada el Tribunal Superior fue la regulada por la segunda parte del primer inciso y por el segundo inciso del ya citado artículo 83 que prevén las consecuencias del accidente imputable a culpa del patrono. Cuando esto ocurre, y por la simple y potísima razón de que nadie puede asegurar su propia culpa, prevé la norma en primer término la posibilidad de que el Seguro Social demande al patrono el pago de la indemnización que se cause como consecuencia del accidente, hasta el monto de las prestaciones que el Instituto reconociere al trabajador accidentado o sus beneficiarios y les entregue el saldo, si lo hubiere, sin que ello impida naturalmente que la víctima y sus causahabientes puedan instaurar contra el empleador culpable del accidente las acciones pertinentes para obtener la indemnización total de los perjuicios, de cuyo monto deben descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el Instituto de acuerdo con su reglamento" (Sentencia de marzo 21 de 1991. Radicación 4097).*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia.

**Decisión:**

Casa parcialmente la sentencia. En sede de instancia bastan las razones expuestas para concluir que a la indemnización de perjuicios reconocida, ha de hacerse el referido descuento

**Jurisprudencia citada:**

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia de marzo 21 de 1991. Radicación 4097.

**Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil**

**Corporación:** Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral

**Número de sentencia o radicación:** 5918

**Fecha:** 13 de julio de 1993

**Magistrado Ponente:** Hugo Suescún Pujols

**Hechos:**

*Accidente aéreo en el que mueren 181 pasajeros y la tripulación del avión.*

*Demandado: Avianca*

**Consideraciones de la Corte:**

*Al respecto conviene recordar, como con acierto lo advierte la recurrente en la parte inicial de su cargo, que los perjuicios provenientes de un accidente de trabajo tienen una diferente forma de reparación según se trate del daño que se resarce con la indemnización tarifada por el código o del que requiere la indemnización total y ordinaria de perjuicios a que específicamente se refiere el artículo 216 del CST. En el primer caso, la indemnización laboral común halla su fundamento no en la culpa en que pueda haber incurrido el empleador sino en la responsabilidad objetiva que la ley estableció a su cargo para procurar la integridad física de los trabajadores a su servicio y garantizar así la reparación del daño que sufran en su cuerpo o su salud por razón de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales. En el segundo caso, la responsabilidad que incumbe al empleador exige la plena demostración de su culpa en la causación del infortunio.*

*La Ley 6ª de 1945 previó igualmente en su artículo 12 la responsabilidad ordinaria por perjuicios en los casos de enfermedad profesional y de accidentes de trabajo “por culpa comprobada del patrono”. La norma, que aun se encuentra vigente en lo que hace relación al régimen de los trabajadores oficiales, fue recogida por los redactores del Código Sustantivo del Trabajo y aparece plasmada en su artículo 216 en el cual, al igual que lo establece el último inciso del literal b) del artículo 12 de la Ley 6ª, se ordena descontar del monto de la condenación ordinaria por perjuicios lo que se haya pagado por concepto de la indemnización tarifada con base en la responsabilidad objetiva del empleador.*

*La sentencia se centra en discutir si la culpa del comandante del avión equivale a la culpa del empleador pero no hace mención directamente a la acumulación de indemnizaciones.*

## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CSJ-L. Sala Plena. Sentencia del 12 de noviembre de 1993. M.P. Rafael Méndez Arango Rad. 5868
<b>Corporación:</b> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral <b>Número de sentencia o radicación:</b> 5868 <b>Fecha:</b> 12 de noviembre de 1993 <b>Magistrado Ponente:</b> Rafael Méndez Arango
<b>Hechos relevantes:</b>  María Ofelia Alvarez, actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor Juan Carlos Osorio, demandó para que se condenara a Plímeros Colombianos S.A. como responsable por culpa del accidente de trabajo en que falleció José Rogelio Osorio Correa, y a pagarles la indemnización plena de los perjuicios materiales y morales. (el trabajador fue arrojado del bus en el que la empresa transportaba a sus empleados, y falleció).  La demandada alega como excepción "compensación y descuento de las sumas que la parte demandante ha recibido y recibirá en su vida probable, por concepto de pensión de sobrevivientes, según Resolución N° 001082 del 5 de febrero de 1992 del Instituto de Seguros Sociales" y "pago parcial, por cuanto la demandante recibió de la compañía transportadora Seditrans, el valor de un seguro de vida a título de indemnización"
<b>Primera Instancia:</b>  El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Itagüí, por sentencia de 21 de septiembre de 1992 condenó a Polímeros Colombianos, S.A. a pagar a María Ofelia Alvarez la suma de \$6'386.009,20 por concepto de los perjuicios materiales y morales por la muerte de su esposo José Rogelio Osorio y a Juan Carlos Osorio Alvarez la suma de \$7'156.096,20 por los perjuicios materiales y morales ocasionados por la muerte de su padre. La demandada fue condenada a pagar las costas y el juzgado declaró probada parcialmente la excepción de compensación por la suma de \$770.087,00 cubierta a la viuda.
<b>Segunda Instancia:</b>  El Tribunal modificó las condenas proferidas en la primera instancia determinando en \$3'150.426,60 la condena "por concepto de perjuicios consolidados" y en \$26'749.428,00 "la condena por concepto de indemnización futura".  No rebajó de las condenas el valor de lo pagado a la viuda y su hijo por el Instituto de Seguros Sociales por concepto de pensión de sobrevivientes, invocando la sentencia de la Corte de 9 de octubre de 1991, radicación 4378.
<b>Problema Jurídico:</b>



¿El empleador que es declarado responsable y condenado a indemnizar plenamente los perjuicios causados a los demandantes, puede alegar la compensación o el pago parcial de las sumas que haya pagado la entidad de riesgos laborales?

#### **Consideraciones de la Corte:**

***En ejercicio de esta función unificadora de la jurisprudencia, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia luego de sopesar los diferentes argumentos en pro y en contra de ambas tesis jurídicas, concluyó que no sólo por expresarlo así claramente el mentado artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 sino, y ésta fue la razón principal que tuvo la Sala, porque nadie puede asegurar su propia culpa ni muchísimo menos obtener algún beneficio de ella, el genuino sentido de lo dispuesto en los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que la recurrente acusa de indebidamente aplicado por el fallo, y del artículo 83 del susodicho Acuerdo, que se dice inaplicado, es el de que el Instituto de Seguros Sociales no ha asumido, ni racionalmente podrá asumirlo, el riesgo de daño al trabajador que le sobrevenga por causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional en cuya ocurrencia se compruebe suficientemente la culpa del empleador; y que por ello quien está habilitado para obtener la devolución de lo que pague por concepto de las prestaciones que cubren los perjuicios derivados de la responsabilidad objetiva del patrono en la producción del accidente o la enfermedad profesional, es el Instituto de Seguros Sociales.***

(...)

***O sea, es únicamente el Instituto de Seguros Sociales el que está facultado, cuando otorga las prestaciones al afiliado o sus beneficiarios, para demandar el pago de la indemnización que según el Código Sustantivo del Trabajo o según el derecho común, queda obligado a pagar el empleador cuando el accidente o la enfermedad profesional se producen por acto intencional o culposo suyo; pero nunca podría ser el mismo empleador responsable del daño que sufren el trabajador o sus beneficiarios, por culpa patronal suficientemente comprobada, quien a la postre resulte beneficiado al permitírsele descontar de la suma a la que se prueba asciende el perjuicio una prestación otorgada por el Instituto de Seguros Sociales, el cual está dicho no le ha asegurado sus actos dolosos o culposos sino que lo ha subrogado en el cubrimiento de los riesgos inherentes al trabajo de los que el patrono o empleador responde por su actividad objetiva como tal y sin que medie culpa alguna de su parte.***

Al respecto resulta oportuno hacer un poco de historia y recordar cuál fue el recorrido que doctrinaria y legislativamente tuvo el tema relativo al cubrimiento de los riesgos originados en el trabajo subordinado antes de expedirse las leyes sociales que en nuestro país disciplinan esta materia. En una primera época, antes de la expedición de la Ley 57 de 1915, el trabajador tenía que probar la culpa en que había incurrido su patrono, el daño sufrido, la relación de causalidad entre el hecho dañoso, el perjuicio y el monto de este último. Después de la ley se avanzó en el sentido de presumir la culpa en el patrono y fijar mediante una tarifa el monto del perjuicio. Y final mente, en la época actual y desde la expedición de las Leyes 6a. de 1945 y 64 de 1946, vigentes para los trabajadores oficiales, la Ley 90 de ese mismo año y el Código Sustantivo de Trabajo, se mantuvo la tarifa legal correspondiente a la reparación del daño dentro del concepto de la responsabilidad objetiva del patrono, momento en el que se elimina el concepto de culpa para simplemente hacer responder al empleador

oficial o particular por los perjuicios que se originan de dicha responsabilidad objetiva y por la sola circunstancia de que el trabajador resulte afectado en su salud, o inclusive pierde su vida, al desarrollar su labor en actividades de las que el empresario obtiene provecho.

Pero nuestra legislación positiva, separándose de la orientación seguida en otros países y avanzando mucho más en su función tuitiva, consagró al lado de las prestaciones e indemnizaciones tarifadas en la ley de modo rígido, la posibilidad de que si el trabajador o sus beneficiarios no quedaran conformes con esta indemnización prefijada legalmente, instauraran la acción enderezada a establecer que existió culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, para así obtener la indemnización total y ordinaria de perjuicios, la que no está contenida en una tabla o tarifa en la que se fije el perjuicio en forma predeterminada sino que equivaldrá a la suma que el trabajador accidentado o enfermo o sus beneficiarios, en caso de fallecer, logren demostrar en el juicio.

De este monto de la indemnización total y ordinaria de perjuicios se autoriza descontar, como es apenas obvio, "el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo", según las voces del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, y desde luego sólo para aquellas hipótesis en que el patrono previamente ha pagado el valor de las prestaciones en dinero y posteriormente resulta condenado como culpable del accidente o de la enfermedad profesional.

**Y en los términos del artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 y para los casos en que el Instituto de Seguros Sociales otorgó las prestaciones establecidas en el Reglamento General del Seguro Social Obligatorio de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, queda facultado para demandar al empleador por el valor de la indemnización que éste debe pagar por habersele comprobado suficientemente la culpa en la producción del accidente o de la enfermedad profesional, puesto que la entidad de previsión social no asegura los daños causados por dolo o culpa del patrono. Que es la hipótesis que prevé el primer inciso.**

La otra situación que puede darse y que contempla el segundo inciso del artículo 83, es el supuesto de hecho según el cual "la víctima o sus causahabientes instauren las acciones pertinentes de derecho común para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios", caso en el **cual del monto de ella y por el mismo Instituto deberá descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas de acuerdo con las normas del reglamento.**

Quiere esto decir que en ninguna de las hipótesis consagradas por los artículos 216 del Código Sustantivo de Trabajo y 83 del Acuerdo 155 de 1963, **le es dado a quien causó el perjuicio descontar suma alguna del valor de las prestaciones en dinero pagadas por el Instituto de Seguros Sociales, pues ello conduciría a que el empleador culpable resultara a la postre obteniendo beneficios del daño que causó, o al menos exonerándose de la responsabilidad en un riesgo producido por su acto intencional o culposo.** Y es apenas obvio que nadie puede alegar en su favor su propia torpeza, ni muchísimo menos puede lucrarse del daño ajeno que él causó, conforme resulta de los principios generales de derecho expresados en los antiguos pero siempre actuales brocardos latinos: "Non auditur propriam allegans turpitudinem" (El que alega su propia torpeza no debe ser oído) y "Nemo debet lucrari ex alieno damno" (Nadie debe lucrarse del daño ajeno).

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Art. 216 CST, principio de no beneficiarse de su propia culpa

**Decisión:**

No Casa

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia de 9 de octubre de 1991, radicación 4378.

Sentencia de 10 de marzo de 1993, radicación 5480

Sentencia de 9 de agosto de 1979, radicación 6666

Sentencia de 24 de mayo de 1978, radicación 6190

Sentencia de 9 de febrero de 1984, radicación 9952

Sentencia de 15 de marzo de 1985, radicación 9981

Sentencia de 21 de marzo de 1991, radicación 4097

Ficha de Jurisprudencia

**Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil**

**Identificación:**

CSJ-L Sentencia del 31 de mayo de 1994. Rad. 6569

**Corporación:** Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral

**Número de sentencia o radicación:** 6569

**Fecha:** 31 de mayo de 1994

**Magistrado Ponente:** Sin conocimiento.

**Hechos relevantes:**

Sin conocimiento ( citas recogidas de otras sentencias )

**Primera Instancia:**

Sin conocimiento ( citas recogidas de otras sentencias )

**Segunda Instancia:**

Sin conocimiento ( citas recogidas de otras sentencias )

**Problema Jurídico:**

¿Es posible que el empleador condenado a pagar la indemnización de que trata el art. 216 del CST deduzca las sumas que ha pagado la entidad de seguridad social?

**Consideraciones de la Corte:**

*"En la decisión de Sala Plena del 12 de noviembre de 1.993 todos los Magistrados que la componen, incluyendo desde luego a quienes salvaron su voto, coincidieron en sostener que el empleador no tiene ningún interés jurídicamente tutelado según los artículos 216 del CST y 83 del Acuerdo 155 de 1963 para obtener que las prestaciones en dinero pagadas por el Seguro Social le sean descontadas del valor de la indemnización ordinaria por perjuicios que deba asumir por su actuación dolosa o culposa en el accidente de trabajo o la enfermedad profesional.*

(...)

*"Lo que ocurre en la práctica es que el sistema de la seguridad social prescinde temporalmente de la responsabilidad dolosa o culposa del patrono y por mandato de la Ley 90 de 1946 y el Decreto 3170 de 1964, el Seguro Social debe considerar como accidente de trabajo el que se produce por acto intencional del patrono (artículo 3o. literal c); y por esa única razón está en el deber de entregarle a la víctima el valor que usualmente tiene destinado para cubrir la responsabilidad objetiva, lo que realiza sin perjuicio de su derecho de repetir contra el responsable, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 83 del Decreto citado.*

*"El empleador culpable no asegura ante la entidad de previsión los perjuicios que*

ocasiona su culpa y no puede exigirle al Seguro Social que le pague al trabajador las indemnizaciones tarifadas que establecen sus reglamentos. El Seguro Social las asume temporal o transitoriamente, por mandato legal, mas no porque el patrono tenga derecho a que esa asunción se produzca.

*"En la acción laboral mediante la cual se fija en el empleador la responsabilidad común que establece el artículo 216 del CST, una vez que el juez determina que el accidente de trabajo ha ocurrido por culpa del patrono, debe radicar sobre éste la obligación de pagar la totalidad de los perjuicios, pues la indemnización común es suya exclusivamente y la sentencia sólo podrá autorizar el descuento de las prestaciones pagadas con anticipación por el propio empleador. **Las que hubiere cubierto el Seguro Social ni siquiera deben ser materia de pronunciamiento si la entidad no interviene en el proceso, pues el juez no puede anticiparse a suponer que el Seguro efectivamente hará valer su derecho de repetición contra el patrono o el derecho a reclamar de la víctima del accidente la devolución del valor de las prestaciones que la entidad cubrió por esa misma causa.***

*"Constituye una generalización inadmisble sostener que si el trabajador ejercita la acción de responsabilidad común que establece el artículo 216 del CST habiendo recibido del Seguro Social las prestaciones del riesgo profesional, está con ello demandando una doble reparación. No puede perderse de vista que el Seguro Social reconoce prestaciones calculadas con base en tarifas determinadas en función de ciertos índices (salario, años de servicios, número de cotizaciones, edad, vida probable etc.) en lugar de compensar perjuicios realmente producidos, como sí ocurre con la indemnización común del artículo 216 citado, que busca resarcir la totalidad del daño sufrido. En la indemnización tarifada es posible que exista, hasta cierto punto, una desvinculación entre los hechos concretos y la cifra pagada, que puede ser igual, menor o superior a los perjuicios realmente producidos. Por ello sólo con base en las circunstancias concretas de cada caso en particular puede decirse con certeza (que no admite generalizaciones) si la acción indemnizatoria del derecho común se limitó a la diferencia entre el riesgo objetivo y el subjetivo, o si se propuso una acumulación de indemnizaciones superior al daño como la que teóricamente critica la censura.*

*"La tesis de la recurrente llevaría a imponerle al juez el deber de presumir que el actor siempre demanda la indemnización tarifada y la del derecho común y, sobre esa base, cualquiera que sea el caso que se le someta, ordenar el descuento de las prestaciones pagadas por el Seguro Social para permitirle al patrono que si la indemnización tarifada resulta igual a la indemnización del derecho común, nada deba pagarle a la víctima del accidente, sin que pueda perderse de vista que, como lo dijo la Corte en sentencia que invoca la recurrente, 'El Seguro Social es un sistema técnico de protección más benéfico para los trabajadores que el sistema de prestaciones directas a cargo del patrono'.*

***"El criterio de la recurrente igualmente llevaría al juez a una consideración inevitable: si la indemnización tarifada que pagó el Seguro Social resultara superior a la del derecho común, el mismo funcionario tendría que admitir la demanda del patrono contra la víctima que recibió el pago en exceso --que sería indiscutiblemente un pago de lo no debido--, pues, según la impugnación, el empleador tiene un "derecho" total o parcial sobre la indemnización común, no obstante haber cotizado para un riesgo distinto: el profesional que sí asume el Seguro Social y el único del cual queda liberado.***

*"Desde el punto de vista de la seguridad industrial y su relación con el sistema de seguridad social no aparece razonable que el empleador descuidado que incumpla su deber legal de protección contra accidentes se beneficie con los dineros que el Seguro Social le reconoce a la víctima, porque con ello la repetición de los actos culposos no encontraría el correctivo necesario. Ese, desde luego, no puede ser considerado ni siquiera como criterio de equidad. Y --aunque no es éste un argumento propuesto por la censura-- tampoco debe necesariamente suponerse que al autorizar el juez la retención por el empleador de los dineros que eventualmente deban devolverse al Seguro Social, dichos valores quedarán en mejores manos porque el empleador, dada su mayor solvencia económica, sea mejor garante de los fondos públicos que el trabajador, pues de igual manera sería válido aceptar que la víctima del daño resulta ser más adecuado custodio de esos dineros que un empleador calificado judicialmente como persona imprudente"*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia, Art. 216 C.S.T.

**Decisión:**

No hay lugar al descuento

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia del 12 de noviembre de 1.993

## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CSJ-L Sentencia del 17 de octubre de 1995. M.P. Hugo Suescún Pujols. Rad. 7716
<b>Corporación:</b> Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Civil <b>Número de sentencia o radicación:</b> 7716 <b>Fecha:</b> 17 de octubre de 1995 <b>Magistrado Ponente:</b> Hugo Suescún Pujols
<b>Hechos relevantes:</b>  María Aurora García, en su nombre y en el de sus hijos menores Elizabeth, María Teresa y Yeison Estrada García, demandó a Héctor Augusto González y Martha Ortega, para que fueran condenados a pagar, entre otros, la indemnización plena de perjuicios causados por la muerte en accidente de trabajo de su esposo y padre Antonio Mauro Estrada.  Los demandantes reciben pensión de sobrevivientes que otorga la ARL del ISS.
<b>Primera Instancia:</b>  Mediante sentencia del 30 de septiembre de 1994 el Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro condenó a los demandados a pagar a los demandantes la cantidad total de \$8.246.448 por perjuicios materiales. Por perjuicios morales los condenó a pagar \$500.000.00 para cada uno de los causahabientes del extrabajador fallecido. Absolvió de las demás pretensiones de la demanda e impuso a los demandados el 80% de las costas.
<b>Segunda Instancia:</b>  El Tribunal Superior de Antioquia, confirmó la decisión de primer grado.  Consideró el Tribunal que hubo culpa de los demandados en el accidente de trabajo en el que perdió la vida Antonio Mauro Estrada Franco, por lo que debían pagar la indemnización plena de perjuicios regulada por el artículo 216 del CST. Pero al haber encontrado que también hubo culpa de la víctima dispuso, al igual que el a-quo, que el monto de la indemnización de perjuicios debía reducirse en la proporción establecida por el artículo 2.357 del Código Civil.
<b>Problema Jurídico:</b>  ¿Es posible para el empleador condenado a indemnizar los perjuicios causados como consecuencia de un accidente de trabajo en el que medió culpa patronal, descontar las sumas percibidas por las víctimas a título de pensión de sobrevivientes que otorga la entidad que cubre los riesgos laborales?
<b>Consideraciones de la Corte:</b>



**Resulta evidente que el fundamento esencial de la sentencia, que el cargo no controvierte, fue el de haber considerado imposible realizar descuentos o deducciones a la indemnización de perjuicios a cargo de los demandados por no poderse establecer de manera concreta, en los términos del dictamen pericial, los valores efectivos pagados por el ISS a los causahabientes del trabajador fallecido. Esa sustentación fáctica y probatoria del fallo no podía acusarse por la vía directa de violación de la ley que eligieron los recurrentes.**

Aunque la deficiencia técnica anotada impone a la Corte la desestimación del cargo, es pertinente advertir **que no encuentra la Sala en los argumentos expuestos por la censura razón alguna que justifique la variación de la jurisprudencia adoptada en la sentencia de Sala Plena de Casación Laboral del 12 de noviembre de 1.993.**

**En primer término, no dijo esa sentencia que el trabajador o sus causahabientes debieran recibir doble indemnización por el daño derivado del accidente ocasionado por culpa del empleador. Lo que allí se precisó fue que el artículo 83 del Acuerdo 155 habilita al Instituto de Seguros Sociales --y no al empleador-- "para obtener la devolución de lo que pague por concepto de las prestaciones que cubren los perjuicios derivados de la responsabilidad objetiva del patrono en la producción del accidente o la enfermedad profesional". La Corte partió entonces del supuesto de que nadie puede asegurar su propia culpa y que en tal circunstancia el ISS no asumía el riesgo de un daño producido a su afiliado por negligencia del empleador, pues a lo único que estaba obligado el Seguro era a reconocer las indemnizaciones previstas en sus reglamentos, derivadas de la responsabilidad objetiva.**

(...)

La circunstancia de que la Corte haya considerado que, según lo dispuesto por el artículo 83 del Acuerdo 155, **era el ISS el único habilitado para obtener el descuento de las prestaciones que hubiese pagado de conformidad con sus reglamentos en el caso de accidente ocurrido por culpa del empleador, no es fundamento para deducir la inequidad que supone la censura.** Si lo sería, en cambio, que el empleador negligente obtuviera el beneficio de deducir de la indemnización a su cargo lo pagado por el ISS, inequidad que llegaría al extremo de lo inconcebible si pudiera aceptarse, como lo pretenden en este caso los recurrentes, que de la suma de \$8.246.448.00 a que fueron condenados por los perjuicios materiales se "descontara" la cantidad de \$16.716.410.00 que debe reconocer el ISS por las prestaciones previstas en sus reglamentos.

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Art. 83 Acuerdo 155 de 1963, Art. 216 CST, jurisprudencia

**Decisión:**

No Casa

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia de la Sala Plena de Casación Laboral de 12 de noviembre de 1.993.  
Sentencia de 31 de mayo de 1.994, Rad. 6569



## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CSJ-L Sentencia del 7 de mayo de 1997 M.P. Rafael Méndez Arango Rad. 9389
<b>Corporación:</b> Corte Suprema de Justicia- Sala de Casación Laboral <b>Número de sentencia o radicación:</b> 9389 <b>Fecha:</b> 7 de mayo de 1997 <b>Magistrado Ponente:</b> Rafael Méndez Arango
<b>Hechos relevantes:</b>  El proceso fue promovido para que se declarara a la Empresa Textiles Rionegro y Cia Ltda. culpable del accidente de trabajo que sufrió Duque Martínez el 3 de mayo de 1992 y que le dejó como secuela la pérdida de la capacidad funcional de la mano derecha y de la flexación del brazo, lo que dijo ocurrió cuando el supervisor le ordenó que operara la máquina mercerizadora sin que hubiese recibido inducción ni entrenamientos previos y a pesar de tratarse de una máquina totalmente diferente a la que normalmente operaba.  El vínculo laboral entre el demandante y la empresa comenzó el 21 de septiembre de 1987, y allí seguía trabajando el empleado para el momento de la demanda.  La ARL le paga una pensión de invalidez correspondiente al salario mínimo legal mensual vigente.
<b>Primera Instancia:</b>  El Juzgado Laboral del Circuito de Rionegro, por sentencia de 3 de mayo de 1996 condenó a la demandada a pagar al demandante la indemnización total y ordinaria de perjuicios derivada del accidente de trabajo, que en su modalidad de lucro cesante se cause a partir de la fecha de terminación del contrato de trabajo por cualquier causa distinta al reconocimiento de la pensión plena de jubilación o de la pensión de vejez reconocida por el Instituto de los Seguros Sociales I.S.S., y \$500.000,00 a título de perjuicios morales. Condenó a la demandada a pagar parte de las costas.
<b>Segunda Instancia:</b>  El Tribunal confirmó la decisión de su inferior, estableciendo en el fallo que la indemnización plena de perjuicios debía ser real y objetiva, y que era diferente a la que pudiera otorgar el Instituto de Seguros Sociales (cita sentencia del 31 de mayo de 1994).  Señala que no puede entenderse que al ejercitarse la acción de responsabilidad común prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, habiéndose recibido del seguro social las prestaciones del riesgo profesional, se demande por ello una doble reparación, dado que las prestaciones que reconoce el Instituto de Seguros Sociales no compensan perjuicios realmente producidos como sí ocurre con la indemnización común del artículo 216 citado, que busca resarcir la totalidad del daño sufrido.

### Problema Jurídico:

¿Está facultado el empleador que es condenado a indemnizar los perjuicios causados como consecuencia de un accidente de trabajo en que medió culpa patronal para descontar las sumas de dinero que por concepto de pensión reconozca la ARL?

### Consideraciones de la Corte:

*El tenor literal del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, explícitamente, autoriza al patrono culpable de un accidente de trabajo que es obligado a la indemnización total y ordinaria de perjuicios, para que del monto de ella descuente "el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo".*

*Quiere decir ello que si se trata de darle cabal cumplimiento a lo literalmente dispuesto en el artículo 216, el patrono que por su culpa ha dado lugar a un accidente de trabajo **sólo puede descontar las prestaciones en dinero previstas en el mismo Código Sustantivo del Trabajo que él haya pagado al trabajador a quien por virtud de la sentencia judicial se ve obligado a resarcir la totalidad de los perjuicios que haya podido causarle.***

(...)

*Y sin necesidad de controvertir las interesantes disquisiciones gramaticales que hace la impugnante respecto de la palabra "pagadas", y si en la oración gramatical en la que se expresa la norma el participio "pagadas" cumple o no la función de verbo, o si equivale o no a un pretérito sinónimo de las locuciones "se hayan pagado" o "hayan sido pagadas", por ser sabido que no siempre la expresión lingüística de la norma coincide con su significación normativa, considera la Corte que en los ingeniosos argumentos que trae el cargo no hay ninguno que obligue a tener por equivocado el vigente criterio jurisprudencial, conforme al **cual el empleador no está legitimado para deducir del monto de la indemnización total y ordinaria por perjuicios las prestaciones que el trabajador accidentado reciba del Instituto de Seguros Sociales.***

*Por tal razón debe hoy reiterar la Sala que el **Instituto de Seguros Sociales no ha asumido el riesgo del daño que al trabajador le sobrevenga por causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional en cuya causación exista culpa suficientemente comprobada del patrono.***

*Interesa igualmente destacar que el poder normativo de los reglamentos del Instituto de Seguros Sociales está limitado por las finalidades propias de su objeto social como entidad aseguradora de los riesgos originados en la prestación de servicios subordinados, lo que restringe la potestad reguladora de tales riesgos que le confiere la ley, la que no le ha extendido dicha atribución a determinar la consecuencia de la culpa del patrono en la ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, pues ellas corren a cargo exclusivo de los empleadores culpables de riesgos profesionales.*

*Dentro de la competencia que le reconoce la ley para subrogar al patrono en la asunción de riesgos laborales, lo que puede hacer el Instituto de Seguros Sociales,*

mediante sus reglamentos, es determinar "las prestaciones, servicios sociales o medidas de seguridad social" que deban ser amparados a los directos beneficiarios de los seguros sociales o de quienes ellos derivan su derecho, tal como lo prescribe el artículo 7º del Decreto ley 433 de 1971; pero no está legalmente facultado para injerirse en la regulación de las indemnizaciones originadas en enfermedades profesionales o accidentes de trabajo sucedidos por la culpa suficientemente comprobada del patrono, y mucho menos para aminorar la carga de quien, por mandarlo así el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, está obligado a pagar "la indemnización total y ordinaria por perjuicios". **Indemnización plena que es de cargo exclusivo del empleador como responsable por culpa del accidente o de la enfermedad, y que dejaría de tener este carácter si fuera compartida en su monto por la entidad de previsión social que lo subroga únicamente en el riesgo propio de la denominada "responsabilidad objetiva".**

Estos argumentos que aquí se expresan fueron ya anticipados por los magistrados que en su momento aclararon el voto al dictarse las sentencias de la Sala Plena de Casación Laboral de 12 de noviembre de 1993 (G.J., Tomo CCXXVI, págs. 595 a 607) y de 17 de octubre de 1995 (Rad. 7716) de la extinguida Sección Segunda, y ellos obligan a considerar que si acaso se aceptara que el sentido del artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 fuera el que propugna por la recurrente, resultaría forzoso concluir en su inaplicabilidad, al igual que el artículo 1º del Decreto 3170 de 1964 que lo aprueba, en cuanto permitiría descontar de la indemnización total y ordinaria por perjuicios "el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el Instituto de acuerdo con las normas de este reglamento".

(...)

Conviene reiterar que el Instituto de Seguros Sociales reconoce prestaciones para cuyo cálculo toma en cuenta variables como el salario, los años de servicio, el número de cotizaciones, la edad del trabajador, su vida probable, etcétera, y que dichas prestaciones no tienen por finalidad resarcir los perjuicios realmente producidos, a diferencia de lo que sucede con la indemnización a la que se refiere el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que busca reparar la totalidad del daño ocasionado por el patrono culpable al trabajador que sufre el accidente o padece la enfermedad.

Como se dijo en la sentencia de 31 de mayo de 1994 (Rad. 6569), que es el fallo contra el que principalmente endereza sus críticas la recurrente, es posible que en la indemnización tarifada "exista, hasta cierto punto, una desvinculación entre los hechos concretos y la cifra pagada, que puede ser igual, menor o superior a los perjuicios realmente producidos".

Sin embargo, **resulta conveniente anotar que de la misma manera que quien dentro del concepto de la responsabilidad común causa un daño a otro no puede pretender disminuir el monto de la indemnización que deba pagarle argumentando que la víctima se ha beneficiado de un seguro, tomado por el mismo accidentado, en virtud del cual recibe una determinada suma de dinero que le paga la compañía aseguradora, tampoco un patrono, de la indemnización total y ordinaria de perjuicios que debe pagar al trabajador a quien ha dañado por razón de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional por culpa suya, puede pretender descontar lo pagado por el Instituto de Seguros Sociales en virtud del cubrimiento de un riesgo que no ha sido asegurado, como es el del daño que se causa por su culpa. Dicha entidad de previsión social ampara el riesgo del daño propio de la responsabilidad objetiva y no el que se deriva de la**

**culpa del patrono.**

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Art. 216 CST, Jurisprudencia.

**Decisión:**

No casa.

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia de la Sala Plena de Casación Laboral de 12 de noviembre de 1993

Sentencia de 17 de octubre de 1995 (Rad. 7716)

Sentencia de 31 de mayo de 1994 (Rad. 6569)

## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CSJ-L Sentencia del 8 de octubre de 1997. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. Rad. 9817.
<b>Corporación:</b> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral <b>Número de sentencia o radicación:</b> 9817 <b>Fecha:</b> 8 de octubre de 1997 <b>Magistrado Ponente:</b> Jorge Iván Palacio Palacio
<b>Hechos relevantes:</b>  El señor Luis Carlos Rodríguez Flórez, en su propio nombre y en representación de sus hijos menores Juan Carlos y Camilo Andrés Rodríguez Quintero, demandó a AVIANCA para que se declarara la existencia de un contrato laboral que terminó por la muerte del trabajador fruto de un accidente laboral, y para que se condenara a pagarle la pensión de sobrevivientes a la que hubieran tenido derecho si el empleador hubiera cumplido con su obligación de cotizar a la seguridad social.  Avianca se defiende señalando que, en caso de una sentencia condenatoria, tendría derecho a que del valor de las mesadas de la pensión de sobrevivientes se deduzca lo que el Instituto de Seguros Sociales le hubiera reconocido a la parte demandante por concepto de indemnización substitutiva de la pensión de sobrevivientes, derecho este que la parte demandante dejó prescribir.  El empleador fue obligado previamente a pagar la indemnización de perjuicios del art. 216 del CST
<b>Primera Instancia:</b>  El Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bucaramanga, mediante fallo del 14 de diciembre de 1995, absolvió a AVIANCA de todos los cargos formulados en su contra e impuso las costas al demandante.
<b>Segunda Instancia:</b>  La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga confirmó la sentencia de primer grado.
<b>Problema Jurídico:</b>  ¿Debe el empleador que no cotiza a la seguridad social pagar la pensión de sobreviviente que ésta hubiese otorgado a los familiares del trabajador de presentarse la muerte en un accidente de trabajo? ¿Puede el empleador descontar los pagos que eventualmente hubiera podido hacer la entidad de seguridad social, tales como la pensión substitutiva, de la indemnización a su cargo? ¿Puede el empleador descontar los pagos que hubiera hecho anteriormente a las víctimas por motivo de la culpa patronal en que incurrió?

**Consideraciones de la Corte:**

*El fallo censurado parte de que la causante, Cecilia Quintero Ramírez, falleció en accidente de trabajo el 17 de marzo de 1988, cuando iba a cumplir diez años al servicio de la demandada pues había ingresado el 4 de abril de 1978. **También que los aquí demandantes acudieron a la justicia laboral para obtener la indemnización ordinaria y total que consagra el artículo 216 del C.S.T. porque el accidente le era imputable a la empleadora y fue así como lograron el resarcimiento por todos los perjuicios morales y materiales. Además que, por omisión de la demandada, la causante no estaba afiliada al Instituto de Seguros Sociales en el momento de su deceso, motivo por el cual esa entidad “no asume el pago de la pensión de sobrevivientes”;** y que “todas las obligaciones prestacionales se trasladan al empleador cuando el trabajador no está afiliado al INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES”.*

*En el sub-exámine, de haber permanecido afiliada la señora CECILIA QUINTERO DE RAMIREZ al Instituto de Seguros Sociales, ésta entidad, tal y como ella misma lo certifica a folio 99 y 100, habría reconocido a los demandantes la pensión de sobrevivientes prevista en el capítulo III del Acuerdo 224 de 1966, al cual remite el artículo 1° del Acuerdo 010 de 1982, en concordancia con el artículo 5° del citado Acuerdo 224 de 1966, éste último modificado por el artículo 1° del Acuerdo 019 de 1983, disposiciones según las cuales hay derecho a la pensión de sobrevivientes no sólo cuando el asegurado fallecido hubiere estado disfrutando de la pensión (invalidez o vejez) según los reglamentos del ISS, sino también cuando tenga acreditadas 150 semanas de cotización para los riesgos de invalidez, vejez y muerte, dentro de los seis años anteriores a la muerte ó 300 semanas en cualquier época. En este caso, la causante para la época de su fallecimiento, en los 9 años, 11 meses y 14 días que estuvo vinculada a Avianca, habría alcanzado a cotizar más de 500 semanas al sistema de seguridad social.*

**La prestación de que se trata es completamente autónoma e independiente de la indemnización resarcitoria que, por mandato judicial, recibieron los demandantes. Tal indemnización se originó en la culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo, mientras que ésta pensión obedece a la subrogación objetiva del riesgo por muerte, que habría reconocido el ISS a los demandantes si la causante hubiese estado asegurada, sin consideración al resarcimiento derivado de la culpa del empleador.**

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Acuerdo 224 de 1966, al cual remite el artículo 1° del Acuerdo 010 de 1982, en concordancia con el artículo 5° del citado Acuerdo 224 de 1966 (modificado por el artículo 1° del Acuerdo 019 de 1983).

**Decisión:**

Casa

**Jurisprudencia citada:** N/A

## Ficha de Jurisprudencia

### Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil

#### Identificación:

CSJ-L Sentencia del 12 de junio de 1998. M.P. Francisco Escobar Henríquez. Rad. 10643.

**Corporación:** Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral

**Número de sentencia o radicación:** 10643

**Fecha:** 12 de junio de 1998

**Magistrado Ponente:** Francisco Escobar Henríquez

#### Hechos relevantes:

JUAN GUILLERMO MACIAS HERRERA inició el juicio para que CARLOS MARIO GIRALDO GOMEZ y la sociedad INVERSIONES MEDELLIN S.A., fueran condenados solidariamente a pagarle la pensión de invalidez permanente parcial, la cesantía y sus intereses doblados, la indemnización prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, la indemnización moratoria prevista en el artículo 65 del C.S. del T. y la indemnización por despido injusto.

El demandante prestó sus servicios al señor CARLOS MARIO GIRALDO, en las instalaciones de INVERSIONES MEDELLIN S.A, entre el 16 de octubre de 1993 y el 2 de marzo de 1994. El accionante dejó de laborar por disposición de los demandados desde la última fecha anotada, debido a un accidente de trabajo que le ocasionó graves secuelas y originó la terminación del contrato de obra celebrado entre GIRALDO GOMEZ e INVERSIONES MEDELLIN S.A.

El trabajador no fue afiliado al Instituto de Seguros Sociales y en consecuencia los demandados están obligados a pagarle la pensión por incapacidad permanente parcial que hubiere reconocido dicha entidad de no haber mediado esa omisión, toda vez que la contingencia laboral ocurrida al actor le representó una pérdida definitiva de su capacidad laboral de un 38.25%.

Fue determinado judicialmente en un proceso anterior que los demandados son solidariamente responsables de las obligaciones derivadas de la relación laboral invocada.

La sociedad demandada resaltó que el accionante ya recibió la indemnización plena de perjuicios. Además, propuso la excepción de pago en lo que corresponde al accidente de trabajo.

#### Primera Instancia:

Conoció del proceso el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Medellín, quién a través de la sentencia calendada el 30 de mayo de 1997, condenó solidariamente a INVERSIONES



MEDELLIN S.A. y al señor CARLOS MARIO GIRALDO GOMEZ a pagar al demandante la pensión mensual de invalidez a partir del 2 de marzo de 1994, junto con las mesadas pensionales de ley; así como a las sumas de \$166.011.00 por auxilio de cesantía, \$53.124.00 por intereses a la cesantía, \$60.120.00 por la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 y a la cantidad de \$986.000.00 por indemnización moratoria de conformidad con el artículo 65 del C.S. del T.

#### **Segunda Instancia:**

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en sentencia del 17 de octubre de 1997, revocó la decisión de primer grado en cuanto condenó a los demandados a pagar la pensión de invalidez y la confirmó en lo demás.

#### **Problema Jurídico:**

¿Es procedente el pago de la pensión de invalidez al demandante aun si este ya fue previamente indemnizado por parte del empleador por motivo del accidente de trabajo?

#### **Consideraciones de la Corte:**

*La apreciación del Tribunal se sustenta fundamentalmente en la consideración jurídica de que hay una incompatibilidad legal excluyente, entre la indemnización plena de perjuicios que se reconoce como consecuencia del siniestro profesional acaecido por culpa del empleador y las pretensiones en dinero a cargo de la seguridad social que se deriven de igual hecho, ya que en los términos del ad-quem "... si el daño (...) ocurre por un hecho culposo del empleador, aquí el sujeto deudor de la indemnización cambia, pues ya no será la seguridad social la responsable de resarcir ese daño, sino el empleador...". El fallador desechó que el demandante como consecuencia del accidente de trabajo que sufrió por culpa patronal, pudiera legalmente recibir al mismo tiempo las prestaciones de Seguridad Social, como la pensión reclamada, y la indemnización plena de perjuicios del artículo 216 del C.S.T.*

*Con todo interesa informar al Tribunal que la posición de la Sala sobre este tema quedó plasmada en fallo del 13 de mayo de 1997 radicado bajo el número 9389.*

#### **Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia.

#### **Decisión:**

No casa ya que el cargo no prospera pues la vía indirecta escogida por el recurrente no era la apropiada para atacar la consideración del Tribunal.

#### **Jurisprudencia citada:**

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 13 de mayo de 1997, Rad. 9389,



## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CSJ-L Sentencia del 9 de noviembre de 2000. M.P. Germán Valdés Sánchez. Rad. 31646
<b>Corporación:</b> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral  <b>Número de sentencia o radicación:</b> 31646  <b>Fecha:</b> 9 de noviembre de 2000  <b>Magistrado Ponente:</b> Germán Valdés Sánchez
<b>Hechos relevantes:</b>  Alexander Quintero Molina, Raquel Quintero Molina y María Stella Molina de Quintero demandaron al Ingenio La Cabaña S.A. para que fuera declarado laboralmente responsable de la muerte en accidente de trabajo de Luis Enrique Quintero Molina y para que, en consecuencia, se condenara a la empresa a pagarles la indemnización total y ordinaria de perjuicios materiales y morales.
<b>Primera Instancia:</b>  Conoció del proceso el Juzgado Quinto Laboral de Cali, mediante 11 de noviembre de 1999, absolvió a la sociedad demandada.
<b>Segunda Instancia:</b>  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, en sentencia del 3 de mayo de 2000, revocó la del Juzgado. En su lugar condenó a la empresa a pagar a Alexander Quintero Molina y a Raquel Quintero Molina \$4.000.000.00 para cada uno, por perjuicios morales, y a María Stella Molina de Quintero \$50.579.084.00 por perjuicios morales y materiales.
<b>Problema Jurídico:</b>  ¿Es posible que las prestaciones que reconoció el ISS a los demandantes afecten el lucro cesante que ha sido judicialmente reconocido?
<b>Consideraciones de la Corte:</b>  <i>La reseñada sentencia de la Corte (por el Tribunal – sentencia del 12 de noviembre de 1993) corresponde a un hecho ocurrido en el año 1992, y por lo mismo, anterior a la vigencia de la ley 100 de 1993 y a la de los decretos señalados en la proposición jurídica. Por ello es admisible el examen de fondo que propone.</i>  <i>El artículo 216 del CST dice que, cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está</i>

obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en el capítulo que la contiene.

**Hasta el año 1993, y en número plural de providencias, la Corte sostuvo que el patrono sí podía descontar del valor de la indemnización ordinaria de perjuicios las prestaciones pagadas por el Seguro Social. Pero la Corte en Sala Plena (integradas las dos Secciones que conformaban la Sala Laboral), decidió, con la sentencia del 12 de noviembre de 1993, que el Seguro Social no había asumido, para entonces, el riesgo del daño que al trabajador le sobreviniera por causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional imputable a culpa suficientemente comprobada del patrono.**

Ahora, en este recurso, la sociedad recurrente sostiene que la interpretación del artículo 216 del CST, puesta en relación con el nuevo ordenamiento de la ley 100 de 1993 y con los decretos de la proposición jurídica, debe ser esta: que el empleador culpable del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional sí puede deducir las prestaciones económicas que haya pagado el Seguro Social al trabajador o a sus causahabientes de lo que adeude por su propia responsabilidad ordinaria de perjuicios.

Se procede a examinar esa argumentación de la recurrente, en este orden: 1. El alcance de la sentencia de la Corte que citó el Tribunal; 2. El alcance de la normatividad que acusó el cargo en casación. 3. La relación de los dos temas anteriores, en orden a precisar si el Tribunal transgredió o no la ley sustancial; o mejor, para determinar el alcance del artículo 216 del CST.

La sentencia de la Corte del 8 de Mayo de 1997 que invocó el Tribunal, destacó que los reglamentos del Seguro Social vigentes para la época de los hechos analizados, y concretamente el artículo 83 del acuerdo 155 de 1963, no autorizaron al patrono a descontar de la indemnización ordinaria las sumas que el Seguro Social reconociera al trabajador o a sus derecho habientes, por prestaciones en dinero.

El artículo 83 del acuerdo 155 de 1963 del Seguro, que fuera aprobado por el decreto 3170 de 1964, y para cuya expedición invocó el Presidente de la República los artículos 9° de la ley 90 de 1946 y 5° del decreto 1695 de 1960, disponía:

“El otorgamiento de las prestaciones establecidas por el presente reglamento por parte del Instituto exonera al patrono de toda otra indemnización según el Código Sustantivo del Trabajo o según el derecho común por causa del mismo accidente o enfermedad profesional. Pero si el riesgo se hubiere producido por acto intencional o por negligencia o culpa del patrono procederá a demandar el pago de esta indemnización, la que quedará a su favor hasta el monto calculado de las prestaciones que el Instituto acordare por el accidente o enfermedad, debiendo entregar a los beneficiarios el saldo, si lo hubiere.

*“Lo dispuesto en el inciso anterior no es óbice para que la víctima o sus causahabientes instauren las acciones pertinentes de derecho común para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el Instituto de acuerdo con las normas de este reglamento”.*

*Pese a la equívoca redacción de la norma transcrita, ella no permitía la tesis de la sociedad recurrente, que desde luego se funda en otro sistema legal. Pero la Corte despejó el equívoco en la sentencia del 8 de mayo de 1997. Es importar recordar, en resumen, las razones que tuvo en cuenta para fundar su tesis: 1) **El poder normativo de los reglamentos del Seguro está limitado por su objeto social: es entidad aseguradora de los riesgos originados en la prestación de servicios subordinados; la ley no le dio al Seguro la atribución de determinar las consecuencias de la culpa del patrono en la ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional**, pues esas consecuencias corren a cargo exclusivo del empleador culpable. 2) **La competencia que le reconoce la ley al Seguro para subrogar al patrono en la asunción de riesgos laborales está dentro del ámbito de las prestaciones, de los servicios sociales o de las medidas de seguridad social que deben amparar a sus beneficiarios, como lo prescribe el artículo 7º del decreto ley 433 de 1971; pero el Seguro no está legalmente facultado para regular las indemnizaciones originadas en enfermedades profesionales o accidentes de trabajo que ocurran por la culpa suficientemente comprobada del patrono**. El Seguro tampoco está legalmente facultado para aminorar la carga patrimonial del patrono en esa materia, por lo cual, asume toda la responsabilidad ordinaria por mandato del artículo 216 del CST; y, por lo mismo, **el Seguro subroga al patrono únicamente en el riesgo que da lugar a la denominada responsabilidad objetiva**. 3) Si, por su equívoca redacción, el artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 consagrara el derecho del empleador culpable del accidente para descontar del monto de la indemnización ordinaria lo pagado por el Seguro por prestaciones en dinero, la norma sería inaplicable, al igual que el artículo 1º del decreto 3170 de 1964 que lo aprobó. 4) **El Seguro reconoce prestaciones para cuyo cálculo toma en cuenta variables como el salario, los años de servicios, el número de cotizaciones, la edad del trabajador, la vida probable, etc. En cambio, no toma en cuenta los perjuicios realmente producidos, lo cual marca una diferencia entre la indemnización a que se refiere el artículo 216 del CST, que busca reparar la totalidad del daño ocasionado por el patrono culpable, con la actividad aseguradora del Instituto**. 5) **No es cierto que el trabajador se beneficie doblemente (con la indemnización plena y con las prestaciones económicas del Seguro), puesto que el seguro ha sido tomado por el mismo accidentado, de modo que el patrono no puede restar de la indemnización total y ordinaria de perjuicios lo pagado por el Seguro Social en virtud del cubrimiento de un riesgo que no ha sido asegurado por él.***

Ahora, procede el examen del régimen de la ley 100 de 1993, empezando por su reglamentación, como lo propone el cargo:

**El decreto 1771 de 1994 es reglamentario del 1295 del mismo año** (estatuto con alcance legal). Su artículo 12 dispone:

**“Subrogación.** La entidad administradora de riesgos profesionales podrá repetir, con sujeción a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contingencia profesional, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del tercero.

“Lo dispuesto en el inciso anterior no excluye que la víctima, o sus causahabientes, instauren las acciones pertinentes para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales”.

Es una redacción similar a la de su antecesor, el 83 del acuerdo 155 de 1963, de manera que por este solo aspecto, si el artículo 12 del decreto 1771 de 1994 fuera puesto en relación con el 216 del CST, no sería útil para dar por sentada la posibilidad de descontar las prestaciones económicas del Seguro Social de la indemnización ordinaria de perjuicios.

Ninguna de las normas cuya acusación plantea el cargo permite concluir en la tesis de la censura.

En efecto:

El artículo 139-11 de la ley 100 de 1993 confirió al Presidente de la República precisas facultades extraordinarias pro tempore para “Dictar las normas necesarias para organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso, la cotización continuará a cargo de los empleadores”; luego nada indica que en esta atribución de facultades legales, el Presidente de la República pudiera regular las consecuencias de la culpa patronal del artículo 216 del CST.

El decreto ley 1295 de 1994, según su encabezamiento, determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. El artículo 13 se limita a señalar quiénes son los afiliados al dicho sistema; el 34 consagra el derecho a las prestaciones; el 49 establece que, en caso de muerte del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales, como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y sus reglamentos; pero **esa norma nada dice sobre la responsabilidad por culpa patronal en el accidente de trabajo o en la enfermedad profesional.** El artículo 50 se limita a fijar el monto de la pensión de sobrevivientes y el 53 a precisar las condiciones de la devolución de saldos y de la indemnización sustitutiva

*cuando ocurre la muerte del asegurado. El artículo 78 dice que el Instituto de Seguros Sociales continuará administrando los riesgos profesionales de conformidad con sus reglamentos, lo cual no le da la razón a la sociedad recurrente. Pero sí conviene precisar que la tesis de los opositores sobre esta norma no es acertada, puesto que ella no remite a los reglamentos anteriores de una manera incondicional sino subordinada a lo dispuesto en el decreto 1265 que se estudia, puesto que la norma dice que los reglamentos del Seguro Social "... deberán ajustarse a lo dispuesto en este decreto ...". Y el 97 fija la vigencia del sistema general de riesgos profesionales.*

**Como ninguna de las normas acusadas, puestas en relación con el artículo 216 del CST, permite concluir que haya variado el sistema legal que informó la jurisprudencia de la Corte, la conclusión es que sigue vigente la interpretación que allí se consignó.**

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia.

**Decisión:**

No casa

**Jurisprudencia citada:**

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 7 (8) de mayo de 1997 M.P. Rafael Méndez Arango Rad. 9389.

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CSJ-L Sentencia del 6 de junio del 2002. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 17251
<b>Corporación:</b> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral <b>Número de sentencia o radicación:</b> 17251 <b>Fecha:</b> 6 de junio del 2002 <b>Magistrado Ponente:</b> Isaura Vargas Díaz
<b>Hechos relevantes:</b>  ARNULFO DE JESÚS CARMONA PEREZ instauró demanda en contra de la COMERCIALIZADORA SAN FERNANDO LIMITADA y MONTOYA DE BETANCUR Y CIA S. en C y MONTOYA DE BETANCUR Y CIA S.C.S. (sustituto patronal), para que se les condenara “solidariamente al pago de la indemnización plena de perjuicios contemplada en el Art. 216 del C.S.T.” (folio 3), a consecuencia del accidente de trabajo que padeció “mientras prestaba sus servicios personales en la explotación de carbón que realizan en el sector de Piedecuesta del Municipio de Amagá” (desprendimiento de una peña del techo del socavón que causó lesiones en la columna vertebral y extremidades inferiores).  Se encuentra tramitando el reconocimiento y pago de la pensión de invalidez por parte del I.S.S.  La culpa habría consistido en que el empleador “no le prestó al trabajador las seguridades mínimas que requería para desempeñar su labor sin riesgo para su salud”
<b>Primera Instancia:</b>  El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín absolvió a los demandados.
<b>Segunda Instancia:</b>  El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, al desatar el recurso de apelación interpuesto por el demandante, revocó la sentencia y condenó solidariamente a COMERCIALIZADORA SAN FERNANDO LTDA., y a MONTOYA DE BETANCUR Y CIA S. en C., a pagarle a ARNULFO DE JESÚS CARMONA PEREZ la suma de \$66.921.806,00, por concepto de indemnización total y ordinaria de perjuicios materiales y morales por accidente de trabajo.
<b>Problema Jurídico:</b>  ¿Es posible que el empleador obligado a indemnizar los perjuicios causados en el marco de un accidente de trabajo descuente de la indemnización las prestaciones sociales que haya reconocido la ARL como consecuencia del mismo accidente?
<b>Consideraciones de la Corte:</b>

## **Recurso:**

*En la demanda con la que interpuso el recurso, la parte demandada pretende que la Corte case parcialmente la sentencia del Tribunal “en cuanto no dispuso que de las condenas impuestas a los demandados se debía descontar el valor presente de las prestaciones en dinero pagadas por el Seguro Social a raíz del accidente de trabajo de cuya indemnización plena se trata (...)*

*El recurrente con su argumentación pretende en síntesis demostrar que el Tribunal se equivocó al no tener en cuenta, que las normas denunciadas, “mandan que del monto de las indemnizaciones plenas definidas a cargo de los empleadores se descuenta “...el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales”*

*Apoyándose en sentencia de la Sala Civil, sostiene el recurrente que si bien se debe resarcir plenamente el daño causado culposamente, ello no significa que se haga, “acumulando ingresos reparadores de distintas fuentes” (folio 11), ante todo, por la acción de repetición que existe de la ARP contra los empleadores.*

*Para el recurrente la verdadera exégesis, en cuanto a deducir de la indemnización plena a cargo del empleador el monto de las prestaciones sociales satisfechas por la seguridad social, es la asentada por la Sección Primera de esta Sala de Casación en la sentencia 5480 del 10 de marzo de 1993, no la actual, la cual considera equivocada, toda vez que, el artículo 12 del Decreto Reglamentario 1771 de 1994 claramente dispone, que “de las indemnizaciones plenas a que sean condenados los terceros deben restarse las prestaciones en dinero reconocidas por la ARP como consecuencia del mismo accidente”*

*Sustenta el recurrente que el accidente produce dos víctimas: el trabajador a quien se infiere el daño y la ARP, por las erogaciones a consecuencia del daño inferido al afiliado; que la ARP además, tiene acción de repetición contra el empleador responsable por la parte sufragada por ella; por lo que sería justo, que de la acción reparadora obtenida por el trabajador, “se descuenta lo que haya recibido o vaya a recibir de la ARP” (folio 12); y así se evita, como pretende la norma, cualquier injusticia posible, puesto que “El culpable del perjuicio, solamente resulta pagando el valor del daño que realmente causó: le da al trabajador lo que le haya faltado recibir de la ARP para quedar completamente indemne, y queda como deudor de la ARP por la parte que obtuvo como descuento en el juicio el trabajador” (folios 12 y 13), quedando a su vez en cabeza de la ARP, la “acción para reclamarle al responsable del accidente la parte de la indemnización plena que fue descontada en el juicio” (folio 13).*

**Sostiene que con la nueva jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral, se presentan inequidades, por cuanto el trabajador obtiene “un doble beneficio por un solo perjuicio” (folio 13), al recibir de la ARP los pagos que por mandato legal le corresponden, además de la indemnización plena por parte del empleador culpable del accidente; considerando que ello a la postre genera injusticia, por cuanto las ARP, de acuerdo con el artículo 12 cuentan con la acción de repetición; y el trabajador con el doble pago, obtendría un enriquecimiento sin causa a costa del empleador y de la ARP.**

**Señala que contrario a como lo entendiera la Corte en su tesis expuesta en sentencia del 12 de noviembre de 1993, la ley no le da a la ARP “acción contra su**



**afiliado para reclamarle a él el exceso que recibe ni la autoriza para descontárselo de los pagos que deba seguirle haciendo” (folio 13); pues de la lectura detenida del artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 y el 12 del Decreto 1771 de 1994, aparece claramente que “no se está autorizando a la entidad de seguridad social a descontarle a los beneficiarios suma alguna del monto de sus prestaciones, con causa de haber recibido la indemnización plena de perjuicios del culpable de ellos” (ibídem).**

Se muestra en desacuerdo con sentencias que consideran improcedente el descuento, aún por la falta de comparecencia en el juicio de la entidad de seguridad social beneficiaria de la acción de repetición y por lo mismo sostiene, que “la única manera de mantener el equilibrio económico necesario para que haya justicia, es aplicar con toda exactitud el artículo 12, descontando el valor de las prestaciones en dinero a cargo de la ARP del monto de la indemnización plena que se falle a favor del perjudicado” (folio 14); que al concederla el artículo 12 la ARP la acción de repetición, “sin contar con el afiliado que padeció el percance, puede hacerlo antes o después del pleito de éste y sin necesidad de concurrir con el” (ibídem).

En su reparo sostiene que de comprenderse el alcance del artículo 72 de la Ley 90 de 1946 y el 193 del Código Sustantivo del trabajo, se llegaría a entender que la seguridad social “vino a reemplazar a los patronos como deudores de las prestaciones comunes (léase indemnización tarifada) derivadas de los accidentes de trabajo” (folio 15), considerando que de su texto se extrae sin ninguna duda que “el régimen de las prestaciones comunes sigue existiendo pero con modalidades diferentes” (ibídem); y del 193, que “el Seguro Social (única entidad del momento) reemplaza como deudor de las prestaciones comunes a los empleadores” (ibídem), de tal manera que “las pagará por el tomador del seguro y en su lugar” (ibídem).

Así mismo dice que “el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo no establece ninguna prestación común, simplemente aclara que lo que se pague por prestaciones comunes es deducible de lo que resulte a deber el empleador sujeto a una reparación plena” (folio 15); es decir, que “lo que satisfaga la seguridad social por prestaciones comunes y en lugar del empleador, a quien subroga como deudor, debe tener la misma naturaleza de lo que éste pagaba antes y debe ser descontado en la misma forma, por la sola aplicación de la norma últimamente citada, y con mayor razón, en presencia del artículo 12 del D.R. 1771 de 1994” (ibídem).

Por su parte la oposición refuta el cargo aduciendo que el Tribunal fundó su decisión en el artículo 216 del Código Sustantivo Laboral, “en consecuencia no pudo infringirlo directamente porque ese sub motivo de violación en el recurso extraordinario, comporta rebeldía contra la norma y en este caso, se reitera, el ad quem ni se rebeló, ni dejó de aplicarlo” (folio 24); dice además, que determinar la procedencia del descuento por lo pagado por seguridad social, “comporta la interpretación de la norma que consagra la indemnización total y ordinaria, para determinar si ella permite una hermenéutica acorde con tal descuento” (ibídem); razón por la que considera mal formulada la acusación por infracción directa de las disposiciones enunciadas en el cargo, diciendo igualmente que por el ejercicio de hermenéutica que comporta, “debió denunciar la interpretación errónea del artículo 16 del Código Sustantivo del Trabajo” (folio 24).

Agrega el opositor que tanto el régimen anterior del artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963, como el nuevo del Decreto 1771 de 1994, prevé que las administradoras de riesgos profesionales pueden demandar al empleador, por culpa de quien ocurrió el



accidente o la enfermedad, “pero en manera alguna autoriza el descuento de lo pagado por la seguridad social” (folio 24).

Considera igualmente que **el cargo no está llamado a prosperar, por cuanto la tesis de la Corte, está construida “sobre el supuesto de no asegurabilidad de la culpa por parte del empleador” (folio 25); y aclara que, “la indemnización plena tiene origen, precisamente, en una falta de cuidado del empleador y las prestaciones del régimen tiene(sic) una causa, por así decirlo, objetiva, ya que solo basta demostrar el origen del accidente o al(sic) enfermedad y la merma de capacidad laboral para que se causen las prestaciones que otorga, al paso que en ella se requiere “la culpa suficientemente comprobada del empleador”, así como el nexo causal y los perjuicios padecidos” (folios 24 y 25); cita en su apoyo sentencias de la Corte para sostener que la jurisprudencia de la Sala ha sido abundante en este sentido, e incólume, “sobre el supuesto de que no se descuenta lo pagado por la seguridad social en casos de accidente de trabajo acaecidos por culpa patrona(sic), en el entendido de que la culpa del empleador no es asegurable” (folio 25).**

#### **Consideraciones de la Corte:**

Con la demanda de casación pretende la recurrente demostrar la violación en que incurrió la sentencia del Tribunal “en cuanto no dispuso que de las condenas impuestas a los demandados se debía descontar el valor presente de las prestaciones en dinero pagadas por el Seguro Social a raíz del accidente de trabajo de cuya indemnización plena se trata” (folios 10 y 11); violación que para él tuvo su origen en la “falta de aplicación de los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 12 del Decreto Reglamentario 1771 de 1994” (folio 11); por lo que encamina su argumentación a demostrarlo, tal y como se observa del resumen del cargo con el que sustenta el recurso extraordinario.

(...)

De dispensar las anteriores deficiencias técnicas anotadas, observa la Sala que tanto el artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963, aprobado por el Decreto 3170 de 1964, como el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, consagran identidad de espíritu y regulación en cuanto **conservan la legitimación de la víctima o sus causahabientes de un accidente de trabajo, para reclamar la indemnización total y ordinaria de perjuicios, sin que faculden al empleador culpable del siniestro a efectuar descuentos por prestaciones asumidas ya por el Instituto de Seguros Sociales o la entidad administradora de riesgos profesionales.**

Así las cosas, entendiendo superadas las irregularidades de orden técnico, tampoco hubiera sido posible lograr el quebrantamiento del fallo; pues su imposibilidad proviene, además, de la falta de razones para que esta Sala de Casación decida rectificar la abundante jurisprudencia aplicable al sub exámine, que según lo afirmado por la parte recurrente en casación “es equivocada y debe ser rectificada” (folio 12); por cuanto el desarrollo y cumplimiento del artículo 216 del C.S.T. a la luz de los acuerdos del I.S.S., como del Decreto 1771 de 1994 en vigencia de la Ley 100 de 1993 conserva los mismos lineamientos; razón para que el criterio jurisprudencial conocido y aludido sobre éste tópico, tanto por la recurrente como por la oposición, que hace innecesario transcribirlos, se mantenga.

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Art. 216 CST, Art. 12 dec 1771 de 1994.

**Decisión:**

No Casa

**Jurisprudencia citada:**

N/A

## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CSJ-L Sentencia del 25 de julio del 2002. M.P. José Roberto Herrera Vergara. Rad. 18520
<b>Corporación:</b> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral <b>Número de sentencia o radicación:</b> 18520 <b>Fecha:</b> 25 de julio del 2002 <b>Magistrado Ponente:</b> José Roberto Herrera Vergara
<b>Hechos relevantes:</b>  Aracelly Vinasco González, en su propio nombre y en el de su menor hijo Edwin Johany Cataño Vinasco demandó a la Sociedad Mineros Nacionales S.A. con el fin de obtener indemnización total y ordinaria de perjuicios por el accidente en el que perdió la vida su cónyuge y padre de su hijo, Jaime Humberto Cataño Largo. De la misma manera, que se cancelen las acreencias laborales en beneficio de su esposo.  Se alega que la culpa del empleador consistió en no tener las medidas de seguridad industrial exigidas y no haber recibido inducción y preparación. A lo largo del juicio se discute que si existían las medidas pero no se le exhortó al trabajador sobre la importancia de utilizarlas.  La ARL sufragó a la demandante y su hijo menor una pensión de sobreviviente de origen laboral.
<b>Primera Instancia:</b>  El Juzgado Civil del Circuito de Riosucio, Caldas, declaró que el accidente de trabajo ocurrió por culpa suficientemente comprobada del patrono y condenó a Mineros Nacionales S.A. al pago de la indemnización de perjuicios plena y ordinaria en beneficio de los demandantes y del lucro cesante en las sumas de \$32'498.918,69 y 22'127.753,11 respectivamente, este último valor actualizado. Y por daño moral \$5'000.000,00 para cada uno de los demandantes. Declaró probada la excepción perentoria de inexistencia del daño emergente pero no las demás.
<b>Segunda Instancia:</b>  El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, en sentencia de 29 de noviembre de 2001, confirmó el fallo recurrido.
<b>Problema Jurídico:</b>  ¿Existe la posibilidad de que un empleador condenado a indemnizar los perjuicios derivados del accidente de trabajo en el que medió culpa patronal descuente los valores pagados por el sistema de seguridad social?
<b>Consideraciones de la Corte:</b>

*No incurre el Tribunal en el yerro jurídico que le imputa la censura al no haber descontado del monto de la condena impuesta a la demandada el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el seguro social con ocasión del accidente de trabajo de que aquí se trata, pues lo cierto es que dio el juzgador al artículo 216 del C.S.T. una interpretación que coincide con la acogida por la Corte.*

*Entiende la Corporación que cuando la disposición en cita autoriza al patrono a descontar del monto de la indemnización “el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo”, se refiere única y exclusivamente a las sumas que él haya pagado con anterioridad al trabajador con ocasión del accidente, pero no las prestaciones que haya reconocido el Instituto de Seguros Sociales por ese motivo, el cual no tiene por qué asumir el riesgo del daño que al trabajador le sobrevenga por causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional en cuya causación exista culpa suficientemente comprobada del patrono.*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Art. 216 CST, jurisprudencia

**Decisión:**

No Casa

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia del 9 de noviembre de 2000, radicación 14847. (La cita extensamente).

## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CSJ-L Sentencia del 7 de marzo del 2003. M.P. Isaura Vargas Díaz . Rad. 18515.
<b>Corporación:</b> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral <b>Número de sentencia o radicación:</b> 18515 <b>Fecha:</b> 7 de marzo del 2003 <b>Magistrado Ponente:</b> Isaura Vargas Díaz
<b>Hechos relevantes:</b>  Ana Zoraida Ramírez Hernández, en nombre propio y en representación de sus hijas menores Luisa Fernanda Y Yenni Andrea Cano Ramírez, instauró proceso ordinario laboral contra la sociedad Mineros Nacionales S.A., para que una vez se declarara que su compañero permanente y padre, respectivamente, falleció en un accidente de trabajo el 31 de mayo de 1997 por culpa de la demandada, fuera condenada, entre otros, a pagarles la indemnización total y ordinaria de perjuicios.
<b>Primera Instancia:</b>  Mediante sentencia de 31 de agosto de 2001, el Juzgado Civil del Circuito de Riosucio, declaró que el accidente de trabajo ocurrió por culpa suficientemente comprobada del patrono y condenó a Mineros Nacionales S.A., al pago de la indemnización de perjuicios plena y ordinaria en beneficio de las menores Luisa Fernanda Y Yenni Andrea Cano Ramírez: a cada una, por lucro cesante la suma indexada, desde el 30 de enero de 2001, de \$8'548.764.39 y por daño moral, la suma de \$8'000.000.00; la absolvió de las pretensiones elevadas por la señora Ana Zoraida Ramírez Hernández; declaró probada la excepción de inexistencia de daño emergente.
<b>Segunda Instancia:</b>  El ad Quem confirmó la sentencia del juzgado de conocimiento. Determinó probada la culpa del empleador, pero no la situación de compañera permanente de la demandante estableció:  <i>En cuanto a la excepción que la demandada tituló como 'pago con subrogación total o parcial de la eventual obligación indemnizatoria', a través de la cual pretendía que de la indemnización plena y ordinaria que se le llegara a imponer se descontara el valor de la pensión de sobrevivientes que el Instituto de Seguros Sociales a las demandantes reconoció, sostuvo que si bien la antaño Sección Primera de esta Sala de la Corte se había inclinado por aceptar tal deducción, en sentencia de 10 de marzo de 1993 (Radicación 5480), esa posición se rectificó en sentencia de la Sala de Casación Laboral en pleno de 12 de noviembre del mismo año (Radicación 5668), y se ratificó en sentencia de 9 de noviembre de 2000 (Radicación 14847), la cual transcribió in extenso y dijo acoger concluyendo así que "el medio exceptivo no estaba llamado a prosperar"</i>
<b>Problema Jurídico:</b>

¿Es posible que el empleador condenado a indemnizar plenamente los perjuicios a los familiares de un trabajador fallecido en accidente de trabajo descuente las sumas que haya pagado el ISS a título de pensión de sobrevivientes?

**Consideraciones de la Corte:**

*Como atinadamente lo destaca la réplica, el Tribunal no incurrió en los dislates jurídicos que le endilga la recurrente en el cargo, pues, **la conclusión a la que arribó de no ser posible para el empleador descontar de la indemnización plena y ordinaria prevista en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo el valor de las prestaciones en dinero pagadas por la seguridad social corresponde con lo que de manera profusa y reiterada la jurisprudencia ha considerado al respecto.***

*La anterior tesis, que resuelve los puntos que infructuosamente la recurrente intenta plantear como novedosos, fue recientemente expuesta en sentencia de 25 de julio de 2002 (Radicación 18.520) (...)*

*En decisión de 9 de noviembre de 2000, radicación 14847, (...)*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Art. 216 CST, jurisprudencia

**Decisión:**

No Casa

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia de 25 de julio de 2002 (Radicación 18.520):

Sentencia del 9 de noviembre de 2000, radicación 14847:

## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CSJ-L Sentencia del 8 de agosto del 2003. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 20186
<b>Corporación:</b> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral <b>Número de sentencia o radicación:</b> 20186 <b>Fecha:</b> 8 de agosto del 2003 <b>Magistrado Ponente:</b> Luis Javier Osorio López
<b>Hechos relevantes:</b>  Raúl Gilberto Correa Puerta Y Gloria Del Socorro Urrego Restrepo, obrando en su propio nombre y en nombre y representación de sus menores hijos demandaron a la sociedad Industrial Hullera S.A. con el fin de que fuera condenada a pagarles, entre otros, la indemnización plena de perjuicios consagrada en el art. 216 del C.S. del T.  El 13 de agosto de 1997 el trabajador Raúl Gilberto Correa Puerta sufrió un accidente de trabajo que lo dejó en estado de invalidez.  El ISS le reconoció la pensión de invalidez (alegan los demandantes que con un monto inferior al que debería, porque el trabajador no cotizaba teniendo en cuenta todo el salario base de cotización).
<b>Primera Instancia:</b>  Mediante sentencia de 6 de mayo de 1999, el Juzgado Civil del Circuito de Titiribí, absolvió a la demandada de todas las pretensiones incoadas contra la accionada y declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por activa de Gloria Del Socorro Urrego Restrepo, Gisenia María Y Raul Albeiro Correa Urrego.
<b>Segunda Instancia:</b>  El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia, Sala Laboral, confirmó la sentencia apelada excepto en lo atinente a la absolución de la indemnización plena de perjuicios que revocó para en su lugar condenar a la demandada a pagar la suma de \$37.679.131, 09, por concepto de lucro cesante consolidado y perjuicios morales y le impuso a la demandada las costas en un 20%.  El tribunal determinó:  <i><u>“De las sumas allí tasadas se tendrá en cuenta únicamente el lucro cesante consolidado por la pérdida de la capacidad laboral, ya que <b>el lucro cesante futuro queda inmerso en la pensión que con ocasión de la invalidez se le está reconociendo al demandante a través del Instituto de Seguros Sociales como administradora de Riesgos profesionales, a la que el empleador había trasladado su riesgo en esta clase de accidentes.</b>”</u></i> (resalto y subrayo)
<b>Problema Jurídico:</b>

¿Es jurídicamente acertada la decisión del Tribunal de no conceder indemnización a título de lucro cesante futuro, pues esta se satisface con la pensión de invalidez que otorga la entidad de riesgos profesionales?

**Consideraciones de la Corte:**

*Como primera medida, es dable recordar que con relación a la responsabilidad del empleador frente a los riesgos profesionales, esta Sala en reiteradas ocasiones ha expresado que en su estructura se presentan dos modalidades indemnizatorias que tienen identidad jurídica propias: **la una orientada al reconocimiento de una indemnización, que encuentra su fundamento en la responsabilidad objetiva que la ley estableció a cargo del empleador, sin tener en cuenta la culpa, que está proyectada a reparar el daño físico sufrido por el trabajador como consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional; acudiendo para el resarcimiento del perjuicio a la tarifa legal correspondiente, según la remuneración de la víctima y la secuela sufrida.***

*La otra, esta referida a la indemnización plena de perjuicios, consagrada en el artículo 216 del C.S.T., que obliga al resarcimiento de todos los perjuicios ocasionados con la enfermedad o el accidente en favor del trabajador o de sus causahabientes según el caso; exigiendo perentoriamente a quien se considere beneficiario, la demostración plena de la culpa del empleador en la causación de la desgracia. En dichas modalidades la responsabilidad es contractual, pero en la última se examina con rigor el incumplimiento por parte del empleador de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo y de las disposiciones legales de prestar protección y seguridad a sus subordinados, que implican el deber especial de entregarles los elementos de seguridad necesarios, ubicarlos en locales apropiados y de prevenir cualquier riesgo que pueda perjudicarlos.*

*En esta oportunidad se consideró en el fallo acusado, que por el hecho de que al demandante le hubiese sido reconocida una pensión de invalidez por el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES quedaba excluido del otorgamiento del lucro cesante futuro, al estimar que el monto de la pensión subsumía el valor de aquel.*

*(...)*

*Pues bien, sobre el tema en mención, el cual motivó la incoación del recurso de casación, la Corte se ha referido en varias oportunidades, como por ejemplo en la sentencia del 25 de julio de 2002 radicada con el No. 18520 (...)*

*Posteriormente en casación del 6 de junio de 2002, con Radicación 17251 (...)*

*En igual sentido se pronunció la Sala en sentencia del 7 de marzo de 2003, con Radicación 18515.*

*Dado que la anterior doctrina se acompasa con la tesis expuesta por el recurrente, aparece evidente que el ad-quem interpretó erróneamente el artículo 216 del C.S. del T. lo que hace procedente la casación de la sentencia.*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**



Jurisprudencia, Art. 216 CST.

**Decisión:**

Casa parcialmente la sentencia. Condena por lucro cesante.

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia del 25 de julio de 2002, radicado 18520

Sentencia del 9 de noviembre de 2000, radicado 14847

Sentencia del 6 de junio de 2002, radicado 17251

Sentencia del 7 de marzo de 2003, radicado 18515.

## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CSJ-L Sentencia del 10 de marzo de 2005. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López . Rad. 23656
<b>Corporación:</b> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral  <b>Número de sentencia o radicación:</b> 23656  <b>Fecha:</b> 10 de marzo de 2005  <b>Magistrado Ponente:</b> Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López
<b>Hechos relevantes:</b>  MARTHA LUZ VALLESTEROS GALVÁN, en nombre propio y en representación de sus hijos menores Jonathan y Estefanía Obando Vallesteros y FRANCIA ELENA VALENCIA, en representación del menor Jhon Alexander Obando Valencia, adelantaron sendos procesos contra la sociedad CENTRAL TUMACO S.A. con el fin de obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios económicos por lucro cesante y daño emergente, al igual que los perjuicios morales, ocasionados por la muerte de su compañero permanente, Luis Daniel Obando Ospina.  Obando Ospina trabajó al servicio de la demandada entre el 22 de diciembre de 1995 y el 12 de junio de 1999, fecha en que sufrió un accidente de trabajo que le ocasionó la muerte. El infortunio se produjo cuando Obando se encontraba montando un disco de corte en una cosechadora de caña.  La culpa habría consistido en la falta previsión y descuido del mecánico lubricador, quien avisó al encargado de operar el equipo que podía encender la máquina, sin advertir las riesgosas condiciones en que se encontraba el causante. La empresa incumplió con su obligación de seguridad industrial.  La ARP ALFA S.A. reconoció la pensión de sobrevivientes.
<b>Primera Instancia:</b>  Conoció del proceso el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Palmira, mediante sentencia del 13 de febrero de 2003, condenó a la sociedad demandada a pagarle a la demandante Martha Luz Vallesteros y a sus hijos Jhonatan y Estefanía Obando Vallesteros, así como al menor Jhon Alexander Obando Valencia, sendas sumas por concepto de perjuicios materiales y morales.
<b>Segunda Instancia:</b>  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, en sentencia del 12 de diciembre de

2003, modificó la anterior determinación en el sentido de aumentar el valor de la condena impuesta a favor del menor Jhon Alexander Obando Valencia por concepto de perjuicios materiales. En lo demás confirmó la decisión y condenó “a CIGNA SEGUROS DE COLOMBIA S.A. HOY ACE SEGUROS S.A., a que reembolse a CENTRAL TUMACO S.A., en todo o en parte, lo que ésta pague por concepto de esta sentencia y de acuerdo con la responsabilidad asumida por la aseguradora en la póliza de responsabilidad civil No.1112”.

#### **Problema Jurídico:**

1. Si el tribunal aceptó que el accidente ocurrió por culpa del trabajador Domínguez Sánchez, ¿se puede trasladar esa culpa al empleador?
2. En los casos de responsabilidad del empleador en la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional ¿puede dicho empleador descontar lo pagado por la administradora de riesgos profesionales?

#### **Consideraciones de la Corte:**

*La doctrina de la Corte sobre el particular está consignada en la sentencia del 9 de noviembre de 2000, radicación 14847.*

*En igual sentido pueden consultarse las sentencias con radicación 9981 de mayo 15 de 1991, 4097 de marzo 21 de 1991, 5865 de noviembre 23 de 1993, 7716 de octubre 17 de 1995, 6666 de agosto 9 de 1999, 18520 de julio 25 de 2002 y 18515 de marzo 7 de 2003, las cuales **no permiten el descuento del cual se ocupa el censor precisamente porque no es posible argumentar su propia culpa y menos que puedan beneficiarse de ella, pues nadie debe lucrarse del daño ajeno.***

*Ahora, en el segundo cargo la censura incluye dentro de su argumentación la Ley 776 de 2002, que frente a las normas analizadas por la Corte en la sentencia transcrita en lo pertinente, es nueva. Sin embargo, además de no plantear en concreto motivación alguna en respaldo de su tesis, lo cierto es que dicha ley tampoco tiene la fuerza para variar la actual jurisprudencia de la Corte, ya que simplemente dictó normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales, pero sin que en su articulado aparezca una disposición que haga mención siquiera al tema aquí debatido.*

#### **Salvamento parcial de voto del Magistrado Eduardo López Villegas**

*Disiento, respetuosamente, del criterio de la mayoría sobre el que se fundamenta la decisión en lo que respecta al descuento de lo pagado por la administradora de riesgos profesionales.*

*Tal como lo advierte la censura, a partir de la instauración del sistema integral de seguridad social en riesgos profesionales, **la pensión de sobrevivientes por tales riesgos y el lucro cesante por culpa patronal no presentan diferencia en lo que***

**respecta a su naturaleza y cometido** gobernado por las leyes 100 de 1993 y 776 de 2003, de modo que resulta inadmisibile la acumulaci3n de indemnizaciones a favor del trabajador con invalidez total a causa de accidente de trabajo por culpa patronal.

**En efecto: en la acumulaci3n de prestaciones se desconocen los principios que informan el Sistema de Seguridad Social Integral**, a los cuales se debe acudir en el sub lite, por cuanto aqu3 no se resuelve 3nicamente sobre la responsabilidad patronal, sino que tambi3n se discierne sobre las consecuencias del cubrimiento de una contingencia propia de la seguridad social hecha con cargo al sistema.

En el principio de la universalidad descansa el elemento inherente al dise1o de un sistema de seguridad social; ha de tener por vocaci3n comprender a toda la poblaci3n con el fin de protegerla de la totalidad de los riesgos o contingencias.

La eficacia del principio se ha de traducir en orientaci3n para resolver a favor de la inclusi3n en el sistema, las controversias sobre si una determinada contingencia est3 o no bajo el amparo de la seguridad social.

Y en lo tocante el punto en cuesti3n, **el art3culo 12 del Decreto 1771 de 1994, para la debida realizaci3n del principio de unidad**, establece reglas puente cuando obran concurrentemente las dos maneras de ofrecer las prestaciones de seguridad social - por la v3a del empleador y la del sistema- para cuando se presenta un accidente de trabajo con culpa patronal; y aquellas normas adoptan previsiones para las dos formas de reclamo: a) cuando demanda el pago la entidad administradora de seguridad social; y b), cuando quien demanda es la v3ctima o sus causahabientes. En uno y otro caso, **la previsi3n es igual: preservar en la fuente del pago el derecho a la seguridad social a que dichos recursos lleguen al sistema.**

Falta al principio de unidad del Sistema de Seguridad Social tesis adoptada por el ad quem seg3n la cual las normas sobre descuento de indemnizaciones a favor del sistema no tienen aplicaci3n en los eventos de accidentes de trabajo por culpa patronal, y en lugar de ello, consiente la acumulaci3n de indemnizaciones a favor del trabajador.

Las normas que establecen una subrogaci3n indemnizatoria a favor de las entidades administradoras de los riesgos profesionales previstas en el art3culo 12 del Decreto 1771, no se pueden dejar de aplicar so pretexto de que los Reglamentos del ISS o los decretos reglamentarios del Sistema General de pensiones no tienen la capacidad de modificar una norma de rango legal, como es el art3culo 216 del C.S.T.

Se debe puntualizar que las leyes que instituyen las prestaciones patronales para la contingencia de los accidentes de trabajo, nacieron por virtud de leyes temporarias, con vigencia condicionada: hasta la fecha en que el seguro social las vaya asumiendo, como lo precept3a el art3culo 72 de la Ley 90 de 1946, que para no dejar duda de esta restricci3n, concluye: Desde esta fecha empezaran a hacerse efectivos los servicios aqu3 establecidos y dejaran de aplicarse aquellas disposiciones

anteriores.

*Este es exactamente lo que se dispone en el artículo 193 del C.S.T.: normas que otorgan derechos cuya existencia está supeditada al agotamiento de la misión que se proponía, una protección transitoria y precaria a cargo de los empleadores, la que se cumple cuando la protección en seguridad social fuera entregada a mejores manos: un sistema especializado; en otras palabras, la ley pierde vigencia por el surgimiento de la condición que se realiza con normas reglamentarias, Acuerdos del ISS o de Decretos Reglamentarios del ISS, que consagran la obligación de satisfacer las prestaciones a las entidades de seguridad social.*

**Así entonces, la tesis que acoge el ad quem confunde el sentido y alcance de las normas que supone enfrentadas; las legales perdieron su vigencia y por sustracción de materia, los reglamentos del ISS o del sistema no tienen validez temporal que afectar; y estas normas reglamentarias tienen la virtualidad de regular, de conformidad con las normas legales, la prestación del servicio público de seguridad social en sustitución del que aquellas había previsto en su temporaria vigencia y como condición para su extinción.**

**De otra parte, para sustentar la tesis a favor de la acumulación indemnizatoria a favor del trabajador, se ha invocado el principio del enriquecimiento sin justa causa desde una perspectiva meramente laboral, sin contextualizarla con el ámbito de la seguridad social, al considerar que si admitiera el descuento del valor de las prestaciones sociales o de seguridad social de la indemnización debida por el empleador al actor, ello conduciría a que el empleador culpable resultara a la postre obteniendo beneficios del daño que causó, o al menos exonerándolo de la responsabilidad en un riesgo producido por su acto intencional o culposo** (Sentencia del 12 de noviembre de 1993).

*Esta posición doctrinaria parte de una equivocada apreciación sobre la finalidad del descuento prevista en el artículo 193 del C.S.T. en concordancia con el Decreto 1771 de 1994: como la muerte o la invalidez es una contingencia amparada por el sistema de seguridad social, aún ella sea resultante del accidente de trabajo con culpa patronal, los descuentos que disponen deben ser hechos en beneficio del Sistema de Seguridad Social, no del patrono. La subrogación a favor del empleador en la obligación de cubrir prestaciones tiene como correlato la subrogación a favor de las entidades administradoras de riesgos profesionales de obtener la indemnización equivalente a lo que a ella le correspondiere pagar; y si se autoriza que el patrono haga descuentos cuando paga a la víctima, es para asegurar el derecho a la subrogación de la entidad administradora, y evitar que el empleador sea compelido a pagar dos veces por la misma causa.*

**No se trata de que el asegurador se vuelva contra el asegurado. Ciertamente corresponde al empleador proteger a sus trabajadores contra el riesgo de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales afiliándolo a entidades**

**administradoras de estos riesgos, y pagar la totalidad de la cotizaciones respectivas. Pero el valor de éstas esta tasado respecto a un grado de riesgo especialmente medido, que no incluye la actuación culposa o dolosa del empleador; así por tanto no puede entender que este sea un riesgo cubierto por ellas. Es este el alcance restringido que ha de tener la diferenciación de causas respecto al mismo hecho dañoso.**

*Así, considero se han debido rectificar los criterios que en ocasiones anteriores se han esbozado sobre el tema y casarse parcialmente el fallo en cuanto se abstuvo de descontar lo reconocido por la ARP del monto de la condena que por concepto de perjuicios impuso a la demandada.*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia.

**Decisión:**

No casa

**Jurisprudencia citada:**

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 9 de noviembre de 2000. M.P. Germán Valdés Sánchez. Rad. 14847.

## Ficha de Jurisprudencia

### Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil

#### Identificación:

CSJ-L Sentencia del 16 de marzo de 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 20240.

**Corporación:** Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral

**Número de sentencia o radicación:** 20240

**Fecha:** 16 de marzo de 2006

**Magistrado Ponente:** Francisco Javier Ricaurte Gómez

#### Hechos relevantes:

VIRGILIO ANGARITA llamó a juicio ordinario de primera instancia a las sociedades denominadas INGELETEL LIMITADA y CENTRALES ELÉCTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S. A. E. S. P. – CENS S. A. E. S. P., con el fin de que, previa la declaración de que con la primera de las demandadas existió un contrato de trabajo, se condenaran ambas solidariamente a pagarle: \$117.000.000.00 o más, por lucro cesante, que deja de reportar como consecuencia del accidente con culpa patronal; por daño emergente, costos de transporte diario, citas médicos particulares, etc., que se sufragaron por su cuenta; por daño moral en su favor y de su familia; por perjuicio fisiológico, la suma equivalente a 1000 gramos oro; las costas del proceso.

El demandante se vinculó mediante contrato de trabajo a la empresa Ingeletel Ltda. Ejecutando su labor recibió una descarga de energía eléctrica de más de 15000 voltios que le hizo perder el sentido; que fue remitido al Seguro, en donde los médicos le amputaron la totalidad del brazo izquierdo.

La culpa de la empresa habría consistido en que esta no previno el accidente con puestas a tierra, ni verificación de ausencias de tensión, ya que no se les suministró dicho equipo.

#### Primera Instancia:

Conoció del proceso el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Cúcuta, quién a través de la sentencia calendada el 6 de junio de 2000, condenó solidariamente a las sociedades demandadas a pagar al actor debidamente indexados: \$530.000.00 por daño emergente; \$1.000.000.00, por perjuicios morales; \$1.500.000.00 por perjuicios fisiológicos; y "...las sumas de dinero que correspondan a las dejadas de percibir desde la fecha del accidente de trabajo hasta aquella en que llegase a cumplir 70 años de edad, en cuantía de \$180.000.00 mensuales.". Declaró no probadas las excepciones propuestas y condenó en costas a las demandadas.

#### Segunda Instancia:

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cúcuta, en sentencia del 24 de abril de 2002, adicionó el del inferior en lo que respecta a la condena por "...las sumas de dinero que correspondan a las dejadas de percibir desde la fecha del accidente de trabajo hasta aquella en que llegase a cumplir 70 años de edad, en cuantía de \$180.000.00 mensuales.", en el sentido de que ésta "...será incrementada año a año, conforme a los aumentos establecido –sic- por la ley, de acuerdo a la parte considerativa de este proveído."; lo confirmó en lo demás y no impuso costas en la instancia.

**Problema Jurídico:**

De acuerdo con el artículo 216 del C. S. del T., ¿del monto de la indemnización de perjuicios se deben descontar las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas sobre riesgos profesionales?

**Consideraciones de la Corte:**

*Sobre la subrogación del empleador por parte del ISS en el riesgo de invalidez y la supuesta facultad que le concede a éste el artículo 216 del C. S. del T., para descontar de la correspondiente indemnización, las prestaciones en dinero pagadas en razón a las normas sobre riesgos profesionales, también se ha pronunciado la Corte en diversas oportunidades para señalar que el ISS no asumió el riesgo del daño que al trabajador le sobrevenga por causa de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional imputable a culpa suficientemente comprobada del patrono, ni siquiera aún en vigencia de la ley 100 de 1993; y que, cuando el artículo 216 del C. S. del T. autoriza al empleador para descontar del monto de la indemnización "el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo", solo se refiere a las sumas que haya pagado con anterioridad al trabajador con ocasión del accidente, pero no las prestaciones que haya reconocido el Instituto de Seguros Sociales por ese motivo.*

*Esta constituye la actual posición de la Sala respecto al tema, sin que existan ahora razones diferentes que la hagan variar, ni el cargo las plantea, por lo que se debe concluir necesariamente que el Tribunal no incurrió en los dislates que lo acusa la censura.*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia.

**Decisión:**

No casa.

**Jurisprudencia citada:**

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 25 de julio de 2002, Rad. 18520.



## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CSJ-L Sentencia del 24 de junio de 2005. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez . Rad. 23643.
<b>Corporación:</b> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral  <b>Número de sentencia o radicación:</b> 23643  <b>Fecha:</b> 24 de junio de 2005  <b>Magistrado Ponente:</b> Francisco Javier Ricaurte Gómez
<b>Hechos relevantes:</b>  Proceso ordinario laboral que ALBERTO LOSADA SILVA le adelanta a la ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. –E.S.P. en el que solicitó, previa la declaratoria que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido y que el accidente de trabajo que sufrió el demandante fue por culpa de la demandada, que se condene a ésta al pago de la indemnización plena de perjuicios de que trata el artículo 216 del C.S.T.  Alberto Losada Silva celebró un contrato de trabajo con la empresa Electrificadora del Huila S.A. que se viene desarrollando desde el 1º de junio de 1994; que el 23 de julio de 1997, en cumplimiento de sus funciones laborales, sufrió un accidente de trabajo que le ocasionó pérdida de capacidad laboral y otros perjuicios tanto fisiológicos como morales.  La culpa habría consistido en que la labor que se encontraba desarrollando el trabajador debía ser realizada en equipo y no por el solo y que además no se cumplió con los procedimientos de seguridad diseñados para la ejecución de la actividad.  La demandada adujo que a través de una póliza de vida de grupo la empresa le pagó al actor la indemnización a que tenía derecho según su incapacidad total y permanente probada.
<b>Primera Instancia:</b>  Conoció del proceso el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, mediante sentencia del 25 de abril de 2003, declaró la existencia del contrato de trabajo entre las partes y que la demandada fue responsable del accidente de trabajo que sufrió el demandante el 23 de junio de 1997.  Como consecuencia de esas declaraciones condenó a la empresa a pagarle al actor: 1) \$254.156.160 por concepto de lucro cesante futuro, pero que de dicho monto

procede el descuento “de los valores de las prestaciones en dinero pagadas por la entidad en razón de las normas consagradas en el Capítulo II del C. S. del T. y sin perjuicios de las acciones que contra éste procedan por parte de la entidad que le reconoció y le está pagando la pensión de invalidez”. 2) \$100.000.000 por perjuicios morales y fisiológicos, los que deberá pagar indexados, desde la fecha del accidente a la de su solución efectiva.

También en la sentencia de primer grado se ordena al demandante restituir a la compañía de Seguros La Previsora S.A la indemnización que ésta le había pagado por los perjuicios ocasionados, y que había valorado por una pérdida en un 54% de incapacidad total y permanente. Absolvió a la demandada de las demás pretensiones, declaró probada parcialmente la excepción de pago total de la obligación, y le impuso a la demandada las costas en un 60% a favor del demandante.

### **Segunda Instancia:**

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, en sentencia del 5 de diciembre de 2003, modificó en el sentido de revocar la condena por lucro cesante futuro y la ordenada al demandante de reintegrar la indemnización de perjuicios pagada por la aseguradora y, en su lugar, absolvió a la demandada de pagar esos perjuicios. Igualmente modificó la condena de indexar lo reconocido por perjuicios morales y fisiológicos, para disponer que esa revaluación sería a partir de la ejecutoria de la sentencia. En lo demás la confirmó, e impuso las costas de segunda instancia a la demandada en un 50% de las causadas.

### **Problema Jurídico:**

¿Las prestaciones asumidas por la Administradora de Riesgos Laborales con ocasión de un accidente de trabajo en el que medió la culpa del empleador, exoneran a este del pago de la indemnización plena de perjuicios causados al trabajador?

### **Consideraciones de la Corte:**

*Para el censor ese alcance que el fallador le da a las normas legales que regulan la responsabilidad plena del empleador, cuando el accidente de trabajo ocurre por su culpa, configura una interpretación errónea, y en ello le asiste la razón. Esto, porque **tiene definido esta Sala de la Corte que el hecho y argumentación jurídica que se aducen en el fallo recurrido, para exonerar a aquél de la mencionada indemnización, no son de recibo, ya que una es la consecuencia del llamado riesgo objetivo que asume la Administradora de Riesgos Profesionales y otra la que corresponde al empleador por su conducta culposa.** Al respecto es pertinente recordar y reiterar lo que la Corporación precisó en sentencia del 10 de marzo del año en curso, radicación 23656.*

*Para la Sala los reparos del recurrente basados en el reconocimiento de la pensión por parte del ISS, en el pago que realizó la Previsora S.A., por el seguro de responsabilidad civil extracontractual que había tomado la empleadora y en el paz y salvo que por ello suscribió el demandante, no son suficientes para que se concluya*

que no hay lugar a la condena por lucro cesante futuro.

Lo anterior porque la concesión de la pensión de invalidez, como quedó puntualizado al decidir la casación, no exonera al empleador que por su culpa dio lugar al accidente de trabajo del pago de la indemnización plena y total de perjuicios que consagra el artículo 216 del código sustantivo del trabajo; y el pago que hizo la aseguradora y la firma del paz y salvo, no implicó renuncia ni transacción por parte del actor para reclamar aquella, porque de acuerdo a los términos en que se otorgó, es lógico entender que el mismo está restringido al alcance de la respectiva póliza

**En cuanto a la restitución que se ordena en el fallo de primera instancia a favor de la Previsora S.A., lo que también crítica el apelante y que por estar íntimamente relacionada con la condena que por responsabilidad plena de perjuicios se le impone a la demandada recurrente, puede y debe examinarla la Corte como Tribunal de instancia (art. 357 C. de P.C.), y para la Sala es errada, porque es indudable que esa aseguradora, hizo ese pago fue en nombre del empleador demandado, que es el tomador de la póliza, y si el demandante recibió esa indemnización como consecuencia del accidente de trabajo, es a él a quien se le debe reconocer la suma pagada por ese concepto: \$5.611.000, como se dispondrá. Esto, porque lo que dispone el artículo 216 del código sustantivo del trabajo respecto a descontar de la indemnización total y ordinaria por perjuicios el valor de las prestaciones en dinero a que aquél estaba obligado a pagar cuando el riesgo por el accidente de trabajo o enfermedad profesional se encontraba a su cargo, no debe restringirse a aquellas sino a cualquier pago que realice por el suceso que compromete su responsabilidad personal y plena, bien que se haga directamente o por un tercero a su nombre.**

Para corroborar la anterior afirmación y deducción desde el punto de vista legal, basta con anotar que si por cualquier motivo la aseguradora la Previsora S.A., y no obstante el contrato de seguro que tenía con la demandada, se hubiese negado a pagar alguna indemnización al demandante, aquella la había podido llamar en garantía con sujeción y para los fines del artículo 57 del código de procedimiento civil, norma esta que por integración es aplicable en el proceso laboral.

**Salvamento parcial de voto del Magistrado Eduardo López Villegas (ver ficha sentencia del 10 de marzo de 2005, rad. 23656).**

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia.

**Decisión:**

Casa la sentencia en cuanto revocó la condena por lucro cesante futuro y absolvió a la demandada por ese crédito, como también respecto a la modificación que dispuso de

la fecha a partir de cual se debía liquidar la indexación de la suma reconocida por perjuicios morales y fisiológicos. No se casa en lo demás.

En sede de instancia, resuelve:

1.- Modificar el fallo de primera instancia dictado en este proceso por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva el veinticinco (25) de abril de dos mil tres (2003), en cuanto a la cuantía que determinó por el lucro cesante futuro, para, en su lugar, condenar a la demandada a pagar al demandante por ese concepto la suma de \$ 113'498.892.00.

2.- Confirmar el Numeral Tercero, Literal b), del mismo fallo en su integridad.

3.- Revocar el numeral cuarto de la parte resolutive del aludido fallo y, en su lugar, se autoriza a la demandada para que del valor de la condena deducida en el numeral 1º de esta sentencia, descuente la suma de cinco millones seiscientos once mil pesos (\$5.611.000).

**Jurisprudencia citada:**

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 10 de marzo de 2005. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López. Rad. 23656.

## Ficha de Jurisprudencia

### **Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil**

#### **Identificación:**

CSJ-L Sentencia del 4 de julio del 2006. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 27501.

**Corporación:** Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral

**Número de sentencia o radicación:** 27501

**Fecha:** 4 de julio del 2006

**Magistrado Ponente:** Luis Javier Osorio López

#### **Hechos relevantes:**

Yolanda Ibarbo Ramos (actuando en nombre propio y en representación de la menor Erika Julieth Lerma Ibarbo), y otras personas, demandaron en proceso laboral a Manuelita S.A., procurando se declarara que entre el señor Germán Lerma Solís y dicha sociedad existió un contrato de trabajo a término indefinido, que tuvo vigencia del 22 de febrero de 1988 hasta el 5 de mayo de 2001, cuando éste falleció por un accidente de trabajo, ocurriendo la muerte por culpa patronal, siendo el responsable, entre otros, del pago de perjuicios materiales y morales el empleador; y como consecuencia de ello, se le condenara a resarcir los daños a través de la cancelación de indemnizaciones, tales como la material, lucro cesante, daño emergente y la futura, junto con los perjuicios morales.

La culpa de la demandada habría consistido en la poca iluminación y la carencia de medidas de seguridad en el lugar de prestación del servicio, así como el incumplimiento de normas de seguridad industrial o de salud ocupacional de parte de la empresa y la falta de previsión o precaución del supervisor encargado de dar las órdenes de ubicación y descargue de los vehículos.

La ARL pagó la pensión de sobrevivientes a los demandantes.

#### **Primera Instancia:**

La primera instancia la desató el Juez Segundo Laboral del Circuito de Palmira, a través de la sentencia del 2 de junio de 2004, en la que declaró que entre Germán Lerma Solís en calidad de trabajador y la sociedad demandada como empleadora, existió una relación laboral que se ejecutó del 22 de febrero de 1988 al 4 de mayo de 2001, fecha última en que falleció el empleado por un accidente de trabajo sin culpa patronal, y como consecuencia de ello, absolvió a la accionada de todas y cada una de las pretensiones formuladas en su contra, y condenó en costas a las accionantes.

#### **Segunda Instancia:**

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, con sentencia del 10 de junio de 2005, revocó la decisión de primer grado, y en su lugar condenó a la demandada a pagar una suma equivalente a 50 salarios mínimos legales vigentes, esto es, el valor de

\$19.075.000,00, a la citada señora Ibardo Ramos, y una de 30 salarios mínimos que ascienden a la cantidad de \$11.445.000,00 a su menor hija Erika Julieth, por concepto de perjuicios morales; absolvió a la empresa convocada al proceso de las demás súplicas con respecto a éstas, y de la totalidad de las pretensiones frente a los accionantes Mercedes Dorado Reyes, quien representaba a sus menores hijos Dainer German Y Hermen Lerma Dorado; impuso las costas de ambas instancias a la parte accionada y a favor de las actoras que resultaron favorecidas con las condenas, y a su vez condenó en costas de primera instancia a los demás demandantes y a favor de la sociedad Manuelita S.A..

**Problema Jurídico:**

¿Es posible que el empleador condenado a indemnizar plenamente con base en la culpa patronal descuente las sumas que paga la ARL a título de pensión de sobrevivientes?

**Consideraciones de la Corte:**

*De otro lado, en lo que tiene que ver con lo alegado por la accionada en la contestación de la demanda introductoria, en el sentido de que el trabajador fallecido estuvo afiliado a la ARP o entidad de seguridad que le reconoció a los beneficiarios la pensión de sobrevivientes por riesgos profesionales, en nada incide para que el empleador que resultó responsable por culpa patronal del accidente de trabajo, cubra la respectiva indemnización de perjuicios materiales en el concepto de lucro cesante, por tratarse de dos responsabilidades distintas, una la objetiva a cargo del Sistema General de Riesgos Profesionales, y otra de naturaleza subjetiva que conlleva la indemnización ordinaria y total de perjuicios contemplada en el artículo 216 del C. S. del T. a cargo del empleador.*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia

**Decisión:**

Casa Parcialmente

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia del 30 de junio de 2005 radicado 22656

Sentencia del 29 de agosto del 2005, radicado 23202.

## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CSJ-L Sentencia del 15 de mayo de 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 28686
<b>Corporación:</b> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral <b>Número de sentencia o radicación:</b> 28686 <b>Fecha:</b> 15 de mayo de 2007 <b>Magistrado Ponente:</b> Isaura Vargas Díaz
<b>Hechos relevantes:</b>  Rafael Arcángel Sarrázola Vásquez, demandó a las sociedades Reingeniería Limitada, y Empresa Antioqueña De Energía S.A. E.S.P. –EADE E.S.P., para que se declare que son solidariamente responsables del pago del accidente laboral en que perdió la mano el accionante y que como consecuencia, se les condene a pagarle los perjuicios plenos y ordinarios con ocasión del accidente de trabajo ocurrido por culpa patronal, conforme al artículo 216 del C.S.T.  El 28 de noviembre de 1997 el demandante sufrió un accidente de trabajo que le ocasionó grandes lesiones, entre ellas la pérdida de su mano derecha. La empresa de Energía es solidariamente responsable, pues era la beneficiaria de la obra. Al demandante se le reconoció y paga una pensión de invalidez.
<b>Primera Instancia:</b>  Mediante fallo de 27 de mayo de 2005, el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Medellín, condenó a Reingeniería y a EADE S.A. E.S.P. a reconocer y pagar al actor los perjuicios ordinarios ocasionados como consecuencia del accidente de trabajo, junto con \$3.043.200 por perjuicios morales, y a éstas les impuso las costas.
<b>Segunda Instancia:</b>  El <i>ad quem</i> , por providencia de 25 de agosto de 2005, confirmó la de primer grado, pero la adicionó elevando a \$5.000.000 la condena por perjuicios morales; impuso las costas de la alzada a las demandadas.  Frente a la excepción compensación, dirigida a que se descontaran las sumas pagadas por el sistema de seguridad social:  <i>No accedió a la compensación solicitada, porque consideró que no se acreditó que el actor hubiese recibido simultáneamente salario e incapacidad, amén de que sostuvo que las entidades de seguridad social no tenían facultad para regular las indemnizaciones originadas en accidentes de trabajo, ocurridos por culpa patronal. Al punto reprodujo en gran parte el pronunciamiento de esta Sala de la Corte de 9 de noviembre de 2000, radicación 14847.</i>
<b>Problema Jurídico:</b>  ¿Es posible que el empleador condenado a indemnizar los perjuicios causados a un

trabajador como consecuencia de haberse presentado un accidente de trabajo en el que medió culpa patronal descontar las sumas que la entidad de seguridad social ha reconocido y paga a título de pensión de invalidez?

**Consideraciones de la Corte:**

*En cuanto al segundo argumento en que se apoyó el juez de segundo grado, de que: "...es el empleador el que debe asumir las consecuencias de la culpa en la ocurrencia del accidente de trabajo...", está en consonancia con el criterio jurisprudencial según el cual, a quien causó el perjuicio no le es dado descontar suma alguna de las prestaciones dinerarias pagadas por las entidades del Sistema de Seguridad Social. En efecto, tales entidades de previsión social cubren el riesgo laboral propio de la denominada "responsabilidad objetiva del patrono" en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, pero en ningún evento la responsabilidad derivada del error del patrono en la ocurrencia del siniestro accidente o de la enfermedad. Por manera que, la facultad que la ley le reconoce a las entidades que conforman el Sistema, entre ellas a la ARP, es la de subrogar al empleador en las prestaciones que amparan a sus beneficiarios, sin que comprenda las indemnizaciones y demás conceptos, cuando se demuestre que el accidente de trabajo ocurrió por la culpa comprobada del empleador. **Es decir, que en tratándose de "culpa" suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, las entidades que conforman el Sistema no están autorizadas para compartir el yerro del empleador en torno al punto, y por ende para colaborar con el pago de las indemnizaciones y demás conceptos que puedan resultar a cargo del patrono en tal evento, pues éste no puede obtener beneficio de su error.***

(...)

*Respecto a la afirmación del censor, de **que dentro del cálculo de los perjuicios derivados del accidente de trabajo, el lucro cesante lo está pagando la ARP, resultando un "doble pago" --el que efectúa la entidad que conforma el Sistema y el que sufraga empleador--**, es evidente que el seguro contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte no abarca el evento en que se acredita que el accidente de trabajo sobrevino como consecuencia de -yerro- del empleador, como en el caso de estudio, y de no haberse demostrado que se aseguró el riesgo "culposo", amén de **que la facultad para suplicar la eventual compensación respecto a las indemnizaciones que en un momento dado pudieran resultar a cargo del empleador, sería únicamente por la entidad aseguradora, en este caso la ARP, pero no la persona que incurrió en el yerro que originó el accidente de trabajo, es decir el empleador.***

**Salvamento de Voto Magistrado Eduardo López Villegas**

Se remite a la ficha de la sentencia del 10 de marzo del 2005. Rad. 23656.

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia

**Decisión:**



No Casa
<b>Jurisprudencia citada:</b> Sentencia del 12 de noviembre de 1993, radicado 5868

## Ficha de Jurisprudencia

### Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil

#### Identificación:

CSJ-L Sentencia del 2 de octubre de 2007. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 29644.

**Corporación:** Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral

**Número de sentencia o radicación:** 29644

**Fecha:** 2 de octubre de 2007

**Magistrado Ponente:** Francisco Javier Ricaurte Gómez

#### Hechos relevantes:

EDISON DAVID AGUDELO VELASQUEZ demandó a la sociedad TECNIAGRO S. A., para que fuera condenada a pagarle la indemnización derivada de accidente de trabajo, la indemnización legal o la contemplada en el pacto colectivo por despido indirecto, indexación, perjuicios fisiológicos o de placer y gastos y costas del juicio.

El demandante laboró para la demandada entre el 5 de febrero de 1996 y el 26 de diciembre de 2000; el 13 de enero de 2000 sufrió un accidente de trabajo, cuando se encontraba movilizandando unas cajas dentro de la cava de congelación; se resbaló en una platina del piso de la cava de congelación, cayó y recibió el golpe en la muñeca de la mano izquierda.

La culpa de la demandada consistiría en que el sitio carece de buena iluminación, lo que dificulta la visibilidad, y el día del accidente, había cantidad de material que dificultaba la labor. Como consecuencia del accidente su mano izquierda quedó inutilizada, pues permanece hinchada, no la puede cerrar, no puede sujetar ningún objeto y debe mantenerla vendada, además del dolor constante; el 9 de noviembre de 2000 regresó a su trabajo y lo pusieron a laborar en el oficio de montacarga, que requiere del buen funcionamiento de sus dos extremidades superiores, por lo que no pudo desempeñar su labor, además que el frío de la cava aumentaba su dolor; solicitó lo ubicaran en sitio diferente, pero como fue inútil, se vio precisado a presentar renuncia motivada.

#### Primera Instancia:

Conoció del proceso el Juzgado Laboral del Circuito de Envigado, quién a través de la sentencia calendada el 11 de noviembre de 2005, condenó a la sociedad demandada a pagar al actor, la suma de \$46.425.513.73, como indemnización material y moral de perjuicios derivados de accidente de trabajo.

#### Segunda Instancia:

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, en sentencia del 10 de marzo de 2006, revocó la condena del a quo y, en su lugar, absolvió a la demandada de todas las pretensiones del actor.

Determina que no hubo culpa del empleador.

**Problema Jurídico:**

¿Es posible la compensación de lo condenado con lo pagado al demandante por la A. R. P. SURATEP?

**Consideraciones de la Corte:**

*En lo que tiene que ver con el restante cuestionamiento de la apelación, sobre la no compensación de la suma fijada por el a quo por perjuicios morales y materiales, con lo pagado al actor por la A. R. P. SURATEP, baste transcribir lo dicho por esta Sala en la sentencia del 25 de julio de 2002 (Rad. 18520), que constituye la actual posición de la Sala.*

*En consecuencia, no se ordenará la compensación alegada.*

**Salvamento parcial de voto Magistrado Eduardo López Villegas (Ver ficha de sentencia del 10 de marzo de 2005, Rad. 23565).**

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia.

**Decisión:**

CASA la sentencia, en sede de instancia, se modifica la condena impuesta por el a quo a la entidad demandada, por concepto de indemnización material y moral derivados de accidente de trabajo, para fijar en total por estos conceptos, la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES, QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MIL, CATORCE PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$43.567.014.44). Se confirma en lo demás. Las costas de primera y segunda instancia estarán a cargo de la parte demandada. No se condena a ellas en el recurso extraordinario.

**Jurisprudencia citada:**

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 25 de julio de 2002, Rad. 18520..

## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CSJ-L Sentencia del 17 de octubre de 2007. M.P. Isaura Vargas Díaz. Rad. 29609.
<b>Corporación:</b> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral <b>Número de sentencia o radicación:</b> 29609 <b>Fecha:</b> 17 de octubre del 2007 <b>Magistrado Ponente:</b> Isaura Vargas Díaz
<b>Hechos relevantes:</b>  Sairi Cuello Mendoza, quien actúa en nombre propio y en representación de la menor Sairis Carolina Rodríguez Cuello; y Neila Robles Brito, quien actúa en representación del menor Miguel Angel Rodríguez Robles, demandaron a la empresa International Colombia Resources Corporation "INTERCOR", para que se declare que entre Anderson De Jesús Rodríguez Figueroa y la sociedad demandada existió un contrato de trabajo que terminó con la muerte de éste; que, como consecuencia, se le condene a pagarles los perjuicios materiales consistentes en el daño emergente y el lucro cesante, con ocasión del accidente de trabajo ocurrido por culpa patronal, conforme al artículo 216 del C.S.T., los perjuicios morales en cuantía de 1000 salarios mínimos legales mensuales para cada uno, entre otros.  Los demandantes señalan que la culpa del empleador se debió a que existió una violación de las normas de seguridad y la falta de habilidad del operador del camión que atropegó al señor Anderson de Jesús Rodríguez.  La ARP le paga la pensión a la cónyuge y a los menores hijos.
<b>Primera Instancia:</b>  La primera instancia terminó con fallo de 17 de agosto de 2005, por el cual el Juzgado Laboral del Circuito de San Juan del Cesar, absolvió a la empresa demandada de todas las súplicas del libelo. Impuso las costas a la parte actora
<b>Segunda Instancia:</b>  El <i>ad quem</i> , por providencia del 17 de febrero de 2006, confirmó la de primer grado, con costas a los demandantes.  Dio por no probada la culpa patronal y determinó que:  <b><i>(...) jurídicamente no era posible acumular la indemnización plena del artículo 216 del C.S.T., con la indemnización que la seguridad social les reconoció a los actores, amén de que recibieron una cantidad considerable del seguro voluntario tomado por la empresa a favor del trabajador. Copió apartes del pronunciamiento de la Corte de 24 de mayo de 1978.</i></b>
<b>Problema Jurídico:</b>

¿Es posible que el empleador condenado a indemnizar los perjuicios causados en virtud de un accidente laboral en el que media la culpa patronal descuente las sumas de dinero que paga la ARP (Hoy ARL) a título de pensión de sobrevivientes?

#### **Consideraciones de la Corte:**

*Así las cosas, le asiste razón a la censura en el yerro en que incurrió el ad quem, pues la conclusión a la que arribó de que "...aún en gracia de discusión sobre la carga de la prueba, ...", la sentencia necesariamente debía ser adversa a los demandantes, si se tenía en cuenta que no era posible "...acumular la indemnización plena a la que se refiere el artículo 216 del C.S. del T., con la indemnización que con motivo del accidente de trabajo o de la muerte del trabajador, reciben el trabajador o las personas que tienen derecho a sucederlo, respectivamente...", toda vez que los actores al absolver el interrogatorio de parte afirmaron haber recibido del sistema de seguridad social <la pensión de sobrevivientes>, amén del seguro voluntario tomado por la empresa a favor del trabajador, o en otras palabras, que como el sistema les reconoció a los actores las prestaciones derivadas del accidente, en el evento de acreditarse la culpa patronal en la ocurrencia del siniestro, tales pagos cubren o compensan la indemnización que consagra el artículo 216 del C.S. del T, es equivocada.*

*En efecto, el artículo 216 del C.S.T. prevé:*

*"Cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o en la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las normas consagradas en este capítulo".*

*En ese orden, el argumento en que se apoyó el Juez de segundo grado, de que: "...no es posible acumular la indemnización plena a la que se refiere el artículo 216 del C.S. del T., con la indemnización que con motivo del accidente de trabajo o de la muerte del trabajador, reciben el trabajador o las personas que tienen derecho a sucederlo, está en contravía con el criterio jurisprudencial según el cual, a quien causó el perjuicio no le es dado descontar suma alguna de las prestaciones dinerarias pagadas por las entidades del Sistema de Seguridad Social. En efecto, tales entidades de previsión social cubren el riesgo laboral propio de la denominada "responsabilidad objetiva del patrono" en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, pero en ningún evento la responsabilidad derivada del error del patrono en la ocurrencia del siniestro accidente o de la enfermedad. Por manera que, la facultad que la ley le reconoce a las entidades que conforman el Sistema, entre ellas a la ARP, es la de subrogar al empleador en las prestaciones que amparan a sus beneficiarios, sin que comprenda las indemnizaciones y demás conceptos, cuando se demuestre que el accidente de trabajo ocurrió por la culpa comprobada del empleador. Es decir, que en tratándose de "culpa" suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, las entidades que conforman el Sistema no están autorizadas para compartir el yerro del empleador en torno al punto, y por ende para colaborar con el pago de las indemnizaciones y demás conceptos que puedan resultar a cargo del patrono en tal evento, pues éste no puede obtener beneficio de su error.*

*En torno al tema, la Corte se pronunció el 12 de noviembre de 1993, radicado 5868*

(...)

*Y como lo consideró esta Sala de la Corte en sentencia de 8 de mayo de 1997, respecto al alcance del artículo 216 del C.S.T. (...)*

*En ese orden, es evidente que el ad quem interpretó erróneamente las preceptivas acusadas y, por ello, incurrió en el yerro jurídico que le atribuye la censura.*

*No obstante lo anterior, el cargo no está llamado a prosperar, porque, en sede de instancia, se llegaría a la misma decisión del ad quem, de confirmar el fallo de primer grado, toda vez que al examinar la actuación se concluiría que los demandantes no acreditaron la culpa del empleador o patrono en la ocurrencia del accidente en que falleció Rodríguez Figueroa.*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Art. 216 CST, jurisprudencia

**Decisión:**

No Casa

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia del 12 de noviembre de 1993, radicado 5868:

Sentencia del 8 de mayo de 1997

## Ficha de Jurisprudencia

### Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil

#### Identificación:

CSJ-L Sentencia del 22 de octubre de 2007. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 27736.

**Corporación:** Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil

**Número de sentencia o radicación:** 27736

**Fecha:** 22 de octubre del 2007

**Magistrado Ponente:** Luis Javier Osorio López.

#### Hechos relevantes:

Ana De Jesús González De Ospina actuando como madre del causante Javier Antonio Ospina Gonzalez, demandó solidariamente a Alfredo Marulanda Castaño y a la Caja De La Vivienda Popular Del Municipio De Manizales, procurando se le declarara que la muerte de su hijo se produjo por un accidente de trabajo, que la entidad mencionada es beneficiaria de la obra en la cual falleció el trabajador, y como consecuencia de ello, se les condenara al pago de los salarios insolutos, compensación de vacaciones, cesantía y sus intereses, prima de servicios, dotaciones, la indemnización prevista en el artículo 216 del C. S. del T., la sanción moratoria del artículo 65 ibídem, la indemnización por perjuicios morales equivalente a 1000 salarios mínimos legales, la pensión de sobrevivientes consagrada en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, lo que resulte probado ultra o extrapetita y las costas.

La culpa habría consistido en no dotar al trabajador de los elementos de protección necesarios.

El trabajador no se encontraba afiliado a Riesgos Laborales, y por ello se establece que los demandados deben sufragar la pensión de sobrevivientes. (los demandados alegan que el trabajador si se encontraba afiliado).

Se llamó en garantía a Seguros del Estado S.A.

#### Primera Instancia:

El Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales, declaró probada la excepción de inexistencia de accidente de trabajo propuesta por el codemandado, y como consecuencia de ello lo absolvió a los demandados de la indemnización plena por accidente de trabajo y de la pensión de sobrevivientes formuladas en su contra. Así mismo, absolvió de la compensación de vestido y calzado de labor, pero los condenó solidariamente a cancelar a la actora las siguientes sumas de dinero y conceptos: \$44.800,00 por reajuste salarial, \$171.600,00 por cesantía, \$12.812,80 por intereses a la misma, \$88.977,75 por vacaciones, \$143.000,00 por prima de servicios. De otro lado, condenó a la llamada en garantía Compañía De Seguros Del Estado S.A. a sufragar a la mencionada Caja de la Vivienda Popular las sumas que llegare a pagar por las condenas antes impartidas, y condenó a Alfredo Marulanda Castaño a cancelar a la accionante la indemnización moratoria a razón de \$9.533,30 diarios a partir del 21 de octubre de 2001 y hasta la fecha en que se cubra lo adeudado. Y en cuanto a las costas condenó a la *“demandante”* al pago de las mismas en un 80% *“dado la*

*prosperidad parcial de sus súplicas”.*

### **Segunda Instancia:**

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, revocó los ordinales primero y segundo de la decisión de primer grado que habían declarado probada la excepción de inexistencia de accidente de trabajo, para en su lugar condenarlos solidariamente a cancelar a la actora en su calidad de madre del causante Javier Antonio Ospina González, la suma de “\$30.000.000,00” por concepto de perjuicios morales por la muerte en accidente laboral con culpa patronal. Confirmó el resto de la sentencia.

En cuanto al lucro cesante determinó:

*“cuanto a los perjuicios materiales por “Lucro Cesante” no era posible su examen, por representar una indebida acumulación de pretensiones con la también petición principal incoada de la pensión de sobrevivientes; quedando en estas circunstancias limitada la indemnización implorada a los perjuicios por el daño moral por el desaparecimiento temprano de Javier Antonio Ospina González, que se fijaron en la suma de \$30.000.000,00.”*

Y frente a la pensión de sobrevivientes dijo:

*“en lo que incumbe a la pensión de sobrevivientes, cuya condena se pretende de manera solidaria en contra de los codemandados Alfredo Marulanda Castaño y Caja de Vivienda Popular del Municipio de Manizales, el Tribunal se abstuvo de estudiar esta súplica de fondo por razón a que en su sentir se excluye con la petición de la indemnización plena prevista en el artículo 216 del C. S. del T. por comprender “los perjuicios materiales de lucro cesante””*

### **Problema Jurídico:**

¿Existe una indebida acumulación de pretensiones por pretender el pago de la indemnización plena de perjuicios y de la pensión de sobreviviente?

### **Consideraciones de la Corte:**

*Como bien se puede observar, en estos dos primeros cargos que se estudian conjuntamente, se somete a consideración de la Corte desde el punto de vista jurídico dos temas: el primero relativo a la buena fe del obligado solidario para efectos de liberarse de la imposición de la condena por indemnización moratoria; y **el segundo que atañe a la compatibilidad de la súplica de reconocimiento y pago del lucro cesante como reparación plena de perjuicios derivada de un accidente de trabajo, con la pensión de sobrevivientes de origen profesional, de lo cual depende que haya o no indebida acumulación de pretensiones. En este orden la Sala abordará el estudio de la acusación.** (...)*

### **2.- De la compatibilidad de la indemnización total y ordinaria de perjuicios con la pensión de sobrevivientes de origen profesional.**

*De la motivación de la sentencia impugnada, se extrae en lo concerniente a este punto, que el Tribunal negó el pedimento de la pensión de sobrevivientes de origen*



profesional, básicamente porque en su sentir se presenta una indebida acumulación de pretensiones, con relación a la reclamación del lucro cesante que está comprendida dentro de la indemnización plena de perjuicios de que trata el artículo 216 del C. S. del T., resultando estos derechos incompatibles, por tener ambas súplicas la misma finalidad, por cuanto para el asunto a juzgar **el lucro cesante busca resarcir a la actora “lo que deja de aportarle el occiso”, y la pensión de sobrevivientes ampara a personas como la demandante de la contingencia de la muerte de un trabajador fallecido “que la priva del apoyo económico para su subsistencia que en vida éste le prodigaba”**; máxime que en el sub lite no se formuló una como principal y la otra como subsidiaria, conforme al mandato del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, aplicable en materia laboral por integración analógica consagrada en el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, hoy 25A de este último estatuto.

(...)

Con respecto a lo que atañe al derecho a la reparación como consecuencia de un accidente de trabajo, **nuestra legislación tiene prevista dos maneras de reparación identificables jurídicamente así: una, la denominada reparación tarifada de riesgos, relativa al reconocimiento de unos beneficios o prestaciones económicas previstos en la Ley 100 de 1993, Ley 776 de 2002 y demás normas reglamentarias según el caso a cargo de las Administradoras del Riesgo Profesional, entre ellas la pensión de sobrevivientes; y otra, la reparación plena de perjuicios que tiene que ver con la indemnización total y ordinaria de éstos por culpa patronal en la ocurrencia del siniestro, y que corresponde asumir directamente al empleador en los términos del artículo 216 del C.S. del T..**

**A contrario de lo que sostiene el Tribunal, estas dos formas de reparación tienen distinta finalidad, habida consideración que, la pensión de sobrevivientes de origen profesional, atiende el riesgo de la muerte que se orienta a proteger a los causahabientes señalados en la ley y es de naturaleza prestacional perteneciente al Sistema de Seguridad Social Integral; mientras que la indemnización plena de que trata el artículo 216 del C. S. del T., busca la indemnización completa de los daños sufridos al producirse un accidente de trabajo por culpa del empleador, el cual hace parte de un riesgo propio del régimen del Derecho Laboral.**

(...)

Así las cosas, **resulta compatible la pensión de sobrevivientes por la muerte del afiliado, con la reparación plena de perjuicios por la ocurrencia de un accidente de trabajo.**

Aquí es de resaltar, que la circunstancia de que el riesgo de pensión o el derecho prestacional por muerte se traslade al empleador que ha omitido el deber de afiliación de su trabajador al sistema de seguridad social, en ningún momento hace perder el origen de esta clase de reparación, y por tanto sigue siendo tarifada y perteneciente al sistema de riesgos profesionales.

De otro lado, cabe agregar, que otra de las diferencias entre las reparaciones a que se ha hecho mención, consiste en que **el empleador siendo el llamado a asumir las consecuencias de la culpa comprobada frente a un accidente de trabajo que se produzca, no le es dable como responsable directo del perjuicio descontar suma**

**alguna de las prestaciones dinerarias pagadas por la entidades del sistema de seguridad social, a menos que el empleador responsable por culpa haya sufragado gastos que le correspondían a estas entidades, por virtud del riesgo asegurado**, evento en el cual sí puede hacer el descuento de lo que tenga que pagar por indemnización conforme lo consagra la norma, por razón de que tales entidades de previsión social, como se dijo, lo que cubren es el riesgo laboral propio de la denominada “responsabilidad objetiva del patrono” en la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, pero en ningún momento la responsabilidad derivada de la culpa del empleador, que es de naturaleza subjetiva. Al respecto en sentencia reciente del 15 de mayo de 2007 radicado 28686, esta Corporación dejó sentado: (...)

Sentencia del 7 de marzo de 2003 radicación 18515, que reiteró la sentencia que data del 25 de julio de 2002 radicado 18520, **al referirse a esta temática había adocinado que aún con la expedición del artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, al colocarlo en relación con el artículo 216 del C. S. del T., mantiene invariable la tesis según la cuál las entidades de seguridad social no asumen las indemnizaciones originadas en enfermedades profesionales o accidentes de trabajo que ocurran por culpa suficientemente comprobada del empleador, y por tanto no es dable que le aminoren esa carga patrimonial al patrono encontrado culpable, quien tiene toda la responsabilidad ordinaria por mandato del citado precepto sustantivo laboral.**

**Las anteriores directrices jurisprudenciales permiten inferir, que los beneficiarios o causahabientes del trabajador fallecido que reciban una reparación integral de los perjuicios sufridos derivados de un accidente de trabajo por culpa patronal, y simultáneamente una pensión de sobrevivientes que se repite es de carácter prestacional, no están accediendo a un doble beneficio por un mismo perjuicio, así ambas reparaciones finalmente queden a cargo del empleador, en la medida que como se explicó su origen es disímil y obedecen a causas diferentes, sin olvidar que para estos casos la culpa y el dolo no son asegurables.**

Por lo expresado, en un mismo proceso laboral es viable que se demanden de manera principal las dos reparaciones, la tarifada de riesgos y la plena de perjuicios, sin que en momento alguno se configure la indebida acumulación de pretensiones que encontró el ad quem.

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia.

**Decisión:**

Casa parcialmente. (en cuanto no extendió la condena por indemnización moratoria impuesta al empleador demandado, a la entidad dueña de la obra o beneficiaria del trabajo, y declaró la indebida acumulación de pretensiones que condujo a que no se estableciera si se reunían los presupuestos para que la demandante en su condición de beneficiaria accediera a la pensión de sobrevivientes implorada.)

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia del 30 de junio de 2005 radicado 22656

Sentencia del 29 de agosto de 2005 radicación 23202

Sentencia del 15 de mayo de 2007 radicado 28686.

Sentencia del 12 de noviembre de 1993, radicado 5868

Sentencia del 7 de marzo de 2003 radicación 18515

Sentencia del 25 de julio de 2002 radicado 18520

Sentencia del 9 de noviembre de 2000, radicación 14847

## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CSJ-L Sentencia del 3 de junio del 2009 M.P. Luis Javier Osorio López Rad. 35121
<b>Corporación:</b> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral <b>Número de sentencia o radicación:</b> 35121 <b>Fecha:</b> 3 de junio del 2009 <b>Magistrado Ponente:</b> Luis Javier Osorio López
<b>Hechos relevantes:</b>  <p>Alba Mery Deossa Vasco actuando en nombre propio y en representación de la menor Maribel Torres Deossa; y Luilly Giovanny Torres Deossa demandaron a la sociedad Mina La Margarita S.A., para que se declarara que el accidente sufrido por el trabajador Luís Alfonso Torres Duque el día 4 de julio de 2004 y a raíz del cual falleció en el mismo lugar de los hechos, fue un accidente de trabajo que sucedió por culpa de la empleadora, y como consecuencia de lo anterior, se les condenara a pagar a cada uno, los correspondientes perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales,</p> <p>Los demandantes alegan que no se reportó el accidente de trabajo, pero que además, el trabajador estaba afiliado al ISS, y por lo tanto es esa la entidad obligada a reconocer cualquier prestación derivada del fallecimiento del trabajador.</p>
<b>Primera Instancia:</b>  <p>Conoció de la primera instancia el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí, quien dictó sentencia el 3 de noviembre de 2006, en la que condenó a la sociedad demandada a reconocer y pagar a los demandantes las siguientes sumas de dinero y conceptos: a) \$23.073.160,00 por perjuicios materiales a la señora Alba Mery Deossa Vasco. b) \$15.350.574,00 por perjuicios materiales para la menor Maribel Torres Deossa. c) \$10.200.000,00 por perjuicios morales a favor de los accionantes.</p>
<b>Segunda Instancia:</b>  <p>La Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, con sentencia que data del 25 de octubre de 2007, confirmó las condenas impuestas en la decisión de primer grado, por concepto de perjuicios materiales, pero en su totalidad y en los siguientes montos: para Alba Mery Deossa Vasco por lucro cesante pasado \$6.116.808,00 y por lucro cesante futuro \$42.836.771,00; y para la menor Maribel Torres Deossa por lucro cesante pasado \$6.116.808,00 y por lucro cesante futuro \$23.122.554,00; así mismo confirmó en su integridad los perjuicios morales, y condenó a la sociedad demandada a las costas de la alzada.</p>
<b>Problema Jurídico:</b>  <p>¿Deben descontarse de las indemnizaciones de perjuicios de que trata el art. 216 del C. de P.C. las pensiones pagadas por la ARL a la cual estuviera afiliado el trabajador?</p>

### Consideraciones de la Corte:

pese a la enjundiosa argumentación contenida en el cargo, lo expresado no logra modificar la actual postura de la Sala sobre el tema, por lo siguiente:

Con respecto al derecho a la reparación como consecuencia de un accidente de trabajo, nuestra legislación tiene prevista **dos maneras de reparación identificables jurídicamente así: una, la denominada reparación tarifada de riesgos, relativa al reconocimiento de los beneficios o prestaciones económicas previstos en la Ley 100 de 1993, Ley 776 de 2002 y demás normas reglamentarias según el caso a cargo de las Administradoras del Riesgo Profesional; y otra, la reparación plena de perjuicios que tiene que ver con la indemnización total y ordinaria de éstos por culpa patronal en la ocurrencia del siniestro**, y que corresponde asumir directamente al empleador en los términos del artículo 216 del C.S. del T..

**Estas dos formas de reparación tienen distinta finalidad, habida consideración que la que está a cargo de la ARP busca proteger de manera objetiva al afiliado o a sus causahabientes señalados en la ley, siendo de naturaleza prestacional perteneciente al Sistema de Seguridad Social Integral; mientras que la indemnización plena de que trata el artículo 216 del C. S. del T., persigue la indemnización completa de los daños sufridos al producirse un accidente de trabajo por culpa del empleador, en la modalidad de subjetiva, el cual hace parte de un riesgo propio del régimen del Derecho Laboral.**

Otra de las diferencias entre las reparaciones a que se ha hecho mención, consiste en que **el empleador siendo el llamado a asumir las consecuencias de la culpa comprobada frente a un accidente de trabajo que se produzca, no le es dable como responsable directo del perjuicio descontar suma alguna de las prestaciones dinerarias pagadas por la entidades del sistema de seguridad social, a menos que el empleador responsable por culpa haya sufragado gastos que le correspondían a estas entidades**, por virtud del riesgo asegurado, evento en el cual sí puede hacer el descuento de lo que tenga que pagar por indemnización conforme lo consagra la norma, por razón de que tales entidades de previsión social, como se dijo, lo que cubren es el riesgo laboral propio de la denominada “responsabilidad objetiva del patrono” en la ocurrencia del accidente de trabajo o la enfermedad profesional, pero en ningún momento la responsabilidad derivada de la culpa del empleador, que es de naturaleza subjetiva.

En lo atinente a este puntual aspecto, cabe traer a colación la sentencia calendada 15 de mayo de 2007 radicado 28686, reiterada en casación del 22 de octubre de igual año radicación 27736, donde se dejó sentado: (...)

En torno al tema, la Corte se pronunció el 12 de noviembre de 1993, radicado 5868, así: (...)

Respecto a la afirmación del censor, de que dentro del cálculo de los perjuicios derivados del accidente de trabajo, **el lucro cesante lo está pagando la ARP, resultando un “doble pago” --el que efectúa la entidad que conforma el Sistema y el que sufraga empleador--**, es evidente que **el seguro contra los riesgos de invalidez, vejez y muerte no abarca el evento en que se acredita que el accidente de trabajo sobrevino como consecuencia de -yerro- del empleador, como en el caso de estudio, y de no haberse demostrado que se aseguró el riesgo “culposo”, amén de que la facultad para suplicar la eventual compensación respecto**

a las indemnizaciones que en un momento dado pudieran resultar a cargo del empleador, sería únicamente por la entidad aseguradora, en este caso la ARP, pero no la persona que incurrió en el yerro que originó el accidente de trabajo, es decir el empleador.

Adicionalmente, es de anotar, que la Sala en decisión del 7 de marzo de 2003 radicación 18515, que reiteró la sentencia que data del 25 de julio de 2002 radicado 18520, al referirse a esta temática había adoctrinado **que aún con la expedición del artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, al colocarlo en relación con el artículo 216 del C. S. del T., mantiene invariable la tesis según la cuál las entidades de seguridad social no asumen las indemnizaciones originadas en enfermedades profesionales o accidentes de trabajo que ocurran por culpa suficientemente comprobada del empleador, y por tanto no es posible que le aminoren esa carga patrimonial al patrono encontrado culpable**, quien tiene toda la responsabilidad ordinaria por mandato del citado precepto sustantivo laboral. (...)

La anterior tesis, que resuelve los puntos que infructuosamente la recurrente intenta plantear como novedosos, fue recientemente expuesta en sentencia de 25 de julio de 2002 (Radicación 18.520) (...)

En decisión de 9 de noviembre de 2000, radicación 14847, (...)

**Las anteriores directrices jurisprudenciales permiten inferir, que los beneficiarios o causahabientes del trabajador fallecido que reciban una reparación integral de los perjuicios sufridos derivados de un accidente de trabajo por culpa patronal, y simultáneamente un beneficio prestacional del ISS o de la ARP, no están accediendo a un doble beneficio por un mismo perjuicio, en la medida que como se explicó su origen es disímil y obedecen a causas diferentes, sin olvidar que para estos casos la culpa y el dolo no son asegurables.**

**Salvamento parcial de voto Eduardo López Villegas:**

Se remite a la Ficha de la Sentencia del 10 de marzo del 2005, Rad. 23656

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Art. 216 CST, jurisprudencia.

**Decisión:**

No Casa

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia del 15 de mayo de 2007, radicado 28686.

Sentencia del 22 de octubre de 2007, radicado 27736

Sentencia del 12 de noviembre de 1993, radicado 5868

Sentencia del 7 de marzo de 2003, radicado 18515

Sentencia del 25 de julio de 2002, radicado 18520

Sentencia del 9 de noviembre de 2000, radicado 14847

## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CSJ-L Sentencia del 26 de enero de 2010. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López . Rad. 35271
<b>Corporación:</b> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral  <b>Número de sentencia o radicación:</b> 35271  <b>Fecha:</b> 26 de enero de 2010  <b>Magistrado Ponente:</b> Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López
<b>Hechos relevantes:</b>  <p>Proceso promovido por MARLENE MARÍA SILVA ESTRADA, en nombre propio y en representación de sus hijos JORGE ARMANDO, VÍCTOR MANUEL y YEIMIS PAOLA TOVAR SILVA contra la sociedad AGRÍCOLA DEL TORIBÍO S.A. y la ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S. A. E.S.P. – ELECTRICARIBE S.A. E.S.P., y a la cual fue llamada en garantía la sociedad SEGUROS GENERALI DE COLOMBIA - SEGUROS GENERALES S.A., y se denunció el pleito frente a la ELECTRIFICADORA DEL MAGDALENA S.A. E.S.P. en liquidación; con el fin de que previa declaratoria de responsabilidad frente al accidente de trabajo en que perdió la vida su esposo y padre Jorge Luis Tovar de Arco, fueran condenadas a pagarles los perjuicios materiales, morales y fisiológicos, a título de indemnización, junto con los intereses corrientes y moratorios y la corrección monetaria.</p> <p>El causante laboraba para la sociedad Agrícola del Toribío S.A.; que el 15 de mayo de 2002 mientras cortaba un racimo de banano, una rama hizo contacto con un cable de alta tensión, conductor de electricidad, lo que le causó la muerte en forma inmediata. El cable era de propiedad de Electricaribe S.A., y la culpa habría consistido en que tanto ésta empresa como la empleadora, fueron negligentes en el mantenimiento de las redes no las colocaron a la altura reglamentaria y no alertaron a los trabajadores sobre el peligro que corrían por trabajar cerca de las líneas eléctricas, no tomaron las precauciones necesarias ni los dotaron de implementos de trabajo adecuados.</p>
<b>Primera Instancia:</b>  Conoció del proceso el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Ciénaga, mediante sentencia del 14 de septiembre de 2006, condenó a Agrícola de Toribío S.A., a la Electrificadora del Caribe S.A., y solidariamente a la Compañía Generali de Colombia a pagar a los actores por lucro cesante pasado y futuro \$109'545.806,60; \$35'000.000,00 por perjuicios morales; y \$20'000.000,00 por daño fisiológico. Absolvió de las demás súplicas y a la Electrificadora del Magdalena de todas ellas.



### Segunda Instancia:

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, en sentencia del 21 de noviembre de 2007, revocó parcialmente el fallo del Juzgado en cuanto condenó a la Electrificadora del Caribe S.A. E.S.P. y solidariamente a Generali Colombia Seguros Generales S.A. y absolvió a estas compañías de todos los cargos. Revocó la condena a Agrícola de Toribio S.A. pero sólo respecto del daño fisiológico.

### Problema Jurídico:

En los casos de responsabilidad patronal en la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional conforme al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo ¿puede el empleador culpable descontar del monto de la indemnización correspondiente, lo pagado por la administradora de riesgos profesionales por el mismo evento?

### Consideraciones de la Corte:

*La tesis de que es procedente el descuento tendría sustento jurídico según la censura en el mismo artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo y en el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994.*

*Sin embargo, **la mayoría de esta Sala de la Corte no acepta tal postura porque no es posible argumentar su propia culpa y menos que sea dable beneficiarse de ella, pues nadie puede lucrarse del daño ajeno.** Así lo consignó en sentencia de 10 de marzo de 2005, rad. N° 23656, donde reiteró entre otras las sentencias de 15 de mayo de 1991, rad. N° 9981; de 21 de marzo de ese año, rad. N° 4097; de 23 de noviembre de 1993, rad. N° 5865; y de 9 de noviembre de 2000, rad. N° 14847.*

**Aclaración de voto del Magistrado Eduardo López Villegas (Ver ficha de sentencia del 10 de marzo de 2005, Rad. 23656).**

**Aclaración de voto del Magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza:**

**Mientras se determina la responsabilidad en el infortunio laboral, debe el sistema de riesgos profesionales reconocer las prestaciones previstas en las normas legales. Empero, ello no significa que cuando así procede en realidad esté cumpliendo con una obligación a su cargo, pues, por virtud de lo dispuesto por los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 12 del Decreto 1771 de 1994, quien debe responder por todas las consecuencias del riesgo profesional es el empleador culposo.** Admitir lo contrario, equivaldría a permitir que el sistema de seguridad social asuma la cobertura de conductas culposas, posibilidad que no existe en nuestra normatividad de seguridad social.

*Por esa razón, **el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994** arriba reseñado, que ciertamente reitera la regla establecida en los reglamentos del Seguro Social, hoy derogados, perentoriamente dispone que “la entidad administradora de riesgos profesionales podrá repetir, con sujeción a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contingencia profesional, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeción en todo caso al*

*límite de responsabilidad del tercero”.*

*Lo anterior significa, en mi entender, que **ese precepto excluye la posibilidad de que las prestaciones que reconoce el sistema de riesgos profesionales en caso de un accidente de trabajo en el que ha mediado culpa del empleador queden definitivamente a cargo del sistema, que, en consecuencia, no tendrá, en últimas, ninguna obligación. De ahí que esté facultado para repetir contra el responsable por el monto de las prestaciones que haya reconocido o que deba reconocer.***

*Mas es obvio que no podrá sustraerse al reconocimiento de las prestaciones establecidas en la ley mientras no se haya establecido suficientemente, a través de un proceso judicial, que en el acaecimiento del accidente laboral o de la enfermedad profesional medió la culpa comprobada del empleador.*

*De la norma transcrita se desprende también que cuando se ha logrado establecer que un empleador fue responsable de un accidente de trabajo y se le condene a la reparación integral de los perjuicios ocasionados al trabajador, si previamente una administradora de riesgos profesionales ha reconocido prestaciones, el monto de ellas debe ser pagado por ese empleador a la administradora, mas no al trabajador, quien ya ha recibido las prestaciones correspondientes y, por lo tanto, ha sido resarcido en parte del daño laboral ocasionado, aunque no de todos los perjuicios sufridos.*

***Ese trabajador, estimo, no puede recibir una doble cobertura respecto del mismo hecho: la prestacional que está a cargo del sistema de seguridad social, que, se insiste, no puede cubrir actos culposos, y la total a cargo del empleador, quien, desde luego, debe atender todas las prestaciones necesarias para reparar el daño y que pueden ser otorgadas en términos similares a las de la seguridad social que, bien es sabido, no repara completamente los perjuicios sufridos en infortunios laborales.***

*El anterior entendimiento también se desprende de lo que dispone el inciso segundo del antes aludido precepto reglamentario 1771 de 1994, en cuanto establece:*

*“Lo dispuesto en el artículo anterior no excluye que la víctima, o sus causahabientes, instauren las acciones pertinentes para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor asumido por la entidad administradora de riesgos profesionales”.*

***El descuento al que allí se alude no afecta en realidad la indemnización íntegra de los daños sufridos por el empleado, quien los debe ver resarcidos, de una parte con las prestaciones ya recibidas del sistema de seguridad social y, de otra, con lo que le corresponda, por su lado, al empleador. Y tampoco beneficia al empleador, quien, de todos modos, deberá atender la reparación total de los perjuicios, sólo que estará obligado a devolver lo pagado a quien ya ha asumido parte de esa restauración, vale decir, la administradora de riesgos profesionales.***

*Es apenas natural concluir que la posibilidad de descuento anteriormente explicada sólo será viable si la administradora correspondiente se ha hecho parte en el proceso o si ha instaurado uno con ese objetivo, pues de no ser así obviamente no podrán tomarse determinaciones en relación con ella y, por lo tanto, la deducción no será procedente, como sucedió en este caso, por ser aquella quien tiene derecho a la devolución de las sumas que hubiere previamente pagado.*

*En mi opinión, en casos como el presente si la administradora de riesgos no es parte*

*en el proceso judicial, no podrá descontarse del monto de la indemnización plena lo que esa entidad haya pagado por prestaciones, lo cual no significa que esas sumas en realidad correspondan al trabajador o a sus beneficiarios, pues si ya le fueron reconocidas y pagadas, es lógico que no tendrán derecho a que se les indemnice nuevamente y por ello deberán reintegrarlas a la administradora.*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia.

**Decisión:**

No casa

**Jurisprudencia citada:**

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 10 de marzo de 2005. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López. Rad. 23656.

## Ficha de Jurisprudencia

### **Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil**

#### **Identificación:**

CSJ-L Sentencia del 9 de marzo de 2010. M.P. Luis Javier Osorio López. Rad. 37064.

**Corporación:** Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral

**Número de sentencia o radicación:** 37064

**Fecha:** 9 de marzo de 2010

**Magistrado Ponente:** Luis Javier Osorio López

#### **Hechos relevantes:**

María Eunice Ceballos Castrillón (en nombre propio y en representación de sus hijos menores), demandó a Tiapalma Ltda. y a sus socios, para que sean condenados al pago de la indemnización plena de perjuicios derivados del accidente de trabajo en el cual medió culpa patronal que sufrió el señor Rubén Darío David David, el 5 de marzo de 2004.

El trabajador laboraba sin medidas de seguridad, elementos de protección, y sin haber recibido capacitación, en lo que habría consistido la culpa del empleador.

La ARP SURATEP reconoció la pensión de sobreviviente.

#### **Primera Instancia:**

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Itagüí, en sentencia del 26 de enero de 2007, absolvió a los accionados de todas las pretensiones de la demanda, y condenó en costas a la parte demandante.

#### **Segunda Instancia:**

Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín revocó la decisión de primer grado, y en su lugar declaró la culpa patronal de la empresa Tipalma Ltda., en el accidente de trabajo que le costó la vida a Rubén Darío David David, y condenó solidariamente a los demandados a pagar: a María Eunice Ceballos Castrillón \$13'097.276,00 por lucro cesante consolidado, \$39'663.661,00 por lucro cesante futuro, y \$15'000.000,00 por perjuicios morales; a Harold Alberto David Ceballos \$4'365.739,00 por lucro cesante consolidado, \$251.830,00 por lucro cesante futuro, y \$15'000.000,00 por perjuicios morales; a Julieth David Ceballos \$4'365.739,00 por lucro cesante consolidado, \$2'066.796,00 por lucro cesante futuro, y \$15.000.000,00 por perjuicios morales; y a Dubán Daniel David Ceballos \$4'365.739,00 por lucro cesante consolidado, \$5'216.332,00 por lucro cesante futuro, y \$15'000.000,00 por perjuicios morales; y a las costas de la primera instancia.

El tribunal determinó que el empleador no está facultado para descontar de la indemnización los pagos realizados por la ARP (Hoy ARL).

**Problema Jurídico:**

¿Se equivocó el Tribunal al determinar que no es posible que el empleador deduzca de la indemnización los pagos hechos por la ARP (Hoy ARL)?

**Consideraciones de la Corte:**

*Para resolver el cargo, baste con decir que en ningún error de de hecho incurrió el ad quem al apreciar el documento obrante a folios 20 y 21 por medio del cual la ARP SURATEP le comunicó a la demandante María Eunice Ceballos Castrillón el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes, derivada del fallecimiento del señor Rubén Darío David David, pues como lo tiene adoctrinado esta Sala de manera reiterada, de la indemnización plena de perjuicios a cargo del empleador, no es dable deducir el valor de las prestaciones reconocidas por la ARP. (resalto y subrayo)*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia

**Decisión:**

No Casa

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia del 3 de junio de 2009 radicado 35121

## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CSJ-L Sentencia del 7 de julio de 2010. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez . Rad. 31646
<b>Corporación:</b> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral  <b>Número de sentencia o radicación:</b> 31646  <b>Fecha:</b> 7 de julio de 2010  <b>Magistrado Ponente:</b> Francisco Javier Ricaurte Gómez
<b>Hechos relevantes:</b>  JOSÉ ALONSO CÁRDENAS PULIDO, promovió proceso ordinario laboral contra la sociedad CARBONERAS TERRANOVA LTDA.  Por llamamiento en garantía, fue vinculado el Instituto de Seguros Sociales  El demandante, quien fungió como operario en una mina de carbón, perdió, en ésta, su miembro inferior izquierdo el 20 de abril de 1998, a raíz de un accidente de trabajo.
<b>Primera Instancia:</b>  Conoció del proceso el Juzgado Promiscuo del Circuito de Pacho, mediante sentencia del 10 de junio de 2005, declaró la existencia de un contrato de trabajo verbal entre las partes (acá recurrentes) que rigió desde el 13 de enero de 1996 hasta el 24 de junio de 1999; reconoció a favor del demandante pensión por invalidez, la que debería asumir la ARP del ISS y costas en un 70% divididas entre la sociedad y el ISS; absolvió del resto de pretensiones. El Instituto no recurrió la decisión.
<b>Segunda Instancia:</b>  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, en sentencia del 14 de diciembre de 2006, condenar a Carboneras Terranova Ltda a pagar a aquél \$560.265.60 por concepto de cesantía de 1997 y 1998, \$53.175.548 por lucro cesante futuro, más \$2.000.000.00 por perjuicios morales; dispuso, además, <b><u>que, del valor de la indemnización, la demandada podría descontar lo pagado directamente por pensión de invalidez ordenada en un fallo de tutela, cuya cancelación ordenó cesar a partir de la fecha de dicha sentencia.</u></b>
<b>Problema Jurídico:</b>  ¿Cuál es la interpretación y alcance del artículo 216 del C.S.T.?
<b>Consideraciones de la Corte:</b>

*Con todo, cabe acá recordar la posición de la Sala respecto de las compensaciones en este tipo de procesos. Es así como en fallo de 25 de julio de 2002, rad. 18520, ratificado después en el de 2 de octubre de 2007, rad. 29644.*

*Es de anotar que en el caso que ocupa la atención de la Sala, el ad quem no ordenó descontar de la indemnización lo que el ISS cancelará por pensión sino lo que la empresa pagó por tal concepto, previa y provisionalmente, en virtud de un fallo de tutela.*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia.

**Decisión:**

No casa

**Jurisprudencia citada:**

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 25 de julio del 2002. M.P. José Roberto Herrera Vergara. Rad. 18520

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 2 de octubre de 2007. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 29644.

**Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil**

**Identificación:**

CSJ-L Sentencia del 23 de noviembre de 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 37754.

**Corporación:** Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral

**Número de sentencia o radicación:** 37754

**Fecha:** 23 de noviembre del 2010

**Magistrado Ponente:** Camilo Tarquino Gallego.

**Hechos relevantes:**

ERASMO ANTONIO MARIN CARMONA, ELVIA ROSA VEGA DE MARIN, DORA LUZ, HILDA MARIA y NELSON DE JESUS MARIN VEGA demandaron a la sociedad CURTIMBRES COPACABANA Y CATALUÑA S.A. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL, para que se le condene al pago de los perjuicios materiales y morales derivados del accidente de trabajo en el que perdió la vida su hijo y hermano JUAN ANTONIO MARÍN VEGA, así como las costas del proceso.

El demandante se encontraba vinculado a la empresa demandada desde el 25 de enero de 1995 hasta el 3 de junio de 2002, desempeñando el cargo de operario; el último día mencionado, fue enviado por el supervisor a hacer la limpieza de un “cárcamo” en compañía de otro trabajador de nombre Carlos Arias Catano; como consecuencia de los gases asfixiantes que se desprendían en cumplimiento de esa labor, el trabajador falleció.

La culpa habría consistido en que no se les dotó de los elementos de protección que eran necesarios para el desarrollo de su actividad, tales como “*caretas, botas de seguridad antideslizantes y ropa adecuada*”; tampoco se le suministró la instrucción requerida para realizar su trabajo, ya que era la primera vez que se le encomendaba esa tarea.

La Compañía Seguros Bolívar S.A., presentó demanda de INTERVENCIÓN AD EXCLUDEDUM en contra de los demandantes ERASMO ANTONIO MARIN y ELVIA ROSA VEGA DE MARIN, en la que solicita que se suspenda la actuación en este juicio, hasta tanto la sentencia del proceso que en su contra se adelanta ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito quede en firme y, si es adversa a sus intereses, se declare la subrogación legal de la ARP frente al tercero responsable del accidente. Así mismo solicita, que en el evento de llegar a demostrarse que existió culpa de la sociedad CURTIMBRES COPACABANA Y CATALUÑA S.A., en el accidente de trabajo en el que murió el trabajador, sea dicha sociedad la obligada a la indemnización total y ordinaria de perjuicios, y se ordene descontar del valor de la sentencia el monto de lo cancelado por la ARP; y que se ordene el pago a su favor del valor calculado para atender la pensión de sobrevivientes, si así se llegare a determinar en el proceso ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Medellín.



**Primera Instancia:**

Conoció del proceso el Juzgado Laboral del Circuito de Bello, quién a través de la sentencia calendada el 13 de julio de 2007, condenó a la sociedad CURTIMBRES COPACABANA Y CATALUÑA S.A. – COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL, a pagar los perjuicios materiales y morales a favor de los demandantes, en las sumas que allí se detallaron. Así mismo, absolvió a ERASMO ANTONIO MARIN CARMONA y ELVIA ROSA VEGA HERNANDEZ, de las pretensiones que en su contra le formuló la interviniente ad excludendum, COMPAÑÍA SEGUROS BOLIVAR S.A.

**Segunda Instancia:**

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, con sentencia del 17 de julio de 2008, confirmó la del juez de primer grado.

**Problema Jurídico:**

En aplicación de los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 12 del Decreto 1771 de 1994 ¿A los demandantes se les debe descontar de la indemnización plena de perjuicios, lo que les cancele la Administradora de Riesgos profesionales por concepto de pensión de sobrevivientes?

**Consideraciones de la Corte:**

*Para la Corte, es equivocado el entendimiento que el censor da a las normas denunciadas, por cuanto **una es la responsabilidad subjetiva derivada del accidente de trabajo que asume el empleador, y otra, muy distinta, es la objetiva a cargo de la entidad Administradora del Régimen de Riesgos Profesionales, pues mientras aquella requiere de la culpa suficientemente comprobada del siniestro laboral, ésta se causa con la sola ocurrencia del infortunio.***

**Ese sistema dual de responsabilidades derivado de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, no resulta incompatible, porque si bien es cierto, ambas cubren el mismo riesgo, esto es, el que se genera por la propia naturaleza del trabajo que se realiza, los supuestos fácticos para su causación y la fuente de donde emergen son diferentes, situación que conduce a concluir que no es procedente descontar de la indemnización plena y total de perjuicios, lo que haya cancelado la administradora de riesgos profesionales por el mismo siniestro, tal como lo ha advertido la Corporación en reiteradas ocasiones.**

*En consecuencia, ninguna razón le asiste al recurrente al endilgarle al Tribunal las violaciones a las normas legales denunciadas, pues, como se vio, no existió yerro jurídico alguno respecto del alcance que le fijó al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, amén de que no era aplicable a este caso el artículo 12 del Decreto 1771 de 1994, para con fundamento en tales preceptivas, acceder a descontar de la indemnización ordinaria de perjuicios que se dedujo a favor de los demandantes, lo reconocido por la Administradora de Riesgos Profesionales, “COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR .S.A.”*

**Aclaración de voto del Magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza (Ver ficha de sentencia del 26 de enero de 2010, Rad. 35271).**

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la**

**sentencia:**

Jurisprudencia.

**Decisión:**

No casa

**Jurisprudencia citada:**

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 26 de enero de 2010. M.P. Eduardo López Villegas y Luis Javier Osorio López. Rad 35271.

## Ficha de Jurisprudencia

### **Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil**

#### **Identificación:**

CSJ-L Sentencia del 30 de noviembre de 2010. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 35158.

**Corporación:** Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral

**Número de sentencia o radicación:** 35158

**Fecha:** 30 de noviembre del 2010

**Magistrado Ponente:** Camilo Tarquino Gallego.

#### **Hechos relevantes:**

MARTÍN FELIPE PERLAZA RIVERA demandó a HIDROCARBÓN SERVICES LTDA.-H.S. LTDA.-, a HOCOL S.A., y a la COMPAÑÍA SURAMERICANA ADMINISTRADORA DE RIESGOS PROFESIONALES Y SEGUROS DE VIDA S.A.-SURATEP S.A., para que, previos los trámites de un proceso ordinario laboral, se condene a la última al reconocimiento y pago de la pensión de invalidez, y a los intereses moratorios, y a las otras dos personas jurídicas, al resarcimiento de los perjuicios materiales, morales y fisiológicos sufridos por el demandante en cuantía de \$300.000.000.00, por lucro cesante; daño emergente por \$500.000.000.00; perjuicios morales por el equivalente a 1000 smlmv; y daño a la vida de relación, correspondiente a 1000 smlmv. Pidió condena en costas. En subsidio, impetró indemnización por incapacidad permanente parcial, equivalente a 24 veces el salario base de liquidación, y los intereses moratorios, hasta cuando se solucione la obligación. (folios 4, 5 y 6).

Hydrocarbón Services Ltda., es contratista de Hocol S.A., para la explotación del campo petrolero llamado La Hocha.

Se encontraba vinculado desde el 11 de abril de 2004 a la empresa Hydrocarbón Services Ltda., y el día 19 de septiembre del mismo año, al vaciar unas canecas desconociendo su contenido se intoxicó por inhalar una sustancia contenida en ellas.

La culpa habría consistido en que Hydrocarbón Services Ltda., y Hocol S.A., no cumplieron las normas de seguridad para el manejo del químico, pues carecía de etiqueta, además de encontrarse en el puesto de soldadura, expuesto a chispas, llamas, y a rayos solares, ni recibir capacitación técnica para la manipulación de aquella sustancia.

Como consecuencia de dicho suceso el demandante sufrió una pérdida de capacidad laboral superior al 50% por lo que tiene derecho a reclamar la pensión de invalidez a cargo de Suratep S.A., Administradora de Riesgos Laborales a la que se encontraba afiliado.

### Primera Instancia:

Conoció del proceso el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Neiva, quién a través de la sentencia calendada el 30 de abril de 2007, declaró que entre MARTIN FELIPE PERLAZA RIVERA e HYDROCARBON SERVICES LTDA., existió una relación laboral, y que el demandante sufrió un accidente de trabajo el 19 de septiembre de 2004, por culpa y negligencia del empleador; por ello, la condenó a pagar \$501.884.712.04, por concepto de lucro cesante consolidado, lucro cesante futuro, daños morales y alteración de condiciones de existencia; le impuso costas, y la absolvió de las demás pretensiones. Absolvió a Hocol S.A., y en consecuencia gravó con costas al actor, a favor de ésta sociedad.

Por su parte, Suratep S.A. en la cuarta audiencia de trámite celebrada el 4 de septiembre de 2006 (fls. 462 y ss.), concilió lo relativo al reconocimiento de la pensión de invalidez, lo que significó la terminación del proceso respecto de esta demandada, y por ese aspecto.

### Segunda Instancia:

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, con sentencia del 12 de diciembre de 2007, revocó la absolución de HOCOL S.a., y en su lugar, la hizo responsable solidariamente de las condenas impuestas a la otra demandada (artículo 31 CST). En lo demás, confirmó el fallo del a quo, y dejó las costas de la instancia, en un 80%, a cargo de las demandadas.

### Problema Jurídico:

¿Es admisible la compatibilidad entre la prestación a cargo del sistema de seguridad social (pensión de invalidez), y la indemnización ordinaria de perjuicios, consagrada en el estatuto sustancial laboral?

### Consideraciones de la Corte:

*Las anteriores directrices jurisprudenciales, permiten inferir que **los trabajadores que reciban una reparación integral de perjuicios, derivados de un accidente de trabajo por culpa patronal, y simultáneamente una pensión de invalidez, no acceden a una doble reparación por un mismo perjuicio, en la medida en que las fuentes legales son distintas**, y su teleología no es coincidente.*

*No obstante las juiciosas reflexiones de la censura, la Sala no variará su postura, dado que, **si bien el hecho generador de la pensión de invalidez, y de la indemnización plena de perjuicios, es uno sólo –el accidente de trabajo–, la prestación a cargo del sistema de seguridad encuentra venero en el riesgo creado a partir del simple desarrollo de una actividad por parte del trabajador, y la reparación plena de perjuicios, establecida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, cuya vigencia no se discute, encuentra su génesis en la culpa del patrono**. No menos cierto es que el propósito de las pensiones en general, y la de invalidez en particular, es garantizar la subsistencia del asegurado ante la ocurrencia de un evento que no le permita un ingreso; en cambio, lo que la norma del Código Sustantivo del Trabajo procura, es resarcir a la víctima por la conducta imprudente, negligente, ó premeditada, del empleador, que le ha reportado perjuicios al servidor.*

*En otras palabras, objetivamente el riesgo está presente en toda actividad humana, pero el acaecimiento de cualquier situación que afecte la salud o la capacidad de*

trabajo de una persona, puede tener origen en la conducta descuidada o negligente de su empleador, sin que ello signifique que, entonces, su responsabilidad desaparezca, porque precisamente tal conducta fue la que consagró el legislador.

En ese orden, es claro que, además de lo que tiene adoctrinado la Corte, **el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo tácitamente impone al empleador diligencia y cumplimiento de las normas sobre seguridad industrial y salud ocupacional, como complemento del mandato del artículo 56 del mismo ordenamiento, mientras que, la protección que brinda el sistema de seguridad social en riesgos profesionales, atiende el riesgo creado a partir de la subordinación a que queda sometido el empleado, merced a la celebración de un contrato de trabajo.**

**Piénsese no más en que si hay un accidente de trabajo, en el que no ha mediado culpa empresarial, ello solo da lugar al reconocimiento de las prestaciones económicas y en especie, a cargo de la aseguradora de riesgos profesionales; por ello, no es razonable que, ante un infortunio de igual talante, en el que la incuria del empleador haya sido factor determinante en su producción, la solución sea exactamente la misma. Ello implicaría, ni más ni menos, la impunidad de la falta de cuidado y diligencia que las reglas de derecho, y de convivencia imponen, no sólo en el ámbito de una comunidad laboral, sino de la sociedad en general.**

Cumple también acotar, que la pensión por invalidez que concede la ARP, no responde precisamente a un contenido resarcitorio, sino que se trata, simplemente, de que, ante la satisfacción de las exigencias legales, para la entidad de seguridad social surge la obligación de pagar dicha prestación, cuando el trabajador ha sido cubierto en el riesgo por el pago de los aportes, al paso que la reparación plena de perjuicios, tiene como fuente, esencialmente, el incumplimiento de quien tiene a su cargo “obligaciones de protección y seguridad para con los trabajadores”.

En consecuencia, no hay pago sin causa, ni enriquecimiento injustificado del trabajador accidentado, ni una supuesta incompatibilidad entre la pensión de invalidez y la indemnización plena de perjuicios, establecida en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.

**Aclaración de voto del Magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza (Ver ficha de sentencia del 26 de enero de 2010, Rad. 35271).**

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia.

**Decisión:**

No casa

**Jurisprudencia citada:**

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 22 de octubre de 2007, Rad. 27736. En ella se citan:

- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 15 de mayo de 2007, Rad. 28686.
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 7 de marzo de 2003, Rad. 18515.
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 25 de julio de 2002, Rad. 18520.
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 9 de noviembre de 2000, Rad. 14847.
- Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 12 de noviembre de 1993, Rad. 5868.

## Ficha de Jurisprudencia

### Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil

#### Identificación:

CSJ-L Sentencia del 1 de marzo de 2011. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 36815.

**Corporación:** Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral

**Número de sentencia o radicación:** 36815

**Fecha:** 01 de marzo de 2011

**Magistrado Ponente:** Elsy del Pilar Cuello Calderón

#### Hechos relevantes:

MAYRA TORRES PÉREZ a nombre propio y en representación de su menor hijo CAMILO ANDRÉS HERRERA TORRES demandó a la empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S. A. para que luego de que se declare que existió contrato de trabajo con su esposo y padre CÉSAR HUMBERTO HERRERA LÓPEZ del 3 de abril de 2000 al 19 de mayo de 2001 cuando terminó por muerte “en accidente de trabajo ocurrido por culpa del empleador”, se condene al pago de la indemnización “total y ordinaria de perjuicios materiales y morales causados”, a lo descontado y no girado al correspondiente fondo, por concepto de aportes al Régimen Especial de Pensiones, a lo que resulte probado extra y ultra petita y a las costas.

El trabajador falleció “a causa del accidente de trabajo al inhalar los gases altamente tóxicos que se producen en las calderas de la planta de alquitrán de ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A.”. La culpa de la empresa habría consistido en que esta no suministró los implementos necesarios para proteger la vida de sus trabajadores en estas actividades de riesgo, la empleadora fue negligente con las medidas de seguridad que debió tomar frente a quienes ejercen labores de alto riesgo expuestos a gases tóxicos.

Los demandantes solicitaron la pensión de sobrevivientes la cual les fue negada, “porque revisadas las bases de datos de recaudo y afiliación al Sistema de Riesgos Profesionales de la ARP del Seguro Social, no se encontró afiliación vigente del señor HERRERA a 19 de mayo de 2001, fecha del accidente con la Empresa ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A.”.

La demandada en la contestación de la demanda expuso que ante la negativa del ISS, la empresa “asumió directamente la pensión a favor de la cónyuge demandante y el hijo menor de edad, desde el 19 de mayo de 2001 fecha del fallecimiento del trabajador”.

#### Primera Instancia:

Conoció del proceso el Juzgado Laboral del Circuito de Duitama, quién a través de la sentencia calendada el 16 de febrero de 2007, declaró que el accidente en el que perdió la vida el trabajador “ocurrió por culpa de la empleadora ACERÍAS PAZ DEL RIO S.A.” y consecuentemente condenó a pagar a los demandantes por lucro cesante consolidado la suma de \$49.111.931,40 a cada uno; por lucro cesante futuro \$132.010.446,20 para la

esposa y \$69.907.000,00 al menor hijo; por daño moral, el equivalente a 600 s.m.l. vigentes a la fecha del pago para la esposa y 300, para el hijo; a devolverles la suma de "\$318.970,00 debidamente indexada, que corresponde a los valores retenidos y no consignados como aportes al sistema de seguridad social en pensiones" y a las costas del proceso.

Declaró igualmente que la empresa debería continuar pagándoles la "pensión de sobrevivientes, como lo ha hecho hasta ahora y mientras subsistan las circunstancias que generan el derecho".

#### **Segunda Instancia:**

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Rosa de Viterbo, en sentencia del 6 de marzo de 2008, confirmó en su totalidad la del a quo. Le impuso costas a la parte recurrente.

#### **Problema Jurídico:**

¿De la condena por indemnización plena de perjuicios se debe descontar lo que la demandada le paga a la actora y a su menor hijo, por pensión de sobrevivientes?

#### **Consideraciones de la Corte:**

*Esta Sala, en sentencia del 3 de junio de 2009 Rad. 35121, por mayoría de sus integrantes y con fundamento en varias decisiones relacionadas con el tema aquí planteado, precisó que **el derecho a la reparación como consecuencia de un accidente de trabajo tiene previstas 2 maneras de reparación con distinta finalidad:** la denominada "reparación tarifada de riesgos", de naturaleza prestacional, y objetiva, perteneciente al Sistema de Seguridad Social Integral, a cargo por regla general, de las Administradoras de Riesgos Profesionales y "la reparación plena de perjuicios", de claro carácter subjetivo, que corresponde asumirla directamente al empleador una vez demostrada suficientemente la culpa patronal, conforme con el artículo 216 del C. S. del T.*

*También se puntualizó que los causahabientes del fallecido que, como en el caso examinado, reciben una reparación integral por los perjuicios derivados de un accidente de trabajo por culpa patronal y simultáneamente un beneficio prestacional derivado de las normas sobre Seguridad Social, más concretamente del riesgo profesional, **"no están accediendo a un doble beneficio por un mismo perjuicio, en la medida que como se explicó su origen es disímil y obedecen a causas diferentes, sin olvidar que para estos casos la culpa y el dolo no son asegurables"**.*

*Así, no resulta posible deducir las sumas que por pensión de sobrevivientes le correspondió asumir a la demandada, por omitir su deber de afiliar al trabajador, del valor de la condena impuesta por reparación plena de perjuicios, con fundamento en el artículo 216 del C. S. del T.; en esa medida, es claro que el ad quem en cuanto no accedió a ello, no incurrió en el error jurídico que se le enrostra, aún cuando señalara de modo inadecuado que dicha preceptiva solo autoriza el descuento de pagos por concepto de "incapacidades".*



**Aclaración de voto del Magistrado Gustavo José Gnecco Mendoza (Ver ficha sentencia del 26 de enero de 2010, Rad. 35271).**

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia.

**Decisión:**

No casa

**Jurisprudencia citada:**

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 3 de junio de 2009 Rad. 35121.

## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CSJ-L Sentencia del 13 de marzo de 2012. M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 39798.
<b>Corporación:</b> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral <b>Número de sentencia o radicación:</b> 39798 <b>Fecha:</b> 13 de marzo del 2012 <b>Magistrado Ponente:</b> Jorge Mauricio Burgos Ruiz
<b>Hechos relevantes:</b>  Amparo Jiménez de Riaño e Irineo Riaño iniciaron un proceso ordinario contra Cementos Río Claro S.A para que se declare la existencia de la relación laboral entre JUVENTINO RIAÑO q.e.p.d. y la demandada; junto con la existencia de la culpa patronal por parte la empresa en el accidente de trabajo que le causó la muerte del trabajador. En consecuencia de lo anterior, se condene al pago de los perjuicios materiales, discriminados por daño emergente y lucro cesante, y por los perjuicios morales.  El contrato de trabajo se ejecutó entre el 30 de agosto de 1991 y el 28 de abril de 2000, fecha en que el trabajador falleció en accidente de trabajo por culpa patronal.  Basan la culpa en que la máquina que manipulaba no contaba con elementos de protección (sin guardas de seguridad y parada de emergencia a una altura inadecuada.  La demandada señala que no se presentaron los perjuicios reclamados en razón a que los demandantes recibieron y van a continuar recibiendo, en forma vitalicia, la pensión de sobrevivientes de parte de la ARP, en cuantía de \$540.110 mensuales, desde el 28 de abril de 2002, y los morales, a su juicio, no son procedentes dado que no hubo culpa patronal.
<b>Primera Instancia:</b>  El Juzgado Quinto Laboral de Descongestión del Circuito de Medellín, en octubre 16 de 2008, dirimió la instancia y condenó a la empresa demandada al pago de \$57.762.745, por concepto de indemnización de perjuicios materiales y morales a favor del padre del trabajador; y por \$78.513.418, por el mismo concepto, esta vez a favor de la madre del causante. Declaró no probada la compensación.
<b>Segunda Instancia:</b>  El Tribunal Superior de Medellín, mediante sentencia de 4 de diciembre de 2008, confirmó la condena impuesta mediante la sentencia de primer grado.
<b>Problema Jurídico:</b>

¿Es posible que el empleador condenado a pagar la indemnización de que trata el art. 216 del CST deduzca las sumas que ha pagado la entidad de seguridad social (ARP hoy ARL) a título de pensión de sobrevivientes?

**Consideraciones de la Corte:**

*El recurrente se duele de que la sentencia de segunda instancia incurrió en infracción directa, falta de aplicación, de los artículos 216 y 218, Ley 776 de 2002, 11 a 14; D. 1771 de 1994 artículo 12 inciso 2º, reglamentario del D. 1295 de 1994, concordado con los artículos 63, 1613 y 1614 del CC.*

*Observa la Sala que, contrario a lo dicho por el censor, el ad quem sí aplicó los artículos 216 y 218 del CST, pues hizo alusión expresa a ellos para resolver las pretensiones como quedó atrás reseñado, por lo que no pudo incurrir el tribunal en la violación achacada.*

**Con todo, el ad quem al negar la compensación de la condena impuesta a la demandada por indemnización plena de perjuicios con el pago que ha realizado la ARP por concepto de pensión de sobrevivientes, sobre lo cual, a la postre, recae el ataque del impugnante con los reparos 1º y 3º anotados, no hizo más que seguir el precedente mayoritario que viene aplicando esta Corte en múltiples casos, verbigracia en la sentencia 35121 de 2009, reiterada en la 36815 de 2011; en aquella esta Sala resolvió el punto de inconformidad de la censura como sigue: (...)**

**Por tanto, conforme al precedente citado que actualmente sigue esta Sala, no es posible compensar las sumas que resulta a deber la empresa a título de lucro cesante, por los perjuicios materiales incluidos en la reparación integral del daño, en aplicación del artículo 216 del CST, con las recibidas por concepto de pensión de sobrevivientes, por tratarse de obligaciones diferentes. Lo cual fue justamente lo que dispuso el ad quem.**

(...)

*Es evidente que el censor, al formular el 2º reparo de cara al salario tomado por el ad quem para liquidar el lucro cesante, no atendió a los razonamientos expuestos por el Tribunal, pues este sí tuvo en cuenta el salario básico, a más que lo indexó por las razones anotadas e incluyó lo que dejaba de devengar el trabajador no solo por salario, sino por cesantías, intereses a la cesantía, prima de servicios y cualquier otra prima, sin incluir las vacaciones, lo cual, efectivamente, hace parte del lucro cesante.*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Art. 216 CST, 218 CST, Jurisprudencia

**Decisión:**

No Casa

**Jurisprudencia citada:**

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 3 de junio del 2009 M.P. Luis Javier Osorio López Rad. 35121

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sentencia del 1 de marzo de 2011. M.P. Elsy del Pilar Cuello Calderón. Rad. 36815.

## Ficha de Jurisprudencia

### **Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil**

#### **Identificación:**

CSJ-L Sentencia del 20 de junio de 2012. M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 42374.

**Corporación:** Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral

**Número de sentencia o radicación:** 42374

**Fecha:** 20 de junio del 2012.

**Magistrado Ponente:** Camilo Tarquino Gallego.

#### **Hechos relevantes:**

Proceso ordinario promovido por ROSA MARLENE CUERVO NIETO, en nombre propio, y en el de sus menores hijos SANDRA XIMENA, IVETT DANIELA, y DIEGO ENRIQUE REINA CUERVO contra PROCESADORA DE LECHES S.A. –PROLECHE S.A.-, con el objeto de que se declarara la responsabilidad civil de la demandada por los perjuicios, materiales y morales, causados con ocasión del accidente de trabajo, acaecido el 30 de abril de 2002, en el que perdió la vida su esposo y padre, Jesús Daniel Reina Bojacá, *“por fallas en la seguridad industrial de los equipos de trabajo y del Jefe de Mantenimiento de la planta (...), sin perjuicio de la responsabilidad laboral a que se halla obligada con los sobrevivientes”*. Pidió, entonces, que se condenara a la empresa a reparar dichos perjuicios, en cuantía de \$140.000.000.00, por lo menos, que deberán actualizarse, a más de los intereses legales, y las costas del proceso.

El demandante se encontraba vinculado a la empresa demandada desde el 19 de abril de 1993 hasta el 30 de abril de 2002, cuando se produjo su deceso por causa del accidente presentado durante el desempeño de las labores propias de su oficio de mecánico

La culpa habría consistido en que no se hizo el seguimiento de rigor a una caldera recién reparada, que fue objeto de modificaciones, sin observar las medidas de seguridad requeridas.

La demandada llamó en garantía a la Administradora de Riesgos Profesionales Suratep.

#### **Primera Instancia:**

Conoció del proceso el Juzgado Laboral del Circuito de Zipaquirá, quién a través de la sentencia calendada el 16 de enero de 2006, desestimó las pretensiones y absolvió a la demandada.

#### **Segunda Instancia:**

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, con sentencia del 3 de diciembre de 2008, revocó la sentencia del a quo, y condenó a la enjuiciada a favor de los accionantes por diferentes sumas, a título de perjuicios materiales y morales, con

costas en ambas instancias a la demandada.

Determina que hubo actitud negligente y poco cuidadosa por parte de la demandada al continuar operando la máquina que venía presentando inconvenientes. *sin que sea necesario calificar la intensidad de dicha culpa por cuanto en la hipótesis del artículo 216 del C. S. de T. el patrono responde por culpa levisima, y tanto por los actos propios como por los de sus dependientes; situación que descarta, de paso y en forma terminante, que el infortunio se haya originado en culpa exclusiva de la víctima”.*

**Problema Jurídico:**

¿Hubo culpa del empleador en el accidente de trabajo que le ocasionó la muerte al trabajador? ¿Es posible descontar del monto de la indemnización a cargo del empleador el valor reconocido a los demandantes por parte de la Administradora de Riesgos Laborales por concepto de prestaciones derivadas del accidente de trabajo como la pensión de sobrevivientes?

**Consideraciones de la Corte:**

*Con todo, cumple acotar que lo que la línea jurisprudencial de esta Sala de la Corte ha decantado, es que conforme al texto del precepto legal varias veces citado, el éxito de la pretensión indemnizatoria está supeditado a la cabal demostración de la culpa del empresario en la producción del resultado dañoso para el asalariado.*

*Encuentra infundado el cargo que solicita que se ordene descontar del monto de la indemnización el valor en dinero reconocido a los demandantes por parte de la llamada en garantía, por concepto de prestaciones derivadas del accidente de trabajo (pensión de vejez (sic), y devolución de aportes por muerte del trabajador)”, dada los reiterados pronunciamientos de esta Sala de la Corte, entre otros varios, el que cita y transcribe la opositora.*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia.

**Decisión:**

No casa

**Jurisprudencia citada:**

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia de 23 de noviembre de 2010, M.P. Camilo Tarquino Gallego. Rad. 37754.

## Ficha de Jurisprudencia

### Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil

#### Identificación:

CSJ-L Sentencia del 14 de agosto de 2012. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez. Rad. 39446.

**Corporación:** Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral

**Número de sentencia o radicación:** 39446

**Fecha:** 14 de agosto de 2012

**Magistrado Ponente:** Francisco Javier Ricaurte Gómez

#### Hechos relevantes:

VIDAL GÁFARO llamó a juicio a la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAMPLONA “EMPOPAMPLONA S.A. ESP.”, con el fin de que previa declaratoria de la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre las partes, “TERMINADO POR LA DEMANDADA AL OCURRIR EL ACCIDENTE DE TRABAJO EL 8 DE MAYO DE 1997, POR FALTA DE MEDIDAS DE PREVENCIÓN e INCUMPLIMIENTO de NORMAS de SALUD OCUPACIONAL; y que durante la existencia del contrato de trabajo, realizó las funciones de recolección de basuras, fuera condenada a cancelar los daños y perjuicios materiales a título de daño emergente y lucro cesante consolidado y futuro por el accidente de trabajo ocurrido durante la relación laboral y por culpa patronal; los daños morales objetivados y subjetivados por el valor de 500 salarios mínimos legales vigentes al momento de la sentencia; reparación plena y ordinaria de perjuicios; sumas que deben ser indexadas, interés corriente o interés moratorio; y, costas y agencias en derecho.

El demandante se desempeñó como recolector de basuras; fue afiliado por la demandada a Riesgos ATEP a la ARP ALFA; el 8 de mayo de 1997, cuando estaba ejerciendo funciones de recolección de basuras, sufrió un accidente de trabajo. La culpa de la empresa habría consistido en que al momento del accidente el trabajador no contaba con los elementos de protección y seguridad industrial requeridos para ese tipo de labores, encontrándose por orden de la demandada y sin tomar las mínimas medidas de seguridad en el interior del volteo del automotor tipo volqueta.

Inició el período de incapacidad temporal a partir del 28 de mayo de 1997, hasta el 11 de septiembre de 2001, fecha de declaración de la incapacidad permanente parcial determinada por la Junta Nacional de Invalidez con porcentaje del 44.30% de pérdida de capacidad laboral de origen profesional.

La ARP procedió a pagar al actor el día 24 de junio de 2003 la suma de \$6'191.900,00 como indemnización tarifada producto de dicha incapacidad, a más de prestarle los servicios asistenciales requeridos.

#### Primera Instancia:

Conoció del proceso el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Pamplona, quién a través de la sentencia calendada el 22 de abril de 2008, resolvió:

(...)

QUINTO. NO RECONOCER NI ORDENAR A PAGAR A EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P., suma de dinero alguna a favor de VIDAL GÁFARO, por concepto de indemnización.

#### Segunda Instancia:

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, en sentencia del 13 de agosto de 2008, revocó la sentencia del a quo y, en su lugar, rechazó las pretensiones incoadas; y se abstuvo de imponer costas.

Manifestó que el a quo, se equivocó en las apreciaciones, pues antes de estudiar la excepción de prescripción propuesta, debió analizar, si efectivamente a la entidad demandada le correspondía o no cumplir con el pago de las pretensiones demandadas como consecuencia del accidente de trabajo padecido por el demandante.

#### Problema Jurídico:

La controversia jurídica radica en el derecho que cree tener el recurrente a la indemnización por parte del empleador, pues considera que existió culpa patronal en el accidente de trabajo; y, que el Tribunal estaba obligado a dilucidar el asunto debatido “al amparo de la culpa patronal alegada y no a la indemnización por Incapacidad Permanente Parcial derivados de la responsabilidad objetiva”.

#### Consideraciones de la Corte:

*Para la Sala, en efecto, desconoce el Tribunal en su pronunciamiento, que **en materia de riesgos profesionales, surgen dos clases de responsabilidad claramente diferenciadas; una de tipo objetivo**, derivada de la relación laboral, que obliga a las administradoras de riesgos profesionales a atender y reconocer a favor del trabajador, las prestaciones económicas y asistenciales previstas por el Sistema de Riesgos Profesionales en tales eventos, prestaciones que se generan al momento en que acaece el riesgo profesional amparado, para cuya causación resulta indiferente la conducta adoptada por el empleador, pues se trata de una modalidad de responsabilidad objetiva prevista por el legislador con la finalidad de proteger al trabajador de los riesgos propios a los que se ve expuesto al realizar la actividad laboral.*

***Tenemos también la responsabilidad civil y ordinaria de perjuicios prevista en el artículo 216 del C.S.T.**, ésta sí derivada de la “culpa suficientemente probada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional”, que le impone al empleador la obligación de resarcir de manera plena e integral los perjuicios ocasionados al trabajador como consecuencia de los riesgos profesionales que sufra,*



siempre que en este último caso medie culpa suya debidamente probada en punto de su ocurrencia.

*Aplicando dicho precedente al caso de autos, se advierte sin mayor esfuerzo que el Tribunal sí incurrió en los yerros jurídicos que se le atribuyen, pues es claro que **aquí no se propuso como tema de debate lo atinente a las prestaciones económicas derivadas del sistema de riesgos profesionales con ocasión del accidente de trabajo, caso de la indemnización por incapacidad permanente parcial que le fue reconocida al demandante por la ARP ALFA, según lo tuvo por acreditado el Tribunal, sino que, contrariamente, la litis se orientó a obtener el resarcimiento por los perjuicios que el accidente de trabajo ocurrido el 8 de mayo de 1997 le ocasionó al demandante, y que atribuye a culpa del empleador.***

*En tal virtud, el cargo prospera, por ser lo cierto que la Ley 776 de 2002, que introdujo normas sobre la organización, administración y prestaciones del Sistema General de Riesgos Profesionales, no es la llamada a regular el presente asunto, presentándose entonces la indebida aplicación de dicha preceptiva, tal como lo propuso el extremo recurrente, por debatirse en realidad lo atinente a la responsabilidad ordinaria y plena de perjuicios, por culpa del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo en mientes, siendo entonces el precepto que rige la materia, el artículo 216 del C.S.T., disposición que, se advierte, omitió el ad quem en su decisión.*

*Es así como, para esta Corte, se encuentra más que demostrada la omisión de Empopamplona S.A. E.S.P. frente a su obligación legal de ofrecer a su trabajador Vidal Gáfaró mínimas medidas de seguridad para el ejercicio seguro de su labor como recolector de basuras, tal como sería el suministro de elementos de seguridad industrial indispensables para precaver accidentes o enfermedades profesionales, el suministro de dotación adecuada para la actividad por él cumplida, y el deber de capacitarlo sobre la actividad a cumplir.*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia.

**Decisión:**

CASA la sentencia proferida por la Sala Única de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pamplona, el 13 de agosto de 2008, dentro del proceso ordinario laboral promovido por VIDAL GÁFARO contra EMPOPAMPLONA S.A. E.S.P., en cuanto revocó la dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa misma urbe el 22 de abril de 2008, y que en su lugar dispuso el rechazo de las pretensiones de la demanda y, en sede de instancia, REVOCA los ordinales cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo de la sentencia del juzgado a quo en cuanto declaró probada la excepción de prescripción propuesta por la pasiva y dispuso la consecuencial absolución de la demandada, para en su lugar, CONDENAR a EMPOPAMPLONA S.A. ESP. a pagar al demandante la suma de \$197'659.711,32, por perjuicios materiales en el concepto de lucro cesante, así como la suma de \$25.000.000 correspondiente a perjuicios morales. No la casa en lo demás. SE DECLARAN no probados los demás medios exceptivos de conformidad con las razones expuestas en precedencia.

**Jurisprudencia citada:**

Sobre el tema bajo estudio, valga recordar, la sentencia de esta Sala del 3 de junio de 2009, radicación 35121, reiterada entre otras, en la del 1 de marzo de 2011, radicación 36815.

## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CSJ-L Sentencia del 16 de octubre de 2013. M.P. Carlos Ernesto Molina Monsalve. Rad. 42433.
<b>Corporación:</b> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral  <b>Número de sentencia o radicación:</b> 42433  <b>Fecha:</b> 16 de octubre de 2013  <b>Magistrado Ponente:</b> Carlos Ernesto Molina Monsalve
<b>Hechos relevantes:</b>  <p>RÓBINSON PÉREZ ACUÑA y MARGARITA ESTHER ROA, en nombre propio y en representación de sus menores hijos WILDER, DIANINE y JHON JAIRO PÉREZ ROA llamaron a juicio a la sociedad PROMOTORA HACIENDA LAS FLORES y el señor CARLOS ROBERTO MURGAS GUERRERO y, solidariamente, contra sus socios CARLOS ROBERTO MURGAS GUERRERO, RAMIRO DÁVILA DANGOND, JAIME ALBERTO GUTIERREZ ESCOLAR, EXCEQUIEL DÁVILA DANGOND, CARLOS MARIO PELÁEZ DANGOND y JULIO EDUARDO ANGULO BUITRAGO, para que una vez se declare que entre el señor JÁIDER PÉREZ ROA y la sociedad PROMOTORA HACIENDA LAS FLORES existió un contrato de trabajo, el cual fue terminado por la muerte del trabajador ocurrida en accidente laboral el 23 de agosto de 2004, sean condenados a reconocerles y pagarles, debidamente indexados, los perjuicios materiales y morales, la indemnización del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, como consecuencia del accidente de trabajo sufrido por su hijo y hermano Jáider Pérez Roa; la pensión de sobrevivientes; cesantías, primas de servicios, auxilio funerario, el excedente de los salarios que tenga deducciones del más del 30% del sueldo mensual y las costas del proceso.</p> <p>Jaider Pérez Roa falleció el día 23 de agosto de 2004, a raíz de una descarga eléctrica, <i>“mientras podaba un árbol de algarrobillo cuyas ramas tropezaban con líneas eléctricas de alta y baja tensión”</i>; que dicho infortunio fue un accidente de trabajo por culpa del empleador; que desarrollaba labores de limpieza y que no fue afiliado al sistema general de seguridad social.</p>
<b>Primera Instancia:</b>  Conoció del proceso el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Valledupar, quién condenó a CARLOS ROBERTO MURGAS GUERRERO a reconocer y pagar a ROBINSON PÉREZ ACUÑA y MARGARITA ESTHER ROA, padres de JÁIDER PÉREZ ROA, lo siguiente: (i) \$57.705,00 por auxilio de cesantía; (ii) \$931,00 a título de intereses sobre cesantía; (iii) \$57.705,00 por concepto de prima de servicios; (iv)

\$26.253,33 por compensación de vacaciones; (v) \$84.500,89 a título de reembolsos por deducciones ilegales; (vi) pensión de sobrevivientes a razón de \$358.000,00 mensuales, a partir del 23 de agosto de 2004, “ a favor de ROBINSON PÉREZ ACUÑA y MARGARITA ESTHER ROA, en un 50% para cada uno, tanto en sus mesadas ordinarias y adicionales de junio y diciembre, más sus incrementos anuales e intereses moratorios, conforme a la parte motiva”. Absolvió de las restantes súplicas y a la vencida le impuso costas.

#### **Segunda Instancia:**

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, con sentencia del 28 de abril de 2009, confirmó íntegramente el fallo recurrido. Sin costas.

#### **Problema Jurídico:**

¿El lucro cesante y la pensión de sobrevivientes son conceptos autónomos e independientes? ¿Se pueden acumular?

#### **Consideraciones de la Corte:**

*De vieja data ha enseñado la jurisprudencia, **según doctrina de la Corte aun inalterable, que no es posible compensar las sumas que resulta a deber el empleador a título de lucro cesante, por los perjuicios materiales incluidos en la reparación integral del daño, en aplicación del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, con las recibidas por concepto de pensión de sobrevivientes, por tratarse de obligaciones diferentes.***

*Recuérdese que el empleador incurrió en una doble falta: (i) incumplió con el deber de afiliar a su trabajador al sistema general de riesgos profesionales, hoy laborales, lo que conlleva, en virtud de lo establecido en el artículo 91 del Decreto 1295 de 1994, a que asuma la pensión de sobrevivientes, y (ii) en la ocurrencia del suceso medió su culpa, lo que implica la reparación plena de perjuicios a la luz de estatuido en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.*

**Entonces, si habiendo tenido afiliado al causante a dicho sistema, el empleador no habría podido descontar de las prestaciones pagadas por la ARP del monto de la indemnización a su cargo de empleador, con mayor razón cuando no lo afilió.**

*Emerge paladinamente que los padres y hermanos del causante JÁIDER PÉREZ ROA se encuentran legitimados para pedir para ellos la reparación plena de los perjuicios por la muerte de la víctima directa, según las voces del artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo.*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia.

**Decisión:**

Casa parcialmente la sentencia del Tribunal en cuanto confirmó la absolución dispuesta por el juez de primera instancia en torno a la indemnización por lucro cesante consolidado y futuro de RÓBINSON PÉREZ ACUÑA y MARGARITA ESTHER ROA y por los perjuicios morales de estos y de WILDER, DIANINE y JHON JAIRO PÉREZ ROA. No se casa en lo demás.

En sede de instancia, se revoca la decisión del juzgado en cuanto absolvió de la indemnización por lucro cesante consolidado y futuro y por los perjuicios morales y, en su lugar, se CONDENA al señor CARLOS ROBERTO MURGAS GUERRERO a reconocer y pagar por los daños patrimoniales( lucro cesante consolidado y futuro)a la señora MARGARITA ESTHER ROA y al señor RÓBINSON PÉREZ ACUÑA, y a pagar los perjuicios morales causados a todos los demandantes.

**Jurisprudencia citada:**

Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral. Sala Plena. Sentencia del 12 de noviembre de 1993. M.P. Rafael Méndez Arango Rad. 5868.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, Sentencia del 13 de marzo de 2012, M.P. Jorge Mauricio Burgos Ruiz. Rad. 39.798.

## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CSJ-L Sentencia del 6 de noviembre de 2013. M.P. Rigoberto Echeverri Bueno. Rad. 38377
<b>Corporación:</b> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Laboral <b>Número de sentencia o radicación:</b> 38377 <b>Fecha:</b> 6 de noviembre del 2013 <b>Magistrado Ponente:</b> Rigoberto Echeverri Bueno
<b>Hechos relevantes:</b>  Emma Sofía Bohórquez Briceño demandó a la sociedad Pollo Andino Ltda en concordato para que, fuera condenada a reconocerle y pagarle, entre otros, la indemnización de perjuicios materiales y morales, que le fueron irrogados por causa de la muerte de su cónyuge, Marco Lino González García.  El trabajador sufrió un accidente de trabajo que lo dejó en estado de invalidez y posteriormente falleció (se desconoce si el motivo de la muerte fue el accidente de trabajo). No contaba con elementos de protección personal, no había sido capacitado para ejercer las labores fruto de las cuales se produjo el accidente, etc. Se alega por lo tanto una culpa patronal.  La ARP del ISS le otorgó a la demandante una pensión de sobrevivientes.
<b>Primera Instancia:</b>  Mediante sentencia del 6 de julio de 2007, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá absolvió a la demandada de todas y cada una de las pretensiones de la demanda.
<b>Segunda Instancia:</b>  El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, confirmó en todas sus partes la de primera instancia.
<b>Problema Jurídico:</b>  ¿Es posible que el empleador descuente las sumas pagadas por la ARL a título de pensión de sobrevivientes de la indemnización plena de perjuicios a que haya lugar?
<b>Consideraciones de la Corte:</b>  <i>Sobre la responsabilidad que le cabe al empleador frente a los riesgos profesionales, esta Sala, en múltiples ocasiones, ha expresado que existen dos modalidades indemnizatorias, con identidades jurídicas propias: Una, orientada al reconocimiento de una indemnización con fundamento en la responsabilidad objetiva que la ley estableció a cargo generalmente del Sistema de Riesgos Profesionales, sin tener en</i>

*cuenta la culpa, proyectada a reparar el daño sufrido por el trabajador o su grupo familiar como consecuencia de un accidente de trabajo o enfermedad profesional, para lo cual se acude, para el resarcimiento del perjuicio, a la tarifa legal respectiva, según la remuneración de la víctima y la secuela sufrida; y la otra, referida a la indemnización plena y ordinaria de perjuicios, de que trata el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que obliga a resarcir todos los daños causados con la enfermedad o el accidente en favor del trabajador o de sus causahabientes, según el caso, por lo cual se exige de quien se considere beneficiario, la demostración plena de la culpa del empleador en la causación de la desgracia.*

*En dichas modalidades la responsabilidad es contractual, pero en la última se examina con rigor el incumplimiento por parte del empleador de las obligaciones derivadas del contrato de trabajo y de las disposiciones legales de prestar protección y seguridad a sus trabajadores, que implican el deber especial de entregarles los elementos de seguridad necesarios, ubicarlos en locales apropiados y de prevenir cualquier riesgo que pueda perjudicarlos.*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Art. 216 CST.

**Decisión:**

No Casa (No aparece probada la culpa del empleador)

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia del 3 de junio de 2009, radicación 35121  
Sentencia del 1 de marzo de 2011, radicación 36815.

## Ficha de Jurisprudencia

### Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil

#### Identificación:

CSJ-CyA Sentencia del 3 de septiembre de 1991. M.P. Pedro Lafont Pianetta Gaceta No. 2451

CSJ-C. Sentencia del 9 de septiembre de 1991. M.P. Pedro Lafont Pianetta. En: Revista Jurisprudencia y Doctrina. Tomo XX No. 239, Noviembre de 1991.

**Corporación:** Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil

**Número de sentencia o radicación:** Gaceta 2451

**Fecha:** 3 de septiembre de 1991

**Magistrado Ponente:** Pedro Lafont Pianetta

#### Hechos relevantes:

Rafael Vicente Salvat Vélez demandó a Gaseosas de Sure S.A. para que se declare civilmente responsable de los perjuicios sufridos en accidente que padeció por un camión de la empresa demandada que le estripó la pierna.

El demandado se defendió alegando que en el demandante había un ánimo de enriquecimiento sin causa porque el empleador continuó prestando sus servicios a la empresa devengando el salario normal para su oficio y recibió los valores de los servicios médicos, quirúrgicos, y las indemnizaciones laborales correspondientes. Llamó en garantía a la aseguradora Grancolombiana S.A.

#### Primera Instancia:

Declaró a la demandada civilmente responsable y condenarla al pago de perjuicios (in genere).

#### Segunda Instancia:

El Tribunal confirmó la decisión de primera instancia.

#### Problema Jurídico:

¿Es posible que el demandante acumule prestaciones que haya dado su patrono en virtud de un accidente de trabajo, con las indemnizaciones a que haya lugar por existir un evento de responsabilidad civil?

#### Consideraciones de la Corte:

*1a. La obligación de indemnizar los perjuicios causados sin que acarree enriquecimiento constituye un principio general del derecho privado, que tiene aplicación aun cuando concurra con fenómenos de otra naturaleza.*



1.1. Ciertamente puede decirse cuando el artículo 2341 del Código Civil prescribe que “el que ha cometido un delito o culpa, que ha inferido daño a otro, es obligado a la indemnización”, se adopta, en armonía con el inciso 2 del artículo 1649 del Código Civil, el principio según el cual la prestación de la obligación resarcitoria llamada indemnización, tiene como límite cuantitativo aquel que, según su función de dejar indemne (sin daño), alcance a reparar directa o indirectamente el perjuicio ocasionado, para el restablecimiento, en sus diferentes formas, de la misma situación patrimonial anterior, lo que a su vez, indica, de una parte, que aquélla debe ser completa para que como satisfactoria extinga la obligación correspondiente y, de la otra, no se constituya, el mismo daño como causa o fuente idéntica de indemnización y también como fuente de enriquecimiento para el victimario, pues éste desborda dicha cobertura indemnizatoria. Por lo tanto, un daño sólo puede ser indemnizado una sola vez, sin que sea posible recibir o acumular varias prestaciones con funciones indemnizatorias que excedan la reparación total del daño, en tanto que son admisibles las que carezcan de esta función (v. gr. donaciones).

Esta regla tiene operancia no sólo en los casos en que el mismo deudor efectúa la cancelación correspondiente, donde normalmente no existen dificultades de aplicación, sino que también debe observarse en aquellos eventos en que terceros, contra o con la voluntad (ocasional o previamente garantizada), hace entrega de una cosa al perjudicado. Porque sólo cuando esa entrega constituye una indemnización para este y se hace para reparar el perjuicio y no en virtud de una causa con función diferente (v. gr. una donación), constituye un pago de un tercero, que extingue la obligación originaria sin perjuicio de la repetición pertinente (arts. 1631 y 1632 C.C), pero en ningún caso puede el acreedor exigir un doble pago. Y de igual manera, por ser el valor del seguro, en los contratos de seguros de daños y responsabilidad, una prestación con carácter estrictamente indemnizatoria, la jurisprudencia (Sent. 22 de julio de 1943, C.J. Tomo LV, pág. 76) y la legislación (art. 1088 C.Co) disponen que el perjudicado no puede acumular la indemnización particular con el valor del seguro por concepto del mismo daño, pues el seguro (sin perjuicio de la subrogación correspondiente) extingue totalmente la obligación de indemnizar, o, en caso de ser inferior, debe ser deducida de ésta.

1.2 Ahora bien, el mismo criterio deberá seguirse cuando de acuerdo con las reglas civiles se pretenda establecer la responsabilidad civil y obligación de un particular de indemnizar a una persona, que, por estar amparada por una relación laboral preexistente con un tercero (distinto del victimario), al momento de ocasionársele el daño, ha obtenido beneficios o ventajas laborales.

**Por lo tanto, como quiera que estos beneficios laborales, si bien tienen una fuente mediata distinta (la relación laboral) y una clasificación diferente como de prestaciones no económicas (v. gr. de asistencia de personas, auxilios médicos, farmacéuticos, hospitalaria, quirúrgica, etc.) y económicas (v. gr auxilios monetarios salariales indemnizaciones individuales, etc.), que tienen su causa y finalidad en la protección social del trabajo a cargo del empleador para con el trabajador; no es menos cierto, que se trata de prestaciones funcionalmente indemnizatorias, de reparación inmediata que se le impone (por la utilidad que deriva de la labor) y cumple ese tercero, con, entre otras, las siguientes consecuencias: de una parte, que la víctima no puede acumular el cumplimiento de estas prestaciones laborales auténticamente indemnizatorias y el derecho a pedir al**

**tercero victimario indemnización por el mismo concepto (v. gr. gastos médicos, farmacéuticos, hospitalarios, etc.), sino los no satisfechos (v. gr. partes salariales no recibidas, aumentos, etc.) y de la otra, que la entidad empleadora canceladora goza del derecho de repetición contra el victimario por el valor de las prestaciones laborales cumplidas. Todo lo cual se entiende sin perjuicio de que en forma inequívoca se trata de un cumplimiento a título de donación y no indemnizatorio, caso en el cual el derecho a la indemnización queda intacto contra el tercero.**

1.3. Ahora bien, corresponde al juzgador en la respectiva sentencia de condena adoptar la forma específica o genérica que desarrolle tal principio, bien sea determinando exactamente lo que comprende (positiva) o expresa o genéricamente lo que no comprende (negativa) la condena; o podrá en caso de condenar en abstracto (art. 307 del C.P.C., vigente para la época) diferir el punto para que fuese objeto de controversia en la etapa liquidatoria, cuando hubiese estimado lo cuantitativo probatoriamente insuficiente.

(...)

2.1.3 Luego, si de lo anterior se desprende claramente que el Tribunal, al confirmar el fallo del a quo, adoptó una condena en abstracto, para ser liquidada posteriormente conforme, entre otros, al “factor” del reembolso por los gastos demostrados y efectuados directamente por el demandante (destacado nuevamente la Sala), se concluye que la condena in genere, ni en la liquidación posterior comprendió, ajustándose por demás a lo arriba expuesto, gastos hechos por personas o entidades distintas del demandante.

2.2. Siendo así las cosas, la acusación del segundo cargo por no haberse descontado de la condena los gastos hechos por personas distintas al demandante (y concretamente por el Ministerio de Obras como patrón de la víctima), carece de total asidero jurídico.

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Arts. 1631 y 1632 Código Civil

Art. 2341 del Código Civil

inciso 2 del Art. 1649 del Código Civil

**Decisión:**

Casa (no frente al cargo planteado)

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia del 22 de julio de 1943, C.J. Tomo LV, pág. 76

## Ficha de Jurisprudencia

### Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil

#### Identificación:

CSJ-CyA Sentencia del 24 de junio de 1996. M.P. Pedro Lafont Pianetta. Rad. 4662

**Corporación:** Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil

**Número de sentencia o radicación:** 4662

**Fecha:** 24 de junio de 1996

**Magistrado Ponente:** Pedro Lafont Pianetta

#### Hechos relevantes:

Alix María Quiñones Aceros en nombre propio y en representación de sus hija menor, y Pedro Quiñones demandaron a la Empresa Cooperativa Santandereana de Transportes Ltda. Y a Jesús María Jaimes para que se les declare civilmente responsables por la muerte de Edelberto Niño Granados y de las lesiones sufridas por Pedro Quiñones Gómez, como consecuencia de un accidente de tránsito (colisión de vehículo del demandado afiliado a la empresa demandada, con motocicleta conducida por Edelberto Niño) y se condene al pago de los perjuicios sufridos.

Los perjuicios materiales fueron pagados a Pedro Quiñones por la empresa donde laboraba, razón por la cual sólo demandó perjuicios morales.

El ISS reconoció a los familiares una pensión de sobrevivientes (origen común)

#### Primera Instancia:

El Juzgado tercero Civil del Circuito de Bucaramanga, mediante sentencia del 9 de diciembre de 1992 declaró civilmente responsables a los demandados.

#### Segunda Instancia:

El Tribunal confirmó la decisión de primera instancia, y modificó las condenas impuestas.

*10.- De otro lado, el sentenciador expresa que para calcular el lucro cesante anticipado, han sido descontados los valores pagados a las demandantes Alix Marina Quiónez y Lizeth Karina Niño Quiñones por el Instituto de Seguros Sociales- Santander-, que equivalen a \$ 117.764 y \$ 151.145, en su orden.*

#### Problema Jurídico:

¿Es posible que un sujeto que es declarado civilmente responsable descuenta de la indemnización a que haya lugar las sumas percibidas por los demandantes a título de pensión de sobrevivientes de origen común?

#### Consideraciones de la Corte:

3.3.1.- Tal cual aparece demostrado en el expediente, a la fecha del fallecimiento de Edelberto Niño Granados (27 de junio de 1986), éste era trabajador al servicio de la Electrificadora de Santander S.A., y, en consecuencia, al momento de su muerte, con las condiciones y el lleno de los requisitos legales para el efecto, su cónyuge Alix Marina Quiñonez y su hija Lixeth Karina Niño Quiñones, adquirieron el derecho a devengar la suma correspondiente a la pensión de sobrevivientes, que tiene su origen en la relación de índole laboral que ligaba al de cujus con la empresa mencionada y en su carácter de afiliado al Instituto de los Seguros Sociales, prestación ésta que es por completo independiente por la responsabilidad civil extracontractual cuya declaración solicitaron al iniciar este proceso contra los recurrentes en casación, como quiera que esta indemnización tiene origen en el accidente causado por el vehículo XK-5842, afiliado a la Empresa Copetrán Ltda., en desarrollo de una actividad peligrosa. De suerte que, siendo independiente la causa de estas prestaciones a favor de la viuda y la hija de Edelberto Niño Granados, mal podría aceptarse que la parte demandada pudiese descontar del monto de la indemnización por ella debida, el valor de las sumas pagadas a las demandantes en virtud de la relación laboral que su esposo y padre tenía con una empresa diferente y, como trabajador afiliado al ISS, pues, en tal caso, el responsable civilmente de una actividad peligrosa, a la postre resultaría obteniendo un beneficio de lo que las leyes de carácter laboral han previsto en beneficio del trabajador y su familia, sin que hubiere ninguna causa de orden jurídico ni norma expresa en contrario, y siendo ello así, a expensas de lo que paga el Seguro Social, se disminuiría el valor de la indemnización a cargo de la parte demandada, por el daño ocasionado a los damnificados por su actividad, es decir, que, vendría a lucrarse por el hecho de que la víctima del accidente estuviere afiliada al Instituto del Seguro Social. No hay pues, pese a lo afirmado en el tercero de los cargos de la primera demanda de casación una doble indemnización.

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

N/A

**Decisión:**

No Casa

**Jurisprudencia citada:**

N/A

## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CSJ-C Sentencia del 22 de octubre de 1998. M.P. José Fernando Ramírez Gómez Rad. 4866
<b>Corporación:</b> Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil y Agraria <b>Número de sentencia o radicación:</b> 4866 <b>Fecha:</b> 22 de octubre de 1998 <b>Magistrado Ponente:</b> José Fernando Ramírez Gómez
<b>Hechos relevantes:</b>  Luis Armando Clavijo demandó a la Sociedad Transportadora De Ganado La Voragine Ltda. (afiliadora) y a Hermenegildo Cruz Carrillo (propietario), para fueran declarados solidariamente responsables de todos los perjuicios materiales y morales causados al demandante, con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 10 de diciembre de 1987.  El demandante conducía un bus, cuando fue chocado por otro automotor, manejado por Adelmo Cruz Rojas. Este último fue el responsable del accidente, al tratar de adelantar en curva un camión. El demandante recibe una pensión de invalidez por parte de la ARL.
<b>Primera Instancia:</b>  Por sentencia de 27 de mayo de 1993 se puso fin a la primera instancia accediendo a lo pretendido en la demanda y en el llamamiento en garantía promovido contra Compañía de Seguros "COLSEGUROS S.A." y Héctor Adelmo Cruz Rojas, conductor del vehículo. Por consiguiente, los demandados fueron condenados a pagar a título de indemnización por los daños y perjuicios materiales y morales causados, la suma de \$32.524.553.49 y el equivalente a 22 gramos oro, respectivamente; con la aclaración de que COLSEGUROS S.A. responde sólo hasta el monto establecido en la póliza de seguro contratada por la Sociedad transportadora.
<b>Segunda Instancia:</b>  El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, mediante sentencia del 13 de enero de 1994 modificó y adicionó en algunos aspectos la sentencia de primera instancia, confirmándola en todo lo demás.  El tribunal determinó: "que si el Instituto de Seguros Sociales o un tercero indemniza con suma alguna al perjudicado por el insuceso, <b><u>no se puede condenar al responsable al pago del resarcimiento, por cuanto el daño sólo puede ser indemnizado una sola vez, siendo indiferente si aquella tiene como causa una relación laboral. Además, sostiene que ese tercero puede repetir luego contra el responsable del daño.</u></b> "
<b>Problema Jurídico:</b>  ¿Es posible que un sujeto declarado civilmente responsable descuente las sumas de dinero que la ARP paga a la víctima en virtud de haberse presentado una contingencia

de origen laboral del monto indemnizable?

**Consideraciones de la Corte:**

**1. A decir verdad, la doctrina no ha sido uniforme en el análisis del tema que plantea la impugnación. En ocasiones se ha sostenido que la víctima no puede acumular la reparación que obtiene del responsable a la prestación que recibe por virtud de un seguro o de la seguridad social, por cuanto ello constituiría una doble indemnización. En otras oportunidades, se opta por una solución contraria, advirtiendo la procedencia de la acumulación, pues lo pagado por la seguridad social o la compañía aseguradora tiene una causa jurídica diferente de la que genera la obligación indemnizatoria del tercero responsable del daño.**

2. Específicamente la Corte en sentencia de casación de 9 de septiembre de 1991 (G.J. T. CCXXII, págs. 85 y 86), (...) En conclusión, anota ahora la Sala conforme al criterio expuesto en aquella ocasión, que de **la indemnización de perjuicios a cargo del victimario se descuentan los valores correspondientes a prestaciones laborales con idéntica función indemnizatoria.**

De otro lado, por sentencia de casación de 24 de junio de 1996, consultando exclusivamente el elemento de la causa diferente, y por ende dejando de lado el criterio de la función indemnizatoria, se sostuvo que de la indemnización de perjuicios no se descuentan las prestaciones laborales que tengan ese carácter. (...)

3. Planteado el problema, lo primero que debe dejarse formulado para llegar a la pertinente solución, es que las normas del Código Civil (arts. 1666 y ss.), **no satisfacen la expectativa de subrogación que pudiera tener el seguro social o la compañía aseguradora que indemniza a la víctima, respecto de las acciones de ésta contra el responsable del daño, puesto que la subrogación por estas normas reconocida, opera cuando el tercero paga la obligación del deudor, pero no cuando extingue su propia obligación.**

4. Como en el siglo pasado las compañías aseguradoras muchas veces pretendieron recuperar lo pagado al asegurado, proponiendo acciones contra el responsable, quien a su vez se veía abocado a enfrentar otra demanda del perjudicado, por cuanto se alegaba la diferencia de causa jurídica de las dos prestaciones, generándose así en no pocos casos una doble indemnización, el mercado asegurador y luego el legislador se vieron compelidos a adoptar medidas con el fin de evitar la múltiple reparación del daño, pero también la impunidad del tercero responsable, además de la eventualidad del autosiniestro.

Fue así, como en los seguros de personas se concibió la posibilidad de acumular las indemnizaciones, al prohibirse en forma expresa la subrogación del asegurador, para que quedara así comprometida la responsabilidad del tercero, pero al mismo tiempo enervada la posibilidad de pagar dos veces el mismo daño. En cambio, en los seguros de daños se vedó la acumulación de indemnizaciones, no porque en forma expresa lo prohibiera el legislador, sino porque se le concedió al asegurador una acción especial, precisamente porque las normas civiles no lo subrogaban.

**Posteriormente, habida consideración que las normas civiles tampoco servían de apoyo para la subrogación de la seguridad social, a ésta se le confirió la misma acción especial subrogatoria otorgada en el caso de los seguros de**



**daños, procurándose con ello, además, disminuir los costos de la seguridad social al permitirse el recobro de las indemnizaciones pagadas al asegurado.**

5. De otro lado, parte de la doctrina ha justificado la distinción entre el seguro de daños y de personas, bajo el entendimiento que los primeros tienen carácter indemnizatorio y los segundos son seguros de ahorros o de sumas, para a partir de ahí aceptar o no la acumulación de indemnizaciones. Sin embargo, tal diferencia no es absoluta porque dicha acumulación también es viable en los seguros de daños, como bien lo prevé la legislación colombiana, concretamente el art. 1099 del Código de Comercio, cuando los daños asegurados son imputables a un pariente cercano del asegurado, porque en tal hipótesis el asegurador carece de acción subrogatoria contra el responsable.

**Así las cosas, la improcedencia de la acumulación no puede fundarse en el argumento simple del resarcimiento de la víctima por el seguro y el carácter indemnizatorio del mismo, sino en la consagración legal de una acción de subrogación a favor del asegurador que pagó, pues de no existir dicha acción la acumulación no tendría reproche, porque el tercero no puede quedar impune y constituirse en el verdadero beneficiario del seguro, tal como lo predica la Corte en la sentencia de 24 de junio de 1996.**

Véase como el Código de Comercio en el art. 1096 concede la subrogación en beneficio del asegurador, mientras que en el art. 1099 la prohíbe, autorizando, así, implícitamente, la acumulación. De modo que es la ley y no la naturaleza del seguro la que abre paso a la acumulación. Además, el seguro sólo tiene carácter indemnizatorio cuando el asegurador extingue la obligación del responsable, como sucede en el seguro de responsabilidad civil donde el asegurador, para liberar al asegurado responsable, indemniza directamente a la víctima. **De lo contrario, lo que existe son dos prestaciones surgidas de un mismo hecho, pero con causas jurídicas diferentes. Por consiguiente, puede afirmarse, que cuando se produce un daño imputable a una persona, si un tercero por mera liberalidad o por virtud de cualquier relación contractual, otorga en favor de la víctima una prestación que tenga por fundamento la necesidad jurídica de indemnizar el señalado daño, independientemente de mediar o no subrogación legal o voluntaria en los derechos de la víctima por parte de ese tercero, esa circunstancia no puede aprovechar al responsable para liberarlo de la obligación indemnizatoria a su cargo en igual medida a la de aquella prestación.**

**Por lo tanto, si el seguro social dispusiese de una acción subrogatoria especial contra el responsable del daño del trabajador, la acumulación de indemnizaciones no sería posible puesto que el responsable se vería abocado a indemnizar dos veces el mismo daño. En consecuencia, cada vez que la seguridad social indemnice a la víctima por los daños sufridos, será preciso averiguar si la legislación especial establece o no el derecho de subrogación, porque lo dispuesto por el Código de Comercio en materia de seguros, no es aplicable, por lo menos en el régimen actual, a los sistemas de seguridad social.**

6. La legislación que reglamenta las indemnizaciones por accidentes de trabajo que debe pagar el Instituto de Seguros Sociales (decreto 3170 de 1964), contiene el artículo 83, cuyo tenor es el siguiente: “El otorgamiento de las prestaciones establecidas por el presente reglamento por parte del Instituto, exonera al patrono de toda otra indemnización según el Código Sustantivo del Trabajo, o según el derecho común por causa del mismo accidente o enfermedad profesional. Pero si el riesgo se hubiere producido por acto intencional o por negligencia o culpa del patrono o sus

representantes, o de un tercero, y diere lugar a indemnización común, el Instituto procederá a demandar el pago de esa indemnización, la que quedará a su favor hasta el monto calculado de las prestaciones que el Instituto acordare por el accidente o enfermedad, debiendo entregar a los beneficiarios el saldo si lo hubiere.

“Lo dispuesto en el inciso anterior no es óbice para que la víctima o sus causahabientes instauren las acciones pertinentes de derecho común para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el Instituto de acuerdo con las normas de este reglamento”.

Del texto de la citada norma se colige el siguiente entendimiento:

a) El inciso primero legitima directamente al Instituto para pretender del tercero responsable del daño causado al trabajador beneficiario, el pago de la “indemnización común” plena, es decir, por toda clase de perjuicios derivados del hecho culposo imputado al demandado, quedando a su favor “el monto calculado de las prestaciones que el Instituto acordare por el accidente” y “debiendo entregar a los beneficiarios el saldo si lo hubiere”.

b) De conformidad con el inciso 2º. esa legitimación que la primera parte de la norma confiere al Instituto, “no es óbice para que la víctima o sus causahabientes instauren las acciones pertinentes en derecho común para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios”, caso en el cual del monto resarcitorio debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el Instituto. **En otras palabras, esta segunda parte de la norma, en clara concordancia con la primera reconoce la legitimación de la víctima o sus causahabientes, para pretender la indemnización total, así se haya recibido del Instituto el pago de prestaciones en dinero con carácter indemnizatorio, pero con la obligación de “entregar” a éste (al Instituto), “el valor de las prestaciones en dinero pagadas”, que es lo que en los términos de la norma significa “descontarse el valor...”, o sea que dicha entidad queda con el derecho de reclamar de la víctima del accidente el reembolso del valor de las prestaciones que la entidad pagó por esa misma causa.**

**Otra interpretación distinta a la propuesta por la Corte, aparejaría una de dos consecuencias negativas que en manera alguna pueden propiciarse, cuales son tornar la indemnización en fuente de lucro porque se pudiera dar lugar a un doble pago, si la víctima no se entendiera obligada a restituir el valor de los dineros recibidos del Instituto con carácter indemnizatorio, o liberar así sea parcialmente y sin razón jurídica atendible, al victimario del deber de resarcimiento integral a su cargo, si se concluyera que el afectado no puede pretender sino el pago de lo no recibido del Instituto, pues lo cierto es que la norma en estricto sentido no establece la posibilidad de subrogación por la que se venía averiguando.**

De otro lado, resulta importante advertir que actualmente rige el decreto 1771 del 3 de agosto de 1994, que expresamente consagra en el artículo 12 la susodicha subrogación que no aparecía prevista con claridad en el decreto 3170 de 1964. Dice así el artículo 12 del decreto vigente: “subrogación. La entidad administradora de riesgos profesionales podrá repetir, con sujeción a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contingencia profesional, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeción en todo caso al



*límite de responsabilidad del tercero". Por lo demás, el inciso 2º. del artículo 12 del decreto 1771 de 1994, reconoce para la víctima la legitimación establecida por el inciso 2º. del artículo 83 del decreto 3170 de 1964, cuando expresa: "Lo dispuesto en el inciso anterior no excluye que la víctima, o sus causahabientes, instauren las acciones pertinentes para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales". Norma esta que por contener un texto idéntico al precedente, exige interpretación similar a la anteriormente propuesta, más si se tiene en cuenta que ni ésta, ni el artículo 83 del acuerdo 155 de 1963, regulan un sistema asegurativo de la responsabilidad en que pueda incurrir ese tercero a quien le es imputable el daño, razón por la cual carece de fundamento su pretensión destinada a obtener que las prestaciones económicas pagadas por el Seguro Social le sean descontadas del valor de la indemnización ordinaria por perjuicios que deba asumir de acuerdo con la ley.*

*7. Examinado en torno a la anterior perspectiva hermenéutica el juicio del Tribunal, **lógicamente se concluye que este anduvo errado cuando dispuso el descuento de las sumas pagadas a título de pensión de invalidez por el Instituto de Seguros Sociales, porque como ya se analizó, la condena a los demandados debió ser por la totalidad del perjuicio, quedando el ente público con el crédito frente al demandante por el valor de las sumas pagadas en dinero como prestación indemnizatoria.***

*Desde luego que no obstante el error del ad quem, la sentencia impugnada no puede ser casada porque de llegarse a la de instancia ésta resultaría más gravosa a los intereses de la parte recurrente, o sea la demandada. Con todo, debe darse claridad a lo dispuesto por el Tribunal en el ordinal 5º. de la parte resolutive de la sentencia recurrida, en el sentido de indicar que como de lo que se trata es de evitar un doble pago indemnizatorio, la orden de suspender el pago de la pensión de invalidez solo puede cumplirse cuando el demandante efectivamente haya recibido el pago de la condena dineraria que a los demandados impuso la sentencia.*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Art 12 Decreto 1771 de 1994.

**Decisión:**

No Casa

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia del 9 de septiembre de 1991 (G.J. T. CCXXII, págs. 85 y 86)

Sentencia del 24 de junio de 1996

## Ficha de Jurisprudencia

### Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil

#### Identificación:

CSJ-C. 4 de septiembre de 2000. M.P. Jorge Antonio Castillo Rugeles. Rad. 5260.

**Corporación:** Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil

**Número de sentencia o radicación:** 5260

**Fecha:** 4 de septiembre de 2000

**Magistrado Ponente:** Jorge Antonio Castillo Rugeles

#### Hechos relevantes:

Los demandantes María Alicia Gómez Gutiérrez y Ricardo Cesar y Eliette Johana Restrepo Gómez solicitaron que se condenara a la sociedad Jaime Álvarez Osorno y Cía S.C. y a Jaime Álvarez Osorno para que se declarara que son civil y solidariamente responsables del accidente de tránsito ocurrido el 22 de mayo de 1991 y que se les condene a indemnizar los perjuicios causados.

Miguel Ángel Restrepo (padre y cónyuge de los demandantes) conducía una motocicleta cuando fue atropellado por el automóvil de placas LW-0792 de propiedad de la sociedad demandada y explotado y administrado por Jaime Álvarez Osorno, a título personal, el cual iba manejado por Gabriel Arcángel López Hoyos, a la sazón dependiente y subordinado de éstos. La causa del accidente de tránsito obedece a la culpa del conductor del automóvil por no conducir con la precaución necesaria. A los demandantes el ISS les paga una pensión de sobrevivientes.

#### Primera Instancia:

En primera instancia se decidió que los demandados son civil y solidariamente responsables de la muerte de Miguel Ángel Restrepo, con la concurrencia de la culpa de éste; y que, consecuentemente, deben indemnizar a los demandantes.

#### Segunda Instancia:

El Tribunal decidió confirmar la sentencia de primera instancia con modificaciones en cuanto a los montos indemnizatorios:

Frente al lucro cesante **Considera el fallador que "el daño no debe haber sido reparado", que la demandante María Alicia Gómez confesó que el seguro social le paga una pensión mensual de \$102.434.00 y que el seguro "tiene carácter indemnizatorio". Esto último, afirma, se comprende por existir la subrogación legal a favor del asegurador frente al agresor,** pues así aquél resulta cubriendo parte de la indemnización del daño, y porque a la víctima se le concede acción directa para reclamar al asegurador, lo que evidencia que ese monto alivia el daño.

Asevera, igualmente, que la correspondencia de la ley es la de un 50% para la cónyuge y un

20% para cada hijo, lo que permite comprender "que el seguro social calculó como el 70% del ingreso del occiso la suma de \$102.434.00", monto en el cual "el daño de cada uno de los demandantes ha sido reparado".

#### **Problema Jurídico:**

¿Es viable que las víctimas reciban la pensión de sobrevivientes otorgada por el ISS y al mismo tiempo sean indemnizadas por el lucro cesante causado con ocasión de la muerte de su pariente?

#### **Consideraciones de la Corte:**

*En reciente oportunidad esta Corporación sentó el criterio según el cual, no es el resarcimiento de la víctima por el seguro y la función indemnizatoria del mismo, el criterio determinante de la posibilidad de descontar o no de la indemnización a cargo del responsable las sumas pagadas por terceros aseguradores, **sino la expresa consagración legal de la figura de la subrogación, que de modo particular haga el legislador para cada caso, a favor del tercero que paga; de manera que, tratándose de prestaciones económicas a cargo de la seguridad social, debe examinarse si la norma que las contempla la prescribe en su favor.** Dice así la sentencia de 1998: (...)*

*Para despachar el cargo, cumple entonces examinar si las disposiciones reguladoras de la pensión que el seguro social reconoció a los beneficiarios del occiso, vigentes al momento de producirse el siniestro ( muerte del afiliado Miguel Angel Restrepo, ocurrida el 22 de mayo de 1991), contemplan o no la subrogación en favor del citado ente estatal.*

*Ante todo y a este propósito, es indispensable definir si la pensión de sobrevivientes tiene carácter indemnizatorio, por ser ése el supuesto en el que se asienta la subrogación. En tal orden de ideas, para la Corte es claro que la indicada prestación social de carácter económico, no tiene aquella connotación, como se deduce de considerar que, cual lo afirma la Sala Laboral de esta Corporación, ella "...cubre el riesgo de la muerte del asegurado bien sea trabajador activo o pensionado, en beneficio fundamentalmente de los integrantes de la familia de este (Acuerdo 049 de 1990, art. 27) pues es de presumir que ellos se verán privados del ingreso que les permitía mantener un determinado nivel de vida, al paso que la pensión de vejez cubre el riesgo generado por la presunta pérdida de la capacidad de trabajo en razón de la edad y permite al asegurado dejar de trabajar sin perder del todo su ingreso. (...).De otra parte, la pensión de sobrevivientes en modo alguno es gratuita, sino al contrario, solo surge previo el pago más o menos prolongado de cotizaciones (Acuerdo 049 de 1990, art. 25) que se cancelan obligatoriamente y con independencia de si el cónyuge que pueda llegar a ser beneficiario labore a su vez y cotice igualmente con el propósito de obtener protección frente a sus propios riesgos. Es notorio, por tanto, que este enfoque descarta también abiertamente la postura censurada del fallador, ( que afirmó la incompatibilidad entre la pensión de sobrevivientes y la de vejez, anota ahora la Corte ) pues de admitirse ésta, se perdería sin contraprestación ninguna y pese a acontecer la contingencia protegida, el valor, en todo caso importante, de la cotización descontada de la remuneración de un asalariado, así como también del respectivo aporte patronal, contrariándose de paso el principio de eficiencia que corresponde al servicio público de la seguridad social." ( subrayas fuera del texto. Sentencia de 24 de enero de 1995 ).*

**Como inferencia lógica de la ausencia de la función indemnizatoria del daño, resultante de la pérdida de la vida en la pensión de sobrevivientes, no hay posibilidad jurídica de que el pago que por ese concepto hace la seguridad social, dé lugar a la subrogación por la cual se averigua, lo que permite entender que el fallador desacertó cuando estimó que la pensión era de naturaleza indemnizatoria, y por ello aseveró, equivocadamente, la imposibilidad de la acumulación con la indemnización a cargo del directo causante del hecho dañoso, cuando hizo la estimación del lucro cesante.**

Consecuentemente con el entendimiento anterior, referente al carácter de la pensión en cita, el Decreto 758 de 1990, que aprobó el acuerdo 049 expedido por el Instituto de Seguros Sociales, contentivo del reglamento general del seguro social obligatorio de invalidez, vejez y muerte, que era la normatividad vigente para la época del siniestro, no contempló la subrogación a favor del Seguro Social. En efecto, en el capítulo V de ese Estatuto se regulan las prestaciones en caso de muerte, entre las que se contemplan la pensión de sobrevivientes por muerte por riesgo común ( artículo 25 ), y la denominada indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes, ( artículo 31), normas que establecen lo siguiente:

“Art. 25. Pensión de sobrevivientes por muerte por riesgo común. Cuando la muerte del asegurado sea de origen no profesional, habrá derecho a pensión de sobrevivientes en los siguientes casos:

- a) Cuando a la fecha del fallecimiento, el asegurado haya reunido el número y densidad de cotizaciones que se exigen para adquirir el derecho a la pensión de invalidez por riesgo común, y
- b) Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando o tenga causado el derecho a la pensión de invalidez o de vejez según el presente reglamento.

Art. 31. Indemnización sustitutiva de la pensión de sobrevivientes. Si al momento del fallecimiento, el asegurado no tuviere el número de semanas de cotización o la densidad de cotizaciones requeridas para dejar derecho a pensión de sobrevivientes, pero hubiere acreditado un mínimo de veinticinco semanas de cotización, se otorgará a las personas que tuvieran derecho a la pensión de sobrevivientes en caso de que se hubiere causado y en los mismos porcentajes en que ella se hubiere cubierto, una indemnización igual al valor de una mensualidad de dicha pensión de sobrevivientes por cada veinticinco ( 25 ) semanas de cotización acreditadas, sin que el monto mínimo de la indemnización pueda ser inferior a doce mensualidades”

No dispone la normatividad citada, la subrogación en ninguno de los dos casos de prestaciones económicas por causa de muerte, prescribiendo únicamente, en el artículo 49, que “Las pensiones e indemnizaciones sustitutivas que cubre el ISS, son incompatibles: a) entre sí, b) con las demás pensiones y asignaciones del sector público, y c) con las pensiones de jubilación por aportes de que trata la Ley 71 de 1988. Sin embargo el beneficiario podrá optar por la más favorable cuando haya concurrencia entre ellas”. **De donde se sigue que, ocurrida la muerte violenta de un afiliado a la seguridad social, las prestaciones económicas subsiguientes por el denominado riesgo común, - pensión de sobrevivientes o indemnización sustitutiva - son acumulables con la indemnización consecuente a cargo del autor del hecho dañoso**

**y, por tanto, a tono con lo resuelto en la sentencia del 22 de octubre de 1998, no es lícito deducir el valor de aquéllas.**

*Prospera, entonces, el cargo, debiéndose casar la sentencia en este preciso punto, que es el único en que el fallo se resiente en casación, siendo procedente que la Corte, actuando en sede de instancia, no modifique más que este punto, y disponga que la condena al pago del valor de la **indemnización por concepto del lucro cesante, debe ser cubierta íntegramente por los demandados, sin que haya lugar al descuento de la pensión que a los accionantes les está pagando el seguro social, quedando intacta la sentencia en lo demás, cuyos ordenamientos, por lo mismo, se reproducirán con aquella única salvedad.***

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Decreto 759/90 Frente a la pensión de sobrevivientes de origen común.

**Decisión:**

Casa

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia del 3 de septiembre de 1991

Sentencia del 24 de junio de 1996

Sentencia del 22 de octubre 1998.

## Ficha de Jurisprudencia

### Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil

#### Identificación:

CSJ-C Sentencia del 19 de diciembre del 2008. M.P. William Namén Vargas. REF.: 11001-3103-035-1999-02191-01

CSJ-C. Sentencia del 9 de julio del 2010. M.P William Namén Vargas. Ref.: Expediente 11001-3103-035-1999-02191-01

**Corporación:** Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil

**Número de sentencia o radicación:** 11001-3103-035-1999-02191-01

**Fecha:** Casación del 19 de diciembre del 2008. Sentencia sustitutiva del 9 de julio del 2010

**Magistrado Ponente:** William Namén Vargas

#### Hechos relevantes:

Amparo Isabel Acero Aguirre y Paola Boxiga demandaron a la Corporación Eléctrica de la Costa Atlántica-Corelca- (y solidariamente a Eléctricas de Medellín Ltda. y Sadelec Ltda), para que fuera declarada responsable y obligada a indemnizarlas del accidente y posterior fallecimiento por electrocución del ingeniero Rafael Guillermo Boxiga Sánchez, mientras laboraba tomando unas medidas en una subestación eléctrica.

A la hija del causante (demandante) se le reconoció una pensión de sobrevivientes de origen laboral.

#### Primera Instancia:

el *a quo*, en su sentencia de 23 de junio de 2006 declaró probada la excepción nominada inexistencia de los derechos y obligaciones pretendidos, negó las pretensiones, además por “*culpa exclusiva de la víctima*” y condenó en costas a la actora.

#### Segunda Instancia:

El tribunal confirmó la sentencia de primera instancia.

#### Problema Jurídico:

¿Al liquidarse el lucro cesante que se causa a una víctima con ocasión de la muerte de aquella persona que velaba por su sostenimiento económico, le es dable al responsable descontar del monto a pagar los valores pagados por la ARL a título de pensión de sobreviviente?

#### Consideraciones de la Corte:

**En sede de sentencia sustitutiva 9 de julio del 2010.**

**Contrario sensu, Paola Andrea Boxiga Acero, demostrada su dependencia económica del padre, además obligado a suministrarle alimentos, tiene derecho cierto al resarcimiento del daño patrimonial en la modalidad de lucro cesante hasta completar los 25 años de edad, y no su mayoría de edad-como señala el perito-, “ya que conforme a la doctrina sentada por esta Corporación, en esa edad-25 años-ordinariamente se culmina la educación superior y se está en capacidad de valerse por sí mismo” (cas. civ. sentencia de 22 de marzo de 2007, reiterando el criterio de las sentencias de 18 de octubre de 2001, 5 de octubre de 2004 y 30 de junio de 2005, iterada en sentencia de 18 de diciembre de 2009, exp. 05001-3103-010-1998-00529-01), período de tiempo inferior a la supervivencia probable de 51,04 años equivalentes a 612,48 meses (tablas de mortalidad, fls. 202-215, cdno. 1) del ingeniero, quien nació el 24 de octubre de 1972 (registro civil, fl. 13, cdno. 1) y murió a la edad de 25 años (25, 5 meses y 7 días años) el 1° de abril de 1998 (partida de defunción, fl. 14, cdno. 1).**

**Para determinar el lucro cesante se tomará como cálculo actualizado del monto resarcible, el ingreso mensual promedio del Ingeniero Boxiga Sánchez para el día 1° de abril de 1998, fecha de su fallecimiento, precisado por el experto en \$1.120.866,66 moneda legal soportado en las copias del contrato individual de trabajo a término indefinido, la liquidación de prestaciones sociales y los factores salariales de ley (fls. 81, 82, 299, 300, 311 y 323, cdno. 1), valor que se actualizará a la fecha, aplicando el índice del último mes. No se tendrán en cuenta ciento cincuenta mil pesos reflejados en movimientos de la cuenta de ahorro manejada en vida por el ingeniero (fls. 376-392), indicada en la ampliación del dictamen rendido en prueba de las objeciones como un probable mayor ingreso por servicios, ante la carencia probativa clara e inequívoca de actividades distintas a las de relación laboral, por demás exclusiva (cláusula primera del contrato individual de trabajo, fl. 80, cdno. 1), y la ausencia de certeza al respecto, que no permiten por sí, suponerlo y pueden tener causas múltiples, por ejemplo, ahorro, préstamos, etc.**

**Del monto indemnizable no procede la deducción de pagos por seguros, pensiones y prestaciones laborales, cuya fuente es la relación jurídica individual de trabajo diferente y distinta de la obligación indemnizatoria derivada del daño causado (cas. civ. sentencia de 22 de octubre de 1998, [S-098-98], exp. 4866).**

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

N/A

**Decisión:**

Casa

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia de 22 de octubre de 1998, [S-098-98], exp. 4866.



## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CSJ-C. Sentencia del 9 de julio del 2012. M.P. Ariel Salazar Ramírez. Rad. 11001-3103-006-2002-00101-01 (Sentencia Sustitutiva)
<b>Corporación:</b> Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. <b>Número de sentencia o radicación:</b> 11001-3103-006-2002-00101-01 <b>Fecha:</b> 9 de julio del 2012 <b>Magistrado Ponente:</b> Ariel Salazar Ramírez
<b>Hechos relevantes:</b>  Maribel Farfán, actuando en nombre propio y en representación de su hijo Luis Alberto Estévez Farfán, solicitó que se declare civilmente responsables a la Cooperativa de Transportadores La Nacional Ltda. (afiliadora) Y el Banco de Crédito y Desarrollo Social Megabanco S.A. (propietario) por la muerte de Luis Alberto Estévez Leal, acaecida en accidente de tránsito el 14 de septiembre de 1997, y se les condene a indemnizar los perjuicios patrimoniales y morales sufridos.  Los demandantes reciben una pensión de sobrevivientes de las fuerzas militares (origen común)
<b>Primera Instancia:</b>  Mediante sentencia de 26 de marzo de 2007 el Juzgado Sexto Civil del Circuito de Bogotá absolvió a la demandada Megabanco S.A. y a la llamada en garantía Seguros Cóndor S.A., de todas las pretensiones de la demanda. Declaró civil y extracontractualmente responsable a la Cooperativa de Transportadores La Nacional Ltda. por los perjuicios ocasionados con la muerte de Luis Alberto Estévez Leal, y en consecuencia, la condenó a pagar a los demandantes la suma de 4.200 gramos oro ordenados en la sentencia proferida por el Juzgado 17 Penal del Circuito de Bogotá, más sus respectivos intereses.
<b>Segunda Instancia:</b>  El 24 de noviembre de 2008 se dictó la sentencia de segunda instancia, en la cual se confirmó el fallo de primera instancia y se modificó en cuando se entendió no probado el daño material y respecto del daño moral se obligó a pagar una suma que tasó en el equivalente en pesos de 600 gramos oro.
<b>Problema Jurídico:</b>  ¿Es posible que la víctima acumule la indemnización total por lucro cesante con la pensión de sobrevivientes que otorgan las fuerzas militares?
<b>Consideraciones de la Corte:</b>  En sede de sentencia sustitutiva del 9 de julio del 2012.



2. Hechas las anteriores aclaraciones, y antes de entrar a analizar las circunstancias particulares que son motivo de la sentencia de reemplazo, es preciso dilucidar un punto que planteó la parte demandada en la sustentación de su apelación y sobre el cual ha venido insistiendo, consistente en **que como la actora recibe en la actualidad una pensión de sobreviviente por parte de las Fuerzas Militares, ese beneficio le impide acceder a una indemnización por lucro cesante, toda vez se le estaría reconociendo un perjuicio inexistente o se le estaría pagando doblemente una indemnización por la misma causa. A su parecer, tal “acumulación de indemnizaciones no procede porque el victimario queda expuesto a un doble pago, tanto a la víctima como al asegurador subrogado”.**

Pues bien, la refutación del anterior argumento no ofrece mayores dificultades si se deja al descubierto la confusión teórica sobre la cual se edificó, **y que radicó en partir del supuesto, erróneo desde todo punto de vista, de que “el victimario queda expuesto a un doble pago”**, sin que esa afirmación tenga el más mínimo fundamento jurídico, como enseguida pasará a explicarse.

- La concurrencia de indemnizaciones.

Suele ocurrir -y de hecho sucede con cierta frecuencia- que **un mismo resultado lesivo sea susceptible de ser resarcido por distintas fuentes, como por ejemplo, cuando la víctima está amparada por un seguro particular que cubre los daños que ha sufrido; o cuando está afiliada al sistema de seguridad social integral o a un régimen especial; o cuando el daño es atribuible a culpa o dolo del empleador o de un tercero; por citar solo unos casos.**

**Frente a tal situación, surge el problema de si es posible o no acumular tales prestaciones, lo cual genera una disyuntiva inevitable: si no se admite la concurrencia, se enriquece quien deja de pagar o paga menos porque el infortunio de la víctima ya estaba cubierto por otra vía; y si se acepta la acumulación, se enriquece la víctima al ser retribuida en exceso.**

El conflicto ha estado presente de tiempo atrás tanto en la jurisprudencia y la doctrina nacionales como extranjeras, sin que hasta el momento pueda decirse que se haya llegado a una solución que satisfaga a todos los sectores o que resuelva de modo definitivo los interrogantes que el tema suscita.

La dificultad tiene su origen en la noción misma de indemnización, que no persigue como fin hacer que el perjudicado se lucre, sino reponer su patrimonio, por lo que es natural que, al comparar el estado que tenía antes y después de producirse el daño, se tomen en cuenta los efectos ventajosos producidos por el mismo hecho en virtud del cual se reclama. A esta operación los autores del derecho común han dado el nombre de *compensatio lucri cum damno*.<sup>1</sup> Con esta locución suele evocarse el principio, no codificado pero reconocido por la doctrina y la jurisprudencia, en virtud del cual la cuantificación del daño resarcible debe tomar en cuenta las eventuales ventajas que obtiene el lesionado y que tienen su origen directo en el mismo hecho dañoso.

De Cupis define esta figura como “la disminución proporcional que el daño

---

<sup>1</sup> Windscheid. En Von Tuhr, A. Tratado de las Obligaciones. Tomo I. Madrid: Edit. Reus, 1ª ed. 1934. Pág. 74.

experimenta cuando con él concurre un lucro (ventaja), o en otras palabras, la reducción del montante del daño resarcible por la concurrencia del lucro”.<sup>2</sup>

A fin de establecer una pauta para la procedencia o no de la acumulación, algunos autores han sostenido que la imputación o computación de beneficios -según ha sido denominada la figura- sólo puede hacerse extensiva a las situaciones que se deriven directamente del hecho dañoso, o sea que se acude al criterio de la “causación adecuada”. De conformidad con esta teoría, ha de prescindirse de todos aquellos beneficios que, en un cálculo de probabilidades, sean tan ajenos al suceso dañoso, que no haya más remedio que considerarlos puramente fortuitos.<sup>3</sup>

Tal ha sido el patrón que ha seguido el Tribunal Supremo de España en las sentencias de 15 de diciembre de 1981 y de 8 de mayo de 2008; en la primera de las cuales se indicó que “el perjudicado no podrá recibir más que el equivalente del daño efectivo y que, en su caso, de haber obtenido alguna ventaja ésta deberá de tenerse en cuenta al cuantificar aquel resarcimiento (compensatio lucri cum damno), siempre, por supuesto, que exista relación entre el daño y la ventaja...”, lo que no es más que la aplicación de la doctrina que proscribe el enriquecimiento injusto.

A la luz de este enfoque, la doctrina extranjera acostumbra citar algunos ejemplos clásicos en los que no habría ningún problema en acumular ciertas pretensiones; como que no cabría imputar al monto de la indemnización que se reclama por un incendio, el valor de un tesoro que el propietario del inmueble incendiado descubre entre los escombros durante los trabajos de extinción; ni una donación que una tercera persona haga a la víctima con ocasión del accidente; como tampoco se pueden deducir de la indemnización que se exija por un delito de estafa, los dividendos que la víctima de ese punible haya ganado con la eventual inversión del dinero que recibió de manos del estafador.<sup>4</sup>

Esos ejemplos dan cuenta de los casos en los que es admisible la acumulación de la indemnización con otro tipo de beneficio por emanar de una causa distinta al hecho lesivo. **Pero la teoría de la causalidad adecuada no resuelve el problema cuando no obstante existir una conexión causal directa entre el daño y el beneficio se abre paso la discusión sobre la posibilidad de la imputación.**

Es decir, que **según esta teoría siempre que el daño tenga distinta causa debería ser procedente la acumulación de indemnizaciones, mas esa conclusión es, en principio, evidente y no susceptible de reparos. En tanto que el verdadero dilema surge cuando a pesar de que el daño tiene la misma causa adecuada, se pone en duda la prohibición de la acumulación, significando tal evento, de hecho, el centro de la controversia que se viene tratando.**

Tal ocurre, por ejemplo, cuando se discute si ha de descontársele al expropiado el beneficio económico que obtiene cuando la parte del inmueble que no le es confiscada incrementa su valor por efecto de la obra para la cual se realiza la expropiación, siendo que tanto la expropiación como la ventaja económica tienen su fuente en la misma causa. O en los seguros personales de lesión o muerte, que no contemplan la posibilidad de restar de la indemnización que se reciba del causante del daño, las

<sup>2</sup> De Cupis, Adriano. El daño. Teoría general de la responsabilidad civil. 2ª ed. Barcelona: Bosch, 1970. pág. 327.

<sup>3</sup> Von Tuhr, A. Tratado de las Obligaciones. Tomo I. Madrid: Reus, 1ª ed. 1934. Pág. 74.

<sup>4</sup> Von Tuhr; Díez-Picazo. En obras citadas.

cantidades que el lesionado o sus deudos hayan de percibir por el seguro, a pesar de que la relación causal que existe entre el accidente y el pago de la cantidad asegurada no es menos “adecuada” que la que media entre aquél y la indemnización que se reciba de quien ejecuta el acto lesivo.

Mucho menos está sujeta a incertidumbre la concurrencia de la indemnización con la herencia que recibe el heredero a quien se indemniza por la muerte de su causante, siendo que el hecho que da origen al reclamo de ambas prestaciones es el mismo: la muerte. Como más adelante se expondrá, la razón de la acumulación en esta última circunstancia radica en que se trata de beneficios que derivan de títulos distintos, pero esta explicación es diferente de la que se esgrime con base en la teoría de la “causa adecuada”.

**Pueden ser, entonces, muchas las situaciones en las que la misma causa adecuada da origen a indemnizaciones o retribuciones de cualquier especie que son compatibles o acumulables. De ahí que esta teoría no sea lo bastante clara para resolver el problema que se examina.**

**Otro criterio que en ocasiones ha adoptado la jurisprudencia de esta Corte, tiene su origen en el carácter resarcitorio de la indemnización, que permitiría la acumulación sólo con prestaciones que no compartan esa misma condición.**

Según autorizada doctrina, el problema se reduce a determinar la naturaleza de las prestaciones que la víctima recibe de terceros con ocasión del hecho dañoso, aún cuando éste constituya la única causa de tales beneficios; de suerte que lo que realmente importa es si lo que se recibe constituye o no una reparación o indemnización del daño irrogado. **En caso afirmativo, el cúmulo es inadmisibles porque un daño no puede ser reparado dos veces; pero si las prestaciones no tienen ese carácter, es decir si su esencia no es resarcitoria, el cúmulo sería procedente.**<sup>5</sup>

Tal ha sido el enfoque adoptado en ciertas ocasiones por la jurisprudencia nacional, como en el fallo proferido por esta Sala el 3 de septiembre de 1991, en el que se rechazó la acumulación de prestaciones en favor de una persona que sufrió lesiones en un accidente de tránsito, por considerar que la asistencia médica y el pago de una incapacidad laboral que recibió del empleador en razón de esas lesiones, tenían carácter indemnizatorio y conferían al patrono la facultad de subrogarse en los derechos del trabajador frente al tercero responsable. En esa sentencia se expresó: (...)

**En ese orden, es evidente que cuando se trata de prestaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales, tales como los gastos médicos, farmacéuticos y hospitalarios, que tienen carácter indemnizatorio, un pago doble de los mismos resulta inadmisibles dado que lo contrario repudiaría al estricto sentido de la equidad.**

**En el mismo sentido, en tratándose de seguros de daños, es indiscutible que su naturaleza eminentemente resarcitoria impide acumular la indemnización que de ellos se derive con cualquier otra que tenga ese mismo carácter.**

---

<sup>5</sup> ALESSANDRI RODRIGUEZ, Arturo. De la responsabilidad extracontractual en el derecho civil. Tomo II. Santiago de Chile: Imprenta Universal, 1987. pág. 583.

*En efecto, el principio que predomina en las legislaciones comparadas con relación a la concepción jurídica del seguro de daños es que el mismo tiene como objetivo la reparación del menoscabo patrimonial que sufre el titular del interés asegurable como consecuencia del siniestro, esto es restablecer el equilibrio económico roto por la realización del riesgo asegurado. Y fue ese mismo principio el que adoptó nuestro Código de Comercio, en su artículo 1088, a cuyo tenor,*

*“Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso.” [Se resalta]*

*Es ostensible el carácter imperativo del anterior precepto cuando dispone que esa especie de contratos “jamás” podrá comportar una ganancia para el asegurado. Y ello no es más que la consecuencia lógica del interés asegurable como elemento esencial del contrato de seguro, el cual consiste en que el riesgo no se produzca. De suerte que si el siniestro se produce y se causa la pérdida total o parcial del interés asegurado, el mismo ha de ser resarcido solo en la medida de su verdadera dimensión económica, y teniendo como límite, eso sí, el monto de la prestación indemnizatoria que esté a cargo del asegurador. De no ser por ese carácter indemnizatorio, el seguro de daños sería un permanente estímulo a la realización intencional del siniestro.*

**Es por ello por lo que aún si no existiera la prohibición contenida en el artículo 1088, de todas maneras la naturaleza indemnizatoria del seguro de daños sería un impedimento para obtener un lucro a partir de ese contrato. Y es por ello, precisamente, por lo que la acumulación de tales indemnizaciones resulta inadmisibles.**

*En cambio, no está sujeta a discusión la posibilidad de acumular a una indemnización la suma que se reciba por concepto de una póliza de vida, pues esta última da derecho al beneficiario de exigir todo el valor del seguro sin importar el monto del riesgo asegurado, e, inclusive, a que se le paguen tantos seguros de esa especie cuantos hayan amparado la misma contingencia a su favor, pues no hay duda de que en tal circunstancia no se está frente a prestaciones de estirpe indemnizatoria.*

**A pesar de la contundencia del anterior criterio, el mismo no puede ser admitido sin miramientos en todos los casos, pues suele presentarse la situación de que a pesar de estar frente a prestaciones de carácter indemnizatorio, las mismas sean, sin embargo, acumulables.**

**Así, tanto la legislación como la jurisprudencia nacionales han considerado que las prestaciones derivadas del sistema de riesgos profesionales tienen un sustrato indemnizatorio; lo cual se halla en consonancia con el origen histórico de esos beneficios. No obstante, se ha aceptado su concurrencia con la indemnización originada en la responsa-bilidad civil, atendiendo a un enfoque distinto del que se viene comentando.**

*Tales son los presupuestos fácticos que sustentaron la sentencia de 24 de junio de 1996, en cuya oportunidad esta Sala sostuvo: (...)*

**La diversidad de títulos** a partir de los cuales emana la prestación es, entonces, otro de los criterios que permitiría dilucidar el dilema de la concurrencia de las indemnizaciones. Sin embargo, aunque tal tesis resulte eficaz frente a algunos casos,

no es una razón que pueda esgrimirse de modo generalizado, pues ya se explicó que en los seguros de daños es imposible la acumulación de indemnizaciones aunque ellas provengan de distintas fuentes representadas en varios contratos.

**Finalmente, ante la insuficiencia de cada uno de esos enfoques para erigirse a sí mismo en parámetro absoluto para la determinación de la concurrencia de indemnizaciones, ha tomado fuerza la explicación de que, simplemente, es la facultad de subrogación la pauta que debe seguirse para resolver la dificultad; de tal suerte que si la ley concede ese derecho al tercero que paga la indemnización, la víctima no podrá acumular las prestaciones, en tanto que si el primero carece de esa atribución, entonces nada impedirá que la segunda obtenga doble retribución.**

El anterior argumento logra solucionar una gran cantidad de casos, pues ante la previsión legal de que el tercero que paga se subroga en los derechos del causante del daño, **resulta incuestionable que no se puede cobrar la misma indemnización tanto al autor del perjuicio como al subrogado que pagó por él; dado que no solo la víctima estaría recibiendo doble resarcimiento sino que el victimario quedaría expuesto a hacer un doble pago.**

A partir de la figura de la subrogación se puede concluir que la acumulación de indemnizaciones es inadmisble cuando el solvens dispone de una acción personal para reclamar al verdadero deudor lo que ha pagado en lugar suyo; mas en tal caso no se trata propiamente de “varias indemnizaciones”, sino que es la misma prestación la que el tercero paga y por la que se sucede a título singular en los derechos o créditos del deudor.

**Pero el problema sigue latente cuando lo que se paga no es la misma prestación, sino obligaciones que tienen distinto origen y respecto de las cuales no existe la posibilidad de subrogarse; sin que la ausencia de esa facultad permita colegir a priori que el cúmulo sea admisible.**

Tal ocurre en los seguros de daños, en los que, por su naturaleza, es inadmisble la concurrencia de indemnizaciones aún si la aseguradora careciera de la atribución de subrogarse en los derechos del asegurado, toda vez que esa especie de contratos “jamás podrá constituir para él fuente de enriquecimiento”. (Artículo 1088 del Código de Comercio)

De hecho, en los eventos contemplados en el artículo 1099 del Código de Comercio, y que se contraen a que el causante del siniestro sea pariente cercano del asegurado, está prohibida la subrogación y, sin embargo, esa circunstancia no le resta al seguro de daños su carácter indemnizatorio ni autoriza al asegurado para reclamar un pago que exceda el monto del perjuicio sufrido, por el simple hecho de que quien haya causado el siniestro sea su pariente.

**En el mismo sentido, poco o nada importará, para los precisos efectos que se vienen analizando, que las prestaciones asistenciales derivadas del sistema de riesgos profesionales, como gastos de medicinas, hospitalización, procedimientos quirúrgicos, expensas funerarias, etc., admitan o no la facultad de subrogación, pues tratándose, como se tratan, de verdaderas indemnizaciones, su pago doble no puede ser admitido en nuestro derecho, al menos mientras subsistan los principios que actualmente orientan la institución de la responsabilidad civil.**



*Ahora bien, si ninguno de los criterios que se han esbozado comporta, por sí solo, el patrón para establecer la admisibilidad de la concurrencia de las prestaciones, ello tan solo es posible porque debido a la gran multiplicidad de hechos causantes de responsabilidad civil; de fuentes o títulos de los que ella emana; de los caracteres distintivos de esas prestaciones; y de los efectos a que dan lugar las obligaciones de ese tipo, se torna insostenible la fijación de un único fundamento conceptual que englobe todas esas situaciones; de suerte que no será posible establecer a priori y con prescindencia de las particularidades de cada caso concreto, si se admite, y en qué medida, el cúmulo de indemnizaciones.*

**No hay que buscar, por tanto, más allá de las circunstancias específicas que cada caso plantee, un concepto genérico que englobe eventos que no comparten los mismos fundamentos fácticos ni jurídicos, pues semejante empresa antes que resolver las dificultades las multiplica, tal como ha quedado demostrado con el develamiento de las anomalías o inconsistencias que se encuentran presentes en cada uno de los enfoques teóricos que se han explicado.**

*Y es que no podría ser de otro modo, pues si así no fuese, sencillamente, el estudio y aplicación del derecho de daños no entrañaría mayores dificultades y carecería de la riqueza que le es inherente.*

*Es por ello, precisamente, por lo que nuestra jurisprudencia, frente a situaciones que se han cimentado sobre hechos distintos, haya dado diversas soluciones jurídicas; de ahí que no tenga razón el abogado de la parte demandada cuando afirma que ha existido contradicción entre algunas providencias de esta Corte para resolver el mismo problema; pues, sencillamente, ante hipótesis diferentes se ha resuelto de manera disímil, con base en la teoría que se ajusta al caso concreto.*

*De manera que atendiendo a las particularidades de cada circunstancia, la Corte ha graduado el alcance de la indemnización a tono con el verdadero daño sufrido por la víctima; con la causa que lo produjo; con el título o títulos de los que emana el deber de resarcir; con la naturaleza de las prestaciones que se originan a partir de un hecho dañoso; o con el principio de no enriquecimiento injusto para ninguna de las partes.*

*Habrán eventos en los que uno solo de esos criterios bastará para dilucidar la cuestión; mientras que en otros, dada su complejidad, será necesario acudir a varios de ellos a la vez.*

**El caso que se analiza, concretamente, comparte rasgos comunes con la controversia que se resolvió en la sentencia de 24 de junio de 1996, en donde la Corte concluyó que una pensión de sobreviviente es independiente de la indemnización derivada de la responsabilidad civil y, por tanto, acumulable con ésta, porque ambas prestaciones derivan de títulos o relaciones jurídicas distintos. (Exp. 4662)**

**En ese orden, nada se opone a la acumulación de la indemnización de perjuicios que se reclama en este proceso con la pensión de sobreviviente que recibe la demandante como beneficiaria del occiso, toda vez que esta prestación deriva de un título autónomo y distinto de la obligación indemnizatoria que está a cargo del tercero responsable del daño; y su concurrencia no podría implicar jamás un enriquecimiento sin causa para la actora porque la prestación pensional no**

**guarda en realidad ningún tipo de relación con los perjuicios que deben ser resarcidos, por lo que no podría sostenerse que es una compensación de los mismos.**

**En efecto, para hacerse acreedor de una pensión de vejez; de jubilación; de invalidez de origen común o profesional; de sobreviviente por muerte común o por razón del trabajo; de sustitución; o a la indemnización sustitutiva de esas prestaciones si aquéllas no fueren procedentes, solo es necesario cumplir con los requisitos contemplados en las normas pertinentes del sistema general de pensiones o de riesgos profesionales, o en los regímenes especiales o exceptuados, según sea el caso; sin que para el reconocimiento de esa especie de derechos tenga incidencia el hecho de que ellos tengan su causa adecuada en los actos de un tercero, o que el beneficiario de esas prestaciones haya sufrido o no un daño comprobado, o que haya recibido el pago de una indemnización de perjuicios o de un seguro de vida.**

Los beneficios pensionales tienen su origen en los aportes realizados para cada uno de esos riesgos, o en el tiempo de servicios, según sea el caso; y por lo tanto son ajenos a cualquier circunstancia que resulte extraña al respectivo sistema; de suerte que al no haber ningún factor de conexión entre ellos y la actividad de un tercero, no podría estatuir la ley, como en efecto no lo hace, la facultad de repetir en contra de éste, toda vez que esas obligaciones se radican de modo exclusivo en la entidad aseguradora y a nadie más pueden transmitírsele.

Por el contrario, los daños patrimoniales futuros sufridos por los deudos de la persona fallecida a raíz del hecho lesivo, consisten en la pérdida de aquellas contribuciones o utilidades económicas que el finado les habría aportado presumiblemente. Ellos constituyen el lucro cesante y su resarcimiento está condicionado a la demostración, entre otros hechos, de la renta que en promedio recibía el occiso y, en particular, de la parte que éste habría destinado de sus propios ingresos a cubrir las necesidades de sus familiares, o a prodigarles una ayuda económica aunque no tuvieran necesidad de ella; es decir que se debe probar la dependencia económica que existía respecto del difunto.

**De lo anterior se deduce que para el cálculo de los daños patrimoniales futuros resarcibles no interesa que los deudos hayan resultado beneficiados con una pensión de sobreviviente, no solo porque tal atribución se fundamenta sobre un título diferente del hecho lesivo sino porque la existencia de una pensión no tiene ningún nexo de causalidad con las contribuciones patrimoniales o las utilidades económicas que el fallecido habría aportado presumiblemente a sus familiares.**

De hecho, ni siquiera ambos tipos de prestación tienen los mismos destinatarios, aunque a menudo éstos suelen coincidir, porque puede darse el caso de que el afiliado muera sin dejar beneficiarios en el sistema de seguridad social y, no obstante, haya personas legitimadas para reclamar la indemnización civil. O, por el contrario, que no existan perjudicados civiles y, sin embargo, se otorgue la pensión de sobreviviente a quien objetivamente tenga ese derecho. Por lo demás, cualquier persona que resulte lesionada con la muerte de otra puede pedir el resarcimiento de esos perjuicios, en tanto los pruebe; mientras que la pensión solo puede ser recibida por quienes estén taxativamente cobijados por la ley, en estricto orden y proporción, siempre que cumplan los requisitos legales y por el tiempo que la norma determine,

*independientemente de que la muerte les reporte un perjuicio patrimonial.*

**Resulta claro, entonces, que el pago de una pensión de sobreviviente se calcula sobre los presupuestos del propio sistema y no atiende a la verificación de un daño, ni al monto del mismo, ni a la imputación de responsabilidad civil a un tercero, ni tiene por finalidad compensar la ayuda económica que se dejó de recibir de manos del difunto. Todo lo cual indica, sin ambages de ninguna especie, que al no tener esa prestación relación alguna con los perjuicios que han de ser resarcidos, mal podría significar una fuente de ganancias o enriquecimiento sin causa.**

*Las premisas que vienen de exponerse conllevan a desestimar el argumento que se alegara respecto de la supuesta incompatibilidad entre la pensión de sobreviviente que recibe la demandante con la indemnización cuyo pago persigue este proceso.*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia, doctrina

**Decisión:**

Casa (no tiene que ver con el planteamiento de la acumulación de indemnizaciones)

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia N° 198 de 3 de septiembre de 1991. G.J. t. CCXXII págs. 85 y 86.

Sentencia de 24 de junio de 1996, Rad. 4662



<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 12 de septiembre de 1991. C.P. Julio Cesar Uribe Acosta. Rad. 6572
<b>Corporación:</b> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. <b>Número de sentencia o radicación:</b> 6572 <b>Fecha:</b> 12 de septiembre de 1991 <b>Magistrado Ponente:</b> Julio Cesar Uribe Acosta
<b>Hechos relevantes:</b>  Los señores Rosa Nelly Londoño Martínez, Jorge Londoño Arango, Edgar Tarsicio, María Teresita Del Pilar Acevedo Londoño, Gloria Rosa De María Auxiliadora Acevedo De Álvarez, Bernardo Londoño Martínez y Carmen Londoño De Rojas, instauraron demanda en contra de La Nación, en la cual solicitan se declare responsable de la totalidad de los daños y perjuicios causados a los demandantes con el lesionamiento y consiguientes secuelas invalidantes a la doctora Rosa Nelly Londoño Martínez (empleada del municipio que se encontraba en ejercicio de sus funciones), a manos de un agente de la Policía Nacional.  La señora ROSA NELLY LONDOÑO MARTINEZ fue lesionada por el policía con 7 balazos, dejándola con una incapacidad laboral del 50%.
<b>Primera Instancia:</b>  El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró administrativamente responsable a la Nación, y estableció:  <i>6.2. En relación con los perjuicios materiales que por daño emergente y lucro cesante reclama le sean indemnizados, se descarta lo correspondiente al daño emergente, porque éste fue satisfecho por el municipio de Medellín, entidad pública a la cual prestaba sus servicios, como consta en la certificación obrante a fls. 124 y 125.</i>  <i>6.3. No ocurre lo mismo con la indemnización por lucro cesante, ya que está probado mediante el dictamen del médico del trabajo (fls.145) que a la señora Londoño Martínez como secuelas definitivas de las heridas le quedó una incapacidad permanente parcial y una merma laboral genérica de un 35% que aunque no produce una incapacidad laboral específica para el desempeño de la profesión de abogado, sin embargo, como es lógico tiene una repercusión desfavorable sobre su rendimiento y que de acuerdo con el art. 209 del Código Sustantivo del Trabajo modificado por el art. 1º del Decreto 776 de 1987, tanto originariamente como ahora con la reforma, le da derecho a una indemnización equivalente a 7 meses de salario, que de acuerdo con la certificación expedida por el municipio de Medellín (fls. 124), en la fecha en que ocurrieron los hechos devengaba \$58.544.05 mensuales, equivale a \$409.808.35, valor que deberá ser actualizado conforme al incremento del Índice de Precios al Consumidor certificado por el DANE entre el 15 de marzo de 1985 y la fecha de ejecutoria de esta sentencia, mediante posterior incidente liquidatorio, según lo</i>

establecido en el art. 172 del C.C.A.

### **Problema Jurídico:**

¿Es posible que el Estado descuente de la indemnización de perjuicios derivada de la falla en el servicio, las sumas que el empleador haya pagado por la materialización del accidente de trabajo?

### **Segunda Instancia:**

*" C) La Sala revocará la sentencia, en cuanto denegó el pago del daño emergente, por la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS (\$296.335.00), pues encuentra que el pago que por tal monto hizo el Municipio de Medellín (C. 1, fol. 124), tiene una causa o título que no importa una reparación o indemnización del daño realmente irrogado. Siendo la Dra. ROSA NELLY LONDOÑO MARTINEZ, funcionará a su servicio, como Inspectora Municipal de Policía, la atención hospitalaria, ortopédica, de fisioterapia y psiquiatría que le prestó, obedeció a una de las compensaciones que el Municipio debe otorgar a sus empleados en retribución de sus servicios, y que como lo enseña el Profesor Arturo Alessandri Rodríguez..... las más de las veces contribuye a formar las del sueldo o de la remuneración del empleado o funcionario. Todo esto demuestra que no son propiamente una reparación del daño sufrido por la víctima" (De la Responsabilidad Extracontractual en el Derecho Civil. Imprenta Universal. 1987, Tomo 11, pag 586.*

*El problema que se estudia es conocido en la doctrina con la denominación: CUMULO DE INDEMNIZACIONES es presentado por el jurista en antes citado, dentro del siguiente universo*

*Sucede, a menudo, que la víctima de un delito o causa delito, independientemente de la reparación que le debe su autor, recibe o tiene el derecho de exigir de terceras personas ajenas al delito o causa delito, y como consecuencia de él, una prestación pecuniaria en razón del daño que sufre. Ya es un funcionario Público o municipal que, por haber quedado inválido en actos del servicio por dolo o culpa de un tercero, tiene derecho a una pensión de invalidez; ya el dueño de un edificio incendiado o la víctima de un accidente corporal que recibe de la compañía de seguros la indemnización convenida en el contrato; ya los hijos o la viuda de la víctima a quien esa misma compañía paga el valor del seguro contratados sobre la vida del difunto; ya un accidentado a quien un tercero le hace una dádiva en vista de su desgracia o a quien una sociedad de socorros mutuos le proporciona lo necesario para su curación.*

*La víctima o sus herederos, según el caso, pueden acumular estas prestaciones con la indemnización a que está obligado el autor del delito o cuasidelito y recibir ambas íntegramente, o éste tiene el derecho de exigir que se imputen a aquélla, de modo que sólo pague la diferencia o se le declare exento de su obligación respecto de la víctima si esas prestaciones son iguales o superiores al daño?. En esto consiste el problema del CUMULO DE LAS INDEMNIZACIONES, que es uno de los más complejos y controvertidos y acerca del cual las opiniones están muy divididas" (Obra citada, pág., 580 y 581).*

*Dentro de la óptica que se deja precisada, se impone concluir, con la doctrina, que no es cierto que un delito o causa delito no pueda ser motivo de enriquecimiento para la*

víctima. Este resultado se dará, como ocurre en el caso en comento, cuando exista un título o causa que justifica ese enriquecimiento. Esta verdad jurídica explica bien el por qué en el SEGURO DE DAÑOS, como éste repara el causado, es inadmisibile la ACUMTLACION, mientras que en el de PERSONAS, como no tiene tal finalidad, ella sí es posible y de recibo. - Al comentar todos los aspectos relacionados con el pago de pensiones fiscales, municipales o pagadas por las Cajas de Previsión, el Profesor Alessandri, dentro de una perspectiva que hace suya la Sala, predica:

**Lo mismo cabe decir de las pensiones, gratificaciones o indemnizaciones pagadas por el Fisco, las Municipalidades o las Cajas de previsión a los empleados o funcionarios públicos o municipales o a sus familiares en caso de invalidez o muerte, suponiendo que ésta o aquélla se deba a dolo o culpa de un tercero. Tales pensiones se pagan, de ordinario, con arreglo a una escala preestablecida, cualquiera que sea la causa del daño, y aunque éste no sea imputable a un tercero... El cúmulo es, por tanto, admisible: el autor del daño no puede pretender QUE EL MONTO DE LA PENSION SE REDUZCA DE LA INDEMNIZACION A QUE ESTA OBLIGADO..."** (Resalto y subrayo)

Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:

N/A

**Decisión:**

Ordena a pagar la totalidad del daño emergente.

**Jurisprudencia citada:**

N/A

## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 9 de febrero de 1995. C.P. Julio César Uribe Acosta. Rad. 9550.
<b>Corporación:</b> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera <b>Número de sentencia o radicación:</b> 9550 <b>Fecha:</b> 9 de febrero de 1995 <b>Magistrado Ponente:</b> Julio Cesar Uribe Acosta
<b>Hechos relevantes:</b>  Luis Carlos Castellanos Ruiz y Alba Rocío Sánchez Bonilla, actuando en nombre propio y en el de sus menores hijos Carlos Enrique y Felipe Andrés Castellanos Sánchez, Eccehomo y Nubia Castellanos Ruiz, demandaron a la Nación- DAS, para que fueran declarados administrativamente responsable de las lesiones sufridas por el señor Castellanos (detective del DAS), en un atentado terrorista en las instalaciones de la institución, mientras el demandante se encontraba trabajando.  El señor Luis Carlos Castellanos recibió una incapacidad equivalente a catorce meses de sueldo de la Caja Nacional de Previsión Social.
<b>Primera Instancia:</b>  El tribunal declaró administrativamente responsable al estado por las lesiones sufridas, y lo condenó a indemnizar los perjuicios causados a los demandantes.  <i>"5.6. Este daño sufrido por el primero de los demandantes se produce como consecuencia de una falla en el servicio, que no corresponde precisamente a su actividad profesional, caso en el cual hay lugar a indemnizaciones. Sin embargo, <b><u>para evitar que por el mismo perjuicio reciba doble indemnización las prestaciones percibidas por efectos de la incapacidad laboral, deberán restarse de la indemnización que le corresponde por derecho común.</u></b>"</i>
<b>Problema Jurídico:</b>  ¿Debe descontarse de la indemnización a un sujeto por la declaratoria de administrativamente responsable del Estado, la suma de las prestaciones pagadas con ocasión de que los daños se hayan presentado en el marco de un accidente de trabajo?
<b>Segunda Instancia:</b>  <i>Se confirma la condena que por PERJUICIOS MATERIALES hizo el a-quo en favor del demandante Señor LUIS CARLOS CASTELLANOS RUIZ, <b><u>pero se modificará en el sentido de no descontar la indemnización que por UN MILLON</u></b></i>

**CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$1.429.400.00)**  
**recibió el lesionado de la Caja Nacional de Previsión. Y no se acepta el descuento, porque la Sala ha venido reiterando la pauta jurisprudencial que se recoge en el alegato presentado por el apoderado de los demandantes, en el sentido de que, en casos como el presente, el agente o sus damnificados tienen derecho a la indemnización total y no solo a la especial "a fortait" o predeterminada por las leyes laborales, pues ellas tienen causas distintas, y, por lo mismo, universo económico también diferente. (Ver sentencias de septiembre de 1991, Expediente 6253, Actor Mélida Inés Domínguez de Medina y de 18 de octubre de 1991, expediente 6709, actor ALIX MARIA PEDROZA ROBLES).**

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia

**Decisión:**

No se descuenta de la indemnización lo pagado por la Caja Nacional de Previsión Social.

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia de septiembre de 1991, Exp. 6253

Sentencia del 7 de febrero de 1995, Ponente, Rad. S-247 (origen común)

Sentencia del 18 de octubre de 1991, Exp. 6709

Sentencia del 23 de septiembre de 1994, Exp. 8577

## Ficha de Jurisprudencia

### Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil

#### Identificación:

CE. Sala de lo CA. Sección tercera. Sentencia del 3 de octubre del 2002. C.P. Ricardo Hoyos Duque. Rad.19001-23-31-000-1995-3007-01 (14207)

**Corporación:** Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera.

**Número de sentencia o radicación:** 19001-23-31-000-1995-3007-01 (14207)

**Fecha:** 3 de octubre del 2002

**Magistrado Ponente:** Ricardo Hoyos Duque

#### Hechos relevantes:

Los señores Juan Manuel Caro González, Claudia Rosemary Groso Ruiz, Rosalba González De Caro y Ana María Caro González, formularon demanda ante el Tribunal Administrativo del Cauca para que se declare a la Fiscalía General de la Nación como administrativamente responsable de las lesiones sufridas por el señor Juan Manuel Caro González –empleado de la Fiscalía– cuando un vehículo de tal entidad colisionó por culpa del conductor (también empleado de la Fiscalía), y se le condene a indemnizar los perjuicios materiales y morales causados a él y a su familia.

Al señor Caro González fue otorgada una pensión de invalidez por parte de la Caja Nacional de Previsión Social.

#### Primera Instancia:

El a quo declaró administrativamente responsable a la Nación-Fiscalía General de las lesiones sufridas por el señor Juan Manuel Caro González

#### Problema Jurídico:

¿Es procedente que la víctima acumule la pensión de invalidez otorgada por CAJANAL y la indemnización plena del lucro cesante sufrido, o constituye el pago de la pensión un pago parcial de la indemnización plena a cargo de la entidad pública (empleador)?

#### Segunda Instancia:

*EL CUMULO DE INDEMNIZACIONES*

**El problema jurídico relativo a la posibilidad de acumulación de diferentes compensaciones por un mismo daño, entendido como el derecho a percibir indemnizaciones derivadas de varias fuentes: la plena del responsable del daño y la indemnización a forfait o predeterminada por las leyes laborales, o un seguro privado, remite a lo que en la doctrina se conoce como la compensatio lucri cum damno.** Adriano De Cupis la define como "la disminución proporcional que el daño

experimenta cuando con él concurre un lucro (ventaja), o con otras palabras, la reducción del montante del daño resarcible por la concurrencia de un lucro"<sup>1</sup>.

*El tema pone de presente las relaciones de la responsabilidad civil y la seguridad social y si se quiere, del derecho de seguros. Como lo expresa el profesor André Tunc<sup>2</sup>, a pesar de sus diferencias filosóficas, técnicas y de sus resultados la responsabilidad y la seguridad social tienen una relación muy fuerte que deriva de un hecho fundamental: todos los daños personales causados a alguien por el hecho de otro son susceptibles de ser cubiertos a la vez por la responsabilidad civil y por la seguridad social. "Ese cúmulo se produce a menos que la cobertura de la seguridad social no sea más que parcial o a menos que la aplicación de la responsabilidad civil no esté excluida".*

**"Esta acumulación crea un problema evidente de coordinación: la víctima se puede beneficiar a la vez de dos sistemas de derecho? Si no es así, cuál método se empleará para evitar la acumulación?. Estos son problemas muy difíciles y de gran importancia práctica".**

*El tratamiento jurisprudencial y legislativo del asunto puede ser abordado desde una doble perspectiva:*

- i) Cuando el hecho causante del daño es imputable al patrono o empleador y*
- ii) Cuando éste es imputable a un tercero*

*Adicionalmente, es posible diferenciar dos períodos a partir de la expedición de la ley 100 de 1993 y los decretos que la desarrollan, normas éstas que crearon en Colombia el llamado "Sistema de Seguridad Social Integral".*

*I. El daño es imputable al patrono.*

#### *1.-Antecedentes*

*El fallo Cames del Consejo de Estado Francés (1895) por primera vez estableció la responsabilidad objetiva o por el riesgo creado (riesgo profesional) del patrono derivada del accidente de trabajo. Tres años más tarde, en 1898 ese criterio fue incorporado a la ley sobre accidentes de trabajo, cuyas orientaciones fueron adoptadas en las diferentes legislaciones del mundo sobre la materia, entre ellas la colombiana.*

#### *2.-La ley 6 de 1945 y el Código Sustantivo del Trabajo*

*El artículo 12 de la Ley 6 de 1945 establecía que mientras se organiza el seguro social obligatorio, corresponderían al patrono las indemnizaciones por accidente de trabajo o enfermedad profesional. En estos casos cuando se trate de culpa comprobada del patrono el valor de la indemnización se descontaría del monto de la condenación ordinaria de perjuicios.*

---

<sup>1</sup> \*El daño. Teoría general de la responsabilidad civil, Barcelona, Casa Editorial Bosch, 1970, 2ª. Ed., pág. 327.

<sup>2</sup> La Responsabilité Publique. Paris, Économica, 1989. 2a. Ed. P. 26.



*La ley 90 de 1946 que creó el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales estableció el seguro social obligatorio de los trabajadores contra los riesgos de invalidez, vejez, accidente de trabajo, enfermedad profesional y muerte.*

*El Código Sustantivo de Trabajo (1950) dentro de las prestaciones patronales establece la indemnización por accidente de trabajo y enfermedad profesional, las cuales dejarían de estar a cargo del patrono cuando el riesgo de ellas fuera asumido por el ISS (art. 193).*

*El artículo 216, en términos muy similares a los señalados por la ley 6 de 1945, establece que cuando exista culpa suficientemente comprobada del patrono en la ocurrencia del accidente de trabajo o en la enfermedad profesional está obligado a la indemnización total y ordinaria por perjuicios, pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas en razón de las mismas norma del Código Sustantivo del Trabajo (indemnización predeterminada o a forfait).*

*El artículo 219 faculta al patrono para asegurar con una compañía de seguros los riesgos por accidente de trabajo y enfermedad profesional de sus trabajadores "pero en todo caso es el patrono quien debe al trabajador o a sus beneficiarios las prestaciones"<sup>3</sup>*

*El artículo 83 del decreto 3170 de 1964, mediante el cual se aprobó el acuerdo 155 de 1963 proferido por la Junta Directiva del Instituto de los Seguros Sociales señala:*

*"El otorgamiento de las prestaciones establecidas por el presente reglamento por parte del Instituto, exonera al patrono de toda otra indemnización según el Código Sustantivo del Trabajo, o según el derecho común por causa del mismo accidente o enfermedad profesional. Pero si el riesgo se hubiere producido por acto intencional o por negligencia o culpa del patrono o sus representantes, o de un tercero, y diere lugar a indemnización común, el instituto procederá a demandar el pago de esa indemnización, la que quedará a su favor hasta el monto calculado de las prestaciones que el instituto acordare por el accidente o enfermedad, debiendo entregar a los beneficiarios el saldo si lo hubiere.*

*Lo dispuesto en el inciso anterior no es óbice para que la víctima o sus causahabientes instauren las acciones pertinentes de derecho común para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas por el instituto de acuerdo con las normas de este reglamento".*

*2.1.-La jurisprudencia del Consejo de Estado.*

**Sobre este punto, la jurisprudencia de la Corporación no ha mantenido una posición uniforme, pues ha considerado: a) que si bien el damnificado tiene derecho a la reparación plena del daño, para evitar un enriquecimiento sin causa debe descontarse de la indemnización la suma correspondiente a las prestaciones sociales que hubiera recibido<sup>[7]</sup>; b) que había lugar a esa acumulación sin ningún descuento porque las prestaciones sociales y la indemnización tenían fuentes diversas: las primeras, derivan de la relación jurídico laboral de la víctima y por lo**

---

<sup>3</sup> El artículo 1100 del Código de Comercio ubicado en el capítulo de seguro de daños, señala que las normas sobre subrogación se aplicarán también al seguro de accidentes de trabajo "si así lo convinieren las partes" (subrogación convencional).



**tanto, no tienen carácter indemnizatorio y la segunda tiene su origen en el daño sufrido por la víctima<sup>[7]</sup> y c) en otras oportunidades se ha negado el derecho a recibir la indemnización por incapacidad laboral temporal cuando la víctima ha recibido la prestación social correspondiente<sup>[7]</sup>.**

La Sala Plena de la Corporación, sostuvo inicialmente que las prestaciones reconocidas a los demandantes en razón del vínculo laboral que tenía la víctima, debían descontarse de la indemnización que se le reconociera en los procesos de responsabilidad extracontractual, con el fin de evitar un enriquecimiento sin causa<sup>[7]</sup>.

No obstante, en sentencia del 7 de febrero de 1995<sup>[7]</sup>, cambió su jurisprudencia y consideró que había lugar a la acumulación de prestaciones sociales e indemnización porque ésta tenían fuentes diferentes, así: las primeras, derivadas de la prestación del servicio y la segunda de la falla del mismo: (...)

**La jurisprudencia del Consejo de Estado francés, desde el año de 1906 (fallo Pallotin) considera que "cuando un colaborador de la administración en servicio es víctima de un accidente corporal imputable a la persona pública de la cual depende, de modo que ésta esté obligada al pago de una pensión de invalidez se considera excluyente de cualquier otra indemnización. El juez administrativo interpreta dentro de este marco la voluntad presunta del legislador, promotor de tal régimen de pensión, con una particular severidad: poco importa que la indemnización predeterminada por la pensión sea mucho más elevada que la que le corresponda de acuerdo con el derecho común; tampoco importa la gravedad de la culpa imputable a la administración"<sup>[4]</sup>.**

## 2.2.-La jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral.

A este respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia tampoco ha tenido una posición unánime. En sentencia del 9 de agosto de 1979<sup>[7]</sup>, al interpretar el contenido de los artículos 216 del Código Sustantivo del Trabajo y 38 del acuerdo No. 155 de 1963 del Instituto de Seguros Sociales que fue aprobado por el decreto 3170 de 1964, consideró que el patrono no estaba habilitado para descontar de la indemnización plena debida al **trabajador por haberse producido el daño por su culpa, lo que éste hubiera recibido de la entidad aseguradora del riesgo profesional, porque no podía "lucrarse con el aprovechamiento en beneficio suyo de un valor pecuniario que en realidad le pertenecía a persona distinta: el Instituto de Seguros Sociales"**, entidad que además en el evento de no ser parte en el juicio respectivo podía reclamar judicial o extrajudicialmente al beneficiario de la indemnización plena del daño, lo que le hubiera entregado a título de indemnización laboral.

No obstante, en sentencia del 10 de marzo de 1993<sup>[7]</sup>, al interpretar las mismas disposiciones concluyó esa Sala que **cuando el trabajador sufriera un accidente de trabajo por culpa del patrono tenía derecho a la indemnización total y ordinaria de perjuicios, pero podría descontarse del monto de la misma el valor de las prestaciones en dinero sufragadas por el patrono o, si es el caso, por el I.S.S., cuando éste haya asumido el riesgo, con el fin de evitar que la víctima del accidente**

---

<sup>4</sup> Michel PAILLET. La responsabilidad administrativa. Bogotá, D.C., Universidad Externado de Colombia, 2001. p. 324.

**recibiera un valor superior al que le correspondiera y obtuviera consiguientemente, un enriquecimiento sin causa.**

Posteriormente, en sentencia del 12 de noviembre de 1993<sup>[1]</sup> la sala plena de Casación laboral de la Corte Suprema de Justicia, con el propósito de unificar la jurisprudencia acogió el criterio adoptado en la sentencia del 9 de agosto de 1979 ya citada **y distinguió los siguientes eventos: a) cuando el patrono esté obligado a pagar indemnización total y ordinaria, puede descontar el valor de las prestaciones sociales que haya pagado al trabajador o sus beneficiarios, "sólo para aquellas hipótesis en que el patrono previamente ha pagado el valor de las prestaciones en dinero y posteriormente resulta condenado como culpable del accidente o de la enfermedad profesional", b) cuando esas prestaciones hayan sido pagadas por el I.S.S., esa entidad estará facultada para demandar del empleador la restitución de las mismas, siempre que el accidente o la enfermedad se produjeron por su culpa, "puesto que la entidad de previsión social no asegura los daños causados por dolo o culpa del patrono", y c) cuando la víctima o sus causahabientes instauren las acciones pertinentes para obtener la indemnización total y ordinaria de perjuicios, "del monto de ella y por el mismo Instituto deberá descontarse el valor de las prestaciones en dinero pagadas de acuerdo con las normas del reglamento".** Para adoptar dicho criterio realizó el siguiente razonamiento: (...)

**Por último, en sentencia del 8 de mayo de 1997, la sala de casación civil de la Corte Suprema de justicia insinúa que el acuerdo No. 155 de 1963 de la Junta Directiva del I.S.S. es ilegal y por lo tanto, en el evento de establecer la subrogación debería ser inaplicable.**

Las razones que tuvo en cuenta para fundar su tesis fueron las siguientes: 1) El poder normativo de los reglamentos del Seguro está limitado por su objeto social: es entidad aseguradora de los riesgos originados en la prestación de servicios subordinados; la ley no le dio al Seguro la atribución de determinar las consecuencias de la culpa del patrono en la ocurrencia de un accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, pues esas consecuencias corren a cargo exclusivo del empleador culpable. 2) La competencia que le reconoce la ley al Seguro para subrogar al patrono en la asunción de riesgos laborales está dentro del ámbito de las prestaciones, de los servicios sociales o de las medidas de seguridad social que deben amparar a sus beneficiarios, como lo prescribe el artículo 7º del decreto ley 433 de 1971; pero el Seguro no está legalmente facultado para regular las indemnizaciones originadas en enfermedades profesionales o accidentes de trabajo que ocurran por la culpa suficientemente comprobada del patrono. El Seguro tampoco está legalmente facultado para aminorar la carga patrimonial del patrono en esa materia, por lo cual, asume toda la responsabilidad ordinaria por mandato del artículo 216 del CST; y, por lo mismo, el Seguro subroga al patrono únicamente en el riesgo que da lugar a la denominada responsabilidad objetiva. **3) Si, por su equívoca redacción, el artículo 83 del Acuerdo 155 de 1963 consagrara el derecho del empleador culpable del accidente para descontar del monto de la indemnización ordinaria lo pagado por el Seguro por prestaciones en dinero, la norma sería inaplicable, al igual que el artículo 1º del decreto 3170 de 1964 que lo aprobó.** 4) **El Seguro reconoce prestaciones para cuyo cálculo toma en cuenta variables como el salario, los años de servicios, el número de cotizaciones, la edad del trabajador, la vida probable, etc. En cambio, no toma en cuenta los perjuicios realmente producidos, lo cual**

**marca una diferencia entre la indemnización a que se refiere el artículo 216 del CST, que busca reparar la totalidad del daño ocasionado por el patrono culpable, con la actividad aseguradora del Instituto. 5) No es cierto que el trabajador se beneficie doblemente (con la indemnización plena y con las prestaciones económicas del Seguro), puesto que el seguro ha sido tomado por el mismo accidentado, de modo que el patrono no puede restar de la indemnización total y ordinaria de perjuicios lo pagado por el Seguro Social en virtud del cubrimiento de un riesgo que no ha sido asegurado por él.**

## ***II. El daño es imputable a un tercero. La jurisprudencia de la Sala de Casación Civil***

*Igualmente, la Sala de Casación Civil de La Corte Suprema de Justicia ha oscilado en su jurisprudencia entre reconocer a la víctima o sus beneficiarios el derecho a acumular lo pagado por la seguridad social y la reparación que obtiene del responsable del daño, por considerar que éstas tienen causas jurídicas diferentes<sup>[1]</sup>, o negarle el derecho, so pretexto de que ello constituiría una doble indemnización<sup>[2]</sup>.*

**En sentencia del 22 de octubre de 1998, dicha Sala consideró que para la solución de la disyuntiva propuesta debía definirse si el pago del seguro o de la seguridad social extinguía la obligación del tercero responsable o únicamente solucionaba su propia obligación, caso en el cual subsistiría la obligación indemnizatoria del victimario. Aclaró que la posibilidad de subrogación que puedan tener la compañía aseguradora o la entidad de seguridad social no se deriva del artículo 1666 del Código Civil porque esta norma otorga tal derecho al tercero que paga la obligación del deudor, pero no cuando extingue su propia obligación, sino de las disposiciones legales que en forma concreta reconozcan ese derecho y así advirtió que en el seguro de personas la ley prohíbe la subrogación (art. 1139 C. Co.), pero la permite en el seguro de daños (art. 1096 C. Co.), y con fundamento en estas consideraciones concluyó que es la ley y no la naturaleza del seguro la que posibilita la acumulación de las indemnizaciones: (...)**

*Aclaró, además, que no es el carácter indemnizatorio de las prestaciones ni la diferencia de fuentes de donde éstas se derivan, lo que permite establecer si hay lugar o no a la acumulación, porque el seguro sólo tiene el carácter de indemnizatorio cuando el asegurador extingue la obligación del responsable; pero aún en eventos en los cuales la causa jurídica de las obligaciones de asumir el riesgo es distinta, la ley autoriza la subrogación.*

*Con estas premisas consideró que en relación con el Instituto de Seguros Sociales como el art. 83 del decreto 3170 de 1964, mediante el cual se aprobó el acuerdo 155 de 1963 proferido por la Junta Directiva de dicho Instituto, permitía el recobro de las indemnizaciones pagadas al asegurado, **el responsable no podía obtener el descuento de lo pagado por aquel a la víctima o sus beneficiarios, pero la entidad que asumió el riesgo profesional sí podía demandar de quien hubiera recibido la indemnización plena, la devolución del valor de las prestaciones ya concedidas.** La interpretación de la norma citada realizada por esa Sala fue la siguiente: (...)*

## ***III.-La ley 100 de 1993 y los decretos que la desarrollan***

*El decreto ley 1295 de 1994, que determina la organización y administración del sistema general de riesgos profesionales, establece en el artículo 77 que dicho sistema será administrado por el Instituto de Seguros Sociales y "las entidades aseguradoras de vida que obtengan autorización de la Superintendencia Bancaria para la explotación del ramo de seguro de riesgos profesionales". Esto significa que entidades diferentes como las cajas de previsión social que antes administraban tales riesgos, a partir de la vigencia de ese decreto perdieron dicha función.*

*El artículo 16 del citado decreto establece la obligatoriedad de las cotizaciones en forma exclusiva a cargo del empleador durante la vigencia de la relación laboral. El no pago de dos o más cotizaciones implica la desafiliación automática del sistema de riesgos profesionales "quedando a cargo del respectivo empleador la responsabilidad del cubrimiento de los riesgos profesionales".*

*El artículo 98 del decreto ley 1295 derogó en forma expresa varias disposiciones del Código Sustantivo del Trabajo, norma que a su vez no derogó el artículo 216 sobre responsabilidad total y ordinaria del patrono, lo cual significaría que actualmente de la indemnización plena a cargo de éste se descuenta lo recibido de la seguridad social (pago parcial pero definitivo por cuenta del empleador que le trasladó los riesgos profesionales derivados de la relación laboral).*

*Cabe anotar que la Corte Constitucional mediante sentencia C-432 del 12 de junio del presente año declaró inexecutable más de quince artículos del decreto ley 1295 de 1994 sobre riesgos profesionales (prestaciones económicas por incapacidad temporal y por incapacidad permanente parcial, pensiones de invalidez y de sobrevivientes y auxilio funerario) por considerar que el gobierno había excedido las facultades que le fueron conferidas por el congreso mediante la ley 100 de 1993 para organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales y no para definir o derogar las prestaciones establecidas en el Código Sustantivo del trabajo, el decreto ley 3135 de 1968 y el decreto reglamentario 1848 de 1969 como se había dispuesto en el artículo 98 del citado decreto.*

*Los efectos de este fallo se defirieron hasta el 17 de diciembre de 2002 "para que el Congreso expida la nueva legislación sobre la materia regulada por el decreto ley 1295 de 1994".*

***El artículo 12 del decreto 1771 de 1994, reglamentario del 1295, previó el derecho a la subrogación de las entidades administradoras de riesgos profesionales, en estos términos:***

*"Subrogación. La entidad administradora de riesgos profesionales podrá repetir, con sujeción a las normas pertinentes, contra el tercero responsable de la contingencia profesional, hasta por el monto calculado de las prestaciones a cargo de dicha entidad administradora, con sujeción en todo caso al límite de responsabilidad del tercero.*

*"Lo dispuesto en el inciso anterior no excluye que la víctima, o sus causahabientes, instauren las acciones pertinentes para obtener la indemnización total y ordinaria por perjuicios, de cuyo monto deberá descontarse el valor de las prestaciones asumidas por la entidad administradora de riesgos profesionales".*

1.-El hecho causante del daño proviene del patrono o empleador. La sentencia de 11 de septiembre de 2000 de la Sala de Casación Laboral.

*En esta sentencia se dijo que el artículo 12 del decreto 1771 de 1994 tiene una redacción similar a la de su antecesor, el 83 del acuerdo 155 de 1963 de la Junta Directiva del I.S.S., "de manera que por este solo aspecto, si fuera puesto en relación con el 216 del CST, no sería útil para dar por sentada la posibilidad de descontar las prestaciones económicas del Seguro Social de la indemnización ordinaria de perjuicios.*

**Ninguna de las normas cuya acusación plantea el cargo permite concluir en la tesis de la censura. En efecto:**

*El artículo 139-11 de la ley 100 de 1993 confirió al Presidente de la República precisas facultades extraordinarias pro tempore para "Dictar las normas necesarias para organizar la administración del sistema general de riesgos profesionales como un conjunto de entidades públicas y privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes, que puedan ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. En todo caso, la cotización continuará a cargo de los empleadores"; luego nada indica que en esta atribución de facultades legales, el Presidente de la República pudiera regular las consecuencias de la culpa patronal del artículo 216 del CST.*

*El decreto ley 1295 de 1994, según su encabezamiento, determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. El artículo 13 se limita a señalar quiénes son los afiliados a dicho sistema; el 34 consagra el derecho a las prestaciones; el 49 establece que, en caso de muerte del afiliado o del pensionado por riesgos profesionales, como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo 47 de la Ley 100 de 1993, y sus reglamentos; pero esa norma nada dice sobre la responsabilidad por culpa patronal en el accidente de trabajo o en la enfermedad profesional. El artículo 50 se limita a fijar el monto de la pensión de sobrevivientes y el 53 a precisar las condiciones de la devolución de saldos y de la indemnización sustitutiva cuando ocurre la muerte del asegurado. El artículo 78 dice que el Instituto de Seguros Sociales continuará administrando los riesgos profesionales de conformidad con sus reglamentos, lo cual no le da la razón a la sociedad recurrente. Pero sí conviene precisar que la tesis de los opositores sobre esta norma no es acertada, puesto que ella no remite a los reglamentos anteriores de una manera incondicional sino subordinada a lo dispuesto en el decreto 1265 que se estudia, puesto que la norma dice que los reglamentos del Seguro Social "... deberán ajustarse a lo dispuesto en este decreto ...". Y el 97 fija la vigencia del sistema general de riesgos profesionales.*

*Como ninguna de las normas acusadas, puestas en relación con el artículo 216 del CST, permite concluir que haya variado el sistema legal que informó la jurisprudencia de la Corte, la conclusión es que sigue vigente la interpretación que allí se consignó".*

2.-El hecho causante del daño proviene de un tercero. La interpretación de la Sala de Casación Civil

*En la sentencia del 22 de octubre de 1998 que se citó antes, la sala de casación civil de la*



Corte Suprema de Justicia consideró que ese texto era "idéntico" al art. 83 del decreto 3170 de 1964, aprobatorio del acuerdo de la Junta directiva del ISS, y que por lo tanto, la interpretación debía ser la misma ya que ninguna de esas normas "regulan un sistema asegurativo de la responsabilidad en que pueda incurrir ese tercero a quien le es imputable el daño razón por la cual carece de fundamento su pretensión destinada a obtener que las prestaciones económicas pagadas por el seguro social le sean descontadas del valor de la indemnización ordinaria por perjuicios que deba asumir de acuerdo con la ley."

#### *IV.-La opinión de la Sala.*

**La definición sobre la procedencia o no de la acumulación de la indemnización de perjuicios con las prestaciones pagadas a la víctima por la seguridad social, sea que se demande la responsabilidad plena del patrono o empleador o de un tercero, debe efectuarse a partir de la naturaleza jurídica de la seguridad social y de la existencia o no de la subrogación en los derechos de la víctima por parte de la entidad de la seguridad social que paga.**

#### *4.1.-La naturaleza jurídica del sistema de riesgos profesionales.*

La Corte Constitucional en la sentencia C-453 de 12 de junio de 2002 expresó:

"El Sistema de riesgos profesionales se estructura a partir de la existencia de un riesgo creado por el empleador. El Legislador acoge en esta materia la teoría del riesgo creado en la que no se toma en cuenta la culpa del empleador sino que se establece una responsabilidad objetiva por cuya virtud resulta obligado a reparar los perjuicios que sufre el trabajador al desarrollar su labor en actividades de las que el empresario obtiene un beneficio<sup>5</sup>.

Actualmente la Ley con el propósito de proteger a los trabajadores de las contingencias o daños que sufran como consecuencia de la relación laboral, ha impuesto la obligación a los empleadores de trasladar ese riesgo a entidades especializadas en su administración, mediando una cotización a cargo exclusivamente del empleador<sup>[1]</sup> y ha determinado claramente las prestaciones a las que tendrán derecho los trabajadores que se vean afectados por una contingencia de origen profesional<sup>[2]</sup>.

En ese orden de ideas las entidades Administradoras de Riesgos Profesionales, bajo un esquema de aseguramiento, -en el que las cotizaciones o primas, que el empleador entrega al sistema por cada uno de los trabajadores afiliados, generan una mutualidad o fondo común, con el cual se financian las prestaciones anotadas-, deben ocuparse de brindar a los trabajadores la prestación de los servicios de salud que requieran, así como asumir el reconocimiento y pago oportuno de las prestaciones económicas establecidas en el Decreto Ley 1295 de 1994-incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, pensión de invalidez, pensión de sobrevivientes, auxilio funerario-, al tiempo que deben

---

<sup>5</sup> En relación con la evolución de la legislación en este campo y la consagración de la teoría del riesgo creado Ver C.S.J. Sala de Casación Laboral, Sección Segunda, Sentencia del 13 de julio de 1993, Acta n. .37 .

realizar actividades de prevención, asesoría y evaluación de riesgos profesionales, y promover y divulgar programas de medicina laboral, higiene industrial, salud ocupacional y seguridad industrial<sup>[6]</sup>."

Esta interpretación jurisprudencial coincide con lo expresado por la doctrina extranjera. En efecto, Cavanilla Mujica, citado por Ricardo de Angel Yagüez expresa lo siguiente:

"La naturaleza de la seguridad social, determina que la indemnización laboral y civil sean o no totalmente compatibles. No es posible examinar aquí la compleja cuestión de la naturaleza de la seguridad social,...pero si interesa, destacar dos argumentos que, mientras no se acentúe la tendencia moderna a establecer una seguridad social asistencial con cargo principal a los presupuestos del Estado en sustitución de la actual seguridad social contributiva basada fundamentalmente en las cuotas de las cotizaciones, inclinan la balanza a favor de la tesis del seguro de responsabilidad civil, con el corolario de no resultar plenamente compatibles las indemnizaciones civiles y las laborales: **1º.) La seguridad social procede históricamente de un seguro obligatorio de responsabilidad civil del empresario; 2º.) La cotización de las primas correspondientes a los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales recae exclusivamente sobre el empresario....**"<sup>6</sup> [7]

Un criterio similar formula Adriano de Cupis al afirmar que la *compesatio lucri cum damno* no opera cuando la adquisición de un incremento patrimonial como el derecho a una pensión de invalidez,

"no está separado de un sacrificio económico (entrega mensual a cargo del funcionario Público) y, por tanto, no constituye un lucro en el sentido propio de la palabra. Debe recordarse aquí cuanto ya se ha dicho: Para que se produzca una reducción del daño resarcible se requiere que con el daño concorra un verdadero lucro originado por el daño mismo, o sea, una ventaja gratuita. Sólo así es junto que este enriquecimiento surgido con el daño, se tome en cuenta a la hora de establecer el resarcimiento. Pero cuando el culpable simplemente da entrada, con su acción, a una atribución patrimonial (pensión) que tenga su justificación en un correspondiente y previo sacrificio (contribución mensual del funcionario público) entonces no puede encontrarse aquel lucro que únicamente él puede compensarse con el daño y reducir el montante de la responsabilidad.

Se podría objetar que la aportación con que contribuye el funcionario es muy reducida, siendo solamente para aliviar un poco la carga financiera que incumbe al Estado en relación con las pensiones. Pero, cualquiera que sea su volumen, siempre imponen al funcionario público un sacrificio económico que condiciona el carácter de la pensión, cuya adquisición no presente el carácter de gratuidad. **En consecuencia, concurren plenamente el derecho al resarcimiento y el derecho a la pensión, sin que el resarcimiento pueda sufrir disminución por efecto de la pensión.**"<sup>7</sup>[8]

<sup>6</sup> Tratado de responsabilidad civil. Madrid, edit. Civitas, 1993, 3ª. Ed. P. 940 y 941.

<sup>7</sup> Op. Cit., p. 338. Una sentencia del Consejo de Estado Francés de 1986 señaló que las prestaciones de la seguridad social no tienen carácter indemnizatorio y por lo tanto, no deben ser deducidas del monto de la indemnización debida a la víctima por el Estado. El ministro de justicia consideró que "la acción de las cajas de seguridad social no es favorable a las víctimas de los accidentes con autor conocido, puesto que las priva de acumular las prestaciones dadas por el

**Si a través de la seguridad social el patrono traslada los riesgos a otra entidad (ISS, Cajanal o administradora de riesgos profesionales) las prestaciones derivadas del accidente de trabajo tienen una naturaleza indemnizatoria y por lo tanto, en el evento de que exista culpa suficientemente comprobada del patrono constituyen un pago parcial de la indemnización plena a cargo de éste, independientemente de que le asista o no el derecho de subrogación frente al patrono, cosa que por lo demás no resultaría lógica, en tanto el asegurador se estaría volviendo contra el asegurado en un seguro de responsabilidad civil.**

2.-El derecho a la subrogación de la seguridad social.

**Cosa distinta sucede cuando el hecho causante del daño es imputable a un tercero distinto del patrono o empleador. En este caso, el único mecanismo que impediría a la víctima acumular la indemnización de perjuicios con las prestaciones obtenidas de la seguridad social sería la subrogación que la ley-no un decreto reglamentario ni un acuerdo expedido por la junta directiva de una entidad publica de la seguridad social, como ha sucedido hasta ahora-otorgara a ésta para que sustituyera a la víctima y pudiera obtener del responsable el reembolso de lo pagado.**

Esta ha sido la solución del derecho francés, por ejemplo, en la ley de 1985 que busca mejorar la situación de las víctimas de los accidentes de la circulación, en la cual se establece como regla "el recurso del tercero que paga contra la persona que debe reparar un daño como resultado de un atentado a la persona" (capítulo II, arts. 28 a 34).

Esa, igualmente, es la tendencia en el derecho comparado. Así lo señala el documento sobre "cúmulo de prestaciones y subrogación" preparado en 1994 por el grupo de trabajo de la Asociación Internacional de Derecho de los Seguros (AIDA), bajo la dirección del profesor argentino Juan Carlos Morandi, cuando expresa que

**"Debe promoverse que en la legislación se prevea que las diversas indemnizaciones que reciba una víctima o sus derechohabientes a raíz de un accidente, sea de la naturaleza que fuere, no supere el monto del perjuicio efectivamente sufrido más una razonable suma en concepto de daño moral cuando éste correspondiere. Debe evitarse que el cúmulo de prestaciones derive en un enriquecimiento indebido de la víctima o de sus derechohabientes, coordinando al efecto los sistemas de seguridad social. Se exceptúan los aportes provenientes de los seguros privados contratados y pagados por la propia víctima, en función de su deber de proveer a su propia prevención."**

**Como en el caso concreto el hecho dañoso es imputable a la Nación (Fiscalía General) y esa entidad había trasladado los riesgos que pudieran sufrir sus funcionarios como consecuencia de un accidente de trabajo a CAJANAL, la pensión de invalidez que ésta le reconoció al señor Juan Manuel Caro González, en su condición de empleado de la Fiscalía, constituye pago parcial de la indemnización plena a cargo de la última y por lo tanto, tienen naturaleza**

---

Seguro Social, a pesar de que las victimas hayan cotizado, lo cual es una injusticia." Cfr. Juan Carlos Henao. El daño. Bogotá, D.C., Universidad Externado de Colombia, 1998. p. 67.



**indemnizatoria.**

**Ahora bien, CAJANAL le reconoció al demandante una pensión por invalidez total equivalente al 100% de su remuneración. Esto significa que cubrió totalmente el valor del lucro cesante que le correspondería pagar a la Nación (Fiscalía Nacional), pues para el cálculo de la indemnización de tal perjuicio se toma en cuenta el salario que devengaba la víctima en la época del accidente y la fecha probable de su muerte, que son los mismos factores con base en los cuales se liquidó y se pagará en este evento la pensión otorgada al demandante.**

**ACLARACION DE VOTO DE LA DRA. MARIA ELENA GIRALDO GOMEZ**

Aclaré el voto a la sentencia que precede para anotar cómo, en primer lugar, en el ordenamiento jurídico siempre ha existido regulación sobre la indemnización plena en la responsabilidad extracontractual, sobre la indemnización parcial del daño por un tercero y sus consecuencias, la subrogación, y el pago como una de las formas en la extinción de las obligaciones. Además y en segundo lugar que la jurisprudencia ha tenido en cuenta que cuando el lesionado ha recibido sumas de un tercero con cargo al daño antijurídico padecido e imputable jurídica y causalmente a la conducta del Estado ellas se han tenido como parte del pago de la indemnización a que tiene derecho y que el tercero que pagó en veces se subroga, por ley o por convención, en el derecho de la víctima ante el causante del daño.

En efecto:

El Código Civil, legislación más que centenaria, indica que el que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización y, además, que es obligado a la indemnización el que hizo el daño y sus herederos (arts. 2.341 y 2.343).

Igualmente prevé sobre el pago como medio de extinción de las obligaciones, en el Título XIV del Libro Cuarto, lo siguiente:

- **Que "Puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre de él, aun sin su conocimiento o contra su voluntad, aún a pesar del acreedor" (art. 1.630).**
- **Que "El que paga sin el conocimiento del deudor no tendrá acción sino para que éste le reembolse lo pagado; y no se entenderá subrogado por la ley en el lugar y derechos del acreedor, ni podrá compeler al acreedor a que le subroque" (art. 1.631).**

Ello significa que así pague el deudor o un tercero, con o sin su consentimiento, la obligación se extingue en cuanto a lo pagado.

Además y en lo que concierne con el punto "del pago con subrogación" debe recordarse que el mencionado código define la subrogación como la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que le paga (art. 1.666); indica que el tercero se subroga en los derechos del acreedor en virtud de la ley o en virtud de una convención del acreedor (art. 1.667); precisa que la subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, así

*contra el deudor principal como contra cualesquiera terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda. Y que si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá ejercer sus derechos relativamente a lo que le reste debiendo, con preferencia al que sólo ha pagado una parte del crédito(art. 1.670).*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Artículo 12 del decreto 1771 de 1994, reglamentario del 1295, Art. 216 del C.S.T.

**Decisión:**

No concede indemnización por lucro cesante.

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia de Sala Plena del 13 de diciembre de 1983, exp: 10.807.

Sentencia del 10 de abril de 1997, exp: 11.866

Sentencia del del 24 de abril de 1997, exp:9997

Sentencia del 4 de julio de 1997, exp: 10.182

Sentencia del 6 de noviembre de 1997, exp: 11049.

Sentencias del 13 de diciembre de 1983, exp: 10.807

Sentencia del 27 de marzo de 1990

Sentencia del 7 de febrero de 1995 Expediente: S-247.

Sentencia del 9 de agosto de 1979 Expediente 6666

Sentencia del 10 de marzo de 1993, Expediente: 5480.

Sentencia del 24 de mayo de 1978

Sentencia del 31 de mayo de 1994. Expediente No. 6569.

Sentencia del 12 de noviembre de 1993 Expediente: 5868.

Sentencia del 8 de mayo de 1997, exp: 9389

Sentencia del 24 de junio de 1996, exp: 4662.

Sentencia del 3 de septiembre de 1991, No. 198.

Sentencia del 8 de mayo de 1997

Sentencia del 22 de octubre de 1998

Sentencia del 1 de junio de 2000. Ref. N° 12990.

Sentencia del 11 de septiembre de 2000

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 27 de noviembre de 2002. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 52001-23-31-000-1994-3090-01 (13090)
<b>Corporación:</b> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera <b>Número de sentencia o radicación:</b> 52001-23-31-000-1994-3090-01 (13090) <b>Fecha:</b> 27 de noviembre del 2002 <b>Magistrado Ponente:</b> María Elena Giraldo Gómez
<b>Hechos relevantes:</b>  Los señores Agustín Mesa Castellanos, Adela Correa de Mesa, Gilma del Carmen, Martha Lucía, Olga, Hernán, Doris e Inés Mesa Correa, interpusieron demanda de reparación directa en contra de la Nación (Ministerio de Defensa, Ejército Nacional), para que se le declarara responsable de los perjuicios causados con la muerte del Suboficial Germán Mesa Correa ahogado por el hundimiento de una lancha en que se movilizaban 20 militares.
<b>Primera Instancia:</b>  El Tribunal denegó las súplicas de la demanda y condenó a costas a los demandantes. Expuso que con la demanda no se allegó prueba del registro de matrimonio de los padres del ofendido y por consiguiente ni estos ni los otros demandantes, presuntos hermanos del occiso, tienen legitimación en la causa por activa ni demostraron su interés en la pretensión.
<b>Problema Jurídico:</b>  ¿Se debe descontar de la indemnización plena de perjuicios aquellas prestaciones que se han hecho a los demandantes por parte de la seguridad social?
<b>Segunda Instancia:</b>  <i>INDEMNIZACIÓN DEL PERJUICIO MATERIAL:</i>  (...)  <i>LA DEL PADRE de Germán Mesa Correa, señor Agustín Mesa, será la que resulte de descontarle a \$27'980.046,00, que correspondería a la indemnización por perjuicios morales, la suma de \$2'742.187,50, valor que recibió antes, de la Nación, a título de compensación por muerte de su hijo<sup>1</sup>"; por lo tanto la indemnización a que tendrá derecho es por \$25'237.858,50.</i>

<sup>1</sup> Recuérdese que la Nación entregó a los padres del fallecido Germán Mesa Correa la suma de \$5484.375.00, a los señores Adela Correa y Agustín Mesa, padres de Germán Mesa Correa, quienes eran sus beneficiarios (fols. 30 y 31 c. 2). Ello significa, de una parte, que cada uno de ellos recibió la suma de \$2742.187,50.

LA DE LA MADRE de Germán Mesa Correa, señora Adela Correa, será la que resulte de descontarle a \$60'987798.88 (que comprenden \$27'980.046,00 por perjuicio moral y \$33'007.752,88 por perjuicio material) la suma de \$2'742.187,50<sup>2</sup>, valor que recibió antes, de la Nación, a título de compensación por muerte de su hijo; por lo tanto la indemnización a que tendrá derecho es por \$58'245.611,38.

**LOS ANTERIORES DESCUENTOS TIENEN SU RAZÓN DE SER, COMO PASA A EXPLICARSE. La Sala últimamente ha reconsiderando la jurisprudencia sobre la indemnización plena y con ella el punto jurídico de la solución indemnizatoria del daño, advirtiendo que éste debe ser indemnizado sólo una vez, situación que implica que cuando quien debe indemnizar o un tercero, en su nombre o no, o por determinación legal solucionan parcial o totalmente la indemnización a que tiene derecho el acreedor, el pago efectuado debe imputarse con la finalidad de extinguir la obligación indemnizatoria según el caso, total o parcialmente.**

**La Sala sostenía antes que si el Agente del Estado que fue víctima directa de un hecho lesivo o sus beneficiarios si aquel falleció, recibió la indemnización predeterminada por la legislación laboral u otra no había lugar a descuento de lo recibido cuando en el juicio de responsabilidad el juzgador liquidara los perjuicios causados con ocasión causal de la falla del servicio.**

Pero hoy la Sala tiene criterio distinto:

En primer lugar, que la víctima directa o sus beneficiarios no sólo tienen derecho a la indemnización plena cuando el daño sea imputable a falla del servicio sino que también tienen derecho a la misma cuando la imputabilidad del daño provenga de una conducta de riesgo del demandado que exceda los inconvenientes inherentes al servicio-como se precisó antes-.

Y en segundo lugar, que la indemnización plena comprende desde la óptica de la víctima (Agente del Estado lesionado o beneficiarios, según su caso), que todo daño antijurídico causado causalmente con ocasión de la conducta Estatal, deba satisfacerse totalmente. Ello implica que **si la víctima directa o la indirecta ha recibido suma que es imputable al hecho de lesión o de muerte, según el caso, la misma debe tenerse como pago o total o parcial, según el caso, del derecho indemnizatorio.**

Paulatinamente la Sala ha incursionado en la precisión de su jurisprudencia, dando unidad al "derecho de la indemnización" y a la "obligación de indemnización", ésta última cubierta o por obligado directo frente al daño o por un tercero, con su anuencia o no, o por determinación legal. Y para ello ha tenido en cuenta, entre otros, el siguiente principio de legalidad:

EL CÓDIGO CIVIL indica que el que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización y, además, que es obligado a la indemnización el que hizo el daño y sus herederos (arts. 2.341 y 2.343). Prevé que **"Puede pagar por el deudor cualquiera persona a nombre de él, aun sin su conocimiento o contra su voluntad, aún a pesar del acreedor" (art. 1.630) y que "El que paga sin el conocimiento del deudor no tendrá acción sino para que éste le reembolse lo**

---

<sup>2</sup> Ver pie anterior.

**pagado; y no se entenderá subrogado por la ley en el lugar y derechos del acreedor, ni podrá compeler al acreedor a que le subroque" (art. 1.631).**

**Lo anterior significa que así pague el deudor o un tercero, con o sin su consentimiento, la obligación se extingue en cuanto a lo pagado.**

Además con el punto "del pago con subrogación" debe recordarse que el mencionado código también define la subrogación como la transmisión de los derechos del acreedor a un tercero que le paga (art. 1.666); señala que el tercero se subroga en los derechos del acreedor en virtud de la ley o en virtud de una convención del acreedor (art. 1.667); precisa que la subrogación, tanto legal como convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, así contra el deudor principal como contra cualesquiera terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a la deuda. Y que si el acreedor ha sido solamente pagado en parte, podrá ejercer sus derechos relativamente en lo faltante, con preferencia al que sólo ha pagado una parte del crédito (art. 1.670).

Además el legislador ha tenido en cuenta esa regulación civil para informar algunos disposiciones:

DEL CÓDIGO DE COMERCIO, relativas a la subrogación legal del asegurador que pague una indemnización y hasta concurrencia de su importe, en los derechos del asegurado contra las personas responsables del siniestro y en los derechos del asegurado cuanto éste, a título de acreedor, ha contratado el seguro para proteger su derecho real sobre la cosa asegurada (art. 1.096). Y para informar, en segundo término.

DEL ESTATUTO FINANCIERO, decreto ley 633 de 1993, que señala en el numeral 3º del artículo 194 que la indemnización pagada a la víctima por un tercero debe ser descontada de la indemnización plena perseguida contra el autor (s) del daño (s); textualmente dice:

"El pago efectuado por la entidad aseguradora que haya asumido los riesgos previstos en el presente capítulo, en relación con el automotor causante de daños corporales a las personas en accidentes de tránsito, no impedirá a la víctima a sus causahabientes acudir a los órganos jurisdiccionales competentes para reclamar del responsable las indemnizaciones, a que crean tener derechos conforme a las normas legales.

PARÁGRAFO. Las sumas pagadas por concepto de los amparos de carácter indemnizatorio de las pólizas que se emitan en desarrollo de este capítulo, se entienden prioritarias E IMPUTABLES A LA INDEMNIZACIÓN que por mayor valor pueda resultar a cargo del responsable del accidente". (Subrayado y mayúsculas por fuera del texto original).

**Con base en dichas disposiciones la Sala ha hecho pronunciamientos que en cierta medida tienen que ver con el caso que se juzga, porque los pagos parciales hechos directamente por el obligado ha indemnizar plenamente, o por un tercero con su anuencia o no, se han imputado al pago de la indemnización;**  
así:

(...)

**Y finalmente la Sala dijo en otro punto jurídico que "Si a través de la seguridad**

**social el patrono traslada los riesgos a otra entidad (ISS, CAJANAL o administradora de riesgos profesionales) las prestaciones derivadas del accidente del trabajo tienen una naturaleza indemnizatoria y por lo tanto, en el evento de que exista culpa suficientemente probada del patrono constituyen un pago parcial de la indemnización plena a cargo de éste ( )<sup>3</sup>.**

*Como se puede ver, en el ordenamiento jurídico siempre ha existido regulación sobre la indemnización plena en la responsabilidad extracontractual, sobre la indemnización parcial del daño por un tercero y sus consecuencias, la subrogación, y el pago como una de las formas en la extinción de las obligaciones. Además y en segundo lugar que la jurisprudencia ha tenido en cuenta que cuando el lesionado ha recibido sumas de un tercero con cargo a la indemnización del perjuicio proveniente de daño antijurídico padecido e imputable jurídica y causalmente a la conducta del Estado ellas se han tenido como parte del pago de la indemnización a que tiene derecho y que el tercero que pagó en veces se subroga, por ley o por convención, en el derecho de la víctima ante el causante del daño.*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia

**Decisión:**

Se deben descontar las sumas que se han pagado por otro concepto.

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia del 1 de junio de 2000. Rad. 12990.

---

<sup>3</sup> Sentencia dictada el día 1 de junio de 2000. Referencia: Expediente N° 12990. Demandante: María Isabel Zapata Durango. Demandado: Departamento de Antioquia.

## Ficha de Jurisprudencia

### Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil

#### Identificación:

CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 18 de marzo de 2004. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 76001-23-31-000-1994-00069-01 (14338)

**Corporación:** Consejo de Estado

**Número de sentencia o radicación:** 76001-23-31-000-1994-00069-01 (14338)

**Fecha:** 18 de marzo del 2004

**Magistrado Ponente:** María Elena Giraldo Gómez

#### Hechos relevantes:

Los señores Rafael Antonio Artunduaga Bermúdez, Rafael Artunduaga Bastos, María Carmelina Bermúdez Restrepo, Luz Mery Artunduaga Bermúdez, Mariela Artunduaga Bermúdez y Gustavo Artunduaga Bermúdez; demandaron a la Nación (Ministerio de Defensa-Policía Nacional) para que se declarara que es administrativamente responsable de las lesiones causadas al señor Rafael Antonio Andurraga (agente de la policía nacional) por otro policía al cual se le disparó el arma de dotación oficial cuando ambos estaban prestando el servicio, y sea condenado a indemnizar los perjuicios causados.

#### Primera Instancia:

Se declaró la responsabilidad de la Nación. No reconoció perjuicios materiales porque sólo se hizo la petición, pero no se aportó elemento probatorio para determinarlo; y reconoció perjuicios morales teniendo en cuenta el dolor y la congoja que causa una lesión como la sufrida: 1.000 gramos de oro para el lesionado; 200 gramos de oro para cada uno de los padres de la víctima directa, y 100 gramos de oro para cada uno de los hermanos de aquella.

#### Problema Jurídico:

¿Excluye la indemnización a forfait la indemnización que puede resultar de la declaratoria de administrativamente responsable cuando existe un accidente con ocasión del servicio militar?

#### Segunda Instancia:

**Antes de entrar en el estudio del hecho dañino se estudiará la alegación de la Nación, consistente en que la indemnización a forfait excluye la responsabilidad del Estado:**

*b. La Sala aprecia: que la Nación alegó como excluyente de la responsabilidad Estatal la indemnización a forfait del hecho padecido por el Agente Artunduaga; que se limitó a aducir ese hecho pero no lo probó, pues habiéndose presentado la demanda el día 7 de julio de 1994, contestado el día 27 de septiembre del mismo año, y allegado el informativo*



administrativo prestacional por hecho ocurrido el día 9 de julio de 1992 con concepto favorable de fecha 10 de noviembre del mismo año 92, **en el juicio no obra prueba de la indemnización a forfait, que debió probarse y no sólo alegarse, como lo indica el ordenamiento jurídico.** En tal sentido la ley procesal civil señala que "En las sentencias se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegada por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión y cuando éste no proceda, antes de que entre el expediente al despacho por sentencia, o que la ley permita considerarlo de oficio" (art. 305, inciso 4º).

Además de lo anterior se advierte que el contenido material de la alegación sin prueba, aún si se hubiese establecido no serviría para concluir la exclusión de responsabilidad estatal. Las normas en las que la Nación fundamentó su argumento, de exclusión de responsabilidad, son los decretos: 0094 de 11 de enero de 1989 que reformó "El Estatuto de la capacidad psicofísica, incapacidades, invalideces (sic) e indemnizaciones del personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, soldados, grumetes, agentes, alumnos de las escuelas de formación y personal civil del Ministerio de Defensa y la Policía Nacional", y el decreto 1213 de 8 de junio de 1990 que reformó el **Estatuto del Personal de Agentes de la Policía Nacional, en él cual se establecen indemnizaciones, auxilios y pensión para los agentes "que en el momento de su retiro del servicio activo presenten disminución de la capacidad psicofísica determinada por la sanidad de la Policía Nacional" (art. 117), norma que está incorporada en el Título V del decreto, que trata 'DE LAS PRESTACIONES SOCIALES'. (...)**

**En el caso, las lesiones ocurrieron sin que jugara ningún papel el riesgo asumido y, en consecuencia, aún sí dicho Agente hubiese recibido indemnización a forfait ésta no habría excluido la indemnización plena, pues el pago recibido sería deducible de los perjuicios materiales. En este caso el punto concreto no es pertinente a la causa que se juzga debido a que el Tribunal denegó la solicitud de condena por perjuicios materiales y sólo condenó por los morales; además la Nación es apelante único, situación que no permite que el Ad Quem entre a estudiar la decisión que le fue favorable al demandado.**

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

N/A

**Decisión:**

No se resuelve sobre el tema porque no fue materia de la apelación. (Obiter Dictum)

**Jurisprudencia citada:**

N/A

## Ficha de Jurisprudencia

### **Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil**

#### **Identificación:**

Consejo de Estado. Sentencia del 24 de febrero de 2005. M.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. 15125.

**Corporación:** Consejo de Estado, Sección Tercera

**Número de sentencia o radicación:** 15125

**Fecha:** 24 de febrero de 2005

**Magistrado Ponente:** Ramiro Saavedra Becerra

#### **Hechos relevantes:**

En ejercicio de la acción de reparación directa y mediante escrito presentado el 3 de febrero de 1997, a través de apoderado (folios 16 a 24), los señores Eunice Cubillos de Martínez, José Nayid Martínez Cubillos y Nubia Yineri Martínez Cubillos, obrando en nombre propio y la última, además, en representación de su hijo menor de edad Camilo Andrés Salinas Martínez, solicitaron que se declarara la responsabilidad del Municipio de Ibagué, por los perjuicios causados a raíz de la muerte de Miguel Antonio Martínez Peralta.

Solicitaron que se condenara al municipio demandado a pagarle perjuicios morales y materiales (lucro cesante y daño emergente).

Accidente de trabajo: un alud de tierra lo ultimó, cuando se dedicaba a labores de retiro de piedras que obstruían las labores del buldózer.

#### **Primera Instancia:**

El Tribunal Administrativo del Tolima, mediante la cual resolvió lo siguiente:

DECLARAR administrativamente responsable al Municipio de Ibagué de la muerte del señor Miguel Antonio Martínez Peralta, acaecida el día 4 de febrero de 1995.

CONDENAR al Municipio de Ibagué a pagar a favor de Eunice Cubillos de Martínez, por concepto de perjuicios materiales-lucro cesante, la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO PESOS CON NOVENTA CENTAVOS MONEDA CORRIENTE (\$57.870.804,90).

#### **Problema Jurídico:**

Problema referido a la distinción que existe entre la responsabilidad extracontractual del Estado, derivada de la producción de un daño imputable a la acción u omisión de las entidades estatales, y la responsabilidad laboral de éstas últimas, derivada de las relaciones que tienen con sus empleados y trabajadores.

#### **Consideraciones:**

*Observa la Sala que se plantea, en este caso, el problema referido a la distinción que existe entre la responsabilidad extracontractual del Estado, derivada de la producción de un daño imputable a la acción u omisión de las entidades estatales, y la*

*responsabilidad laboral de éstas últimas, derivada de las relaciones que tienen con sus empleados y trabajadores. Al respecto, resultan pertinentes las siguientes observaciones, contenidas en la sentencia del 7 de septiembre de 2000, proferida por esta Sección dentro del proceso radicado con el No. 12.544 (...)*

*Por consiguiente, **no existe justificación de ninguna clase para ordenar el descuento del valor de las prestaciones sociales reconocidas a la cónyuge supérstite y demás causahabientes del monto de la misma, pues son obligaciones jurídicas con una fuente distinta**, en frente de las cuales no cabe la compensación que se daría al disponer ese descuento”.*

*Se trata de los perjuicios sufridos directamente por los parientes del trabajador, como terceros ajenos a la relación laboral, cuya reparación, como se ha visto, puede exigirse ante esta jurisdicción mediante la acción de reparación directa, dado que su fuente es extracontractual, que no corresponden a prestaciones laborales y que la entidad cuya responsabilidad se pretende establecer es de carácter estatal.*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia.

**Decisión:**

Se condena a la administración al pago de los perjuicios solicitados, modifica la sentencia en cuanto a las sumas determinadas por el Tribunal.

**Jurisprudencia – doctrina citada:**

Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, 7 de septiembre de 2000, radicado con el No. 12.544:

Consejo de Estado, Sentencia dictada el 7 de febrero de 1995 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, 30 de octubre de 1989, expediente 5275.

**Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil**

**Identificación:**

CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 10 de agosto del 2005. C.P. María Elena Giraldo Gómez. Rad. 85001-23-31-000-1997-00448-01 (16205)

**Corporación:** Consejo de Estado

**Número de sentencia o radicación:** 85001-23-31-000-1997-00448-01 (16205)

**Fecha:** 10 de agosto del 2005

**Magistrado Ponente:** María Elena Giraldo Gómez

**Hechos relevantes:**

Demanda interpuesta por José Eycenjower Parada Cendales en contra de la nación-ejército nacional, en ejercicio de la acción de reparación directa, para que le fueran indemnizados los perjuicios causados por las lesiones sufridas mientras prestaba servicios (servicio militar obligatorio). Haciendo un recorrido por el pueblo, en sitio oscuro por el que transitaban, el soldado José Eysenjower al saltar un caño se cayó y rodó contra una piedra y un tronco, golpeándose y lesionándose de tal forma que perdiera totalmente la visión por su ojo derecho, confirmado mediante examen médico.

**Primera Instancia:**

Denegó las súplicas de la demanda al considerar que no se estructuró la responsabilidad del Estado ni por falla en el servicio, ni por culpa presunta del conscripto sometido a instrucción militar.

Dedujo que la lesión del actor se produjo con motivo y durante la prestación del servicio, en la asunción de un riesgo normal, cuyo restablecimiento está fijado anticipadamente por el legislador y que no se causó con elementos de propiedad del Estado o por miembros del Ejército "( ) lo cual, nos lleva a determinar que no hubo falta personal de ningún agente estatal ni falla presunta del servicio". Y concluyó que no hay prueba de la conducta irregular de los superiores de la Unidad del Grupo Guías de Casanare o de la atención médica que le fue dispensada, como tampoco de la forma como tuvieron ocurrencia los sucesos causantes de la lesión, que por tanto el daño invocado no le es imputable.

**Segunda Instancia:**

*Esta Sección del Consejo de Estado, a partir de la legislación y la ponderación de la naturaleza y alcances de tales vínculos, ha concluido que frente al soldado profesional la inexistencia de responsabilidad civil extracontractual en relación con los daños sufridos por éstos con ocasión de la exposición a los riesgos inherentes a su actividad laboral, dirigida ésta a la protección del Estado y de sus instituciones, porque tales riesgos están cubiertos por la ley, en la cual se prevé la obligación para el Estado de indemnizar a su servidor público, por los daños sufridos con ocasión y por razón del servicio y que cobra*

vigencia en forma automática, cuando se produce “el siniestro” que se ampara legalmente. Y exceptúa del régimen indemnizatorio anotado, los daños provenientes de la falla del servicio o del sometimiento del soldado a un riesgo distinto al que asumió voluntariamente, eventos en los cuales cobra vigencia el régimen de responsabilidad contenido en el artículo 90 constitucional. En efecto:

**Tratándose de daños sufridos directamente por los Agentes públicos vinculados laboralmente con el Estado (colaboradores permanentes) la indemnización adquiere características especiales, toda vez que la ley prevé para ellos una legislación que predetermina la indenización-a for fait-, que resarce el daño causado dentro de los riesgos propios que debe asumir el servidor, como inherentes al servicio prestado. Esa predefinición legal de indemnización en materia de riesgos profesionales, hace que el terreno de la responsabilidad civil extracontractual quede circunscrita sólo a los daños ocasionados por fuera del ámbito de protección de esa legislación, o sea los daños derivados de la conducta falente o culposa del Estado-patrono, o los daños producidos por el sometimiento del Agente a un riesgo distinto al asumido a su ingreso al servicio, con violación al principio de igualdad frente ante las cargas públicas.**

En relación con el conscripto la jurisprudencia ha dicho que si bien éstos pueden sufrir daños con ocasión de la obligación de prestar servicio militar obligatorio, consistentes en la restricción a los derechos fundamentales de locomoción, libertad etc. ellos no devienen en antijurídicos, porque dicha restricción proviene de la Constitución; pero que pueden sufrir otros daños que sí devienen en antijurídicos y que tienen su causa en dicha prestación, cuando ocurren durante el servicio y en cumplimiento de las actividades propias de él, que les gravan de manera excesiva, en desmedro de la salud y de la vida, los cuales deben indemnizarse por el conglomerado social a cuyo favor fueron sacrificados dichos bienes jurídicos, porque se da quebranto al principio de igualdad frente a las cargas públicas.

Ahora pese a que la ley ha venido, paulatinamente, reconociendo el derecho del conscripto que ve disminuida su capacidad psicofísica o laboral o fallece con ocasión y por razones del servicio, a ser indemnizado y en algunos casos a recibir pensión de invalidez, como se verá a continuación, esa protección dista mucho de la que se prevé para los agentes públicos vinculados laboralmente al Estado (colaboradores permanentes), ya que no es integral, no proviene de una relación laboral y por tanto no está llamada a generar que el campo de la responsabilidad civil extracontractual quede circunscrito a los daños ocasionados por fuera del ámbito de protección de esa legislación, como si sucede con la indemnización a for fait.

En tal sentido el decreto ley 2728 de 1968 modificado por el decreto 1414 de 1975-norma vigente para la época de los hechos-fijó el “régimen de prestaciones sociales por retiro o fallecimiento del personal de soldados”; contempló dentro de las situaciones objeto de indemnización la invalidez psicofísica por disminución de la capacidad laboral, para cuya definición y reconocimiento debería estarse a lo dispuesto en el decreto 94 de 1989 contentivo del Reglamento General de Indemnizaciones e Invalideces para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, el cual prevé la pensión de invalidez del personal de soldados y grumetes pero cuando la incapacidad adquirida durante el servicio implique una pérdida igual o superior al 75% de la capacidad psicofísica; y señala:

*“ARTÍCULO 90. PENSIÓN DE INVALIDEZ DEL PERSONAL DE SOLDADOS Y GRUMETES. A partir de la vigencia del presente Decreto, cuando el personal de Soldados y Grumetes de las Fuerzas Militares adquiera una incapacidad durante el servicio que implique una pérdida igual o superior al 75% de su capacidad psicofísica tendrá derecho mientras subsista la incapacidad, a una pensión mensual pagadera por el Tesoro Público y liquidada así:*

*a) El 75% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad psicofísica del 75% y no alcance al 95%.*

*b) El 100% del sueldo básico de un Cabo Segundo o su equivalente, cuando el índice de lesión fijado determine una disminución de la capacidad psicofísica igual o superior al 95%” (dcto 94 de 1989).*

**Se agrega a lo anterior que se trata de indemnizaciones originadas en causas jurídicas distintas, y que por tanto resulta procedente su reconocimiento simultáneo, sin que pueda decirse que el reconocimiento de la indemnización prevista legalmente excluya la proveniente de la responsabilidad patrimonial Estatal por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la exposición a los riesgos inherentes al servicio.**

**Problema Jurídico:**

¿Es viable la acumulación de indemnizaciones por la falla en el servicio o de acuerdo con la teoría del riesgo excepcional, con las prestaciones que se entregan por pérdida de capacidad laboral en ejercicio de las funciones de la prestación del servicio militar obligatorio?

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

N/A

**Decisión:**

Ordena la indemnización plena del lucro cesante.

**Jurisprudencia citada:**

N/A

## Ficha de Jurisprudencia

### Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil

#### Identificación:

Consejo de Estado. Sentencia del 5 de diciembre de 2005. M.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Rad. 14731.

**Corporación:** Consejo de Estado, Sección Tercera

**Número de sentencia o radicación:** 14731

**Fecha:** 05 de diciembre de 2005

**Magistrado Ponente:** Alier Eduardo Hernández Enríquez

#### Hechos relevantes:

Demanda presentada el 22 de agosto de 1996, Gonzalo Restrepo, María Isabel Granada de Restrepo, ambos en nombre y representación de su hija menor Ángela María Restrepo Granada, Gonzalo Restrepo Granada, Alba Rosa Restrepo Osorio y Julio César Carmona Granada solicitaron que se declarara patrimonialmente responsable a las Empresas Públicas de Pereira, hoy Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., por la lesiones sufridas por el primero de los demandantes y trabajador de la empresa, al caerse de un poste de energía eléctrica cuando se encontraba efectuando reparaciones, el 17 de diciembre de 1995. Pidieron que se condenara a la demandada a pagar, por concepto de perjuicios morales, la suma equivalente en pesos a 800 gramos de oro, a cada uno de los demandantes; por concepto de perjuicio “fisiológico” la suma equivalente en equivalente en pesos a 2000 gramos de oro para Gonzalo Restrepo, y, por concepto de perjuicios materiales, la suma de \$15.000.000.00 para cada uno de los demandantes.

Como consecuencia de las lesiones, el afectado sufrió una considerable merma en su capacidad laboral y vio afectada su vida cotidiana, al verse obligado a abandonar actividades deportivas, sociales y recreacionales. Se afirma que la causa del daño se originó en el descuido de la Empresas Públicas de Pereira en la revisión, mantenimiento y reposición de los postes de madera, que por su naturaleza se deterioran fácilmente.

La demandada llamó en garantía a la Compañía Agrícola de Seguros S.A., por tratarse de un evento de responsabilidad civil extracontractual, cubierto por la póliza 10690, suscrita por las partes para la época de los hechos.

#### Primera Instancia:

Mediante sentencia del 28 de noviembre de 1997, el Tribunal Administrativo del Risaralda declaró la responsabilidad de la demandada y de la llamada en garantía.

#### Problema Jurídico:

¿Son acumulables a los pagos que, por concepto del accidente de trabajo, ha recibido el demandante de la entidad demandada?



### **Consideraciones:**

Deben tomarse en cuenta **dos situaciones diferentes, la de los terceros ajenos a la relación laboral, esto es los familiares del afectado, y la de éste como trabajador de la entidad demandada.**

Respecto de la primera situación, la de los demandantes ajenos a la relación laboral, la Sala, en jurisprudencia reciente, ha señalado que la acción de reparación directa es la procedente para demandar la indemnización de perjuicios causados a terceras personas por la lesión o muerte de un trabajador de una entidad pública. La Sala en sentencia del 25 de febrero de 2005 señaló:

*“Teniendo en cuenta los antecedentes anotados, observa la Sala que se plantea, en este caso, el problema referido a la **distinción que existe entre la responsabilidad extracontractual del Estado, derivada de la producción de un daño imputable a la acción u omisión de las entidades estatales, y la responsabilidad laboral de éstas últimas, derivada de las relaciones que tienen con sus empleados y trabajadores.** Al respecto, resultan pertinentes las siguientes observaciones, contenidas en la sentencia del 7 de septiembre de 2000, proferida por esta Sección dentro del proceso radicado con el No. 12.544.*

*De acuerdo con la jurisprudencia citada la acción de reparación directa es la procedente en el presente caso, respecto de los demandantes ajenos a la relación laboral del lesionado con las Empresas Públicas de Pereira, contrario a lo afirmado por la entidad demandada, por lo que es posible entrar a considerar las pretensiones de la demanda relacionadas con los familiares del afectado.*

*Sin embargo, como ya se anotó, la situación respecto del señor Gonzalo Restrepo es diferente. En efecto, **se encuentra establecido que el incidente por el que se demanda, ocurrió con ocasión del vínculo laboral que el afectado tenía con la demandada.** De acuerdo con la certificación de la jefe de recursos humanos de esa entidad, era trabajador oficial de la misma.*

*El incidente en que el señor Gonzalo Restrepo sufrió las lesiones por las que se demanda, constituye un típico accidente de trabajo, los gastos médicos necesarios y los salarios dejados de pagar al trabajador fueron sufragados por una administradora de riesgos profesionales. Como ya se dijo, en la jurisprudencia citada, **la demanda del trabajador contra su patrono, con ocasión de un accidente de trabajo, es de conocimiento de la jurisdicción laboral, conforme a lo establecido en el artículo segundo del Código Procesal del Trabajo, para lo cual tiene un término de tres años, conforme lo disponen los artículos 151 del Código Procesal del Trabajo y 488 del Código Sustantivo del Trabajo. También debe anotarse que, si lo que se demanda toma como fundamento la culpa del patrono en la ocurrencia del hecho, el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo dispone que el trabajador tiene derecho a la indemnización total de los perjuicios, “pero del monto de ella debe descontarse el valor de las prestaciones en dinero” que hubieren sido pagadas.***

*Respecto de los perjuicios materiales, ordenados en la sentencia de primera instancia en*



*favor del lesionado, es necesario preguntarse si son acumulables a los pagos que, por concepto del accidente de trabajo, ha recibido de la entidad demandada. La Sala ya se ha pronunciado sobre el punto y ha considerado que no son acumulables.*

*De acuerdo con la jurisprudencia citada, que se encuentra en perfecta consonancia con lo prescrito en el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, **se revocará lo pertinente a los perjuicios materiales en favor del señor Gonzalo Restrepo ordenados en la sentencia de primera instancia.***

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia.

**Decisión:**

No hay lugar a perjuicios materiales. Se condena a la entidad a pagar los perjuicios morales y a la compañía de seguros Agrícola de Seguros S.A. a pagar a las Empresas Públicas de Pereira hoy Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., la suma que ésta pague a los demandantes menos el deducible pactado del 10%

**Jurisprudencia citada:**

Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 7 de septiembre de 2000, Radicado con el No. 12.544.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 3 de octubre de 2002:

## Ficha de Jurisprudencia

### Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil

#### Identificación:

Consejo de Estado. Sentencia del 5 de diciembre de 2005. C.P. Maria Elena Giraldo Gómez. Rad. 12544.

#### Hechos relevantes:

Hector Antonio Mejía Mejía presentó demanda dirigida contra la “Empresas Departamentales de Antioquia” E.D.A. por accidente de trabajo en el que reclama los perjuicios morales y materiales por la responsabilidad extracontractual del Estado.

La demandada reconoció pensión de invalidez.

#### Primera Instancia:

Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Antioquia el día 10 de julio de 1996, niega las pretensiones de la demanda.

#### Problema Jurídico:

Diferencias entre responsabilidad a forfait y la responsabilidad extracontractual.

#### Consideraciones:

*Esta jurisdicción “de lo Contencioso Administrativo” ha diferenciado y precisado la responsabilidad en relación con los hechos dañinos sufridos por los trabajadores con ocasión, **de una parte**, del desempeño laboral (accidente de trabajo) y, **de otra parte**, de situaciones externas y ajenas a ese desempeño pero producidas por la misma persona que es su patrono.*

*Ha dicho que:*

*Si un agente del Estado **con causa y por razón del ejercicio y por los riesgos inherentes a éste** sufre accidente y sobrevive tiene derecho a las prestaciones laborales predeterminadas en la legislación laboral; pero si fallece son sus beneficiarios los que tienen el derecho a esas prestaciones. Este tipo de responsabilidad ha sido denominado “**A forfait**”.*

*Pero, si el agente del Estado sufre un accidente por la conducta falente o culposa de la misma persona que es su patrono pero en “**forma independiente a la prestación ordinaria o normal del servicio**” y/o “**por fallas del servicio ajenas al trabajo profesional propio del agente**” tiene derecho a solicitar la declaratoria de responsabilidad del Estado, por medio de la acción respectiva, como ya se explicará. Este tipo de responsabilidad es la llamada “**extracontractual**”.*

*Sobre esos dos tipos de responsabilidad la jurisprudencia ha evolucionado.*

***En la primera etapa** se sostuvo que todo daño sufrido por un agente del Estado, sin diferenciar si fue por causa o por razón del empleo o función o por una falla del servicio, se negaba la responsabilidad extracontractual.*

*Se afirmaba, enfáticamente, en primer término, que esos hechos no causaban acción indemnizatoria en favor del agente o de sus beneficiarios, en forma subsidiaria; que si el daño sufrido por el Agente Estatal era constitutivo de o de accidente laboral o simplemente de muerte, daba derecho al reclamo prestacional de las indemnizaciones predeterminadas por la legislación laboral.*

*La fuente legal de dicha jurisprudencia eran las leyes 6ª de 1945 (art 17 literal d) 64 de 1946 (art. 11) en el campo de los trabajadores nacionales, funcionarios, empleados y obreros. Esta Corporación en esa época, en sentencia proferida el día 10 de diciembre de 1982, expresó:*

*“Los funcionarios públicos aceptan al posesionarse los riesgos propios de la actividad propia del respectivo cargo y la Nación, por su parte, prevé la indemnización en caso de muerte en actos de servicio o en accidente de trabajo, en la forma que la responsabilidad ‘a forfait’, desplaza toda responsabilidad de acudir a la indemnización por falla del servicio u ordinaria...”*

***En la segunda etapa de evolución de la jurisprudencia se advirtió que podía acontecer, que el daño sufrido por el Agente ocurría por una falla del servicio y no por el riesgo mismo del desempeño, es decir, en forma externa a la prestación ordinaria o normal del servicio; o dicho de otra manera por hechos que excedían los riesgos propios de la actividad.***

*En ese evento de hecho, por la naturaleza del mismo, se advirtió que frente al ordenamiento jurídico esa conducta era demandable por medio de la acción indemnizatoria (art. 68 de la ley 167 de 1941), hoy llamada de reparación directa (art. 86 del decreto ley 01 de 1984-C.C.A).*

***En la tercera etapa de evolución y última, aunque la jurisprudencia perseveró en el anterior criterio de responsabilidad extracontractual “por falla del servicio”, varió lo concerniente a que de la indemnización plena no había lugar a descontar lo recibido por las prestaciones laborales, predeterminadas en la legislación laboral.***

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia.

**Decisión:**

Se niegan las pretensiones por acción indebida, debió acudir al juez laboral y no administrativo según el Consejo de Estado.

**Jurisprudencia citada:**

Consejo de Estado, Sentencia proferida el día 10 de diciembre de 1982.

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia proferida el día 13 de diciembre de 1983.

Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia dictada, el 7 de febrero de 1995, rad. S-247.

## Ficha de Jurisprudencia

### **Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil**

#### **Identificación:**

Consejo de Estado. Sentencia del 7 de junio de 2007. M.P. Mauricio Fajardo Gomez. Rad. 15722.

#### **Hechos relevantes:**

El 3 de junio de 1993, la señora María Teresa Sierra de Sierra y otros instauraron, mediante apoderado judicial, acción de reparación directa contra la Nación-Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Bogotá, Ubaté y Suárez, con el objeto de que se les declarara responsables por los perjuicios causados con ocasión de la muerte del señor José Saúl Sierra Sierra, ocurrida el 5 de junio de 1991 en el municipio de Saboyá (Boyacá).

#### **Primera Instancia:**

Declaro administrativamente responsable a la demandada y la condeno a pagar perjuicios morales. Desestimo las demás pretensiones.

#### **Problema Jurídico:**

¿Hay lugar a la indemnización de perjuicios derivada de la responsabilidad extracontractual del Estado?

#### **Consideraciones:**

*El problema que se plantea en este caso está referido a la distinción que existe entre la responsabilidad extracontractual del Estado, derivada de la producción de un daño imputable a la acción u omisión de las entidades estatales y la responsabilidad laboral de éstas últimas, derivada de las relaciones que mantienen con sus empleados y trabajadores.*

*Concluye la Sala que la demanda de la referencia, interpuesta por los familiares del trabajador José Saúl Sierra Sierra en ejercicio de la acción de reparación directa es procedente y es de conocimiento de esta Jurisdicción, en cuanto la causa petendi de la misma está orientada a que se declare la responsabilidad extracontractual de la entidad demandada por los hechos que dieron lugar a la muerte del señor Sierra y que, en su criterio, se produjeron como consecuencia de una falla en el servicio, lo anterior sin perjuicio de que los mismos hechos puedan catalogarse como un accidente de trabajo del cual también se puedan derivar ciertas responsabilidades de carácter laboral.*

***En relación con el daño emergente y el lucro cesante reclamado por los demandantes y que fue negado por el Tribunal por considerar que estos conceptos fueron reconocidos dentro de la esfera de la responsabilidad derivada del contrato laboral y de la convención, reitera la Sala que, cuando se reconocen a favor de los familiares del trabajador fallecido los derechos***

***laborales de carácter patrimonial, dichas sumas de dinero emanan de una relación jurídica de la cual se deriva una responsabilidad distinta a la que aquí se reclama y cuyo origen es la vinculación laboral, razón por la cual no existe justificación alguna para ordenar el descuento del valor de las prestaciones reconocidas a la madre o a otros causahabientes del monto de la indemnización que se llegare a reconocer por el ejercicio de la acción de reparación directa por las razones anteriormente expuestas, de manera que la compensación no sería procedente.***

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia.

**Decisión:**

Se declara responsabilidad extracontractual del Estado independiente de la relación laboral del causante, se condena a indemnizar perjuicios morales y materiales por concepto de daño emergente pero no lucro cesante pues los demandantes no lograron probarlo. Sin embargo, de haberlo hecho se hubiese permitido la acumulación. . .

**Jurisprudencia citada:**

Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, 7 de septiembre de 2000, radicado con el No. 12.544:

Consejo de Estado, Sentencia dictada el 7 de febrero de 1995 por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo.

## Ficha de Jurisprudencia

### **Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil**

#### **Identificación:**

Consejo de Estado. Sentencia del 30 de agosto de 2007. M.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. 15724.

**Corporación:** Consejo de Estado, Sección Tercera

**Número de sentencia o radicación:** 15724

**Fecha:** 30 de agosto de 2007

**Magistrado Ponente:** Ramiro Saavedra Becerra

#### **Hechos relevantes:**

Mediante demanda presentada el 17 de marzo de 1997, los señores Osvaldo Pérez Barrios, en nombre propio y en representación de su hija menor de edad y sus familiares, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del C. C. A., solicitaron que se declarara administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por los hechos ocurridos el 18 de marzo de 1995, en los que resultó lesionado Wilton Pérez Flórez.

En consecuencia, pidieron que se condenara a la entidad pública demandada a pagar, perjuicios inmateriales como perjuicios fisiológicos, morales y perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante y daño emergente.

Las lesiones se produjeron en combate mientras el demandante ejercía su función como soldado y recibió disparos en combate con la Policía Nacional (por error).

#### **Primera Instancia:**

El Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, dispuso lo siguiente:

“PRIMERO. Declarar que la Nación (Ministerio de Defensa Nacional) es administrativamente responsable de las lesiones sufridas por Wilton Pérez Flórez, el día 18 de marzo de 1995 en la Hacienda Las Flores, en el Municipio de Agustín Codazzi.

SEGUNDO. Condenar a la Nación (Ministerio de Defensa Nacional), a pagar a los demandantes perjuicios morales, fisiológicos y materiales.

#### **Problema Jurídico:**

Determinar si cuando por causa de un daño el damnificado con el mismo recibe compensaciones de diferentes fuentes, procede o no la acumulación de dichos beneficios, con la indemnización plena proveniente de la responsabilidad del Estado por un daño que se le ha imputado.

#### **Consideraciones:**

*Es preciso poner de presente que a Wilton Pérez Flórez le fue pagada la suma de*

*\$7'064.500, por concepto indemnización por la disminución de su capacidad laboral.*

*Lo anterior lleva a la Sala a analizar si, cuando por causa de un daño el damnificado con el mismo recibe compensaciones de diferentes fuentes, procede o no la acumulación de dichos beneficios, con la indemnización plena proveniente de la responsabilidad del Estado por un daño que se le ha imputado.*

*Al respecto, reitera la Sala su posición según la cual, para determinar si es procedente la acumulación de beneficios, es pertinente revisar las causas jurídicas de los mismos y, si existe o no la posibilidad de subrogación de quien pagó, en la acción que tenía la víctima frente al autor del daño y, respecto de las causas de los beneficios. Se debe tener presente además, que la única prestación que tiene carácter indemnizatorio es aquella que extingue la obligación del responsable:*

*“Así, la intención de quien compensa a la víctima debe ser extinguir su obligación, si se trata del pago por otro, frente al daño causado; de lo contrario, no habrá una indemnización o reparación del perjuicio sino el cumplimiento de una obligación con carácter diferente, ya sea legal o contractual.*

*En conclusión, cuando un tercero, cuya intención no era la de extinguir la obligación del responsable del daño, otorga a la víctima un bien que total o parcialmente repone el que fue dañado, y la ley no establece a favor de aquel el derecho a subrogarse en la acción de ésta última, se podrán acumular la prestación entregada por ese tercero y la indemnización debida por el causante del perjuicio.*

*Las anteriores precisiones resulta, también, aplicables cuando quien paga a la víctima es el responsable, pero no lo hace con la intención de extinguir la obligación de indemnizar el daño causado, sino en cumplimiento de una obligación de otra naturaleza, ya sea legal, contractual, o, simplemente, impulsado por sentimientos de caridad o beneficencia.”*

*En efecto, cuando en el ordenamiento jurídico de manera previa se establecen una serie de compensaciones, reconocimientos patrimoniales y prestaciones especiales- que en derecho francés se han denominado “indemnización a forfait” su reconocimiento es compatible con la indemnización a cargo de quien es encontrado responsable de un daño, por cuanto la causa jurídica de la primera es la ley y, la causa jurídica de la indemnización plena proveniente de la responsabilidad, es el daño mismo. En otras palabras, los dos beneficios: el a forfait y la prestación indemnizatoria a cargo del responsable del daño, tienen causas jurídicas distintas y por lo tanto no se excluyen entre sí.*

*En el caso en estudio, el soldado Wilton Pérez Flórez recibió de la Nación-Ministerio de Defensa, un pago por concepto de indemnización por disminución de su capacidad laboral, de conformidad con los Decretos 2728 de 1968 y 1211 de 1990. De lo cual se tiene que la causa jurídica por la cual se llevó a cabo dicho pago son los mencionados Decretos y, aquella que justifica el reconocimiento de una indemnización a cargo de la Nación en el presente proceso, es el daño antijurídico que se le imputa a título de falla del servicio, por ser además la única prestación que tiene la virtud de extinguir la obligación reparatoria a su cargo.*

*Por lo tanto, el referido pago no es incompatible con la indemnización de perjuicios que se liquidará en la presente providencia, en consecuencia, no hay lugar a*

*descuento ni tampoco a subrogación.*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia.

**Decisión:**

Se condena a la administración al pago de los perjuicios solicitados, modifica la sentencia en cuanto a las sumas determinadas por el Tribunal.

**Jurisprudencia – doctrina citada:**

Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencias de: marzo 1 de 2006, Exp. 14002; abril 26 de 2006, Exp. 17529 y; 27 de noviembre de 2006, Exp. 15583, C.P. Ramiro Saavedra Becerra.

TAMAYO JARAMILLO, Javier, “De la responsabilidad civil”, Tomo IV, Ed. Temis, Bogotá, 1999 Pág. 228.

Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de julio 14 de 2004, Exp. 14308, C.P. Alier Hernández.

Respecto de la indemnización a forfait, ver entre otras las siguientes sentencias: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, julio 25 de 2002, Exp. 14001, C.P. Ricardo Hoyos; agosto 19 de 2004, Exp. 15791, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; agosto 10 de 2005, Exp. 16205, C.P. María Elena Giraldo; marzo 1º de 2006, Exp. 15997, C.P. Ruth Stella Correa y; marzo 30 de 2006, Exp. 15441, C.P. Ramiro Saavedra.



## Ficha de Jurisprudencia

### **Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil**

#### **Identificación:**

Consejo de Estado. Sentencia del 24 de abril de 2008. M.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. 15981.

**Corporación:** Consejo de Estado, Sección Tercera

**Número de sentencia o radicación:** 15981

**Fecha:** 24 de abril de 2008

**Magistrado Ponente:** Ramiro Saavedra Becerra

#### **Hechos relevantes:**

Gregorio Londoño Soto, Rosa Angélica Henao Aguirre, quienes actuaron en nombre propio y en representación de su hijo menor de edad Fauniver Londoño Henao, y por los señores Falconeris Londoño Henao, Maria Amanda, Luís Carlos, Luz Mery, Sigifredo, Maria del Carmen o Carmen, Noemí y Felipe Santiago Londoño Soto, a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de reparación directa prevista en el artículo 86 del C. C. A., con el objeto de que se declarara responsable a las Empresas Públicas Municipales de Pereira, por las lesiones sufridas por Gregorio Londoño Soto el 7 de diciembre de 1995

Pidieron, en consecuencia, que se condenara a la parte demandada a pagar, por concepto de perjuicios materiales e inmateriales. Por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante consolidado y futuro, solicitaron a favor del señor Gregorio Londoño Soto, la suma que resulte de liquidar la pérdida del 100% de sus ingresos laborales, por el resto de su vida probable, más un 25% por prestaciones sociales, en razón a que su estado de invalidez no le permite desempeñar ningún tipo de actividad laboral productiva.

Para el mes de diciembre de 1995, el señor Gregorio Londoño Soto, prestaba sus servicios en las Empresas Públicas de Pereira, en el cargo de obrero, adscrito a la sección de Acueducto y Alcantarillado. El 7 de diciembre de 1995 aproximadamente a las 10:00 a.m., el señor Gregorio Londoño Soto se encontraba en ejercicio de sus funciones, en el edificio de la Galería Central ubicado en la carrera 10 entre calles 16 y 17 del Municipio de Pereira (Risaralda), y cuando instalaba una compuerta en compañía de los obreros Alirio Díaz y Filmar Jiménez, recibió un golpe en la cabeza que lo dejó inconsciente, debido a que le cayó encima un adobe de la parte alta del edificio.

La parte demandada, solicitó llamar en garantía a la Compañía Agrícola de Seguros S.A., debido a que entre esta y aquella se suscribió la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual.

**Al demandante le fue reconocida pensión de invalidez por la A.R.P.**

#### **Primera Instancia:**

En sentencia del 30 de octubre de 1998, el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, declaró responsable a las Empresas Públicas de Pereira por las lesiones sufridas por Gregorio Londoño Soto, y la condenó en los términos transcritos al inicio de esta providencia. Así mismo, le ordenó a la Compañía Agrícola de Seguros, llamada en garantía, rembolsar la suma correspondiente.

**Problema Jurídico:**

¿Tiene derecho el demandante al pago del lucro cesante teniendo en cuenta que recibe pensión de invalidez?

**Consideraciones:**

*La actuación del señor Londoño fue preponderante en la producción de su propio daño, no es excluyente de la responsabilidad que le cabe a la Administración, motivo por el cual, la Sala confirmará en este punto la sentencia recurrida y declarará a las Empresas Públicas de Pereira, responsable por el daño sufrido por la parte actora, pero de manera concurrente, en un 50%, con el hecho del señor Londoño Soto, quien con su imprudencia contribuyó en la producción del mismo.*

*Perjuicios materiales-*

*Lucro cesante-*

*Al respecto considera la Sala que se encuentra plenamente acreditado que a raíz de la lesión sufrida el 7 de diciembre de 1995, Gregorio Londoño Soto quedó con una incapacidad médico laboral de 57,1% y, en virtud de que la Ley 100 de 1993 artículo 38, dispone que una persona debe ser tenida como invalida total a partir del 50% de discapacidad médico laboral, la liquidación de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante se hará por el 100%.*

*De lo anterior concluye la Sala que está plenamente establecido el carácter cierto del daño-pérdida o disminución de capacidad laboral-por lo cual, la víctima tiene derecho a que se le indemnice, a título de lucro cesante, la pérdida o aminoración de la posibilidad que tenía de ganarse la vida en su actividad lucrativa empleando el 100% de su capacidad laboral. Tal razonamiento deriva de entender a la víctima a partir de su dignidad e integridad humanas, que no pueden verse quebrantadas a raíz del daño y que deben permanecer indemnes a pesar de él, para que pueda quedar en una posición frente a la vida y a las posibilidades que ella le ofrezca, como si el daño no hubiera ocurrido o lo más cercano a una situación tal.*

*Ahora bien, es preciso tener en cuenta que, el monto que arroje la liquidación será reducido en una proporción del 50% correspondiente a la participación de la víctima en su propio daño.*

**Salvamento de voto M.P. Enrique Gil Botero (Ver ficha de sentencia del 10 de marzo de 2005, Rad. 23656).**

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia.

**Decisión:**

Se condena a la administración al pago de los perjuicios solicitados.

**Jurisprudencia citada:**

N/A.

## Ficha de Jurisprudencia

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 1 de octubre del 2008. C.P. Myriam Guerrero de Escobar. Rad. 76001-23-31-000-1995-01579-01(16322)
<b>Corporación:</b> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera <b>Número de sentencia o radicación:</b> 76001-23-31-000-1995-01579-01(16322) <b>Fecha:</b> 1 de octubre del 2008 <b>Magistrado Ponente:</b> Myriam Guerrero de Escobar
<b>Hechos relevantes:</b>  Demanda para que se declarara a la Nación (Ministerio de Defensa, Policía Nacional) responsable por las lesiones físicas y psíquicas sufridas por el agente de la Policía Nacional Rubén Darío Sánchez Ruiz, a manos de un grupo guerrillero. Se señaló que la demandada es responsable del hecho bajo el régimen de falla del servicio, por la imprudencia y falta de previsión del Sargento que conducía el vehículo en el que se transportaban, quien a pesar de que los guerrilleros le dijeron que siguiera se bajó del vehículo y reveló la identidad, por lo que fueron atacados, produciéndose la muerte de tres compañeros y las lesiones de Rubén Darío Sánchez Ruiz. Que además, donde ocurrieron los hechos es zona de violencia guerrillera y sin embargo los superiores no ejercieron medidas de precaución en el desplazamiento de la patrulla
<b>Primera Instancia:</b>  El Tribunal Contencioso Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda.
<b>Problema Jurídico:</b>  ¿Dado el caso en el que un lesionado perciba pensión de invalidez de origen profesional, puede el empleador descontar de la indemnización de perjuicios las sumas que sean otorgadas a la víctima?
<b>Segunda Instancia:</b>  La Sala encuentra que la sentencia recurrida debe ser revocada, por cuanto aparece demostrada la falla del servicio que la parte actora alega como fuente generadora de responsabilidad, la cual le es imputable directa y definitivamente al Estado en la producción del daño cuya reparación se pretende.  <b><u>De las pruebas se deduce que al agente Sánchez Ruiz se le concedió pensión por invalidez, lo cual no obsta para que se le reconozcan los perjuicios de orden material por la falla del servicio, pues la Sala ha sostenido<sup>1</sup> que los reconocimientos económicos que se hagan y que encuentren su fundamento en</u></b>

<sup>1</sup> Sentencias de 30 de abril de 2007, exp. 15724 y de 24 de abril de 2008, exp. 15790.

*la vinculación laboral tienen una causa diferente a las indemnizaciones provenientes de hechos generadores de responsabilidad extracontractual y, en consecuencia, no resulta procedente ordenar que se descuente de la indemnización originada en la responsabilidad estatal, los pagos y reconocimientos hechos por la entidad con fundamento en otro tipo de relaciones.*

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia

**Decisión:**

Revoca- los pagos son acumulables.

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia del 30 de abril de 2007, exp. 15724

Sentencia del 24 de abril de 2008, exp. 15790.

<b>Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil</b>
<b>Identificación:</b>  CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 25 de febrero del 2009. C.P. Myriam Guerrero de Escobar. 18001-23-31-000-1995-05743-01(15793)
<b>Corporación:</b> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. <b>Número de sentencia o radicación:</b> 18001-23-31-000-1995-05743-01(15793) <b>Fecha:</b> 25 de febrero del 2009 <b>Magistrado Ponente:</b> . Myriam Guerrero de Escobar
<b>Hechos relevantes:</b>  Mediante demanda presentada el 25 de julio de 1995, los señores Wilson Guzmán Bocanegra; Eugenio Guzmán Tique y Esther Julia Bocanegra - quienes obra en nombre propio y en representación de la menor Estella Guzmán Bocanegra -; Esteban Guzmán Bocanegra, Senay Guzmán Bocanegra y Verónica Guzmán Bocanegra, actuando por conducto de apoderado judicial y en ejercicio de la acción de Reparación Directa consagrada por el artículo 86 del C.C.A., instauraron demanda contra la Nación Colombiana - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, con la finalidad de obtener la declaratoria de responsabilidad extracontractual de la demandada y la consecuencial condena al pago de los perjuicios que se afirman irrogados por las lesiones ocasionadas al primero de los mencionados el día 15 de junio de 1994, mientras prestaba el servicio militar obligatorio.  “El soldado campesino GUZMAN BOCANEGRA WILSON se encontraba en cumplimiento de actividades de inteligencia de combate, buscando ampliar y confirmar unos datos que ya había pasado a la Sección Segunda del Batallón de Ingenieros Liborio Mejía sobre la presencia y los planes de algunos sujetos pertenecientes a la XIV cuadrilla de las FARC. El día 15 de Junio de 1994 siendo aproximadamente las 19:30 horas, se encontraba el citado soldado en la casa, ubicado (sic) en la Finca el Jardín de la Vereda Nogales del Municipio de Puerto Rico Caquetá, cuando llegaron unos bandoleros de los ya mencionados, logrando que éste saliera de su vivienda y allí le propinaron dos disparos con arma de fuego de largo alcance, uno de ellos en el cuello parte derecha y el otro en el antebrazo izquierdo.
<b>Primera Instancia:</b>  El Tribunal Administrativo del Caquetá negó las pretensiones de la demanda.
<b>Segunda Instancia:</b>  <i>En efecto, de tiempo atrás ha analizado la responsabilidad respecto de los conscriptos bajo el régimen objetivo del daño especial, determinado, por dos situaciones que deben concurrir: en primer lugar, por el rompimiento del equilibrio de la igualdad frente a las cargas públicas que se genera al ser incorporados, por mandato constitucional en los términos y salvo las excepciones consagradas por la Ley, a prestar el servicio militar de manera obligatoria, pese a que no todos los asociados están llamados a</i>

*soportar tal situación y, en segundo lugar, por las mayores contingencias a las que están sometidos en relación con los demás miembros de la sociedad, por consiguiente, cuando sufren desmedro físico o fallecen por razón del servicio, el Estado asume la obligación de reparar todos los daños antijurídicos que se causen con ocasión del mismo, pues el conscripto sólo está obligado a soportar la restricción relativa de los derechos y libertades que resultan inherentes del ejercicio de la actividad militar. La anterior situación no se genera, en principio, con el segundo grupo, es decir, con el personal de las fuerzas armadas que se vincula de manera voluntaria en virtud de una relación legal y reglamentaria, como sucede, por vía de ejemplo, con el personal de Soldados Voluntarios, Soldados Profesionales, Suboficiales y Oficiales, porque al elegir su oficio consienten su incorporación y asumen los riesgos inherentes al mismo, a su turno, la Entidad estatal brinda la instrucción y el entrenamiento necesario para el adecuado desempeño de sus funciones, por consiguiente, si se concreta el riesgo que voluntariamente asumieron se genera la llamada por la doctrina francesa indemnización a forfait de manera que, en principio, para que la responsabilidad estatal surja en este tipo de eventos, además del riesgo inherente a la profesión debe ocurrir un hecho anormal generador de un daño que no se está obligado a soportar, evento en el cual surge el derecho a reclamar una indemnización plena y complementaria a la que surge de la esfera prestacional, bajo el régimen general de la responsabilidad de la administración, con las connotaciones propias en relación con los elementos estructurales y las causas extrañas enervantes del fenómeno jurídico. Es de anotar que la Sala ha precisado que la “indemnización a forfait” y la indemnización plena no son, en principio, excluyentes entre sí, porque la primera tiene una causa legal, lo cual implica que debe pagarse de manera independiente a que la responsabilidad de la administración se halle o no comprometida por la ocurrencia de los hechos, en tanto la segunda tiene origen en la responsabilidad misma, proveniente del daño antijurídico que no está obligado a soportar el administrado.*

#### **Decisión:**

*REVÓCASE la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Caquetá el día 17 de septiembre de 1998, por las razones expuestas en la parte motiva.*

*SEGUNDO.-DECLÁRASE administrativa y patrimonialmente responsable a la NACIÓN COLOMBIANA-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, por las lesiones causadas al señor WILSON GUZMAN BOCANEGRA, en hechos ocurridos el día 15 de junio de 1994.*

*TERCERO.-Como Consecuencia de la anterior declaración CONDÉNASE a la NACIÓN COLOMBIANA-Ministerio de Defensa-Ejército Nacional, a pagar a título de indemnización (...) perjuicios morales y materiales.  
(...)*

#### **Jurisprudencia citada:**

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 1 de marzo de 2006, Rad. 14002.

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sentencia del 3 de mayo de 2007, Rad. 16200.

Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera.  
Sentencia del 30 de agosto de 2007. C.P. Ramiro Saavedra Becerra. Rad. 15724.



## Ficha de Jurisprudencia

### Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil

#### Identificación:

CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril del 2010. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 13001-23-31-000-1994-09971-01

**Corporación:** Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera

**Número de sentencia o radicación:** 13001-23-31-000-1994-09971-01

**Fecha:** 28 de abril del 2010

**Magistrado Ponente:** Mauricio Fajardo Gómez

#### Hechos relevantes:

La señora Hermilda Centeno Mier, quien actúa en nombre propio y en el de su hijo menor de edad José Eduardo Pérez Centeno, demandó a la Policía Nacional por la muerte del agente la Policía Nacional Pablo Ramón Pérez Treco, cuando se encontraba en actos del servicio (transportado en un vehículo particular porque la policía no puso a su disposición otro vehículo para devolver la dotación oficial).

El Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Sección de Prestaciones Sociales, mediante la Resolución No. 017678 de noviembre 25 de 1994, reconoció a los beneficiarios del agente Pablo Ramón Pérez Treco la suma de \$14'305.094, por concepto de cesantías causadas e indemnización por muerte.

#### Primera Instancia:

El Tribunal Administrativo de Bolívar negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que la muerte del agente de la Policía de Carreteras Pablo Ramón Pérez Treco no devino de una falla del servicio, como se expuso en la demanda, sino que ocurrió como consecuencia de la culpa exclusiva y excluyente de la propia víctima, ya que fue ésta quien de manera voluntaria decidió abordar un vehículo particular, sin dar un prudencial compás de espera para que el vehículo oficial que los recogería llegara al lugar donde se encontraban prestando el servicio de Policía de Carreteras

#### Problema Jurídico:

¿Es posible que la demandada descuenta de las sumas que tenga que indemnizar, las prestaciones que ha pagado a los beneficiarios del fallecido por causa de otra obligación existente en su cabeza?

#### Segunda Instancia:

*Hay eventos en los cuales el daño antijurídico cuya reparación se reclama deriva de las lesiones o de la muerte de un miembro de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, del DAS o de cualquier organismo similar, entidades cuyo común denominador está*

constituido por el elevado nivel de riesgo para su integridad personal al cual se encuentran expuestos los agentes que despliegan actividades operativas, de inteligencia o, en general, de restauración y mantenimiento del orden público o de defensa de la soberanía estatal que, por su propia naturaleza, conllevan la necesidad de afrontar situaciones de alta peligrosidad, entre ellas el eventual enfrentamiento con la delincuencia de la más diversa índole o la utilización de armas de dotación oficial.

Tal la razón por la cual el propio Legislador se ha ocupado de establecer un régimen prestacional de naturaleza especial que reconoce esa circunstancia de particular riesgo que resulta connatural a las actividades que deben desarrollar los referidos servidores públicos, quienes, en consecuencia, se hallan amparados por una normatividad que, en materia prestacional y de protección de riesgos, habitualmente consagra garantías, derechos y prestaciones que superan las previstas en las normas que, en este ámbito, resultan aplicables al común de los servidores del Estado; por eso mismo, la jurisprudencia de esta Sala ha considerado también que, en la medida en la cual una persona ingresa libremente a una de las mencionadas instituciones con el propósito de desplegar la aludida clase de actividades riesgosas para su vida e integridad personal, está aceptando la posibilidad de que sobrevengan tales eventualidades y las asume como una característica propia de las funciones que se apresta a cumplir, por manera que cuando alguno de los riesgos usuales se concreta, surge el derecho al reconocimiento de las prestaciones y de los beneficios previstos en el régimen laboral especial al cual se halla sujeta, sin que en principio resulte posible deducir responsabilidad adicional al Estado por razón de la producción de los consecuentes daños, a menos que se demuestre que los mismos hubieren sido causados, según se indicó, por una falla del servicio o por la exposición de la víctima a un riesgo excepcional en comparación con aquel que debieron enfrentar sus demás compañeros de armas.

(...)

tal como lo ha repetido la jurisprudencia, los miembros de los cuerpos armados del Estado aunque están sometidos a grandes riesgos, dichos riesgos son los propios del servicio. Así se ven enfrentados a la delincuencia, a la subversión armada, a los paros cívicos, etc. Por esta razón y para cubrir hasta donde sea posible esa situación riesgosa que viven, la ley ha creado una legislación protectora especial. De allí que cuando por actos del servicio y dentro de los riesgos propios de su prestación sufren daños en su vida o integridad personal o moral, deberán ser restablecidos prestacionalmente.

Esto es la indemnización a forfait. Pero cuando sufren daños porque estuvieron sometidos a riesgos no propios de su actividad militar o policial o por fuera del servicio mismo, podrán pretender una indemnización plena dentro del régimen general de responsabilidad”.

## **1. Liquidación de perjuicios-**

### **4.1. Consideración previa-**

Es preciso poner de presente que mediante Resolución No. 017678 de noviembre 25 de 1994, el Ministerio de Defensa – Policía Nacional, reconoció una indemnización por

muerte y cesantías causadas, a favor de la señora Hermilda Centeno Mier y del menor de edad José Eduardo Pérez Centeno, con ocasión de la muerte del agente Pablo Ramón Pérez Treco ocurrida el 9 de enero de 1994, por valor de \$14'305.094, con fundamento en el Decreto 1213 de 1990 (copia auténtica de la Resolución No. 017678 de noviembre 25 de 1994 del Ministerio de Defensa – Policía Nacional – Sección de Prestaciones Sociales, fls. 61 c.p.).

**Lo anterior lleva a la Sala a analizar si, cuando por causa de un daño el damnificado con el mismo recibe compensaciones de diferentes fuentes -pago de un seguro de vida, reconocimiento y pago de las prestaciones sociales- procede o no la acumulación de dichos beneficios, con la indemnización plena proveniente de la responsabilidad del Estado por un daño que se le ha imputado.**

Al respecto, reitera la Sala su posición<sup>1</sup> según la cual, para determinar si es procedente la acumulación de beneficios, es pertinente revisar las causas jurídicas de los mismos y si existe, o no, la posibilidad de subrogación de quien pagó, en la acción que tenía la víctima frente al autor del daño y respecto de las causas de los beneficios. Se debe tener presente además que la única prestación que tiene carácter indemnizatorio es aquella que extingue la obligación del responsable:

“Así, la intención de quien compensa a la víctima debe ser extinguir su obligación, si se trata del pago por otro, frente al daño causado; de lo contrario, no habrá una indemnización o reparación del perjuicio sino el cumplimiento de una obligación con carácter diferente, ya sea legal o contractual.

**En conclusión, cuando un tercero, cuya intención no era la de extinguir la obligación del responsable del daño, otorga a la víctima un bien que total o parcialmente repone el que fue dañado, y la ley no establece a favor de aquel el derecho a subrogarse en la acción de ésta última, se podrán acumular la prestación entregada por ese tercero y la indemnización debida por el causante del perjuicio<sup>2</sup>.**

**Las anteriores precisiones resulta, también, aplicables cuando quien paga a la víctima es el responsable, pero no lo hace con la intención de extinguir la obligación de indemnizar el daño causado, sino en cumplimiento de una obligación de otra naturaleza, ya sea legal, contractual, o, simplemente, impulsado por sentimientos de caridad o beneficencia.<sup>3</sup>**

En efecto, cuando en el ordenamiento jurídico de manera previa se establecen compensaciones, reconocimientos patrimoniales y prestaciones especiales -que en derecho francés se han denominado “indemnización a forfait”<sup>4</sup>- su reconocimiento resulta

<sup>1</sup> Se reiteran los planteamientos esgrimidos en: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de marzo 1 de 2006, Exp. 14002 y, sentencia de abril 26 de 2006, Exp. 17529.

<sup>2</sup> TAMAYO JARAMILLO, Javier, “De la responsabilidad civil”, Tomo IV, Ed. Temis, Bogotá, 1999 Pág. 228.

<sup>3</sup> Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de julio 14 de 2004, Exp. 14308, C.P. Alier Hernández.

<sup>4</sup> Respecto de la indemnización a forfait, ver entre otras las siguientes sentencias: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, julio 25 de 2002, Exp. 14001, C.P. Ricardo Hoyos; agosto 19 de

*compatible con la indemnización a cargo de quien es encontrado responsable de un daño, por cuanto la causa jurídica de la primera es la ley, mientras que la causa jurídica de la indemnización plena proveniente de la responsabilidad es el daño mismo. En otras palabras, los dos beneficios: el a forfait y la prestación indemnizatoria a cargo del responsable del daño, tienen causas jurídicas distintas y, por lo tanto, no se excluyen entre sí.*

*En el caso en estudio, a la señora Hermilda Centeno Mier y al menor de edad José Eduardo Pérez Centeno, les fue reconocido, por parte de la entidad pública demandada, un pago por concepto de indemnización por muerte y cesantías causadas con ocasión de la muerte del agente Pablo Ramón Pérez Treco el 9 de enero de 1994, de conformidad con el Decreto 1213 de 1990. Entonces, la causa jurídica por la cual se llevó a cabo dicho reconocimiento es el mencionado Decreto, al paso que aquella que justifica el reconocimiento de una indemnización a cargo de la Nación en el presente proceso, es el daño que se le imputa, por ser además la única prestación que tiene la virtud de extinguir la obligación reparatoria a su cargo.*

**Por lo tanto, el aludido reconocimiento no es incompatible con la indemnización de perjuicios que se liquidará en la presente providencia; en consecuencia, no hay lugar a descuento alguno por este concepto ni tampoco a subrogación, por cuanto esta última no está prevista legalmente -art. 1096 C. de Comercio-.**

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

N/A

**Decisión:**

No se descuenta lo recibido como concepto de prestación por muerte.

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia del 1 de marzo de 2006, Exp. 14002

Sentencia del 26 de abril de 2006, Exp. 17529.

Sentencia del 25 de julio de 2002, Exp. 14001, C.P. Ricardo Hoyos

Sentencia del 19 de agosto de 2004, Exp. 15791, C.P. Ramiro Saavedra Becerra

Sentencia del 10 de agosto de 2005, Exp. 16205, C.P. María Elena Giraldo

Sentencia del 30 de marzo de 2006, Exp. 15441, C.P. Ramiro Saavedra.

---

2004, Exp. 15791, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; agosto 10 de 2005, Exp. 16205, C.P. María Elena Giraldo; marzo 1º de 2006, Exp. 15997, C.P. Ruth Stella Correa y; marzo 30 de 2006, Exp. 15441, C.P. Ramiro Saavedra.

## Ficha de Jurisprudencia

### Acumulación de Indemnizaciones: Riesgos Laborales y Responsabilidad Civil

#### Identificación:

CE. Sala de lo CA. Sección Tercera. Sentencia del 28 de abril del 2010. C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 25000-23-26-000-1996-03096-01

**Corporación:** Consejo de Estado

**Número de sentencia o radicación:** 25000-23-26-000-1996-03096-01

**Fecha:** 28 de abril del 2010

**Magistrado Ponente:** Mauricio Fajardo Gómez

#### Hechos relevantes:

Los señores Ernesto Cifuentes Hernández y Natividad Camargo Espitia, en nombre propio y en representación de sus hijas menores de edad Carolina y Erika Cifuentes Camargo, así como los señores Hernando Camargo, Chiquinquirá Espitia, Silverio Camargo Espitia y Matilde Hernández de Cifuentes, demandaron al INPEC y al Ejército Nacional, para que se condenaran a indemnizarles los perjuicios causados por la muerte del soldado conscripto Luis Eduardo Cifuentes Camargo, fallecido en la Cárcel Nacional Modelo de Bogotá D.C., cuando se encontraba prestando turno de guardia

#### Primera Instancia:

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en que se encontraba plenamente probado que la muerte del soldado conscripto Luis Eduardo Cifuentes Camargo había sido causada por él mismo, con su arma de dotación oficial, hecho que configura la causal excluyente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima

#### Problema Jurídico:

¿Es posible que el civilmente responsable descuente las sumas que él mismo ha pagado con ocasión de la mera liberalidad, o de una obligación que le impone la ley diferente de la indemnizatoria, de la indemnización de perjuicios a que haya lugar?

#### Segunda Instancia:

1. *Liquidación de perjuicios-*

4.1. *Consideración previa-*

*Es preciso poner de presente que mediante Resolución No. 0134 de diciembre 10 de 1996, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, reconoció a favor de los señores Ernesto Cifuentes Hernández y Natividad Camargo, con ocasión de la muerte del auxiliar bachiller Luis Eduardo Cifuentes Camargo ocurrida el 18 de octubre de 1995, la suma de \$4'776.000, "por concepto de prestaciones sociales por causa de muerte,*

conforme a lo establecido en el Decreto 2728 de 1968, artículo 8, inciso 3 y artículo 9” (copia auténtica del expediente prestacional por muerte del auxiliar bachiller Luis Eduardo Cifuentes, fls. 70 a 99 c. pruebas 2).

**Lo anterior lleva a la Sala a analizar si, cuando por causa de un daño el damnificado con el mismo recibe compensaciones de diferentes fuentes -pago de un seguro de vida, reconocimiento y pago de las prestaciones sociales- procede, o no, la acumulación de dichos beneficios, con la indemnización plena proveniente de la responsabilidad del Estado por un daño que se le hubiere imputado.**

Al respecto, reitera la Sala su posición<sup>1</sup> según la cual, para determinar si es procedente la acumulación de beneficios, es pertinente revisar **las causas jurídicas de los mismos y si existe, o no, la posibilidad de subrogación de quien pagó**, en la acción que tenía la víctima frente al autor del daño y respecto de las causas de los beneficios. Se debe tener presente además que la única prestación que tiene carácter indemnizatorio es aquella que extingue la obligación del responsable:

“Así, la intención de quien compensa a la víctima debe ser extinguir su obligación, si se trata del pago por otro, frente al daño causado; de lo contrario, no habrá una indemnización o reparación del perjuicio sino el cumplimiento de una obligación con carácter diferente, ya sea legal o contractual.

**En conclusión, cuando un tercero, cuya intención no era la de extinguir la obligación del responsable del daño, otorga a la víctima un bien que total o parcialmente repone el que fue dañado, y la ley no establece a favor de aquel el derecho a subrogarse en la acción de ésta última, se podrán acumular la prestación entregada por ese tercero y la indemnización debida por el causante del perjuicio**<sup>2</sup>.

**Las anteriores precisiones resulta, también, aplicables cuando quien paga a la víctima es el responsable, pero no lo hace con la intención de extinguir la obligación de indemnizar el daño causado, sino en cumplimiento de una obligación de otra naturaleza, ya sea legal, contractual, o, simplemente, impulsado por sentimientos de caridad o beneficencia.**<sup>3</sup>.

**En efecto, cuando en el ordenamiento jurídico de manera previa se establecen compensaciones, reconocimientos patrimoniales y prestaciones especiales -que en derecho francés se han denominado “indemnización a forfait”<sup>4</sup>- su reconocimiento resulta compatible con la indemnización a cargo de quien es encontrado**

<sup>1</sup> Se ratifican los planteamientos esgrimidos en: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de marzo 1 de 2006, Exp. 14002 y, sentencia de abril 26 de 2006, Exp. 17529.

<sup>2</sup> TAMAYO JARAMILLO, Javier, “De la responsabilidad civil”, Tomo IV, Ed. Temis, Bogotá, 1999 Pág. 228.

<sup>3</sup> Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, sentencia de julio 14 de 2004, Exp. 14308, C.P. Alier Hernández.

<sup>4</sup> Respecto de la indemnización a *forfait*, ver entre otras las siguientes sentencias: Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, julio 25 de 2002, Exp. 14001, C.P. Ricardo Hoyos; agosto 19 de 2004, Exp. 15791, C.P. Ramiro Saavedra Becerra; agosto 10 de 2005, Exp. 16205, C.P. María Elena Giraldo; marzo 1º de 2006, Exp. 15997, C.P. Ruth Stella Correa y; marzo 30 de 2006, Exp. 15441, C.P. Ramiro Saavedra.

**responsable de un daño, por cuanto la causa jurídica de la primera es la ley, mientras que la causa jurídica de la indemnización plena proveniente de la responsabilidad es el daño mismo.** En otras palabras, los dos beneficios: el a forfait y la prestación indemnizatoria a cargo del responsable del daño, tienen causas jurídicas distintas y, por lo tanto, no se excluyen entre sí.

En el caso en estudio, a los señores Ernesto Cifuentes Hernández y Natividad Camargo, les fue reconocido, por parte del INPEC, un pago por concepto de prestaciones sociales por muerte, con ocasión del deceso del auxiliar bachiller Luis Eduardo Cifuentes Camargo el 18 de octubre de 1995, de conformidad con el Decreto 2728 de 1968. Entonces, la causa jurídica por la cual se llevó a cabo dicho reconocimiento es el mencionado Decreto, al paso que aquella que justifica el reconocimiento de una indemnización a cargo de la Administración en el presente proceso, es el daño que se le imputa, por ser la única prestación que tiene la virtud de extinguir la obligación reparatoria a su cargo.

**Por lo tanto, el aludido reconocimiento no es incompatible con la indemnización de perjuicios que se liquidará en la presente providencia; en consecuencia, no hay lugar a descuento alguno por este concepto ni tampoco a subrogación, por cuanto esta última no está prevista legalmente -artículo 1096 del Código de Comercio-.**

**Norma específica que se analiza o sirve de sustento para la motivación de la sentencia:**

Jurisprudencia

**Decisión:**

Condena al pago de la totalidad de los perjuicios.

**Jurisprudencia citada:**

Sentencia del 1 de marzo de 2006, Exp. 14002 CE

Sentencia del 26 de abril de 2006, Exp. 17529. CE

Sentencia del 25 de julio de 2002, Exp. 14001, C.P. Ricardo Hoyos

Sentencia del 19 de agosto de 2004, Exp. 15791, C.P. Ramiro Saavedra Becerra

Sentencia del 10 de agosto de 2005, Exp. 16205, C.P. María Elena Giraldo

Sentencia del 30 de marzo de 2006, Exp. 15441, C.P. Ramiro Saavedra.